PINOCHET

Y LA RESTAURACION DEL CONSENSO NACIONAL

Julio Canessa Robert - Francisco Balart Páez

El Teniente General Julio Canessa Robert fue Vice Comandante en Jefe del Ejército de Chile durante los años 1981 - 1985, representándolo después en la Honorable Junta de Gobierno.

Paralelamente a sus funciones castrenses —Comandante de Institutos Militares, Inspector General, Jefe de la Región Militar Norte, Jefe del Estado Mayor General— durante el Gobierno Militar organizó y dirigió el Comité Asesor y la Comisión Nacional de la Reforma Administrativa, órgano desde el cual se emprendió la modernización del Estado y la regionalización del país. Oficial de Estado Mayor y Profesor de Academia (1959) se graduó de Magister en Ciencia Política en la Pontificia Universidad Católica de Chile con una tesis sobre los partidos políticos y el quiebre institucional (1992). Es autor, entre otros trabajos académicos, de *Quiebre y recuperación del orden institucional en Chile. El factor militar, 1924 - 1973,* publicado en 1995.

Es Presidente de la Universidad Bernardo O'Higgins y Senador de la República.

Francisco Balart Páez es abogado y Doctor en Derecho por la Universidad de Navarra (España). Su tesis, *El estamento militar y el orden político*, fue aprobada "cum laude". (1990)

Profesor de Derecho Político en la Escuela de Derecho de la Universidad de Chile, antes fue Coordinador del Programa de Investigación Sociedad y Fuerzas Armadas del Instituto de Ciencia Política de esa Universidad y profesor de Ciencia Política en la Academia Nacional de Estudios Políticos y Estratégicos, Academia de Guerra de Ejército y Academia de Guerra Naval.



PINOCHET Y LA RESTAURACIÓN DEL CONSENSO NACIONAL

Julio Canessa Robert
Francisco Balart Páez

Julio Canessa Robert
Francisco Balart Páez
Inscripción n° 104.163
ISBN 956 - 272 - 934 - 6
Santiago, 1998
Impreso en " Geniart. " Tel: 222 82 29
Los derechos de autor fueron donados a la Fundación
Presidente Augusto Pinochet Ugarte.

El amor a la patria nos une por encima
y más allá de las diferencias.
Juan Pablo II

Comprender es ante todo unificar.
Albert Camus

El signo de una alta inteligencia
no es otro que anticiparse al tiempo.
José Ortega y Gasset

INDICE

Capítulo VI:

PROLOGO

Un desilusionado Samuel Johnson escribía hace dos siglos que "la historia de la Humanidad es poco más que una narrativa de designios que fallaron y de esperanzas que resultaron frustradas".

Haciendo excepción a esa norma, cualquier chileno contemporáneo, si es realmente objetivo, debería forzosamente concluir que la historia de su país en el último cuarto de siglo ha consistido precisamente en lo contrario: designios que fueron exitosos y esperanzas que resultaron colmadas.

¿Cómo es que una cortina propagandística, en Chile y en el resto del mundo, ha podido ocultar o, al menos, ensombrecer esa evidencia?

Pues cuando al término del Gobierno Militar, el 11 de marzo de 1990, sus conductores pudieron decir, urbi et orbi, "Misión Cumplida", ello a nadie se le antojó una exageración. Menos aún lo parece hoy día, después de transcurridos ocho años desde entonces, por cuanto el país, bajo el legado político, económico y social de aquella administración, ha continuado funcionando de una manera que es mirada desde el exterior con admiración, cuando no con envidia.

Ello no ha obstado a que, paradójicamente, persistan las expresiones de denostación y crítica a quien encabezó el proceso. Nace inevitablemente, entonces, la necesidad de averiguar cómo puede explicarse que tras una obra exitosa su principal autor sea objeto de tantos ataques.

Este libro hace un aporte fundamental a dicha tarea. Y cumple, desde luego, con la exigencia que en sus ensayos puso el sabio Montaigne a la buena Historia, a la cual definió como "la escrita por quienes tuvieron parte principal en los acontecimientos que describe".

Además, este documentado ensayo histórico de Julio Canessa y Francisco Balart llega precisamente en un particular momento de algarabía política interna. Pues a ratos parece que las voces de los justos y los discretos fueran inaudibles: son los más vociferantes quienes se disputan la escena y la palabra para resaltar supuestas carencias, deficiencias y atrocidades ocurridas en las décadas recientes. Con enorme apoyo propagandístico están logrando, así, descontextualizar el período del Gobierno Militar casi por completo, destacando sus sombras y oscureciendo sus luces, presentando verdaderas caricaturas de la real obra consumada por aquél.

Pues bien, precisamente el libro que tenemos entre manos nos presenta clara, detallada y objetivamente el contexto histórico-político que rodeó y al cual obedecieron los acontecimientos vividos entre 1973 y 1990. Sus autores no vacilan en rastrear raíces explicativas hasta muy atrás; incluso, cuando es el caso, hasta la época de la propia Independencia nacional.

Para algunos, por otra parte, este Chile actual en marcha, coherente, organizado, progresista, es motivo de desesperación política y hasta intelectual. Y en medio de ella proclaman, o más bien denuncian, que estaríamos en presencia de sólo un mito, un engaño comúnmente compartido, pues permanecería casi intacta la estructura básica

del Chile del Gobierno Militar, "de la dictadura", de modo que lo que creemos o denominamos "Chile democrático" no sería tal. No pasaría de ser una creación propagandística. No existiría.

Pero el Chile actual, progresista y democrático, en verdad existe. Para comprobarlo, como dice la cripta del gran urbanista europeo del Renacimiento, "circumspice": basta mirar en derredor. Por doquier está, visible y ostensible, la democracia real, con sus libertades, sus contradicciones y su diversidad. Ella se gestó durante el Gobierno Militar y ha acreditado su fortaleza ya a lo largo de ocho años después de terminado aquél.

¿Qué significa todo ello? Ni más ni menos, que nos encontramos ante un nuevo consenso nacional, como los que existieron en los demás períodos de estabilidad y progreso de nuestra historia patria.

Y esta vez, como otras, tal cosa acontece tras un paréntesis disruptivo que no logró quebrantar la columna vertebral de la nación.

¿Cómo puede explicarse, entonces, que algunos repitan tan insistentemente, sobre todo en el último tiempo, ya casi con el carácter de un lugar común, que "Pinochet divide al país"? ¿No es, precisamente, todo lo que vemos en torno nuestro, un testimonio de que él unió al país en un esfuerzo común? ¿No habrá sido que él permitió a Chile reencontrarse con su destino histórico? ¿Cómo, si no, se explica esta continuidad ininterrumpida, que ya se mantiene durante casi una década después del término del Gobierno Militar, del esfuerzo fructífero que preside el quehacer nacional?

En las páginas que siguen están las respuestas a esas interrogantes. Ellas no consisten en afirmaciones apriorísticas, sino que emanan fluidamente y por sí solas de argumentaciones razonadas y documentadas.

Ambos autores poseen una sólida formación en el campo de la Historiografía y de las Ciencias Políticas. El amplio rango de las referencias bibliográficas pone de manifiesto una labor esforzada y acuciosa.

Desde luego esta obra, a diferencia de otros ensayos históricos, desborda el período al que se refiere y lo contextualiza. Comienza por donde debe comenzar y nos explica, de partida, cómo y por qué pudo Chile llegar al estado lamentable de país quebrantado e invertebrado que exhibía en 1973.

A través del texto comprenderemos cómo la naturaleza de la acción pólitico-partidista, ese verdadero "gobierno de los partidos" o "partitocracia" a que conducía la Constitución de 1925, derivó indefectiblemente en la pérdida de los consensos que son esenciales para estructurar una convivencia nacional civilizada y estable.

Afortunadamente, el país mantenía en el interior de su urdimbre social una estructura menos aparente que la de carácter político-partidista, pero más fuerte que ésta e indemne frente a la degradación que la demagogia y el violentismo habían provocado en los partidos. Aquella estructura fue la última reseva que impidió el desmembramiento final. Y fue capaz, cuando todos los demás aglutinantes del ser nacional fallaban en la tarea, de mantenerlo cohesionado.

En efecto, quedó demostrado, como nos dicen los autores, que "las Fuerzas Armadas no son sólo el brazo armado del Estado, sino la columna vertebral de la nación".

La pérdida del consenso que hizo necesario recurrir a esta última reserva "no ocurrió en el vacío", evidentemente. Canessa y Balart, por tanto, resuelven emprender la búsqueda de las verdaderas raíces del mal.

Queda así en claro que la cuasi-desintegración chilena de 1973 no se inició en 1970 ni sólo merced a la acción de la Unidad Popular y a su inspiración marxista-leninista.

Hubo antes, en efecto, quienes prepararon el camino. Casi permitían anticiparlo algunas reflexiones de distinguidos cientistas políticos, ya a fines de la década de los '60. Fiel ejemplo es la afirmación, publicada en 1968, de un importante dirigente del PDC: "La Democracia Cristiana, que es cristiana y democrática, está más cerca del comunismo en sus fines que cualquier otro partido chileno".

Sorpresa, desde luego (¿o había dejado de serlo a la altura de 1968?) para tantos que en 1964 votamos por la Democracia Cristiana como "alternativa frente al comunismo".

Así, este libro nos va proporcionando a lo largo de sus documentadas páginas los por qué de muchas cosas. Lo hace en forma reposada y metódica. Debe leerse, por tanto, con calma y reflexión, porque hay depositado aquí un impresionante bagaje de información y documentación inédita, mucha parte de la cual ha sido inexplicablemente desatendida u olvidada hasta ahora.

El lector no podrá menos de concluir que está haciendo una inversión redituable: quedará en condiciones de comprender mucho mejor todo aquello que, sin esta lectura, suele aparecérsele como inexplicable o contradictorio bajo la versión predominante, que es la que ha sido impuesta por la extrema izquierda nacional e internacional. Pues si nos atuviéramos a ésta, nos resultaría incomprensible que quienes fueron partidarios del Gobierno Militar sigan gozando hoy en Chile de un notable respaldo electoral y hasta alberguen expectativas de alcanzar el Poder Ejecutivo en una futura elección. Igualmente inexplicable sería que los adversarios del Gobierno Militar, llegados al poder en 1990, no hayan introducido cambios sustantivos al modelo que el mismo les legó. Tampoco podría comprenderse que en tantas otras naciones se adopten políticas económicas, previsionales y laborales imitativas de las propiciadas por el régimen que encabezara Pinochet. Y, en fin, menos todavía se explicaría que este vituperado "dictador" hubiera terminado conduciendo al país a una democracia representativa, no sin antes haberse sometido él mismo a un veredicto electoral que le resultó adverso y cuyo resultado acató.

En definitiva, pues, la tesis central de la obra, es decir, aquella de que el desenvolvimiento de la nación a lo largo de su historia ha sido presidido por grandes consensos, con sólo paréntesis disruptivos; y que la experiencia encabezada por Augusto Pinochet ha sido representativa de uno de los primeros, resulta adecuadamente probada: el régimen militar no fue un paréntesis entre consensos democráticos: representó, por el contrario, el término de un paréntesis revolucionario y traumático, introducido por los experimen-

tos denominados "revolución en libertad" (1964-70) y "revolución socialista con sabor a empanadas y vino tinto" (1970-73), y restableció el consenso.

Veinticinco años después de haber iniciado esa tarea, ella sigue rindiendo sus frutos. Chile es hoy una democracia internacionalmente reconocida; su convivencia interna es estable; su desarrollo material es sostenido.

Sin perjuicio de ello, resurgen hoy fuerzas que pretenden introducir un nuevo paréntesis disruptivo. Pero si algo hemos aprendido los chilenos de nuestra historia, debiéramos evitar que éste se vuelva a generar.

Para, precisamente, aprender más de nuestra historia, nada mejor que examinarla desde todos sus ángulos y en todas sus versiones. A este efecto, la completísima obra de Julio Canessa y Francisco Balart proporciona la visión seria y documentada que ningún analista deseoso de formarse un juicio cabal sobre los acontecimientos chilenos del último cuarto de siglo, e incluso de antes, puede dejar de considerar.

HERMÓGENES PÉREZ DE ARCE IBIETA

INTRODUCCION

El propósito de este ensayo es indagar sobre el significado de la acción de gobierno que encabezó el general Augusto Pinochet Ugarte, teniendo por marco de referencia la evolución del consenso de la nación chilena. No es una crónica de los hechos que dieron forma a su gestión; se trata más bien de un esfuerzo interpretativo, encaminado a desentrañar el sentido global de los mismos. Tampoco se encontrará aquí una exaltación de la persona que condujo a la restauración del consenso nacional, pues, como dijo Rochefort, "una bandera no necesita hablar". Aspira, simplemente, a contribuir con un punto de vista encaminado a hacer más comprensible la trama del proceso político que sustenta la realidad en que hoy nos desenvolvemos.

Para encauzar la investigación se ha formulado la siguiente hipótesis de trabajo: en Chile, el consenso nacional surgió de una matriz aristocrática que enlazó con brío los períodos hispánico y republicano, dando forma a un sistema social y político notablemente estable si se lo compara con los demás Estados sucesores del Imperio Español. Durante el paso del siglo XIX al XX, con el advenimiento de la sociedad de masas, el viejo orden señorial acabó por transformarse en consenso de clase media. Dicho cambio, aunque no haya sido absolutamente pacífico, se manifestó como un flujo, no como un quiebre. Más tarde, en la década que corre entre 1964 y 1973, el modo de ser de aquella sociedad fue desafiado por una ola revolucionaria, materializado por la *revolución en libertad* de la democracia cristiana y por la *revolución marxista-leninista* de la Unidad Popular. Lo ocurrido durante esos años constituye una suerte de hiato en la trayectoria del consenso nacional, una experiencia que trocó su pausada evolución en un frenesí perturbador. Al cabo de esos años traumáticos la población había perdido los hábitos y las normas que antaño regulaban su convivencia cívica, debatiéndose en la mayor crisis vital de su historia: la posibilidad cierta de una guerra civil era instigada por algunos y aceptada resignadamente por casi todos. Lo que hizo el Gobierno Militar, en lo inmediato, fue impedir la lucha fratricida. Después, haciéndose cargo de las causas que habían arrastrado al país hacia tan dramática coyuntura, restauró el consenso básico que el ímpetu revolucionario había dislocado. Avanzando en esa dirección, adoptó un conjunto de medidas que renovaron profundamente al país. Apoyado en las raíces patrias y en la energía colectiva que liberó el desplazamiento de la tuición ideológica que había animado a los proyectos revolucionarios, el gobierno presidido por el general Pinochet condujo vigorosamente a la población hacia las metas de concordia, progreso y seguridad que hoy prevalecen. Esta nueva realidad política, económica y social, plasmada institucionalmente, arraigó en Chile porque demostró ser capaz de dar respuesta a las aspiraciones más genuinas y permanentes de su pueblo.

De lo anterior se infiere que el camino y meta del Gobierno Militar fue volver a convertir en realidad la unidad nacional. Restaurar es, precisamente, recuperar o recobrar, reparar una cosa para volver a ponerla en el estado que antes tenía. Naturalmente, tratándose de la vida de un pueblo, el resultado alcanzado no puede ser idéntico a lo que antes hubo. Restauración, entonces, implica renovación, es decir, fomen-

to y aceptación de nuevos hábitos que responden a nuevas condiciones, pero respetando el espíritu del cuño primigenio. Se trató, pues, de una gestión de gobierno encaminada a devolver el ser original de la patria, sin borrar por ello las huellas de su pasado. En la concreta circunstancia chilena la restauración de su consenso básico tuvo varias dimensiones y sobrepasa el alcance de esta obra hacerse cargo de todas ellas. El acento está puesto en lo esencial, entendiendo por tal la gestión de gobierno que logró soldar los eslabones que otros habían separado.

El fundamento de la hipótesis no podía estar entregado exclusivamente a la propia opinión, cargada como está de subjetividad. Tampoco podía descansar en una especulación ideológica, quizás sugestiva pero insuficiente por su artificial simplicidad. Fue necesario apelar a la intuición interpretativa para formar una idea de conjunto, analizando después los elementos que han configurado el consenso nacional y las amenazas que lo han afectado, pero contrastando en cada paso el punto de vista escogido con los datos ofrecidos por la realidad concreta. Procediendo de este modo se ha buscado ser objetivos. Por cierto, los autores aceptan desde ya que esa virtud no calza exactamente con la imparcialidad.

Ciertamente, el proceso de descomposición, quiebre y recuperación de la democracia chilena —que en la esfera política refleja la disolución del consenso que la sostenía— no ocurrió en el vacío. Sus particularidades se manifiestan al interior de unas coordenadas que es posible representar mediante tres círculos concéntricos. El de más amplia traza manifiesta el sentido de nuestro tiempo, que en una dimensión planetaria corresponde a una transición epocal, esto es, a la extendida sensación de un cambio de los hombres y sus formas sociales que está operando y va hacia un orden de cosas significativamente diferente, aunque todavía sólo barruntado; de ahí la radical ambivalencia del milenio que termina. Las raíces intelectuales de este fenómeno evolutivo tienen larga data, pero, con certeza, desde hace al menos medio siglo se ha hecho evidente que asistimos al fin de una era y al nacimiento de otra. En palabras de un hombre lúcido, Ernst Jünger, "por el momento, vivimos una época de transición, de claroscuro, en la cual los fenómenos netamente definidos son raros. Los antiguos valores no tienen ya curso y los nuevos todavía no se han impuesto. Es un mundo en que un cuerpo hace sombra sobre otro".[1] Tal vez el gulag soviético, el holocausto judío y el lanzamiento de la bomba atómica sobre Hiroshima y Nagasaki señalen su horroroso punto de inflexión.

En un círculo intermedio, como fenómeno político-estratégico concreto, se debe considerar la Guerra Fría. La mayor consecuencia de la Segunda Guerra Mundial fue la división del mundo en dos bloques antagónicos, ambos animados por convicciones e intereses excluyentes, cuyo tenso orden de convivencia se basaba en el equilibrio del terror. Esa circunstancia condicionó seriamente las posibilidades sociales y políticas de todas las naciones. La irrealidad política del eventual uso del arma atómica obligó a la potencia más expansiva, la Unión Soviética, a buscar la decisión en la periferia de su zona de influencia y mediante un método específico: la subversión mediante la lucha

---

1 JULIAN HERVIER, *Conversaciones con Ernst Jünger*, Editorial Fondo de Cultura Económica, Buenos Aires, 1990, p. 114.

revolucionaria. La defensa de la sociedad frente a esa agresión marcó el destino de muchos, y en el doliente ámbito latinoamericano tiene sentido hablar de posguerra sucia como elemento estructurante del presente.

El círculo interior, propiamente nacional, está influido por los dos anteriores. La trayectoria vital del pueblo chileno es un dato objetivo, es decir, posee entidad propia en el concierto de las naciones. Sin embargo, ello no quiere decir ni por asomo que Chile pueda ser considerado una especie de autista. Por el contrario, a pesar de la distancia que le separa de los centros del poder mundial, su trayectoria histórica siempre ha estado en sintonía con la evolución de las ideas y de las fuerzas que mueven al mundo. El problema surgió cuando se intentó la aplicación de unas ideas cuya vigencia presuponía la confrontación intolerante con el orden establecido. Aunque según la lectura corriente de los signos de los tiempos parecía destinada a prevalecer, aquella empresa política revolucionaria fracasó en Chile porque marchaba de espaldas al ser nacional, esto es, porque tanto su matriz ideológica como su estilo le eran por completo ajenos. Entonces se rompió el consenso y surgió la crisis de convivencia que tuvo por respuesta y principio de solución al Pronunciamiento Militar acaecido el 11 de septiembre de 1973.

A lo largo de este ensayo, para explicar la trayectoria del consenso nacional, se atiende en toda su magnitud el impacto del fenómeno revolucionario en el rumbo de la vida política de los chilenos. Las exigencias de la Guerra Fría son también consideradas cuando contribuyen a esclarecer algún aspecto de esa travesía. La influencia del cambio de época sobre el espíritu de nuestro tiempo, a pesar de su omnipresencia y quizás por ello, sólo es evocada tangencialmente.

Alguien dijo alguna vez, con gracia, que la historia la escriben los periodistas y los historiadores la pasan en limpio. La realidad, en efecto, tiene un nivel superficial, donde los hombres se agitan de acuerdo a las urgencias de lo inmediato. Cada día tiene su afán y aún tan modesto propósito a veces parece excesivo. Pero, bajo la contingencia, late un plano más profundo, donde los acontecimientos se decantan, meditan y ordenan en grandes tendencias, adquiriendo el valor de una experiencia colectiva insustituible. No es otro el legado que pasa de una generación a otra alimentando su jornada. Aquí se ha intentado trabajar en ese último plano, buscando luces y claves que permitan hacer inteligible nuestro pasado más reciente. Tal enfoque no obedece a un prurito académico, sino a una convicción muy arraigada: un pueblo se hace dueño de su propio destino sólo si es capaz de digerir lo medular de su historia.

Aludiendo a ese nivel profundo, de irremplazable sedimento vital, Ernst Nolte ha señalado no hace mucho que la guerra civil española fue "una peculiaridad local y acontecimiento mundial al mismo tiempo".[2] Sin forzar demasiado las cosas, se podría afirmar algo análogo respecto al caso chileno.

En efecto, el eclipse de su democracia concitó la apasionada atención de la opinión pública mundial durante años. Se convirtió a Chile en campo de maniobra de la

---

2 ERNST NOLTE, *Después del comunismo*, Editorial Ariel, Barcelona, 1995. La cita en la edición de Espasa-Calpe Argentina/Ariel, Buenos Aires, 1996, p. 9.

soterrada lucha que sostenían los grandes bloques por el predominio mundial. En su carne se experimentaron antagónicas fórmulas de convivencia, resueltas, como en un drama clásico, con un progreso constante de la acción y un epílogo perfecto: descomposición, quiebre y recuperación. Cada uno de los actos y sus diferentes escenas fueron percibidos como una suerte de espejo que reflejaba los avatares de un combate cuyo resultado estaba llamado a gravitar en otras latitudes. Pero también es cierto que la experiencia chilena mereció el interés que tuvo porque develó un conflicto mucho más amplio e inquietante, unas tensiones que comprometían la vigencia de ciertos mitos, valores y actitudes que en nuestro tiempo han alcanzado resonancia universal. Entre otros, la democracia y la revolución, la libertad y la tiranía, los derechos humanos y las ideologías, la planificación central y el mercado. Tal vez, de oscura manera, más allá de los conceptos que el fragor de la lucha transformó en consignas, lo que en verdad estuvo y está en juego sea la subsistencia del modo de ser nacional en esta época, amenazado por visiones de signo contrario pero igualmente homogeneizadoras.

En ese contexto, a favor o en contra, ha sido determinante la figura del general Augusto Pinochet, líder de un impulso fundacional de inigualable importancia para el devenir de nuestra patria. Sin él, o si se prefiere, sin el movimiento de las fuerzas civiles y militares que encabezó en una hora crucial, el resultado de la lucha revolucionaria y, por tanto, sus consecuencias para la población, habrían sido muy diferentes. Aquí está Chile y allá está Cuba, rotundos testimonios de lo que las cosas son y de lo que pudieron ser de no haber mediado su acción libertadora.

Dado el carácter épico que los protagonistas y los observadores lejanos atribuyeron a las posiciones en liza, tal vez sin desearlo, acabaron por convertir al general Pinochet en un símbolo de la historia contemporánea. Jamás otro estadista chileno ha tenido esa relevancia. Ninguno como él ha sido admirado y calumniado con tal intensidad y por tan largo tiempo. Todavía hoy, cuando el fuego de la contradicción ha menguado, a nadie deja indiferente. Cualquier palabra o gesto suyo acapara los titulares. Es punto obligado de referencia no sólo para comprender la condición actual de Chile e imaginar su futuro, sino también para iluminar ejemplarmente algunas realidades que trascienden sus fronteras. Este hecho, sin duda excepcional en una época cuya mentalidad dominante desconfía de los grandes hombres hasta el punto de haber perdido la noción misma de liderazgo, merece una explicación.

Argumentando en plena Guerra Fría, Jean-François Revel ha sugerido que el general Pinochet debe su fama a la saña agresiva del comunismo internacional. Aplicando una trampa dialéctica —que el pensador francés denomina *el doble criterio y ninguna de las partes tiene razón*— "el comunismo internacional utiliza las aspiraciones de los pueblos al bienestar, a la libertad, a la dignidad y a la independencia para eliminar a las democracias, tras lo cual no se siente obligado a satisfacer esas aspiraciones, limitándose a asegurar del mejor modo posible sus propios intereses políticos y estratégicos. A la inversa, el mundo libre parece no tener derecho a tomar en consideración sus propios intereses políticos y estratégicos sino después de haber cumplido previamente todas las demás consideraciones, hecho reinar la justicia social, la democracia política y la prosperidad económica". Amparándose en esa lógica tuerta, la izquierda siempre justificará su posición con promesas nobles y en cambio exigirá a sus

adversarios hechos impecables, asegurándose así, sin mayor costo, la superioridad moral de su causa. Por ejemplo, le bastará con exigir virtuosamente ¡democracia ahora!; los otros deberán cargar con el peso de crear pacientemente las condiciones que la hacen posible.

Pero ocurre, desgraciadamente, que en todo el mundo las atrocidades han sido consustanciales a la implantación del comunismo y la hipocresía ha sido compañera inseparable de todas las experiencias de izquierda. Se trata, claro está, de una evidencia penosa y difícil de ocultar.[3] Surge entonces un mecanismo de compensación psicológica, en apariencia equitativo y de hecho discriminatorio: no dar la razón a ninguna de las dos partes. "Consiste —dice Revel— en conceder la existencia de los fracasos y de los crímenes del comunismo, con tal que en el mismo instante se le oponga un equivalente en el mundo capitalista. (...) A partir de entonces el totalitarismo se encuentra de nuevo absuelto no porque no peque, sino porque el mundo democrático peca otro tanto". Naturalmente, para mantener el equilibrio, la magnitud de los propios errores y horrores determinará el peso que sea necesario dar a la contraparte.

En esta obsesión binaria, continúa Revel, el general chileno "asegura la reparación, las veinticuatro horas del día y los siete días de la semana, cuando el alma socialista sufre. Y el grito de ¡Pinochet! ¡Pinochet! exorcisa los demonios, todas las Camboyas del mundo, todos los Afganistanes, todas las Etiopías, todas las Checoslovaquias, todos los Tibet. Desde que los coroneles griegos nos han dejado es casi el único que está en primera línea para soportar el peso del servicio psicoterapéutico de la culpabilidad de las izquierdas".[4]

De acuerdo al prisma que utiliza, el análisis de Revel es correcto; permite dar cuerpo y sentido a la frenética desmesura de la atención soviética hacia Chile. Máxime si se recuerda que los años durante los cuales elevó y mantuvo al general Pinochet en el primer plano mundial como objetivo de su estrategia de propaganda, el imperio dirigido desde el Kremlin alcanzó su cénit —los estudiosos lo sitúan en 1975— e inició el declive que le arrastraría a su vertiginosa disolución quince años más tarde. Con todo, no es necesario insistir demasiado en la importancia que Moscú otorgó a esta función compensatoria de sus propios pecados.

En efecto, la victoria alcanzada por el general Pinochet posee un mérito propio. ¿Quién podría dudar ahora que bajo su conducción Chile dio un vuelco a su destino? Adelantándose a otros pueblos, se abrió paso solitariamente hacia metas que hoy parecen comunes al mundo entero. Para lograrlo, revirtió un ciclo de mediocridad y decadencia cuya causa estaba en unas disensiones que esterilizaban las energías del país. Junto con volver a reunir a la comunidad en torno a sus raíces comunes y defender de manera eficaz sus intereses permanentes, renovó profundamente la mentalidad de las personas, las estructuras de la sociedad y la

---

3 El Mercurio, 4.1.98, pp. D1 y D19, da cuenta de la reciente publicación por la editorial Laffont de *El libro negro del comunismo*, escrito por historiadores y especialista de indiscutible prestigio, entre ellos varios miembros consagrados del Centro Nacional de la Investigación Científica de Francia. Al parecer se trata de una obra definitiva, el balance del daño provocado a la humanidad por Lenin y sus acólitos.

4 JEAN-FRANÇOIS REVEL, *Cómo terminan las democracias*, Editorial Planeta, Barcelona, 1983, pp. 296-298 y 304-305.

institucionalidad del Estado, encaminándolo todo hacia el cumplimiento de un objetivo de carácter eminentemente nacional.

En suma, los militares chilenos recuperaron la democracia que sus conciudadanos habían destrozado y le dieron a ese modo de convivencia cívica otra oportunidad en estas latitudes. Eso es lo medular de la tarea cumplida y no hay que desaprovecharla. Así, llegada ahora la hora del recuento, es preciso reconocer que la significación del general Pinochet es independiente de lo que el comunismo internacional y sus compañeros de ruta, los "tontos útiles"[5], hayan hecho para oponérsele.

Cabe ahora llamar la atención sobre otras consideraciones elementales. Las exigencias estratégicas, ideológicas y propagandísticas de la Guerra Fría son ya agua pasada. Es evidente que gracias al Gobierno Militar, Chile pudo formar entre los vencedores. De ahí su ventaja inicial en el nuevo orden mundial todavía en ciernes. Pero eso no quiere decir que junto con los socialismos reales también haya desaparecido el sentimiento de izquierda. Haciendo gala de su buena memoria —porque muchos otros han preferido olvidar— Jorge Edwards ha señalado que en Iberoamérica "hace treinta o más años teníamos gobiernos burgueses, pero el pensamiento hegemónico, en las universidades, en el mundo de la cultura, entre los políticos emergentes, era un marxismo que se convertía cada vez más en un marxismo de trinchera. La vertiente castrista, desde La Habana, le daba un matiz autóctono, un conjunto de mitos, un centro de referencia, y lo empujaba cada vez más hacia la izquierda. El conflicto fue inevitable, violento, tremendamente destructivo".[6] Esa expresión caribeña de la izquierda fue aventada, pero las mentalidades formadas en sus coordenadas, sitas ahora en un ambiente políticamente desmovilizado por su propio éxito, se han adueñado de un discurso ajeno y en muchos lugares pueden conseguir votos e incluso formar gobiernos... que por la fuerza de las cosas están condenados a desarrollar el programa de sus adversarios de siempre. Tal como continuamos viendo la luz de estrellas apagadas hace ya mucho, la delicada sensibilidad de izquierda, ahora enquistada en otras causas estimulantes —la ecología, el sexo, las minorías raciales, el divorcio, etc.— permanecerá latente durante un tiempo y probablemente se expresará de una manera contestataria en el ámbito moral y en el cultural. Allí palpitan las futuras amenazas al consenso nacional. Cualquiera sabe que ha muerto Lenin, pero no Gramsci.

Ese fenómeno de la astronomía —la luminosidad de estrellas ya desaparecidas— puede desorientar a los segmentos más inexpertos de la población y arrastrarles a posiciones que lucen una rebeldía frívola —la de niños bien jugando al tribunal popular— no exenta de coquetería. Esos desplantes no tendrán mayor consecuencia: son impotentes frente al sentido común. Pero también ayuda a explicar algunas controversias más serias que de tanto en tanto surgen entre nosotros. Y, por cierto, distinguir en ellas quiénes marchan a la vanguardia, hacia nuevos horizontes, y quiénes se arrastran en la retaguardia del tiempo ido. Aquello no es todo; en el debate también influyen otros factores que lo excitan innecesariamente. Para nadie es novedad que a pesar de

---

5 La expresión "tontos útiles" fue acuñada por Laurent Beria, director del KGB, y utilizada por primera vez en su Discurso a las Juventudes, de 1936.

6 JORGE EDWARDS, "Uso y abuso de las cumbres", La Segunda, 15.11.96, p. 12.

reconocer, aplaudir y disfrutar los beneficios del éxito alcanzado por la gestión de gobierno liderada por el general Pinochet, dado que nuestra percepción de los hombres y de las cosas está determinado en gran medida por el punto de vista inicial, en la mente de muchos demócratas, intoxicados por la propaganda, quedó grabada la imagen que el comunismo le forjó para el servicio de sus propósitos. Así, mecánicamente, le tachan de dictador. El contraste entre esa errónea impresión y la evidencia histórica se irá imponiendo por su propio peso en ese sector de la opinión pública. Respecto al otro grupo, el de la izquierda militante y los que a pesar de figurar bajo otro banderín ideológico, hechizados por el extremismo, le sirven con secreto gozo, hay poco que esperar. Para ellos se ha vuelto infame la sola consideración de los porfiados hechos. Inmunes a la verdad, prefieren seguir viviendo de acuerdo a las equivocadas premisas de una ilusión siempre desmentida por la realidad.

A pesar de los pesares, incluso con algún grado de jactancia, los chilenos estamos orgullosos del sitial que hemos vuelto a ocupar entre las naciones más decentes de la tierra. Pero debiéramos haber aprendido, por experiencia propia, que el tiempo no reconoce situaciones irreversibles. Todo lo conquistado con tanto sacrificio puede malograrse si falla la conciencia histórica. Y para configurar desde el presente un porvenir limpio, hay que tener una idea clara del pasado. Los pueblos y las personas que ignoran de donde vienen tampoco saben hacia donde van; por eso suelen ser dóciles víctimas de los cantos de sirena aunque se taponen los oídos con cera, como los marineros de Ulises. Valga un ejemplo para ilustrar lo que se quiere decir. Theodor Mommsen, el insigne historiador de la antigüedad romana, replicó lo siguiente a una dama norteamericana que disculpaba los errores cometidos por su país en razón de su juventud: "Señora, su nación tenía a su disposición la historia completa de Europa, desde sus comienzos, pero, sistemáticamente y sin excepción, ha copiado todos los errores cometidos por Europa. No siento ninguna compasión por ustedes".[7] No hay, pues, excusa válida para desatender las lecciones del pasado y nada puede ser más urgente y útil que poner al alcance de las nuevas generaciones una visión de conjunto sobre la trayectoria de la patria que han heredado.

Con aquél propósito, desprovistos de toda clase de animosidad y sin aspirar a detentar la calidad de historiadores —por formación y temperamento están muy lejos de ello— los autores de este ensayo han estimado conveniente consignar su interpretación de unos años decisivos, naturalmente controvertidos y demasiadas veces deformados por la pasión.

Este libro se refiere, precisamente, a los pasos dados por una chilenidad que busca ser fiel a su propia senda histórica, transitando un camino que lejos de haber sido llano ha tenido múltiples interferencias. Dada su complejidad, la materia en estudio admite ser enfocada desde muy diversos ángulos. Simplificando —lo que es inevitable en una tarea de esta envergadura— su argumento gira en torno a las vicisitudes que a lo largo del tiempo ha tenido el consenso básico de convivencia entre los chilenos. Sobre ese problema central se ha estructurado la exposición en dos grandes campos: desafío y respuesta. A través de la primera parte se va mostrando la génesis de la crisis de consenso, es decir,

7 Citado por ERIK VON KUEHNELT-LEDDIHN, en "Grandes hombres", El Mercurio, 1.6.80., p. A2.

el progresivo desgarramiento del tejido social hasta el punto de hacer inminente una guerra civil. A la segunda parte corresponde el estudio de la solución dada a la crisis, esto es, cómo el gobierno presidido por el general Augusto Pinochet logró restaurar el consenso nacional.

Las materias propias de cada una de las partes se han ordenado en la siguiente forma. El capítulo primero describe la evolución del consenso nacional chileno, mostrando cómo se configuró en una matriz aristocrática y cómo fue cambiando hasta afianzarse en un nuevo molde, acorde con las convicciones, intereses y aspiraciones de las capas medias de la población. En el capítulo siguiente se analizan los desafíos que acabaron por frustrar la convivencia nacional representada por dicho consenso en una sociedad de masas. Se ha otorgado especial importancia a la partitocracia, a las ideologías globalizantes y a la violencia política como agentes de su progresiva erosión. En el capítulo tercero se sostiene que la dislocación y luego la pérdida del consenso de clase media se debieron a un proceso revolucionario que duró una década. En consecuencia, el punto de no retorno hacia la más grave situación que Chile ha vivido en este siglo es la elección presidencial de 1964. El capítulo cuarto, con el que se inicia la segunda parte del libro, se refiere al sentido y alcance del Pronunciamiento Militar, hecho con el cual se inicia la reconstitución del consenso nacional. El capítulo que le sigue tiene por objeto pasar revista al contenido fundacional del orden social, político y económico surgido el 11 de septiembre de 1973. Culmina con la puesta en vigencia de la Constitución ratificada por la ciudadanía en 1980. El capítulo sexto trata del período constitucional del presidente Augusto Pinochet Ugarte (1981-1990), años durante los cuales se afianza nuevamente el consenso de clase media, aunque ahora expresado de manera más moderna. Se ha concedido especial atención al significado del período en tanto fase de transición institucional a la plena democracia. Culmina con el término de la transición y el traspaso del poder al segundo mandatario cuya legitimidad radica en la Carta Fundamental de 1980, Patricio Aylwin Azócar. De cara al porvenir, proyectando la vigencia de la obra institucional creada por el general Pinochet, se ha estimado útil añadir unas consideraciones finales. Un índice onomástico y la bibliografía consultada completan el trabajo.

En cuanto al estilo, no se ha dudado en sacrificar la elegancia de las fórmulas abstractas y la precisión de los cánones académicos en beneficio de la claridad de la exposición, de manera que la lectura sea grata e instructiva para un amplio público.

Podría objetarse que aún es temprano para interpretar acontecimientos tan recientes. Esa observación es parcialmente válida, a condición, claro está, de no confundirla con el interés que algunos tienen en postergar indefinidamente el juicio que la época estudiada merece, confiando su ventura personal a la mala memoria de la gente. Con todo, se la puede atenuar con dos argumentos, uno de índole general y otro de validez particular para el caso chileno. En efecto, de una parte, la velocidad del tiempo histórico se ha acelerado a un grado tal, o lo que es igual, hoy en todas partes es tan intenso el afán de novedad, que el pasado suele ser sepultado con vertiginosa rapidez. Hechos ocurridos hace una década parecen ya lejanos y es pertinente investigarlos con esa perspectiva. De otra, basta comparar la realidad chilena existente 1973 con el orden de cosas vigente en 1990 para advertir sin mayor dificultad un cambio sustan-

cial. Resulta inconcebible que esa transformación haya sido fruto de la inercia. Tiene que haber una explicación; un proceso y un agente que la ocasionaron. Determinarlos es tarea que ya se puede abordar con objetividad.

Resta todavía un último punto. Hay una urgente razón para intentar dar sentido a lo que los chilenos hemos vivido en las últimas décadas. Consiste en que situados como estamos en una época de cambios sin precedentes, el enlace con el pasado tiende a adelgazarse hasta el punto de ruptura, y los pueblos sin raíces pueden convertirse, análogamente, en una multitud sin ramas ni flores. Es este un problema que hoy preocupa a todos los pueblos conscientes del valor que tiene conservar su propia fisonomía. Sobre esta materia, el rector de uno de los más prestigiosos colegios de la Universidad de Oxford, Ralf Dahrendorf, ha señalado hace poco lo siguiente: "Es necesario, pues, que determinados vínculos profundos estén presentes en los Estados Nacionales. Y han de ser mejores cuanto menos artificiosos o exagerados sean. Y lo serán en países que, al menos respecto a su propia historia, se sientan en paz con su conciencia".[8]

En la dirección apuntada por Dahrendof, ojalá estas páginas, escritas sin otro mérito que la sinceridad y un profundo amor a Chile, contribuyan a fortalecer nuestros vínculos más profundos. Si logran integrar el pasado inmediato en una visión capaz de vitalizar la concordia y estimular un sano optimismo colectivo, el esfuerzo que ha demandado su redacción estará plenamente justificado. Con su lectura y eventual debate las nuevas generaciones podrán enfrentar, mejor equipadas que sus padres, los desafíos incesantemente renovados que el porvenir les depara.

8 RALF DAHRENDORF, "El futuro del Estado Nacional", en Leviatán nº 61, 1995, pp. 27-37. La cita en p. 34.

I PARTE

EL DESAFÍO

Los médicos antiguos sabían que resulta difícil combatir una enfermedad cuando se encuentra en sus primeras fases; la enfermedad comienza con manifestaciones difusas. Suprimirlas puede resultar incluso perjudicial. Esa misma norma rige también en la política y en la estrategia: es necesario que el enemigo se haya desarrollado; hay que poder conocer su naturaleza y sus intenciones.

ERNST JÜNGER

CAPITULO I

LA EVOLUCION DEL CONSENSO NACIONAL CHILENO

Tiempo presente y tiempo pasado
quizás ambos están presentes en el futuro,
y el futuro contenido en el pasado.
Si todo el tiempo está eternamente presente
todo el tiempo es irredimible.

THOMAS S. ELIOT

La evolución política de Chile. Un bosquejo de interpretación.

Resulta imposible condensar en un puñado de páginas la historia política de un pueblo sin incurrir en una simplificación extrema. No obstante, aunque sea apenas mediante un simple bosquejo, hay que intentarlo. De esta suerte, el lector podrá conocer en pocos minutos lo esencial del argumento de este ensayo y resolver sobre la marcha si vale la pena seguir adelante.

El primer aspecto sobre el cual conviene llamar la atención es que todas las naciones, por su naturaleza histórica, existen en tiempo, espacio y forma conjugados. Distan, por tanto, de ser obra acabada; están haciéndose en cada momento, como un proyecto de acción en marcha. De ahí, por ejemplo, la miopía del punto de vista según el cual la evolución política de la nación chilena se inicia el 18 de septiembre de 1810, como rutinariamente se indica en los manuales escolares. Más exacto y más profundo es reconocer que antes de constituirse en unidad política soberana, el proceso de vida desplegado en Chile a lo largo de casi tres los siglos tenía densidad propia y actividad política. En efecto, durante el tiempo en que fue el remoto término austral del Imperio Español, aparecieron los rasgos psicológicos colectivos que luego darían un sello inconfundible a la República. El aislamiento geográfico, la pobreza relativa del suelo, el escaso poblamiento y la impronta de la epopeya que cantó Ercilla, se traducirán en un estilo de vida en el que destacan el sentido del orden, el apego a la legalidad, la sobriedad y las virtudes militares de su pueblo. Esas características, que constituyen el sustrato de su arraigada convicción de constituir una nación distinta a sus vecinas, le harán aspirar tempranamente a un destino señero.[1]

1 Véase RICARDO KREBS, "Orígenes de la conciencia nacional chilena", en INGE BUISSON (ed.), *Problemas de la formación del Estado y de la nación en Hispanoamérica*, Böhlan Verlag, Colonia, 1984, pp. 107-125.

Pedro de Valdivia, cuyo escudo de armas rezaba *la muerte menos temida da más vida*, con sobrado fundamento puede ser considerado el primer chileno. Él señaló la principal norma de conducta a las generaciones posteriores cuando, enfrentado su fin en Tucapel, preguntó a lo que restaba de su hueste: "—Señores, ¿qué haremos? A lo que respondió el capitán Altamirano: —¿Qué quiere su señoría que hagamos sino pelear y morir?" Y así se hizo[2]. En aquél instante nació un imperativo de abnegación, honor y sacrificio que permanece latente hasta nuestros días.

Cuando ocurrió la emancipación —obra de una minoría que admiraba, sin percibir contradicción en ello, tanto a los ideales de la razón y el progreso de la Ilustración como a las reivindicaciones de la Revolución Francesa y a la serenidad de las instituciones liberales inglesas— el nuevo orden político republicano fue impuesto desde arriba al pueblo, *por la razón o la fuerza*. En su día, al filo del primer tercio del siglo XIX, ese fue el sentido de la frase que primero se acuñó en las monedas y más tarde sería la divisa del escudo nacional, cuyo diseño, por lo demás, posee resonancias innegablemente británicas. El modo de ser republicano se sobrepuso, entonces, al *ethos* de la época hispánica, sin por ello desplazarlo en absoluto. Durante varias generaciones éste siguió vigente, especialmente en las capas populares de la población y hasta el día de hoy, en los momentos críticos, reaparece con sorprendente vigor.[3]

Las exigencias de las campañas militares de la Independencia elevaron a O´Higgins, pero su concepción del ejercicio del mando supremo, ya en la paz, irritó a lo más granado de la sociedad santiaguina y provocó su caída. Así, desde el inicio de nuestro andar como Estado soberano, se advierte una tensión entre el grupo rector de la sociedad, que tiene el más elevado concepto de sí mismo y se siente cómodo en las formas parlamentarias —entendiendo por tales las que se manifiestan en un gobierno de cúpulas de similar linaje, que transan permanentemente entre ellas para hacer prevalecer los valores e intereses que comparten— y las figuras de carácter más fuerte, que de algún modo conservan el modo tradicional de entender el sentido de la autoridad, es decir, el servicio al bien colectivo por sobre cualquier interés particular.

El temor a la anarquía hizo que la aristocracia criolla aceptara el fuerte gobierno portaliano —una genial recreación del *ethos* colectivo que había primado durante siglos— pero controlando su gestión mediante las leyes periódicas. Una vez asegurada la normalidad, ella misma —la fronda aristocrática, como la llamó Alberto Edwards— se encargó de ir socavando el espíritu de esa notable construcción política. El desenlace de la guerra civil de 1891 fue su lápida. En un proceso paralelo al institucional, los consensos básicos que habían mantenido unido al pueblo —el respeto a una autoridad indiscutida, el sentido de pertenencia nacional por sobre cualquier facción accidental y la primacía de la religión Católica como inspiradora

---

2 El diálogo está recogido en JAIME EYZAGUIRRE, *Ventura de Pedro de Valdivia*, Espasa - Calpe, Madrid, 1967, p. 143.

3 Véase SIMON COLLIER, *Ideas y política en la independencia chilena (1810-1833)*, Editorial Andrés Bello, Santiago, 1977, y JULIO HEISE GONZÁLEZ, *Años de formación y aprendizaje políticos. 1810-1833*, Editorial Universitaria, Santiago, 1978.

de la ética social— se fueron desvaneciendo. Una vez rotos sus vínculos esenciales y olvidado el espíritu de gesta, la nación inició una prolongada fase de decadencia vital.

De otra parte, en el plano social, en esos años de transición toma impulso la migración del campo a la ciudad y termina el largo proceso de fusión racial, consolidando un tipo humano cuyo modo de ser se aleja notoriamente de sus vecinos, lo que no deja de llamar la atención de los observadores extranjeros. En este sentido el conde Hermann von Keyserling advierte en 1931 que "de los argentinos por un lado y de los peruanos por el otro, se diferencian ya actualmente los chilenos más y más profundamente que los alemanes de los franceses".[4]

La contienda presidencial de 1920 señala el inicio de una nueva fase histórica, animada por el afán de regeneración nacional, cuyo protagonista principal será la emergente capa media de la sociedad. La consolidación de un nuevo consenso básico en torno a sus características —un cierto cosmopolitismo que desdeña el recuerdo del Chile guerrero y rural, el laicismo de los intelectuales que es insuflado a grupos más amplios desde los liceos y la estabilidad individual, un bien precario porque es proporcionado por la condición de empleado— se fue ampliando con la inclusión progresiva de las capas más desposeídas de la población mediante la aplicación de una legislación de protección laboral y la elevación de su nivel educacional. Este resultado cristalizará gracias a la acción de una dupla de conductores muy distintos entre sí, el tribuno Arturo Alessandri y el general Carlos Ibáñez. El predominio de la clase media irá a la par con un nuevo rol asignado al Estado, considerado en adelante el motor del desarrollo, y con un régimen presidencial matizado por la creciente importancia de los partidos políticos. Durante las cuatro décadas siguientes, todos los partidos concurrirán a la acción de gobierno mediante delicadas transacciones con el primer mandatario. Sin embargo, a pesar de contabilizar en su haber la estabilidad de un sistema político que funcionó regularmente —mientras gran parte del mundo era sacudido por la crisis que desembocaría en la mayor contienda armada que ha conocido la humanidad— tal sistema no logró materializar las ansias de regeneración social y más amplios horizontes vitales que habían motivado su establecimiento.

El agente que hará visible la descomposición de aquél orden de cosas —mostrando hasta qué punto la tranquila vigencia de las formas democráticas transaccionales ya no se correspondía con el espíritu que animaba a los grupos políticos más dinámicos— será el predominio alcanzado por las ideologías globales a mediados de los años ´60.

En efecto, las circunstancias que envuelven la elección presidencial de 1964 marcan el término de los equilibrios que sustentaban al régimen político plasmado en la Constitución de 1925. Estos serán reemplazados por las exigencias ideológicas de un espíritu revolucionario confrontacional, que empujaba a los ciudadanos a tomar posición frente a lo que sus dirigentes percibían como un flujo irreversible

4 CARLOS LAVÍN, *Chile visto por los extranjeros*, Editorial Zig-Zag, Santiago, 1949, p. 51.

hacia el cambio profundo de las estructuras sociales. En esa dirección, el país vivió dos revoluciones sucesivas. La primera, dirigida por sólo un partido, el Demócrata Cristiano, aunque debilitó gravemente el consenso existente, no fue capaz de dar luz a otro. Nunca logró superar el umbral de las consignas más o menos ambiguas sobre una nueva cristiandad cuya forma sería el comunitarismo. En buenas cuentas, las pretendidas reformas estructurales, lejos de encaminarse a la construcción de una sociedad renovada, tuvieron por desenlace la destrucción de algunas bases del viejo Chile, la pérdida del sentido de la autoridad y un desánimo colectivo rayano en el fatalismo ante el hechizo socialista. Su fracaso, merced a la dinámica que había impuesto a los asuntos públicos, sirvió de antesala a otro impulso revolucionario, esta vez ya francamente contrario al ser nacional, el experimento marxista-leninista de inspiración castrista que llevó a cabo la Unidad Popular. Efectos de ese proceso serán el dislocamiento del Estado, puesto al servicio de la causa revolucionaria; el quiebre de la convivencia social hasta llegar al umbral de una guerra civil, y; la desorganización del sistema económico a un punto tal que llegó a amenazar el sustento diario de la población. De esta suerte, la politiquería devino en ponzoña que sólo podía ser cauterizada con el ardor de una limpia espada.

El 11 de septiembre de 1973 las Fuerzas Armadas y Carabineros de Chile pusieron fin a una época de desmoronamiento institucional, de claudicaciones indignas, de libertinaje y desánimo colectivo. Pero junto con poner término al caos imperante iniciaron de inmediato, bajo la enérgica conducción del general Augusto Pinochet, lo que bien puede considerarse una refundación de la República. Dicho con mayor precisión, en aquel día se hicieron cargo de la situación no sólo con el propósito de remediar los desastrosos efectos de la anterior década revolucionaria, sino para sanear las causas que la habían hecho posible. En ese sentido la gestión militar de gobierno fue contra-revolucionaria, pues desmontó la siniestra máquina que con mayor o menor conciencia del hecho sus predecesores habían ido construyendo para acabar con la libertad de los chilenos. Pero, a fin de superar positivamente la crisis, no bastaba con decretar el cese de las funestas prácticas que habían tornado ineludible la intervención militar: era necesario alcanzar un nuevo consenso básico, modernizando al efecto la sociedad y el Estado en torno a un espíritu nuevo y crear las condiciones que hicieran posible avanzar resueltamente hacia su consolidación. Para ello, el gobierno estimó conveniente formular las orientaciones que ceñirían su acción —lo que hizo el 11 de marzo de 1974 mediante la Declaración de Principios del Gobierno de Chile— y dejar en claro que no abandonaría las responsabilidades asumidas hasta que la misión estuviera cumplida. Su acción restauradora se encaminó en todo momento exclusivamente al bien de la patria y por sobre cualquier interés de grupo, incluso los muy legítimos intereses corporativos de los hombres de armas. En ese empeño, como siempre había ocurrido, los adversarios de una autoridad eminentemente nacional fueron los dirigentes de las diversas facciones partidistas, es decir, el rostro contemporáneo de la fronda.

Ahora bien, cuando el esfuerzo político apunta con noble ilusión a la restauración de la patria —y no era otro el cometido del Gobierno Militar— el único procedimiento eficaz consiste en el retorno a los orígenes. El centro irreductible de su

ideario, en consecuencia, fue volver a soldar la voluntad de los ciudadanos con los valores permanentes de la nación, sólido cimiento de su camino hacia el porvenir, dejando atrás las hondas divisiones que había provocado la pasión política, exacerbada hasta el paroxismo por la partitocracia, las ideologías totalizadoras y la violencia extremista inspirada en el ejemplo cubano.

La pacificación social y la reconciliación personal, junto al reordenamiento de la actividad del país, pronto señalaron la aurora de una emergente realidad. A pesar de la actividad disociadora de los agentes del comunismo y sus comparsas —que desde la clandestinidad no cejaron en su triste cosecha de incertidumbre, dolor y muerte— y a pesar también de la incomprensión internacional, fue posible construir en apenas tres lustros un Chile nuevo, más puro en su tarea cotidiana y en sus designios históricos, animado por una fuerza optimista que trocó la desesperanza de las últimas décadas en nueva vitalidad. Así afloraron las virtudes individuales más pujantes y se aseguró, al mismo tiempo, la convivencia de todos en paz. Fue esa mentalidad renovada, inspirada en lo mejor de la propia tradición, la que impulsó la modernización de las estructuras sociales y estatales. En el plano instrumental, el nuevo consenso alcanzado se expresa, de una parte, en un sistema económico de mercado, que reposa en la iniciativa de las personas, en el respeto al fruto de sus esfuerzos y en el rol subsidiario asignado al Estado, y de otra, en una institucionalidad política democrática, al servicio del interés nacional pero garantizando al mismo tiempo los derechos esenciales de cada ciudadano. Ambos aspectos, copulativamente, sirven hoy de base a la efectiva libertad de los chilenos.

El cumplimiento exacto de las ambiciosas metas que a sí mismo se impuso el Gobierno Militar —cuyo desempeño, hay que decirlo, sólo admite ser comparado con las más brillantes páginas de nuestra historia patria— hizo posible abrir cauce a una época de singular prosperidad y confianza en el destino del país. En ese contexto, la permanencia del general Augusto Pinochet a la cabeza del Ejército ha sido prenda de garantía para la conservación del objetivo nacional y para su proyección ulterior. Esos logros, que son la piedra sillar de un futuro digno de ser compartido, debieran enorgullecer a todos, sin omisión alguna.

Nuestra propia experiencia y la sufrida por tantos pueblos en similar trance, enseñan que el retorno a la plena normalidad suele ser una etapa difícil; siempre hay fuerzas que quieren volver atrás, buscando otra oportunidad para imponer sus fallidas utopías. Aquí la mera presencia del general Pinochet hizo imposible el retroceso y es ese un servicio que la posteridad agradecerá.

En suma, no obstante sus defectos —y los tiene, como algunos malos hábitos consustanciales a la partitocracia, cierto grado de parálisis gubernamental reflejado en la disminución del impulso nacional, consecuencia de estar regidos últimamente por un conglomerado político instrumental, que dista mucho de ser homogéneo en sus valores elementales, y el inquietante asomo de un grado de corrupción más o menos consentido— el presente orden de cosas, firmemente asentado en la herencia moral, institucional y material del Gobierno Militar, permite mirar el porvenir con razonable optimismo. Más que mal, apoyados sólo en nuestras propias fuerzas, tras haber pastado en el corral ideológico, hemos vuelto a ser una sociedad libre.

Vigencia de la idea nacional.

De aquella apretada síntesis histórica se desprende que el rasgo más determinante del último tercio del siglo ha sido, para los chilenos, el abandono de las utopías ideológicas y el retorno a la idea nacional como núcleo de la vida colectiva. Conviene, pues, en este ensayo, precisar el contenido del concepto.

Por su naturaleza social, no hay en la especie humana una vinculación directa entre cada individuo y la universalidad de todos los hombres. En cada gran época histórica ese tránsito ha sido mediatizado y articulado por una forma social que responde a una cultura determinada. En tal sentido, es típico de la modernidad occidental que el espacio natural y el ambiente anímico en el que se desenvuelve la convivencia social lo constituya la comunidad nacional. En tanto realidad que aglutina y singulariza a los pueblos, reemplazó paulatinamente a lo que durante mil años se conoció por Cristiandad. Así, desde hace ya varios siglos, la idea nacional, por sobre toda otra consideración, une y compacta las mayores fidelidades y ambiciones de los conglomerados humanos dotados de sentido propio.

Ahora bien, la existencia real de cada una de las naciones del orbe no se funda en la cristalización de unas esencias eternas, inconmovibles y hasta cierto punto místicas, sino más bien en la vigencia ejemplar de algunos hechos históricos, es decir, efectivamente ocurridos a un conglomerado humano concreto en un tiempo y espacio determinados. Cada nación tiene su propia biografía, cuyos hitos comprometen e iluminan la respuesta que cada generación ofrece a los desafíos, siempre renovados, que configuran su trama vital. Allí está la raíz de los consensos básicos de su orden de convivencia y, como es obvio, sin raíces nutrientes tampoco hay frutos.

A los que creen que en una época de creciente globalización es incómoda la presencia de las naciones como matriz aglutinante de la vida en sociedad —disfuncional, se dice en la jerga pseudo intelectual hoy en boga— les haría bien meditar en el siguiente texto de Solzhenitsyn: "Se ha puesto de moda últimamente hablar de la estandarización de las naciones, de la desaparición de los pueblos en el caldero de la civilización actual. No estoy de acuerdo. Pero esto es cuestión aparte. Aquí sólo es oportuno decir: la uniformidad de todas las gentes en un solo carácter o en una sola faz, no nos empobrecería menos que la desaparición de las naciones. Las naciones son la riqueza de la humanidad, su personalidad sintetizada. La más pequeña de ellas aporta su particular colorido y oculta en sí una faceta de la concepción divina".[5]

Por cierto, no se debe confundir el concepto de nación con su caricatura, el nacionalismo tribal e intolerante, que mueve a intentar imponer el propio estilo de vida a otros pueblos. El peligro surge cuando alguno de los elementos constitutivos del acervo nacional —suelo, sangre, lengua o fe— es idealizado al extremo de sustituir la realidad histórica. Entonces sobreviene la catástrofe. Cada nación posee un proyecto de vida al que se integran los mejores esfuerzos de sus miembros, y si ese proyecto es verdaderamente sugestivo y exitoso, irradiará a otros por sus propios méritos. Del mismo modo, como

5 ALEXANDR SOLZHENITSYN, Discurso de recepción del Premio Nobel de Literatura 1970. Está recogido en su *Alerta a Occidente*, Ediciones Acervo, Barcelona, 1978, pp. 7-27. La cita en p. 17.

fuerza integradora, podrá asimilar a gente proveniente de otras latitudes, incluso de ámbitos culturales diferentes. Los países formados sobre una base de inmigrantes dan cuenta de ello. Cosa muy distinta y peligrosa es pretender algún tipo de superioridad o exclusividad. Todavía más; una nación segura de sí misma respeta y no pocas veces admira y hace suyas muchas manifestaciones del espíritu o simplemente técnicas de otros pueblos, sin por ello renunciar a sus propias raíces ni a su propio perfil. No ha de verse, por tanto, en la vigencia de la idea nacional, una potencia vital que necesariamente amenace la paz.

Reconociendo la fuerza de este vínculo natural —porque el sentimiento apátrida es contranatura— un liberal de impecables credenciales, sir Isaiah Berlin, ha podido afirmar: "La manera como los hombres viven, piensan, sienten, hablan entre sí, las ropas que visten, las canciones que cantan, los dioses que adoran, la comida que comen, sus supuestos, sus costumbres, los hábitos que les son intrínsecos, eso es lo que crea a las comunidades, cada una de las cuales tiene su propio "estilo de vida". Las comunidades pueden parecerse en muchos aspectos, pero los griegos difieren de los luteranos alemanes, y los chinos se distinguen de ambos; aquello por lo que luchan y lo que temen o lo que adoran muy rara vez se asemeja".[6]

Mirando ahora a su eje, cabe señalar que toda nación digna de ese nombre posee viva conciencia de ser portadora de una vocación propia, única e irrepetible. Andrés Bello lo entendió cabalmente al decir que "es cosa demostrada por la historia de todos los pueblos, i principalmente en las grandes épocas de la humanidad i la civilización, que cada uno de ellos ha tenido una misión que llenar, respecto del destino del género humano".[7] Los períodos de decadencia surgen cuando la nación, desorientada, se aparta del destino que está llamada a alcanzar. Pero resurge cuando encuentra al hombre que la interpreta y es capaz de volver a situarla en su camino.

Una vez sentados los principios recién enunciados, fácil es comprender por qué la vigencia de la idea nacional resulta incompatible con los esquemas mentales de cuño ideológico. La particularidad concreta de la nación y la universalidad abstracta de la ideología constituyen dos formas de naturaleza perfecta y completa, por lo que lógicamente no pueden sintetizarse en una unidad. No cabe, pues, respecto a ellas, un cómodo sincretismo. Ambas categorías siempre estarán en tensión; podrán alcanzar un grado razonable de coexistencia, pero jamás compenetrarse. Así, en las ocasiones en que prima la ideología, la nación se eclipsa; pero vuelve por sus fueros apenas se le brinda la oportunidad.

La eclosión de las ideologías en Chile —fenómeno que dio un tono conflictivo a la convivencia de sus habitantes durante diez años, exactamente hasta el 11 de septiembre de 1973— convirtió al país en una especie de laboratorio que atrajo la mirada del mundo. Esta repentina atención se explica porque lo que estaba en juego era la posibilidad de modelar una sociedad de acuerdo a los postulados teóricos de la ideología que, como advirtiera Raymond Aron, era *el opio de los intelectuales*, pero sin que aquella dejara de ser lo que constitutivamente era. A eso se refería, por ejemplo, el

6 ISAIAH BERLIN, *Arbol que crece torcido*, Editorial Vuelta, México, 1992, p. 24.
7 ANDRÉS BELLO, Obras Completas, Consejo de Instrucción Pública, Santiago, 1882, Vol. VIII, p. 259.

slogan "una revolución con sabor a empanadas y vino tinto". Si el experimento resultaba aquí, también podía ser intentado en otras sociedades. Como fracasó, acarreó la furia impotente de los adoradores de ideologías. Mirada desde fuera, esa experiencia quizás sea un cuadro horrible de discordias o de aburridas luchas de facciones y partidos por alcanzar el poder; pero mirada por dentro es una prueba evidente del espíritu y de la fuerza de la idea nacional, una renovada confesión de fe en su virtualidad, una lucha agónica que se resolvió en un espasmo, haciendola prevalecer.

Como ya se ha apuntado, cada nación, en tanto expresión del fenómeno humano, es una creación histórica: surge, crece y decae vitalmente. Por tanto, es legítimo ver en el decurso del tiempo al escultor que plasma su identidad. Como es sabido, el escultor saca de la roca en bruto una forma armoniosa que está ya, potencialmente, en su interior. De manera similar, lo que otorga una mentalidad inconfundible a una nación surge de su conciencia histórica y se proyecta en la voluntad de compartir también un destino singular. De ahí que las ideas, opiniones, modos de convivencia, tensiones y cambio de todo tipo que de ordinario ocurren en cualquier agrupación humana, esto es, la trama de su proceso de vida, tenga su génesis y explicación en hechos que les han precedido y que de una u otra forma condicionan los cambios o rupturas del presente. Y éstos serán determinantes, a su vez, de lo que pueda ser el mañana común. En consecuencia, al abordar con interés analítico el proceso de transformaciones sociales y políticas de un país, no se debe perder de vista que todo fenómeno de trascendencia colectiva ha de entenderse e interpretarse en función de la presencia actuante del pasado sobre un futuro más o menos previsible. En la vida de los hombres y de los pueblos no existe la tabla rasa; carece de sentido ese complejo adánico, tan propio de las ideologías, que cree posible partir de cero, desde un instante mágico elegido por la razón o la voluntad, siempre escogido con algún grado de arbitrariedad.

Claro está que nadie ha descubierto los principios capaces de dar cuenta, matemáticamente, de la articulación de los múltiples planos temporales que configuran la realidad social, ni mucho menos del comportamiento individual de sus protagonistas. El acontecer diario es en buena parte imprevisible y surge de manera más o menos espontánea. No obstante, acertó Fernand Braudel al intuir que en la cronología de un pueblo, y con mayor énfasis en el de una civilización, es posible discernir tres tiempos: acontecimiento, coyuntura y larga duración. En cada uno de ellos lo singular va desapareciendo, progresivamente, en beneficio de un nivel mayor de generalidad y abstracción. Así, debidamente conjugadas aquellas instancias, se van haciendo visibles las grandes tendencias que marcan la línea del horizonte de lo que propiamente constituye un proceso histórico, ocupando cada situación concreta el lugar que le corresponde en el conjunto de los hechos.

En dicho sentido es posible afirmar, sin aventurar demasiado, que en una visión de larga duración el 11 de septiembre de 1973 representa para la nación chilena un punto de inflexión de su trayectoria, sobre el que se sustenta su actual orden de convivencia. Ese acontecimiento, huelga decirlo, no irrumpió desde la nada; obedeció a una coyuntura que se fue configurando, con aristas cada vez más agudas, a lo largo de la década que le precedió. Para decirlo sintéticamente, la acción militar

iniciada en esa fecha resolvió, de manera dramática si se quiere, el intento de transformar a la nación chilena según el molde de una ideología moribunda, la marxista-leninista, tributaria de una visión pretendidamente universal del hombre y de la sociedad, aunque como luego quedó demostrado en la propia Unión Soviética, no se condice con la fisonomía histórica de ambas realidades.

El nuevo cauce inaugurado ese día, o mejor dicho el retorno al cauce histórico de la nación chilena, constituye una empresa colectiva que sólo podía ser encabezada por las Fuerzas Armadas y de Orden, celosos custodios del alma nacional y única organización del Estado que permanecía incólume tras la arremetida revolucionaria. Su decisión, compartida por todo el estamento militar y la inmensa mayoría de sus compatriotas, está personificada en el general Augusto Pinochet Ugarte: a él se deben, en lo esencial, el nuevo rumbo y el potente énfasis dado a la empresa renovadora hasta que culminó exitosamente. Por cierto, no se intenta aquí exaltar su figura en forma desmedida, entre otras razones porque no lo necesita; ya ocupa un lugar de honor en la historia. Antes bien, hay que reconocer, como lo hiciera Saint-Exupéry meditando en la postración de la Francia de pre-guerra, que "sea cual fuere la maquinaria administrativa, nada expande, nada crece, nada se funda cuando nada tiende hacia nada. Nos faltan tropismos", añadiendo luego que esa capacidad de fijar objetivos y de mover a otros hacia su realización es, justamente, el papel del auténtico conductor de hombres: "Un jefe es aquel que nos atrae en lugar de comprar la aceptación de nuestra ayuda como una concesión de favores. Ved a Mermoz, la alegría de los hombres cuando éstos lo exigen mucho".[8] En igual sentido, y en un momento también muy difícil, el general Pinochet fue el jefe de nuestra nación y el portador de sus más altos ideales.

Ahora, si se desea tener una explicación satisfactoria de cómo se llegó a la coyuntura que hizo inevitable el acontecimiento del 11 de septiembre de 1973 y cuál fue la obra que desde ese día y en un proceso de larga duración levantó a la nación chilena, es preciso remontarse en el tiempo para discernir los desafíos que han ido dando forma concreta a sus consensos básicos.

El consenso aristocrático en la sociedad chilena.

La realidad social es movimiento, proceso, cambio. Sólo el intelecto es capaz de percibir en el decurso del tiempo algunas manifestaciones sólidas, fijas, que pueden ser calculadas y ordenadas. En ese fluir, nada puede establecerse y desarrollarse de modo constructivo si las normas que lo rigen varían y se desenvuelven caprichosamente. De ahí que la estabilidad institucional de una nación —armazón racional de su consistencia social— sea la condición indispensable para alcanzar los fines de más largo aliento, esto es, sus ambiciones propiamente históricas. Por cierto, dado que la vida es movimiento incesante, la estabilidad no puede ser sinónimo de inmutabilidad, antes bien, señala el cauce para la transformación ordenada por la naturaleza de las cosas y por la inteligencia humana, encaminada al cumplimiento de ciertos objetivos propios de la convivencia que tienen carácter permanente.

8 ANTOINE DE SAINT-EXUPÉRY, *Carnets*, Editorial y Librería Goncourt, Buenos Aires, 1967, pp. 21 y 25.

El rasgo más notable de la evolución chilena ha sido su estabilidad. Los desafíos derivados de su aislamiento geográfico, del rigor de la sempiterna guerra de Arauco y de los frecuentes desastres naturales, obligaron a descansar en una sólida organización institucional y en una abnegada disciplina colectiva, única manera de enfrentar las emergencias. Quizás por ello, a lo largo del tiempo su orden de vida muestra una excepcional línea de continuidad histórica.

La estabilidad de las instituciones chilenas no fue, pues, un fruto de la casualidad. El orden político, jurídico, económico y social de un pueblo no se improvisa ni se impone por medio de recetas más o menos ingeniosas. Por el contrario, brota de su peculiar modo de ser, manifestado en una mentalidad y un estilo inconfundibles, y de las organizaciones que resultan de la ciencia, el buen juicio y la experiencia de muchos hombres a lo largo de generaciones. El conjunto de estos elementos remata en un consenso básico, esto es, en la adhesión en gran medida inconsciente a un puñado de valores y actitudes comunes, altamente sugestivos, que inspiran y sostienen la acción de los individuos.

Del consenso básico fluyen las instituciones que efectiva y regularmente cumplen los propósitos para las que fueron creadas. Y de ese entramado valórico y vital surge la constitución histórica de una nación. Se trata de una forma elemental, hasta cierto punto inconmovible, que es anterior y superior a toda ley escrita. En otras palabras, es el pozo de legitimidad sobre el cual se alza la constitución escrita, el documento que da forma jurídica al orden político vigente en un momento determinado. De ahí que esta última permanezca sólo en tanto manifiesta o actualiza dicha constitución histórica, que es su piedra sillar.

Una peligrosa ilusión, muy extendida, lleva a creer que la vida de un pueblo, en la profundidad de su ser, puede modelarse artificialmente mediante arbitrios jurídicos o, lo que es peor, adoptando consignas ideológicas. Una y otra vez la realidad se encarga de desmentirlo en favor de las auténticas instituciones de la nación, las únicas que se condicen con su constitución histórica.

Para comprender los límites del consenso alcanzado en Chile durante el siglo XIX, expresado en la notable estabilidad de su marco institucional, conviene primero traer a la memoria las características principales del gobierno de las Indias en el antiguo Imperio. Como se recordará, los territorios de ultramar estaban unidos directamente a la Corona y su administración se ejercía directamente por el rey y su Consejo de Indias. A ellos concernía la suprema gobernación espiritual y temporal, incluyendo en ésta las cuatro materias o ramos desde entonces esenciales: gobierno propiamente tal, justicia, guerra y hacienda. La función del rey estaba jurídicamente definida en las Siete Partidas, en concreto, en la Partida II, título I, ley V: "Vicarios de Dios son los reyes, puestos sobre las gentes, cada uno en su reino, para mantenerlas en justicia y en verdad, cuanto a lo temporal, bien así como el emperador en su imperio". Él personificaba la cabeza del reino y nadie, salvo Dios, podía exigirle responsabilidades por el ejercicio de sus atribuciones. Como señala Bernardino Lira, "este carácter supremo diferencia el poder real de los poderes inferiores. Dentro de la comunidad existen muchos otros poderes distintos del poder real, cada uno con una órbita propia de carácter temporal, como son los poderes locales de los cabil-

dos, los poderes señoriales, los poderes particulares de cada corporación como la universidad, los gremios y demás. El poder real es superior a estos otros poderes y en cuanto tal no los elimina ni absorbe, sino que le corresponde moderarlos en orden al bien común".[9]

En esa concepción, propia del derecho indiano, los derechos políticos no tenían por objeto asegurar la participación de los súbditos en el gobierno, pues más bien surgían como contrapartida a los deberes del monarca. Si el deber fundamental del rey era garantizar el buen gobierno, sus vasallos tenían el derecho al buen gobierno. Este era el derecho político por excelencia, y los demás sólo una forma de hacerlo valer. Lejos de ser una noción subjetiva, al gusto de uno o de otro, por buen gobierno se entendía algo objetivo, que comprendía tres elementos. El primero aludía a la esfera religiosa: la protección de la Iglesia y la evangelización de los naturales de América. El segundo era de orden temporal y consistía en mantener a los habitantes del reino en paz y en justicia. El tercero, también de orden temporal, se refería al amparo de los vasallos en la paz y en la guerra. Sobre estas bases no era difícil determinar si había buen gobierno. En la época, y con rigurosa exactitud conceptual, lo contrario del buen gobierno se llamaba tiranía. Si por faltar a los deberes mencionados la autoridad devenía en tirano, los súbditos tenían el derecho de rebelión.

Esta construcción doctrinaria no era simple teoría jurídica. En Chile, por ejemplo, el derecho de rebelión fue ejercido contra el gobernador Antonio Acuña y Cabrera, por un cabildo abierto en Concepción, el año 1655. El motivo fue la reanudación de las hostilidades con los mapuches por culpa de la desacertada conducta de los cuñados del gobernador, los hermanos Salazar, que innecesariamente reavivó un conflicto siempre latente en la zona. En la ocasión, al grito de ¡Viva el rey, muera el mal gobierno!, dicha autoridad fue depuesta. Aunque luego la Audiencia no aprobó formalmente lo obrado por los vecinos, tampoco lo repuso en el cargo.

Como se ha dicho, del derecho al buen gobierno se derivan los demás, como son la suspensión de la ley injusta; la reparación por abusos gubernativos mediante la apelación ante la Real Audiencia, la visita de la tierra y el juicio de residencia; la atención de peticiones y; la preferencia de los vasallos indianos para ocupar cargos públicos en América.

También puede ser útil recordar que la fundación del Estado de Chile comienza en 1540, con la toma de posesión del territorio por Pedro de Valdivia, y termina en 1609 con la instalación de la Real Audiencia. Durante ese tiempo se echaron las bases de las instituciones políticas, judiciales, militares, eclesiásticas y locales del rincón más lejano del Imperio Hispano, el lugar donde un día, "presentándose al Adelantado don Diego de Almagro, el Capitán Gómez de Alvarado dijo quél había pasado adelante de aquella provincia de Chile ciento é cincuenta leguas é que cuanto más iba la tierra, más pobre é fría era y estéril y despoblada; é que informándose de la tierra de adelante, supo é le dijeron que estaban cerca de la fin del mundo",

9 BERNARDINO BRAVO LIRA, *Historia de las instituciones políticas de Chile e Hispanoamérica*, Editorial Andrés Bello, Santiago, 1986, p. 43.

como rememora el capitán Gonzalo Fernández de Oviedo y Valdés en 1557.[10] Estas instituciones fundamentales permanecerán vigentes durante todo el período indiano, y se proyectarán sin grandes modificaciones sobre el período republicano, lo que da cuenta de la estabilidad que distingue a la organización chilena.

Buscando una síntesis de las instituciones de esa época —mal llamada Colonia por los enemigos de España en Europa, aunque el vocablo tuvo fortuna y arraigó sin mayor crítica entre los intelectuales liberales decimonónicos— es interesante consignar cómo nos vio un viajero. En 1839, César Famin escribió: "Durante la Colonia el poder supremo, en el reyno de Chile, se confiaba a un personaje de distinción que era de ordinario un teniente general y se titulaba gobernador, presidente y Capitán General de Chile. Estaban subordinados a él los gobernadores de Chiloé, Valdivia, Valparaíso, Juan Fernández y varios otros oficiales. Cada provincia era gobernada por prefectos o corregidores y en cada ciudad había un consejo de magistratura (cabildo) compuesto de muchos regidores, dos alcaldes y otros funcionarios. La Real Audiencia era una especie de Senado que fallaba y juzgaba sin apelación todas las causas civiles y criminales. El gobierno eclesiástico comprendía dos diócesis: el obispado de Santiago y el de Concepción, sufragáneos ambos del Arzobispo de Lima".[11]

También cabe recordar que la disolución del Imperio dio paso al desorden social y a la anarquía política tanto en la metrópolis como en las repúblicas que le sucedieron en América. El factor que dividió a pueblos secularmente unidos y de paso les sumió en una inestabilidad crónica, fue el vacío de poder dejado por la desaparición de la autoridad tradicional del monarca. Como señala Eyzaguirre, al poco tiempo de consumada la emancipación, "el ideal bolivariano que quiso detener la fragmentación del imperio ya está relegado al rincón de las fórmulas sin eficacia. Ahora, cada antigua provincia española bautizada de república busca acentuar su fisonomía en lugar de fundirse en la unidad. Y aunque la diferenciación no resulta de que les nazca un espíritu propio y original, sino del recelo que unas sienten de las otras y que se ve activado por el empaque regionalista y lugareño que llevan en la sangre, el hecho es que la armonía entre ellas se conseguirá más por un proceso de equilibrio externo que de fusión interior, cada vez menos posible. Así como al morir la cristiandad medieval el nacionalismo se metió resuelto a aislar a pueblos que la víspera convivían en un común plano anímico, de igual manera al disociarse la comunidad hispanoamericana sus componentes van tomando entre sí día a día más distancia".[12]

No es cosa sencilla reemplazar una legitimidad por otra, pero se trata de un paso crucial para asegurar el orden de vida de un pueblo a través del tiempo y, por tanto, siempre exigirá una respuesta. Como indica Ortega, "la función de mandar y obedecer es la decisiva en toda sociedad. Como ande turbia la cuestión de quién manda y quién obedece, todo lo demás marchará impura y torpemente".[13] En Hispanoamérica, sólo

---

10 CARLOS LAVÍN, op. cit., pp. 11 y 12.

11 Idem., p. 15.

12 JAIME EYZAGUIRRE, *Fisonomía histórica de Chile*, México, 1948. La cita en la sexta edición de Editorial Universitaria, Santiago, 1978, pp. 125-126.

13 JOSE ORTEGA Y GASSET, *La rebelión de las masas*. En Obras Completas, Revista de Occidente, Madrid, 1957, vol. IV, p. 242.

en Chile fue posible restablecer con rapidez esa condición indispensable para una convivencia razonable. Haber cimentado aquí un poder indiscutido, capaz de garantizar la concordia, el bienestar y la seguridad de la nación, es un mérito que debe ser atribuido a Diego Portales.

En efecto, una vez lograda militarmente la independencia, el problema que se presentaba al estadista era a la vez simple y difícil de resolver. Con el derrumbe de la monarquía sólo quedaban como fuerzas políticas efectivas las mismas que le habían puesto término: el tradicional grupo dirigente criollo y el Ejército. La fronda aristocrática, nacida de la irritación de los viejos hidalgos ante cualquier forma de autoridad no impuesta por ellos mismos, junto a la ambición de los triunfantes caudillos militares —cuyos mandatos habían ocupado el lugar de una administración convertida en inútil o hecha imposible porque se había mostrado ineficaz ante la emergencia bélica— era entonces lo que había que organizar o someter. O´Higgins no lo logró y quienes le sucedieron tampoco; se vivió por tanto en la anarquía. La batalla de Lircay, en 1830, marca el fin de tan desordenado período y el inicio de una época regida por una fuerza moral permanente y obedecida, superior a las facciones partidistas y a los prestigios castrenses. Bajo el poderoso influjo del ministro Portales, ambas fuerzas fueron puestas al servicio de la consolidación de una organización política y social que, sin volver al pasado español, era una réplica sensata del complejo institucional que articulaba la constitución histórica de la nación.

En frase atribuida a Goethe, *crear es unir*. La creación institucional de Diego Portales estaba llamada a perdurar, justamente, porque consistió en unir y hacer prevalecer, bajo formas nuevas, lo medular de unas instituciones varias veces centenarias. De este modo, la nación engarzó la solución de los desafíos emergentes con el sustrato común de un ayer todavía palpitante de actualidad y fuerza creadora.

En el régimen portaliano, que en sus grandes líneas se mantendría vigente hasta 1891, tres son los órganos principales: el Presidente de la República, la Judicatura y las Fuerzas Armadas. Por definición, se trata de tres instituciones conservadoras del orden social existente, y bajo su amparo la estabilidad chilena fue nuevamente una realidad. Esta admirable condición hizo posible el progreso material y a su vera, en las ciudades, el paulatino surgimiento de una clase media integrada por magistrados, funcionarios, comerciantes y profesionales, grupo social que proporcionó la más segura clientela al poder presidencial desde Montt a Balmaceda.

Con todo, tratándose de un país entonces eminentemente agrícola, el tipo nacional característico era el hombre de campo. Charles Darwin, en 1839, nos vio de esta forma: "Los guasos (sic) de Chile corresponden a los gauchos de las Pampas, pero son, sin embargo, bien diferentes en varios aspectos. Chile es el más civilizado de los dos países, y sus habitantes, por consecuencia, han perdido mucho de su individual condición. Las gradaciones del carácter del guaso son más hondas y profundas, y es por ello especialmente por lo cual no acepta a nadie como su igual. Puede el gaucho ser un destripador, pero es todo un gentleman; en cambio, el guaso, aventajándolo en muchos aspectos, se califica como más vulgar y ordinario. En general, aunque ambos tipos proceden análogamente, sus ademanes y su indumentaria son diferentes y por lo

demás sus usos y peculiaridades son universalmente populares en los respectivos países".[14]

El embate al orden impuesto por Portales vino de la capa más influyente de la sociedad en esa época, de la fronda aristocrática, cuyo anclaje con los valores y sentimientos tradicionales fue cediendo en beneficio de las ideas liberales por entonces en boga en Europa y Norteamérica. Hasta cierto punto fue un fenómeno inevitable. Cualquier nuevo orden social fundado sobre una suerte de reedición del antiguo tendrá siempre algo de forzado. A la larga, resulta imposible desatender las exigencias vitales del propio tiempo. Así, esgrimiendo ese ideario en alza —que traducía mejor su conciencia del poder social y económico que detentaba, y además resultaba más acorde con su temperamento independiente y dominante— desde el Parlamento enfrentó con éxito creciente al Presidente de la República.

Desde el año 1875 y por medio siglo, los principios y actitudes liberales dominarán la escena. A pesar de ello, la fuerte estructura portaliana no parecía desquiciada ni mucho menos. Todavía funcionaba lo que el ministro llamaba "el resorte principal de la máquina", en cuya virtud el gobierno seguía administrando los intereses nacionales con serenidad y eficacia. Contundente prueba lo constituye la victoria alcanzada sobre Perú y Bolivia en la Guerra del Pacífico, un triunfo que tiene su explicación última en la superior organización del Estado de Chile. El flamear orgulloso de su bandera sobre el Palacio de los Virreyes indicó el cenit de aquella etapa de su trayectoria histórica. Pero ese momento estelar también señalaba el inicio del azaroso declive. Por entonces, "en Sud América, Chile representaba el orden, la severidad, la economía. (...) ¿Por qué empezaba a cambiar de súbito todo eso? Porque después de la última guerra se había iniciado en la estructura misma del país una transformación profunda que no podía dejar de reflejarse en las ideas, en las costumbres, en el conjunto sociológico".[15] Cuando en Concón y Placilla el rancio estrato dirigente logró imponerse definitivamente sobre la autoridad presidencial de raigambre monárquica, era ya una oligarquía plutocrática. Con esto se quiere significar que en lo más hondo de su ser, aunque la sangre era prácticamente la misma, se habían secado las recias virtudes de antaño y las concepciones espirituales que en su día animaron el rol dirigente de la aristocracia castellano-vasca.

A la luz del predominio de las concepciones liberales, asumidas en la época como un verdadero credo porque se veía en ellas la fuente primordial del progreso y de la libertad, la revolución de 1891 puede considerarse un hecho accidental. Por su propio peso, el cambio de régimen que trajo se habría producido por uno u otro camino. Desde hacía ya bastante tiempo el prestigio de los caudillos de la oligarquía había igualado al del primer mandatario. De hecho, los últimos gobernantes provenían de los círculos más críticos a la varias veces centenaria preeminencia de la autoridad que encarnaba el mando supremo de la nación, aunque al acceder al poder lo ejercieran sin titubear, contrariando sus convicciones doctrinarias. En realidad, independiente-

---

14 CARLOS LAVÍN, op. cit., p. 19.

15 EMILIO RODRÍGUEZ MENDOZA, *Cómo si fuera ayer...*, Casa Editorial Minerva, Santiago, 1922, pp. 128 y 129.

mente del estilo autoritario con que ejercieron sus facultades, tanto Federico Errázuriz Zañartu como Domingo Santa María y José Manuel Balmaceda, en su fuero íntimo, eran apasionados liberales.

De otra parte, aunque ha prevalecido la opinión escolar que ve en la Constitución de 1833 la consagración del absolutismo presidencial, la verdad es que sus normas dotaban al Congreso, a modo de contrapeso de la indiscutible autoridad de la cabeza del ejecutivo, con algunos de los recursos que en doctrina caracterizan al sistema parlamentario. No son otra cosa las denominadas leyes periódicas, esto es, el derecho de acusar a los ministros, consentir cada dieciocho meses el cobro de los impuestos, fijar anualmente el presupuesto, determinar con su concurso las fuerzas de mar y de tierra y autorizar la permanencia de las tropas en la ciudad sede del poder legislativo. Con esas facultades podía fiscalizar e imponer su voluntad al Jefe de Estado. Como señala Hunneus, "esas leyes de duración muy breve son indispensables para la vida constitucional de la nación y el poder de concederlas o rehusarlas entrega virtualmente al arbitrio del Congreso la marcha del gobierno y, por tanto, la dirección política del Estado".[16] En la época nadie habría osado discutir esta realidad jurídica y política. Manuel Montt, arquetipo del mandatario civilista y autoritario a la vez, aunque celoso de sus prerrogativas, no vaciló en despedir a sus ministros como consecuencia de una votación adversa en el Senado. Otra cosa es que desde La Moneda se procurara instalar en el Parlamento, casi siempre con éxito, a los hombres adecuados a sus fines.

Lo anterior queda de manifiesto si se recuerda que el presidente Balmaceda, en su Mensaje de 1890, propuso al Congreso vigorizar la institución presidencial para convertirla en motor del desarrollo industrial del país, utilizando con criterio nacional los excedentes del salitre. Pero no lo hizo abogando por la restauración del viejo absolutismo, como todavía hoy muchos imaginan, sino patrocinando un sistema de mayor independencia y equilibrio entre los poderes del Estado, rindiendo así tributo a las concepciones descentralizadoras y democráticas del liberalismo clásico.

La ulterior guerra civil —quizás inexplicable si se omite el carácter románticamente orgulloso de Balmaceda— fue un asunto de frondas. La crisis política que derivó en lucha armada se reducía a la contraposición de antagónicas visiones que sobre el modo del ejercicio de la autoridad tenían los sectores más influyentes del estrato social dirigente. Esa aguda tensión no reflejó en manera alguna una división real y profunda de la sociedad en bandos contrapuestos. Por eso no hubo populacho, barricadas ni montoneras, sino amplias operaciones de dos ejércitos regulares. En ese momento crucial, "la Marina, de formación europea y británica, empapada en el constitucionalismo burgués del siglo XIX, y en íntimo contacto con los círculos oligárquicos monttvaristas o radicales, acompañó al Congreso; el Ejército, más criollo y tradicionalista, más fiel al espíritu de obediencia pasiva al jefe visible del Estado, más español y monárquico, en una palabra, acompañó, no a Balmaceda, sino al Presidente de la República".[17] También por eso, las inevitables heridas que produjo el conflicto se

---

16 ANTONIO HUNNEUS GANA, *La Constitución de 1833*, Editorial Splendid, Santiago, 1933, p. 35.
17 ALBERTO EDWARDS VIVES, *La fronda aristocrática*, Editorial del Pacífico, Santiago, 1972, p. 172.

curaron con rapidez. En 1894 los balmacedistas participaban nuevamente en la actividad política y muy pronto hasta la más modesta de las ciudades bautizó una calle con el nombre del presidente mártir.

Resulta imposible entender el orden político establecido en Chile tras la revolución de 1891 si se olvida que ésta, por sus propias causas, tenía por verdadero objetivo la restauración de la legitimidad social tradicional. Su resultado no fue otro que asegurar el predominio de una élite que ratificó, ahora por las armas, su ancestral derecho a regirla. Así las cosas, como señala Edwards, "el poder monárquico de los Presidentes, debilitado desde tiempo atrás, no fue en adelante sino una sombra de sí misma, en cambio el elemento aristocrático y oligárquico del viejo Chile llegó a la edad de oro de su predominio: por treinta años iba a dominar sin control".[18]

Esos treinta años se caracterizan por constituir un espacio de letargia política, una suerte de limbo para los grupos dominantes. Pero bajo esa tersa superficie se incubaba una rebeldía social que pronto hallaría expresión política. La democracia cumplía puntualmente sus ritos, pero carecía de rumbo. Es imposible encontrar en la época una mayoría parlamentaria que haya triunfado en las elecciones con el objeto de realizar algún programa concreto. Las dificultades nacionales que se vislumbraban, originadas por la llamada púdicamente cuestión social, fueron olímpicamente soslayadas. Para alcanzar las más altas magistraturas era requisito indispensable no ser un peligro para nadie. El presidente Ramón Barros Luco, arquetipo del temperamento parlamentario, solía afirmar que los problemas son siempre de dos tipos: los que se resuelven solos y los que no tienen solución...

La supremacía alcanzada por la oligarquía, resultado de su prestigio secular, del apogeo de sus creencias liberales y de la fortuna en los hechos de armas, duró muy poco. Carecía de savia vital y de capacidad integradora, por lo que le era imposible perdurar. El juego politico de salón —la paz veneciana, como la llamó Edwards Vives, evocando el quietismo político de los Dux— tan propio de los grupos rectores satisfechos, perduró incólume mientras existieron las dos realidades que ahora lo sustentaban. De una parte, las riquezas conquistadas en la Guerra del Pacífico, pues siendo suficientes para el erario hacían innecesario establecer molestos tributos personales. De otra, la feudalización de los partidos, cuyos caciques administraban desde la capital amplias clientelas cuyo voto renovaba periódicamente unas cúpulas linfáticas, carentes de nervio y ambición histórica. Así, de manera indefectiblemente sincronizada, una representación parlamentaria cada vez más plutocrática, se correspondía con una masa ciudadana progresivamente envilecida por el cohecho. Cuando ambos pilares fueron sacudidos por los inexorables rigores de un tiempo nuevo, el edificio institucional se derrumbó.[19]

Paralelamente, en el orden social, ocurrió un fenómeno de la mayor trascendencia. Como se ha dicho, el secreto del éxito alcanzado por la construcción portaliana estriba en que respetó,o más bien confirmó, el rol dirigente que desde principios del siglo XVIII tenía una delgada capa de la sociedad, la aristocracia castellano-vasca. Es,

---

18 Idem., p. 174.

19 Véase JULIO HEISE GONZÁLEZ, *El caciquismo político en el período parlamentario (1891-1925)*, Editorial Andrés Bello, Santiago, 1973.

pues, el mismo núcleo de grandes familias de hacendados quien detenta aquí el poder durante dos siglos. Pues bien, desde que gracias a su participación en la riqueza que manaba de las calicheras mudó su ancestral austeridad por la blandura plutocrática, abandonando los campos a la administración de mayordomos y centrando su atención en la bolsa, cambió también su horizonte mental nacional por una visión más cosmopolita, de rendida admiración por la cultura francesa. Con esa transformación, aquella élite social abdicó tácitamente de su rol conductor.

En efecto, el estrato rector tradicional, encerrado en sí mismo, lejos de encauzar las transformaciones impulsadas por el rápido proceso de urbanización y la creciente educación de la población en un liceo de matriz laica y liberal —que iban dotando de personalidad propia a las capas emergentes de la sociedad— adoptó una actitud defensiva. Sintiéndose acosada, su soberbio encapsulamiento diluyó las antiguas normas de convivencia, que se tornaron insolidarias y quebraron los consensos básicos de la unidad nacional, perfectamente identificables en lo político con lo que antaño de denominaba buen gobierno.[20]

De esta suerte, al concluir el siglo XIX, aunque Chile aparentemente vivía una época de plenitud como jamás había conocido —que llevó a Enrique Rodó, por ejemplo, a calificarlo como *maestra de naciones*— en realidad se estaba disgregado la unidad y diluyendo el espíritu de gesta en que se había forjado la nacionalidad. Así, el confiado optimismo que había elevado tan alto a Chile se trocaba repentinamente en profundo desaliento. Enrique Mac Iver, en una conferencia dictada en el Ateneo de Santiago, sintetizó magistralmente este lamentable estado de ánimo: "Me parece que no somos felices; se nota un malestar que no es de cierta clase de personas ni de ciertas regiones del país, sino de todo el país y de la generalidad de los que lo habitan. El presente no es satisfactorio y el porvenir aparece entre sombras que producen intranquilidad. (...) ¿Qué ataja al poderoso vuelo que había tomado la República y que había conducido a la más atrasada de las colonias españolas a la altura de las primeras naciones hispanoamericanas?" A su juicio, la nación sufre una enfermedad moral. "Hablo de la moralidad que consiste en el cumplimiento de su deber (...) de la moralidad que da eficacia y vigor a la función del Estado (...) a esa alta moralidad, hija de la educación intelectual y hermana del patriotismo, elemento primero del desarrollo social y del progreso de los pueblos".[21]

Es este un punto de la historia patria sobre el que no se ha meditado suficientemente en búsqueda de lecciones prácticas. Desde su original condición de pobre zona de frontera y guerra, el Flandes indiano de la época imperial alcanzó progresivamente un rango preeminente en América. Sin embargo, un par de generaciones, entre la Guerra del Pacífico y los primeros años del siglo XX, protagonizó el apogeo de la nación chilena y su veloz decadencia y descomposición. A pesar de tener las cartas de triunfo en la mano, la posibilidad de un porvenir luminoso se malogró. Las causas de este curioso fenómeno

---

20 Sobre la tesis de la decadencia de Chile en esa época, originada en la pérdida de los consensos básicos de la unidad nacional, véase GONZALO VIAL CORREA, *Historia de Chile (1891-1973)*, Santillana, Santiago, 1981, Vol. I, T. 1, pp. 33-34.

21 ENRIQUE MAC IVER, *Discurso sobre la crisis moral de la República*, Imprenta Moderna, Santiago, 1900. Está recogido en HERNÁN GODOY, *Estructura Social de Chile*, Editorial Universitaria, Santiago, 1971. La cita en pp. 283 y 286 de éste último.

de frustración histórica no fueron externas, sino internas. Los consensos básicos que habían sostenido el prodigioso avance de Chile tanto en los aspectos culturales como en su desarrollo material, se perdieron sin ser reemplazados por otra concepción capaz de formular un atractivo y enérgico proyecto de vida en común.

Tal vez, en el fondo, lo que se agotó entonces fue un tipo de patriotismo. El Chile viejo, como se suele llamar al que correspondía al consenso aristocrático de la sociedad, mostró como rasgo determinante de su personalidad un indisimulable apego a las virtudes guerreras. No resulta exagerado afirmar que desde el ejemplo inicial de Pedro de Valdivia hasta el sacrificio del capitán Ignacio Carrera Pinto, ¡tres siglos!, el sentimiento nacional descansó en la épica militar. Una tradición de esa magnitud no desaparece abruptamente; más bien se va apagando por falta de una causa grande a la que valga la pena servir con fervor. En nuestro caso, se trocó en una suerte de patriotismo intelectual, no sensible, primero entre los elementos más plutocráticos de la aristocracia y después en algunos segmentos de la clase media, los siúticos, influidos por la formación libresca recibida en los liceos. Así, el patriotismo de antaño —entusiasta, valeroso y desprendido— sólo se conservó intacto en los sectores populares, hasta que las divisiones provocadas por la cuestión social lo pusieron en jaque.

Por cierto, este fenómeno no es absoluto. Más bien se trata de una acusada tendencia. Se la puede graficar trayendo a la memoria un hecho ya olvidado: la primera ilustración a color publicada en un diario chileno, hace ya 90 años, se debe a la pluma de Pedro Subercaseaux y muestra una batería de artillería, uniformada impecablemente a la prusiana, ocupando su posición. El texto que la acompaña señala que "el 19 de septiembre es el día de los soldados —la fiesta gloriosa de nuestro Ejército— como quien dice la fiesta popular, porque bajo cada poncho, bajo la blusa de mezclilla o la camiseta del último roto que levanta hoi el grito con entonada alegría late un corazón de soldado chileno. Eso nos queda del tiempo viejo del patriotismo. Todavía no podemos perderlo, porque no es fácil arrancar del fondo del alma la tradición antigua de tantos años de batalla, de tantas campañas heroicas llevadas a cabo". Pero ahora, añade, "gracias a la Providencia las zozobras de pelea se han cambiado por las luchas del trabajo y del engrandecimiento pacífico".[22] No es casualidad, al parecer, que justamente desde el año 1907 el presupuesto de la Defensa Nacional comienza a disminuir significativamente y a partir de ese momento se deterioran las instalaciones, el material y también los sueldos y el reconocimiento social de la profesión militar, lo que a la postre tendrá repercusiones políticas.

La mediocridad, la ausencia de resolución y pujante ambición histórica era pues, desgraciadamente, la condición del sector más "avanzado" de la sociedad chilena en el cambio de siglo. Para colmo, junto al desvanecimiento de su estrato dirigente y a la instalación más o menos precaria de las capas medias, aparecía una nueva fuente de conflictos que enajenará del sentimiento nacional a un sector importante de la clase trabajadora: la cuestión social, cuya manifestación más aguda se presenta en la lucha obrera en las salitreras. Esa tensión llegó a ser grave por los constantes enfrentamientos entre huelguistas y policías. En algunas situaciones críticas, incluso fueron reprimidos

---

22 El Mercurio, 19.9.07, p. 1.

por tropas del Ejército y la Marina, con las consecuencias que cualquiera puede imaginar. En ese clima de rebeldía y desesperanza, un tipógrafo autodidacta, Emilio Recabarren, fundó en 1912 el partido Obrero Socialista, escindido del partido Demócrata, que diez años más tarde se convertiría en el Partido Comunista de Chile.

Los síntomas de la decadencia nacional irían en aumento, acelerados por la pérdida de mercados que trajo la Primera Guerra Mundial, dado que Alemania era el mayor comprador del nitrato chileno. Como reacción, también se harían cada vez más fuertes las ansias de un cambio profundo entre algunos sectores medios de la población, particularmente entre los intelectuales y el Ejército. Esta aspiración a una renovación sustantiva de los hábitos colectivos se manifestará con fuerza incontenible hacia 1920. Nunca como entonces fue tan relevante, por ejemplo, la Federación de Estudiantes, que llegó a soldar una comunidad de espíritu con los obreros. Nunca fue tampoco más evidente el descontento militar. Entonces, el inmovilismo que había sido el rasgo predominante durante los últimos seis lustros dio paso abruptamente a un énfasis nuevo, activo en sus sueños y en su hacer.

En efecto, a lo largo de las últimas décadas, en concreto desde la victoria alcanzada sobre Perú y Bolivia, la base social del país había cambiado en su estructura y en sus aspiraciones; el estilo político de su clase política era, pues, un anacronismo. Como apunta el mismo Edwards, "el fin del antiguo orden de cosas era inevitable, porque había desaparecido su fundamento espiritual, esto es, la obediencia pasiva y resignada del país ante los representantes tradicionales de los viejos círculos aristocráticos. No puede subsistir un Estado "en forma" sin que conserve sus cimientos en el alma social, y, desde que el electorado se rebeló moralmente, la vieja oligarquía parlamentaria no era sino un cuerpo sin espíritu, un cadáver destinado a descomponerse. A partir de 1918, ya no consistía el problema en saber si se restituiría o no la vida a ese muerto, sino en organizar el nuevo orden de cosas que iba a heredarlo. Habría sido posible acaso retardar por pocos meses o años el inevitable desenlace, pero no impedirlo".[23]

El consenso de clase media en la sociedad chilena.

Quien dio expresión política a la estructura social que pugnaba por imponerse en reemplazo del orden tradicional fue Arturo Alessandri Palma. Nieto de un inmigrante italiano que se había enriquecido, estaba llamado a ser el primer Presidente de Chile cuya cuna no era aristocrática y a iniciar con su hermano José Pedro una estirpe que ha prestado relevantes servicios a esta República. Diputado por Curicó desde el año 1897 y dos veces ministro, en las elecciones parlamentarias de 1915 aceptó el reto de disputar un asiento en el Senado a Arturo del Río, el tradicional patriarca de Tarapacá. Lo venció en una campaña tan dura y llena de incidentes —hasta participó en un duelo con el ministro del Interior— que sus partidarios, delirantes, lo bautizaron como *León de Tarapacá*. Al regresar triunfante a Santiago, el coche que lo esperaba en la estación Mapocho fue desprendido de los caballos y arrastrado por la multitud. La clase media no sólo había ganado un senador, sino que veía emerger un líder, un posible candidato presidencial.

---

23 ALBERTO EDWARDS VIVES, op. cit., p. 207.

Como se ha visto, la Guerra Europea trajo consigo un período de crisis económica y social. El salitre redujo sus exportaciones; sobrevino una carestía inusitada de todas las subsistencias; aumentó la desocupación y las insurgentes ideas propagadas por la revolución soviética, que para muchos era una especie de ejemplo universal, prendieron aquí rápidamente entre los obreros. Los efectos políticos no se hicieron esperar. En septiembre de 1919, durante una convención del partido Liberal, se hicieron patentes dos posiciones contrarias: una tradicionalista, orientada a detener la evolución social y frenar drásticamente el clima de agitación que sacudía con especial virulencia a las salitreras, en la que se destacaron Ismael Tocornal y Luis Barros Borgoño; la otra, reformista, decidida a encauzar las inquietudes populares, era dirigida por Arturo Alessandri y Eleodoro Yáñez. El partido Radical, en la convención celebrada aquel mismo mes en Concepción, también se trizó. La presidió Pedro Aguirre Cerda e impuso un voto crítico hacia el gabinete, del que por entonces formaban parte. En la ocasión expresó: "Los elementos oligárquicos experimentan realmente verdadero temor, verdadero pánico, ante el avance de este partido, compuesto de multitudes vigorosas, nuevas, intelectuales, reformistas: no porque vayan a subvertir el orden social, produciendo el caos, sino porque van contra los actuales privilegios. No quieren castas, rechazan el centralismo y amenazan acabar sin contemplaciones con los intereses creados".[24]

En ese clima político, invitando a una revolución sin armas —pero revolución al fin y al cabo— el senador Alessandri encabezó en 1920 la acción de acoso y derribo del antiguo orden. Al ser proclamado candidato a la Presidencia de la República, pronunció un discurso programático que rompió el molde de lo que hasta entonces se había escuchado en el soñoliento ámbito político: "El país atraviesa por uno de los momentos más difíciles de su historia. Vivimos desde hace años en medio de la anarquía y el desgobierno. Toda clase de angustias y de dificultades obstaculizan la marcha próspera de esta patria tan cara a todos nosotros. El país desea, exige, un Gobierno sólido y fuerte, con rumbos definidos, orientados sobre la base de una política netamente nacional". Pero, aunque este diagnóstico implicaba la franca ruptura con el orden existente, sin duda lo más sugestivo fue su advertencia final: "Yo quiero, antes de terminar, haceros una declaración. Ha sido costumbre oír a los que han tenido la satisfacción de alcanzar el honor que ahora me discernís que no son una amenaza para nadie. Mi lema es otro: quiero ser una amenaza para los espíritus reaccionarios, para los que resisten toda reforma justa y necesaria (...) quiero ser una amenaza para todos aquellos que permanecen ciegos, sordos y mudos ante las evoluciones del momento histórico presente, sin apreciar las exigencias actuales para la grandeza de este país; quiero ser una amenaza para los que no saben amarlo y servirlo. Seré, finalmente, una amenaza para todos aquellos que no comprenden el verdadero amor patrio y que, en vez de predicar soluciones de armonía y de paz, van provocando divisiones y sembrando odios, olvidando que el odio es estéril y que sólo el amor es fuente de vida, simiente fecunda que hace la prosperidad de los pueblos y la grandeza de las naciones".[25]

---

24 FERNANDO PINTO LAGARRIGUE, *Crónica política del siglo XX. Desde Errázuriz Echaurren hasta Alessandri Palma*, Editorial Orbe, Santiago, 1972.

25 ARTURO ALESSANDRI PALMA, Programa Presidencial, en *El presidente Alessandri a través de sus discursos y actuación política*, Imprenta Gutenberg, Santiago, 1926. Citado según HERNÁN GODOY, op. cit., pp. 351 y 358.

Esas palabras eran una declaración de guerra. Al interior de los círculos dominantes la pretensión de Alessandri fue considerada una extravagancia. Pero se le acercaron los que tenían algo que reclamar, todos los insatisfechos, aquellos a los que dolía la cuestión social, la decadencia de la patria, el parlamentarismo, o simplemente la propia vida, chata y sin ilusiones. Desde luego, la clase media reconoció en este apasionado tribuno al hombre predestinado por el destino para guiarla. Con razón, pero también con mezquindad, Eyzaguirre hará notar que "porque entraba a la arena política carente de toda tradición y a la zaga de una aristocracia en progresiva declinación moral, la clase media tuvo que ser cauce propicio al juego de aventureros y demagogos, a menudo de escasa sangre chilena, cuando no, nacionalizados de última hora. Su lenguaje encendido y pleno de violencia, extraño a la parquedad usual del ambiente, conmovería el corazón de las masas populares y, explotando sus legítimos anhelos de reforma, acabaría por conquistar el apoyo de las mismas para sus ambiciones personales".[26]

La campaña electoral de 1920 fue, pues, un enfrentamiento entre el viejo orden patricio y las fuerzas nuevas que pugnaban por participar en la dirección de los asuntos públicos, dos bandos representados por Luis Barros Borgoño y Arturo Alessandri Palma, respectivamente. El 25 de junio, día de las elecciones, este último ganó en electores, 179 contra 175, y perdió en votantes, 82.083 contra 83.100, diferencia posible merced al sistema acumulativo de sufragios entonces utilizado. Estas cifras dan una idea exacta del tamaño que por entonces alcanzaba el cuerpo electoral y de la correlación de fuerzas en liza. Como ninguno de los candidatos alcanzó la mayoría absoluta, correspondía al Congreso Pleno designar al Jefe del Estado. En el Parlamento tenía mayoría la Unión Nacional, esto es, los conservadores partidarios de Barros. En realidad, allí Alessandri ni siquiera tenía a su favor un tercio de sus miembros. Sin embargo, esquivando las normas constitucionales, las partes acordaron poner tan delicado tema en manos de un Tribunal de Honor, instancia inexistente en la Carta Fundamental. ¿Porqué? Todo indica que por la presión de los militares, en su mayoría partidarios de Alessandri.[27]

En efecto, como indica Vial, lo que movió a los partidarios de Luis Barros a aceptar dicho Tribunal fue un mensaje en clave enviado por el Ejército del Norte —concentrado en Tacna con motivo de la movilización decretada ese año y que la picardía popular bautizó festivamente como "la guerra de don Ladislao", por Ladislao Errázuriz, entonces ministro de Guerra— donde decía que no se haría responsable por el mantenimiento del orden público en caso que la idea del Tribunal de Honor fuera rechazada.[28] En apariencia no era mucho; pero entre líneas se podía leer, sin mayor dificultad, que desde lo más hondo de la frustración nacional había surgido una nueva y determinante fuerza en la actividad política de Chile: el Ejército.

En esas circunstancias, que hacía presagiar un alzamiento popular o una rebelión militar si Alessandri no era electo, el 30 de agosto se constituyó el Tribunal de Honor. Al cabo de un mes, durante el cual estudió las reclamaciones formuladas al acto electoral, emitió su veredicto: Alessandri ganaba, con 177 electores contra 176, pero no

---

26 JAIME EYZAGUIRRE, op. cit., pp. 163 y 164.

27 Véase RENÉ MILLAR CARVACHO, *La elección presidencial de 1920*, Editorial Universitaria, Santiago, 1982.

28 GONZALO VIAL CORREA, "Decadencia, consensos y unidad nacional en 1973", en Política y Geoestrategia nº 36 (1985), pp. 9 y 10. También en él mismo, *Historia de Chile*, op. cit., Vol. II, p. 680.

sin antes asegurar éste solemnemente a sus miembros que respetaría el régimen parlamentario. El 6 de octubre el Congreso Pleno se limitó a confirmar dicha decisión. Por fin, el 23 de diciembre de 1920 se realizó la transmisión de mando y el *León de Tarapacá* asumió la Presidencia de la República envuelto en el entusiasmo casi histérico de su "querida chusma". Según las crónicas de la época, Santiago no había visto una multitud igual desde el inolvidable Desfile de la Victoria que encabezó el general Manuel Baquedano entre la Estación Central, el Palacio de La Moneda y la Catedral Metropolitana, donde se celebró el Te Deum, al regresar las tropas desde Lima. De esta forma concluyó un año decisivo de nuestra evolución política.

Las ilusiones colectivas que habían elevado a Alessandri se vieron frustradas muy pronto. La mística del *cielito lindo* no se tradujo en cambios sustanciales en el plano económico ni en el político. La anarquía parlamentaria continuó como antes, pero ahora inmersa en un clima más tenso y agrio, porque la tenaz oposición conservadora fue ciega ante la realidad. El resentimiento social, latente en tantas almas, afloró entonces con acritud. Una crisis financiera empeoró la situación, erosionando el prestigio del gobierno. Incluso "las mismas condiciones psicológicas del Presidente de la República, contribuyeron a agravar este estado de cosas. Su alma era la de un tribuno, la de un luchador, la de un hombre de protesta; en el Gobierno se encontraba fuera del centro natural de sus aptitudes. Hacía el efecto de que, aún como Jefe del Estado, continuaba siendo algo como un caudillo de la oposición. Combatía más que gobernaba. Mostrar al país que la fronda senatorial era la causa de los males que sufría y de la impotencia de la Administración, era el objeto principal de sus esfuerzos y justo es reconocer que la actitud de sus adversarios, no menos negativa, contribuyó a teñir con los colores de la verdad las protestas del Primer Mandatario".[29]

En las elecciones parlamentarias de 1921, la Alianza Liberal de Alessandri logró un triunfo abrumador en la Cámara de Diputados, especialmente por la incorporación de unos cuarenta representantes radicales, pero la Unión Nacional logró conservar su mayoría en el Senado, y desde allí buscó un objetivo puramente negativo: la ruina de Alessandri. Esta actitud cerril imposibilitó llevar adelante las reformas legislativas que con urgencia era preciso implantar para aliviar la situación social. Las siguientes elecciones parlamentarias, en marzo de 1924, fueron planteadas nuevamente como un plebiscito destinado a romper la parálisis del país. Jugándose el todo por el todo, Alessandri intervino abiertamente en la campaña electoral. Por disposición suya las autoridades provinciales utilizaron a militares en apoyo a sus candidatos, violentando la opinión popular. Los tiempos ya no estaban para tales maniobras. El escándalo fue mayúsculo. Los oficiales implicados en las correspondientes reclamaciones adujeron haber cumplido órdenes de la autoridad, sin perjuicio de lo cual tuvieron que enfrentar responsabilidades. Algunos, además de sufrir la baja de las filas, fueron detenidos y procesados sin que el gobierno los defendiera. Con tales procedimientos obtuvo la ansiada mayoría en ambas Cámaras, pero fue una victoria pírrica. Como lo señaló posteriormente el general Carlos Sáez, a cambio de tan discutible triunfo, los militares "habíamos perdido el respeto por el principio de autoridad".[30]

---

29 ALBERTO EDWARDS VIVES, op. cit., p. 220.

30 CARLOS SAEZ MORALES, *Recuerdos de un soldado*, Editorial Ercilla, Santiago, 1933, T.I, p. 67.

En ese contexto tiene razón María Teresa Covarrubias al indicar que el famoso ruido de sables es la culminación de un proceso que se venía incubando, cuyos ingredientes son "el complot de Armstrong, la guerra de don Ladislao o la inveterada queja de sueldos bajos y ascensos espúreos dentro de las filas del Ejército. Sin embargo, lo que sobresale por su trascendencia y su inmediatez es, a no dudarlo, todo el problema que se produce en torno a las elecciones parlamentarias del 2 de marzo de 1924".[31]

Apenas iniciado aquel período parlamentario, los aliancistas comenzaron a disputar entre sí. Desde La Moneda, para romper la inercia representada por las dificultades financieras que impedían pagar los sueldos de la administración, las leyes sociales atascadas en el Parlamento, el peso en vertiginosa depreciación y el sentimiento generalizado de fracaso, no se imaginó mejor medida que comprar la disciplina de las propias huestes y aplacar la oposición de los adversarios mediante el establecimiento de una dieta, institución entonces desconocida en el país y contraria al espíritu y a la letra de la Constitución. Esa dieta fue convenida, entre otros varios acuerdos, en un pacto suscrito por todos los partidos políticos y el gobierno el 1° de febrero de 1924. Como para hacerla efectiva era necesario modificar la Constitución y los plazos establecidos al efecto eran muy largos —las normas vigentes exigían su aprobación por dos congresos sucesivos— se buscó el expedito camino de una ley interpretativa. El triste espectáculo de una mayoría parlamentaria asegurada mediante una dieta, cuando al erario no le era posible cumplir con las más apremiantes obligaciones del Estado, hizo ver a muchos que la demagogia había sobrepasado los peores vicios del parlamentarismo. El sistema político, además de ineficaz, ahora ni siquiera era probo.

Entonces, mientras algunos dirigentes de la añeja oligarquía sondeaban al Alto Mando castrense, esperanzados de contar con la fuerza para terminar de una vez con el desgobierno imperante, los hechos se precipitaron en forma espontánea.

Para explicar el sentido de la intervención militar que ocurrirá en septiembre de 1924, conviene tener presente una cuestión doctrinaria de importancia capital. La razón de ser de las Fuerzas Armadas consiste en defender y conservar la comunidad nacional, para que ella pueda disponer siempre y libremente de sí misma. Su juramento de fidelidad, por tanto, les liga a la nación, que es lo esencial y permanente, no al Estado, de suyo instrumental. Por eso juran ante la bandera, que simboliza la patria de ayer, hoy y mañana; no ante el accidental texto constitucional ni mucho menos ante una persona determinada. El solemne ritual que sella su compromiso no admite dudas sobre el particular.

Pues bien, en aquellos días pocos dudaban que la comunidad nacional estaba aherrojada por un sistema que le impedía desenvolverse, lo que en el plano estatal se hacía evidente por la parálisis de las instituciones, entrampadas en un fatal empate. Como suele ocurrir en esas situaciones, sólo el Ejército, actuando en nombre del interés general como supremo árbitro, estaba en condiciones de cortar el *nudo gordiano*. Si optaba por seguir impasible, más temprano que tarde el orden social sería violentamente desbordado y la situación del país se haría incontrolable.

---

31 MARIA TERESA COVARRUBIAS, *Políticos y militares. Antecedentes históricos del quiebre entre los sectores civil y militar en la sociedad chilena 1924-1932*, Centro de Estudios del Desarrollo y Editorial Atena, Santiago, 1991, p. 21.

También es útil recordar que por entonces no se discutía la función política de las instituciones castrenses. Valentín Letelier, uno de los pilares de la intelectualidad positivista de la época y en nada un militarista, había escrito que "desde el surgimiento del Estado, del cual es un elemento orgánico pues nunca hubo ni habrá jamás Estado sin Ejército, la Fuerza Pública se organiza espontáneamente con estos dos objetivos principales y desempeña el doble papel de instrumento de victoria para mantener la independencia y medio de coacción para conservar el orden en el interior".[32]

Complementa lo anterior un rasgo sociológico. El efectivo cumplimiento de esas misiones esenciales exige a los profesionales de las armas cierto grado de distancia, de atmósfera propia, respecto al conjunto del pueblo. Por eso constituyen un grupo estamental en la sociedad, "una de las diferentes familias espirituales de la nación", ha dicho Burdeau en bella frase.[33] Pero una cosa es la natural reserva de ese grupo autónomo, lejano por temperamento y por su función de los avatares de la política partidista, y otra muy diferente, perniciosa, es que esté prácticamente aislado del resto de la comunidad. La fórmula equilibrada es, pues, *distintos pero no distantes*. Desgraciadamente, como señala Vial, en las primeras décadas de este siglo, "los valores castrenses —el profesionalismo; la rígida disciplina; el depósito de indiscutibles glorias históricas; el amor por el orden y la jerarquía; la concepción de una sociedad solidaria— parecían anacrónicos e inútiles a los sectores que hemos llamado "visibles" de la aristocracia y de la clase media. La oficialidad del Ejército, entonces, carecía de vínculos afectivos con el *establisment*..., con el que se iba y con el que llegaba, no obstante hallarse unida al segundo por el origen de clase".[34]

Así, insertos en un orden social que no les comprendía porque ya ni siquiera les conocía, en 1924 los militares eran mudos testigos del lamentable clima político y social que reinaba en el país. La parálisis legislativa y gubernativa, la administración ineficiente y corrupta, la crisis de la economía, el desprestigio de la autoridad, la frivolidad de la oligarquía, la sensación de estancamiento y escepticismo que todo lo invadía, la posibilidad cada día más cercana de un estallido popular que arrasararía con todo, traspasaban los muros de los regimientos. La situación de postración y abandono en que se consumían las capas más desprotegidas de la población les eran conocidas; no en vano educaban e instruían anualmente a miles de jóvenes conscriptos. Su propia condición económica era en extremo modesta y las expectativas profesionales muy oscuras. Con todo, lo más doloroso para ellos era palpar una de las peores características de la partitocracia: la indiferencia de los círculos políticos respecto a las necesidades militares del Estado.

Consciente del potencial político del Ejército, ya antes de ser presidente Arturo Alessandri había cultivado más allá de toda prudencia la simpatía de los hombres de armas. Y en esos afanes había sido correspondido. Bastaría recordar el episodio del Tribunal de Honor para convenir en que incluso el alto mando de la época, en su

---

32 VALENTÍN LETELIER, *Génesis del Estado y de sus instituciones fundamentales. Introducción al estudio del Derecho Público*, Cabant y Cía., Buenos Aires, 1917, p. 299.

33 GEORGES BURDEAU, *Traité de science politique, Librairie Générale de Droit et de Jurisprudence*, Paris, 1966-1977, T.III, p. 2.

34 GONZALO VIAL, op. cit., Vol. III, p. 128.

mayor parte vinculado al sector aristocrático de la sociedad, no se podía desentender del sentimiento que unía a los oficiales bajo su mando con lo que Alessandri representaba. La ardorosa promesa de un Chile nuevo había conmovido con especial fuerza a los más jóvenes del escalafón. Ilustra esta situación un recuerdo muy significativo del entonces cadete René Montero, el mismo que más tarde sería teniente ayudante del coronel Ibáñez en La Moneda: "Al volver de maniobras el curso del que yo formaba parte, en septiembre de 1920, bajo el mando del teniente Gaspar Mora, entró a Santiago cantando a voz en cuello el Cielito Lindo".[35]

Saltándose antiguas costumbres, Alessandri encomendó el Ministerio de Guerra a oficiales en servicio activo —Altamirano, Brieba, Ewing— o en retiro, como lo era Gaspar Mora en 1924, diputado y hasta poco antes capitán. Para mostrar por donde iban sus intenciones, nombró edecanes a capitanes, función que hasta entonces desempeñaban oficiales generales. Tampoco dejó de aprovechar su investidura para visitar y hablar en los cuarteles, lo que fue una completa novedad. En el regimiento Buin, el año 1921, disertó sobre el mejoramiento y adelanto que deseaba imprimir a las Fuerzas Armadas, señalando que en adelante debían cumplir "un papel importante en la vida nacional", y para ello, de "simple masa", tendrían que devenir en "organismo consciente e inteligente". Huelga decir que muchos oficiales se sintieron interpretados por tales conceptos. Su discurso en la Escuela de Caballería, el 30 de diciembre de 1923, marcó un hito. En ese santuario de la tradición castrense, junto con alabar la disciplina militar, incursionó sin tapujos en el tema más delicado. En efecto, tras referirse a las diversas reformas que era imprescindible acometer, paralizadas a su juicio sólo por la obstrucción parlamentaria, amenazó a estos últimos diciendo que "el Presidente de Chile está gastando toda la energía de que es capaz... para enseñar a los que tienen la responsabilidad de este momento histórico, la ruta que deben seguir; para pedirles, para implorarles o para imponerles la acción salvadora que evite los escollos a donde va a estrellarse la nave del Estado".[36] A ninguno de los presentes escapó que el propio Jefe del Estado, sin recato alguno, estaba invitando a una solución por medio de la espada. Hubo aplausos entusiastas, brindis, oficiales de gesto encendido... y al lado del presidente Alessandri un rostro impasible, el del dueño de casa, el mayor Carlos Ibáñez del Campo.

Un antecedente poco conocido y que ilustra el sentir militar ya próximo a irrumpir, se encuentra en la aparición el 5 de agosto de 1924 de un diario francamente revolucionario en Santiago. Su nombre era Acción. El subtítulo del mismo era un compendio programático: Diario de purificación nacional. Era obra de Vicente Huidobro, el poeta, y se financiaba principalmente por la suscripción de la oficialidad joven. Su primer número hizo un llamado destinado a tener eco apenas un mes más tarde: "Nosotros queremos demostrar que hay un grupo de jóvenes dispuestos a dejarse matar, si es necesario, por crear un Chile nuevo y grande. Un grupo de chilenos semejantes a los jóvenes turcos de Mustafá Kemal, decididos a salvar la patria cueste lo que cueste".[37] Se publicaron 16 números incendiarios antes de que a fines de ese mes fuera clausura-

35 RENE MONTERO, *Confesiones políticas*, Santiago, 1959, p. 11.
36 GONZALO VIAL, op. cit., pp. 322 y 323.
37 ENRIQUE NAVARRO BELTRÁN, "Vicente Huidobro y Acción", en Ciudad de los Césares 32(1993), pp. 12-15. La cita en pp. 12 y 13.

do por el gobierno. Pero el ideario regeneracionista se había expresado y no podía ser ya contenido. Efectivamente, había llegado la hora de la acción.

Contando ya con suficiente perspectiva, el general Sáez proporcionará una sólida visión de conjunto al señalar que "el movimiento de septiembre encontró el terreno preparado, gracias al trabajo del señor Alessandri y de la oposición. El primero se había propuesto rematar al adversario derribado el año 20. La segunda estaba empecinada en recuperar su posición. Mientras aquél preparaba la atrevida intervención (electoral) del año 24, ésta hacía tanteos para preparar un golpe militar. En estas andanzas estableció inteligencias con algunos altos jefes del Ejército y de la Armada. Tales eran los trajines de la oposición cuando la oficialidad joven, por su cuenta y riesgo, hizo sentir el ruido de sus sables en el recinto en que "los viejos del Senado" discutían plácidamente el proyecto inconstitucional de dieta parlamentaria".[38]

Bastaron ocho días para que sin disparar un tiro, actuando simplemente como fuerza que sale de su fortaleza, un puñado de oficiales pudiera cambiar por completo la escena política del país. La noche del martes 2 de septiembre de 1924, mientras el Senado celebraba su sesión para tratar el asunto de la dieta, se acomodó en las tribunas, vistiendo uniforme, un silencioso grupo de cincuenta oficiales del Ejército. Como es lógico, esa actitud de mudo reproche hirió profundamente la dignidad de los padres conscriptos. A la noche siguiente, al reanudarse la sesión, eran más de cien los militares presentes. Como el Vicepresidente del Senado les prohibiera el acceso a las tribunas, subieron a la galería. Hasta ellos llegó el ministro de Guerra, Gaspar Mora, ordenándoles retirarse. Obedecieron, arrastrando ruidosamente sus sables al abandonar el recinto. El día 4, en consejo de gabinete, se analizó lo ocurrido. El Inspector General del Ejército, general Luis Altamirano Talavera, presente en la reunión, justificó a sus oficiales y se negó a aplicar sanciones disciplinarias. Por la tarde concurrió al Club Militar y exigió serenidad a los oficiales de la guarnición allí reunidos, aceptando ponerse al frente de sus inquietudes, con lo que evitó un motín.

En la mañana del día 5, Alessandri recibió en La Moneda a un grupo de oficiales constituido en Comité Ejecutivo Militar, portadores de un memorándum con las medidas y proyectos legislativos considerados más urgentes de despachar. Ese documento lo había solicitado él mismo la noche anterior y fue redactado por el mayor Carlos Ibáñez y su ayudante, el teniente Alejandro Lazo. Aceptó sus demandas porque en gran medida coincidían con su programa de gobierno y porque vio en su resuelta postura el impulso que le permitiría cumplirlo.[39] Resultado de esta histórica entrevista fue la renuncia colectiva del gabinete, encomendándose la formación de otro en su reemplazo al general Altamirano, encargo que cumplió en el mismo día. El 6 se reunió el nuevo gabinete con los presidentes del Senado y de la Cámara de Diputados, haciéndoles ver la necesidad de sacar adelante y de inmediato las materias acordadas entre el Presidente y los militares. Sesionando el domingo 7 y el lunes 8, el Parlamento despachó sin discusión las 13 leyes que contenían las materias sociales, laborales y militares tan largamente tramitadas.

---

38 CARLOS SÁEZ MORALES, *Y así vamos...*, Editorial Ercilla, Santiago, 1938, pp. 18 y 19.

39 Las peticiones contenidas en dicho documento, en MARIA TERESA COVARRUVIAS, op. cit., pp. 63-64.

Así, con una velocidad casi vergonzosa, se satisfizo lo pactado entre Alessandri y el Comité Ejecutivo Militar. Sin embargo, éste no procedió a disolverse, declarando que continuaría funcionando "hasta terminar la depuración política y administrativa del país", lo que traducía el ideal de purificación nacional exigido desde las páginas de Acción. Esta actitud fue una estocada a fondo para el presidente. De inmediato citó al Consejo de Estado para promulgar las leyes recién aprobadas y puso en manos del general Altamirano su renuncia, solicitando autorización para abandonar el país. A las 11 de la noche de ese día lunes, dicho general le hizo entrega de un acuerdo del Comité Ejecutivo Militar, que en el intertanto había cambiado su nombre por el de Junta Militar, rogándole no insistiera en su renuncia, sin perjuicio de lo cual podría ausentarse del país solicitando el permiso correspondiente al Congreso. En la madrugada, Alessandri se asiló con su familia en la embajada de Estados Unidos. El día 9 el Senado rechazó su renuncia, otorgándole una licencia de seis meses y la autorización para salir del territorio nacional, lo que hizo al día siguiente, dirigiéndose a Buenos Aires y desde allí a Europa. Mientras tanto, en su calidad de ministro del Interior, el Inspector General del Ejército asumió la Vicepresidencia de la República.

El 11 de septiembre se organizó una Junta de Gobierno que presidió el mismo general Altamirano, integrada además por el almirante Francisco Nef y el general Juan Pablo Bennet. El mismo día se hizo público un Manifiesto al País, redactado por el capitán Oscar Fenner, que contenía el ideario de la oficialidad joven.[40] Asimismo, se publicó el decreto que declaraba disuelto el Congreso Nacional.

Una vez consumado el paso, se hizo patente que la Junta de Gobierno carecía de brújula: su mayor afán era el pronto retorno a la normalidad constitucional, aún a riesgo de perpetuar los malsanos hábitos de unas camarillas políticas ya obsoletas. Esa posición no era congruente con la de la oficialidad joven, representada por la Junta Militar que presidía el comandante Bartolomé Blanche, auténtica depositaria del espíritu que había animado al movimiento de septiembre. Había, pues, una contradicción insalvable entre la Junta de Gobierno y la Junta Militar, que funcionaban en paralelo. Los roces entre los dos organismos, uno que deseaba gobernar y otro que quería controlar su gestión velando por la integridad del Manifiesto del 11 de septiembre, no se hicieron esperar. Incluso por un determinismo generacional, la Junta de Gobierno tendía a identificarse con la posición conservadora de la Unión Nacional y la Junta Militar con los postulados de la Alianza Liberal.

La irrupción en la arena política de la oficialidad joven había sido una suerte de reacción biológica destinada a romper el dique que frenaba las aspiraciones de la mayor parte de la población, pero no tenía un programa que canalizara su acción. En otras palabras, el impulso era fuerte en sentimientos patrióticos de renovación, pero débil en planes concretos para materializarlos. Después ver fracasados sus esfuerzos tendientes a modificar la Constitución de 1833 y de intentar vanamente la formación de una nueva Junta de Gobierno, con un civil a la cabeza, la Junta Militar se disolvió el 15 de diciembre, haciendo en la oportunidad una exposición que dejó en la opinión pública la impresión de una revolución traicionada.

40 El texto del Manifiesto, en ERNESTO WURTH ROJAS, *Ibáñez, caudillo enigmático*, Editorial del Pacífico, Santiago, 1958, pp. 63-66.

Una vez más los acontecimientos se precipitaron. El 8 de enero de 1925, Ladislao Errázuriz, un hombre patriota pero genuino representante del viejo orden aristocrático, fue proclamado candidato de la Unión Nacional a la Presidencia de la República. Su camino parecía expedito pues contaba con la anuencia de la Junta de Gobierno y había desaparecido la molesta Junta Militar. Los radicales reaccionaron de inmediato, propiciando el regreso de Alessandri.

La tentativa de escamotear los ideales de la oficialidad joven —porque en el fondo de eso se trataba— abortó sorpresivamente el 23 de enero. En la tarde de ese día, tropas de la Escuela de Caballería y de los regimientos Cazadores y Pudeto rodearon La Moneda y un grupo de oficiales ingresó al palacio, arrestando al general Altamirano, al almirante Nef y al ministro de Marina, almirante Luis Gómez Carreño. De esta forma se hizo con el poder un Comité Revolucionario cuyos jefes eran los comandantes Carlos Ibáñez y Marmaduque Grove. De inmediato enviaron un telegrama al presidente Arturo Alessandri invitándole a regresar.

La importancia de este golpe de fuerza va más allá de la mera contingencia. Al interior del Ejército se tradujo en el desplazamiento del Alto Mando —todavía integrado por oficiales que habían iniciado su carrera en el Ejército Congresista de 1891— que fue reemplazado por militares formados en la escuela prusiana establecida en Chile por Körner, muchos de los cuales se habían perfeccionado en Europa, y que habían adquirido en la Academia de Guerra nociones precisas sobre lo que tanto en la paz como en la guerra debía ser un Estado moderno. Pero tal vez lo más significativo, por sus consecuencias en el largo plazo, radica en que "el golpe del 23 de enero es un momento crucial en el análisis del progresivo deterioro de las relaciones cívico-militares dentro de la sociedad chilena".[41]

El domingo 25 de enero publicó El Mercurio una declaración del teniente coronel Ibáñez, el hombre fuerte del momento, quien entre otros conceptos señalaba: "El movimiento militar tiene como única finalidad establecer un Gobierno perfectamente neutral y de administración mientras vuelve a terminar su período constitucional el Presidente Alessandri. El señor Alessandri volverá al poder, no en brazos de la Alianza ni de combinación de partido político alguno, sino de las Fuerzas Armadas nacionales y para hacer un Gobierno nacional (...) Hemos pensado en la vuelta del Presidente Alessandri, libre de todo compromiso político, como el medio más expedito de realizar estos fines que han sido los que originaron el movimiento militar de septiembre".[42] Como entonces era público que la Marina se oponía al regreso del presidente ausente y el asunto había generado una fuerte tensión entre las instituciones armadas, problema que sólo se resolvió más adelante gracias a la mediación de Agustín Edwards, este olvidado documento prueba la sincera adhesión de Ibáñez a Alessandri. También éste último le tenía gran aprecio, y en aras de esa respetuosa amistad lo mantuvo como ministro de Guerra, ya con el grado de coronel, cuando el 20 de marzo regresó al país. La ruptura vendría después, en octubre, y desde ese momento y por un cuarto de siglo las encontradas corrientes que lideraban se disputarían el poder.

---

41 MARÍA TERESA COVARRUBIAS, op. cit., p. 93.

42 Citado por FERNANDO PINTO, op. cit., pp. 132 y 133.

Alessandri estaba convencido de la necesidad de superar el sistema parlamentario que por 30 años había mostrado ser adecuado a los intereses de la oligarquía, reemplazándolo por uno claramente presidencial, al servicio de las mayorías. No era otra cosa, por lo demás, lo que deseaban los hombres de armas. En consecuencia, nuevamente instalado en La Moneda, se negó a convocar a eleciones para elegir un nuevo Congreso y gobernando con decretos-leyes se entregó a la tarea de buscar el medio más expedito para reformar la Constitución. Al efecto, el 7 de abril de 1925 designó una Comisión Consultiva, compuesta de 53 personas y más tarde ampliada a 122, representativas de todos los círculos políticos —incluso dos oficiales, el capitán Oscar Fenner y el nuevo Inspector General del Ejército, general Mariano Navarrete— para que prepararan la convocatoria y organización de una Asamblea Constituyente. En la primera de sus reuniones acordó, a instancias de Agustín Edwards y Eleodoro Yáñez, distribuir el trabajo en dos subcomisiones: una, encargada de preparar el proyecto de reformas patrocinadas por el gobierno, integrada por sólo 15 personas, y la otra, destinada al estudio del mecanismo por el cual se convocaría a la Asamblea Constituyente, es decir, la llamada a decidir en definitiva, en cuyo seno primaba el criterio de mantener el régimen parlamentario. La primera, desarrollando las ideas de Alessandri que más adelante se indican, cumplió su cometido en 35 sesiones, entre el 18 de abril y el 3 de agosto. La otra sólo se reunió tres veces y no llegó a ninguna conclusión. Así, el proyecto global fracasó porque resultó imposible acordar quiénes integrarían la codiciada Asamblea y porque todos temían que su actividad se esterilizaría mediante discusiones interminables. El propio Alessandri se inclinó entonces por una solución diferente, un plebiscito que zanjara en una sola jornada toda la controversia.

Tres eran las ideas matrices del proyecto patrocinado por el gobierno: una organización del Estado que deslindara claramente las facultades y atribuciones de los poderes ejecutivo y legislativo; tender a la centralización política y a la descentralización administrativa; garantizar la tolerancia religiosa, suprimiendo el credo oficial. Como se ha dicho anteriormente la "comisión chica", como se la llamó, acometió su tarea con notable eficiencia, correspondiendo a José Maza Fernández y Fernando Alessandri Rodríguez dar forma definitiva a sus acuerdos. La imperiosa necesidad de ir sin más trámite a un plebiscito teniendo por base el proyecto del gobierno y poner término de ese modo a los devaneos de la clase política, fue expuesta sin rodeos por el general Navarrete, el 23 de julio, a la Comisión Consultiva. A su juicio, el régimen parlamentario había significado la corrupción del Estado y el país quería ahora un gobierno fuerte, capaz de orientar su marcha. Su intervención, sobre todo por el tono que empleó, generó un pequeño escándalo; pero fue tan decisiva que Vial afirma se trata de un tercer golpe militar, asimilándola al 5 de septiembre de 1924 y al 23 de enero del año siguiente.[43]

El proyecto constitucional que traducía las ideas del presidente Alessandri fue plebiscitado el 30 de agosto. Se le opusieron prácticamente todos los partidos políticos, llamando a la abstención. De los 302.304 ciudadanos inscritos, sólo votaron 135.783, esto es, el 44,9%. De ellos, el 94% se pronunció por su aprobación. El 18 de septiembre

43 GONZALO VIAL CORREA, op. cit., vol III, pp. 543 y 544.

de 1925, en el salón rojo de La Moneda, ante el cuerpo diplomático y las principales autoridades civiles, militares y eclesiásticas del país, se lo promulgó solemnemente. Lo curioso es que muy pronto todos los partidos hicieron suyo ese texto constitucional al que se habían opuesto y todavía hoy, habiendo transcurrido tres cuartos de siglo, hay cúpulas partidistas que pugnan por reflotar sus disposiciones en el entendido de que en ellas late la única democracia posible. ¡Cosas de la política!

Para muchos católicos, y por cierto para el estamento eclesiástico, de enorme influencia en nuestra comunidad nacional, el punto más inquietante de la nueva Constitución era la separación que establecía entre la Iglesia y el Estado. La nueva relación entre los poderes temporal y espiritual ponía de manifiesto un grado de tolerancia a tono con los tiempos, pero también oficializaba la desaparición del pilar más antiguo del consenso nacional. La posición de Alessandri era realista en esto; el consenso en torno a la religión católica se había hecho añicos en el último tercio del siglo anterior, desgarrando a la sociedad en una pugna sorda entre clericales y laicistas. Ya el 20 de octubre de 1884 el Parlamento había aprobado la separación entre la Iglesia y el Estado, publicándose la ley respectiva el 4 de noviembre del mismo año. Pero esa norma, para entrar en vigencia, debía ser ratificada por el Congreso 1885-1888 y ni ese ni los posteriores lo hicieron. Ahora, cuarenta años más tarde, a pesar de las protestas de los conservadores, dicha separación era un hecho consumado puesto que había sido acordada pocos meses atrás, en Roma, por Arturo Alessandri y el Papa Pío XI. Respondía, además, a la política del Vaticano, que en ese tiempo suscribió concordatos con diversos Estados. No hubo concordato con Chile sólo a petición de su gobierno, que estimó no había tiempo para ello pues lo urgente era sacar adelante la nueva Carta Fundamental, en donde la situación quedaría resuelta al aceptarse las condiciones que al efecto exigió la Iglesia.[44] Pues bien, apenas promulgada la nueva Constitución se publicó en el Diario Ilustrado una carta pastoral, firmada por todos los obispos, en la cual se leía: "En adelante deja de reconocer el Estado, como religión oficial, a la Iglesia Católica; ciertamente, no debía esperar esto, la verdadera Iglesia, de parte de una sociedad formada y organizada por ella. (...) Aunque deplora la Iglesia, única verdadera, no hallar aquí una palabra que la distinga de las sectas religiosas falsas, debemos reconocer que, dentro del criterio de la libertad de cultos, está garantida la independencia de la potestad eclesiástica. (...) El Estado se separa de la Iglesia; pero la Iglesia no se separará del Estado y permanecerá pronta a servirlo".[45]

Constitucionalmente, el presidente Alessandri debía concluir su período en diciembre de 1925, pero a raíz de una disputa con su ministro de Guerra, el coronel Ibáñez, que pretendía presentarse como candidato a la presidencia sin por ello renunciar desde ya a su cargo ministerial, como le exigía Alessandri, éste consideró lesionadas sus prerrogativas y el 1° de octubre renunció abruptamente. No fue otro el origen de la brecha que los separó definitivamente.

Asumió entonces, como Vicepresidente, Luis Barros Borgoño, nombrado para ese efecto ministro del Interior el mismo día. Esta postrera designación tiene un matiz iróni-

---

44 Véase LUIS EUGENIO SILVA, "Iglesia y Estado", en La Segunda, 27.10.97, p. 10.

45 Diario Ilustrado, 20.9.25., p. 1.

co, dado que había sido su contrincante en las ya míticas elecciones de 1920. Ibáñez continuó ocupando la cartera de Guerra, pero renunció a una eventual candidatura, no sin antes reunirse con los presidentes de los partidos para pedirles que se pusieran de acuerdo en un nombre que fuese garantía para todos. Le hicieron caso y designaron por unanimidad a Emiliano Figueroa Larraín, quien hacía tres lustros había presidido como ocasional Primer Mandatario las festividades del Centenario. Éste, paradigma del viejo estilo, caballero y patriota como el que más, aceptó esa responsabilidad venciendo sus más íntimos deseos. A última hora surgió otra candidatura, ajena a los partidos, que improvisó un movimiento denominado Unión Social Republicana de Asalariados de Chile y llevó al médico José Santos Salas como abanderado. Obtuvo 73.833 sufragios y fue vencido por Figueroa que alcanzó 184.088. Así, aunque el representante de la actividad política oficial fue elegido sin mayor dificultad, los votos recibidos por su contendor no dejaban de ser una elocuente advertencia del descontento popular ante lo que parecía ser una maniobra cupular, destinada a hacer perdurar los viejos hábitos y las mismas personalidades en el ámbito político.

El escenario del primer ensayo de régimen presidencial bajo la Constitución de 1925 tenía graves dificultades. Para su viabilidad era indispensable superar una contradicción de fondo, a saber, conciliar sus principios teóricos con la realidad de las fuerzas sociales en pugna y con los hábitos todavía imperantes en los círculos más influyentes. Por tanto, imponer un nuevo orden, haciéndolo arraigar en el pueblo, era el desafío crucial que se debía vencer para garantizar la vigencia efectiva de la Carta Fundamental. Lejos de la retórica, como dice Edwards, "los regímenes políticos en forma no se decretan: su posibilidad depende de la existencia de elementos orgánicos vivos, y por tanto, anteriores y superiores a las constituciones escritas".[46]

Como las costumbres no se reforman con la misma facilidad que las leyes, una vez restablecido el Congreso, en 1926, las camarillas políticas muy pronto reincidieron en las prácticas que anteriormente habían llevado a su descrédito. Los parlamentarios ni siquiera se privaron de faltar el respeto a las instituciones castrenses con burlas y ataques que llegaron incluso a incitar la desobediencia de las tropas.[47]

Los meses siguientes fueron deplorables. El ánimo de fronda parecía ser un monstruo con muchas cabezas y tentáculos. Los flamantes preceptos de la Carta Fundamental no eran capaces de contener los hábitos de un pasado contumaz. Como dijo un testigo, "la indisciplina del Congreso y la inactividad del Gobierno fecundaban la inquietud del ambiente social: huelgas, incitaciones a la subversión, graves desacatos eran la óptima cosecha. Aspiraciones que encontraran atrora vibrante expresión verbal, no lograban realizarse en la práctica, creando esa insatisfacción peligrosa del bien previsto y no alcanzado. Renunciada su autonomía y olvidados sus fueros, el Ejecutivo parecía de hinojos ante el Poder anarquizante. Los Ministros de Estado iban, así, a buscar inspiración en el Congreso para la obra administrativa y política, cuya jefatura confiaba la Carta al Primer Mandatario. Y aun condicionaban al ambiente parlamentario la misma estabilidad de sus funciones".[48]

46 ALBERTO EDWARDS VIVES, op. cit., p. 252.

47 VILLALOBOS, SILVA, SILVA y ESTELLÉ, *Historia de Chile*, Editorial Universitaria, Santiago, 1974, T. IV, p. 913.

48 RENE MONTERO, *La verdad sobre Ibáñez*, Editorial Freeland, Buenos Aires, 1953, p. 21.

Nuevamente una sensación de derrota lo invadía todo. De especial gravedad se consideraba la campaña de propaganda emprendida por los comunistas en los cuarteles, lo que se sumaba a su agitación en las salitreras y la huelga de los obreros ferroviarios, también instigada por ellos. Al fin y al cabo, la permanencia misma del régimen presidencial corría peligro. En razón de su propio temperamento, Emiliano Figueroa no podía enfrentar los problemas e imponer la normalidad en el país. Cuando las cosas llegaron a un punto que no era posible seguir desconociendo, el coronel Ibáñez planteó la gravedad de la situación al Presidente de la República y le formuló verbalmente su renuncia al cargo. El hecho causó alarma pública. "El Ministro de Guerra había llegado a ser, en medio del caos y la incertidumbre generales, algo así como un símbolo de la autoridad y del progreso. Ni siquiera se concebía la existencia de un Gobierno de que él no formara parte. Su presencia en el Gobierno no tenía sólo el significado de una esperanza de afirmación y de fe en los destinos nacionales. Ella aseguraba, además, en forma rotunda y sin reservas, la disciplina del Ejército, factor que durante mucho tiempo debería aún pesar sobre las resoluciones políticas".[49]

Abrumado por las circunstancias, el 9 de febrero de 1927 Emiliano Figueroa designó ministro del Interior al coronel Ibáñez. El mismo día éste declaró: "Los momentos que vive el país no son para palabras, sino para una acción decidida y enérgica. Ha llegado la hora definitiva y de liquidación de cuentas. (...) Consecuente con lo expuesto y con firme entereza, no vacilaré, si la situación lo requiere, en asumir el máximun de las responsabilidades y atribuciones que crea necesarias para evitar el caos y asegurar el bienestar y el progreso de Chile".[50] Ibáñez, actuando con energía, en tres meses materializó la reforma administrativa de más vastas proyecciones conocida hasta entonces y logró convertir la autoridad presidencial en un hecho concreto. No obstante, a pesar del éxito obtenido por su ministro, el presidente Figueroa optó por retirarse a la vida privada, cansado de bregar con los elementos de un tiempo que no era ya el suyo. Se concedió un permiso por dos meses, enclaustrándose en su residencia de Reñaca, resignando el mando en Ibáñez, al que el 7 de abril de 1927 nombró Vicepresidente. El 4 de mayo, sin reasumir sus funciones, elevó su renuncia al Congreso. Sin duda, más que la renuncia de un hombre, era la crisis de un régimen. Al descender del solio presidencial declaró con superior dignidad: "El señor Ibáñez cuenta con la simpatía de Chile entero, convicción que me he formado leyendo la prensa de todo el país y constatando la acogida entusiasta que le han dispensado las provincias. Considero que el señor Ibáñez, en caso de ir a la elección, obtendrá el 95% de los votantes, pues reconozco su inteligencia y honradez. Me retiro, pues, confiado en que el país está en manos de un hombre que sabrá gobernarlo y guiarlo".[51]

Era, pues, ni más ni menos que el presidente saliente quien señalaba a la opinión pública el nombre de su sucesor, lo que contradice la torpe leyenda que ha pretendido mostrar a Carlos Ibáñez como un tirano advenedizo. Que la declaración de Figueroa obedecía a su real convicción quedó reforzado con un posterior juicio suyo: "En esa

---

49 Idem., p. 27.
50 Idem., pp. 41 y 42.
51 Idem., p. 100.

hora se imponía una mano fuerte para gobernar, sin contemplaciones y con elementos para imponerse, de los que yo carecía".[52]

El Vicepresidente de la República designó en la cartera de Interior al ministro de Marina, capitán de fragata Carlos Frodden, y resolvió postular a la primera magistratura. En parte de un manifiesto dirigido al país, dijo: "Tengo el convencimiento de que el único medio de regularizar la marcha de la República consiste en continuar inquebrantablemente el desarrollo del programa de gobierno que inspiró la revolución del 5 de septiembre de 1924, que yo he servido siempre con invariable lealtad y cuya realización efectiva se ha iniciado, con aplauso del país, desde que yo acepté la plenitud de las responsabilidades al hacerme cargo del ministerio del Interior". Comentado ese manifiesto, El Mercurio dijo: "El señor Ibáñez ha sido solicitado por sus ciudadanos, por la masa de la opinión pública, para que acepte que su nombre vaya a las urnas electorales. Su programa de candidato contiene todos los conceptos esenciales de las aspiraciones de la opinión pública en estos momentos".[53] Por si quedara alguna duda respecto a sus intenciones, el 21 de mayo, al terminar la cuenta que como cabeza del ejecutivo debía rendir ante el Congreso, Ibáñez expresó: "Un numeroso grupo de compatriotas impulsa mi candidatura a la Presidencia de la República en las elecciones de mañana...En nombre de los más elevados intereses de mi Patria, yo pido, yo exijo de mis conciudadanos que cooperen franca y lealmente en la obra de reconstrucción nacional en que el Ejecutivo está empeñado; y exijo más de los que mayor responsabilidad tienen ante el país. Espero esa cooperación. Pero, si por desgracia me fuere negada; si intenciones aviesas pretendieren perturbar la obra honrada del Gobierno, no omitiré sacrificios propios ni ajenos para guiar al país por la senda justa, para mantener el orden, aunque al término del período, en vez de poder declarar que me he ceñido estrictamente a las leyes, sólo pudiera afirmar, repitiendo la frase histórica: ¡Juro que he salvado la República!".[54]

A pesar de tan duras advertencias, o quizás precisamente porque traslucían una voluntad casi temeraria para realizar sin dilaciones lo que todavía quedaba por hacer, el coronel Ibáñez obtuvo 222.130 votos, esto es, el 98% de los válidamente emitidos, concurriendo a las urnas el 82% de los ciudadanos inscritos. Nunca, antes ni después, un ciudadano sería elegido Presidente de la República con ese respaldo ciudadano. Juró el cargo el 21 de julio de 1927, iniciando una de las gestiones de gobierno más fecundas de la evolución política de la nación chilena.

La metódica pero veloz reforma del Estado emprendida desde La Moneda no reflejaba sólo una administración eficiente. Su efecto era más hondo: tras el letargo de la época parlamentaria y las recientes vicisitudes, un nuevo espíritu parecía reinar en el país. Bajo la firme conducción de un soldado hasta la médula de los huesos —silencioso, austero, patriota, dotado de carácter y sentido de la autoridad— un grupo de colaboradores ajenos a las tiendas políticas renovó el impulso creador de la gestión de gobierno hasta un punto tal,

---

52 CRESCENTE DONOSO LETELIER, "Notas sobre el origen, acatamiento y desgaste del régimen presidencial 1925-1973", en Revista Historia 13 (1976), Instituto de Historia, Universidad Católica de Chile.

53 RENÉ MONTERO, *La verdad sobre Ibáñez*, op. cit., p. 106.

54 FERNANDO PINTO, op. cit., pp. 164 y 165.

que sólo es comparable con los grandes decenios del siglo anterior. Durante toda su administración la moneda mantuvo un valor estable de ocho pesos por dólar; diseñó y sacó adelante el mayor plan de obras públicas conocido a la fecha; solucionó la cuestión de límites con el Perú, que se arrastraba ya por medio siglo; perfeccionó sustancialmente la legislación social; dignificó la profesión militar y, para decirlo en una frase, contando ya con suficiente perspectiva histórica, la obra llevada a cabo por el presidente Ibáñez, representa el cambio "de mayor envergadura en la institucionalidad chilena de este siglo: la transformación del Estado en agente activo del desarrollo económico social".[55]

Con todo, es probable que el más noble homenaje rendido a la obra de este buen gobernante sea un comentario que Arturo Alessandri hizo a los historiadores Julio Heise y Guillermo Feliú, en el sentido de que a él le habría resultado imposible aplicar en 1932 la Constitución Política de 1925, a no ser por la labor de Carlos Ibáñez, que a su juicio fue "quien afianzó definitivamente a la clase media chilena".

Efectivamente, quien había personificado las ansias de renovación nacional y redención social de los jóvenes oficiales en 1924, cuyos propósitos habían tenido una primera expresión en la crucial lucha electoral de 1920, fue el encargado por el destino para culminar la transformación del consensos básico de la convivencia entre los chilenos. En adelante, el papel rector en la sociedad chilena correspondería a las capas medias de la población.

La presidencia de Ibáñez retomó el cauce constitucional. Hay que señalarlo, porque la opinión que todavía subsiste enjuicia su gestión como si hubiera sido un gobierno de facto. Como se ha visto, fue elegido de acuerdo a la normativa vigente y por la casi totalidad de los votos emitidos en la oportunidad. También puso en funcionamiento al Parlamento, cuyos miembros fueron elegidos mediante lo que se ha llamado el Congreso Termal. Contrariamente a lo que se suele creer, éste no se integró por personas designadas por Ibáñez, sino acordadas entre él y las directivas de los partidos existentes. No obstante, de esos parlamentarios saldrían posteriormente las peores y más injustas críticas a su persona y a la labor desarrollada bajo su superior conducción. En rigor, las arbitrariedades de las que se le ha acusado y que le ganaron fama de dictador —especialmente la pugna con la Corte Suprema, originada en el empeño de Ibáñez para que se tramitara con mayor rapidez un proceso que afectaba a un alto funcionario acusado de fraude al fisco— ocurrieron mientras era ministro de Emiliano Figueroa, no durante su presidencia. Al parecer, para las cúpulas partidistas, cualquiera que ejerza aquí la función pública con energía está condenado a ser tildado de dictador.

A pesar de todo lo que hizo por el progreso del país, la gestión del general Ibáñez terminó de un modo irregular. El año 1931 la repercusión de la crisis mundial desatada dos años antes en Estados Unidos se hizo extremadamente notoria en Chile, agravada como en ningún otro lugar de América por las características de su estructura económica, dado que el erario descansaba en la producción de materias primas, especialmente en la ya declinante actividad salitrera. Para enfrentar sus efectos, en julio de

55 VILLALOBOS et. al., op. cit., p. 920.

ese año se inició un plan de severa reducción del gasto público, que implicaba supresión de empleos y rebajas en los sueldos de la administración. La cesantía se convirtió pronto en el más agudo problema. Frente a esa emergencia se pidió al presidente Ibáñez, recientemente ascendido a general, la formación de un ministerio capaz de enfrentarla. Así, el 13 de julio se constituyó lo que la prensa llamó el "gabinete de salvación nacional", a cuya cabeza puso a Juan Esteban Montero. En ese espíritu, el ministro de Hacienda, Pedro Blanquier, junto con proponer un estrictísimo plan de economías, hizo una exposición sobre el estado de la hacienda pública cuyas cifras causaron alarma en la población. Desde entonces se ha sostenido que el innegable progreso material alcanzado en esos años se debió al abuso del crédito externo: pocos han reparado en que el incremento total de la deuda pública, interna y externa, en el período 1927-1930 fue sólo del 18%, en circunstancias que ese mismo aumento entre los años 1920-1924 había sido de 77%.

Al fin había llegado la ocasión que sus adversarios necesitaban. El peso moral de esa casi unanimidad de votos que le habían elevado a la primera magistratura, en nada gravitaba para una oposición que, desde los salones más reaccionarios de la capital, manipulaba hábilmente a los dirigentes de la clase media, que de un modo irracional fue puesta en contra del gobernante salido de su seno. Las manifestaciones y desmanes no se hicieron esperar. Los colegios profesionales, los gremios y los estudiantes expresaron su descontento ante las medidas restrictivas, descontento que pronto se corporizó en "el dictador Ibáñez". En las calles céntricas de Santiago se movilizó una multitud que chocó con la policía. Los incidentes, que duraron dos días, tuvieron por saldo doce muertes, entre ellas la del estudiante de medicina Jaime Pinto Riesco y la del profesor Alberto Zañartu Campino. Ante la eventualidad de verse obligado a ordenar reprimir por la fuerza estos desórdenes, a pesar de contar con la lealtad de un Ejército que sólo esperaba sus ordenes para actuar, el presidente Ibáñez prefirió renunciar. Así lo hizo el domingo 26 de julio, resignando su investidura en el presidente del Senado, no sin antes haber dictado al mayor Tobías Barros una carta de despedida a sus camaradas, explicándoles los motivos de su alejamiento del mando supremo. En esa hora triste, sentía que sólo a ellos debía dar cuenta de sus actos. Pero, luego de descargar su emoción, no autorizó que ese documento fuera publicado, temiendo que su contenido provocara una protesta que debilitaría la firmeza de la adhesión que los soldados debían al nuevo gobierno, cualquiera que éste fuese.[56]

¿Debió renunciar el presidente Ibáñez? La situación económica que enfrentaba el país era delicada, pero no desesperada ni mucho menos. Miradas las cosas con objetividad, aunque su popularidad habría resultado dañada, las medidas adoptadas por él mismo habrían bastado para equilibrar la emergencia, como de hecho ocurrió después. No estaba vencido, sino acosado por los círculos políticos. Contaba con unas Fuerzas Armadas intactas y dispuestas a respaldarlo. Quizás, en su fuero íntimo, cedió dolido por la ingratitud de sus conciudadanos. El hecho es que los mismos grupos que le derribaron, once años más tarde lo llevaron como su abanderado presidencial.

---

56 Un interesante recuerdo de esa jornada en OSCAR SALAS ELGART, "Fue el 26 de julio de 1931...", La Segunda, 24.7.97, p. 7.

Esa misma noche abandonó el país y por años vivió exiliado en Argentina. Allí buscó trabajo como cualquier anónimo ciudadano, terminando por administrar una estancia, pues carecía de fortuna personal y el Parlamento —el mismo Congreso Termal, todavía en funciones— le despojó incluso de su pensión de retiro militar. A pesar de ser solicitado frecuentemente por las agencias noticiosas, no se apartó de su deliberado silencio ni tuvo un gesto que de algún modo pudiera perjudicar los intereses de su patria. En la desgracia, seguía siendo un soldado. Regresó a Chile en 1937, cuando una amnistía se lo permitió.

Durante los años siguientes ninguna persona pudo aspirar a ser alguien en la política chilena sin exhibir una vistosa credencial, falsa o cierta, de ardiente execración sobre "la odiosa dictadura". Los más connotados enemigos del ex mandatario pasaron entonces, por derecho propio, a constituir los equipos directivos de los distintos gobiernos que en rápida sucesión detentaron el poder. Pero eso no es lo importante; lo verdaderamente significativo es que la partida de Ibáñez provocó un vacío de autoridad que hizo aflorar las fuerzas anarquizantes existentes en los diferentes grupos partidistas, e incluso al interior de las Fuerzas Armadas. En los meses siguientes se sucedieron gobiernos efímeros, casi pintorescos, a los que no fueron ajenos diversos motines ocurridos en algunos regimientos y la sublevación de la marinería en la Escuadra: explotaba así la espoleta retardada que habían armado las conspiraciones urdidas en Europa por los partidarios de Alessandri. En ese ambiente de opereta hasta se instaló una República Socialista, cuyo jefe fue Carlos Dávila. Eso era ya demasiado para la paciencia de los mandos militares y la depusieron el 14 de septiembre de 1932.

Los acontecimientos de esos meses de incertidumbre política hicieron patente, una vez más, que la estabilidad institucionalidad es imposible sin el concurso de una fuerza militar que la sostenga porque está convencida de que merece su respeto. Esta es la escueta verdad y constituye una lección. Ya lo había dicho Valentín Letelier: "Sería vano desconocer que sin el auxilio de la Fuerza Pública ningún Gobierno podría sostenerse, ni ningún Estado asegurar su permanencia. Uno y otro estarían a merced de sus enemigos de adentro".[57]

Decidido a poner término al vértigo político mediante el funcionamiento de las instituciones establecidas en la Carta Fundamental —vigente al menos en teoría— se hizo cargo de la situación el Comandante en Jefe del Ejército, general Bartolomé Blanche, quien adoptó las medidas conducentes a regularizar la situación constitucional. Dado que no había Congreso en funciones, instaló provisionalmente al presidente de la Corte Suprema, Abraham Oyanedel, como Vicepresidente de la República. Éste, dando cumplimiento al encargo que había recibido de la autoridad militar, convocó de inmediato a elecciones presidenciales y parlamentarias, las que se efectuaron en absoluta tranquilidad el 30 de octubre, sufragando 343.892 ciudadanos. Resultó electo el viejo tribuno Arturo Alessandri, quien, representando ahora a sus enemigos de la década anterior, con 187.914 votos derrotó a Marmaduque Grove, Héctor Rodríguez de la

57 LUIS GALDAMES, *Valentín Letelier y su obra. 1852-1919*, Imprenta Universitaria, Santiago, 1937, p. 717.

Sotta, Enrique Zañartu y Elías Lafferte. Asumió sus funciones el 23 de diciembre de 1932.

Desde que Arturo Alessandri abandonó La Moneda en octubre de 1925, hasta su regreso al poder en diciembre de 1932, se habían sucedido 16 gobiernos entre presidencias, vicepresidencias, presidencias provisionales y juntas ejecutivas. En este lapso se incluyen las administraciones constitucionales de Emiliano Figueroa, que duró un año y cuatro meses, la del general Carlos Ibáñez, que abarcó cuatro años, y los seis meses de Juan Esteban Montero. En el saldo, de catorce meses, hubo trece gobiernos. Fácil es comprender la desmoralización que se había apoderado de los ciudadanos cuando el general Blanche puso término a esta rotativa y las expectativas que suscitaba el retorno a la normalidad constitucional.

Con el inicio de este segundo período presidencial de Arturo Alessandri Palma se dio paso a una época de gobiernos estables y regulares, en la que se aplicó plenamente la Carta Fundamental de 1925. Sin embargo, este período de cuatro décadas no estuvo exento de algunos sobresaltos, de hechos de violencia política y de la aplicación de facultades extraordinarias por parte de las distintas presidencias, salvo la de Jorge Alessandri. A lo largo de esos años las Fuerzas Armadas —que habían sido el factor decisivo para asegurar que la nación pudiera dar el paso desde el predominio de la oligarquía al de la clase media sin que ese tránsito, ciertamente conflictivo, significara el derrumbe del Estado— se concentraron en sus tareas profesionales, con absoluta prescindencia en las luchas políticas contingentes. La pasividad de las instituciones castrenses durante esos cuarenta años no debe llevar a creer en el abandono de su altísima función política. La cumplieron sosteniendo día a día el funcionamiento del Estado y la normalidad del orden de vida de la nación. Si después llegó un día en el que nuevamente se activó su presencia, ello sólo ocurrió cuando la ruina del Estado y de la nación se hizo inminente. Entonces le retiraron su apoyo y el régimen existente cayó, pues, como es sabido, "la Fuerza Pública es una Institución primordial e indispensable al Estado; de ella depende su existencia y mantenimiento".[58]

Para concluir el estudio de esta fase de la evolución del consenso nacional chileno conviene formular, a modo de síntesis, una observación de carácter general. A pesar de la ruptura que implica la intervención militar del año 1924, y en cierto modo por virtud de sus propias características, el paso del consenso aristocrático al de clase media ocurrió como un flujo histórico, un proceso de evolución, no un quiebre dramático. Las fuerzas de la innovación y las de la reacción coexistirán durante cierto tiempo, pero la dirección del cambio será siempre hacia el fortalecimiento del nuevo consenso. De hecho, los sectores más significativos de la sociedad aceptaron los valores y modales del orden establecido, acabando por fundir sus aspiraciones en un molde liberal en lo político y progresista en lo social. En adelante, como se verá, la amenaza al consenso nacional vendrá de unas fuerzas políticas que incorporarán a la lucha partidista un elemento nuevo: la ideología.

---

58 JUAN ANTONIO IRIBARREN, *Historia del Derecho*, Editorial Nascimento, Santiago, 1932, p. 122.

CAPITULO II

LOS DESAFIOS AL CONSENSO

Hablan de paz y hacen la guerra,
se tragan el camello y cuelan el mosquito.
Las reformas que predican jamás podrán
curar los destrozos de la desunión.

San Ireneo

En el curso del tiempo, las naciones mantienen la coherencia de su flujo histórico en la misma medida en que son capaces de articular el devenir con sus consensos básicos. Los períodos de plenitud y de postración van de la mano con la vigencia de ese núcleo fundamental de valores, creencias y reglas de conducta. Por la influencia de los factores internos y externos que lo condicionan, el contenido de sus consensos va cambiando; pero si las nuevas realidades son integradas con naturalidad, la nación evoluciona permaneciendo fiel a sí misma y se presenta en la realidad histórica a través de un modo de ser o estilo propio que le diferencia de otros pueblos.

Ahora bien, el consenso de clase media alcanzado en Chile durante el primer tercio de este siglo coincidió con el advenimiento de lo que en términos sociológicos se conoce como sociedad de masas. En cierto modo es la emergente sociedad de masas, un fenómeno global del siglo XX, la que adquiere sello propio entre nosotros merced al consenso de clase media. Éste fue amenazado en los años siguientes por la desmedida fuerza que alcanzaron algunos factores políticos disolventes, a saber, la partitocracia, el sectarismo ideológico y la violencia política. Cada uno de ellos expresaba un desafío particular y, cuando se hicieron presentes de manera simultánea, el sistema político no pudo resolverlos satisfactoriamente; poco a poco fueron estrangulando la libertad de la población y generando un clima de intolerancia cuya tensión terminó por ahogar la posibilidad de una convivencia pacífica.

La gravedad que tales amenazas representaban para la estabilidad del sistema político, erosionando el consenso básico del orden social sobre el que aquél descansa, no fue percibida claramente en su día. Sólo algunas voces aisladas se alzaron para denunciar el cataclismo que producirían si no eran resueltas a tiempo, pero esas advertencias, por incómodas, fueron silenciadas. Un deber de estricta justicia obliga a consignar una excepción: Jorge Prat Echaurren. Modelo de inteligencia, patriotismo y caballerosidad, encarnó las virtudes cívicas nacionales en el molde portaliano, abogando por soluciones chilenas a los problemas chilenos. Habló de la crisis de nuestra democracia cuando muy pocos la intuían, pero fue un profeta no escuchado. Pudo ser

Presidente de la República en 1964 —y quizás con él se habría estabilizado la pendiente inclinada hacia el marxismo por la que rodaba el país— pero la partitocracia imperante estrechó filas y le dejó sin espacio. Inolvidable, por premonitoria, es la sentencia que emitió en un foro televisado en 1968: "Se advierte un vacío de poder que puede ser llenado por el Partido Comunista, única fuerza política bien disciplinada, o por las Fuerzas Armadas, que son las únicas con organización y disciplina".[1]

Merced a esta suerte de ceguera colectiva, manifestada en el conformismo resignado de la mayoría de la población, la pereza mental de los intelectuales y la máquina de propaganda alimentada por la demagogia de los partidos políticos, se fraguó un mito que durante años desorientó a la opinión pública: nuestra República era una democracia ejemplar. Se llegó a sostener por algunos politólogos extranjeros, con pretensión de verdad científica, que en 1965 Chile ocupaba el quinto lugar entre las democracias del planeta.[2] Como esa imagen estaba ampliamente extendida entre los círculos políticos, académicos y financieros de mayor influencia en el mundo, el desmoronamiento de aquella democracia apenas ocho años más tarde les resultó imposible de asimilar. Para muchos, comprender lo ocurrido habría significado contradecir unas convicciones profundamente arraigadas, aunque manifiestamente erróneas. La escueta verdad es que en Chile la rutinaria vigencia de las fórmulas democráticas encubría el progresivo enfrentamiento de dos concepciones de la vida —y por ende, también de la actividad política— antagónicas y excluyentes entre sí. Esta dramática realidad no se parecía en nada a las optimistas noticias que el proceso político irradiaba al mundo.

Para sostener la hipótesis general de este ensayo, es indispensable describir la influencia que en la destrucción de la democracia chilena tuvo la acción concatenada de la partitocracia, el sectarismo ideológico y la violencia política. Para el Alto Mando castrense, la presencia cada vez más intensa de esas amenazas constituyó un elemento capital de su forma de entender la realidad política del país. Progresivamente y con bastante independencia respecto a lo que opinaban los círculos dirigentes de los distintos partidos, los hombres de armas fueron adquiriendo conciencia del peligro que esos factores disolventes representaban para la preservación de la identidad cultural de la nación, para la sana convivencia de la población y para la vigencia misma del Estado, aspectos esenciales de lo que en razón de su función en la sociedad están llamados a defender. Llegó un momento en el que, merced al paroxismo alcanzado por dichos factores disolventes, nadie más que ellos podían impedir la destrucción de Chile. Entonces, cumpliendo su deber, intervinieron. Como lo expresara el almirante José Toribio Merino Castro en la ceremonia de constitución de la Junta de Gobierno, "hemos entrado a dirigir el destino de la Patria porque de nada sirven las Instituciones Armadas si no hay Patria". No es casual, por tanto, que el eje de la tarea política desarrollada por el general Augusto Pinochet Ugarte desde la cabeza de la función de gobierno haya consistido, justamente, en superar las tres amenazas que se analizan en

1 Sobre su ideario, véase MARIO ARNELLO ROMO, *Proceso a una democracia. El pensamiento político de Jorge Prat*, s.p.i., Santiago, 1964. La cita en JORGE ABASOLO ARAVENA, "Jorge Prat, vigencia de un pensamiento", diario El Sur, 20.12.78, p. 2.

2 WILLIAM FLANIGIN y EDWIN FOGLEMAN, "Patterns of Development and Democratization: A Quantitative Analysis", ponencia presentada a la American Political Sciencie Association en su reunión anual de 1967.

este capítulo. Esa era la condición indispensable para restaurar los consensos básicos de la comunidad nacional y, sobre esa sólida base, garantizar una nueva era de prosperidad y grandeza a los chilenos.

Ahora, con el objeto de situar tales amenazas en su contexto, resulta indispensable ofrecer previamente al menos una somera idea de lo que se entiende por sociedad de masas.

La sociedad de masas.

El marco sociológico en el que se desenvuelve la convivencia de los chilenos desde el momento en que el consenso aristocrático fuera reemplazado por el de clase media, es el de una sociedad de masas. Esto es determinante para comprender las características de la acción política en nuestro tiempo. Mario Góngora, en un lúcido ensayo, llamó la atención sobre este aspecto de la realidad al afirmar que "lo nuevo del siglo XX es precisamente la emergencia de "las masas", ya sea mirada como una rebelión contra las élites (Ortega y Gasset), ya como un correlato del predominio de la técnica sobre el "ser-sí-mismo" del hombre (Jaspers)."[3]

Si bien lo anterior es evidente, no lo es tanto en qué medida el advenimiento de la sociedad de masas supone un desafío para la convivencia en el orden de la comunidad nacional. Conviene precisar, por tanto, que constituye una amenaza en tanto late en ella una fuerza disolvente que obedece a un rasgo de fondo, de índole espiritual, extendido ahora universalmente: el predominio del materialismo práctico. Como advierte Góngora en otro de sus trabajos, "no se trata, desde luego, de la avidez de tener más, que se ha dado en todas las épocas. Se trata de que ese afán se muestra desnudamente, sin encubrirse tras de ninguna idea; pero sobre todo, en que la realidad global está animada del impulso desenfrenado de dominar la Naturaleza, para abastecer a las masas humanas en sus necesidades y sus diversiones según un régimen de producción y de consumo, mediante un modo exterior de racionalidad; pero desentendiendo toda idea de valor religioso o metafísico. La Masa no es solamente la multitud vociferante de las jornadas políticas, ni la opinión pública expresada a través de los medios de comunicación; es hoy día todo un régimen existencial de la vida humana, que impone una nivelación general, como lo presintieron hace 50 años Ortega y Gasset y, más filosóficamente, Karl Jaspers. (...) El internacionalismo técnico-económico supera hoy día los obstáculos ideológicos o de principios: las grandes preguntas giran sobre los medios, o sea sobre la técnica, ya no sobre los fines. Para un gran filósofo como Heidegger, la Técnica sería hoy la más verdadera aparición del Ser; el error contemporáneo sería el absolutizarla, sin pensar en su esencia. (...) El resultado de todo ello ha sido fatal para la individualidad; se ha producido una despersonalización. El individuo queda aislado y atomizado, pues las comunidades y comuniones tradicionales han sido destruidas por el poder masivo; las peculiaridades históricas de estamentos, pueblos y naciones tienden a desvanecerse. Desaparece la confianza en

---

3 MARIO GÓNGORA DEL CAMPO, *Ensayo histórico sobre la noción de Estado en Chile en los siglos XIX y XX*, Editorial Universitaria, Santiago, 1986, pp. 244-245.

las antiguas autoridades, dejando el paso a todas las usurpaciones. (...) La masificación del hombre y su sumisión a potencias anónimas no se da solamente en los Estados Totalitarios, como suele decirse. También la sociedad en el bloque "democrático-occidental" es coactiva, gracias a las fuerzas de la propaganda y a las diversas maneras de seducir a la opinión pública."[4]

Se ha de ver, entonces, en el predominio del materialismo práctico de la sociedad de masas, o lo que es igual, en la pérdida del sentido trascendente de la vida personal y colectiva, doblegada ante las exigencias del aquí, ahora y rápido, la auténtica razón y la fuente energética del proceso que a lo largo del siglo XX va diluyendo las formas tradicionales de la convivencia social, y entre ellas, esa comunidad de destino que es la nación.

La insatisfacción que en amplias capas de la población produjo la imposibilidad de tener el cielo en la tierra —un sentimiento que es campo fecundo para la demagogia— fue adquiriendo ribetes de frustración que llevaron a muchos hacia una intolerante actitud de voluntarismo político, cuya máxima expresión fue la violencia ejercida por unos pocos sobre una masa resignada y apática. La actitud que sirva de fundamento a ese modo de entender la convivencia social es la propia del hombre rebelde, caracterizada por Albert Camus en los siguientes términos: "¿Qué es un hombre rebelde? Un hombre que dice que no. Pero si se niega, no renuncia: es además un hombre que dice que sí desde su primer movimiento. Un esclavo, que ha recibido órdenes durante toda su vida, juzga de pronto inaceptable una nueva orden. ¿Cuál es el contenido de ese "no"? Significa, por ejemplo, "las cosas han durado demasiado", "hasta ahora, sí; en adelante, no", "vais demasiado lejos", y también "hay un límite que no pasareis". En suma, ese "no" afirma la existencia de una frontera. Vuelve a encontrarse la misma idea de límite en ese sentimiento del rebelde de que el otro "exagera", de que no extiende su derecho más allá de una frontera a partir de la cual otro derecho le hace frente y lo limita. Así, el movimiento de rebelión se apoya, al mismo tiempo, en el rechazo categórico de una intrusión juzgada intolerable y en la certidumbre confusa de un buen derecho; más exactamente, en la impresión del rebelde de que "tiene derecho a ...". [5] Ni siquiera la Iglesia escapó indemne a la presión de los hombres rebeldes, como lo demostró la aparición de la teología de la liberación. En último término, como apunta certeramente un no creyente, Martín Heidegger, frente a la enajenada desesperanza de nuestro tiempo, "sólo un dios puede salvarnos."[6]

Respecto al sistema político, dado que es tributario del espíritu que anima a la sociedad en su conjunto, una época signada por el predominio de la masa sólo puede generar un orden político también de masas. El contenido de la acción política en nuestro tiempo, en consecuencia, también tiene por eje al materialismo práctico. De ahí que las controversias doctrinarias hayan ido perdiendo importancia, cediendo su lugar a problemas de índole económica. De ahí, también, que en último término las ideologías no hayan sido juzgadas por la validez de sus principios, sino por su aptitud para garantizar el bienestar de la mayoría de la población.

---

4 MARIO GÓNDORA DEL CAMPO, "Civilización de masas y esperanza", en *Civilización de masas y otros ensayos*, Editorial Vivaria, Santiago, 1987. Las citas en pp. 97-99.

5 ALBERT CAMUS, *El hombre rebelde*, Editorial Losada, Buenos Aires, 1989, p. 17.

6 MARIO GÓNGORA, op. cit., p. 110.

En nuestra patria, la modernización del Estado emprendida por el general Carlos Ibáñez apuntó al logro de unas metas de servicio eficiente a las necesidades de la nueva clase hegemónica, que exigía el reconocimiento de sus aspiraciones. No era otro el imperativo ético que animaba los postulados del Manifiesto del 11 de septiembre de 1924, a cuyo cumplimiento se consagró como gobernante. Y como lo admitió Alessandri hidalgamente, a él se debe la creación de las bases sociales e institucionales sobre las cuales, durante cuatro décadas, el Estado actuará como motor del progreso material e integrador de los diversos sectores de la comunidad al proceso de vida de la nación. Sin embargo, a la larga, ese empeño no satisfizo las expectativas que había generado. En este sentido, una de las causas remotas del Pronunciamiento Militar del año 1973 radica que tales propósitos se desvirtuaron en el camino y lejos de madurar, frustraron el porvenir del país con la aparición de nuevos enclaves privilegiados, que debían su posición a su influencia sobre el aparato estatal, y de nuevos sectores marginales, sumidos en la ignorancia y en la extrema pobreza que es su consecuencia. Fatalmente, la suerte de ambos grupos quedó entregada a la demagogia, a la politiquería; la indiferencia de los demás hizo el resto.

Una de las consecuencias más importantes de la sociedad de masas fue el espectacular incremento del cuerpo electoral. La ley electoral de 1874 puso término al sufragio censitario y en adelante bastó saber leer y escribir para inscribirse en los registros electorales. Ahora bien, entre 1925 y 1973 la población de Chile aumentó de aproximadamente 4.000.000 a 10.000.000 de personas. Pero el electorado creció de 302.000 a 4.510.060 ciudadanos. En otras palabras, mientras en 1925 el 7,7% de la población nacional conformaba el electorado, cuatro décadas más tarde lo hacía el 44,1%. De este modo, el universo electoral había cambiado por completo y hacía imperativo un nuevo tipo de acción política, es decir, la propaganda de masas. Siendo esa la realidad, el sistema institucional diseñado en 1925 ¿podía dar respuesta a las demandas formuladas por un electorado tan vasto?

En ese contexto, donde el contenido de la noción *sociedad de masas* equivale a la potencial incorporación de la inmensa mayoría de la población al modo de vida de la clase media, conviene destacar que a pesar de los sueños de algunos teóricos —que desde su Olimpo han creído ver en el proletariado una clase con vocación mesiánica, capaz por sí mismo de redimir en esta tierra al género humano— no es difícil constatar que quienes están en esa condición sólo aspiran a dejarla y ascender en la escala social. Hasta cierto punto es conmovedora la fe que se tiene respecto al valor de la educación como vehículo de la elevación personal. Cada generación desea que sus hijos sean algo más, y ese mejor porvenir sólo puede ser sólido si descansa en una educación más completa, ojalá universitaria. Para lograrlo, los padres están dispuestos a cualquier sacrificio. La nueva aristocracia, y es éste un rasgo muy de clase media, está conformada por los títulos académicos. Nada tiene pues de extraño que en esta época lo más noble de la empresa colectiva tenga por centro la educación de las masas, reflejado durante algún tiempo en el concepto de Estado docente, y que las figuras más señeras del acontecer nacional sean, precisamente, las que se distinguen por su cultura más que por su dinero.

La solidez alcanzada por el sistema institucional chileno durante la década de los ´30 se explica, en suma, por la adhesión de las capas medias de la población. Los

partidos por entonces con mayor fuerza y raigambre, Conservador, Liberal y Radical, hicieron suyos, aunque con distinta intensidad y matiz, los intereses y el sentir de ese conglomerado social. De ahí que el estilo general de la acción política de esos años pueda ser descrito como legalista, tolerante y ajeno a cualquier devaneo ideológico.

Claro es que Arturo Alessandri, en su segunda presidencia, ya no era el ardiente agitador de antaño. Como dice Góngora, "el tribuno de 1920-1925 se había convertido, ahora, con el correr de los años, en un mandatario maduro y que mostraba la misma habilidad para manejar las relaciones con las directivas de los partidos políticos que la que poseía como diputado en el ámbito del parlamentarismo".[7] Sostenido por una combinación de partidos de centro-derecha, encabezó una gestión de gobierno que tuvo éxito en su empeño de cerrar los años de inestabilidad que una década atrás él mismo había contribuido a generar y en superar las gravísimas secuelas de la depresión mundial de 1929 que habían derribado a Ibáñez. Especialmente exitosa fue su gestión al disminuir la cesantía, problema resuelto en parte mediante la aplicación de un notable plan de construcciones que dieron forma al barrio cívico de Santiago, y al estabilizar las finanzas públicas.

Un hecho que quizás ahora puede parecer anecdótico, pero que no conviene pasar por alto para comprender la mentalidad y el estilo político de la época —de hecho, se dio algo similar en muchos sistemas políticos de masas más o menos incipientes— lo constituye la creación de la Milicia Republicana.[8] El 24 de julio de 1932, en plena República Socialista, un grupo de jóvenes profesionales y universitarios, encabezados por Eulogio Sánchez, organizó secretamente esta asociación cívica militarizada con el objeto de neutralizar las incursiones de los caudillos militares en la política contingente e imponer, incluso por las armas si era del caso, el sistema republicano y democrático de gobierno. Pronto llegó a contar con varios regimientos en Santiago y en algunas capitales provinciales, instruidos en los rudimentos del arte militar por algunos oficiales en retiro. Apenas Abraham Oyanedel fue designado Vicepresidente de la República por el general Blanche, en octubre de 1932, la Milicia salió a la luz pública, efectuando una revista de 2.000 reclutas en el fundo Lo Herrera, cerca de Nos. Cuando Arturo Alessandri triunfó en las urnas y su victoria fue reconocida por todas las fuerzas políticas, se pensó que la Milicia se disolvería al carecer ahora de razón de ser; no obstante, su jefatura decidió mantenerla y acrecentarla. Así, en los primeros meses de 1933 ya alcanzaba 30.000 efectivos y el Gobierno, considerándola un complemento de la Defensa Nacional, dispuso que se le facilitaran armas y equipos del Ejército. De este modo se prohijó en Chile, por primera vez desde el propio Estado, un instrumento militar paralelo a las tropas regulares. Para demostrar su potencia, el 7 de mayo de 1933 concentró en Santiago sus unidades de la zona central del país y 20.000 hombres, a pie y a caballo, sobrevolados por una escuadrilla de la aviación miliciana, desfilaron marcialmente frente a La Moneda ante Alessandri y sus ministros, los presi-

7 MARIO GÓNGORA, *La noción de Estado...*, op. cit., p. 237.

8 Sobre la Milicia Republicana, véase VERÓNICA VALDIVIA ORTIZ DE ZÁRATE, *La Milicia Republicana. Los civiles en armas 1932-1936*, Dirección de Bibliotecas, Archivos y Museos, Santiago, 1992, y EDMUNDO O'KINGHTTONS OCAMPO, *La Milicia Republicana: entre el Gobierno y las Fuerzas Armadas (1932-1936)*, tesis de magister, Instituto de Ciencia Política, Universidad de Chile, 1994. Se publicó en 1997 bajo el título *Milicianos, la historia olvidada.*

dentes de ambas ramas del Congreso y el presidente de la Corte Suprema. El viejo tribuno, impresionado, improvisó un discurso comparando a la Milicia con lo mejor del espíritu de la Roma antigua... Pero no se necesitaba ser demasiado agudo para comprender que una fuerza de tal tamaño y disciplina, alejada hasta entonces de cualquier posición de partido y animada sólo de fervor patriótico y republicano, en el futuro podía ser instrumentalizada con fines partidistas, lo que llevó al ministro del Interior, apenas concluído el desfile, a solicitar al presidente Alessandri su disolución. Como no fuera escuchado, renunció.

En los años posteriores la Milicia Republicana se nutrió principalmente con elementos que miraban con preocupación la importancia que iban adquiriendo, hasta en el control de las calles, las brigadas de asalto socialistas y nacistas, por lo que llegó a mostrar un tinte marcadamente derechista. De otra parte, atendido que había surgido para contener un eventual complot militar, no se podía desconocer que durante el mandato de Alesandri las Fuerzas Armadas se habían dedicado por completo a sus afanes profesionales, sin incursionar en la arena partidista, de manera que el objeto de su creación estaba cumplido. Con singular altura de miras, dado el cariz que presentaban las elecciones parlamentarias que se llevarían a cabo el 7 de marzo de 1937 y las presidenciales del año siguiente, su propia jefatura resolvió disolverla sin hacer caso a quienes aconsejaban transformarla en una fuerza política activa. Ordenada y silenciosamente, tal como había nacido, devolvió el armamento al Ejército y se licenció.

Como es natural, la existencia de la Milicia Republicana no pudo menos que irritar a las Fuerzas Armadas. Pero, miradas las cosas con mayor amplitud, no se puede dejar de tener en consideración que por entonces en muchos lugares la actividad política sufría un proceso de militarización y era frecuente la organización de núcleos jerárquicos y disciplinados, incluso con uso de uniformes y posesión de armas, en muchos partidos políticos. De otra parte, tampoco se puede desconocer que la Milicia Republicana habría sido imposible de materializar si las virtudes castrenses de la población no se hubiesen conservado a través de las significativas transformaciones que había tenido la sociedad chilena. En este sentido fue una manifestación de su vitalidad, todavía latente en diversos sectores de profesionales, empleados y estudiantes universitarios.

Cuando esa fuerza para-militar se disolvió un cambio de impredecibles consecuencias estaba larvándose en el ámbito político. El tema ya no era la opción entre gobierno civil y gobierno militar, pues el primero estaba suficientemente afianzado. Lo que ahora estaba haciéndose patente, también en Chile, era una disyuntiva que en adelante dividiría a todos los pueblos del mundo. En esos días el Diario Ilustrado daba cuenta del hecho citando en primera plana una rotunda frase de Joaquín Prieto Concha, postulante a diputado por Santiago: "Dos civilizaciones son las que se enfrentan el domingo: la mongólica feroz y sanguinaria, dirigida desde Moscú, y la cristiana que, durante veinte siglos, ha sido la cuna de la cultura y el progreso".[9] Por cierto, las cosas no eran tan simples. Se trata de una consigna electoral destinada a impresionar al electorado, pero el fondo de la cuestión planteada era verdadero. El planeta entero estaba en ebullición porque, como lo ha señalado Nolte respecto a la situación euro-

9 El Diario Ilustrado, 2.3.37.

pea de entre guerras, "desde 1917 existió un Estado y desde 1919 un partido internacional que en todas partes llamaba al 'levantamiento armado` y, por ende, a la guerra civil mundial. Puesto que evidentemente no se trataba de la fantasía de unos sectarios desprovistos de poder, entró en existencia histórica, de esa manera, una realidad fundamentalmente nueva. Al exigir un grupo poderoso la guerra civil, se crea una situación propicia para ella. (...) Un Estado que inscribe en sus estandartes el lema *guerra a los palacios y paz a las chozas* se vuelve contendiente en una guerra civil si en las naciones enemigas también existen numerosas casas, y no sólo unos cuantos palacios al lado de millones de chozas. (...) Para poder dilucidar el carácter de dicho período no basta con estudiar únicamente al fascismo en su época; es necesario examinar asimismo la condición más elemental para la existencia de éste, el bolchevismo o comunismo soviético".[10] Era justificado, entonces, el temor que provocaba la flamígera propagación del bolchevismo revolucionario. En Europa, la reacción a esa amenaza fue el fascismo; en el ámbito político chileno, como se explicará más adelante, no existió tal respuesta y su acción desquiciadora aprovechó los espacios que le brindaba la partitocracia para amplificar su influencia más allá de lo que le permitían sus propias fuerzas.

La partitocracia.

Se entiende por partitocracia el régimen de gobierno caracterizado en los hechos —es decir, con independencia de lo que dispongan las normas jurídicas— por la pretensión de los partidos políticos de eregirse en únicos depositarios legítimos de la voluntad popular. Según sus postulados, la democracia, por ejemplo, sólo será genuina en tanto los partidos controlen todos los resortes del sistema político. De ahí su empeño en influir en ámbitos institucionales que por su naturaleza y función son ajenos al mundo de los partidos, como es el caso de la judicatura y el de las Fuerzas Armadas y de Orden. Hay algo de narcisismo en todo esto; el motor de la partitocracia lo constituyen minorías que se autoconsideran selectas, dotadas en exclusiva de la capacidad para resolver los grandes temas. Olvidando que la realidad social es más amplia que la realidad política, creen posible subsumir aquélla en ésta. Por eso resulta grotesca y muchas veces torpe su incursión más allá de la esfera que le es propia. Ese error en las proporciones, en la aceptación de los límites de lo que tiene sentido en el ámbito partidista y de lo que no le concierne, desgraciadamente termina por desprestigiar a los partidos, a la actividad política y a los que la ejercen.

Refiriéndose al caso español —que muchos ven hoy en Chile como un modelo a imitar— sostiene Fernández de la Mora: "Lo que en la edad contemporánea se denomina democracia es aquél sistema en que dos o más oligarquías aspirantes recurren periódicamente —cada tres o más años— a una votación censitaria o relativamente universal para que, entre manipulaciones publicitarias, se resuelva quién va a detentar el poder. Cuando los partidos monopolizan los cauces de representación, tienden a la fusión de los poderes ejecutivo y legislativo, y se financian

---

10 ERNST NOLTE, *La guerra civil europea, 1917-1945. Nacionalsocialismo y bolchevismo*, Fondo de Cultura Económica, México, 1994, pp. 11, 12 y 14.

por la vía estatal, la democracia reviste la subespecie que suele denominarse partitocracia, y que es la establecida en España por la Constitución de 1978 y legislación complementaria". De ahí se sigue que "en los regímenes partitocráticos las posibilidades del elector quedan reducidas a un mínimo: relevar a una de las oligarquías contendientes que, sin embargo, puede continuar usufructuando los privilegios de la oposición y disponiendo del dinero público. Nada más". [11]

Ahora bien, la realidad partitocrática que dominó en Chile durante el período parlamentario (1891-1924), se proyectó en una constante porque al margen de las disposiciones constitucionales aprobadas en 1925 —de carácter marcadamente presidencialistas— el sistema político chileno siguió funcionando en la práctica de acuerdo a la lógica de los partidos, es decir, pervivieron muchas de las prácticas del ya añejo parlamentarismo.

Como se expuso en el capitulo anterior, entre los años 1924 y 1932 se produjo en Chile un cambio de régimen de gobierno, transformación que comunmente se ha interpretado como el paso del parlamentarismo al presidencialismo, esto es, a la preeminencia del Presidente de la República sobre el Parlamento, reducto tradicional de los partidos. Este cambio de régimen se habría avalado incontestablemente con el plebiscito en el que una abrumadora mayoría de ciudadanos se pronunció por la nueva Constitución; lo cual es una parte de la verdad, pues si bien ello es cierto se suele soslayar que los partidos —esto es, la clase política, la sempiterna fronda de que hablaba Edwards Vives— se opuso tenazmente a la sustitución del régimen. La realidad histórica que efectivamente emergió fue por ello bastante más ambigua que lo previsto.

En efecto, tanto el parlamentarismo que se conoció en Chile como el presidencialismo que le siguió, no se corresponden exactamente con los modelos teóricos que la doctrina ha definido por tales y cuyas vertientes doctrinarias son la Europa Occidental y los Estados Unidos, respectivamente. Entre nosotros, a fin de cuentas, ambas fueron formas del gobierno de partido. Como dice Bravo Lira, "la transición de una a otra se verificó más bien en favor de un antiguo anhelo chileno de establecer un gobierno fuerte que con el propósito de renovar el gobierno de partido. Si éste no se extinguió con el régimen parlamentario fue ante todo porque los constituyentes de 1925 se limitaron a revisar la relación presidente-Parlamento sin prestar mayor atención a la relación presidente-partidos políticos. Lo cual no impidió que los principales partidos fueran abiertamente adversos a la Constitución de 1925. Por eso ella debió ser impuesta contra su sentir mediante un plebiscito, en el que más de la mitad del electorado ni siquiera dio su voto. A lo anterior hay que añadir que el nuevo régimen de gobierno no se configuró en 1925 sino recién a partir de 1932. Y esto con el concurso de los mismos partidos que en 1925 habían rechazado la Constitución. Sólo entonces surgió el principio fundamental del nuevo régimen: la negociación entre el presidente y los partidos y cobró forma la figura institucional del presidente que lo define: un presidente en condiciones de negociar con los partidos. De modo que aquí no estamos ante una reforma constitucional que separa dos regímenes contrapuestos, sino ante algo bastante más

---

11 GONZALO FERNÁNDEZ DE LA MORA, Río *arriba* (Memorias), Editorial Planeta, Madrid, 1995, p. 284.

complejo: ante un reajuste institucional que hizo posible el restablecimiento del gobierno de partido bajo una nueva forma. Únicamente en este sentido es lícito hablar de dos regímenes de gobierno diferentes y en consecuencia, también, de dos etapas sucesivas dentro de la trayectoria del Estado constitucional chileno."[12]

Así las cosas, para comprender la desintegración del sistema democrático en Chile, debe considerarse en toda su importancia el papel de los partidos en la etapa 1932-1973. Tal como desde mediados del siglo XIX no habían necesitado una reforma constitucional para ir condicionando el rol del Presidente de la República, tampoco en el siglo siguiente se dejaron encuadrar por las nuevas fórmulas constitucionales y "a partir de la segunda restauración del Parlamento en 1932, la suerte del régimen estuvo en todo momento ligada a la de los partidos políticos. Así su estabilización entre 1932 y 1952 debe relacionarse con la preeminencia de los partidos radical y conservador, su crisis entre 1952 y 1963 con la decadencia de los mismos partidos y su descomposición entre 1963 y 1973 con la recomposición del mapa partidario sobre la base de una supremacía de la democracia cristiana y el marxismo".[13]

Con todo, el problema para la subsistencia del consenso nacional no radica en la presencia de los partidos. En cualquier democracia representativa son indispensables. A condición, claro está, que funcionen bien, que no pierdan de vista que cada uno de ellos es sólo una parte de una unidad mayor, constituida por la comunidad nacional. Y esto último es lo que no ocurría en Chile. Jorge Prat Echaurren, mirando al fondo de la cuestión, dijo lo siguiente al ser proclamado candidato presidencial por los profesionales de Santiago: "La crisis de los partidos es profunda. Tal vez comienza cuando los partidos entregaron su función a un concepto de profesión política. Comenzó primero esta crisis cuando cada partido se fue alineando con un grupo social. Un partido se confundía con los agricultores y trataba de defenderlos; otro partido se transformaba en el partido de los industriales; otro partido se transformaba en el partido de la clase media y trataba de interpretarla malamente en la Administración Pública. Dejaron de mirar al país como un conjunto, como una comunidad nacional, y comenzaron a mirarlo como parcelas de clases e intereses".[14]

Si los partidos políticos de la época hubieran funcionado mejor, tanto respecto a su orientación hacia el servicio del bien común como a su democracia interna, la situación habría sido diferente. Pero las formaciones partidistas velaban por su propio bien con olvido del interés general, y en su seno, una oligarquía desdeñosa de la opinión de la masa imponía su criterio. En consecuencia, la ciudadanía se limitaba a votar periódicamente los candidatos que esas cúpulas segregaban, pero realmente no participaba en su génesis ni en la elaboración de los programas que esgrimían. Esa brecha entre los mandarines y el pueblo provocó y reflejó, al mismo tiempo, una seria crisis en el sistema de representación popular. Como advirtió Mario Arnello en 1964, "la descomposición de los partidos políticos es un drama nacional, porque está destru-

12 BERNARDINO BRAVO LIRA, *Régimen de gobierno y partidos políticos en Chile. 1924-1973*, Editorial Jurídica de Chile, Santiago, 1978, p. 18.

13 Idem., p. 28.

14 Citado en PABLO RODRÍGUEZ GREZ, *El mito de la democracia en Chile*, Ediciones EVES, Santiago, 1985, p. 174.

yendo no sólo a los partidos mismos, sino al sistema jurídico, a la vida democrática, al sistema, a la libertad, a la capacidad de autosuficiencia que nos dieron los grandes chilenos, especialmente don Diego Portales".[15]

La insuficiencia cívica de los partidos tuvo, además, un impacto muy negativo en la conducción de los asuntos públicos porque entre los años 1932 y 1964 ningún Presidente de la República contó con el apoyo de un solo partido mayoritario en el Congreso, lo que le obligó, en cada momento, a formar coaliciones con diversas fuerzas políticas. Las transacciones de todo orden a que daban lugar estas negociaciones, por las características de los partidos, de sus ambiciones y de sus ilusiones, no hicieron sino erosionar al sistema en su conjunto, convirtiendo al Jefe del Estado en un prisionero de las cúpulas partidistas. Después, entre 1964 y 1973, tanto el Primer Mandatario como los dirigentes de los partidos en el poder fueron mediatizados por una fuerza diferente, abstracta e inmisericorde con la realidad: la ideología.

De esta suerte, si bajo el régimen parlamentario el ideal de Primer Mandatario lo constituía una personalidad neutral, alguien que no fuese una amenaza para nadie, a partir de 1932 ese ideal se cifra en su destreza para obtener la colaboración de los partidos, dueños del Congreso, lo que implica una continua deferencia hacia sus opiniones críticas y suma atención a sus apetitos. Esta nueva imagen fue encarnada sobre todo por los gobernantes radicales que sucedieron a Arturo Alessandri: Pedro Aguirre Cerda (1938-1941), Juan Antonio Ríos Morales (1942-1946), y Gabriel González Videla (1946-1952), quienes a menudo debieron transar con la mayoría opositora en el Congreso. Contrariando a sus electores, Carlos Ibáñez del Campo (1952-1958), elevado nuevamente a la primera magistradura bajo el slogan de "la escoba", destinada a barrer con los efectos de la corrupción de los partidos, esto es, la politiquería, acabó por doblegarse a sus intereses. También Jorge Alessandri Rodríguez (1958-1964) debió gobernar con mayoría opositora en el Parlamento. Su impecable adaptación a lo que políticamente era posible —entendiendo por tal el margen de maniobra permitido por la realidad partidista imperante, que le llevó, en mitad de su período, a modificar el gabinete para recibir a los radicales— le concitó el mayor de los respetos e hizo pensar a muchos que el sistema de gobierno era sumamente sólido. Esta flexibilidad que servía de lubricante al funcionamiento del régimen partitocrático, desapareció con Eduardo Frei Montalva y también fue completamente ajena al estilo de Salvador Allende Gossens, quienes no vacilaron en proclamarse ejecutores de un programa exclusivamente partidista, el suyo, sin considerar al resto del arco político ni al bien común de la sociedad.

Para mostrar cómo los dirigentes de los partidos, en la práctica, llegaron a entender que sólo a ellos concernía fijar la orientación de la acción de gobierno y que ella se circunscribía al interés de los partidos que acompañaban al Presidente de la República, o lo que es igual, cómo se tornó imposible un gobierno al servicio del interés general y permanente de la nación, bastará recordar dos declaraciones claves: en 1966 la democracia cristiana, en el poder y detentando la calidad de partido único de gobierno, se veía a sí misma como "la única alternativa democrática y compatible con la

15 MARIO ARNELLO ROMO, op. cit., p. 39.

tradición chilena"[16], por lo que a su presidente, Patricio Aylwin, le parecía natural sostener que "nuestro gobierno es un instrumento para realizar los principios del partido. Este va más allá de este gobierno. No nos agotamos en él, a menos que fracase. La orientación política de este proceso de construcción de la nueva sociedad no le corresponde al gobierno sino al partido".[17] La otra declaración, más conocida, se debe a Salvador Allende y la pronunció en la concentración de sus partidarios realizada en Valparaíso el 4 de febrero de 1971: "Yo no soy presidente del partido Socialista. Yo soy presidente de la Unidad Popular. Tampoco soy presidente de todos los chilenos. No soy un hipócrita... No soy presidente de todos los chilenos".[18]

Sin perjuicio de la consideración que La Moneda podía mostrar hacia la oligarquía de los partidos, no podía dejar de advertir que la forma abusiva en que éstos ejercían su función los convertía en un serio obstáculo a cualquier propósito de gobierno serio, capaz de conducir un proceso de desarrollo económico y social que ofreciera soluciones a los urgentes problemas que aquejaban a un vasto sector de la población. Así, no es casualidad que la ciudadanía se fuera distanciando cada vez más de los partidos —cuya militancia siempre fue exigua— ni tampoco lo es que los proyectos de reforma constitucional presentados por dos mandatarios tan diferentes como fueron Jorge Alessandri y Eduardo Frei coincidieran en la necesidad de limitar la iniciativa de los partidos en el proceso legislativo.

En una democracia representativa nadie discute la importancia de los partidos políticos. A ellos compete, en gran medida, articular la opinión pública y hacerla eficaz. Cosa distinta es su defecto, la partitocracia, que por su propia dinámica lleva al establecimiento de un país real y otro político que no se corresponden entre sí. La partitocracia es, pues, una enfermedad de la democracia representativa. Y una enfermedad soberbia: su existencia nunca es denunciada por los partidos. Claro está, si ellos son la enfermedad ¿cómo podrían pretender ser también el remedio?

Pero, en definitiva, cualquiera puede ver que las exigencias de los partidos —de sus respectivas oligarquías rectoras, en verdad— van formando una atmósfera irreal en la conducción de los asuntos públicos, una realidad ficticia, artificial, que se alimenta a sí misma con sus querellas intestinas, dejando al margen lo que a la población verdaderamente importa. Así surgen gobiernos que no están animados por un espíritu nacional, que no son capaces de mirar el conjunto, sino que se ciñen a sus propios intereses de capilla. Cuando aquello ocurre, los consensos básicos quedan entregados al arbitrio de los partidos y la unidad nacional se resiente.

En síntesis, los hábitos partitocráticos llegaron a determinar la escena política chilena —a pesar de lo previsto en la Constitución y a pesar de constituir una práctica funesta— porque aquí simplemente se ignoró que, como lo recuerda un autor

---

16 Declaración Política del Partido Demócrata Cristiano, octubre de 1966, en Política y Espíritu nº 296, octubre de 1966, p. 95.

17 PATRICIO AYLWIN AZOCAR, El Mercurio, 22.8.66, p. 31.

18 SUZANNE LABIN, *Chile: el crimen de resistir*, Ediciones Semblanza, Santiago, s/f., p. 34, afirma equivocadamente que dicha frase la dijo Allende en un discurso en Concepción.

a propósito de Winston Churchill, "la gloria de la democracia es el hombre independiente más que el hombre de partido".[19]

El sectarismo ideológico.

Con cierto candor, muchas personas imaginan que las ideologías son consustanciales a la política porque ella, en tanto actividad desplegada en la sociedad, busca materializar lo que en principio son ideas sobre el bien común o sobre un interés particular que de algún modo compromete a la agrupación social. Les desconcierta enterarse que la actividad política tiene varios milenios en su haber, en cambio las ideologías sólo un par de siglos. El punto puede servir para precisar el sentido del vocablo: dado que ellos aceptan sin chistar una pretendida relación entre ideas e ideologías, podrán comprender que es similar a la que existe entre pulmón y pulmonía.

En el sentido más comunmente aceptado, se entiende por ideología la representación que un grupo se hace de la estructura interna de la sociedad y de su situación en la misma, representación en la que se anticipan los intereses de ese grupo y que proporciona un criterio de acción. En la historia del pensamiento, la génesis de la ideología se ha rastreado hasta el medioevo, cuando Francis Bacon expuso en su Novum Organon la teoría de los ídola —imágenes falsas que proyectamos en la percepción de la realidad— descubriendo en la mentalidad imperante en la sociedad y en la tradición, eventuales fuentes de error. Pero la palabra "ideología" fue creada por Destutt de Tracy, que en 1801 la utilizó en su obra Eléments d'Ideologie con el significado de ciencia de las ideas, consistente en la investigación del origen y formación de las ideas mediante la reducción del pensar al sentir, derivando las ideas compuestas de las simples y éstas, a su vez, de las impresiones sensibles últimas. Desde entonces la ideología tuvo una proyección práctica y normativa, pues esta nueva disciplina de inmediato asumió el papel de fundamento a la actividad política y a una ciencia política que ya no se limitaría a estudiar esa típica acción humana, sino que la prefiguraría dogmáticamente. A los seguidores de De Tracy, agrupados en el Instituto, Napoleón Bonaparte les llamó peyorativamente ideólogos, viendo en sus postulados una peligrosa falsificación, resultante en último término de una actitud meramente especulativa que estaba muy lejos de concordar con la realidad política y social. En nuestro siglo, Karl Mannheim ha destacado que el desprecio napoleónico fijó el concepto moderno de ideología, al contraponer la abstracción incapaz de aprehender lo real a la actividad práctica y a la experiencia específica del político, a su juicio el único camino digno de confianza para emprender y comprender la realidad política.[20]

En ese contexto, para los que creen en la existencia de una realidad objetiva que es posible distinguir de las apariencias mediante el ejercicio de la razón —una base del conocimiento sustentada en el ámbito filosófico por Aristóteles y recreada más tarde desde la perspectiva cristiana por santo Tomás de Aquino— la conciencia ideológica es el producto de un radical autoengaño, cual es la pretensión de considerar

---

19 PHILIP GUEDALLA, *El espíritu de Inglaterra*, José Janés Editor, Barcelona, 1945, p. 22.
20 KARL MANNHEIM, *Ideología y utopía*, Fondo de Cultura Económica, México, 1941, p. 64.

como realidad social lo que sólo es su hipóstasis. Se trata, por tanto, de un extravío de la razón cuya causa última es la soberbia intelectual. Una conciencia es ideológica, en este sentido, cuando apartándose del sustrato histórico le otorga validez universal a un contenido que en rigor es proposicional. De ese modo, la idea misma de verdad, es decir, el reflejo exacto de la realidad, se torna inalcanzable y es reemplazado por categorías apriorísticas y absolutas. En otras palabras, el eco ideológico sustituye a la realidad concreta, con las consecuencias prácticas que son de imaginar.

Este curioso fenómeno se puede ejemplificar citando un conocido pasaje del prólogo a la Crítica de la Economía Política de Karl Marx: "En la producción social de su vida, los hombres contraen ciertas relaciones independientes de su voluntad, necesarias, determinadas. Estas relaciones de producción corresponden a cierto grado de desarrollo de sus fuerzas productivas materiales. La totalidad de esas relaciones forma la estructura económica de la sociedad, la base real sobre la que se levanta una superestructura jurídica y política, y a las cuales responden formas sociales y determinadas de conciencia. El modo de producción de la vida material determina, de una manera general, el proceso social, político e intelectual de la vida. No es la conciencia del hombre la que determina su existencia social, sino su existencia social la que determina su conciencia". Pues bien, sobre un punto de vista tan discutible como el citado, importante porque en algún grado contiene el núcleo del materialismo dialéctico, Lenin afirmará con la mayor seriedad que "la doctrina marxista es omnipotente porque es verdad. Es completa y armónica, y provee a los hombres de una concepción del mundo integral, irreconciliable con cualquier forma de superstición, reacción o defensa de la opresión burguesa. Es el sucesor legítimo de lo mejor que ha producido la Humanidad en el siglo XIX bajo la forma de filosofía alemana, política económica inglesa y socialismo francés".[21]

Es indudable que Marx aportó fértiles intuiciones a la interpretación de la sociedad que conoció; pero no es razonable el reduccionismo de que hace gala al incluir todo el mundo del espíritu —teorías sociales, jurídicas, políticas, religiosas, artísticas y filosóficas— entre las formas ideológicas. Sólo exceptuó a las ciencias de la naturaleza, no determinadas socialmente en su contenido, pero sí en sus fines y en sus materiales. La objeción que merece su representación de la realidad es que a fin de cuentas no hace falta apelar a una entidad metafísica que piense por encima de los individuos —según Marx no es otra la piedra sillar de toda la cadena de alienaciones que atan al hombre— para aceptar la existencia de una realidad objetiva ni para sostener que los pensamientos no pueden comprenderse debidamente si se prescinde de su vinculación con lo social.

En efecto, desde una posición filosófica más acorde con el sentido común, Max Scheler ha sostenido que "es indudable el carácter sociológico de todo saber, de todas las formas de pensar, intuir y conocer; que están condicionadas siempre y con necesidad también sociológicamente, esto es, por la estructura de la sociedad, si no el contenido de todo saber y menos aún su validez objetiva, sí al menos la elección de los objetos del saber con arreglo a las perspectivas de los intereses sociales dominantes".

---

21 VLADIMIR ILICH ULIANOV, LENIN, *The Three Souces and Three Component Parts of Marxism*. Selected Works, Vol. XI, Londres, 1939, p. 3.

Para él, la ideología constituye una reedición de los ídola, esto es, de prejuicios de clase que son superables, pues "si no hubiese realmente en el intelecto humano ninguna instancia capaz de elevarse por encima de todas las ideologías de clase y de sus perspectivas de intereses, sería ilusión todo posible conocimiento de la verdad. La clase determina en gran medida tanto el *ethos* como el modo de pensar", pero, añade, el ser humano tiene la posibilidad de superar esas inclinaciones subconscientes y condicionadas que hacen concebir al mundo de una u otra forma.[22]

Para redondear esta somera descripción del concepto ideología, también será útil considerar un matiz proporcionado por Karl Mannheim. En su obra ya citada aborda el análisis del pensamiento tal como funciona en la vida pública y en la política, es decir, en tanto instrumento de la acción colectiva. Tras recordar que las discusiones políticas fueron el campo donde por vez primera apareció la tendencia a descorrer el velo que ocultaba los motivos inconscientes del pensamiento de cualquier grupo, provenientes de la situación concreta que ocupa en la sociedad, señala que es preciso reconocer la existencia de factores existenciales que "influyen no sólo en la génesis de las ideas, sino que penetran en sus formas y en su contenido, y sí, además, determinan de un modo decisivo el alcance y la intensidad de nuestra experiencia y de nuestra observación". De ahí surgen dos nociones importantes: una es la ideología, donde su nota distintiva radica en que "los grupos dominantes pueden estar ligados en su pensamiento a los intereses de una situación que, sencillamente, son incapaces de percibir ciertos hechos que vendrían a destruir su sentido de dominación". La otra es la utopía, "que hace referencia al hecho de que los grupos oprimidos están tan intelectualmente interesados en la destrucción del orden vigente, que sólo perciben aquellos elementos de la situación que tienden a negarlo". Siguiendo a este autor, la ideología puede ser parcial o total. La primera supone la consideración de las ideas del adversario como un disfraz más o menos consciente de la verdadera naturaleza de una situación política, cuyo reconocimiento perjudicaría sus intereses. La ideología total, en cambio, implica atribuir una absoluta estructura del espíritu de un grupo o categoría social.[23]

Por el enorme potencial que representa la aparición de la mentalidad ideológica —y muy pronto su predominio— para concitar la movilización política, no podía menos que remecer al sistema político que conocemos por democracia liberal. Por la sola fuerza que las ideologías tienen como condensación muy simple y compacta de los idearios de los partidos, cabe advertir un significativo paralelismo entre su transformación y la del sujeto de la democracia, esto es, del pueblo que debe vivirla. La democracia liberal siempre se consideró como una manifestación política del ciudadano, de aquel hombre que por moderno aspiraba a realizarse desde la razón. El pueblo de ciudadanos era entonces, por definición, capaz de superar intereses y prejuicios para encontrarse en un grado superior de homogeneidad, cuya expresión más alta es la nación. Sin embargo, como se ha explicado antes, uno de los rasgos constitutivos de este siglo es el generalizado reemplazo del ciudadano por el tipo humano que Ortega y Gasset denominó hombre-masa. Y este nuevo personaje de la democracia,

---

22 MAX SCHELER, *Sociología del saber*, Editorial Cultura, Buenos Aires, 1936, pp. 58 y 203.

23 KARL MANNHEIM, op. cit., pp. 234 y 235.

materialista y carente de relieve personal, es el que alienta con gritos y aplausos el permanente ensanchamiento de la esfera vital sujeta a la discusión y a la actividad política. Correlativamente, las ideologías se vuelven totalitarias, es decir, pretenden dar respuesta a todos los problemas humanos, con lo que se convierten para el hombre-masa en una oportunidad para evadirse, sacando el centro de gravedad fuera de sí mismo. Ese es el drama, pero, ¿cómo podría lamentar éste la injerencia de esas fórmulas preconcebidas en un dominio que no es para él resguardo de una individualidad estimada? ¿Cómo podría resistir, si se considera parte de un hormiguero, la tentación de ser no tan sólo guiado, sino incluso modelado por la ideología encarnada en un partido político? ¿No es acaso la ideología una manera de compensar su condición desvalida y así poder sentirse parte del cauce de la historia?

En una época que ha perdido la fe de sus mayores, el predominio de la mentalidad ideológica ha procurado a muchos hombres sensibles un sucedáneo a su necesidad de absoluto; por eso se la suele sindicar de religión sin Dios. En rigor, en ese nivel sería más adecuado referirse a ella como una herejía, dado que su forma se corresponde exactamente con la antigua gnosis. Y al hombre-masa, más tosco, le ha brindado la sensación de compartir un secreto mágico, un filtro que explica con sencillez lo que sucede en su contorno. Pero las razones ideológicas no son tales, sino más bien simples recetas de aplicación mecánica. Como dice Alain Besançon, "la ideología nos aparece como el espectro en busca de un cuerpo donde alojarse, como un ensayo fracasado de encarnación".[24]

Como es sabido, el dogmatismo en la adhesión a una creencia está en razón inversa a la autenticidad de la misma. Quizás por ello, la consecuencia inmediata que es dable percibir en los espíritus contaminados por el fervor ideológico es la pérdida de la tolerancia, una virtud esencial para la sana convivencia. Sólo una persona muy segura de sí misma —del valor de sus convicciones y del lugar que ocupa en la sociedad— puede ser tolerante. El hombre-masa, que sufre un desarraigo vital, puede creer que compensa su débil sentido de la propia vida al integrarse a esos partidos de voluntad férrea que hacen valer arrogantemente un conjunto de exigencias que para ellos no representan su verdad, sino la verdad. Así, armados con la certeza de poseer la verdad absoluta —en un plano terrenal, se entiende, ya que cualquier metafísica es rechazada como un engaño que enmascara la realidad y a lo más, conceden, ha sido inventada por el hombre para procurarse consuelo— sus posiciones políticas se tornan sectarias, intransigentes y, en último término, violentas. Lo paradójico es que junto con rechazar de plano, sin discusión posible, cualquier argumentación de un adversario —cuya sola existencia es un insulto— exigen para sí la tolerancia respecto a sus propias convicciones. Como se comprenderá, este estilo demuele la vieja noción que concebía a la política como un arte de lo posible. La política se transforma en un imperativo absoluto —todo es político dirá Lenin y más tarde lo repetirá Gramsci— que sólo puede satisfacerse con la imposición del postulado ideológico en cuestión, y si es necesario, con el aniquilamiento moral e incluso físico del contrincante. Así las cosas, la problemática de la

24 ALAIN BESANÇON, *Breve tratado de sovietología*, Rialp, Madrid, 1977, p. 184.

democracia contemporánea no puede soslayar la vigencia de la ideología, que es sin duda, en el terreno práctico, contraria al pluralismo liberal.

Respecto al Estado, cuando la ideología predominante en su seno es de carácter total, desfigura su más tradicional esencia. La máxima expresión política de la modernidad —esa época de la cultura europea que tiene ya cinco siglos, caracterizada por el racionalismo y la secularización que es su consecuencia— ha sido el Estado nacional. El núcleo existencial de la unidad política soberana propia de la modernidad es, pues, una estructura de poder temporal iluminada por la razón, cuya justificación última y definitiva es el bien común de la nación que cobija. Para decirlo en palabras de Juan Pablo II, "la razón de ser del Estado es la soberanía de la sociedad, de la nación, de la patria".[25] Ahora bien, en relación al Estado, las ideologías parciales se limitan a interpretar el interés nacional en función de sus postulados, pero las ideologías totales, en cambio, desplazan a esa unidad de convivencia real, concreta, histórica, ocupando abusivamente su lugar. Las personas, entonces, dejan de ser consideradas como tales y son tratadas como una abstracción, un número, una masa a la que se puede manipular. Por eso, cuando ello ocurre, el principal objetivo de la vida cívica deja de ser garantizar la concordia y la seguridad de los ciudadanos, propósitos que ceden en beneficio del cumplimiento del imperativo ideológico. En el caso del marxismo, el Estado se convierte en instrumento de opresión porque su meta es aplastar a las clases sociales no proletarias y, como el único depositario de esa misión es el grupo revolucionario que se autoasigna dicho papel, la vanguardia, el Partido Comunista, el Estado deviene en Estado-Partido, cuyos fines se identifican. De ahí que la irrupción de la Unión Soviética en el concierto internacional no haya significado la aparición de un Estado más, sino la de una entidad de naturaleza diferente, en guerra permanente con todos los otros y encaminada a subyugarlos porque es inherente al marxismo una vocación universal, dimensión que en términos políticos se traduce en un nuevo tipo de imperialismo.

Esta larga exposición ha sido necesaria para situar en sus coordenadas intelectuales lo que ocurrió en Chile, pues aquí, como se verá, la presencia de una ideología parcial, encarnada en la democracia cristiana, y de otra total, el marxismo-leninismo, como quizás ningún otro factor contribuyeron a destruir los consensos básicos de la nación y, en consecuencia, a hacer imposible la convivencia social y la democracia política.

Conviene apuntar desde ya que la amenaza del sectarismo ideológico al consenso básico de la sociedad chilena es inseparable del fenómeno partitocrático. Cuando el sistema de partidos fue dominado por formaciones de carácter ideológico, las tensiones sociales y políticas provocadas por su actuar dogmático adquirieron una intensidad que resultó traumático para la evolución del orden político chileno.

En efecto, los partidos políticos más importantes de los años ´30 y ´40 —Conservador, Liberal y Radical— tanto en su espíritu como en su estructura tenían un marcado acento parlamentario. Se trata de agrupaciones políticas cuyos rasgos calzan con lo que en doctrina se conoce por partidos de opinión, es decir, aquellos cuyo núcleo de convicciones consiste apenas en ciertos principios generales que son aplicados en la práctica

---

25 JUAN PABLO II, Discurso a las autoridades civiles en Varsovia con ocasión de su primer viaje pastoral a Polonia, 2.6.79.

según las exigencias del momento y con bastante flexibilidad. Ante cada coyuntura concreta debaten, negocian y adquieren un compromiso, primero al interior de ellos mismos en asambleas y luego con las fuerzas afines mediante el acuerdo de sus dirigentes. Fieles a ese estilo, "las grandes figuras de estos partidos son hombres de acción, maestros en el arte de sacar ventajas de las circunstancias, de salir del paso, de enfrentar toda suerte de cuestiones concretas mediante manejos y componendas materializados en ventajas tangibles para la causa que el partido representa. Los mentores de estos partidos son, en general, polemistas, maestros en el arte de expresar con brillo lo que los circunstantes ya saben y desean oír, antes que ideólogos; maestros en el arte de deslumbrar a un auditorio con planteamientos atrevidos, sugerentes, originales, en una palabra: novedosos". Estos partidos, "rechazan como contrario a la razón el choque, la violencia, la imposición y, por lo tanto, las actitudes extremas. Dramatizan sobre los principios en juego, pero no buscan eliminar al contendiente. No buscan aplastar al adversario sino entenderse con él".[26] No se puede decir que ese tipo de actividad política posea una grandeza heroica, sin embargo, en su favor sí se debe afirmar que por lo moderado de sus designios, en tanto el conjunto de los partidos monopolice las convicciones más extendidas en la sociedad, permite asegurar al sistema político un funcionamiento estable. Así, los partidos que con mayor vigor se habían opuesto a la reforma constitucional de 1925, a la postre resultaron ser su mejor soporte.

A partir de los años ´50, el desvanecimiento del estilo de la acción política inherente a los partidos de opinión fue de la mano con la progresiva pérdida de importancia de las fuerzas que lo habían encarnado. En este orden de consideraciones conviene señalar que la crisis de los partidos tradicionales no es ajena a la persistencia de tres debilidades de antigua data. La primera es el pequeño número de sus militantes en relación al total del electorado, pues nunca lograron una adhesión significativa en torno a sus postulados ni vencer la indiferencia de la masa, que se limitó a participar tranquilamente en los actos electorales escogiendo en cada caso lo que le parecía el mal menor. La segunda consiste en el pase y la orden de partido, es decir, en la autorización previa que el partido debe otorgar a cualquier militante cuyo concurso haya sido solicitado para asumir una responsabilidad de Estado y la votación en bloque de los parlamentarios cuando el partido lo ordena, aunque ello contraríe la íntima convicción de los representantes elegidos por la ciudadanía. El tercero, vinculado al anterior, se expresa en el desdeñoso alejamiento de los asuntos públicos por parte de los mejores talentos, porque el temperamento independiente repele dichas prácticas y el carácter constructivo no se condice con la mediocridad de una actividad que tiende a alimentarse a sí misma con discusiones intrascendentes, mientras evita cuidadosamente abordar los grandes desafíos nacionales. En palabras de Bravo Lira, "entre sus militantes sobran los que viven del partido, quienes ven en él una palanca para abrirse camino en la vida. Faltan, en cambio, figuras de talento, espíritus constructivos, eficaces, realizadores".[27]

El sectarismo de las cúpulas políticas llevó a distorsionar el sentir de las grandes mayorías. Por ejemplo, en las elecciones presidenciales de 1946, en una actitud inexpli-

---

26 BERNARDINO BRAVO LIRA, op.cit., pp. 57 y 58.

27 Idem., p. 64.

cable a la luz de los principios que compartían, los partidos de derecha fueron divididos en dos candidaturas; aunque sumadas obtuvieron más votos que Gabriel González Videla —que aunaba un amplio espectro, desde radicales a comunistas— este último se alzó con el triunfo. Evidentemente un sistema partitocrático y politiquero a ese extremo no podía ser bien evaluado si se le medía con la vara de la democracia y la opinión pública comenzó a mostrar síntomas de hastío. En ese movimiento de repudio generalizado a todas las tiendas políticas, las elecciones presidenciales de 1952 tuvieron enorme significación. Con una sencilla escoba por divisa —doméstico utensilio que simbolizaba el anhelo de barrer la politiquería— el general Ibáñez se impuso a pesar de no contar con el apoyo de ninguno de los grandes partidos, logrando el 46 % de los votos emitidos. A partir de ese momento y hasta el año 1970, la influencia de los partidos en la nominación de candidatos presidenciales se eclipsa, pasando a primer plano la personalidad del mismo; aunque se trate de hombres de partido, como en los casos de Eduardo Frei, Radomiro Tomic y Salvador Allende, o bien sea alguien independiente, como ocurre con Jorge Alessandri. Esta pérdida de gravitación de los partidos en favor de las condiciones personales del candidato es, hasta cierto punto, un retorno al caudillismo, a la búsqueda por la masa del hombre del destino. En 1953 la consigna será un Congreso para Ibáñez y en 1965 lo mismo para Frei. A nadie se le ocurrió soñar con un Parlamento para Chile.

El espacio abandonado por los partidos de viejo cuño fue ocupado por formaciones animadas de un espíritu extraño a la tradición nacional: el ideológico. Así, entre 1963 y 1973 —la década revolucionaria— la escena política tendrá por principales protagonistas a dos fuerzas ideológicas que en cuanto tales presentan rasgos comunes, la democracia cristiana y al marxismo. En cualquier caso, eran muy distintos a los radicales, conservadores y liberales que entre 1932 y 1953 ocuparon una posición análoga.

Tiene razón Bravo Lira al afirmar que "los nuevos partidos reflejan en su actitud y actuación su verdadero carácter. Difieren de los antiguos en que su fundamento en una ideología y no una red de relaciones y contactos entre hombres de temperamento y convicciones afines. Antes que militantes para el partido, buscan adeptos para una ideología. Por eso lo personal está en todo momento subordinado a lo ideológico. Este carácter del partido sobrevive a todos los cambios y adaptaciones de sus programas y a todas las mudanzas y alteraciones del núcleo que lo encabeza. El papel y la significación de la ideología son siempre los mismos, cualesquiera sean su contenido y sus portadores. Ella suministra su fundamento último a la posición de los dirigentes dentro del partido y a la posición del partido dentro de la sociedad. Su fuerza institucional radica en una identificación de la propia ideología con los intereses del pueblo, de la comunidad o incluso de la humanidad entera que convierte automáticamente a sus depositarios en guía del partido y al partido en guía del pueblo, de la comunidad o en un movimiento en el que de algún modo participa toda la humanidad. En este sentido nada tiene de casual que los nuevos partidos sean aconfesionales o ateos, ni que se autodenominen populares, al tiempo que proclaman representar precisamente a una parte de la población, nunca a su totalidad, como es el caso de los trabajadores, los asalariados, la clase obrera o el proletariado".[28]

---

28 Idem., p. 76.

Comparten también los partidos ideológicos la aceptación del rol mesiánico de una minoría rectora y el sentido total de la política. En la cúspide de los antiguos partidos de opinión había, ciertamente, una oligarquía dirigente; pero ellos no conocieron la entronización de un grupo de iniciados en esa función, únicos depositarios del auténtico sentido que en cada momento, de acuerdo a misteriosos designios, va develando el dogma ideológico. Tal pretensión les habría causado risa. Las capillas ideológicas, en cambio, con la mayor seriedad, creen ser portadoras de un mensaje cuya validez no se limita al estrecho límite de las fronteras nacionales ni se compadece necesariamente con las realidades concretas en que se debe aplicar. A ellos concierne, como minoría escogida, guiar las cosas a la altura de los tiempos, no quedarse atrás, dar alcance a las corrientes extranjeras que estiman más avanzadas y asumir su representación entre los nativos. Gastarse en la solución de los problemas del país les parecerá, por tanto, una política chata, sin horizontes, sin proyecciones. De ahí que no reconozcan a la nación como objeto esencial de la actividad pública. De ahí, también que, convencidos de la superioridad que les confiere su ideología —aunque ésta sea vaga e incluso aunque no la conozcan bien— posean un acusado sentido de misión, detrás del cual late una visión total de la política, esto es, la ambición de encuadrar en sus categorías no sólo a la acción política, sino también a lo social, lo económico, lo cultural y lo moral. Para ellos, toda expresión de la vida individual y colectiva debe someterse al imperativo político. "Esta visión trascendental de la política que anima a democratacristianos y marxistas se debe fundalmentamente a la procedencia de sus grupos rectores que son, a la vez, creadores y alma de su partido".[29]

Por cierto, escapa a los límites de este ensayo describir la evolución de los partidos Demócrata Cristiano, Socialista y Comunista, principales formaciones ideológicas del arco político chileno. Tampoco es el lugar adecuado para indagar en la personalidad de sus líderes la explicación de las complejas maniobras que les llevaron al poder, aunque esas biografías podrían señalar con precisión la razón de su fracaso en tanto ejecutores de las corrientes ideológicas que servían; cosa por cierto distinta al éxito que hayan podido alcanzar como abanderados de una máquina destinada a conquistar el poder. Con todo, es preciso fijar algunos hechos y actitudes que sí resultan pertinentes para determinar la influencia de las ideologías que sustentaron respecto al quiebre de los consensos básicos de la nación chilena.

Ideología y poder en la democracia cristiana.

Hay dos cuerdas que se trenzan y forman lo que ha sido la trayectoria de la democracia cristiana en Chile. Una es su afán por definirse ideológicamente, por establecer nítidamente lo que en realidad es, por explicarse a sí misma y comunicar a los demás el fondo de sus convicciones. En esta ardua tarea, a lo largo del tiempo le ha sido imposible alcanzar un resultado satisfactorio. La otra es el esfuerzo encaminado a que sus postulados ideológicos sean respaldados por los votos de los ciudadanos, es decir, su peripecia electoral hacia el poder. En este aspecto, tras veinte años de una presencia

29 Idem., p. 74.

casi testimonial en el sistema de partidos, creció súbitamente y afianzó un protagonismo que sólo se puede calificar de notable.[30]

En cuanto a su ideología, si alguna palabra retrata perfectamente a la democracia cristiana chilena no es el hermetismo, como antaño se sosteía, sino la ambiguedad. Nunca ha podido esclarecer aquello en que cree más allá de la contingencia inmediata y sin embargo ciertas constantes laten tras cada una de sus decisiones importantes. Hasta su misma designación resulta equívoca, una suerte de alcance de nombre, aunque sea todo un acierto desde el punto de vista propagandístico. De hecho, muchas personas demócratas y cristianas se ofenderían si se les considerase en sus filas. Además, como es sabido, su mentor doctrinario de mayor prestigio intelectual, Jacques Maritain, afirmó que no se sentía interpretado por la democracia cristiana en tanto fuerza política capaz de hacer efectiva lo que él llamó una nueva cristiandad. Y qué decir, entonces, del partido que luce ese nombre en Chile, dado que las diferencias con sus congéneres del viejo mundo —Alemania e Italia— son enormes: allá representan a la derecha, acá se encuadra en la izquierda. Ello, claro está, exclusivamente en el sentido político de esa clasificación convencional, porque en cuanto al estilo y aspiraciones que informan la vida social de su élite no hay mayor diferencia entre ambas realidades.

Su progresiva indefinición —desde la coherencia de ideas y acción que le proporcionó el corporativismo en los años ´30 hasta que llegó a ser un partido de opinión en los ´90— es una característica turbadora porque va más allá de la capacidad de adaptación que todos los partidos tienen para no perder posiciones en el movedizo escenario de la acción política mundial y nacional. A medida que fue acogiendo sincréticamente contenidos ideológicos dificilmente compatibles entre sí, su expresión doctrinaria se fue haciendo más y más ambigua hasta extinguirse por completo. Así, el lugar ocupado antes por ideales nobles y aguda especulación intelectual fue llenado con la fría lógica del poder. Pero el ejercicio de ese poder, al estar despojado de un sustento propiamente cultural, no pudo sino quedar al servicio de las banderas de otras formaciones más consistentes en este campo. Esa es su situación actual.

La matriz de lo que llegaría a ser el partido Demócrata Cristiano fue la Asociación de Estudiantes Católicos (ANEC), fundada en 1915 por el presbítero Julio Restat con el propósito de ofrecer una sólida formación cristiana e interesar en el apostolado social a los estudiantes de las universidades Católica y de Chile.[31] En 1928 se hizo cargo de la asociación el sacerdote Oscar Larson, quien venía llegando de Lovaina, donde se había especialidado en sociología. El la revitalizó, transformándola en una rama de la Acción Católica y creando en algunas facultades Círculos de Estudio que debatían los temas teológicos y culturales que sirven de fundamento al pensamiento socialcristiano. Se publicó por entonces, 1931, la encíclica Quadragesimo anno, con la que Pío XI renovaba la

30 Tres obras en que ambos aspectos son tratados ampliamente, GEORGE GRAYSON, *El Partido Demócrata Cristiano Chileno*, Editorial Francisco de Aguirre, Buenos Aires, 1968; FRANCISCO JAVIER GONZÁLEZ ERRÁZURIZ, *Partido Demócrata Cristiano. La lucha por definirse*, Ediciones Universitarias de Valparaíso, Valparaíso, 1989; MANUEL FUENTES W., *El PDC en Chile*, Ediciones ECOS, Santiago, 1985. Sobre los hombres de esa tendencia, véase FERNANDO CASTILLO INFANTE, *La flecha roja*, Editorial Francisco de Aguirre, Santiago, 1997.

31 Véase OSCAR LARSON, *La ANEC y la Democracia Cristiana*, Ediciones Ráfaga, Santiago, 1967.

doctrina social de la Iglesia y advertía sobre los peligros de la tentadora atracción que ejercía el comunismo en ese campo, señalando sin dejar lugar a equívocos: "El comunismo pretende por todos los medios, aun los más violentos, dos cosas: la lucha de clases encarnizada y la desaparición completa de la propiedad privada. Para conseguirlo, nada hay a lo que no se atreva, ni nada que respete". Ese fue el clima intelectual y ético que reunió a los jóvenes Bernardo Leighton, Ignacio Palma, William Thayer, Eduardo Hamilton, Julio Lagarrigue, Fidel Araneda, Manuel Antonio Garretón, Alejandro Silva Bascuñán y Eduardo Frei. Este último, en 1932, fue elegido presidente de la asociación y un año más tarde, junto a Garretón y al padre Larson, concurrió en Roma a la primera reunión de las Asociaciones Universitarias Católicas de Hispanoamérica. Les admiró lo que vieron en la Italia fascista —patriotismo entusiasta, sentido de misión histórica, progreso popular— y esa influencia se reflejará más tarde en el estilo y en la doctrina que adoptará la Falange.

Aunque los Círculos y la propia Asociación de Estudiante Católicos carecían de móvil político y asumían el problema social desde un ángulo puramente religioso, sus miembros compartían "una actitud crítica a los partidos políticos. A unos por su débil estructura ideológica, y a otros, porque habían doblado la cabeza ante la dictadura del general Ibáñez."[32] El patriarca del conservantismo, Rafael Luis Gumucio, buscando fortalecer la juventud de su partido, supo atraerlos. Algunos, como Julio Philippi y Jaime Eyzaguirre, prefirieron quedar al margen. El grupo, que en 1933 se integró a la Juventud Conservadora mantuvo, no obstante, una fisonomía propia. "Decidimos el ingreso al Partido Conservador, pero manteníamos toda nuestra independencia y autonomía, y sin otros estatutos que los nuestros. Absoluta libertad ideológica y una acción solamente planteada por nosotros".[33]Su ideario fue quedando consignado en el periódico Lircay, fundado en 1934. Creían absolutamente necesario hacer cambios profundos en la sociedad, superando la lucha de clases y el liberalismo económico mediante la colaboración que resulta del espíritu cristiano y una eficiente organización social. En concreto, aspiraban a un gobierno fuerte, autoritario, al estilo portaliano, por "encima de los intereses de grupos y partidos" y con "una concepción católica de la política. (...) Chile fue durante años un modelo de organización política. Las virtudes de la Hispanidad se encarnaron en nuestra Patria como en ningún otro pueblo americano. Y se forjó una personalidad definida y grande. Fuimos respetables y respetados. Pero aquello se interrumpió. A medida que se fueron debilitando las virtudes que habían sido el alma de nuestra grandeza, vimos debilitarse nuestras instituciones. (...) La juventud chilena debe incorporarse a la tarea de volver a Chile al cauce de su corriente histórica".[34]

Para materializar tan ardientes ideales era preciso crear un orden nuevo y en concordancia con el tono épico de José Antonio Primo de Rivera, Eduardo Frei escribía: "La Falange representa todo el espíritu heroico que anima a nuestra juventud y concreta la forma guerrera, jerárquica, disciplinada con que haremos realidad la única revolución nacional, auténticamente chilena, para dar al país un Orden Nuevo".[35] Consecuencialmente, la Falange Nacional invitaba a formar un Estado corporativo ins-

---

32 EDUARDO FREI MONTALVA, entrevista a Ercilla, 27.7.66, p. 20.

33 Idem.

34 Circular "A la Juventud Chilena", 26.7.35. Entre otros, la firman Bernardo Leighton y Radomiro Tomic.

35 EDUARDO FREI MONTALVA, El Tarapacá, 4.3.37.

pirado en "una democracia orgánica autoritaria a la vez que respetuosa de la libertad". Por entonces sostenía que no había relación directa entre democracia y sufragio universal: "La caprichosa voluntad de la mayoría" no era la base de las instituciones, pues "los grupos profesionales, científicos, sindicales o religiosos, deben tener como tales una representación efectiva y proporcional. De esta manera se transforma el Estado en un órgano que expresa con exactitud los anhelos de la colectividad —puesto al servicio de cada persona— porque por medio de una representación más orgánica, el ciudadano controla mejor que nunca al gobernante".[36]

Más tarde, cuando los signos de los tiempos fueron modificados por el desenlace de la Segunda Guerra Mundial, la búsqueda se orientó hacia un derrotero diferente, cada vez más hacia la izquierda. Avanzando en esa dirección dos jóvenes falangistas, Jacques Chonchol y Julio Silva Solar, publicaron un libro donde explicaban por qué era urgente abolir el sistema capitalista: "El capital viene chorreando sangre y lodo por todos los poros, desde los pies a la cabeza".[37] Esa debía ser, a juicio de sus autores, la actitud básica de una política social cristiana. En el mismo año, Silva Solar publicó otra obra tratando de conciliar algunas tesis de Marx con la doctrina cristiana, como por ejemplo, "la crítica de Marx al sistema de propiedad capitalista o burgués no envuelve de ningún modo el rechazo del concepto cristiano de propiedad privada tal como lo entiende el tomismo".[38]

Precisamente a Chonchol se debe la nueva dirección ideológica de los social cristianos, llamada comunitarismo. Según él, dadas las circunstancias en que se encontraba el planeta, la única solución posible era adoptar una actitud revolucionaria, pues "la concepción de que al actual desarrollo técnico de la humanidad debe corresponder una organización económica y comunitaria de los sistemas de producción, todo lo cual conduce a la substitución del régimen de propiedad privada capitalista sobre los medios de producción por un régimen de propiedad comunitaria sobre los mismos. En esta concepción el concepto de propiedad se encuentra reemplazado por el de seguridad".[39] Una vez más esos planteamientos no traducían un pensamiento que hubiera cristalizado como consecuencia de un análisis de la realidad chilena, sino de la concepción de la sociedad propuesta por Nicolás Berdiaeff y Jacques Maritain, entonces de moda en la muy parisina *rive gauche*. En ese contexto, Jorge Cash propuso una "alianza del socialismo democrático con el socialcristianismo"[40], tesis a la que adhirió Jaime Castillo Velasco, que luego se convertiría en el principal ideólogo de la colectividad, desplazando a Manuel Antonio Garretón.[41] Las nuevas ideas se impusieron y el VI Congreso Nacional de la Falange aprobó, en julio de 1953, la idea de implantar en Chile una democracia representativa y comunitaria. Poco más tarde Castillo

---

36 Veinticuatro Puntos Fundamentales. Programa político de la Falange Nacional. Publicados por primera vez en Lircay, primera semana de abril de 1939.

37 JACQUES CHONCHOL y JULIO SILVA SOLAR, *Hacia un mundo comunitario. Condiciones de una política social cristiana*, Santiago, 1951, p. 10.

38 JULIO SILVA SOLAR, *A través del marxismo*, Editorial del Pacífico, Santiago, 1951, p. 122.

39 JACQUES CHONCHOL, "La revolución comunitaria", en Política y Espíritu nº 77, 15.9.52, p. 15.

40 JORGE CASH, "Social Cristianismo y Libertad", en Política y Espíritu nº 92, 15.5.53, p. 14.

41 Véase, JAIME CASTILLO VELASCO, "Sobre algunos problemas políticos del socialcristianismo", en Política y Espíritu nº 95, 1.7.53.

Velasco abandonó la posibilidad teórica de una alianza con el socialismo democrático y abogó por la pureza. Era preciso transformarse en vanguardia y prepararse para conquistar el poder: "En Chile la minoría de choque socialcristiana y la vanguardia gobernante restituirán al país la mentalidad democrática y lo liberarán de continuar cayendo en el caudillismo a que apuntaba la tendencia ibañista".[42] Afloraba así, nuevamente, la tendencia mesiánica de esta todavía pequeña formación ideológica, acompañada de su correspondiente cuota de sectarismo.

En julio de 1957, por las circunstancias que se explicarán más adelante, se formó el partido Demócrata Cristiano. Según su Declaración de Principios, el partido "lucha por la realización de una verdadera cristiandad, cuyas posibilidades históricas surgen de la crisis de la civilización moderna", y en este nuevo orden de cosas, habría una estructura jurídica que haría "de las asociaciones familiares, profesionales, de trabajo y culturales, el centro mismo de la vida social". Según el ideólogo del partido, sus miembros estaban llamados a una misión histórica: "Pasar a una nueva etapa de la civilización", para lo cual era necesario colocarse —se ignora cómo— "fuera de la civilización moderna".[43] La fallida incursión de Eduardo Frei en las elecciones presidenciales de 1958 mostró la debilidad del partido en cuanto a su arraigo en la masa popular. Ante esto, en la primera Convención Nacional de la Democracia Cristiana, mayo de 1959, Jaime Castillo insistió en que debían conformar una posición de vanguardia. Para él, "esto significa que el Partido Demócrata Cristiano no es un partido de centro. No está equidistante de la Derecha y la Izquierda ni aspira a moderar el socialismo o a popularizar el capitalismo".[44] Profundizando sobre este rol de vanguardia, dirá: "Ahora no habrá un mero ganar batallas electorales, sino una misión concreta: realizar en plenitud desde el poder las concepciones del partido. (...) Se llega al poder para no abandonarlo, mientras la misión histórica no esté realizada. Esto puede demorar. No importa. (...) El partido vanguardia sabe que es minoría y no aspira a convertirse en mayoría, sino cuando realmente lo sea. De ahí que no tenga interés en crecer, salvo desde dentro. Crecer para él, no es sumar fuerzas heterogéneas; es madurar interiormente en un grupo selecto que trasciende su propio horizonte sólo por su indomable rigor doctrinario y organizativo. (...) La vía tiene una sola dirección: va hacia adelante. Y este adelante es la transformación de la sociedad capitalista burguesa o socialista totalitaria en una sociedad en que los ideales comunitarios, vale decir, lo más hondo a que aspira el hombre, sean cumplidos".[45] A pesar de que el voto político de esa Convención procuró conciliar esa posición ideológica con la de Jorge Cash, Alberto Jerez, Julio Silva Solar y otros que propiciaban una línea populista de acercamiento al FRAP —de carácter declaradamente marxista—, por lo que se evitó ahondar en la exclusividad, ya desde 1960 comenzó a generalizarse en su interior la convicción de un gobierno en solitario, para imponer desde el poder sus postulados al país. De hecho, así ocurrió entre 1964 y 1970.

---

42 JAIME CASTILLO VELASCO, "Aspectos ideológicos de una política popular", en Política y Espíritu nº 118, 1.8.54.

43 JAIME CASTILLO VELASCO, "¿Qué es el Partido Demócrata Cristiano?", en Política y Espíritu nº 189, 15.8.57.

44 JAIME CASTILLO VELASCO, Política y Espíritu nº 222, 15.5.59, p. 4.

45 JAIME CASTILLO VELASCO, "Esencia y misión del Partido Demócrata Cristiano", en Política y Espíritu nº 218, 21.4.59. Está recogido en *Teoría y Práctica de la Democracia Cristiana Chilena*, del mismo autor, Editorial del Pacífico, Santiago, 1973, p. 24.

El idea de realizar una Revolución en Libertad y la mayoría de sus temas fueron inspirados por sacerdotes jesuitas, destacándose la influencia de los padres Hernán Larraín y Roger Vekemans. Desde las páginas de Mensaje, la revista fundada dos décadas atrás por el beato Alberto Hurtado Cruchaga, se proclamaba que la tarea de los cristianos comprometidos era la revolución de las estructuras. La novedad del Evangelio, en estos tiempos, era la redención social. La propia Iglesia tenía que entenderlo así y renovarse totalmente. En un editorial singularmente esclarecedor se definía la revolución como "un cambio deliberadamente producido, que responde a una ideología, a una planificación, es rápido y radical y se refiere a todas las estructuras básicas".[46] Esta inspiración, que manaba de un sector de la Iglesia en frenética ebullición, no era una casualidad ni mucho menos. Como recuerda Bernardino Bravo, ese partido y, sobre todo sus antecesores, fueron organizados exclusiva o casi exclusivamente por católicos que reconocieron su adhesión social católica, aunque ninguno de ellos tuvo carácter confesional. Pero, "también sucedió que en su época de auge, la Democracia Cristiana encontró cada vez mayores simpatías en los medios clericales: sobre todo en las nacientes oficinas eclesiásticas y paraeclesiásticas, entre sacerdotes y religiosos más impacientes que atinados en cuanto a la labor de la Iglesia y, no en último término, en más de algún prelado. Por otra parte, el grueso del electorado, ajeno a preciosismos jurídicos, no pudo menos que ver en el único partido que llevaba el apelativo cristiano, si no el partido de la Iglesia, al menos un partido católico".[47]

Ya instalados en el poder e inaugurando en Chile una experiencia monopartidista, a pesar de estar "conscientes de ser hoy depositarios de la verdad para una mayoría del pueblo"[48], no les fue posible llevar a cabo sus postulados. En el ámbito económico, "a la sociedad burguesa —decía Silva Solar— que trabaja para pocos elegidos, corresponde la propiedad privada; esto es, que los bienes sean pocos. Pero este cuadro es incompatible con la sociedad de masas. La masa no tiene otra forma de acceso a los bienes fundamentales de la sociedad o sea, a la sociedad misma, que haciéndolos comunes, socializándolos, aboliendo la propiedad privada sobre ellos. A la sociedad de masas para todos, corresponde pues el socialismo económico".[49] Se explica así el sesgo ideológico que tuvieron la reforma agraria, la nacionalización del cobre, la absorción de tantos medios de prensa, etc. Pero eso no bastaba. Para poder sostener la mística revolucionaria, el partido gobernante se impuso la tarea de buscar "la penetración en la organización de la comunidad, la asunción del liderazgo político y la movilización del pueblo en apoyo del Programa".[50] De ahí el énfasis otorgado al trabajo de concientización política mediante la sindicalización campesina, el fortalecimiento de las juntas de vecinos, etc.

---

46 Véase "Revolución en América Latina", editorial de Mensaje nº 115, dic. 62 y OTTO S. BOYE, "En torno al concepto de revolución", en Política y Espíritu nº 285, nov-dic. 64, p. 30.

47 BERNARDINO BRAVO LIRA, *Régimen de Gobierno y Partidos Políticos*, op. cit., pp. 77 y 78.

48 Declaración Política del Partido Demócrata Cristiano, octubre de 1966, en Política y Espíritu nº 296, octubre de 1966, p. 95.

49 JULIO SILVA SOLAR, Política y Espíritu nº 284, enero-mayo de 1964, p. 22.

50 Folleto publicado por el Partido Demócrata Cristiano en agosto de 1966, p. 9.

Sin embargo, incluso desde el gobierno, no les fue posible a los demócratas cristianos precisar su ideología. Estaba claro que había que tenerla, pues como lo declaró el presidente Frei en 1966, "no se puede hace política, ni siquiera la más elemental, en el mundo de hoy, si al mismo tiempo no se tiene una visión universal del hombre. Y de su interpretación ideológica debe salir como fruto la fórmula política. Sin esta actitud no es posible hacerse oír en el ámbito nacional o extranjero. Nosotros la tenemos. La tienen los comunistas, y de ello se derivan los frutos de su política".[51] Muy bien, pero, ¿cuál era? Para la élite democristiana, uno de sus pilares era sin duda la visión progresista del catolicismo, entendiendo por tal la que difundían los jesuitas desde el Centro Belarmino, es decir, su "inquebrantable decisión de romper radicalmente con el orden actual, de acabar con el pasado y, partiendo de cero, construir un orden totalmente nuevo, y que responda a todos los anhelos del hombre".[52] Otro era el fin maritainiano de construir una comunidad fraternal, pero privado de toda grandeza al ceñirlo a una utópica concepción económica de corte socialista. Así, decían con tono profético, la lucha de clases se acabará porque se creará una sola clase social, "una sociedad de compañeros"[53] , donde en una misma persona están unidos el capital y el trabajo. Pero, "creemos que objetivamente el comunitarismo es una forma de socialismo, un socialismo comunitario. ¿Por qué? Porque socialismo es el régimen en que los bienes productivos de carácter social pertenecen a la comunidad. Esa es su base. Esa es también la base de la idea comunitaria. En ambos casos se trata de una sociedad de trabajadores que poseen en común los medios de producción".[54] Un tercer pilar lo representaba la planificación centralizada del desarrollo económico, y con esa intención se planteó la reforma de las instituciones administrativas del Estado, "para adaptarlas a las necesidades de un proceso de desarrollo democrático y planificado", que para ser fructífera debía ir acompañada de un "sistema orgánico de cuerpos intermedios entre los individuos aislados y el Poder Público en sus diferentes niveles".[55] En buen romance, se reflotaban las concepciones que prevalecían en la Europa de los años ´30.

Como los cambios estructurales requeridos por la ideología no se concretaban a la velocidad deseable, un sector del partido, los llamados terceristas, encabezado por los diputados Luis Maira, Vicente Sotta, Sergio Fernández, Bosco Parra, Andrés Aylwin y Mariano Ruiz Esquide y por el senador Renán Fuentealba, en 1966 denunció como "evidente la ausencia de un plan integral y de una estrategia conocida y compartida por todos los sectores comprometidos con el Programa. Los pasos a dar no están claramente jerarquizados ni definidos".[56] Se decidió nombrar una Comisión Político Técnica con el objeto de preparar un informe que sirviera al partido para reelaborar su estrategia en los tres años que le quedaban de gobierno. Ésta fue integrada por Jacques Chonchol, Luis Maira, Vicente Sotta, Julio Silva Solar, Carlos Massad y Pedro Felipe Ramírez. A ellos se les agregó, sin estar nombrado por la directiva del partido —

51 EDUARDO FREI MONTALVA, declaraciones a Ercilla, 27.7.66, p. 21.

52 Editorial de la revista Mensaje, 15.12.62.

53 JULIO SILVA SOLAR y JACQUES CHONCHOL, *El desarrollo de la nueva sociedad en América Latina (Hacia un mundo comunitario)*, Editorial Universitaria, Santiago, 1965, p. 37.

54 Idem., p. 38.

55 Idem., pp. 132 y 133.

56 Declaración de los terceristas a Ercilla, 30.3.66, p. 9.

presidida entonces por el senador Patricio Aylwin— el dirigente de la juventud Rodrigo Ambrosio. Esto último es sorprendente; ya en 1964 "un sacerdote de la parroquia de Saint Séverin, París, asesor espiritual de los becarios latinoamericanos, confidenció a ciertos funcionarios de la Universidad Católica de Chile que Rodrigo Ambrosio (becado en L'Ecole Practique) estaba inscrito en el Partido Comunista francés. Y que allí había recibido orden de no dejar la Democracia Cristiana chilena, a fin de servir de puente".[57] Por lo demás, no era ningún secreto que Ambrosio había asistido durante seis meses a la Universidad Patricio Lumumba, en Moscú, que servía de escuela de mandos para el activismo internacional comunista. Este hecho es más que una anécdota; se trata de un síntoma de lo que estaba por venir. El diagnóstico de esta Comisión fue que la lentitud en el cumplimiento de la misión histórica se debía a que la resistencia opuesta por los grandes intereses —oligarquía, imperialismo, latifundio— sumada a la ausencia del partido en las decisiones relevantes del gobierno, estaban desviando el proceso hacia una posición desarrollista, mientras al pueblo se le había ofrecido una revolución de verdad. En consecuencia, aconsejaban la implantación inmediata del conjunto de medidas que detallaban, encaminadas a provocar una situación tan revolucionaria que, como algunos advirtieron, ni los comunistas se habrían atrevido a proponer. La revolución pura y dura, para la Comisión Político Técnica del partido, era la solución al problema de inmovilismo que aquejaba a su gobierno, plasmada en un informe de pretencioso título: Proposiciones para una Acción Política en el período 1967-1970 de una Vía No Capitalista de Desarrollo.[58]

Las reacciones no se hicieron esperar. Patricio Aylwin, que en el intertanto había sido reemplazado en la presidencia del partido por Rafael Agustín Gumucio, en carta dirigida a éste, no dudó en rechazar el razonamiento del Informe, pues "demuestra, a mi juicio, una falta abismante del más elemental sentido de la realidad. Por extremar la fidelidad a una posición teórica revolucionaria se desconoce no sólo lo que el país necesita, sino que también lo que el pueblo quiere. (...) Lo primero que necesita el país es desarrollo económico y social a la vez. Y en las circunstancias chilenas no hay posibilidad real de lograr simultáneamente ambas especies de desarrollo sin participación activa e importante del capital privado. (...) Antes de hacer la revolución, o abolir el capitalismo o establecer el comunitarismo, el pueblo quiere más industrias, más trabajo, más escuelas. (...) No se encuentra mejor fórmula que desalentar a la empresa privada mediante restricciones, trabas y signos de desconfianza. No se percibe que por este camino no tardaría en llegarse a la paralización de la inversión privada, lo que significaría dejar toda la actividad económica de alguna importancia en manos del Estado. ¿Es esto lo que se busca o es este nuestro ideal?. (...) Si los democratacristianos pensáramos como marxistas deberíamos decirlo claramente y proceder sin vacilación a la nacionalización de bienes. No tendría sentido que nos quedáramos en la mitad del camino. Las ideas que el Informe insinúa respecto al régimen de la empresa evocan el modelo yugoeslavo, que es marxista y no cristiano".[59]

---

57 TERESA DONOSO LOERO, *Historia de los cristianos por el socialismo en Chile*, Editorial Vaitea, Santiago, 1975, p. 20.

58 Un extracto del informe de la Comisión Político Técnico en Ercilla, 8.11.67, p. 8.

59 Extractos de la carta enviada a Rafael Agustín Gumucio por Patricio Aylwin en Ercilla, 25.10. 67.

Eylwin tenía razón, pero se contradecía a sí mismo porque muy poco antes había sostenido que la función del gobierno consistía en materializar los designios del partido. Por su parte, Emilio Filippi, desde la revista Ercilla, hacía notar que "el espíritu de este documento no puede merecer otro reparo que su falta de realismo, y en algunos aspectos su ingenuidad. (...) Se dice que lo urgente no es hacer un buen gobierno, sino iniciar la revolución. La verdad es que no hay revolución que se pueda comenzar jamás con un mal gobierno, ni siquiera con uno mediocre".[60] También tenía razón, pero en su reflexión olvidaba dos cosas importantes; las exigencias ideológicas suelen ser, por su propia naturaleza, completamente ajenas a la realidad concreta y; de hecho, no era un buen gobierno el que estaba en funciones. En procura de sus metas ideológicas había descuidado hasta un límite insoportable sus obligaciones respecto a los órganos no partidistas del Estado —los poderes neutros que tutelan su conservación mediante la aplicación del derecho y el apoyo de la fuerza legítima— lo que a poco andar se manifestaría en dos hechos inéditos hasta entonces en la la historia del país, a saber, la primera huelga del personal judicial y el autoacuartelamiento del general Viaux en el regimiento Tacna, precedida por la renuncia de los oficiales alumnos de la Academia de Guerra y de la Academia Politécnica.

La vía no capitalista era un nuevo viraje ideológico de la democracia cristiana chilena, quizás no compartida por las bases del partido pero sí por el grupo que se había hecho con el mando en su cúpula. Así, no obstante las críticas, la mesa directiva del partido hizo íntegramente suya la propuesta de una vía no capitalista. Bosco Parra, su vicepresidente, declaró: "No aceptaremos de modo alguno que la filosofía, que el espíritu, que la esencia del Informe Político Técnico se distorsione. Haremos cumplir este acuerdo con energía en la disciplina".[61] De este modo quedó planteada una seria crisis entre el gobierno presidido por Eduardo Frei y el único partido que le sustentaba.

Para evaluar los alcances de lo que estaba en juego es pertinente tener en consideración que la vía no capitalista de desarrollo distaba mucho de ser una creación democristiana. En verdad, había nacido en la Reunión Internacional de Partidos Comunistas celebrada en Moscú en 1960. En la declaración final de esta reunión se hizo constar que dadas las circunstancias imperantes en el mundo, para las masas populares la mejor manera de terminar con el atraso secular y mejorar sus condiciones de vida era emprendiendo el desarrollo no capitalista, lo que fue reseñado por Pravda el 6 de diciembre de ese año. El propio Nikita Kruschev, en Pravda del 19 de octubre de 1961, declaraba que para los países subdesarrollados la única salida era la vía no capitalista, a la que se llegaría con la "lucha activa de la clase obrera y de las masas trabajadoras y por la unión de todas las fuerzas democráticas y patrióticas en un amplio frente nacional". Los ideólogos del Partido Comunista Soviético, por ejemplo, Víctor Afanásiev y Alexandr Soboliov, desarrollaban en los trabajos que publicaban los supuestos, medios y fines que era necesario aplicar en las naciones del Tercer Mundo a fin de garantizar que mediante la vía no capitalista de desarrollo llegaran a convertirse en sociedades socialistas.[62]

---

60 EMILIO FILIPPI, Ercilla 9.8.67, p. 5.

61 Ercilla, 25.10.67, p. 3.

62 Véase JURAJ DOMIC, *La Vía No Capitalista de Desarrollo*, Editorial Vaitea, Santiago, s.f.

La verdad, entonces, es que la Quinta Columna del comunismo en Chile se limitó a aplicar una estrategia monitoreada desde el Kremlin. La vía no capitalista de desarrollo fue un caballo de Troya y materializó una de las maniobra de infiltración soviética de mayor éxito emprendida durante la posguerra en América —la otra fue Cuba— atizando una lucha interna entre el gobierno y el partido que hizo perder a la democracia cristiana el liderazgo que detentaba y, en definitiva, las elecciones presidenciales de 1970. En su intento por no parecer rezagados ante el marxismo, siempre más de avanzada y más progresista a sus ojos, los dueños de la ideología en la democracia cristiana vaciaron su tradicional contenido —que, aunque vaporoso, existía— y lo reemplazaron con categorías aún más extrañas al ser nacional. La pregunta que surge, entonces, es si todavía había alguna relación entre el nombre del partido y sus postulados o, en otras palabras, si aun tenía razón de ser. La respuesta la dió Maritain: "Si para corregir los errores y abusos del capitalismo, la Democracia Cristiana no resulta capaz sino de copiar al marxismo, no tendría razón de ser, eso no es cristianismo".[63]

Como consecuencia de lo anterior, a medida que se acercaba el término del período presidencial de Eduardo Frei —elegido sólo en tanto parecía ser una alternativa a la coalición socialista-comunista— fue haciéndose cada vez más complicado hacer ver a la ciudadanía las diferencias ideológicas que separaban al partido gobernante de la oposición marxista. La evolución ideológica de la democracia cristiana local, como se ha vista, es la crónica de una degradación al cabo de la cual sus esencias originales se habían esfumado. La mala política había ocupado el lugar de buena doctrina. No es raro, entonces, que en 1970 los programas de Radomiro Tomic y Salvador Allende, hayan sido practicamente iguales.

Después de haber haber abierto las puertas de La Moneda a la Unidad Popular, el partido Demócrata Cristiano no logró recomponer su ideología. Se izquierdizó algo más, y a fines de 1970 Luis Badilla, presidente de la Juventud Demócrata Cristiana, podía afirmar: "Hay una coincidencia para substituir las estructuras capitalistas y neocapitalistas y la moral burguesa de nuestro país".[64] El voto político emitido por ese sector del partido el 18 de abril de 1971, al concluir su Consejo Plenario, señalaba: "No es el capitalismo y la necesidad de su destrucción lo planteado por delante para las grandes masas populares. Es la perspectiva socialista y el esfuerzo unitario de los grupos socialistas y partidos populares lo que está en juego. (...) Propondremos al Consejo Plenario del Partido la aprobación para una operación política que, a nivel legislativo, acuerde propiciar en conjunto con la Unidad Popular, todos los proyectos de ley necesarios sobre materias en los cuales el Programa de Tomic y de Allende tengan coincidencias objetivas".[65] Desplantes de adolescentes, se podría objetar. No obstante, en realidad era el propio Tomic —el hombre de las coincidencias objetivas con Allende— quien ese mismo día afirmaba que "ser democratacristiano, hoy como ayer, significa pertenecer a un partido que siempre ha sido de izquierda, porque nació partidario del cambio de las viejas estructuras institucionales minoritarias y de la substitución del agotado orden capitalista y

63 JACQUES MARITAIN, entrevista concedida a Sergio Torreti y publicada en Ercilla, 6.12.67, p. 5.

64 Clarín, 20.12.70, p. 3.

65 La Prensa, 19.4.71, p. 7.

neocapitalista, y así sigue siéndolo".[66] Bizarras palabras, sin duda, y dirigidas a un auditorio hasta hacía poco muy receptivo pero ahora instalado en el poder. Fue el canto del cisne. Ya había sido usado y sólo podía ser desdeñado. En efecto, desgraciadamente para él, casi simultáneamente, un Allende ebrio de victoria anunciaba en Valparaíso que no era el presidente de todos los chilenos sino sólo de la Unidad Popular. Ya no necesitaba a esta fuerza que insistía, patéticamente, en proclamar su raigambre de izquierda.

El cuadro político, social y económico creado por la Unidad Popular hizo que el partido Demócrata Cristiano se convirtiera en uno de sus opositores. Desde el punto de vista ideológico la contradicción era flagrante... pero se imponía una realidad cada vez más grave para el país. Su confusa ideología no podía ya inspirar la acción de unos militantes que, al igual que la mayoría de la población, sentían que había llegado un momento de definiciones claras y tajantes. En adelante, por la fuerza de las cosas, devino en partido de opinión y así se ha mantenido hasta el presente. El epitafio a su época ideológica se debe a Castillo Velasco: "Debiera escribirse alguna vez la historia de cómo se produjo la lenta pero sistemática infiltración del desprecio por los valores morales del partido, por su historia, por sus principios generales, por su estructura, por sus hombres. El resultado fue que la Democracia Cristiana perdió capacidad de combate y de defensa. Estuvo sometida a la crítica del adversario e inconscientemente adquirió el modo de pensar de éstos".[67]

Como se dijo más arriba, la segunda cuerda que trenzada con la ideológica marca la trayectoria de la democracia cristiana chilena, es su esfuerzo por llegar a ser un partido votado por la ciudadanía. No es otra la aspiración de cualquier partido, se dirá, pero las características de este caso particular son únicas.

Desde su aparición en la contingencia política, la Falange Nacional se percibió a sí misma como un grupo escogido para cumplir una misión histórica. Para llevarla a cabo tenía una ideología, cuyos elementos tomó del corporativismo europeo, y una pequeña y monolítica organización —equipos, secciones y grupos, estos últimos al mando de un brigadier— integrada por personas de clase media y alta provenientes del ambiente universitario. Se respiraba allí el aire militarizado que le había impuesto su presidente, Ignacio Palma Vicuña.[68] En 1937, apenas un año después de su fundación, siete de sus miembros eran diputados y otro, Bernardo Leighton, había sido nombrado ministro del Trabajo por Arturo Alessandri. Pero el estilo mesiánico, el entusiasmo por el corporativismo y la impronta del catolicismo liberal que lucían no podía ser del agrado del rancio partido Conservador, al que estaban unidos. El conflicto estaba latente, a pesar de las convicciones de su líder, Eduardo Frei: "Hemos entrado con ideas precisas y con nuestra, absolutamente nuestra, personalidad. Pero existe la unidad que nadie será tran estrecho de miras, o tan ciego como para querer destruir".[69] La crisis se desencadenó con ocasión

66 RADOMIRO TOMIC, La Tercera, 19.4.71, p. 19.

67 JAIME CASTILLO VELASCO, "Causas de la derrota", en Política y Espíritu nº 318, dic. 1970.

68 La insignia falangista, una flecha cruzada por dos barras, tiene carácter militar. Según se explica en Lircay, 12.10.39, p. 1, la flecha simboliza el gran destino de nuestra patria; el color rojo, la sangre de aquellos que lucharon y murieron por Chile; las barras representan los obstáculos que hay que vencer, unos son internos y se superarán mediante el sacrificio, otros son externos y se batirán por la lucha. La camisa azul, huelga decirlo, fue copiada de Falange Española.

69 Citado por ALEJANDRO SILVA BASCUÑÁN, *Una experiencia socialcristiana*, Editorial del Pacífico, Santiago, 1949, p. 87.

de la elección presidencial de 1938. La derecha realizó el 23 de abril de ese año una convención para designar su candidato y, en virtud a un pacto suscrito el mes anterior entre los partidos de esa tendencia, en ella los conservadores y liberales tuvieron 420 asientos cada uno, los demócratas 140, los independientes 350 y los falangistas sólo 15. Era una cruel realidad, pero medía con exactitud la importancia electoral que le atribuían sus pares. La convención proclamó a Gustavo Ross Santa María —apodado "el mago de las finanzas" por su brillante desempeño como ministro de Hacienda de Arturo Alessandri— que concitó la adhesión de 1.285 delegados, venciendo contundentemente a Jorge Matte Gormaz, el candidato de los falangistas. Ante este resultado, la Falange declinó participar en la campaña presidencial y dejó en libertad de acción a sus cohortes. El resultado de las elecciones, donde venció el candidato del Frente Popular, Pedro Aguirre Cerda, ex-ministro del Interior de Alessandri, por apenas el 0,9% de los sufragios, hizo recaer parte de la responsabilidad en el fracaso sobre los falangistas. El partido Conservador no aceptó su pretensión de situarse por encima de derechas e izquierdas que le había llevado a no reconocer bando alguno en esa elección decisiva para el destino del país. Simplemente habían dejado de ser un aliado confiable. Entonces se produjo la división. Y al mismo tiempo tomó cuerpo el temperamental resentimiento que en adelante mostrará hacia la derecha.[70]

Una vez independizada del tronco conservador, en abril de 1939 la Falange Nacional redefinió sus principios en una línea más bien lírica —los Veinticuatro Puntos Fundamentales— distanciándose por completo de la realidad del país. De hecho, se resignó a ser una partido pequeño, altamente intelectualizado y con escaso eco y representación popular. Así, en las elecciones parlamentarias de 1941 obtuvo el 3,4% de los sufragios y en las de 1945 sólo el 2,5%. Según Silva Solar, entre 1938 y 1953 eso era inevitable porque su doctrina flotaba "sin base en el mundo real".[71] Pero, al parecer, una cosa son los principios y otra muy distinta la acción política. Decidida a no desaparecer, en la primavera de 1939 decidió colaborar con el Frente Popular, y a los cinco meses le retiró su apoyo. Apenas dos meses después se comprometió con Eduardo Cruz-Coke, candidato conservador en una elección senatorial extraordinaria, pero a la muerte de Aguirre Cerda se sumó a la campaña del radical Juan Antonio Ríos. Incluso fue Eduardo Frei, por entonces presidente de Falange, quien redactó las bases programáticas de esa victoriosa candidatura. Esos afanes, como diría más tarde un falangista de la primera hora, significaron "la pérdida de la virginidad".[72] Una vez en La Moneda, Ríos le ofreció a Frei la cartera de Obras Públicas, lo que constituyó un verdadero salvavidas para el partido. Tras nueve meses de fecunda gestión, en febrero de 1946 la abandonó por no estar de acuerdo con la forma en que el gobierno enfrentaba

70 Apenas producida la división, Manuel Antonio Garretón publicó en Lircay, 15.12.38, un "Manifiesto al país del Presidente de la Falange", donde precisó: "Hay en la Derecha un sentido estrecho de conservación. Su actitud y sus métodos están desvinculados de la realidad de la época". Para la Falange, "estar más allá de las derechas y de las izquierdas no significa un término medio entre ambas, una posición de centro sin alma ni vida. Se trata de algo esencialmente distinto de los dos extremos, una posición clara y derecha, una actitud enérgica, dinámica y activa; una acción que deja atrás viejos moldes y métodos fracasados para integrar en una unidad superior a las fuerzas sociales del país". Como se ve, estaba claro lo que no se quería ser; pero la afirmación positiva que debía surgir de esa negación no pasaba de ser una suerte de estado de ánimo.

71 JULIO SILVA SOLAR, "Crítica a una tentativa socialcristiana", en Política y Espíritu nº 91, mayo de 1953, p. 4.

72 Declaraciones de Jorge Rogers a GEORGE GRAYSON, en op. cit., p. 195.

las huelgas provocadas por las dificultades económicas que atravesaba el país. En el Cuarto Congreso de la colectividad, abril de 1946, fue elegido presidente Radomiro Tomic, quien afirmó que contrariamente a lo que sostenía Leighton nada se ganaría con los "constantes y frecuentes contactos" con los comunistas, pero, añadió, "con todo, hay situaciones, especialmente en la lucha laboral y sindical, en que tales contactos son inevitables. Cuando así ocurre deberían ser llevados a cabo con discreción y sin declaraciones públicas a los periódicos".[73] Era el reconocimiento de una actitud hipócrita: de cara a la opinión pública se proclamaba una posición, pero en secreto se maniobraba para seguir otra muy distinta, muchas veces a espaldas de las propias bases partidarias. Siguiendo esta línea de acomodo, en las elecciones presidenciales de 1946 la Falange apoyó al candidato conservador, Cruz-Coke, en las que venció Gabriel González Videla. Si las fuerzas de derecha hubieran ido unidas, habrían vencido, pues sumados los votos de Cruz-Coke y de Fernando Alessandri, liberal, sobrepasan el 50%. Pero, seguramente, de haber ido unidos, la Falange habría estado con González Videla. De hecho, desentendiéndose de inmediato de sus aliados, le ofreció su apoyo; pero sólo duró hasta que éste rompió con los comunistas y en septiembre de 1948 promulgó la ley de Defensa de la Democracia, que los puso fuera de la ley. Esa fue la circunstancia en que Eduardo Frei pronunció su frase célebre: "Ante el comunismo vemos que hay algo peor: el anticomunismo".[74] Detrás de su oposición a dicha ley había mucho de oportunismo electoral, pero de cualquier forma el hecho inquietó a muchos católicos que en lo más álgido de la Guerra Fría veían cómo las naciones de Europa central eran devoradas por el comunismo ateo, aplastando literalmente a los creyentes. Mientras allá los simples fieles y sus sacerdotes y obispos eran perseguidos, torturados y humillados con una parodia de proceso judicial —nacía la Iglesia del Silencio— aquí el nuncio, monseñor Mauricio Silvani, no podía menos que emitir una carta haciendo un llamado a los falangistas para que "evitasen la política de mano tendida con los partidos marxistas, anulando cualquier arreglo directo o indirecto con los partidos de esa orientación".[75]

El país vivía un momento delicado. Su seguridad interior estaba amenazada por una espiral insurreccional del comunismo, que creía que aquí también había llegado su hora. Respaldado por facultades extraordinarias y autorizado por la ley de Defensa de la Democracia, lo que hizo con ellos González Videla no pasó de ser una reacción fuerte, pero legítima, a fin de controlar la situación: los deportó a Pisagua y a cargo del campamento estuvo un tiempo el capitán Augusto Pinochet Ugarte. No era esa la idea que Frei tenía sobre lo que había que hacer; por temperamento, no le agradaban las resoluciones drásticas. Y no lo ocultaba. En un editorial de la revista Política y Espíritu escribió por entonces: "En nuestras plazas y corrillos nadan los profetas del "orden", los partidarios de la "disciplina", los buscadores de "gobiernos fuertes". En ninguna nación han demostrado ni mayor honradez, ni mayor competencia que el elemento civil. Las armas que la ciudadanía compra con un esfuerzo desorbitado que arruina las economías nacionales, las emplean contra ella. Vergonzosa y triste misión. (...) Se debilita el régimen democrático, cuando se va a buscar apoyo en el Ejército, y no en la ciudadanía y se saca a las Fuerzas

73 Departamento de Cultura y Propaganda Falange Nacional IV Congreso, 13 y 14 de abril de 1946, Imprenta Gutenberg, Santiago, 1946.

74 El Siglo, 28.6.47.

75 WILFREDO MAYORGA, "Los Conservadores, el Nuncio y la Falange", Ercilla, 13.7.66, p. 18.

Armadas de su verdadera misión".[76] Parte de lo cual es cierto, a condición de precisar que no son los militares quienes debilitan la democracia, sino otros... y por eso terminan siendo llamados para sostenerla. A pesar de estas diferencias sobre el problema comunista, en 1950 volvieron a respaldar a González Videla, integrando dos de sus miembros lo que se denominó el gabinete de sensibilidad social.

Siendo todavía un partido minúsculo —en 1949 obtuvo el 3,9% de los votos, con los que pudo elegir dos diputados y un senador, Eduardo Frei— éste intentó ser el candidado presidencial que representaría a radicales, conservadores socialcristianos, falangistas e independientes en la elección presidencial de 1952, pero la Convención realizada al efecto nominó a Pedro Enrique Alfonso. Era evidente que, con sus solas fuerzas, jamás un falangista sería Presidente de la República. Más interesante es que como consecuencia del resultado de esa Convención, al interior de falange se hicieron patentes dos posturas: la encabezada por su presidente, Patricio Aylwin, que no quería apoyar a un candidato de izquierdas y que al no lograr su objetivo renunció al cargo y; la liderada por Tomás Pablo, quien le sucedió en la presidencia, que propiciaba unirse a la candidatura de Salvador Allende. En definitiva, quedó a firme la adhesión al radical Alfonso. Como es sabido, contando únicamente con el capital de su propio prestigio, en 1952 fue elegido el general Carlos Ibáñez del Campo. Parece que, contrariando a Frei, efectivamente la población buscaba un gobierno fuerte. Su victoria significó un verdadero terremoto político para todos los partidos; en los comicios parlamentarios efectuados al año siguiente el bloque ibañista copó el 40.8% de las bancas de la Cámara de Diputados y el 60% del Senado. La Falange bajó su porcentaje de votos al 2,8%, aunque logró elegir tres diputados. Para evitar su desaparición, los conservadores socialcristianos y los falangistas decidieron crear la Federación Socialcristiana.

Durante la reciente campaña, los falangistas habían calificado agriamente a Ibáñez de dictador y properonista —tema este último que les preocupaba, entre otras razones de fondo, porque J. D. Perón arrebató las banderas a la izquierda y en consecuencia, hasta hoy son insignificantes en Argentina las expresiones comunistas, socialistas y socialcristianas— sin perjuicio de lo cual el presidente le encomendó a Frei el estudio de un plan para enfrentar la crisis económica, encargo que cumplió entregándolo a fines de mayo de 1954. Inmediatamente después le pidió que organizase un nuevo gabinete con personalidades técnicas e independientes, iniciativa que fracasó porque se opuso el agrariolaborismo. Sin embargo, gracias a este curioso episodio, Frei se convirtió en una figura con futuro en la política chilena.

Junto a la posibilidad de catapultar su líder hacia un papel estelar —para lo cual había que buscar una causa que interpretar en un momento determinado y, por supuesto, ser confiable para la izquierda—comenzó el cambio de la plataforma doctrinal de Falange y los rasgos ideológigos se acentuaron. Así, en un movimiento covergente, por una parte la ideología comenzó a mutar desde el corporativismo al comunitarismo, gracias a las nuevas ideas impuestas por Castillo Velasco, Chonchol y Silva Solar, y por otra, el entorno de Eduardo Frei le fue creando una atmósfera de

76 EDUARDO FREI MONTALVA, Editorial de Política y Espíritu nº 36, noviembre de 1948. Está recogido en EDUARDO FREI MONTALVA, *Sentido y forma de una política*, Editorial del Pacífico, Santiago, 1951, pp. 120 y 121.

hombre providencial. Es notable, por inusual, que impulsando el culto de su personalidad, en una edición de la revista Política y Espíritu que mereció un tiraje especial, Alejandro Magnet haya publicado una Semblanza de Eduardo Frei.[77]

Como se ha señalado, la derrota sufrida en las elecciones parlamentarias de 1953 condujo a la unificación del socialcristianismo. No eran formaciones homogéneas en su mentalidad ni en el estilo; los conservadores socialcristianos eran parlamentaristas, los falangistas, en cambio, ideológicos. Fue natural, entonces que los rasgos de los primeros se diluyeran, apocados por una escuela de pensamiento que por ser ideológicamente necesaria suponía la exclusión de los demás. De esa Federación, ya completamente dominada por la vieja guardia falangista, nació en julio de 1957 el partido Demócrata Cristiano.

Este partido, nuevo y viejo a la vez, se abocó de inmediato a la preparación de la próxima elección presidencial, entusiasmado porque en los comicios parlamentarios de 1957 el socialcristianismo había alcanzado el 13,2% de los sufragios. Una vez más se suscitó el problema de con quién ir en esa elección. Unos, como Castillo Velasco, querían ir solos, pues el contacto con otras fuerzas podría dañar su prestigio. Otros preferían buscar pactos y esa fue la tesis que se impuso. En lo que había completa coincidencia era en la persona del abanderado: tenía que ser Eduardo Frei. Tres razones le avalaban: era el parlamentario más conocido de su colectividad; ocupaba siempre una posición de centro, conciliadora, en el partido, y; no era ningún secreto su ambición de llegar a ser Presidente de la República. Una vez nominado por sus pares, el 19 de agosto envió una carta oficial al partido Liberal pidiendo su respaldo. En ella argumentaba; "creo que los problemas que enfrenta el país son de tan magnitud y urgencia que los hombres y los partidos que comparten sus ideas básicas pueden trabajar juntos para obtener un gobierno que pueda resolver los problemas que afectan a todos los chilenos, sean cuales fuesen sus diferencias doctrinales".[78] Pero el concurso liberal también había sido requerido por los conservadores, que habían levantado la candidatura de una personalidad independiente, Jorge Alessandri. La súbita muerte del senador liberal Raúl Marín Balmaceda, ocurrida en el Congreso mientras leía un discurso rechazando el respaldo al candidato democracristiano, decidió el apoyo en favor de Alessandri. Como la izquierda ya había resuelto volver a postular a Salvador Allende, la candidatura de Frei estaba condenada al fracaso. A pesar de ello, no desistió. Fue atacado desde todas las posiciones por la indefinición que representaba —más que mal, el bando que hubiera podido contar con él tenía el triunfo asegurado— pero también se permitió el lujo de propinar algunos mandobles que a la larga tendrían consecuencias. Así, en el discurso con que cerró su campaña, profetizó: "El triunfo de la extrema derecha provocaría inevitablemente una resistencia social y política que no podría ser contenida sino por la violencia exagerada. El país ya lo vio en años pasados. No se puede vivir sobre leyes represivas ni facultades extraordinarias como sistema".[79] Se equivocó medio a medio. El período en que gobernó Jorge

77 Política y Espíritu nºs 62-63, septiembre de 1951. Está recogida en EDUARDO FREI MONTALVA, *Sentido y forma de una política*, op. cit., pp. 13-54.

78 El Mercurio, 22.8.57. p 19.

79 EDUARDO FREI MONTALVA, discurso de 2.4.58, en Política y Espíritu nº 208, 15.9.58., p. 31.

Alessandri fue pacífico y constituye una excepción pues fue el único mandatario, entre 1923 y 1973, que no solicitó facultades extraordinarias al Congreso. Pero a Frei esta ofensa jamás le fue perdonada.

A pesar la derrota, no dejaba de ser importante el 20% de votos que había obtenido y a partir de ese momento, no antes, la democracia cristiana dejó de ser una especie de club político y se transformó en un partido de masas. Dejando de lado sus entelequias ideológicas —Castillo Velasco, como se ha dicho anteriormente, todavía privilegiaba la pureza del intangible doctrinario, el crecer para adentro, previendo que una expansión demasiado rápida podría desfigurarlo— inició una agresiva campaña publicitaria encaminada a poner en el centro de la cuestión política el advenimiento de una época de cambios. Apeló a consignas simples y rotundas destinadas a impactar y conmover a ese mayoritario sector de la población normalmente considerado como independiente de derecha, gente de clase media que aspira al orden pero que no se siente ligado de manera especial a la tradición. A ellos se les hizo ver que pronto e indefectiblemente ocurrirían ciertos cambios sociales profundos y, siendo ese el caso, más valía conducirlos inteligentemente que entregarlos al azar de una revolución desbocada. Esta visión también fue irradiada hacia los universitarios, técnicos y profesionales jóvenes. Tampoco dejó de resaltar la secularización de su acción proselitista, pero tomando la precaución de obtener un reconocimiento de simpatía entre los círculos clericales de mayor influencia. Por último, pero muy importante, intensificó su presencia en el mundo laboral, pero no ya como una forma de hacer efectiva una acción social cristiana, sino invitando derechamente a recorrer un camino político confrontacional, tendiente a demostrar que los sindicatos y asociaciones de trabajadores no tenían por qué seguir siendo un monopolio marxista. Estas medidas oscurecieron el sustrato ideológico del partido, pero a cambio suscitaron adhesiones fervorosas, caracterizadas por una suerte de estado de ánimo constructivo, dinámico y optimista, una fe confiada en el porvenir que calzaba muy bien con el espíritu general que afloraba por entonces en muchos lugares de Occidente. Era el comienzo de la década prodigiosa, los ya míticos ´60.

Los resultados no se hicieron esperar. En las elecciones municipales de 1960 reunió casi el 14% de los votos, en las parlamentarias de 1961 bordeó el 15.50% y en las municipales de 1963 se alzó al 22%, convirtiéndose en el partido con mayor respaldo eleccionario del país. Era mucho, pero todavía insuficiente para permitirle acceder al poder. Apuntando a ese objetivo, inició la búsqueda de una plataforma común con fuerzas afines para enfrentar las eleciones presidenciales de 1964. Pasando sobre el voto político de octubre de 1958, que establecía una línea independiente de la derecha y de la izquierda, exploró hacia esta última sin mayor resultado. A fines de 1962 hubo de reconocer que "las conversaciones sostenidad por la Democracia Cristiana con el Partido Democrático Nacional, integrante del FRAP, destinadas a encontrar el camino de la unidad de las fuerzas populares y de oposición con miras a dar a Chile un nuevo gobierno en 1964, llegaron a su término, y, en el curso de ellas quedó de manifiesto la sinceridad con que la Democracia Cristiana busca la unidad popular que haga posible los profundos cambios que el país espera".[80] La verdad es que ese pacto falló porque socialistas y comunistas pusieron como condición que el candidato de la unidad popular fuera Allen-

80 Declaración del Partido Demócrata Cristiano, en Política y Espíritu nº 277, dic. 1962 - enero 1963, p. 8.

de y los democratacristianos no estaban dispuestos a renunciar a la preeminencia de un hombre de sus filas que a su juicio tenía la estatura de un caudillo latinoamericano.

Sobre el relieve alcanzado por la figura del candidato demócratacristiano, uno de los fundadores de la Falange y amigo personal de Eduardo Frei, Jorge Rogers, ha declarado lo siguiente: "El hecho Frei es un fenómeno de la política chilena extraordinariamente complejo que hay que haber vivido para entenderlo. Asumo el riesgo de afirmar que, a diferencia de otros políticos que en un comienzo partieron solos y que formaron su equipo por el camino, en el caso de Frei su equipo fue el que lo formó a él... El fenómeno Eduardo Frei fue: inventado por Bernardo Leighton y Manuel Antonio Garretón e Ignacio Palma en su primera hora; piloteado por Rogers en el *decollage* políticoelectoral; candidateado (a Presidente de la República) por Edmundo Pérez Zujovic; instalado e introducido en la Primera Magistratura por Bernardo Leighton en segunda intervención; y administrado (en el buen sentido de este vocablo) por Gabriel Valdés, su Canciller en el pináculo, y durante todo el período de su ya histórico gobierno".[81]

La administración de Jorge Alessandri había sido exitosa. Durante su mandato, alejado de la demagogia que había caracterizado las décadas anteriores, la función de gobierno adquirió nuevo prestigio. Volvieron a reinar la probidad y el orden en el descoyuntado aparato público. Bajo su mirada severa, las instituciones republicanas funcionaron con regularidad y decoro. Una vez logrado la anterior, con la mirada puesta en el largo plazo, estabilizó las finanzas públicas, enfrentó la reconstrucción de la zona sur del país después del terremoto ocurrido en 1960, modernizó la infraestructura vial, llevó a cabo un notable plan de construcción de viviendas populares y aseguró la libre expresión de todas las manifestaciones de la vida social al desalentar en ella la intromisión política partidista. La mayoría de estos logros se explican porque Alessandri puso la eficiencia del empresariado y la capacidad de los expertos al servicio del interés nacional. Por cierto, en una democracia de masas la eficiente administración no basta para garantizar el éxito político. Sin embargo, había fundados motivos para imaginar que sería sucedido en La Moneda por un gobierno de características más o menos similares. De una parte, él había conservada intacta su popularidad hasta el final de su mandato, un hecho excepcional en nuestro medio... De otra, las fuerzas políticas que le habían sostenido —conservadores, liberales y radicales, agrupados ahora en el Frente Democrático— habían obtenido el 51.8% de los sufragios en las elecciones parlamentarias de 1961, porcentaje que a pesar de haber disminuido al 44.4% en las municipales de 1963 les hacía superiores, en una competencia a tres bandas, a sus contrincantes democristianos y comunistas y socialistas integrados en el Frente de Acción Popular.[82] Por último, esas cifras no hacían sino reflejar una constante vigente al menos desde las elecciones presidenciales de 1946, esto es, que la mayor fuerza electoral del país eran los muy burgueses independientes de derecha, que sin reconocer tienda expresa estaban lejos de comulgar con cualquier posición ideológica y menos aún con una revolución. No obstante, y resulta inexplicable si sólo se consideran las cifras, bastó una elección complementaria en Curicó, cuyo único

81 Citado por FRANCISCO JAVIER GONZÁLEZ ERRÁZURIZ, op. cit., pp. 68-69.

82 En las mismas elecciones los demócratacristianos habían obtenido el 15.4% y el 22% de los votos. Los socialistas y comunistas, unidos, el 21.5% y el 23.5%. Estadísticas electorales 1925-1969, Oficina de Informaciones del Senado, Boletín de Información General nº 66, 25.6.70, p. 63.

objetivo era reemplazar a un diputado recientemente fallecido, para que la escena política del país fuera alterada por completo.

En efecto, el candidato del Frente Democrático, senador Julio Durán Neumann, confiado en la victoria porque no apreció debidamente la importancia de los factores locales que gravitarían en el resultado de esa elección, proclamó que esa contienda era en verdad un plebiscito nacional de cara a la presidencial que tendría lugar cinco meses más tarde. Ganó Oscar Naranjo, hijo del parlamentario cuya muerte había provocado el cupo a llenar, representando a la coalición socialista-comunista.[83] Ante este hecho, en sí mismo irrelevante, el Frente Democrático se derrumbó presa del pánico. Con injustificada prisa sus dirigentes creyeron que lo ocurrido en Curicó presagiaba el triunfo marxista en la ya inminente elección presidencial; a menos que se le opusiera una candidatura única. Eduardo Frei observó impávido la situación e hizo saber que no abandonaría la carrera y que tampoco transaría un punto de su programa, "ni por un millón de votos" fue la expresión que usó. Sin ocultar que se optaba por un mal menor, pues de otro modo sería elegido Allende, la derecha terminó por plegarse a su candidatura y el caudal de sus votos le fue traspasado. La persona que logró vencer la resistencia de los dirigentes liberales y conservadores mediante una serie maratónica de conversaciones informales, fue Bernardo Leighton.[84] De esta suerte, el triunfo de Frei quedó asegurado y efectivamente fue electo con el 55.6% de los sufragios, cifra equivalente al 48.3% del electorado.

No es aventurado suponer que, de no mediar el "naranjazo", Frei habría llegado en tercer lugar. Pero, tal como se dieron las cosas, la lección que una vez más se confirmó es que el verdadero poder de una fuerza política no descansa exclusivamente en la estadística, sino también en su cohesión interna y en la sagacidad, fortaleza y sentido de la oportunidad de sus dirigentes para abordar las contingencias imprevistas, factores organizacionales que en la derecha suelen ser deplorables. Las razones del triunfo alcanzado fueron precisadas del siguiente modo por Castillo Velasco: "Podemos decir hoy, con íntimo convencimiento, que la llave del éxito del Partido Demócrata Cristiano residió en la implacable determinación de llevar hasta las últimas consecuencias el objetivo de no ceder ante las demás posiciones. Había, en efecto, y como hemos visto, razones atendibles para optar entre la democracia o el totalitarismo, entre la Derecha o la Izquierda, según los dilemas que nos proponían nuestros adversarios. No los escuchamos. Tomamos en todo momento las medidas necesarias, a lo largo de tres años a lo menos, para hacer llegar al pueblo nuestra voluntad de presentar candidato a la Presidencia de la República, de no entrar en compromisos o conciliaciones con los partidos tradicionales de derecha o izquierda".[85] En realidad sólo la primera parte de esa explicación es verdadera; hasta fines de 1962, esto es, cuando sólo faltaban dieciocho meses para la elección, su partido había intentado establecer una alianza con el marxista Frente de Acción Popular.

---

83 Oscar Naranjo Arias recibió 9.566 votos; Rodolfo Ramírez Valenzuela, representante del Frente Democrático, 7.950; Mario Fuenzalida Madriaza, demócratacristiano, 6.621. Así de pequeño fue el universo electoral que cambió el panorama político chileno en 1964. Un dato anecdótico: mientras fue diputado, Oscar Naranjo nunca hizo uso de la palabra en el hemiciclo.

84 Los detalles de esta operación política en FRANCISCO JAVIER GONZÁLEZ ERÁZURIZ, op. cit., pp. 101 y 102.

85 JAIME CASTILLO VELASCO, Política y Espíritu nº 286, sept.- oct. de 1964, p. 35.

Eduardo Frei recibió un país en muy buen pie. No había dificultades críticas que resolver y prevalecían las condiciones indispensables para continuar una estupenda gestión administrativa. El problema no estaba en la realidad, sino en la imaginación de los nuevos conductores: era un problema ideológico. La victoria electoral llenó de soberbia a su partido. Creyó que se abría una nueva época, exclusivamente suya, pues la ciudadanía le había otorgado un claro mandato para llevar adelante su Revolución en Libertad. Eso no era efectivo. En términos absolutos Allende había tenido menos acogida ciudadana que en 1958 y el presidente Frei había sido instalado en La Moneda como alternativa al marxismo, para frenarlo y diluir la amenaza latente que representaba para la nación desde hacía ya varias décadas. Tenía un plazo de seis años para lograrlo. En consecuencia, en un juicio histórico objetivo, su gestión debiera ser juzgada con ese parámetro. ¿Por qué fracasó? Radomiro Tomic, en 1969, dió algunas pistas: "Pocas cosas han perturbado más el criterio de la Democracia Cristiana en su doble expresión de partido y gobierno, que el mito de que en 1964 rompimos todos los esquemas y ganamos solos. La verdad es que en 1964, como en 1958, el PDC no habría podido derrotar electoralmente a las fuerzas de la derecha agrupadas en el Frente Democrático; ni a la izquierda representada en el FRAP. En 1958 salimos terceros. En 1964 eramos terceros como lo comprobó la elección de Curicó. En esa ocasión, cuando faltaban apenas cinco meses para la elección presidencial, el Frente Democrático sacó el 33% de los votos; el PDC, el 27% (entre ambos el 60%); y el FRAP, el 40%. En septiembre del 64 se comprueba un paralelismo aritmético casi perfecto: Frei, 56% de los votos; Durán, 4.9% (entre ambos el 61%) y Allende, el 39%. Tan claro es que en la elección presidencial de 1964, al igual que en 1958, no rompimos ni los esquemas de poder ni la solidez de los cuadros electorales de nuestros adversarios. Ganamos por un hecho absolutamente fortuito y penoso: el derrame cerebral que provocó la muerte del diputado socialista señor Naranjo, y que hizo posible que la Derecha comprobara con terror que, a cinco meses de la presidencial, el FRAP tenía holgadamente la primera mayoría relativa. Esta es la realidad. Abandonemos el mito, que ya nos ha hecho bastante daño y puede hacernos mucho más".[86]

Los comicios generales de 1965 reforzaron ese peligroso mito. Un Parlamento para Frei, se pidió. Lo obtuvo. Su partido eligió 82 diputados y 13 senadores. No logró más, en varios casos, sólo por no haber presentado suficientes candidatos. Ahora tenía mayoría en la Cámara y fuerte presencia en el Senado. Sacando una cuenta alegre, los democratacristianos podían ufanarse de haber incrementado su caudal electoral en un 174% en los últimos cuatro años, a condición de suponer que todos los ciudadanos que votaban por sus candidatos eran efectivamente democratacristianos. Pero aquello era una ilusión, el espejismo sobre el cual se sostenía el mito. No lo entendió así y creyó que por primera vez en este siglo se abría a una agrupación política la posibilidad de operar como partido único de gobierno. Más aún, como señala un historiador, "es probable que el anhelo de pureza doctrinal que había caracterizado al núcleo fundacional, ahora a la cabeza de un gran partido de masas, indujera a prescindir del

86 RADOMIRO TOMIC ROMERO, Revolución Chilena y Unidad Popular, folleto del Partido Demócrata Cristiano, 1969, pp. 9 y 10.

diálogo, de las combinaciones y de las transacciones, con el ánimo de hacer realidad su programa, de manera irreversible e integral".[87]

Desde el gobierno, tal vez creyendo contar con un respaldo popular abrumador de acuerdo al mito recién mencionado, se realizó una política absolutamente sectaria. La Democracia Cristiana rechazó toda posible negociación, alianza o compromiso con las otras fuerzas políticas existentes en el país. Si el cumplimiento estricto de su programa era la receta que el país necesitaba; ¿porqué habrían de perder el tiempo escuchando a otros? Había llegado la hora, prefigurada años antes por Castillo Velasco, "de realizar en plenitud, desde el poder, las concepciones del partido", porque se llegaba al poder "para no abandonarlo mientras la misión no esté realizada".[88] En el colmo de la intolerancia, no trepidaron en reconocer que no había espacio para nadie más porque se consideraban "la única alternativa democrática y compatible con la tradición chilena".[89] A lo largo de nuestra historia, pocos se habían atrevido a utilizar un lenguaje similar. Y pocos, también, habían estado tan ciegamente equivocados.

La aplicación de las medidas que involucraba la Revolución en Libertad erosionó los consensos básicos de la nación, que durante el gobierno de Jorge Alessandri habían logrado alcanzar un grado de estabilidad bastante notable. Desde ese punto de vista, el período de Eduardo Frei puede ser considerado una fase de transición hacia el socialismo marxista, una etapa preparatoria de una revolución más segura de sus metas. Advirtiendo que ése era el verdadero significado del proceso en curso, en septiembre de 1967 se publicó en Argentina un libro extremadamente lúcido, cuya tesis central, "el gobierno que encabeza el presidente Frei prepara las vías que llevarán a Chile a convertirse en una segunda Cuba", no pudo ser rebatida por la democracia cristiana en el terreno de las ideas; simplemente se prohibió su circulación, ordenándose la incautación de los ejemplares en librería.[90] No es necesario decir que resultó peor el remedio que la enfermedad. Tratar de impedir la difusión de esa obra menor, además de constituír una práctica insólita en nuestra forma de vivir la democracia, legitimó la despiadada crítica a la figura pública que era Eduardo Frei y despertó la curiosidad, transformando al libro en un éxito resonante. En realidad no se necesitaba estar de acuerdo con la línea de Fiducia —la entidad extremadamente tradicionalista que lo editaba— para comprender cuánta verdad había en ese pronóstico de la situación. De hecho, era dificil ignorar "cómo se está destruyendo el orden social de la vecina nación trasandina, cómo el resultado de esta llamada ´Revolución en Libertad` está aumentando cada día más el prestigio de las izquierdas y en especial del comunismo, al mismo tiempo que desarma y destruye las defensas naturales de la sociedad chilena contra tal peligro".[91]

Como fruto de su irritante sectarismo, a pesar de estar en el poder y de utilizarlo para fortalecer su posición partidista, en las elecciones parlamentarias de 1969 la demo-

87 FERNANDO SILVA V. y otros, *Historia de Chile*, Editorial Universitaria, Santiago, 1987, p. 866.
88 JAIME CASTILLO VELASCO, "Esencia y Misión del Partido Demócrata Cristiano", op. cit..
89 Declaración Política del Partido Demócrata Cristiano, octubre de 1966, en Política y Espíritu nº 296, oct. 1996, p. 95.
90 FABIO VIDIGAL XAVIER DA SILVEIRA, *Frei, el Kerensky chileno*, Editorial Cruzada, Buenos Aires, 1967. La cita en el prefacio a la 5ª edición en español (1968), p. 5.
91 Idem., p. 8.

cracia cristiana sólo alcanzó su porcentaje natural de votos, aproximadamente un 29%. Nuevamente volvía a ser problemático el tema de la próxima elección presidencial. Mientras en la calle la disolución del orden social era evidente —huelgas, violencia y desvanecimiento del respeto a la autoridad— en la cúpula del partido gobernante la pérdida del sentido de la realidad era abismante. Ese mismo año, Tomic, el delfín del régimen, señalaba que lo imprescindible era "la sustitución del Estado de Derecho capitalista y burgués por estructuras jurídico-políticas revolucionarias".[92] Como él estaba más consciente que cualquier otra persona de la efectiva capacidad electoral de su partido, sabía que necesitaba aliados. Y por el tono y contenido de sus intervenciones no cabía duda que, a diferencia de 1964, ahora el abanderado democratacristiano tenía que intentar ser elegido con el apoyo de socialista y comunistas. Según sus propios postulados ideológicos ese era el camino lógico, ya que habían llegado a confundir su comunitarismo con el comunismo: "La perspectiva de los cristianos es construir una sociedad sin clases, comunitaria. Este es el mismo objetivo de los comunistas, la sociedad comunista".[93] En suma, la democracia cristiana no había sido, después de todo, una alternativa al marxismo. El apoyo que Eduardo Frei recibió de las fuerzas políticas de derecha y los independientes —decisivo, pues de otro modo no habría sido Presidente de la República— había sido un malentendido.

Para la élite democratacristiana, desde 1964 era un hecho que el próximo candidato presidencial sería Radomiro Tomic Romero. Sólo su camarada Bernardo Leighton podía disputarle ese derecho tácito, pero como era más centrista, más cercano a Eduardo Frei, promocionarlo habría significado el inmediato quiebre del partido. Merced a esa especie de extorsión política, ni siquiera el presidente Frei estaba en condiciones de hacer algo al respecto. Así las cosas, el único problema era cómo posicionar a Tomic a la cabeza de una gran coalición. Para el diputado democratacristiano Luis Maira, "la estrategia es la unidad amplia —que debe trabajarse valientemente— de los sectores sociales y políticos de avanzada. Esto supone un entendimiento —primero una búsqueda de entendimiento— con otros partidos políticos de izquierda, concretamente los marxistas".[94] Esa idea general de maniobra ya había sido adelantada por el ideólogo Silva Solar: "Creemos que la unidad popular se ha hecho factible. Creemos que pueden dejarse de lado los viejos sectarismos, los viejos mitos, las falsas barreras divisionistas. Las fuerzas que participan en la unidad popular deben eliminar el lastre que le viene del pasado. Por nuestra parte debemos liberarnos del mito de la ideología centrista como del camino propio, la eterna equidistancia entre Derecha e Izquierda, el presentarse como alternativa frente al marxismo o comunismo, etc., todo lo cual conduce a dividir al pueblo y a la alianza con el capitalismo. (...) Concluimos esta unidad del pueblo como una fuerza plural en la doctrina, osea, con la participación de cristianos, marxistas, independientes...[95] También Rodrigo Ambrosio, presidente saliente de la Juventud Demócrata Cristiana y encubierto agente del partido comunista, en la Junta Nacional de 1968 sostenía que "para la campaña de 1970, deben desapare-

92 RADOMIRO TOMIC ROMERO, en revista P.E.C., 6.6.69.
93 JULIO SILVA SOLAR, El Siglo, 12.12.68.
94 LUIS MAIRA, La Segunda, 18.4.69.
95 JULIO SILVA SOLAR, El Siglo, 26.4.68.

cer del mapa político las alternativas centristas o terceristas que encubren, distorsionan y amortiguan la vida real del país, para dar paso a dos frentes compactos y excluyentes: el de la Derecha y el imperialismo por un lado, y el movimiento popular por otro, es decir, el Frente de la Reacción y el Frente de la Revolución, orientado a la difícil construcción de una economía socialista".[96]

Los comunistas, sin embargo, no tenían la menor intención de servir de comparsa. Ya habían visto lo que le había ocurrido a la derecha al resignarse a ese papel. Su Secretario General, Luis Corvalán, fue rotundo: "Últimamente, tanto en el país como en el extranjero, se deforma interesadamente la política de nuestro partido, atribuyéndonos inclinaciones a determinados candidatos presidenciales, llegando al extremo de decir que pudiéramos apoyar ciertas postulaciones que no aceptaremos jamás, como la del señor Radomiro Tomic, caracterizado personero de la política proimperialista del gobierno democratacristiano".[97] A pesar del desaire, Tomic insistió en afirmar que sin unidad popular no habría candidatura Tomic.

Dado que la derecha —reunida ahora en una formación potente, el partido Nacional— jamás aceptaría repetir la experiencia de 1964 y que los marxistas tampoco se pondrían a la cola de estos entusiastas conversos, a la Junta Nacional del partido Demócrata Cristiano, reunida en mayo de 1969 para decidir su posición frente a las elecciones presidenciales del año siguiente, no le quedó otro remedio que hacer de la necesidad virtud y proclamar la conveniencia de seguir un camino propio. A pesar de sus dichos, Tomic aceptó la postulación y, sin que ello fuese mayor sorpresa para nadie, en septiembre de 1970 llegó en un cómodo tercer lugar. Con todo, su partido todavía estaba en condiciones de prestar un último servicio a la causa marxista.

En efecto, como en la oportunidad ninguno de los tres candidatos en liza —Jorge Alessandri, Salvador Allende y Radomiro Tomic— habían alcanzado la mayoría absoluta de los sufragios, le correspondía al Congreso Pleno designar al Presidente de la República. Tras firmar con Allende un Estatuto de Garantías que en alguna medida aliviaba sus conciencias, le dieron sus votos y sin más trámite éste quedó instalado en La Moneda. Un manto de piadoso silencio cubrió en ese momento lo que parece haber sido una convicción real en Frei, es decir, sincera en su fuero interno a pesar de los coquetos gestos que en sentido contrario tantas veces había desplegado: "Nadie podría negar que, en teoría, este país u otro de la América Latina pudiera derivar hacia una forma comunista de vida y organización del Estado. Pero ello no se presenta como una posibilidad real o próxima. (...) Una nación que se arriesgara a esta aventura correría riesgos para su propia existencia. En el caso de Chile, no debiera olvidarse nunca, abriría peligros y codicias que están latentes y alertas y que, fomentadas o desatadas, le podrían costar su vida como nación independiente. Sobre esto nadie tiene derecho a engañarse".[98] Nadie se engañaba... salvo el grupo que por entonces dirigía al partido Demócrata Cristiano.

Así se saldaron 40 años de presencia electoral del pensamiento social cristiano en Chile. Durante la primera mitad de ese período actuó como minoría portadora de una

---

96 RODRIGO AMBROSIO, en Ercilla 23.7.68, p. 13.

97 LUIS CORVALÁN LEPE, El Siglo, 30.5.68.

98 EDUARDO FREI MONTALVA, *La verdad tiene su hora*, Editorial del Pacífico, Santiago, 1958, pp. 77 y 78.

misión histórica y no encontró mayor eco en la población. Después, con destreza de acróbata, la formación partidaria que lo encarnó buscó suplir esa debilidad congénita mediante el arte de hacer coincidir el interés propio con el que a su juicio podía ser el de la mayoría de la población. Así, en apariencia guiaba a una masa de ciudadanos, mientras en realidad la seguía incansablemente, buscando la coyuntura que le permitiera encaramarse sobre sus hombros para hacerse con el poder. Por eso la actitud política del partido Demócrata Cristiano ha sido un permanente zig zag y por lo mismo ha devenido en máquina electoral, huera de doctrina y sostenida por una eficaz propaganda, siempre en busca de una causa en la cual enrolarse.

Ideología y poder en la izquierda marxista.

El nacimiento, desarrollo y ocaso de la ideología marxista constituye uno de los hechos políticos centrales de nuestra época. No sería extraño que en el futuro, al contemplar con suficiente perspectiva este atormentado siglo XX —el de las matanzas que la aplicación de ese fenómeno sectario provocó— sea identificado como el tiempo del comunismo. Tampoco parece exagerado admitir que la comprensión de la realidad de hoy y la prefiguración de los posibles escenarios futuros se hace imposible si se omite el análisis de lo que ha sido la ideología en tanto categoría intelectual, prestando cuidadosa atención a las nuevas formas en que todavía puede manifestar su energía movilizadora.[99]

En una primera época, mientras se desenvolvía en las catacumbas, la expresión de la ideología marxista fue el bolchevismo, término que ha llegado a simbolizar el predominio de una mentalidad ardientemente revolucionaria, nihilista, ya vislumbrada por Dostoievski en 1870 y plasmada en su novela profética, Los Demonios.[100] Pero en realidad no es ese el sentido propio del bolchevismo, una mezcla de marxismo con salsa tártara, como lo definió el escritor socialista Charles Rappoport; se trata de una palabra que adquirió connotación política por azar. En efecto, el año 1898 se fundó clandestinamente en Minsk el partido Socialdemócrata ruso, tomando como modelo a la potente socialdemocracia germana. Es el mismo año en que Eduard Bernstein dirigió su famosa carta al congreso del partido Socialdemócrata alemán, afirmando que los supuestos históricos de la teoría de Marx y Engels, es decir, la progresiva pauperización social y la extrema concentración de la propiedad como consecuencia del desarrollo capitalista, no se habían cumplido. Dado que el marxismo había sido refutado en el plano científico por la experiencia empírica, debía ser considerado mera fraseología. Insistir en su sobrevivencia sólo podía conducir a asignarle una función ideológica, un pésimo camino pues la ideología es un parásito de la política. De ahí, concluía Bernstein, ¿para qué la revolución si por la expansión de la democracia y

---

99 Sobre la ideología marxista, véase JOSE MIGUEL IBAÑEZ LANGLOIS, *El marxismo: visión crítica*, Ediciones Universidad Católica de Chile, Santiago, 1973, y JEAN-YVES CALVEZ, *El pensamiento de Carlos Marx*, Editorial Taurus, Madrid, 1958.

100 Para el estudio de la mentalidad revolucionaria, véase F. VENTURI, *Les Intellectuels, le Peuple et la Révolution*, Gallimard, París, 1972. Hay traducción al español en Alianza Editorial con el título *El populismo ruso* (Dos volúmenes). En el vol. II se transcribe el *Catecismo del revolucionario*, escrito por Bakunin y Netchaev en 1869, que prefigura los rasgos ideológicos y psicológicos de un tipo humano que no ha cambiado en nada hasta hoy.

el sindicalismo la clase obrera ya ha satisfecho en gran parte sus aspiraciones? La respuesta a esta pregunta clave dividirá en adelante a la izquierda en todo el mundo, dando origen a sus dos posturas básicas: reforma o revolución.[101] Pues bien, durante el Segundo Congreso de la socialdemocracia rusa, efectuado en Londres el año 1903, Vladimir Illich Ulianov —cuyo nombre de guerra era Lenin— obtuvo un apoyo mayoritario en la votación de algunas tesis sobre la organización del partido tras la retirada de los delegados de la Liga de Socialistas Judíos, descontentos por la negativa a estructurarlo de acuerdo con las nacionalidades de sus miembros. De ahí que los seguidores de Lenin fueron denominados *bolsheviki* (mayoría) y sus oponentes *mensheviki* (minoría). A pesar del éxito inicial, el control de Lenin sobre los comités dirigentes fue precario y duró poco. Muchos de sus partidarios le fueron abandonando por considerar que la radicalidad de sus tesis era estéril; en cambio, una socialdemocracia de talante europeo sí podía llegar a influir en la política rusa.

A diferencia de lo ocurrido en la Alemania guillermina, donde las reivindicaciones de la clase trabajadora fueron asumidas por políticos responsables y dirigentes sindicales elegidos democráticamente, en Rusia el movimiento obrero quedó en manos de agitadores y conspiradores profesionales. Los mencheviques propiciando una revolución en dos fases, primero una burguesa, para lo cual había que apoyar las exitosas reformas que estaba llevando a cabo en Rusia el liberal primer ministro Stolypin —oportunamente asesinado por una célula extremista mientras ejercía el cargo— y esperar a que maduren las condiciones políticas, sociales y económicas, pues a continuación vendrá la revolución socialista, inducida y realizada por las masas en cumplimiento mecánico de la dinámica anunciada científicamente por Marx y Engels. Los bolcheviques, en cambio, poniendo el acento en el voluntarismo, proclaman que lo esencial es tomar el poder mediante la acción armada y, una vez en posesión del Estado, quemar etapas y de un salto acceder al socialismo. Para ellos la política no es un arte de lo posible, sino la puesta en ejecución de lo que hay que hacer indefectiblemente. En el Tercer Congreso de la socialdemocracia rusa, realizado en Estocolmo en 1906, se discutió si el partido debía ser de masas o de élite, integrándose al sistema parlamentario —como consecuencia de los disturbios de 1905 se había establecido la Duma en Rusia— o actuar fuera del sistema mediante células integradas por profesionales de la revolución, posiciones sostenidas por los mencheviques y los bolcheviques, respectivamente. Aunque se aprobó la tesis menchevique, Lenin hizo caso omiso y se negó a disolver la facción que acaudillaba. Un dato significativo que conviene registrar: en esa ocasión se usó el término "expropiaciones" por vez primera, aludiendo al asalto de bancos para financiar las tareas partidarias, una táctica en la que se había distinguido el camarada Josif Visarionovich Dzugasvili, que muy pronto el mundo conocería por su nombre de guerra, Stalin. En el Congreso efectuado en Praga, en 1912, se consumó la división y los bolcheviques optaron por constituir una organización aparte. Un año después de alcanzar el poder en Rusia —mediante la Revolución de Octubre, 1917, noviembre según nuestro calendario— los bolcheviques aceptaron la pro-

---

101 La carta de Bernstein es la partida de nacimiento del revisionismo, fundamento teórico de los actuales socialismos renovados. Un estracto de la carta en ALAIN BESANÇON, *Los orígenes intelectuales del leninismo*, op. cit., pp. 284-288.

puesta de Lenin para llamarse a sí mismos comunistas, marcando así la diferencia con los moderados socialdemócratas.[102]

Desde su óptica ideológica, para Lenin todo es política. Pero con él la política adquiere un sentido completamente diferente al que tenía en la filosofía tradicional, es decir, en la vertiente fundacional del pensamiento Occidental. La convivencia social, según Aristóteles, apunta al bien común y "es obra de la amistad, pues la elección de la vida en común supone amistad. El fin de la ciudad es, pues, el vivir bien, y esas cosas son para ese fin. Una ciudad es la comunidad de familias y aldeas para una vida perfecta y autosuficiente, y ésta es, según decimos, la vida feliz y buena. Por consiguiente, hay que establecer que la comunidad existe con el fin de las buenas acciones y no de la convivencia".[103] En cambio, para Lenin, la materia social polarizada en clases determinadas por intereses contrapuestos no puede formar una comunidad política. No existe el bien común ni la amistad cívica. Sólo hay odio y guerra. Así, el objetivo de la política es la destrucción del adversario: "Si la revolución llega a una victoria decisiva, arreglaremos las cuentas al zarismo al modo jacobino, o si preferís, a lo plebeyo. (...) Esconder a las masas la necesidad de una guerra exterminadora, sangrienta y desesperada, como objetivo inmediato de la acción futura, es engañarse a sí mismo y engañar al pueblo".[104] En lo inmediato, hay que hacer la revolución. Ello equivale a conquistar el Estado, pues "el problema fundamental en toda revolución es el del poder".[105] Y para conquistar el Estado y con su aparato de poder destruir a todos los adversarios, en la época de la revolución, la lucha de clases ha tomado necesariamente, siempre y en todos los países, la forma de una guerra civil; y una guerra civil no se concibe sin las peores destrucciones, sin el terror".[106]

En el ámbito espacial, la necesidad de hacer la revolución no se circunscribe a Rusia, es planetaria. Como señala Besançon, para los comunistas "el corazón del mundo es tan inmaterial como el del Partido. Es estructural: el feudalismo para ciertas zonas locales y subordinadas del gran conflicto; más generalmente el capitalismo y finalmente el imperialismo. El imperialismo constituye el enemigo natural del Partido, su razón de ser."[107] Probablemente el comunismo, fuera de la Unión Soviética, ganó sus adeptos y simpatizantes merced a la extendida impresión de que es anti-imperialista. Pero el comunismo no llegó a ser un poder mundial solamente a causa del mérito de esta faceta de su ideología —que justificaba e impulsaba su propagación pues el orden político internacional de este siglo refleja, es verdad, el equilibrio de diferentes tipos de imperialismos— ni por su dominio absoluto de Rusia, o porque la victoria soviética en la Segunda Guerra Mundial le proporcionó el control de vastos territorios en la Europa oriental y central. Justo es reconocer que su expansión, además de aquellos motivos, se explica porque salió al encuentro de las amplias demandas populares de la sociedad de masas del siglo

102 Véase WALDEMAR GURIAN, *Bolchevismo. Introducción al comunismo soviético*, Ediciones Rialp, Madrid, 1956.

103 ARISTÓTELES, *Política*, Libro III, 1281a.

104 LENIN, *Las enseñanzas de la insurrección de Moscú* y *Tareas inmediatas del poder de los Soviets*. Textos citados por ALAIN BESANÇON, *Los orígenes*... op. cit., p. 357.

105 LENIN, *Sobre la dualidad del poder*. Citado en idem., p. 358.

106 LENIN, *Carta a los obreros americanos*. Citado en idem., pp. 357 y 358.

107 Idem., p. 179.

XX. Tampoco se puede ignorar que la ideología marxista-leninista, en tanto religión política, atrajo a muchos hombres que habían perdido la fe heredada y, no obstante, no podían satisfacer su sed de absoluto en el escepticismo ni mucho menos en ese relativismo flojo que tantas veces anuncia la decadencia de las sociedades liberales.

Ya es suficientemente conocido el desastroso resultado que tuvo la aplicación de esa ideología extrema y fanática, cabalmente expresada en la consigna "todo o nada". La recuperación moral de la sociedad rusa tardará al menos un par de generaciones porque allí las bases éticas de la convivencia fueron demolidas por la mentira, ese rasgo consustancial al comunismo. A eso se reduce la herencia dejada por el régimen ya disuelto y no es otro el principal problema que enfrentan hoy sus sucesores en el Kremlin. Con benevolencia inexcusable, que a veces bordea la complicidad, se ha querido disculpar esa tragedia atribuyendo a Lenin una tergiversación de las ideas de Marx y Engels, errada senda que más tarde se habría consolidado bajo la férula de Stalin. La verdad es que la terrible opresión ejercida por los comunistas sobre el pueblo ruso no fue sino la consecuencia práctica de los principios teóricos enunciados por Marx y Engels, desarrollados por sus epígonos y glosados hasta la saciedad por una ubicua y devota corte intelectual, tanto en la Unión Soviética como en Occidente. Solzhenitsyn ha dicho, a propósito del fenómeno ideológico, que a través de ese magma de principios falsos y engañosamente nuevos, actuaron "los mismos sentimientos de antaño —la avaricia, la envidia, el desenfreno, la hostilidad recíproca— que sobre la marcha adoptan falsos seudónimos aceptables, como la lucha de clases, de razas, de masas o sindicales, y desgarran y destruyen nuestro mundo. El cavernario rechazo de compromisos ha sido elevado a principio teórico, considerándose virtud ortodoxa. Exige millones de víctimas en interminables guerras civiles, gritándole a nuestra alma que no existen los conceptos humanos firmes del bien y de la justicia, que todos ellos son variables, que cambian, y que por lo tanto hay que actuar siempre del modo más beneficioso para el bando respectivo".[108]

En concreto, ninguno de los puntos del programa bolchevique anunciado por Lenin al acceder al poder era realizable. Ofreció la reunión inmediata de una asamblea constituyente; la supresión de la pena de muerte; el reconocimiento de la independencia de las nacionalidades existentes en los límites del antiguo Imperio; el reparto de las tierras a los campesinos; la abolición del ejército permanente, de la policía y de la burocracia; la supresión de los privilegios; la igualdad de sueldos y salarios; la competencia pacífica de los partidos políticos en el seno de los soviets... todas esas promesas revolucionarias suenan hoy como un sarcasmo trágico; para los que las creyeron y para los que las sufrieron. Sus discípulos, también en Chile, aprendieron de él cómo prometer mintiendo.

La pugna desatada entre Stalin y Trotsky a la muerte de Lenin, en 1924, fue una lucha a muerte —literalmente— entre los camaradas bien instalados en el nuevo orden de cosas y los partidarios de la revolución permanente, sector que pondría en peligro los desmesurados privilegios de la nueva clase rectora, la todavía incipiente *nomenklatura.* El terror, elevado a la categoría de norma cotidiana, será la triste con-

108 ALEXANDR SOLZHENITSYN, Discurso de recepción del Premio Nobel de Literatura 1970. Está recogido en su *Alerta a Occidente*, op. cit., p. 18.

secuencia del implante comunista. Pero ese resultado no podía constituir propiamente una sorpresa para las mentes no cegadas por las promesas bolcheviques. El escritor Máximo Gorky, por ejemplo, a pesar de su larga amistas con Lenin, calificó al bolchevismo de "cruel experimento socialista que sólo podrá conducir a la anarquía o al desencadenamiento de los instintos". A fin de cuentas, la Unión Soviética llegó a ser bajo Stalin una potencia militar, pero sin su tiranía, en tantos aspectos típicamente oriental, la revolución comunista en Rusia habría sido un mal recuerdo mucho tiempo antes de cuando efectivamente pasó a serlo. Durante dos tercios del siglo XX el comunismo pareció triunfar, pero sólo al precio de la más atroz degradación de sus seguidores. Y esto, dentro y fuera de las fronteras soviéticas.

Como se ha dicho antes, es inherente a la concepción marxista-leninista de la política una vocación de universalidad. El nuevo credo, supuestamente liberador, debe ser impuesto a toda la humanidad. Es, por tanto, una ideología imperialista por definición. Pero, resucitando una vieja herejía, la maniquea, sólo verá en los otros el pecado imperialista. Así, fiel a su postulado mundial, Lenin, apenas tuvo a Rusia en sus manos, lanzó en el Tercer Congreso de la Internacional Comunista —celebrado en Moscú entre el 22 de junio y el 12 de julio de 1921— otra de sus consignas destinadas a remover el orden de las naciones: ¡Lucha por la conquista de las masas!. Tuvo eco hasta en las antípodas de Rusia y apenas un año más tarde se establecería en Chile el Partido Comunista.

En efecto, Luis Emilio Recabarren, tipógrafo de oficio y revolucionario desde su juventud, se había separado del Partido Demócrata para fundar el 4 de julio de 1912 el Partido Socialista Obrero. Después extendió su labor de agitación política al campo sindical cuando logró controlar la Federación Obrera de Chile, que había sido fundada con espíritu gremial, conservador y cristiano el 18 de septiembre de 1909. Luego, arrastró a ambas entidades al comunismo al obtener su adhesión a la Profintern, esto es, la Internacional Roja de Sindicatos, decisión adoptada en la Cuarta Convención de la Federación Obrera de Chile, celebrada en Rancagua el 25 de diciembre de 1921. También en Rancagua, el 1° de enero de 1922, durante el Segundo Congreso del Partido Socialista Obrero, acordó adherir al Komintern, es decir, a la III Internacional Comunista dirigida por Moscú. Merced a la nueva situación forjada por Recabarren en esa semana, la Unión Soviética tuvo en adelante a su servicio en Chile un partido que se distinguió por su fidelidad a la casa matriz y una agrupación sindical —la Federación Obrera de Chile, primero; la Confederación de Trabajadores de Chile, más tarde, y; la Central Única de Trabajadores de Chile, despues— que le permitió vocear sus consignas en el campo laboral. Recabarren viajó a Moscú, donde participó en el Segundo Congreso de la Profintern, realizada conjuntamente con el Cuarto Congreso del Komintern, entre el 5 de noviembre y el 4 de diciembre de 1922. Allí, cuando sólo hacía pocos meses Benito Mussolini había ocupado el poder en Italia, se lanzó la nueva consigna: ¡Guerra al fascismo!. Vuelto a Chile, Recabarren se suicidó el 19 de diciembre de 1924. Así, el propio fundador del Partido Comunista de Chile puede ser considerado también el primer arrepentido de su obra.

Tanto al Quinto como el Sexto Congreso del Komintern, efectuados en Moscú entre el 17 de junio y el 8 de julio de 1924 y entre 17 de julio y el 1° de septiembre de 1928, respectivamente, asistieron delegados chilenos. En este último se acordó crear el Buró Sudamericano de la Internacional Comunista, con la función de mantener la pureza ideo-

lógica y de señalar la línea política de cada Partido Comunista en este continente. Además de este medio de coordinación general, diversos instructores extranjeros viajaron a Chile para rectificar algunas desviaciones de los comunistas criollos respecto a la ortodoxia stalinista: el argentino Paulino González Alberdi, después del primer gobierno del general Ibáñez; el letón Gurasky, director del mencionado Buró entre 1930 y 1934, lo hizo en septiembre de 1932, y; el peruano Eudocio Ravines, cuyo nombre de guerra era Jorge Montero, a fines de 1935. Éste traía una misión especial, la creación de un Frente Popular, y para ayudarle lo acompañaban un joven camarada alemán, que se hacía pasar por ecuatoriano bajo el nombre de Manuel Cassone; el checo Federico Glaufbauf, encargado de organizar una escuela de mandos; el ruso Kavanov, especialista en subversión; el italiano Marucci, encargado de organizar la juventud del partido, y; el venezolano Ricardo Martínez, encargado de infiltrar los sindicatos.

El Frente Popular fue una invención soviética destinada a hacer posible la penetración de su ideología en aquellas sociedades que, por los valores imperantes en su seno y por su tradición política, no podían ser atraídas franca y directamente a su causa. El acuerdo de su constitución se adoptó en las conferencias secretas de la América Latina, celebradas en Moscú a fines de 1934, entre los delegados sudamericanos convocados al Séptimo Congreso Mundial de la Internacional Comunista. Este Congreso fue interrumpido por el misterioso asesinato de Kirov, ocurrido en Leningrado el 1° de diciembre de ese año, crimen que dió pretexto a Stalin para iniciar las purgas de su propio partido que culminarían en 1937 con la patética parodia de unos procesos judiciales que aniquilaron a la vieja guardia revolucionaria y al Estado Mayor del Ejército Rojo. Pues bien, en aquellas conferencias secretas se enfrentaron dos tesis que permanentemente han sido el contrapunto en la aplicación del marxismo-leninismo fuera de la Unión Soviética: la sostenida por el ucraniano Manuilski, partidario de la insurrección armada, y la defendida por el búlgaro Georges Dimitrov, nuevo Secretario General de la Internacional Comunista, que abogaba por un sistema metódico de infiltración pacífica, un moderno Caballo de Troya. Esta vez la sangre no llegó al río y se llegó a una fórmula de transacción: la insurrección en Brasil y la penetración pacífica en Chile. Acordado lo anterior, se ordenó a Eudocio Ravines la planificación necesaria para constituír en ese país un Frente Popular que agrupando a todas las fuerzas de izquierda fuera monitoreado desde el Kremlin. Una vez reanudado el VII Congreso Mundial de la Internacional Comunista en Moscú, del 25 de julio al 25 de agosto de 1935 —al que asistió Carlos Contreras Labarca, destacado miembro de la Comisión Política del Partido Comunista en Chile y más tarde su Secretario General— se impuso la táctica sostenida por Dimitrov y de inmediato se lanzaron las nuevas consignas: ¡Frente Popular en todo el mundo! ¡Mano tendida a los católicos! En esto consistió el gran viraje estratégico del comunismo de pre-guerra y tuvo por causa las lecciones obtenidas en Alemania, donde los nacionalsocialistas habían aplastado al Partido Comunista más importante del mundo después del soviético. Tal como estaban las cosas, para prevalecer, a los comunistas les era necesario conseguir aliados entre los partidos socialdemócratas, entre los partidos burgueses y los cristianos "progresistas".

Chile fue el primer país del mundo occidental donde se ensayó la nueva táctica, que ya había sido implantada en China por el agente ruso Svanidze, llamándose allí

Experiencia de Sinkiang y más tarde Camino de Yenán. Por eso, antes de trasladarse a Chile, Ravines sostuvo una instructiva conversación con Mao Tse Tung y Li Li Siang, fundadores del Partido Comunista Chino, quienes le pusieron al corriente de sus modalidades de acción. Como ha reconocido el propio Ravines, "la suerte política de Chile fue decidida así, arbitrariamente, por un grupo de extranjeros extraños al destino de Chile, que iban a trabajar en el país al servicio de la Internacional Comunista. (...) Mientras los chilenos dormían plácidamente el sueño garantizado por una eficiente creación democrática, un puñado de intrusos audaces, a miles de kilómetros de distancia, tramaba la conjura que iba a cambiar el destino de la democracia más firme y avanzada de toda la América Latina".[109]

Eudocio Ravines y su equipo de agentes se concretaron, pues, a cumplir la orden impartida por el Komintern en el sentido de constituir un Frente Popular en Chile. Aquí descubrieron que los comunistas eran pocos e indigentes en formación ideológica, por lo que se procedió a reagruparlos en una Conferencia Nacional clandestina donde el equipo enviado desde Moscú suplantó sin miramientos a la dirección del partido. Los nativos se limitarían a cumplir sus instrucciones. Las primeras gestiones en Santiago las tuvo Ravines con los socialistas que dirigía Marmaduke Grove, pero como todavía el socialismo chileno tenía un marcado carácter nacional, sólo obtuvo una respuesta de franco repudio. Entonces encaminó sus sigilosos pasos hacia los radicales, planteándoles que estaban colaborando con Arturo Alessandri en un gabinete ministerial donde imperaba la voluntad de la derecha. Ellos eran nada más que la cola del León —nunca mejor dicho— en cambio si se ponían al frente de toda la izquierda unificada podían llegar a ser la cabeza de un gobierno de nuevo estilo. De más está decir que para sus propósitos era sumamente conveniente que el partido Radical fuera el eje visible de la alianza. Como él mismo ha confesado, "una de las conquistas más valiosas para el Comunismo fue la gran confianza que el Partido logró adquirir en el seno del radicalismo. Sus más conspicuos dirigentes eran amigos y defensores del Partido Comunista. Y, entre esta falange combativa, sobresalía el apoyo que prestaba Gabriel González Videla. Gracias a este apoyo particular y personal, los comunistas chilenos alcanzaron ventajas que sin él no habrían sido conquistadas jamás. (...) Él y Justiniano Sotomayor fueron los extraños, por decirlo así, que mejor y más ampliamente informados estuvieron sobre mi procedencia, la misión que realizaba y la jerarquía y autoridad de que gozaba dentro del comando comunista. Ambos radicales, compartieron la responsabilidad del éxito del Frente Popular y, sobre todo, la del cultivo y florecimiento lozano de la amistad y de la cooperación radical-comunista"[110]

No es posible precisar si fue por el sólo influjo de Ravines o en combinación con otros motivos, el hecho es que los radicales, a comienzos del año 1937, cambiaron de bando y se integraron a lo que por entonces se llamaba Block de Izquierda, formado por socialistas, comunistas, demócratas y por la Confederación de Trabajadores de Chile. Con su inclusión, esta agrupación se reorganizó para dar cuerpo a un nuevo referente político, el Frente Popular.

---

109 EUDOCIO RAVINES, *El rescate de Chile*, Empresa Editora e Impresora Edimpres Ltda., Santiago, 1974, pp. 22 y 23.
110 EUDOCIO RAVINES, *La gran estafa*, Editorial del Pacífico, Santiago, 1954, pp. 332 y 335.

Mientras tanto, otra nación muy cara a los chilenos sufría el ataque comunista. De algún modo, España estaba en el corazón de todos. La solidaridad se hizo patente no sólo para prestar asilo diplomático a los perseguidos de uno y otro bando; también la intelectualidad tomó partido. La izquierda chilena, como es natural, se alineó con el bando rojo.

Como se ha expuesto antes, a propósito de la democracia cristiana, la sucesión de Alessandri fue disputada el 25 de octubre de 1938 por quienes habían sido sus ministros de Interior y Hacienda, Pedro Aguirre Cerda y Gustavo Ross Santa María, respectivamente. El primero, a la cabeza del Frente Popular, venció estrechamente, 222.720 sufragios contra 218.609, votando el 87,9% de los ciudadanos. Como la diferencia era mínima, la derecha solicitó que la decisión quedara en suspenso hasta que se conociera el fallo del Tribunal Calificador, pero Alessandri, temiendo desórdenes que podían ser graves, ordenó que en la medianoche del mismo día de la elección se anunciara el triunfo de Aguirre Cerda. Conviene recordar, además, que fue decisivo en el resultado de esa elección el abrupto retiro de la candidatura del ex-presidente Ibáñez —provocada por una tragedia, la inmolación de 61 jóvenes nacistas en la torre del Seguro Obrero el 5 de septiembre de aquel mismo año— dado que se plegó con sus partidarios a la postulación de Aguirre Cerda. Así, prácticamente como consecuencia de una desgraciada circunstancia, el partido Radical se convirtió en eje de un gobierno con participación comunista. En esa combinación, éstos eran muy débiles y aquéllos muy fuertes; una generación más tarde, merced a un trabajo político de zapa, la correlación de fuerzas luciría exactamente al revés.

La táctica de Frente Popular, siempre a caballo del radicalismo, se repetirá dos veces más y con igual éxito. El 1° de febrero de 1942, esta coalición —rebautizada como Frente Nacional Democrático— obtendrá el triunfo para el radical Juan Antonio Ríos Morales, quien venció a Carlos Ibáñez por 55.000 de los 464.669 votos emitidos. A pesar del apoyo que había recibido de los comunistas, Ríos les mantuvo fuera del gobierno, pero no pudo impedir su impresionante avance en el campo sindical. En las elecciones parlamentarias de 1945 los conservadores y liberales aumentaron su cuota de votos del 31% que obtuvieron en 1941 al 41%, al mismo tiempo que radicales, socialistas y comunistas descendían del 50% al 43%, de manera que no era cosa sencilla reeditar el triunfo de la táctica Frente Popular. Sin embargo, el 4 de septiembre de 1946 la derecha fue dividida en dos candidaturas y, a pesar de sumar el 57% de los sufragios, el Congreso respetó la primera mayoría relativa alcanzada por Gabriel González Videla, el 20,23% de los votos, con lo que dicha táctica —ahora con el nombre de Alianza Democrática— se anotó su último gran triunfo.

Mientras la concepción de Dimitrov mostraba su acierto en Chile, en el campo internacional sucedían cosas muy ingratas al comunismo. Al estallar la Segunda Mundial, el 1° de septiembre de 1939, la Unión Soviética suscribió un inconcebible tratado de no agresión con la Alemania nazi. Los pactantes, como es sabido, fueron el criminal de guerra Ribbentrop y la paloma democrática Molotov. Los comunistas, en consecuencia, viraron en redondo y cambiaron sus consignas. Pero la marea bélica impuso nuevos escenarios y tras la invasión germana a Rusia fue necesario volver a cambiar las consignas; ahora las diatribas eran para la bestia parda y las alabanzas para quienes

hasta ayer eran capitalistas detestables. También en Chile, los comunistas hasta ayer campeones de la no intervención pasaron a ser luchadores por la democracia. Así, el editorial de El Siglo del 21 de junio de 1941 se titulaba "La defensa de nuestra neutralidad", y el del día siguiente "¡Proletarios de todos los países, uníos!". Es decir, a juicio de los comunistas, Chile ya no podía ser neutral.

En absoluta coherencia con la nueva posición, entre las resoluciones aprobadas en la XII Sesión Plenaria del Comité Central del Partido Comunista de Chile destaca la siguiente: "Las medidas de carácter militar consisten en desarrollar al máximo el poder militar ofensivo y defensivo del país. Para ello es preciso aumentar las fuerzas armadas y colocarlas en alto pie de eficiencia, dotándolas de armamento moderno". Debe haber sido la única ocasión en que algún partido político dijo algo así entre 1932 y 1973, salvo el Partido Nacional, el 30 de agosto de 1967, pero ahora dicha opinión fue considerada subversiva por el gobierno y su directiva fue a parar a la cárcel.

El gran vencedor de esa contienda gigantesca fue la Unión Soviética. También en Chile obtuvieron su premio: tres miembros del Partido Comunista fueron nombrados en el primer gabinete del presidente Gabriel González Videla, a saber, Carlos Contreras Labarca en Obras Públicas, Miguel Concha en Agricultura y Víctor Contreras en Tierras y Colonización.[111] También fueron designados algunos comunistas en altos puestos de la administración pública. En ningún otro lugar de Occidente habían alcanzado tanto poder, y todo dentro de la ley. Ahora las directivas de Moscú llegaban en valija diplomática: eclécticamente, se habían establecido relaciones con la Unión Soviética y Yugoeslavia. En las elecciones municipales realizadas en abril de 1947, los comunistas lograron 91.282 votos, el 16,52% del total, con lo que se convertieron en el tercer partido del país, después de los radicales y los conservadores, y duplicando a los socialistas. Tras años de batallar silencioso —"suavemente, gradualmente, (el Frente Popular) ablandó la resistencia nacional contra el comunismo, suavizó las tensiones que circundan los peligros del marxismo, hizo que hasta los más despiertos bajaran la guardia y anestesió la vigilancia de los que estaban más alertos"[112] — los comunistas podían llevar adelante sus propósitos revolucionarios desde el propio aparato estatal.

La huelga revolucionaria estalló en Lota el 4 de octubre de 1947. Inmediatamente fue seguida de mil otros incidentes subversivos. González Videla, que tanto les debía, debió reconocer el espíritu antinacional que animaba a sus aliados. Para cualquier persona medianamente consciente era evidente que por fidelidad a su propio espíritu, los comunistas jamás sacrificaban una ventaja de su partido en aras del interés nacional. González Videla, que les conocía demasiado bien, no podía abrigar dudas al respecto y, sin embargo, la traición de los comunistas le sorprendió. Solicitó y obtuvo del Parlamento facultades extraordinarias para enfrentar la emergencia y el día 21 de ese mes el Consejo de Gabinete ordenó la detención del Comité Central del Partido Comunista y de todos sus dirigentes, los que fueron concentrados en Pisagua. Al mismo

111 Curiosamente, el único precedente que existía en América en orden a integrar comunistas en el gabinete era Cuba. En 1940 Fulgencio Batista recompensó su apoyo con tres ministerios y los mantuvo por cuatro años en sus cargos. Volverían a apoyarlo más tarde, cuando Batista regresó al poder como dictador y luego se unirían públicamente a Fidel Castro para derrocarlo.

112 EUDOCIO RAVINES, op. cit., p. 16.

tiempo dispuso el cese de las relaciones diplomáticas con las potencias comunistas. Por último, el 3 de septiembre de 1948, promulgó la ley de Defensa Permanente de la Democracia, que declaró ilegal al Partido Comunista. Como consecuencia, 26.000 militantes comunistas fueron borrados de los registros electorales. Para hacer efectivas las medidas adoptadas, formó un gabinete de concentración nacional, que incluyó a militares en servicio activo. Era la primera vez en Chile que un gobierno civil apelaba a los hombres de armas para contrapesar el poder de los comunistas.

Desde la clandestinidad, el partido Comunista siguió operando. En el informe de su Secretario General, Galo González, a la Novena Conferencia Nacional, celebrada en septiembre de 1952, se sostiene: "En los últimos años, bajo las condiciones de ilegalidad, nuestro Partido ha tenido grandes transformaciones. Se ha curado de ilusiones legalistas. Ha aprendido a realizar un trabajo más organizado, más en la base, comprendiendo más ampliamente la importancia de la célula como el organismo vital de la organización y de su lucha. Ha realizado una labor editorial más vasta que la del período legal. Se ha rejuvenecido con el aporte de nueva sangre, de los nuevos combatientes, que en algunas partes alcanzan a la mitad o más de la mitad de los militantes del Partido. Se ha fortalecido política y orgánicamente". Probablemente era cierto, pero no se debe perder de vista que lo que estaba en discusión era la conveniencia o no de legalizar nuevamente la existencia del comunismo en Chile. Y esa decisión no dependía de ellos. Cada vez que se discuta esta cuestión parecerá lógico preguntarles a ellos mismos que prefieren... y obviamente desean ser considerados un partido más, aunque por su naturaleza y dependencia no lo sean.

En las elecciones presidenciales de 1952, como se ha dicho, el telón de fondo fue la "marcada pérdida de prestigio de los partidos políticos, los que, en opinión de la mayoría del país, habían demostrado su incapacidad para orientar y guiar las aspiraciones nacionales".[113] Para una población ya aburrida de la politiquería, Carlos Ibáñez representaba la esperanza nostálgica de un regreso al orden y a la estabilidad, a poner en el centro la preocupación por el interés nacional y en los márgenes la cuestión partidista. La voluntad popular era muy clara al respecto, pues quienes personificaban ambos extremos de lo que debe ser la política obtuvieron el 46,79% de los votos, Ibáñez, y el 5,45%, Allende. Después, ratificando el cansancio que había producido la política de partidos, las elecciones municipales de 1956 contaron con el más bajo número de votantes de los últimos años, apenas el 61,73% de los ciudadanos inscritos. Una vez más ganó la derecha, pero como no iba unida, volvió a ser perdedora. A medida que fue pasando el tiempo se hizo evidente que la gestión del presidente Ibáñez estaba empantanada en la lucha partitocrática y no puede extrañar, en ese contexto, que una de las últimas medidas adoptadas durante su mandato haya sido la derogación de la ley de Defensa Permanente de la Democracia. De hecho, hacía ya varios años que la proscripción del comunismo sólo tenía un contenido formal. Servía a efectos retóricos; a unos para invocar la permanente amenaza roja, a otros para justificar una aureola romántica de perseguidos por sus ideas. Pero la verdad es que nadie les tomaba demasiado en serio y la ley se aplicaba con laxitud condescendiente. Un refinado burgués como Neruda, por ejemplo, catapultado a la cima del Parnaso

113 LUIS GALDAMES, *Historia de Chile: Prehistoria a 1970*, Productos Raval, Santiago, 1974, p. 515.

en virtud a su militancia comunista —lo que en nada desmerece el mérito intrínseco que pueda tener su poesía— podía escribir en 1953: "Camarada Stalin, yo estaba junto al mar en Isla Negra, / descansando de luchas y de viajes, / cuando la noticia de tu muerte llegó como un galope de océano. (...) Junto a Lenin / Stalin avanzaba / y así, con blusa blanca / con gorra gris de obrero / Stalin, / con su paso tranquilo / entró en la Historia acompañado / de Lenin y del viento".[114] ¿A quién podía importarle que un comunista alabara a los infames más grandes de este siglo?

A fin de cuentas, de la confusión de esos años surgirían con mayor potencia que nunca las dos formaciones ideológicas existentes en Chile, la democracia cristiana y el marxismo. Si todas las fuerzas de izquierda hubieran enfrentado unidas la contienda presidencial de 1958, podrían haber triunfado. Pero los socialistas y comunistas pensaron que su contingente era suficiente para alcanzar la primera mayoría relativa —ya no necesitaban a los radicales— y en la otra punta la derecha sí logró en esta oportunidad coincidir en un candidato, por lo que éste triunfó con el 31,2% de los votos.

En las condiciones electorales descritas, a Carlos Ibáñez le sucedió Jorge Alessandri. "Alto, imponente, taciturno —le describe Whelan— tenía fama de ser un hombre irascible a quien no sólo le disgustaba la política, sino que detestaba pronunciar discursos y enfrentar grandes multitudes. Había quienes señalaban que ni siquiera le gustaban las pequeñas multitudes: nunca se casó. Austero e impecablemente honesto, vivía en total simplicidad en su departamentito de soltero, ubicado frente a la Plaza de Armas, y caminaba hacia y desde ahí a casi todas sus citas. Aún después de ser elegido Presidente de la República continuó ambas tradiciones, el pequeño departamento y el ir caminando a la ´oficina`. Chile estaba maduro para un hombre así".[115]

En los más variados campos del acontecer nacional el gobierno de Jorge Alessandri fue un éxito. Ordenó la casa, como se suele decir, imponiendo a la dirección de los asuntos públicos un sello de decoro que se tradujo en un acelerado progreso y en un renovado prestigio del país. Se había impuesto el sentido común. Con todo, esa realidad innegable poco podía hacer frente al discurso ideológico. Alessandri tenía razón, pero sólo tenía razón. La ideología, en cambio, es una fe.

En esos años de dulce interludio —porque la administración Alessandri fue un paréntesis de transición hacia una nueva época de predominio ideológico— ningún otro país de Latinoamérica fue más admirado que Chile. "Sus instituciones políticas eran consideradas con asombrosa reverencia; sus innovaciones sociales y su legislación de avanzada eran comentadas y copiadas. Su pueblo era la envidia de todos, por su estabilidad, la sociedad igualitaria que se estaba forjando, por su relativa prosperidad. Más aún, los chilenos llevaban sus triunfos con gracia, y esto reforzaba su posición como quizás el pueblo latinoamericano más popular del mundo", dice Whelan.[116] Pero esa extendida y superficial impresión no se correspondía con lo que se estaba larvando en la sala de máquinas.

---

114 PABLO NERUDA. *Las uvas y el viento*, VI, 5.

115 JAMES R. WHELAN, *Desde las cenizas. Vida, muerte y transfiguración de la democracia en Chile. 1833-1988.* Editorial Zig-Zag, Santiago, 1993, p. 108.

116 Idem., p. 122.

En efecto, una vez de regreso en la legalidad, los primeros comicios en que participaron los comunistas fueron los municipales en 1960, obteniendo el 9,2% de los votos. Al menos electoralmente, la clandestinidad no les había hecho bien. Tampoco hay que desdeñar el impacto que en la opinión pública habían producido las sorprendentes revelaciones de Nikita Kruschev ante el Vigésimo Congreso del Partido Comunista Soviético, en 1956. El hasta ayer idolatrado padrecito Stalin, al fin y al cabo, era el criminal más grande de todos los tiempos. Y su régimen, cuyas estructuras estaban todavía intactas, descansaba sobre un inmenso Gulag. Luego, en las legislativas de 1961, subieron al 11,4% y en las municipales de 1963 alcanzaron el 12,4%. Los socialistas, en las mismas elecciones, obtuvieron el 10,4%, el 10,7% y el 11,1%. Los radicales, al mismo tiempo, mostraban un resultado parejo en torno al 21% de los votos.

De acuerdo a esas cifras, al menos teóricamente, el viejo Frente Popular todavía podía ser una agrupación poderosa; pero habían cambiado los supuestos básicos sobre los cuales se había construido un cuarto de siglo antes. Ya no había ardiente lucha antifascista, sino una solapada Guerra Fría. El mundo entero se había abanderizado tras alguna de las superpotencias, la Unión Soviética y los Estados Unidos. La lógica de la política nacional, en adelante, no podía prescindir de esta realidad y la segunda mitad del gobierno de Jorge Alessandri respondió más o menos conscientemente a una política diseñada en Washington para Latinoamérica, la Alianza para el Progreso.

Como se ha visto anteriormente, a propósito de la democracia cristiana, el "naranjazo" de Curicó provocó el desbande de la derecha y permitió a Eduardo Frei acceder cómodamente al poder. Frente a ese hecho, la pregunta lógica que debían hacerse los marxistas era, ¿cómo aprovechar las nuevas circunstancias para hacer la revolución? La respuesta no podía prescindir del castigo recibido en 1947, cuando intentaron hacerse con el poder "a la bolchevique", confiando en que por viejas deudas tenían atado a González Videla. Las condiciones objetivas de la sociedad chilena, preponderantemente de clase media, entonces y ahora estaban lejos de ser propicias para un asalto al Palacio de Invierno. La intentona, según sus propios cánones, había sido un error. Esa era una experiencia que los comunistas no olvidaban ni tenían interés en repetir. De otra parte, mirando al entorno, Chile evidentemente no era Cuba. Se hacía, pues, indispensable, abordar la revolución desde un ángulo más sutil y diseñar la estrategia adecuada. Un hecho externo contribuyó a orientar la búsqueda de un nuevo método para llegar a dominar el Estado: en 1962 la propia Unión Soviética había renunciado al choque frontal tras el bochornoso retiro de los cohetes instalados en Cuba y proclamaba ahora, a voz en cuello, una era de coexistencia pacífica. El acento tenía que ponerse en el trabajo ideológico. En esa dirección los comunistas criollos iniciaron una maniobra de amplias proporciones, tendiente a desplazar todo el espectro político hacia la izquierda, para lo cual infiltraron simultáneamente al partido gobernante y al radicalismo, empresa en la que tuvieron pleno éxito. Al radicalismo le succionaron la gente, dejándolo convertido en una cáscara vacía; a los democratas cristianos les inyectaron sus ideas, dejándolos convertidos en un satélite.

Las principales consideraciones estratégicas del comunismo en esta etapa están contenidas en cuatro artículos de Luis Corvalán, Secretario General del Partido Comu-

nista de Chile, reunidos en un librito de título inequívoco: Nuestra vía revolucionaria.[117] Como señala el autor, dichos artículos "abordan una cuestión a la cual se le confiere gran importancia, una de las tesis marxistas planteadas en el XX Congreso del Partido Comunista de la Unión Soviética, la tesis acerca de la posibilidad del tránsito pacífico del capitalismo al socialismo en una serie de países. (...) Lo hace en virtud y función de la experiencia chilena y sin más propósito que el de contribuir a divulgar y explicar la línea del Partido Comunista de Chile, a poner de relieve el camino más probable de la revolución chilena en lo que respecta a formas y sólo es un aparte de ese camino, en el trecho correspondiente a la lucha por la conquista del poder político, por instaurar un gobierno popular, democrático, antifeudal, antimonopolista y antiimperialista, no todavía socialista. (...) En la comparación de las vías se ha ido ganando en cuanto a terminología y, desde luego, a pensamiento. Con justa razón ya no se habla de vía pacífica o vía violenta, como se hace en el segundo artículo de este folleto, escrito hace más de dos años. Hoy se habla de vía pacífica o vía no pacífica o también de vía pacífica o vía armada, atendiendo a lo predominante. Es buen avance. Pero aún queda la calificación de pacífica para una de las vías, calificación que parece no ayudar a la comprensión de su contenido. Tal vez sería más afortunado hablar de vía armada y vía no armada".[118]

Efectivamente, tal como lo reconoce Corvalán, ya en el año 1964 lo de vía pacífica era un eufemismo que si bien podía servir para desorientar a la opinión pública, no podía engañar a los que reconocen desde lejos un lobo con piel de oveja. De hecho, muchas de las personas que ese año dieron su voto a Eduardo Frei lo hicieron convencidas de haber contribuido a derrotar en las urnas una amenaza totalitaria, la marxista leninista. Y tenían razón. Como se acaba de citar, no era la campaña del terror —como se denomina en Chile a cualquier intento por explicar qué es el comunismo— la que había inventado que todo el asunto se reducía a emplear o no los fusiles según las circunstancias. Era el propio Secretario General del Partido Comunista de Chile quien daba a entender que existía la determinación de usarlos: "Que quede claro, entonces, nosotros no buscamos la violencia. No la queremos y en toda circunstancia haremos lo posible por llevar o hacer retornar los acontecimientos a la vía menos dolorosa. Pero que también quede en claro que el pueblo está dispuesto a luchar en todos los terrenos".[119] Y en cuanto al sentido de la vía pacífica, afirmaba: "Hay también algunas personas que identifican la vía pacífica con los cauces legales o constitucionales, lo cual es completamente erróneo. Partidarios como somos de la vía pacífica, queremos al mismo tiempo que el movimiento obrero y popular rompa con el lastre del legalismo y se guíe, antes que por las leyes y la Constitución dictadas por la burguesía, por sus propios intereses de clase, considerando la situación concreta de cada momento".[120]

De otra parte, y es un elemento de la situación que debe tomarse en cuenta al analizar esa época, comunistas y socialistas habían consolidado su unión no sólo en torno a la común ideología marxista, sino además en su aplicación práctica, coinci-

---

117 LUIS CORVALÁN LEPE, *Nuestra vía revolucionaria*, s.p.i., Santiago, 1964.

118 Idem., pp. 7-9.

119 Idem., p. 82.

120 Idem., p. 24.

diendo en la aceptación de la violencia como arma política para conquistar el poder. Así, en un discurso pronunciado en el XX Congreso General del Partido Socialista, Luis Corvalán podía iniciar su intervención con un reconocimiento muy significativo: "Quiero comenzar diciendo que pronuncio la palabra camaradas con la íntima convicción de que socialistas y comunistas nos hemos convertido y nos convertimos cada vez más en soldados de una misma causa revolucionaria y popular, en combatientes de un mismo ejército, en camaradas de armas. Poseído de este sentimiento, les transmito el saludo fraternal y afectuoso del Comité Central del Partido Comunista de Chile y de todos los comunistas chilenos que luchan codo a codo con sus camaradas socialistas por las reivindicaciones y los derechos vitales de la clase obrera, por la formación de un gobierno popular, por la independencia nacional, el bienestar del pueblo, la democracia, la paz y el socialismo. Saludo de todo corazón al delegado de la Liga de los Comunistas de Yugoslavia, camarada Ofolnik Bogban, y al representante de la heroica revolución argelina, camarada diputado Kouider Allani, a quienes pido se consideren también huéspedes de los comunistas chilenos. (...) La lucha por la conquista del poder está en pleno desarrollo y tiene múltiples formas de expresión. Se desenvuelve dentro y fuera de los marcos de la legalidad burguesa e incluso con no pocas acciones de violencia, organizadas y responsables, como han sido las tomas de terrenos y tierras en las que han participado millares de pobladores y cientos o miles de campesinos y mapuches".[121] Como se ve, el propósito de comunistas y socialistas era materializar la revolución y escalar al poder para llegar a formar un gobierno popular que tendría por ejemplo a los socialismos reales, a las tiranías totalitarias que el mundo conocía muy bien. Y en cuanto a sus métodos, sólo podía engañarse quien quisiera hacerlo. A la política diseñada para alcanzar esa meta se la denominó "vía chilena al socialismo".

La particularidad de la "vía chilena al socialismo" consistía en que sin dejar de lado los postulados bolcheviques, es decir, sin renunciar a la aplicación de la violencia para reducir a sus adversarios, se utilizarían, mientras fuera conveniente, los instrumentos legales que el propio sistema burgués brindaba a los que no creían en él, a los que aspiraban a sustituirlo revolucionariamente. Desde un prisma táctico, era una alternativa válida que entroncaba con la ya clásica concepción de Dimitrov. Sólo que el engaño era mayor, porque ahora los comunistas no se conformarían con mover los hilos desde atrás del trono, sino que conducirían abiertamente el proceso. Esta conducta turbia, enmascarada con juegos de palabras, calzaba perfectamente con la mentalidad comunista. Como le recordó pedantemente en una ocasión Regis Debray a Allende, "usted sabe que el leninismo no tiene nada contra las componendas, siempre que sean absolutamente necesarias y no pongan en peligro el desarrollo a largo plazo de la lucha de clases..."[122] Si este camino resultaba exitoso, podría intentarse algo similar en otras latitudes. De ahí su importancia y el interés que suscitó en los centros del poder mundial.

Mirando las cosas retrospectivamente, Eduardo Frei las resumió diciendo que Chile, "durante los últimos lustros había sido en cierta manera un pequeño e intenso laboratorio de las más diversas experiencias políticas. Su democracia abierta, sin las

121 Idem., pp. 84, 88 y 89.
122 En JAMES R. WHELAN, op. cit., p. 228.

rigideces pero también sin las raíces de las viejas culturas y sociedades europeas, cuyas ideas se trasplantan a estas tierras nuevas con toda su explosiva carga, había conocido en pocos años una forma de social democracia a través de varios gobiernos, entre ellos, del Partido Radical, de la Derecha y, en seguida, la transformación iniciada por la Democracia Cristiana. Por último llegaba al poder a través de elecciones y por la ´vía legal` una combinación integrada fundamentalmente por el Partido Comunista y por un Partido Socialista que, al revés de otros que corresponden al concepto de social-democracias, declaraba en forma oficial su inspiración marxista-leninista y su desprecio por ´la democracia y la legalidad burguesas`. En América Latina y en Europa, especialmente en Francia e Italia, el caso chileno podía servir como un ejemplo a quienes, al ver cortados otros caminos, tenían la esperanza de llegar al poder a través de elecciones, y demostrar así que el comunismo y los partidos de inspiración marxista-leninista y sus gobiernos podían ser compatibles con el régimen democrático y sus instituciones".[123]

Proponer al país un gobierno que a pesar de su inspiración marxista-leninista fuera compatible con el régimen democrático y sus instituciones, suponía contar con un abanderado adecuado a ese propósito. Por razones obvias, de credibilidad en último término, no podía ser un comunista. Por eso, en la negociación pertinente —que los comentaristas de la época llamaron la mesa redonda de la Unidad Popular— ese partido propuso un nombre meramente testimonial, una ficha que pudiera ser transada sin mayor dificultad, Pablo Neruda. La iniciativa les correspondía a los socialistas; desde el punto de vista electoral las demás fuerzas, radicales, mapucistas y socialdemócratas, eran apenas comparsa. Al interior del Partido Socialista, siempre fragmentado por rencillas ideológicas y personales, se presentaron tres corrientes, una encabezada Carlos Altamirano, que no postuló a nadie, otra por Aniceto Rodríguez y la última por Salvador Allende. Tal vez por su larga trayectoria electoral en tres lides presidenciales anteriores, en provincias era más conocido el nombre de este último, hecho que determinó la renuncia de la postulación de aquél. Pero —y es un dato curiosamente omitido— al pronunciarse los miembros del Comité Central del Partido Socialista, Allende obtuvo 12 votos y al mismo tiempo hubo 13 abstenciones. Como escribió un comunista, "de este modo el senador Allende se convertía en el tercer pre-candidato presidencial de la izquierda, con el apoyo de una minoría de los dirigentes de su propio Partido".[124] El hecho tendría consecuencias, especialmente en orden a disciplinar la facción más ardientemente revolucionaria del socialismo, encabezada por el senador Carlos Altamirano.

El triunfo alcanzado por la Unidad Popular el 4 de septiembre de 1970 se explica mecánicamente por la competencia a tres bandas en que ocurrió la elección presidencial efectuada ese día. En la oportunidad, Salvador Allende obtuvo 1.070.334 votos, es decir, el 36,2% de los sufragios válidamente emitidos; Jorge Alessandri, 1.031.159, lo que representa el 34,9%, y; Radomiro Tomic, 821.801, esto es, el 27,8%. En este sen-

---

123 EDUARDO FREI MONTALVA, prólogo a GENARO ARRIAGADA HERRERA, *De la "vía chilena" a la "vía insurreccional"*, Editorial del Pacífico, Santiago, 1974, p. 10.

124 EDUARDO LABARCA GODDARD, *Chile al rojo*, Ediciones de la Universidad Técnica del Estado, Santiago, 1971, p. 223.

tido, de especial relevancia para el éxito electoral de la Unidad Popular fue haber logrado desenganchar a la democracia cristiana de los independientes y partidos de derecha, agrupados ahora en el Partido Nacional. De otra forma, como lo revelan las cifras, Allende habría estado lejos de ser elegido.

Pero en una perspectiva ideológica el resultado es más complejo y no admite una explicación mecánica. Como se ha dicho, la estrategia montada pacientemente por las fuerzas marxista-leninista en su marcha hacia el poder descansaba en el paulatino desplazamiento del escenario político hacia la izquierda, en la pulverización del centro político que de algún modo representaba el viejo Partido Radical y en el trasbordo de sus postulados revolucionarios a la democracia cristiana, operaciones que cristalizaron en 1970. Como dice Whelan, Allende "no fue un fenómeno extraño que irrumpió de repente en la vida de Chile, un misil guiado que produciría el choque entre capitalismo y comunismo. Si lo hubiera sido, su ejemplo no sería nada más que una curiosidad producto de la Guerra Fría. Fue, por el contrario, la culminación de un proceso político que ya tenía cincuenta años cuando él llegó a tropezones a la Presidencia y era el producto de fuerzas sociales tan antiguas como la sabia república que él llevaría a la ruina. Hasta sus programas —durante el breve lapso en que pudo pretender con seriedad que tenía un programa consciente— casi no se diferenciaban de los de sus principales rivales, los democratacristianos, ni habían sido realmente distintos hacía muchos años. Hubo muy poco de ´revolucionario` en su proyecto dentro del contexto chileno de la época, lo cual hizo que pareciera más engañoso aun el canto de sirena con que disfrazó su trampa totalitaria."[125]

En efecto, el gobierno democratacristiano fue sólo el antecedente inmediato y quizás necesario de un gobierno marxista-leninista en Chile. No son pocos los que consideran que la pérdida de su ideario primigenio, el de la época de la Falange Nacional, y su reemplazo por categorías al menos marxistoides, les convirtió fatalmente en una suerte de ambiguo pasillo hacia la izquierda pura y dura. No fue casual, entonces, que el contenido del programa sustentado por Tomic fuera similar al de la Unidad Popular, hecho que se corresponde con la existencia previa de un pacto secreto entre Tomic y Allende —revelado por un comunista, Eduardo Labarca Goddard, en su libro Chile al Rojo— y que, ante el escándalo que suscitó, el abanderado demócrata cristiano se apresuró a calificar de simple clarificación de intenciones. La verdad es que Tomic no tenía ningun deseo de frenar a Allende; mucho más le interesaba cerrar el paso a Alessandri. Una anécdota puede ayudar a poner a cada uno en su lugar. El empresario Milan Platosvski ha contado en sus memorias que conoció al presidente Eduardo Frei, "jugamos golf en múltiples oportunidades; era un hombre inteligente, simpático, honorable y bien intencionado. A medida que se acercó la elección de 1970 el gobierno de Frei fue cometiendo errores cada vez más graves. Quizás el peor de todos fue proponer a Tomic como su sucesor. Conocía al candidato DC en su calidad de representante exclusivo de las empresas estatales yugoslavas, cuando en Yugoslavia gobertaba el mariscal Tito. Pienso que esta cercanía a Tito lo contaminó. En ese tiempo Tito era visto en los países occidentales como una especie de comunista renovado y tengo

125 JAMES R. WHELAN, op. cit., p. 19.

la sospecha de que Tomic se veía a sí mismo como el Tito chileno. Por esas casualidades del destino tuve como secretaria a quien había cumplido las mismas funciones con Tomic. Cuando se hizo inevitable que él sería candidato, ella, junto a su familia, emigró a los Estados Unidos. 'Haga lo mismo`, me dijo, 'entre Allende y Tomic no hay diferencia y con la derecha dividida y sin un candidato joven, Chile está perdido`".[126]

El triunfo de la Unidad Popular, incluso por una razón de respeto intelectual a los comunistas y socialistas criollos, no puede sino ser considerado un quiebre total, absoluto, con la tradición republicana. En adelante detentaría el poder una coalición ideológica cuya fidelidad no estaba en la nación chilena sino en postulados revolucionarios conocidos por todos, encarnados en un "hermano mayor", la Unión Soviética, y cuyo ejemplo más cercano, geográfica y emocionalmente, era la experiencia cubana. Así, los consensos básicos de la sociedad imperantes hasta ese momento, fueron amenazados no desde la periferia, como hasta entonces, sino desde el mismo centro de impulsión política, desde el gobierno del Estado. Y en el contexto de la Guerra Fría, significaba que Chile cambiaba de bando. Por todo ello, la elección de Salvador Allende marcó el instante preciso en que la democracia chilena colapsó.

Las consecuencias de la elección de Allende, esto es, lo que efectivamente ocurrió durante los mil días de la Unidad Popular, constituyen una materia que no corresponde tratar en esta sección. Baste dejar apuntado que el sustrato ideológico que animó dicha experiencia ya estaba claramente prefigurado en lo que había sido la evolución del comunismo y del socialismo chileno. Con todo, para indicar la significación de ese hecho político determinante, puede ser útil dejar constancia del sentido que le atribuyeron tres hombres muy diferentes en formación y temperamento. Luis Corvalán, en su Informe al Pleno del Comité Central del Partido Comunista de 26 de noviembre de 1970, afirmó que el caso chileno, "por lo que atañe al Partido Comunista, éste se hallaba plenamente convencido de que, por muchas y notorias que sean las particularidades que presenta la realidad chilena —particularidades que se empeña en tener en cuenta rigurosamente— no se puede prescindir en modo alguno de la debida consideración de las leyes universales que rigen el paso al socialismo".[127] El presidente Eduardo Frei —que vió venir la tormenta mientras "estaba en una especie de trance hamletiano"[128]— aseguraba en privado que la elección de Allende iba a ser "un desastre para Chile".[129] Y en Iquique, al anochecer del 4 de septiembre de 1970, cuando se hizo evidente que Allende alcanzaría la primera mayoría relativa, el Comandante de la VI División de Ejército, general Augusto Pinochet Ugarte, se reunió con el personal de oficiales del Cuartel General y les dijo: "El pueblo de Chile no sabe el camino que ha tomado. Ha sido engañado, pues

---

126 MILAN PLATOVSKY STEIN, *Sobre vivir*. Memorias, Editorial Andrés Bello, Santiago, 1997. La cita en reseña de El Mercurio, 26.10.97, p. D 19.

127 LUIS CORVALÁN LEPE, *Camino de victoria*, Imprenta Horizonte, Santiago, 1971, p. 409.

128 JAMES R. WHELAN, op. cit., p. 281. Su fuente es Robert Berrellez, Director de Relaciones Interamericanas de la ITT, con sede en Buenos Aires, que en un memorandum fechado el 29 de septiembre de 1970 informa que "todas las evaluaciones anteriores sobre la debilidad de Frei en momentos de crisis están siendo confirmadas. Peor aun ha quedado establecido fuera de toda duda que ha estado negociando con duplicidad, para preservar su propia estatura e imagen como el campeón de la democracia en Latinoamérica. Por ejemplo, él dijo a algunos de sus ministros que estaba completamente dispuesto a ser derrocado por un golpe militar que, a su vez, echaría abajo a Allende. Luego se dió vuelta y dijo al jefe militar que estaba totalmente en contra de un golpe".

129 Idem., p. 281.

parece ignorar a dónde nos llevará el marxismo leninismo. Señores oficiales, creo que será el fin de la vida independiente de nuestro amado Chile, que a la larga pasará a ser un satélite de la Rusia Soviética. Existe una remota posibilidad de que el Congreso rechace al señor Allende o bien que éste cambie de rumbo, lo que me parece difícil, porque ahora va a ser controlado muy de cerca por los comunistas para evitar que modifique su política. Esta es una de las noches más amargas de mi vida".[130]

La violencia política.

Una de las expresiones más notables del consenso básico de la nación chilena fue siempre el estilo formal, legalista si se quiere, que presidió su orden de convivencia y, por cierto, su evolución política. Los hechos de violencia con mayor significación política, porque a veces los hubo, solían presentarse militarmente encuadrados, como ocurrió, en la Guerra de la Independencia, en las sublevaciones de 1851 y 1859 y en la Guerra Civil de 1891. Las intervenciones militares de 1924, 1925 y 1932 fueron incruentas. Casos como el asesinato del ministro Diego Portales, fueron la excepción. Aquí, muy pronto, el Estado monopolizó el uso de la fuerza y, cuando fue empleada, generalmente tuvo por fin neutralizar a quien pretendiera alterar violentamente el tranquilo decurso de la vida ordinaria de la población.

Desde el momento ya lejano en que se afianzó el consenso básico de clase media, es decir, cuando la democracia de minorías del siglo XIX devino en democracia de masas, la presencia de la violencia como elemento configurante de la actividad política partidista ha tenido una sola causa y ella está vinculada al surgimiento de una ideología, la marxista-leninista, de la que constituye uno de sus elementos esenciales.

Quizás fue en 1918 cuando se produjo en Valparaíso el primer hecho de violencia que tuvo por explicación una consideración ideológica. En esa oportunidad el Partido Socialista Obrero dirigido por Emilio Recabarren convocó a una huelga general, que resultó crítica en el sector portuario. El gobierno dispuso que personal militar reemplazara a los huelguistas y cumpliera las tareas que normalmente realizan los estibadores. Mientras se descargaba un buque que transportaba salitre, estalló una bomba oculta en un saco y dió muerte a un soldado. Nunca se había visto en Chile una acción tan cobarde, anónima y sin motivo causal con el afectado. Como consecuencia, en medio de la indignación general, fueron detenidos los agitadores Elías Lafferte y Guillermo Madariaga. Ese tipo de acciones, propiamente terroristas, eran desconocidas en nuestro medio, pues si bien es cierto que durante los últimos años habían ocurrido en el norte incidentes graves entre turbas de huelguistas descontrolados y la fuerza pública, incluso con resultado de muerte por ambas partes, ellas se habían producido en un contexto muy preciso, esto es, el empeño por restituir el orden público amenazado.

Con la fundación del Partido Comunista de Chile, el 1° de enero de 1922, aparece la primera fuerza política que tiene por meta la revolución y que acepta la utilización

---

130 AUGUSTO PINOCHET UGARTE, *El día decisivo, 11 de septiembre de 1973*, Editorial Andrés Bello, Santiago, 1979, p. 47. También está recogido en, del mismo autor, *Camino recorrido. Memorias de un soldado*, Talleres Gráficos del Instituto Geográfico Militar, Santiago, 1990, p. 205.

de la violencia como medio de acción para lograr sus fines. Desde ese día la violencia política fue una espada de Damocles sobre el consenso básico imperante y sobre el sistema democrático que constituye su expresión política. Nadie, ni en el plano personal ni en el colectivo pudo dejar de adoptar una posición al respecto. El punto es capital, una cuestión de principios. Como dice Lenin: "Nosotros nunca hemos rechazado el terror, en principio, ni podemos hacerlo. (...) Desde luego, rechazamos el terror individual tan sólo por simples consideraciones de utilidad, y amontonamos ridículo y desprecio sobre la cabeza de aquéllos que ´en principio` fueron capaces de condenar el terror de la Revolución Francesa, o el terror en general empleado por un partido revolucionario victorioso asediado por la burguesía del mundo entero, como lo hizo incluso Plejanov en 1900-1903, cuando era marxista y revolucionario".[131]

En el ambiente terco y agrio en que se desenvolvió en Chile la "cuestión social", los comunistas, merced a su intenso trabajo de propaganda, organización y agitación, sacaron a los movimientos huelguísticos del plano reivindicacionista, propiamente laboral, en que se habían desenvuelto y les dieron una connotación revolucionaria. Así, "la tensión política se vió acentuada por grupos izquierdistas que difundían con éxito las ideas bolcheviques en los medios obreros, en especial en las salitreras y en la zona del carbón".[132] La situación se morigeró significativamente a raíz de las medidas sociales adoptadas por el movimiento militar del año 1924 que, como se ha visto, hizo promulgar en horas la legislación social que por años había estado pendiente en el Senado.

El resultado de la elección presidencial de 1927 constituyó una aplastante derrota para los comunistas. Ellos levantaron la candidatura de su líder Elías Lafferte para enfrentar al entonces coronel Carlos Ibáñez, y este último obtuvo el 98% de los sufragios emitidos. No eran, pues, una fuerza electoral relevante. Su importancia radicaba en otros factores de poder, ajenos al estilo democrático de entender la actividad política.

Convencido de la necesidad de neutralizar su acción disolvente, Ibáñez les trató con rigor. Muchos de sus dirigentes fueron relegados a la isla de Pascua, Castro, Ancud, Calbuco y Puerto Montt.

Tras la renuncia del presidente Ibáñez, el 26 de julio de 1931, "el Partido Comunista logró reorganizar sus fuerzas con rapidez y, convencido de que el momento les era favorable, comenzó a aplicar una estrategia de extraordinaria agresividad".[133] Así, por ejemplo, habiéndose infiltrado en la tripulación del acorazado Almirante Latorre mientras era sometido a un programa de modernización en Davenport, Inglaterra, indujo a la sublevación de la Escuadra de Operaciones que ocurrió en Coquimbo el 1° de septiembre de ese año. Al mes siguiente nació la Orden Socialista, que propugnaba alcanzar el poder siguiendo el ejemplo bolchevique. A la par y en sentido contrario, miembros en retiro de las Fuerzas Armadas crearon la Legión Social Nacionalista, con el propósito de "oponerse a los avances del comunismo y defender un bien entendido

131 Citado en WALDEMAR GURIAN, op. cit., p. 202.
132 SERGIO VILLALOBOS y otros, op. cit., p. 910.
133 Idem., p. 926.

socialismo de Estado".[134] Siguiendo la escalada, en la Nochebuena de aquel mismo año, una formación comunista integrada por aproximadamente 50 hombres asaltó el cuartel del II Batallón del Regimiento Esmeralda en Copiapó, unidad que en ese momento no tenía contingente y se aprestaba para trasladarse a Antofagasta. Tras cuatro horas de intensa acción, fueron rechazados por la reducida guardia al mando del subteniente Juan Forch Petit y el personal de franco que se sumó a la defensa. Hubo que lamentar bajas y el escarnio que significó el indulto que a los pocos meses recibieron los agresores por parte del gobierno socialista presidido por Carlos Dávila. Hasta la débil República Socialista instaurada por Dávila fue objeto de un intento de golpe comunista, que ocuparon diversos puntos neurálgicos de Santiago e instalaron su cuartel general en la casa central de la Universidad de Chile, estableciendo en La Legua una organización al estilo de los soviet. Una vez sofocada la intentona, fueron relegados a la isla Mocha más de 100 comunistas, socialistas y anarquistas, entre ellos Elías Lafferte, Galo González, Juan Chacón Corona, Inés Infante, Astolfo Tapia y Oscar Weiss.

Para el órgano del Estado encargado de garantizar la seguridad de la comunidad nacional, pronto se hizo evidente que con la presencia del comunismo y las fuerzas que éste genera como reacción se había alterado el sentido mismo de la actividad política en Chile. Sus prácticas, comprendidas en ellas la violencia y el terrorismo, no podían sino contaminar a todo el sistema. De ahí en adelante, con cierta fatalidad, "la naturaleza beligerante de la sociedad de masas se manifiesta muy claramente en todos los grupos fascistas, semifascistas y en todos los grupos comunistas. (...) Para estos conglomerados la actividad política se transforma en un campo de batalla, en el cual se persigue el aniquilamiento de los grupos contrarios".[135]

A los pocos meses de haber iniciado Arturo Alessandri su segundo período presidencial, se fundó el Partido Socialista de Chile. Allí se unificaron diversas fuerzas de izquierda hasta entonces dispersas y que, por una razón u otra, no deseaban integrarse al Partido Comunista. Entre sus fundadores estaba Salvador Allende Gossens. En cuanto al carácter de este nuevo referente político, cabe señalar que "mientras su orientación siempre fue marxista, el Partido no se cambió a la extrema izquierda del espectro político hasta 1948. Desde entonces ha sido considerado de tendencia más radical que los mismos comunistas".[136]

También el gobierno de Alessandri recibió el embate de la violencia comunista y hubo de adoptar medidas. Varios dirigentes fueron detenidos, entre ellos Elías Lafferte que fue relegado a Porvenir y Juan Segundo Leiva Tapia a la isla Melinka. El 18 de septiembre de 1933 les benefició una amnistía y, aunque posteriormente no cejaron en su tarea revolucionaria, "la formación de fracciones trotskistas y stalinistas, en permanente antagonismo, les hizo perder eficacia".[137] Durante ese mismo período y bajo la conducción del recién mencionado Leiva, en la zona del Alto Biobío, Ranquil y Lonquimay los

134 Idem., p. 928.

135 Estado Mayor General del Ejército, *Historia del Ejército de Chile*, Tomo IX, p. 24.

136 Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos (OEA), Comisión especial de consulta sobre seguridad contra la acción subversiva del comunismo internacional, *El proceso marxista-leninista en Chile*, Washington D.C., 1974, p. 165.

137 SERGIO VILLALOBOS y otros, op. cit., p. 926.

comunistas establecieron el 29 de junio de 1934 lo que en su jerga denominan territorio libre, asesinando al propietario de la pulpería de Ranquil, a su cónyuge y a otras dos personas. La experiencia revolucionaria fue desbaratada por Carabineros y en la acción perdió la vida el dirigente Leiva Tapia, que en adelante sería considerado un mártir. En la Corte de Apelaciones de Temuco, donde se llevó a cabo el proceso criminal contra los responsables de este hecho subversivo, uno de los delitos que se les imputó fue alzamiento a mano armada con el objeto de promover la guerra civil y el cambio en la forma de gobierno. A comienzos del año siguiente, y nuevamente bajo inspiración comunista, se desató una huelga ferroviaria que terminó con la detención de los implicados y el cierre del diario La Opinión, medio de difusión del Partido Comunista. Como consecuencia de todos estos hechos, Alessandri remitió al Parlamento un proyecto de ley de Seguridad Interior del Estado, que si bien no fue aprobado, provocó como reacción inmediata una alianza entre comunistas y socialistas conocida por Block de Izquierdas. En ese ambiente encontró eco la formación de un Frente Popular, inspirado y comandado desde Moscú, a fin de permitir el acceso a La Moneda de algún hombre de izquierda, pero moderado, y así evitar la creación de más anticuerpos al comunismo local. Como se ha visto anteriormente, esta estratagema fue el abrazo del oso para el Partido Radical y tuvo éxito: en 1938 triunfó Pedro Aguirre Cerda.

Llamó la atención que los comunistas no aceptaran ocupar cargos de rango ministerial en el gobierno del Frente Popular, lo que fue interpretado por la oposición como una medida destinada a preservar su libertad de acción en la preparación de lo que constituye su objetivo final, la revolución en procura de una sociedad totalitaria, de acuerdo a lo que prescribe su ideología. En su Mensaje del 21 de mayo de 1939, esto es, cuando aún no llevaba medio año en el cargo, el presidente Aguirre Cerda dio a conocer sus dudas sobre esa fuerza presuntamente aliada "que pretende perturbar la solución de los problemas nacionales". El estallido de la Segunda Guerra Mundial modificó la actitud comunista, en una primera fase como consecuencia del inicuo pacto suscrito entre la Unión Soviética y la Alemania Nazi, que les permitió repartirse amigablemente los despojos de Polonia, y luego, al ser invadida Rusia, por la necesidad apremiante de asegurar los suministros de guerra que les proporcionaban las hasta ayer despreciadas potencias capitalistas. Cuando la guerra terminó, la Unión Soviética estaba entre los vencedores y los comunistas tuvieron que acomodarse a un nuevo escenario, la emergente Guerra Fría.

El primer incidente de esta nueva época ocurrió en la plaza Bulnes de Santiago el 28 de enero de 1946. Una manifestación de la Confederación de Trabajadores de Chile, cuyo objeto era protestar por la cancelación de la personalidad jurídica del Sindicato Salitrero de la Oficina Mapocho, cuyos trabajadores se encontraban en huelga impulsados por los comunistas, fue reprimida por la fuerza pública y murieron cinco personas, quedando otras 77 heridas, ente ellas 14 carabineros. Allí, por razones accidentales, perdió la vida la joven Flor Ramona Parra, que a pesar de no ser militante comunista pasó a ser considerada mártir de ese partido. A raíz de estos hechos la mencionada Confederación convocó a una huelga general para el día 30 de enero, frente a lo cual el gobierno decretó el estado de sitio en el país por un período de 60 días. Sin duda era necesario frenar una escalada que además del incidente mencionado se había manifestado en el

asalto a una población de la Caja de la Habitación y en la agresión armada a numerosos carabineros de servicio. En ese clima de agitación extremista, como señala un autor, "el gobierno contestó con la aplicación de la ley marcial y nombró a jefes militares en el gabinete para reemplazar ministros falangistas que renunciaron por los hechos ocurridos, encabezados por Eduardo Frei Montalva."[138] Ya se prefiguraba entonces la actitud de ese sector político no marxista frente a la violencia comunista.

En las elecciones presidenciales de 1946 resultó vencedor Gabriel González Videla, quien incorporó a su gabinete a tres dirigentes comunistas. En abril del año siguiente los ministros comunistas abandonaron sus carteras, dando inicio con su gesto a una etapa de confrontación singularmente grave para el país. Las huelgas y manifestaciones públicas instigadas por los comunistas arreciaron. En julio fue necesario decretar el estado de emergencia en la provincia de Santiago. Al mes siguiente, el presidente González Videla fue dotado de facultades extraordinarias para controlar la situación. En octubre se declaró Zona Militar los yacimientos carboníferos de Lota y Schwager, cuyos trabajadores en huelga se negaban a acatar el decreto de reanudación de faenas dispuesto por la autoridad. Por una declaración emitida por la Secretaría General de Gobierno el 6 de octubre de 1947, el país se enteró que "tropas del Ejército, Marina y Aviación ocupan la zona carbonífera desde ayer. (...) Se detendrá a todo aquel que en obedecimiento a la consigna de producir la asfixia económica de la Nación, pretenda entorpecer o dificultar el trabajo de los obreros. (...) Por otra parte, en atención a la campaña sostenida por El Siglo para incitar a los obreros carboníferos a fin de que mantengan una huelga de tipo político y revolucionario, el gobierno dispuso la censura para este diario y para todas aquellas publicaciones que se editen en la zona carbonífera, bajo la orientación y solvencia económica del Partido Comunista". El 21 de octubre se detuvo al Comité Central del Partido Comunista y a sus principales dirigentes en provincia. Así, "en la madrugada del día 22, más de mil militantes fueron detenidos; quinientos marcharon a Pisagua donde Gabriel González Videla inauguraba un campo de concentración".[139] A esta situación se unieron otras manifestaciones huelguísticas en el norte del país, por lo que el gobierno decretó en zona de emergencia la provincia de Tarapacá, deteniendo a los dirigentes comunistas que las instigaban y enviándolos también a Pisagua.[140]

Pese a que las medidas adoptadas permitieron controlar la escalada violentista, el presidente González Videla "no cejó en su lucha contra los comunistas. Convencido de que el uso de las herramientas generosamente ofrecidas por el régimen liberal-democrático a todos los conglomerados políticos, daba al comunismo una enorme ventaja en su expreso empeño en destruir al mismo régimen, envió al Congreso un proyecto de ley, denominado de Defensa de la Democracia, para privar a dicho conglomerado de sus derechos políticos".[141] La ley fue promulgada el 30 de septiembre del mismo año y consecuencialmente el Partido Comunista de Chile se sumergió en la clandestinidad durante diez años. Volver a gozar de los beneficios que le brinda la legalidad era su priori-

138 HOMERO PONCE MOLINA, *Historia del movimiento asociativo chileno*, Editorial Alba, Santiago, 1986, p. 127.
139 MARÍA SOLEDAD GÓMEZ CH., Partido Comunista de Chile. Factores nacionales e internacionales de su política interna (1922-1952), FLACSO, Documento de trabajo nº 228, Santiago, 1984, p. 63.
140 Véase AUGUSTO PINOCHET UGARTE, *El día decisivo*, op. cit., pp. 21-29.
141 SERGIO VILLALOBOS y otros, op. cit., p. 959.

dad, por lo que evitó cualquier acción de propaganda armada que pudiera fijar la atención sobre él. Su conducta silenciosa, la mala memoria de la opinión pública y las conveniencias de otros partidos crearon el ambiente necesario para que dicha ley fuera derogada en los últimos días del segundo mandato del presidente Carlos Ibáñez.

El regreso a la la luz pública de los comunistas chilenos coincidió con un hecho llamado a tener muy pronto enorme trascendencia: el triunfo revolucionario de Fidel Castro en Cuba. Por de pronto, entre 1959 y 1962, los embajadores Carlos Lechuga, Juan José Días del Real, Roberto Lasalle y José Marrial Domínguez debieron abandonar el territorio nacional antes de ser declarados personas no gratas, porque las actividades de agitación y propaganda que estimulaban desde la Embajada de Cuba en Santiago eran incompatibles con su desempeño diplomático.

El Partido Comunista no había abandonado en absoluto sus postulados subversivos. Como muy pronto lo señaló el nuevo Secretario General, Luis Corvalán, "la política de nuestro Partido, ahora y siempre, se basa en la movilización de las masas. En el año que acaba de terminar, en 1960, nuestro Partido impulsó enérgicamente los combates reinvindicativos de los trabajadores, como la heroica huelga del carbón, las huelgas y paros de los trabajadores de la salud, de los profesores, de los ferroviarios, de los obreros del salitre y del cobre, de los trabajadores de la construcción, la metalurgia y otras industrias, así como los paros del 17 de marzo y del 7 de noviembre, convocados por la Central única".[142] Sin embargo, como lo demostró en su actitud frente Cuba, Jorge Alessandri tenía personalidad suficiente para mantener a raya a los comunistas, lo que inhibió su accionar violentista. No deseaban tener que volver a la clandestinidad, por lo que se limitaron a mover entre bambalinas los hilos de la actividad sindical. El único incidente de violencia ocurrido durante su período sucedió en noviembre de 1962, cuando un grupo de pobladores de la población José María Caro impidió el tráfico ferroviario en ese sector. Las comunicaciones, vitales para Santiago, fueron restablecidas por personal del Ejército y de Carabineros, pero hubo que lamentar cinco víctimas fatales. Es improbable que este hecho haya sido provocado por los comunistas; no lo reinvindicaron como suyo y, en general, cuando intervienen no suelen privarse de hacerlo saber a la ciudadanía.

Durante la administración de Jorge Alessandri Rodríguez, de acuerdo a la iniciativa Alianza para el Progreso formulada en los Estados Unidos para toda América Latina, se dictó la primera ley de Reforma Agraria. Para instrumentalizarla políticamente, de inmediato se creó la Federación Nacional Campesina e Indígena, integrada "por organizaciones rurales conducidas por los comunistas y del Frente de Trabajadores de la Tierra, promovida por los socialistas".[143] Desde entonces, el agro pasó a ser también un campo de lucha insurreccional, en el que como dijo el dirigente José González, "los comunistas daremos la batalla por la vía que más convenga de acuerdo a las condiciones concretas. (...) Nos preparamos para la vía que más nos convenga, es decir, para la vía pacífica, y si se agota esta vía y surge la vía no pacífica, no vacilaremos en tomar el camino armado".[144]

---

142 LUIS CORVALÁN LEPE, cuenta recogida en la revista Principios, Santiago, 1961, p. 3.

143 HOMERO PONCE MOLINA, op. cit., p. 213.

144 En *El Partido Comunista de Chile y el movimiento comunista internacional*, Editorial Horizonte, Santiago, 1963, pp. 141 y 142.

El 4 de septiembre de 1964 se desarrolló la elección presidencial en que fue elegido —por mayoría absoluta gracias al apoyo de la derecha— el candidato de la democracia cristiana, Eduardo Frei Montalva. Esto abrió, automáticamente, un nuevo espacio a la acción marxista-leninista. En adelante, toda la izquierda podía bogar en la misma dirección.

El programa de gobierno de la democracia cristiana consistía en una serie de reformas encaminadas a modificar profundamente las estructuras sociales, políticas y económicas de la nación. El aplastante triunfo obtenido en las elecciones parlamentarias de 1965 le permitió poner en marcha el proceso de cambios que propiciaba, destinado a colocar al país a la altura de "un mundo que está viviendo un período revolucionario. (...) ¡Chile no puede quedarse atrás! Si no salvamos a Chile haciendo una Revolución el Libertad, llegará un mañana que reiniciará el odio, el terror y la irracionalidad".[145] En el plano de las intenciones, no se puede calificar negativamente esos propósitos. Pero en el plano estratégico eran de una torpeza increible. Le bastó a los marxista-leninistas ir empujando las metas del gobierno hacia sus propias posiciones para lograr que los demócrata cristianos —por el complejo nunca superado respecto a su cuna política, siempre temerosos de parecer reaccionarios— fueran realizando la tarea de desorganización nacional que constituye la condición necesaria de toda revolución en serio. Los comunistas y los socialistas tenían buenas razones para estar encantados con Eduardo Frei. En paralelo al ablandamiento del terreno que en forma impecablemente legal iba haciendo la Revolución el Libertad, esto es, en la misma medida en que la voluntad del Estado se debilitaba hasta hacerle impotente para reaccionar frente a cualquier agresión, ellos avanzaban en lo suyo, en lo que saben hacer.

Así, como un tentáculo consentido de los partidos marxistas, en agosto de 1965 se estructuró orgánicamente en Concepción el Movimiento de Izquierda Revolucionaria, que puede ser considerado "el primer grupo terrorista que surgió en Chile".[146] Los comunistas, por principio, no renegaban de la posibilidad de apelar al terror, como se ha dicho anteriormente; la novedad es que al MIR sólo le interesaba la vía violenta como medio de hacer la revolución. Como lo señala su declaración de principios, sus objetivos eran el derrocamiento del régimen capitalista y su reemplazo por un gobierno de obreros y campesinos; el enfrentamiento revolucionario de las clases antagónicas, y; la insurrección popular armada como el único camino para derrotar al capitalismo.[147]

Entre el 11 y el 17 de octubre de 1965, el Partido Comunista de Chile realizó su XIII Congreso Nacional, resolviendo pasar a la ofensiva con "una vía de masas dominando todas las formas de lucha".[148] En buen romance, explotarían en favor propio las coyunturas que iba creando el despliegue del programa del gobierno.

---

145 OSCAR PINOCHET DE LA BARRA, *El pensamiento de Eduardo Frei*, Editorial Aconcagua, Santiago, 1983, p. 172.

146 PEDRO VARGAS LONFAT, *Chile: objetivo del terrorismo*, Talleres Gráficos del Instituto Geográfico Militar, Santiago, 1988, p. 17.

147 Véase el Informe de la Comisión Especial de Consulta de la OEA, op. cit, p. 177.

148 Revista Principios nº 108, citado por JURAJ DOMIC, *Política Militar del Partido Comunista de Chile*, Talleres Gráficos del Instituto Geográfico Militar, Santiago, 1988, p. 37.

El desorden en que muy pronto se vió sumido el país, se expresó incluso en el Parlamento. El 29 de diciembre de 1966, cuando la Cámara de Diputados se pronunciaba sobre un veto presidencial en materia de reforma constitucional respecto al derecho de propiedad, "el diputado comunista don Luis Valente hizo una entrada espectacular al recinto y arrojó con fuerza sobre los diputados democratacristianos un puñado de monedas de cien pesos, lo que provocó una airada reacción de esos parlamentarios, que salieron a los pasillos, comenzando un pugilato en masa entre gobiernistas y opositores. (...) El pugilato que se desarrolló en los pasillos fue intenso. Un vaso fue a estrellarse contra la cabeza del diputado democratacristiano Eduardo Cerda; el socialista don Mario Dueñas aprisionó por el cuello a sus colegas democratacristianos Guido Castilla y Fernando Sanhueza, el diputado socialista don Mario Palestro se dio de bofetadas con su colega democratacristiano Luis Pareto; el comunista don Hugo Robles golpeó duramente a su colega democratacristiano Santiago Pereira; y el diputado democratacristiano don José Isla recibió un puñete anónimo cuya procedencia no se pudo establecer. Estos fueron sólo algunos de los casos, pues en el ring improvisado se enfrentaron alrededor de cincuenta señores diputados".[149] ¡Lindo espectáculo!

El Partido Socialista no se quedó atrás en esta carrera por estar a la altura de los tiempos. Su juventud había discrepado abiertamente de las conclusiones del XX Congreso de 1964, por persistir el partido en lo que llamaron "cretinismo electoral". El error fue enmendado en el XXII Congreso Nacional celebrado en Chillán entre el 24 y el 26 de noviembre de 1967, oportunidad en que resolvieron sacarse la muy delgada careta democrática que hasta entonces habían lucido. Allí se aprobó, por unanimidad, "la toma del poder como objetivo estratégico a cumplir por esta generación, para instaurar un Estado Revolucionario que libere a Chile de la dependencia y del retraso económico y cultural e inicie la construcción del socialismo. Ese objetivo no es otro que destruir el Estado burgués, para establecer una dictadura del proletariado". Y en cuanto a los medios de acción que determinarían su conducta futura, también hubo claridad: "La violencia revolucionaria es inevitable y legítima, resultante necesaria del carácter represivo y armado del Estado de clases. Constituye la única vía que conduce a la toma definitiva del poder político y económico y a su ulterior defensa y fortalecimiento. Sólo destruyendo el aparato burocrático y militar del Estado burgués, podrá consolidarse la revolución socialista. Las formas pacíficas o legales de lucha, reivindicativas, ideológicas, electorales, etc., no conducen por sí solas al poder, sino que son instrumentos limitados de acción, incorporados al proceso político que lleva a la lucha armada. (...) No hay posibilidad de transformación social total del sistema actual, sin salto cualitativo, sin destrucción de la actual constitucionalidad y construcción de una nueva bajo el imperio de la lucha armada".[150]

Con el explícito reconocimiento socialista de la violencia como instrumento de la lucha política todas las cartas estaban ya sobre la mesa. El tan proclamado propósito de realizar aquí una revolución marxista utilizando los métodos democráticos no pasaba de ser un cazabobos.

---

149 ARTURO OLAVARRÍA BRAVO, *Chile bajo la democracia cristiana*, Editorial Nascimento, Santiago, 1967. Tomo II, pp. 58 y 59.

150 JULIO CÉSAR JOBET, *El Partido Socialista de Chile*, Prensa Latina, Santiago, 1971, pp. 99 y 100.

En 1968, una sucesión de actos terroristas sacudió al país, destacándose entre ellos los atentados con explosivos de que fueron objeto el Instituto Chileno-Norteamericano de Cultura, el diario El Mercurio y el Consulado de Estados Unidos en Santiago; la sede central del Partido Demócrata Cristiano, la residencia del senador Francisco Bulnes Sanfuentes y la Caja Nacional de Empleados Públicos y Periodistas; la línea férrea entre Rancagua y Sewell, el Instituto Hebreo y la Sinagoga Bnei Israel; la sede vecinal de la democracia cristiana en La Pintana y la bomba arrojada en medio de un numeroso grupo de adherentes y militantes de ese partido en la plaza de Chillán.

En ese mismo año, la conferencia que reunió en Medellín a los prelados latinoamericanos de la Iglesia Católica hizo ver su preocupación por el abuso que significaba encubrir la violencia política al amparo de "una frase que permite una interpretación ambigua, en la que se coloca en un mismo plano sociológico y moral la violencia armada con la llamada violencia institucionalizada. De esta expresión, tergiversándola en su espíritu, se aferró todo el movimiento violentista del continente para justificar su preferencia por el fusil antes que por la razón y la competencia política". En ese clima de inseguridad generalizada, impulsada desde Cuba pero seguida con entusiasmo por los marxistas locales, "los perceptibles vaivenes del Presidente de la República ante una oposición que cobraba mayor fuerza, estimularon la crítica de los sectores extremos del partido de gobierno".[151] Un grupo francamente comprometido con el marxismo se escindió y creó en 1969 el Movimiento de Acción Popular Unitaria (MAPU). Otro, la Izquierda Cristiana, también marxista, lo haría en 1971.

El año 1969 se acentuó el clima de violencia. El 8 de marzo, cumpliendo instrucciones del ministro del Interior, Edmundo Pérez Zújovic, la fuerza pública desalojó una poblada que ocupaba ilegalmente la Pampa Irigoin en Puerto Montt. En la acción fallecieron 8 personas y 47 resultaron heridas, entre ellos 20 carabineros. Esta actitud de la autoridad, encaminada a hacer respetar la propiedad privada, fue la excepción. En el campo, las ocupaciones ilegales llevadas a cabo para forzar la aplicación de la Reforma Agraria más allá de lo legal fueron la norma. Quizás por el costo político que le significó al gobierno el asunto Pampa Irigoin, en adelante optó por cerrar los ojos y mantuvo una conducta de reproche más bien lírico con los violentistas.

Poco tiempo después, en la madrugada del 6 de junio, fue secuestrado y luego vejado el director del diario Las Noticias de la Tarde, de Concepción. Quien encabezó esa acción, el mirista Luciano Cruz, se ufanó de su valiente participación. Pero lo más significativo del rumbo que tomaban los acontecimientos fue el descubrimiento de una escuela de guerrilleros en Guayacán, Cajón del Maipo, lugar que fue allanado por Investigaciones el 19 de junio. Era innegable la preparación de nuevos cuadros de combate. Casi de inmediato, el día 23 del mismo mes, fue descubierto un arsenal de explosivos en Concepción. Estos hechos causaron conmoción pública en una población que ya parecía acostumbrada a la violencia diaria y motivaron una reunión del Consejo Superior de Seguridad Nacional.

En agosto de 1969 las acciones violentistas tuvieron por objeto la recolección de fondos y en Santiago fueron asaltadas las sucursales Santa Elena del Banco de Londres,

---

151 SERGIO VILLALOBOS y otros, op. cit., p. 975.

Estación del Banco Edwards y Las Condes del Banco del Estado. Asimismo, un cajero del Banco Continental que trasladaba una importante suma de dinero desde el supermercado Portofino en avenida Irarrázaval. En este último hecho fueron detenidos Juan Martínez Briceño y Sergio Pérez Molina, quien confesó al ministro instructor José Cánovas que había regresado de Cuba en abril de ese año y que en la seguidilla de asaltos había partipado junto a Miguel Enríquez, Humberto Sotomayor, Sergio Zorrilla, Edgardo Enriquez y Andrés Pascal, esto es, lo más granado del MIR.

Con todo, junto a los efectos perniciosos que en la moral ciudadana producía el clima de violencia incontrolada, quizás lo que más erosionaba la confianza en las instituciones republicanas era que las órdenes de detención impartidas por los Tribunales en contra de esos delincuentes casi nunca se cumplían. Los miristas no eran habidos. Pero, al mismo tiempo, aparecían fotografiados en las primeras páginas de los periódicos, asistiendo a lugares públicos, concentraciones políticas, funerales, etc. El ridículo acrecentó el vertiginoso proceso de desprestigio que venía sufriendo la autoridad, situación que no hubiera tenido tanta importancia si su propia caída no hubiera complicado la viabilidad del sistema político en su conjunto, pues, en los últimos dos años "se había producido, como consecuencia de la acción de los propios órganos de gobierno, un notorio avance en la disolución institucional".[152]

Destacando entre los actos violentistas que se habían convertido ya en rutina —el 23 de febrero de 1970 la sucursal Vega Poniente del Banco Nacional del Trabajo fue asaltada por novena vez— el día 6 de ese mes dos miembros de las Juventudes Socialistas, Pedro Lenin Valenzuela y Omar Vásquez, secuestraron un avión Caravelle de la Línea Aérea Nacional mientras volaba desde Punta Arenas a Santiago, exigiendo ser trasladados a Cuba. Mientras el aparato se reabastecía de combustible en Pudahuel, fue abordado por personal de Investigaciones. En el tiroteo cayeron heridos un detective, la auxiliar de vuelo Scarlett Burgos y Pedro Valenzuela, que falleció mientras era conducido a un centro asistencial. Al poco tiempo, el 30 de abril, fue muerto el jefe de la séptima zona de la Corporación de la Reforma Agraria, Hernán Mery Fuenzalida, mientras tomaba posesión de un predio expropiado. Dos semanas más tarde, una patrulla del Regimiento Cazadores descubrió una escuela de guerrillas en el cerro Mirador, a 38 kilómetros del puerto de Corral, en donde se detuvo a media docena de jóvenes socialistas.

¡En fin! A qué seguir con esta triste crónica. El presidente Eduardo Frei, en su última cuenta al Congreso, estimó del caso referirse a la ola de violencia que estaba demoliendo a la nación: "Yo sé que la revolución con sangre, dramática y totalitaria, ejerce fascinante atracción para algunos. Yo sé que hay quienes no son capaces de concebir la Patria sino como una copia de otras experiencias, porque no saben mirarla, porque no la entienden. (...) Por eso estoy convencido de que la violencia no puede dominar en Chile. Periódicamente surgen en las sociedades humanas grupos en los que se confunde la generosidad y la ingenuidad, la ilusión y la rebeldía, las frustraciones personales con el deseo de aventura o la demoníaca tentación de destruir. Pero ahí no está el alma de Chile, no está ni estará nunca la mayoría del país. Por eso podrán gritar y conmover, pero jamás triun-

---

152 Idem., p. 976.

far ni construir". Lo malo es que a esas alturas la gente seria no quería seguir escuchando explicaciones retóricas acerca de la raíz psicológica del fenómeno terrorista, sino saber qué medidas se estaba considerando adoptar por la autoridad, si había alguna, para contener y luego revertir la escalada. Y en ese plano, que es el que corresponde a un hombre de Estado, desgraciadamente no había nada que esperar.

En ese ambiente ocurrió la elección presidencial de 1970, en la que fue electo Salvador Allende como representante de una coalición de fuerzas marxistas, la Unidad Popular, cuyo programa sostenía literalmente que "las transformaciones revolucionarias que el país necesita sólo podrán realizarse si el pueblo de Chile toma en sus manos el poder y lo ejerce real y efectivamente. El pueblo de Chile ha conquistado, a través de un largo proceso de lucha, determinadas libertades y garantías democráticas, por cuya continuidad debe mantenerse en actitud alerta y combatir sin tregua. Pero el poder mismo le es ajeno. Las fuerzas populares y revolucionarias no se han unido para luchar por la simple sustitución de un Presidente de la República por otro, ni para reemplazar a un partido por otro en el Gobierno, sino para llevar a cabo los cambios de fondo que la situación nacional exige sobre la base del traspaso del poder, de los antiguos dominantes a los trabajadores, al campesinado y sectores progresistas de las capas medias de la ciudad y del campo". No se podía ser más exacto en la descripción de una revolución bolchevique.

El imperativo de la Unidad Popular, era pues, según se desprendía de su propio programa, la conquista del poder total para consumar la revolución. Ese objetivo, como es obvio, no era compatible con el concepto de democracia que conocían los chilenos, ni estaba de acuerdo con los valores, creencias ni estilos que tipificaban el consenso básico de clase media que había imperado en la sociedad durante el último medio siglo. Para forzarlo, sería necesario emplear en mayor escala la violencia.

Y, en efecto, así ocurrió. El desempeño de la Unidad Popular en el gobierno consistió, precisamente, en el abandono progresivo de las consignas que invitaban a recorrer una vía chilena al socialismo y en su reemplazo por la vía insurreccional. En ese empeño, la convivencia nacional fue destruida. Para decirlo en palabras de un hombre que hasta el penúltimo momento creyó en la posibilidad de hacer entrar en razón a Salvador Allende, "en nombre de la lucha de clases, convertida en dogma y motor único de toda acción política y social, se ha envenenado a los chilenos por el odio y desencadenado toda clase de violencias. (...) El recelo y la desconfianza recíprocas, cuando no el odio desembozado, prevalecen sobre toda solidaridad, y una creciente degradación moral rompe la jerarquía de los valores, suelta los apetitos egoístas y sacrifica el bien común. (...) Por dolorosos que sean, nadie puede negar la verdad de estos hechos. Constituyen una realidad que ha llevado a los obispos católicos a decir que Chile parece un país azotado por la guerra`; una realidad que está destruyendo al país".[153]

Cuando en un último y decisivo espasmo la Unidad Popular quiso concretar la conquista del poder total mediante el aniquilamiento de quienes todavía podían oponerse a sus designios, la loca carrera hacia el abismo llegó a su fin. Clareaba ya la madrugada del 11 de septiembre de 1973.

---

153 PATRICIO AYLWIN AZÓCAR, Diario de Sesiones del Senado, 11.7.73.

CAPITULO III

EL PUNTO DE NO RETORNO

Dice el Papa Juan: "No votes
por la democristiandad.
Mira que la caridad
consiste en no hacer más pobres"

HENRICH BÖLL

A Salvador Allende que por otros
medios trata de obtener lo mismo.
Afectuosamente, Che.

ERNESTO GUEVARA

La mayoría de las interpretaciones puestas en circulación para explicar el quiebre del sistema democrático en Chile, dan a entender que éste se hundió, súbitamente, al alba del 11 de septiembre de 1973. El Pronunciamiento Militar, en consecuencia, sería el acontecimiento que por tanto tiempo ha dividido a nuestra sociedad y escandalizado a la opinión pública mundial. Esa posición es consistente con lo que hoy se considera el punto de vista "políticamente correcto", pero en un nivel de análisis más profundo resulta insuficiente. Simplemente no se condice con la evidencia empírica existente. En último extremo, responde a una concepción ideológica de lo que es la democracia y de lo que ha sido la evolución social, política, económica e institucional de la nación chilena. Si no se desea repetir la experiencia, o en otras palabras y ahora en clave positiva, si lo que con sinceridad se busca es fortalecer un modo de convivencia cívica basada en convicciones democráticas, urge corregir este error de perspectiva.

La estricta verdad es que los fundamentos de la democracia habían sido erosionados y luego brutalmente demolidos a lo largo de toda la década que precedió al 11 de septiembre. En aquél día memorable las Fuerzas Armadas y Carabineros levantaron acta de una suerte de cadáver, de un orden político, social y económico ya colapsado. Ellas enfrentaron un estado de cosas intolerable para la comunidad nacional porque lo que estaba en juego era la existencia misma de su personalidad histórica y, de inmediato, emprendieron la tarea de reanimar la vitalidad del país sobre bases más sólidas. El cimiento de ese nuevo punto de partida fue la restauración de los consensos básicos de la sociedad, gravemente perturbados por las amenazas abordadas en el capítulo anterior de este ensayo.

Ciertamente, la presencia de aquellas amenazas no basta para dar cuenta de cómo sucumbió un régimen político que había perdurado cuarenta años y que a tantos parecía ejemplar. Para explicar su disolución es necesario tener a la vista la causa eficiente que provocó su colapso, el detonante, y en este caso ese elemento no fue otro que el frenesí revolucionario, un torbellino que arrancó de sus goznes al sistema democrático.

Parece al menos sospechoso que la mayoría de las teorías elaboradas por los que con razón entienden que el Pronunciamiento Militar no puede haber surgido de la nada, todavía se empeñen en poner el acento en el caos provocado por la Unidad Popular. Resulta cómodo cargar las tintas sobre una experiencia a todas luces impresentable y tan alejada de lo que hoy se considera deseable en todo el mundo. Pero es una lanza clavada en moro muerto. Lo peor de esa justificación, como se acaba de decir, es que no se ajusta a la evidencia histórica disponible. Queda corta y mutila un proceso de mayor complejidad.

Como los efectos se explican por sus causas, para comprender el eclipse de nuestra democracia hay que tener presente los factores que la pusieron en peligro —la partitocracia, el sectarismo ideológico y la violencia política— pues son el telón de fondo de su tragedia. Pero no es suficiente. Además, hay que conjugarlos con un tipo de acción política concreta, la revolucionaria.

No se puede seguir sosteniendo que la masa ciudadana, en 1970, fue víctima de un arrebato colectivo que la hizo correr hasta el borde del precipicio. No hay buenos o malos Ejércitos —decía Napoleón— sólo hay buenos o malos oficiales. Las causas de ese resultado son, pues, responsabilidad directa de los grupos directivos que con mucha antelación la empujaron en esa dirección. Y entre los que un día alentaron la revolución en Chile no estuvieron sus Fuerzas Armadas y de Orden. Por el contrario, si alguna culpa se les puede echar en cara es no haber actuado antes. Pero si quizás faltaron a su deber al permaner impávidas durante demasiado tiempo, fue en virtud al acatamiento de una doctrina constitucionalista meramente formal, que les llevó a anteponer la letra de la Carta Fundamental a su auténtico espíritu, a confundir los medios con los fines y, en consecuencia, a no advertir con firmeza a la dirigencia política los síntomas de la catástrofe que se avecinaba. Aquella actitud, la absoluta prescindencia en materias vagamente calificadas de "políticas", estaba inspirada en un modo de entender la función militar que traducía lo que el sistema político entonces vigente esperaba de ellos, de manera que ahora mal les podría ser reprochada. Cuando la integridad de la nación estuvo en peligro por la vorágine revolucionaria y el orden constitucional fue abiertamente sobrepasado por Allende y así fue declarado por las más altas instancias republicanas, entonces, y sólo entonces, "los generales chilenos llegaron a la conclusión de que la democracia no tiene derecho a suicidarse".[1]

A pesar de la dificultad que supone discernir los hitos determinantes en el curso de amplios procesos sociales y políticos, resulta ineludible fijar el momento en que se inició la fase terminal de la descomposición del sistema democrático en Chile, es decir, su punto de no retorno. Por las razones que se expondrán en este capítulo, esa fecha

1 ROBERT MOSS, *El experimento marxista chileno*, Editora Nacional Gabriela Mistral, Santiago, 1974, p. 20.

no puede ser otra que la elección presidencial de 1964. A partir de ese hito confluirán sincronizadamente los factores que darán consistencia a la marea revolucionaria que acabará por ahogar la democracia, arrastrando a la nación hacia la más grave crisis de convivencia cívica de su historia, proceso de descomposición al que las Fuerzas Armadas y de Orden pusieron término el 11 de septiembre de 1973.

La Revolución en Libertad y la dislocación del consenso.

En el capítulo anterior se ha pasado revista a las circunstancias que en 1964 convirtieron al Partido demócrata cristiano en árbitro de la situación política del país. Merced a un traspiés electoral irrelevante —el "naranjazo" de Curicó— los partidos que agrupaban a la porción relativa más numerosa de la ciudadanía fueron víctimas del pánico y resolvieron entregar sus votos a Eduardo Frei Montalva, para que como abanderado único de las fuerzas democráticas hiciera frente y derrotara en las urnas la opción que encarnaba Salvador Allende.

En esa oportunidad, al margen de la intención de la mayoría de la población, un acto eleccionario en sí mismo rutinario, absolutamente normal en una democracia sólidamente asentada, fue transformado en un plebiscito entre dos vías ideológicas igualmente revolucionarias. La relación existente entre el interés de los electores y el programa de gobierno respectivo era homogenea en el bando marxista-leninista. No ocurría lo mismo en el campo democrático. Los propósitos que perseguía la Revolución en Libertad era completamente ajenos a las convicciones de la mayoría de las personas que sufragaron por Eduardo Frei. Esta realidad, indesmentible, en cualquier democracia no ideologizada habría bastado para que la nueva autoridad entendiera que debía ceñir su mandato a una eficiente administración del Estado, sin pretender modificar en su esencia las estructuras de la sociedad. La democracia cristiana, erigida en único partido gobernante, carecía de base política suficiente para acometer una empresa de mayor envergadura. No lo estimó así y saltó al vacío, arrastrando en su caída el auténtico sentido que en su día la opinión pública había asignado a la candidatura de Eduardo Frei Montalva.

De ese modo se impuso un temperamento muy distinto al de la tradición liberal, proclive a la transacción y al compromiso, que había presidido la evolución política del sistema democrático en Chile durante los últimos treinta años. Por esa ruptura con los usos vigentes, la elección presidencial de 1964 constituye un hito que marca el punto de no retorno en el proceso de descomposición sufrido en adelante por la democracia chilena. A partir de entonces se hizo imposible revertir, con los mecanismos institucionales existentes, la creciente polarización social y la inestabilidad política que caracterizarían la siguiente década.

La unidad de la nación chilena y la estabilidad de su régimen político chileno siempre llamaron la atención de los observadores, pero el reconocimiento de esas características —únicas en el concierto latinoamericano— no les llevó a meditar suficientemente en que ella se debía a que el *ethos* revolucionario era perfectamente ajeno a la idiosincracia de su pueblo. En los asuntos públicos, el carácter nacional siempre ha ido muy de la mano con el sentido común y una enorme dosis de humor,

rasgos incompatibles con el fanatismo y la estrechez de miras que caracterizan al revolucionario.[2]

La coyuntura de 1964 hizo aflorar una cuestión de ética política singularmente grave. Se vulneró un principio moral —que en cuanto tal tiene validez para toda situación y cualquiera sea el otro político implicado— cuando la democracia cristiana resolvió sacar ventaja, para acceder al poder, del temor que generaba en un amplio sector de la ciudadanía la eventualidad de un gobierno de inspiración marxista-leninista. Se la utilizó fríamente, sin estar dispuestos a atender su legítima preocupación, porque lo único que interesaban eran sus votos. Esta inquietud por la eventualidad de un gobierno marxista no era simplemente el producto de una hábil propaganda, que la hubo; tenía un fundamento sólido. En efecto, la elección presidencial anterior, en 1958, se había decidido estrechamente. Salvador Allende había perdido frente a Jorge Alessandri por menos del 3% de los sufragios válidamente emitidos. Ahora, sin el apoyo de las personas que preferían la evolución a la revolución, Allende podía conquistar su objetivo. Al insistir en llevar adelante y sin contemplaciones un programa de transformaciones declaradamente revolucionario y carecer de bases propias para acometer la tarea, el nuevo gobierno contribuyó a dislocar el consenso nacional. Éste se fracturó por culpa de su soberbia política, de la ingratitud y ceguera que le llevaron a despreciar la opinión pública, aplicando en cambio una concepción ideológica de la democracia. Pero, en definitiva, se trató de un error de carácter moral.

Mirando los hechos sin pasión y con suficiente perspectiva, es dable estimar que el oscurecimiento del consenso nacional ocurrido entonces se debió, más que a defectos individuales —ambición desmedida o resentimiento irreprimible, por ejemplo— al predominio del factor ideológico, a esa peculiar forma de traducir en acción los signos de los tiempos, ejercicio intelectual del cual depende la percepción moral del orden de las cosas sobre las que se actúa. Tal vez ello explica por qué los hombres se parecen más a su tiempo que a sus padres. Ese contexto es importante para entender la personalidad de la figura que lideró al país en esa coyuntura.

El presidente Eduardo Frei Montalva, en lo personal, era intachable, serio y digno del mayor respeto. Vivió de acuerdo a su fe y ello no es poco mérito. Sus condiciones intelectuales sobresalían respecto a la que lucían sus pares; pero no se puede afirmar lo mismo de las virtudes que forman el carácter. Desde muy joven le preocupó el problema social, y de ello da cuenta la Memoria que escribió para optar a la Licenciatura en Derecho, cuyo título es El régimen del salariado y su posible abolición. A la luz de su extensa trayectoria pública, desconcierta comprobar que si bien cada una de sus decisiones políticas estaba bien calculada —y fue un maestro en ese difícil arte— muchas veces el plan de conjunto resultaba menos bien combinado. Tuvo, sin duda, la lucidez necesaria para comprender que era preciso remover las causas de los males que aquejaban a la

---

2 Ilustra el modo de ser nacional la siguiente observación de Claude Bowers, largo tiempo embajador de Estados Unidos en Chile: "Estoy seguro de que este sentido del humor explica, en gran parte, la estabilidad política del país. Mientras otros pueblos del continente se ponen histéricos por sus diferencias políticas, el chileno se ríe. Esta es una de las razones de por qué los chilenos no son dados a los golpes de Estado de opereta ni a las conspiraciones. Los adversarios políticos pueden alternar socialmente y hacer bromas y burlarse de sus desacuerdos". Citado por HERNÁN GODOY URZÚA, *Apuntes sobre la cultura de Chile*, Ediciones Universitarias de Valparaíso, Valparaíso, 1982, p. 114.

sociedad chilena en su tiempo y no limitarse a mitigar sus desgraciados efectos. Para él, "del estudio rápido y somero de nuestras realidades, brota como natural consecuencia la idea de que es preciso iniciar una nueva política que, conociendo estos grandes problemas, plantee soluciones capaces de ir hasta la raíz misma de nuestros males".[3] En este elevado sentido intentó ser un hombre de Estado. El éxito no coronó sus esfuerzos. Pretendió construir una patria mejor —a la que por lo demás amaba con sinceridad— afín con los ideales socialcristianos, pero en la empresa le ocurrió lo que al aprendiz de mago y el proceso de cambios estructurales que él mismo había impulsado fluyó hacia derroteros de muy distinto signo. Fue, en suma, un líder honradamente equivocado. Recordarlo así es más justo que seguir considerándolo el Kerenski chileno, como todavía muchos hacen con resentimiento y mal gusto.[4]

Otras circunstancias que mueven a fijar en aquella elección presidencial el punto de no retorno se encuentran, como lo indica Whelan, en "dos cambios muy tristes y profundamente importantes hacia el interior de la vida institucional de Chile. Se tomó nota de ellos, pero en el calor de la batalla y la euforia característica de esos tiempos que eran como una estampida pasaron, en realidad, desapercibidos".[5] Uno de ellos, cuya vertiente es externa, se puede resumir en haber convertido a Chile en campo de operaciones de la Guerra Fría. El otro, más o menos condicionado por el anterior, se puede sintetizar en la polarización de la actividad política. El país fue víctima de un frenesí reformista que a poco andar hizo añicos los consensos básicos y el estilo no confrontacional que hasta entonces había caracterizado la convivencia cívica de la mejor parte de la población.

En efecto, dado el contexto general de la Guerra Fría y muy especialmente la perturbadora presencia del enclave soviético establecido en Cuba, una exitosa gestión por parte de gobiernos con talante reformista era vista desde Washington como la más segura respuesta para contener el avance del comunismo al sur del Río Grande. Las fuerzas democráticas de derecha, que tradicionalmente habían puesto la proa a la infiltración marxista, parecían demasiado desgastadas. Tampoco estaban los tiempos como para seguir confiando en dictaduras tipo Trujillo, Batista o Somoza, creadas y sostenidas al efecto. Por tanto, la democracia cristiana chilena mereció el mayor apoyo posible de Norteamérica, tanto por la vía oficial como mediante maniobras encubiertas.

En palabras de un experto en operaciones secretas, Markus Wolf —durante treinta y cuatro años jefe del servicio de inteligencia exterior de Alemania Oriental, probablemente la mejor organización de este tipo con que contó el mundo comunista— en la Guerra Fría "el mundo de la inteligencia, tanto en el Este como en el Oeste, era un reino de sombras morales. Sus formas prácticas a menudo carecían de ética y sus métodos eran sucios. En vista de este hecho, a mi juicio la CIA sufría una particular desventaja porque debía actuar en una suerte de pantomima democrática para satisfa-

3 EDUARDO FREI MONTALVA, *Chile desconocido*, Ediciones Ercilla, Santiago, 1937, p. 139.
4 Una visión entrañable de Eduardo Frei Montalva en GUILLERMO BLANCO, *Eduardo Frei, El hombre de la Patria Joven*, Editorial Aconcagua, Santiago, 1984. Una visión más académica en CRISTIÁN GAZMURI, PATRICIA ARANCIBIA y ÁLVARO GÓNGORA, *Eduardo Frei*, Fundación Eduardo Frei Montalva, Santiago, 1996.
5 JAMES R. WHELAN, op. cit. p. 141.

cer los requerimientos de la Constitución norteamericana, al margen de que los mismos tuviesen o no que ver con la labor de inteligencia".[6] Lastrada por lo que Wolf llama una desventaja, cuando en 1974 la CIA comenzó a ser desnudada por el Congreso de su propio país, el mundo entero conoció las maniobras encubiertas que había desarrollado durante años. La mayoría de esas acciones se emprendieron dando cumplimiento a órdenes impartidas desde la rama ejecutiva del gobierno norteamericano. Entre ellas, se alzó el velo que por años había cubierto su participación en la exitosa carrera de la democracia cristiana chilena hacia el poder.

Como consecuencia de la apreciación política-estratégica que llevó a los Estados Unidos y a sus aliados más cercanos a levantar un dique democrático frente al expansionismo soviético en América Latina, buena parte del dinero necesario para financiar la campaña electoral de Eduardo Frei provino del exterior. No era un método conciliable con los principios éticos declarados en público —tanto por quienes daban como por quienes recibían esta ayuda— pero se estimó indispensable. Así, como recuerda Whelan, "los Estados Unidos contribuyeron, clandestinamente, con US.$ 3 millones a la campaña de Frei y ´casi ahogaron a Chile en dólares de la Agency for International Development (AID)`. (US.$ 127,4 millones en 1964 solamente). Se dice que un funcionario de la inteligencia de Estados Unidos caracterizó la intervención norteamericana en Chile ese año como ´estentórea y casi repugnante`. Al no poder comprar todos los escudos que eran necesarios a través de los bancos de Nueva York, la CIA se embarcó en una loca rebatiña para obtener moneda chilena por medio de operaciones en las ciudades de Lima, Río de Janeiro y Montevideo".[7] Naturalmente, el poder adquisitivo de los US.$ 3 millones proporcionados por la CIA era mayor que el nominal porque una parte sustancial tuvo que ser transada en el mercado negro, donde su valor era superior al oficial.

Según se estableció en un documento oficial del Senado de los Estados Unidos, como instrumento de la política exterior de ese país acordada al más alto nivel, "la intervención encubierta de Estados Unidos en Chile en la década que va de 1963 a 1973 fue extensa y permanente. La Agencia Central de Inteligencia gastó tres millones de dólares en un esfuerzo para influir en el resultado de las elecciones presidenciales de 1964". Tan desusado interés se explica porque "de todos los países del hemisferio, Chile fue seleccionado como laboratorio de la nueva Alianza para el Progreso. Chile tenía la extensa infraestructura burocrática para planear y administrar un programa de desarrollo nacional; más aún, su historia de apoyo popular a los partidos socialista, comunista y otros partidos izquierda, era percibida en Washington como coqueteo con el comunismo. Entre 1962 y 1969, Chile recibió bastante más de un billón de dólares en ayuda directa y pública de los Estados Unidos. Chile recibió un promedio de ayuda per cápita más alto que ningún otro país del hemisferio. Entre 1964 y 1970, de 200 a 300 millones de dólares en líneas de crédito de corto plazo estaban continuamente

---

6 MARKUS WOLF, *El hombre sin rostro* (Autobiografía), Javier Vergara Editor, Buenos Aires, 1997, p. 316.

7 JAMES R. WHELAN, op. cit., p. 141. Los datos citados por Whelan comenzaron a ser revelados en septiembre de 1974, cuando el Senado de los Estados Unidos inició una investigación sobre las actividades de la CIA. El resultado de esa investigación se hizo público el 18 de diciembre de 1975, oportunidad en que a pesar de los reclamos del presidente Gerald Ford, el senador Frank Church presentó espectacularmente en el edificio Russell del Senado el documento Acciones Encubiertas en Chile 1963-1973.

disponibles para Chile en bancos privados americanos".[8] Para hacerse cargo de lo que aquello significa, conviene tener en cuenta que en esa época sólo Israel recibió de Estados Unidos una ayuda per capita superior a la entregada a Chile.

Para conocer la trama de esta historia es preciso recordar que la administración Kennedy —autora de la Alianza para el Progreso, proclamada desde la Casa Blanca el 13 de marzo de 1961 y cuyo principal documento fue la Declaración de los Pueblos de América suscrita cinco meses más tarde en Punta del Este— "habría preferido un gobierno de centro-derecha, formado por los radicales en la derecha y los democratacristianos en el centro. Sin embargo, los eventos políticos de Chile en 1962-1963, principalmente el surgimiento de una alianza de derecha que incluía al Partido Radical, eliminaron la posibilidad de esa coalición. En consecuencia, durante 1963, los Estados Unidos financiaron tanto al Partido Demócrata Cristiano como a la coalición de derecha Frente Democrático".[9] El punto es sugestivo porque, como se verá más adelante, la ayuda al Frente Democrático sólo fue encaminada a hacer resaltar la candidatura de Eduardo Frei. En otras palabras, a juicio del tan admirado presidente John F. Kennedy y "el elenco de adivinos, que lo secundaba abarcando toda la gama desde lo sublime a lo ridículo"[10], como cuestión de principios estaba descartada la posibilidad de jugarse por el fortalecimiento de los partidos Liberal y Conservador, núcleo de la derecha y única fuerza partidista clara y francamente anticomunista existente en Chile. Este dato permite conocer mejor la mentalidad imperante entre los círculos dirigentes de Estados Unidos y ayuda a comprender la posición que adoptarán en los años posteriores.

Saber que nuestro país fue escogido como laboratorio por Washington para llevar a cabo su Alianza para el Progreso, inevitablemente mueve a recordar que tres décadas antes lo había sido por Moscú para llevar adelante su estrategia de Frente Popular. Y poco tiempo después, nuevamente desde el Kremlin, para realizar el experimento de un marxismo en democracia mediante la llamada vía no capitalista de desarrollo. ¡Cuántas veces se ha intentado determinar nuestro destino desde el extranjero! ¡Cuántas complicidades locales habrán sino necesarias para atreverse a tanto! Es penoso, pero estas turbias conspiraciones explican el comportamiento equívoco de algunos personajes de farándula que durante mucho tiempo pasaron por respetables...

En atención a su incidencia en la desintegración moral de la democracia —pues el efecto de estas ayudas secretas recibidas de potencias extranjeras no es otro que minar la virtud cívica de sus beneficiarios— se hace necesario ahondar en la descripción

8 *Acciones encubiertas en Chile 1963-1973*. Informe del Equipo Asesor del Comité designado para estudiar operaciones gubernamentales relacionadas con actividades de inteligencia. Oficina de Publicaciones del Gobierno de los Estados Unidos, Washington, 1975. El texto completo del Informe está recogido en CRISTIÁN OPASO, *Frei, Allende y la mano de la CIA*, Ediciones del Ornitorrinco, Santiago, s.f., pp. 21-130. Las citas en pp. 21 y 28. En la p. 1 del prefacio del Informe del Equipo Asesor —p. 17 del libro de Opaso— se advierte que "este informe está basado en una extensa investigación de documentos de la Agencia Central de Inteligencia, los Departamentos de Estado y de Defensa y el Consejo de Seguridad Nacional. Además se basa en el testimonio de funcionarios y ex funcionarios de gobierno. Salvo escasas excepciones, los nombres de chilenos e instituciones chilenas han sido omitidos, con el fin de evitar que se conozcan fuentes y métodos de inteligencia, y para prevenir daño innecesario a los chilenos que han cooperado con la Agencia Central de Inteligencia".

9 Idem., p. 50.

10 JAMES R. WHELAN, op. cit., p. 139.

de la primera acción encubierta de envergadura de los Estados Unidos en Chile. Como lo señala el documento del Senado norteamericano, "Estados Unidos intervino de manera generalizada en la elección presidencial chilena de 1964. (...) El objetivo, en términos generales, era impedir o minimizar la influencia de los comunistas o marxistas chilenos en el gobierno que surgiría de las elecciones de 1964. (...) El principal problema que enfrentó Estados Unidos dos años antes de la elección fue seleccionar un partido o un candidato que apoyar en contra de la alianza izquierdista. El 2 de abril de 1962, la CIA entregó dos informes al Grupo Especial. Uno de ellos proponía apoyar al Partido Demócrata Cristiano, el otro recomendaba apoyar al Partido Radical, grupo más derechista que la Democracia Cristiana. El Grupo Especial aprobó ambas propuestas. Aunque esta estrategia parece haber comenzado como un esfuerzo por aumentar las posibilidades, apoyando a dos candidatos a la presidencia, terminó siendo una estrategia para apoyar al candidato democratacristiano. El 27 de agosto de 1962, el Grupo Especial aprobó el uso de un canal de financiamiento a través de un tercer país. (...) Luego que la derrota electoral de mayo de 1964 destruyera al Frente Democrático, los Estados Unidos entregaron todo su apoyo al candidato democratacristiano. Sin embargo, fondos de la CIA continuaron subsidiando al candidato del Partido Radical, con el fin de fortalecer la imagen de la Democracia Cristiana como un partido progresista moderado que era atacado por la derecha y por la izquierda. (...) Las acciones encubiertas realizadas durante la campaña de 1964 estaban compuestas de dos elementos principales. Uno era el apoyo financiero directo de la campaña democratacristiana. La CIA financió un poco más de la mitad del costo total de la campaña. Luego de discutirlo, el Grupo Especial decidió no informar al candidato democratacristiano Eduardo Frei del apoyo clandestino de los norteamericanos a su campaña. Distintos intermediarios fueron movilizados para entregar el dinero a los democratacristianos. Además de los subsidios para el Partido Demócrata Cristiano, el Grupo Especial destinó fondos al Partido Radical y a grupos privados de ciudadanos. Además del apoyo brindado a los partidos políticos, la CIA montó una masiva campaña de propaganda anticomunista. Se usó vastamente la prensa, la radio, películas, panfletos, afiches, volantes, campañas por correo, banderines y pintarrajeado de murallas. Fue una ´campaña del terror`, que hizo abundante uso de imágenes de tanques soviéticos y pelotones de fusilamiento cubanos, y que estuvo dirigido especialmente a la mujer. (...) La campaña de propaganda también se llevó a cabo en el ámbito internacional, y artículos del extranjero fueron ´reciclados` en Chile. (...) Se le brindó apoyo a miembros ´anticomunistas` del Partido Radical en sus esfuerzos por llegar a posiciones influyentes en la jerarquía partidaria, y para evitar que el partido brindara apoyo a Allende".[11]

---

11 CRISTIÁN OPASO, op. cit., pp. 48-52. En esta última página se añade que "con el fin de administrar la operación eleccionaria se organizó en Washington un Comité Electoral que incluyó al subsecretario de Estado para Asuntos Interamericanos, Thomas Mann; al jefe de la División del Hemisferio Occidental de la CIA, Desmond Fitzgerald; a Ralph Dungan y McGeorge Bundy de la Casa Blanca; y al jefe de la Cuarta Sección de la División del Hemisferio Occidental de la CIA _sección que tiene jurisdicción sobre Chile_. Este grupo estaba estaba en estrecho contacto con la Oficina de Asuntos Bolivianos y Chilenos del Departamento de Estado. En Santiago existía un Comité Electoral paralelo, que coordinaba los esfuerzos de EE.UU. Incluía al subjefe de la Misión, al jefe de la Oficina Local de la CIA y a los encargados de las Secciones Económica y Política, así como también al embajador. El Comité de Elecciones de Washington coordinaba los canales hacia las autoridades superiores, hacia el terreno mismo y con otras agencias. No se constituyó ningún equipo operativo y la oficina de la CIA en Santiago fue incrementada temporalmente con sólo tres nuevos agentes".

Además de lo anterior, que jamás ha sido desmentido por los aludidos, dicho documento señala que "un grupo de compañías norteamericanas en Chile ofreció un millón y medio de dólares para que el gobierno las administrara y entregara clandestinamente para evitar que Allende ganara la elección presidencial de 1964. Esta oferta fue canalizada al Comité 303 (el nombre que adoptó el Grupo Especial después de junio de 1964) que decidió no aceptar la oferta. Se decidió que las ofertas de compañías estadounidenses no podían ser aceptadas, que no constituían una manera segura y honorable de hacer negocios. Esta decisión fue una declaración de principios que sentó el precedente para no aceptar una colaboración semejante entre la CIA y compañías privadas. Sin embargo, dinero de la CIA, disfrazado como dinero de fuentes privadas fue entregado a los democratacristianos a través de un empresario privado".[12] El dato es significativo, pues en el clima de alarma existente no sería extraño que después de todo esas empresas norteamericanas sí hayan entregado alguna suma, no por intermedio de su gobierno, sino directamente a quienes oficiaban de recaudadores de las contribuciones extranjeras. Incluso por el tamaño de nuestra "sociedad", esas personas no pueden haberles sido desconocidas.

Con todo, y ya era mucho, la apuesta norteamericana en favor de la Democracia Cristiana no se limitó a financiar al menos la mitad de la campaña electoral de 1964. Durante el período de Eduardo Frei, la CIA gastó otros dos millones de dólares en operaciones secretas en Chile, con los que financió veinte proyectos de acción encubierta. Por ejemplo, entre el embajador y el jefe local de la CIA en Santiago seleccionaron veintidos candidatos que competían en las elecciones parlamentarias de 1965 y los ayudaron, nueve de los cuales efectivamente resultaron electos. Se estima que la operación hizo posible la derrota de trece candidatos del FRAP, quienes de no mediar esta interferencia habrían ganado un escaño. Lo mismo se repitió en las parlamentarias de 1969 y entonces diez de los doce seleccionados resultaron ganadores, incluyendo una victoria muy inesperada. Otras operaciones apuntaron a los medios de prensa, al campo sindical, al trabajo laboral de la Iglesia, etc.

Por cierto, los norteamericanos no fueron los únicos que contribuyeron a financiar lo que se suponía era una especie de cruzada antibolchevique librada en el extremo sur de América. Los partidos demócratas cristianos de Europa y fuentes de la Iglesia Católica, especialmente mediante fundaciones alemanas, hicieron lo suyo sin mayor recato.[13]

Ante el éxito de estas maniobras, también obtuvo su recompensa el cenáculo íntimo de la *New Frontier* que desde la Casa Blanca había instado por un resuelto apoyo a

12 Idem., p. 53.

13 El detalle de algunas de estas operaciones en Idem., pp. 54-58. La administración de los fondos destinados a un sector progresista de la Iglesia bajo pretexto de ayuda al desarrollo y a la promoción social, explotó en manos del padre Roger Vekemans, S. J., fundador del Centro Bellarmino y director de la Escuela de Sociología de la Universidad Católica de Chile cuando en 1967 ocurrió la célebre toma de esa casa de estudios. El padre Juan Ochagavía, Superior Provincial de la Compañía de Jesús, ante las acusaciones de que era objeto Vekemans en orden a haber recibido dinero de la CIA para acciones anticomunistas, declaró: "Puedo asegurar que el padre Vekemans ha obtenido dinero de numerosas Fundaciones europeas y norteamericanas para la promoción de la justicia social. Los dineros recibidos por el padre Vekemans en ningún caso han sido ligados a la ejecución de siniestros planes anticomunistas". Citado por TERESA DONOSO LOERO, *Historia de los cristianos por el socialismo en Chile*, Editorial Vaitea, Santiago, 1975, p. 19. Edward M. Korry, embajador de Estados Unidos en Chile entre mediados de 1967 y fines de 1971 confirmó este financiamiento irregular a los jesuitas. Véase JAMES R. WHELAN, op. cit., pp. 673 y 674.

Eduardo Frei: Ralph Dungan fue designado embajador en Santiago. Aquí no dejó un buen recuerdo.

El hecho de recibir esta ayuda encubierta de la CIA no condicionó ni alteró en manera alguna la dirección de la Revolución en Libertad. Su nervio estaba en los planteamientos de los ideólogos del partido gobernante, no en la voluntad de las personas que por cualquier motivo hubiesen votado por Frei. Menos aún en quienes ayudasen a financiarla. Como ya se ha señalado, en opinión del entonces presidente del Partido Demócrata Cristiano, Patricio Aylwin, incluso el gobierno sólo era un instrumento del partido y su función era cumplir el programa diseñado al efecto. Sin embargo, desde 1964 "la asistencia de la CIA ayudó a que el Partido Demócrata Cristiano estableciera una extensa organización a nivel de barrios y pueblos. Esto puede haber dado apoyo desde la base a los esfuerzos reformistas que realizó el gobierno de Frei en los años posteriores". En resumen, desde el prisma norteamericano, "las relaciones de Frei con los Estados Unidos fueron cordiales, aun cuando implementó una política exterior independiente. Su gobierno estableció relaciones diplomáticas con la Unión Soviética inmediatamente después de tomar el poder y en 1969 restableció relaciones comerciales con Cuba".[14]

Con el mérito de los hechos relatados podría suponerse que ese tercer intento de Allende por ocupar La Moneda lo frustraron la CIA y las empresas multinacionales. Pero esa explicación no tiene asidero en la realidad y sólo es parte de la mitología de la izquierda marxista chilena. La correlación de fuerzas existente en 1964 —y también la que hubo en 1970— tornaba imposible su triunfo en las urnas si se enfrentaba a un solo adversario. De otra parte, hay que considerar que también Allende recibió financiamiento desde el exterior, pero eso siempre ha sido estimado normal dado el carácter internacional del comunismo. Ya se conocen algunas sumas pero corresponden a una época posterior. En la medida que continúe avanzando el estudio de los archivos reservados de la ex Unión Soviética que está realizando un equipo alemán, será posible determinar las sumas exactas que se destinaron a Chile en el período 1964- 1973, tanto desde Moscú como vía Cuba, muchas veces a través de "inocentes" organismos de fachada.

El interés que despertaba Chile en el extranjero, traducido en la más desvergonzada intromisión en sus asuntos internos, se explica por la lógica de la Guerra Fría. Pero tampoco es posible negar que esa intervención era alentada golosamente desde muchos sectores de la dirigencia política del país. Eran los días en que se combatía en Vietnam y el Muro que dividía a Europa, levantado sorpresivamente en Berlín el 13 de agosto de 1961, era el símbolo de una desgarradora realidad, contundente e ignominiosa como ninguna otra para la dignidad humana. También Africa, sacudida por un proceso que parecía retrotraer el antiguo orden colonial a un estado de cosas tribal, era fértil campo para los movimientos de liberación de inspiración marxista. En América Latina, mientras tanto, Fidel Castro exportaba su revolución y focos guerrilleros aparecían en muchos lugares. El mítico Che Guevara, aburrido de presidir en Cuba un Banco Central cuya única función era acusar recibo del millón de dólares diarios que le costaba a la Unión Soviética sostener la vitalidad de la isla, también se echó al monte y cayó en Bolivia. Nada tiene de extraño, entonces, que en ese ambiente y hasta muy avanzado su período, el

14 CRISTIAN OPASO, op. cit., pp. 54 y 31.

presidente Eduardo Frei haya sido considerado en el mundo libre como una respuesta exitosa para la contención del comunismo. En tal carácter fue aclamado por los medios de prensa de las capitales europeas que visitó.

La democracia cristiana chilena se sentía cómoda en la nueva posición internacional que ocupaba el país. Siempre había tenido viva conciencia de la necesidad de sumirse en el ancho caudal de los asuntos mundiales para dar solución a los problemas del terruño; lo contrario les parecía algo provinciano. Como había dicho alguna vez el propio Eduardo Frei, al inicio de los años ´50, "vivimos en este momento histórico bajo el imperio de ideas universales, que desbordan las fronteras de los países. Todo verdadero movimiento de renovación profunda, toda revolución, diría, es hoy, por necesidad, internacional, tiene un significado más hondo que el meramente local; ése es un signo característico. No ha sido en forma deliberada o provocada que los que en Chile luchamos por el social-cristianismo, y especialmente la Falange Nacional, hayamos establecido contacto con otros movimientos semejantes de América y Europa. Es el resultado natural de la dialéctica interna de nuestro movimiento, y hay que impulsar su desarrollo, organizarlo, robustecerlo, formular planteamientos conjuntos, planes de acción común, conocerse, estrecharse las manos, real, no figuradamente. A esa necesidad, a ese objeto, han respondido los Congresos o reuniones que hemos tenido por dos veces en Montevideo, en 1947 y en 1949 y que pronto celebraremos en Santiago. Por otra parte y debido a las mismas razones, junto con el senador socialista Salvador Allende, representé a Chile en el Congreso de Partidos Democráticos que hubo en La Habana en 1950".[15] En realidad, como no dejó de advertir Bernard Collier, un corresponsal del New York Times que le admiraba, "a veces pareciera que el presidente Frei goza más de verse a sí mismo como la voz y la conciencia de Latinoamérica que desempeñando el irritante trabajo de ser simplemente el líder de un sólo país que está constantemente en estado de hipertensión".[16] Por fin ahora, en el marco de la Guerra Fría, Chile estaba en el ojo del huracán; la democracia cristiana desempeñaba un rol protagónico y las miradas de los grandes de esta tierra se posaban en ella.[17]

Desmintiendo tan gratas apariencias, el rumbo que tomaba la Revolución en Libertad no podía menos que sembrar algunas dudas. John Gunther, el famoso autor de biografías, cuenta que una vez le preguntó a un amigo de Eduardo Frei cuán a la izquierda estaba el presidente. Tanto, le contestó, que tendría que ser considerado marxista si no fuera por su fidelidad a la Iglesia.[18] Evidentemente el sentido literal de esa respuesta constituye una exageración. Eduardo Frei no era en absoluto marxista. Es más, inmediatamente después de los comicios parlamentarios de 1949, oportunidad en que fue el único candidato de Falange Nacional que llegó al Senado, desmintió que hubiera alcanzado el éxito merced a los votos comunistas, precisando gallardamente: "Conocemos a los comunistas mejor, quizá, más profundamente, que los demás parti-

---

15 ALEJANDRO MAGNET, *Semblanza de Eduardo Frei*, op. cit., pp. 40 y 41.

16 JAMES R. WHELAN, op. cit., p. 148.

17 Véase, GERARDO MELLO, *Frei y la revolución en América Latina*, Editorial del Pacífico, Santiago, 1966 y GASTÓN CRUZAT, "Chile comienza a caminar", en Mensaje nº 137, marzo-abril 1965.

18 JOHN GUNTHER, *Inside South America*, Harper & Row, Nueva York, 1966, p. 270. Citado por JAMES R. WHELAN, op. cit., p. 143.

dos y no nos hacemos ilusiones. Sabemos que somos, en realidad, sus peores enemigos, los únicos que no les hacemos el juego, porque les disputamos el terreno, ´su` terreno: el corazón humillado, la esperanza de justicia del pueblo, palmo a palmo. Y ellos también lo saben".[19] Sin embargo, en un sentido más sutil, había mucho de razón en la respuesta que recibió Gunther: el gobierno presidido por Eduardo Frei estaba haciendo exactamente lo que los marxistas querían. La consigna ¡revolución en libertad! —todo un desafío a la lógica— de hecho estaba enmascarando la aplicación de la vía no capitalista de desarrollo, una estrategia diseñada en Moscú que gracias a Rodrigo Ambrosio se hizo explícita entre los ideólogos de la democracia cristiana. A fin de cuentas, en 1970 los programas electorales de Tomic y Allende llegaron a ser prácticamente similares. Y no porque Allende hubiera modificado su postura de siempre. Así, la eventual capacidad de contención del comunismo que se había atribuido a la democracia cristiana terminó reducida a un muro de papel, a un Estatuto de Garantías que Allende firmó sin sonrojarse y sin la menor intención de tomarlo en serio, como confesaría muy pronto a Regis Debray. En suma, como consecuencia de la gestión democratacristiana, en 1970, al menos oficialmente, Chile cambió de bando en la Guerra Fría. ¿Era esto lo que en verdad quería la mayoría de los chilenos?

Como se ha esbozado más arriba, otro motivo que lleva a considerar la elección presidencial de 1964 el punto de no retorno de la democracia chilena en la vertiginosa espiral hacia su destrucción, consiste en que a partir de ese momento se rompió la decencia, el *fair play* que tácitamente había regulado los últimos treinta años de la actividad política, al menos entre la dirigencia no marxista.

Conviene explicar este punto teniendo a la vista un antecedente bastante conocido aunque pocas veces invocado. Durante muchos años —hasta que Jacques Chonchol y Julio Silva Solar lograron introducir una cuña filomarxista en su seno— el pensamiento doctrinario de la democracia cristiana chilena se inspiró en Jacques Maritain. Según éste pensador —"el filósofo cristiano por excelencia, el discípulo fidelísimo de Santo Tomás", le llama Fernando Moreno[20]— "el fin de la política es el bien común de un pueblo unido; el cual fin es esencialmente algo concretamente humano y por tanto ético".[21] En esta perspectiva moral, una de las características centrales del siglo XX es la radical incompatibilidad que existe entre las concepciones del hombre cristiano y las del hombre marxista.[22] Esta diferencia no es baladía, pues está en juego el destino de la civilización. Para evitar el crepúsculo de la civilización, dice Maritain, los cristianos deben liderar la sociedad de acuerdo a un ideal concreto: la Nueva Cristiandad. En su construcción es necesario observar cinco puntos, a saber, pluralismo, autonomía de lo temporal, libertad de las personas, unidad de raza social y, obra común.[23] Esta formulación teórica fue contrastada por Maritain con lo que estaba haciendo en Chile la democracia cristiana. En su opinión, "la esperanza en el advenimiento de una polí-

19 ALEJANDRO MAGNET, op. cit., p. 44.

20 FERNANDO MORENO VALENCIA, *Actualidad de Jacques Maritain*, Editorial Marracci, Santiago, 1987.

21 JACQUES MARITAIN, *Principios de una política humanista*, Editorial Excelsa, Buenos Aires, 1946, p. 120.

22 Véase JACQUES MARITAIN y JEAN LACROIX, *El hombre cristiano y el hombre marxista*, Editorial del Pacífico, Santiago, 1950.

23 Véase JACQUES MARITAIN, *Humanismo integral*, Editorial Carlos Lohlé, Buenos Aires, 1966, pp. 126-153.

tica cristiana (que respondiera en el orden práctico a lo que es una filosofía cristiana en el orden especulativo) se ha visto completamente frustrada; no conozco más que una revolución cristiana auténtica, que es la que el Presidente Eduardo Frei intenta en este momento en Chile, y no es seguro que triunfe".[24] Pues bien, como señala Whelan, a pesar de haber hecho suya la tarea de forjar aquí una Nueva Cristiandad, "entre los cinco temas dominantes de Maritain más comunmente aceptados, el que tuvo evidentemente un impacto más directo en el pensamiento de Frei fue el último: 'la cooperación pluralista entre hombres de diferentes creencias en la búsqueda del bien común en la vida política`. Pero, como en tantas otras facetas de su vida política, Frei predicaba una línea mejor de la que practicaba, pues excluyó de su gobierno a todos los que no eran democratacristianos y dejó fuera hasta del debate político a la Derecha".[25]

Si efectivamente el presidente Eduardo Frei intentó alzar aquí la Nueva Cristiandad, punto bastante discutible, al momento de hacer cuentas es evidente que la prudente reserva de Maritain resultó profética. Su gobierno, a pesar de las esperanzas puestas en él, no triunfó en esa empresa. Con su cerrado sectarismo, el gobierno democratacristiano perforó el núcleo ético del concepto de bien común al hacer imposible la unidad del pueblo. De paso, también desdibujó las fronteras que separaban las concepciones políticas de cristianos y marxistas, en beneficio de estos últimos. Quizás no se comprendió a tiempo que una cosa era que los partidos Conservador, Liberal y Radical hubieran sido aniquilados como estructuras políticas en la elección parlamentaria de 1965, y otra muy diferente que el temperamento de la masa ciudadana que antaño habían representado hubiera mudado súbitamente. Eduardo Frei pudo contar con un respaldo ciudadano amplísimo si hubiese sido fiel a los postulados de Maritain, compartidos inconscientemente por gran parte de la derecha. Pero el sectarismo de que hicieron gala los democratacristianos en el gobierno —tal vez la inevitable expresión práctica de su soberbia ideológica— les enajenó el respeto de la gran masa de independientes y de hombres de derecha que con sus votos les habían colocado en esa posición. Desde la izquierda más dura, el reformismo o revolución a medias que según veían ellos se intentaba hacer, tampoco le granjeó simpatías. Nunca se alcanza otro resultado cuando se navega a medias aguas. El costo político lo sufrieron en 1970, cuando a pesar de las ayudas recibidas debieron resignarse a ocupar el melancólico puesto de cola de los tres tercios en que se había dividido la opinión política del país. Pero lo realmente significativo de ese proceso de erosión ideológica y electoral no fue el declive de un partido supuestamente llamado a grandes destinos, sino la profunda división en la sociedad y el encono cívico que produjo su paso por el gobierno. A diferencia de lo que ocurría antes de 1964, para muchas personas inteligentes y equilibradas los dirigentes democratacristianos pasaron a ser menos dignos de confianza que los mismos comunistas. Para esa extendida opinión, con los comunistas uno al menos sabe a qué atenerse. En adelante y por muchos años, por sobre la amistad personal, se impondría la militancia. Ya no importaría tanto qué se es, sino dónde se está. Se cortó así el principal lazo de la tradicional cordura política de los chilenos.

---

24 JACQUES MARITAIN, *El campesino de Garona*, Editorial Desclée de Brouwer, Bilbao, 1967, p. 355.
25 JAMES R. WHELAN, op. cit., p. 145.

El quiebre del consenso político causado por la marea reformista de la Revolución en Libertad, revolución que una parte significativa de la población resistía y otra consideraba insuficiente, se tradujo en la pérdida de las buenas maneras y las rectas intenciones en la arena cívica. Las descalificaciones comenzaron a primar sobre el respeto a las opiniones. La prensa de trinchera, contribuyó decisivamente a rebajar el estilo y el lenguaje de la actividad política. En algunos casos llegó a ser nauseabunda, como ocurrió con el diario Clarín, hasta entonces espolón de la izquierda marxista y ahora de la democracia cristiana, aunque antes había sido ibañista y más tarde volvería al redil marxista, llegando a tener a Salvador Allende por codueño mediante interpósita persona, Víctor Pey Casados.[26] Más tarde, pero muy pronto, la situación derivó en diálogo de sordos. Finalmente, en la búsqueda deliberada de la destrucción del adversario. Sumidos como estaban en la tensión de esa especie de canibalismo político, los grupos dirigentes no estaban en condiciones de pensar siquiera en el destino de la patria, en su integridad, en su grandeza.

Lo que ocurría en el terreno político, es decir, el deterioro de la confianza recíproca entre gobernantes y gobernados, cualidad que siempre debe nutrir al sistema democrático para darle fuerza y eficacia, coincidió con un fenómeno de naturaleza distinta y que sin proponérselo alimentó el disenso entre los chilenos. Este se refiere a la evolución de la Iglesia Católica, tanto en el nivel universal como en el latinoamericano.

En efecto, durante los años ´60 —esa década ávida de futuro que en tantos sentidos trasformó la mentalidad y las costumbres hasta entonces imperantes— también ocurrió un vuelco en el ámbito espiritual. El Concilio Vaticano II, estructurado en tres fases —la primera se inició el 11 de octubre de 1962 y la última fue clausurada el 8 de diciembre de 1965— redefinió el vínculo entre la Iglesia y el mundo actual, crecientemente neopagano. A su vez, la Segunda Reunión de la Conferencia Episcopal Latinoamericana de Medellín, celebrada en 1968, hizo patente muchas de las dificultades que suscitaba en esta parte del hemisferio la aplicación de lo aprobado en dicho Concilio. Atendiendo a uno sólo de sus aspectos, se le considera la cuna oficial de la Teología de la Liberación, aunque ello no es del todo exacto; en rigor, esa suerte de herejía contemporánea ya existía. En palabras de Luis Pacheco, "estos dos acontecimientos marcan, sin lugar a dudas, una etapa nueva para la Iglesia y quizás una de las de mayor controversia en su historia contemporánea. Nunca antes la Iglesia, en América Latina, había estado sometida a mayor presión. Por una parte, la resistencia que crea en lo social su nueva actitud en los grupos más conservadores y tradicionalistas del continente, y por otra, los grupos comprometidos con los cambios, desde diversos supuestos ideológicos, que han pretendido un compromiso de ella con determinados proyectos políticos. En ambos casos la actitud revela la valoración que se hace de la Iglesia por su trascendencia en la conciencia y en la Historia de los pueblos de América Latina".[27]

Guste o no, la Iglesia siempre ha desempeñado en la América Hispana un rol preponderante como sustrato de la convivencia social. Desde el momento mismo del

---

26 Véase ROMÁN ALEGRÍA, Del general de la esperanza a la desesperanza general, cinco fascículos publicados por la revista Hoy, s.f., que narran la historia de Clarín entre 1952 y 1973.

27 LUIS PACHECO PASTENE, *El pensamiento sociopolítico de los obispos chilenos, 1962-1973*, Editorial Salesiana, Santiago, 1985, p. 28.

encuentro de las culturas nativas con la europea, nunca ha sido un ente ajeno a su devenir concreto. En Chile, por su propio peso espiritual y temporal, el rol histórico que ha cumplido se confunde con lo que la patria ha sido y es, de manera que su Magisterio no puede ni debe estar ausente como mensaje y ejemplo llamado a orientar e iluminar la contingencia. Naturalmente, la presencia de la Iglesia Católica en Chile, a lo largo de casi cinco siglos, ha tenido algunas características específicas. No es por azar que los padres Ovalle y Lacunza, para citar tan sólo dos nombres que ya en la época indiana lucían una mentalidad de avanzada respecto a las ideas imperantes en su propio tiempo, hayan sido chilenos. En ese sentido Sunkel tenía razón cuando afirmaba, en 1965, que la "Iglesia Católica de Chile, sobre todo en los últimos años, no ha sido la institución rígida y ultraconservadora que se encuentra con tanta frecuencia en otros países latinoamericanos. Por el contrario, ha tenido más bien una influencia reformista tratando de llevar a la práctica las doctrinas sociales de la Iglesia y ha mostrado en general la misma flexibilidad y adaptabilidad al cambio que ha caracterizado a la sociedad chilena en su totalidad".[28] Pero unido a lo anterior se debe considerar que "los años sesenta viven el auge del diálogo cristiano marxista que busca puntos de encuentro, no tanto doctrinarios sino de posibilidades de acción conjunta. En círculos europeos hay tendencias renovadoras del marxismo que hacen que muchos estimen que son posibles ciertos niveles de entendimientos. Por otra parte, como consecuencia de la Guerra Fría, que el continente vivió muy duramente, hace que muchos proyectos de cambios sociales sean motejados de promarxistas y muchos hombres de probada convicción cristiana, son acusados de mostrar desviaciones hacia esa ideología".[29]

En ese clima de irreflexivo entusiasmo, donde quizás sin advertirlo se incitaba al diálogo en una sola dirección, fueron pasando de contrabando a la sociedad ciertas concepciones globales que más allá de las palabras y los gestos eran coincidentes con los designios ideológicos del marxismo-leninismo. Sin ningún temor fue desechada una vigorosa advertencia formulada no hacía mucho por el Papa Pío XII: "Con profunda amargura tenemos a este propósito que lamentar el apoyo prestado por algunos católicos a la táctica del comunismo, para obtener un efecto por ellos no querido. ¿A qué fin, por lo demás, razonar sin un lenguaje común o cómo será posible encontrarse si los caminos son divergentes; esto es, si una de las partes obstinadamente rechaza y niega los comunes valores absolutos haciendo, por lo mismo, irrealizable toda coexistencia en la verdad?".[30] Las consecuencias para la cristiandad no se hicieron esperar. En los últimos años de la década de los ´60, en todas partes, se produce una gran deserción entre los sacerdotes y personas de vida consagrada. El futuro quedó comprometido porque los movimientos apostólicos llamados a plasmar con sentido cristianismo la vida diaria en el mundo ordinario, como la Acción Católica, se desvanecieron al no lograr seguir concitando el interés de la juventud. Los seminarios, ese termó-

28 OSVALDO SUNKEL, "Cambio social y frustración en Chile", Revista de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Chile, año 23, 3er y 4º trimestre, 1965. Está recogido en HERNÁN GODOY URZUA, *Estructura Social de Chile*, Editorial Universitaria, Santiago, 1971. La cita en p. 536.

29 LUIS PACHECO, op. cit., p. 32.

30 PÍO XII, Mensaje de Navidad, 1956. Citado en carta pastoral El deber social y político en la hora presente, emitida por la Conferencia Episcopal de Chile el 18.9.62 y recogida en *Documentos de la Conferencia Episcopal de Chile, 1952-1977*, ESEJ., Tomo II, p. 29.

metro de la vitalidad de la Iglesia, quedaron vacíos. El caso de la diócesis de Santiago es patético: en años recientes se había construido un enorme complejo en Apoquindo para reemplazar las viejas casonas de Providencia y, en 1970, ya sólo albergaba a un solitario huésped. ¡Vaya resultado para tanto diálogo bienintencionado! Quizás nunca antes se había discutido tanto sobre religión ni se había apelado con tanta pasión al compromiso, pero los resultados alcanzados eran descorazonantes.

En el plano político, ante la innegable seducción que por esos días ejercía el comunismo en algunos círculos católicos, el diagnóstico de los obispos chilenos apuntaba a que "la debilidad e inoperancia de los gobiernos democráticos, la falta de una acción decidida para solucionar los graves problemas de la hora presente y la prolongación indebida de una situación injusta e intolerable ha llevado a gran parte de nuestro pueblo, aún en contra de su voluntad, a buscar la solución de su triste estado en la doctrina comunista". También les parecía oportuno recordar que hasta ese momento el comunismo "nunca se ha impuesto por convicción, por el valor de su doctrina, sino por la debilidad de los Estados y partidos que se llaman a sí mismos democráticos, y ha llegado al poder sólo para convertirse en el enemigo implacable de todos los que no piensan del mismo modo, incluso de aquellos que han hecho posible su ascensión. Del triunfo del comunismo en Chile, la Iglesia y todos sus hijos sólo pueden esperar persecución, lágrimas y sangre". Después de citar las palabras de Pío XII que se acaban de transcribir, los obispos preveían los resultados que tendría el intento de marchar junto a los comunistas: "Quienes siempre se benefician de esta situación, como la historia lo ha demostrado en múltiples y dolorosos casos, son las habilísimas y muy bien organizadas huestes comunistas". De ahí que, "no puede causar extrañeza que la Iglesia declare que quienes traicionan los sagrados derechos de Dios, de la Patria y del hombre colaborando en una acción que va dirigida directamente contra esos valores, fundamentos y base de toda civilización cristiana, no estén en comunión con ella". El tenor de la advertencia era clarísimo. Sin embargo, en lugar de renovar y fortalecer las convicciones de quienes no compartían en absoluto la visión comunista y creían con sinceridad en el valor irrenunciable de la concepción cristiana de la persona y de la sociedad, los propios obispos abrieron una brecha. En efecto, el mismo documento afirmaba que la oposición al marxismo-leninismo "no puede hacer olvidar empero a los católicos que la Iglesia ha condenado los abusos del liberalismo capitalista. Más aún, la Iglesia concretamente no puede aceptar tampoco que se mantenga en Chile, como ya lo hemos dicho, una situación que viola los derechos de la persona humana y, por ende, la moral cristiana".[31]

A los creyentes no les era posible permanecer indiferentes ante esa carta pastoral tan novedosa en su estilo y en su contenido. "Difícil dilema para el cristiano en Chile —acota Luis Pacheco— ya que la Iglesia está diciendo implícitamente ni marxismo ni liberalismo. Poco tiempo más, en 1964, la democracia cristiana chilena, encabezada por Eduardo Frei, llegaba al poder con ese postulado, propiciando una vía no capitalista de desarrollo que no pudo plasmar en un modelo plenamente exitoso".[32] Como

31 Carta pastoral El deber social y político, op. cit., pp. 28 y 30.
32 LUIS PACHECO, op. cit., p. 43.

era de esperar, el Partido Liberal se sintió herido y reaccionó con vigor. Su directiva, encabezada por Mariano Puga, se reunió con el cardenal arzobispo de Santiago, monseñor Raúl Silva Henríquez —a quien la Santa Sede había nombrado en dicho cargo el 29 de junio de 1961— y el 30 de septiembre de 1962 emitió una cortante declaración pública. En el otro extremo del arco político, Pablo Neruda, en un acto celebrado el 12 de octubre de 1962 en el teatro Caupolicán, sostuvo con la mayor seriedad que el más alto concepto de la patria, la sociedad y la familia eran, precisamente, los realizados en la Unión Soviética, de manera que la condenación de la carta pastoral se fundaba en un "monstruoso error" o en una "mentira" motivada por la alianza de la Iglesia con el capitalismo y el imperialismo.[33]

El problema que para la Iglesia ha representado en este siglo compatibilizar las enseñanzas evangélicas con las doctrinas económicas —cuestión que en gran medida se reduce al sentido del trabajo humano— sólo sería resuelto con meridiana claridad por el Papa Juan Pablo II en su encíclica Laborem Exercens, de 14 de septiembre de 1981. En los años ´60 el tema era difícil de manejar porque la doctrina social de la Iglesia era quizás demasiado ambigua en sus formulaciones prácticas y dejaba un amplio espacio a interpretaciones incluso contradictorias. En cualquier caso, según los términos de la pastoral de los obispos todavía era nítida la incompatibilidad entre el comunismo y la fe cristiana, aunque un influyente sector del estamento eclesiástico opinaba lo contrario. El cardenal Raúl Silva Henríquez, por ejemplo, lanzó una afirmación que hizo escuela: "No hay que ser reaccionario". Los comunistas, "han hecho realizaciones positivas en el orden moral público, que es lo más delicado y que aquí se descuida".[34] No hay que ser reaccionario; ese era el quid de la cuestión en esta época de cambios. De ahí en adelante ese modo de ver las cosas, el insano temor a ser tachado de reaccionario, arrastraría a muchos y les lanzaría en brazos del marxismo.

El eje de todas estas distorsiones y contorsiones dialécticas, que dan forma a lo que en este contexto se puede denominar progresismo, está dado por dos rasgos característicos, el futurismo y el utopismo. Mario Góngora llamó la atención al respecto en los siguientes términos: "Se ha generalizado mucho el sentimiento de ruptura íntima, la negativa a asumir el pasado, se proyecta toda la noción valorativa en una imagen del hombre futuro, desdeñando las figuras históricamente dadas. Lo que hoy se suele llamar humanismo cristiano no es un verdadero humanismo porque éste postula siempre ejemplos vivos, históricos, formadores, merecedores de recuerdo e imitación, no la imagen abstracta del hombre".[35] A ese hombre futuro hay que construirle una nueva sociedad, que para los católicos progresistas no puede estar edificada sobre el pasado. ¡El pasado no nos ata!, parece ser su consigna. En consecuencia y de manera inevitable, hay que tener "la inquebrantable decisión de romper radicalmente con el orden

---

33 Véase JOSÉ GORBEA, "El ´impacto` de la Pastoral", en Revista Mensaje nº 114, nov. de 1962.

34 La Nación, 25.11.62. Sobre la controvertida personalidad del cardenal Raúl Silva Henríquez, véase LUIS EUGENIO SILVA, "Dimensión humana del cardenal Silva", La Segunda, 22.9.97. El padre Luis Eugenio Silva fue durante mucho tiempo su secretario privado, de manera que sabe de lo que habla. Sin embargo, pareciera que su artículo, escrito con ocasión de los 90 años recientemente cumplidos por el cardenal, está impregnado de caridad hacia un anciano enfermo que ya perdió la facultad de discernir.

35 MARIO GÓNGORA DEL CAMPO, *Civilización de masas y otros ensayos*, op. cit., p. 115.

actual, de acabar con el pasado y, partiendo de cero, de construir un orden totalmente nuevo, y que responda a todos los anhelos del hombre".[36]

Nada tiene de extraño, entonces, que para construirle una nueva morada al hombre del futuro se haya cedido a la tentación del "adanismo", del empezar de cero, ejercicio al que invitaban los jesuitas del Centro Bellarmino desde las páginas de su revista. Lo primero, en esa dirección, era demoler los símbolos de la autoridad tradicional. El lugar emblemático en que esa aspiración pudo realizarse —significativo en tanto por definición reune el ímpetu de la juventud con la serenidad del saber, de la experiencia del pasado morosamente acumulado— fue la institución universitaria.

No fue por casualidad ni de manera espontánea que el día 7 de abril de 1967, durante la solemne inauguración del año académico de la Pontificia Universidad Católica de Chile, en Santiago, Miguel Ángel Solar, presidente de su Federación de Alumnos, haya logrado sorprender a los presentes con un arrogante discurso: "La superación de la actual crisis de la Universidad solamente comenzará cuando sea relevado el actual Rector Excmo. Monseñor Alfredo Silva de su cargo y, más que eso, cuando su lugar de Rector pase a ser ocupado por un hombre de reconocidas capacidades y vocación universitaria y moderno espíritu organizador". Además de Rector, monseñor Silva Santiago era el Gran Canciller de esa universidad y al efecto dependía directamente del Vaticano. El 6 de junio siguiente, Solar presentaba al Consejo Superior de la Universidad un documento centrado en la "crisis de autoridad", que él tituló Hombres nuevos para la nueva Universidad.

Unos días más tarde reventó un conflicto similar en la la Universidad Católica de Valparaíso. Como el Gran Canciller de esa casa de estudios y Arzobispo de la diócesis, monseñor Emilio Tagle, ratificara su confianza en el Rector, un grupo de estudiantes asaltó el arzobispado y causó destrozos de toda índole. Era el preludio de un nuevo modo de entender el diálogo con la autoridad.

El once de agosto de 1967, alumnos democratacristianos partidarios de la reforma universitaria ocuparon los recintos de la Pontificia Universidad Católica de Chile. De inmediato fueron apoyados por las organizaciones juveniles que controlaban los comunistas en otras universidades. Con el paso de los días el problema derivó en asunto nacional y el propio presidente Frei tomó cartas en el asunto, solicitando al Vaticano que otorgara poderes especiales al cardenal Silva Henríquez para que éste mediara y diera solución al conflicto. Con esa gestión desautorizó a la autoridad universitaria e hizo inevitable su caída. El día veinte de agosto, la Sagrada Congregación de Seminarios y Universidades accedió a lo solicitado desde La Moneda. La suerte quedó así echada. El cardenal no medió, sino que hizo uso de sus nuevas atribuciones y simplemente desplazó a monseñor Silva Santiago, acordando directamente con la Federación de Estudiantes el nombre del nuevo Rector, Fernando Castillo Velasco. El ministro del Interior, Bernardo Leighton, no pudo menos que felicitar a los estudiantes en la persona de Miguel Ángel Solar. A juicio de Teresa Donoso, "la toma de la Universidad Católica y su secuela más funesta —la Rectoría

36 Editorial de la revista Mensaje, 15.12.62, p. 591.

de Castillo Velasco— constituyen sólo el primer capítulo (público) de la infiltración maxista en la Iglesia Católica chilena".[37]

Los síntomas de indisciplina al interior de la Iglesia, provocada por religiosos y laicos comprometidos con la causa progresista —elementos que ya ni siquiera tenían la delicadeza de ventilar en silencio su infidelidad, su conversión al marxismo— hicieron crisis el 11 de agosto de 1968. De madrugada, nueve sacerdotes, tres monjas y doscientos laicos se tomaron la Catedral Metropolitana de Santiago. Los argumentos esgrimidos para justificar su insólita acción fueron: protestar por la prohibición eclesiástica de la píldora anticonceptiva; protestar por el viaje del Papa Paulo VI a Colombia, un país capitalista; y protestar por la construcción del Templo Votivo de Maipú. Ese día celebraron una misa, pidiendo por la clase trabajadora explotada en América del Sur, por el pueblo uruguayo en su lucha, por los procesados políticos en Brasil y otras causas similares. Ángel Parra y su hermana Isabel, ambos marxistas, interpretaron un Oratorio para el Pueblo. Bajo el púlpito instalaron posters del Che Guevara y de Camilo Torres. ¡Todo muy entretenido pero sólo vagamente cristiano! Quien oficiaba de vocero del grupo ocupante, Clotario Blest, declaró: "Estaremos de la mano con nuestros hermanos marxistas, en la barricada del pueblo contra el capitalismo, siguiendo el ejemplo de Camilo Torres. Nosotros reverenciamos al Che Guevara". Pero el broche de oro lo puso el relacionador público del Arzobispado, Raúl Gutierrez, cuando confesó a gritos: "No me parece que en estos instantes, en Chile, sea necesario seguir el camino de Camilo Torres, pero si se hace indispensable hay que tomarlo. Aunque se corra la suerte de Camilo Torres o del Che Guevara, dos personajes a quienes nosotros consideramos verdaderos santos". El cardenal Silva Henríquez, reaccionó mediante una declaración en la que reconoció estar ante "uno de los actos más tristes de la historia eclesiástica de Chile (...) Se ha profanado nuestra Iglesia Catedral". Anunció excomuniones a los sacerdotes que habían participado en los hechos, pero cómo éstos se apresuraran a ofrecer sus disculpas levantó la sanción, no sin antes hacer constar que "he sentido la bondad que hay en ellos. Creo que es muy positivo que haya estas tensiones". De ese modo y en esta jornada nació la Iglesia Joven.[38]

Lo ocurrido en Chile no fue casual ni demasiado original. Probablemente era hasta cierto punto inevitable que el desorden sacudiese a la Iglesia al poner en práctica los documentos conciliares. Pero cosa muy distinta es que algunos hayan aprovechado dicha circunstancia para tergiversarlos. Este fenómeno es conocido entre los estudiosos como el metaconcilio[39] La Iglesia, en esta ocasión, padeció un embate que provenía de su propio seno. Quizás se deba a Maritain el más valioso testimonio sobre el significado de

37 La narración del conflicto en las universidades católicas del país, con abundancia de nombres, en TERESA DONOSO LOERO, op. cit., pp. 9-27. Las citas en p. 11 y 38.

38 La narración de la toma de la Catedral en TERESA DONOSO LOERO, op. cit., pp. 39-48. Las citas en pp. 42, 43 y 46. Un sacerdote que participó en la toma de la Catedral, el español Paulino García, obligado a regresar a su lugar de origen como consecuencia de ese hecho, en septiembre de 1970 escribió una carta a Gladys Marín, Secretaria General vitalicia de las Juventudes Comunistas de Chile. Su tenor ahorra muchos comentarios: "¡Adelante la Izquierda, mierda! Ojalá lleguen al poder y acaben para siempre con la explotación, el hambre, la incultura, etc., etc. Su triunfo y la implantación del auténtico socialismo serán definitivos en América Latina. (...) Sean fieles al marxismo. Su triunfo adelantará la historia". En op. cit., p. 46.

39 Véase PHILIPPE DELHAYE, *La ciencia del bien y del mal*, Ediciones Internacionales Universitarias, Barcelona, 1990. De especial interés el cap. V, Las colaboraciones imposibles.

esa fuerza encaminada a torcerle el sentido sentido al Concilio, empeño en el que destacaron quienes a lo largo y ancho del mundo prefieren aceptar cualquier cosa con tal de no parecer reaccionarios. Fue enorme el revuelo provocado por la publicación, en 1967, de su obra El campesino del Garona. Se trataba de un crudo exámen de conciencia donde juzgaba sin compasión los errores que él mismo había contribuido a crear a lo largo de su vida. Allí denunció "la fiebre modernista fuertemente contagiosa, al menos en los círculos llamados ´intelectuales`, y junto a la cual el modernismo de tiempos de Pío X no era más que un modesto romadizo del heno, surge como una especie de apostasía ´inmanente` (por ello entiendo decidida a permanecer cristiana a cualquier precio). Esta apostasía estaba en preparación desde hace bastantes años y esperanzas oscuras de las partes bajas del alma, surgidas acá y allá con ocasión del Concilio, aceleraron la manifestación, que algunas veces ha sido mentirosamente imputada al ´espíritu del Concilio`.[40]

Fue este fermento modernista el que cuajó en Chile en ciertos ambientes clericales y también en la cúpula ideológica democratacristiana, convirtiéndose en agudo factor de división de un pueblo mayoritariamente católico, el cual había sido inducido a creer que la opción política personificada en Eduardo Frei no sólo era anticomunista, sino también católica en el más genuino sentido de esa palabra.

Este proceso desgarrador —el Papa Paulo VI, profundamente mortificado, llegó a decir que el demonio se había colado en la Iglesia— comenzó a cerrarse en la Iglesia universal el 16 de octubre de 1978 con la elección del cardenal polaco Karol Józef Wojtyla al trono de Pedro, quien tomó para sí el nombre de sus predecesores más cercanos como símbolo de la tarea de pastor que se proponía abordar: reunificar la grey en torno al Evangelio de Jesucristo y de la doctrina que de allí se deriva. Esa labor, que le ha llevado a viajar y escribir como ningún otro Pontífice lo había hecho, cambió la dirección que llevaba la Iglesia y la volvió a situar, como en sus mejores tiempos, en el centro espiritual de la cultura de la época. Gracias a Juan Pablo II, para creyentes y agnósticos, la Iglesia ha vuelto a ser un punto de referencia ineludible en la discusión de todas las grandes cuestiones éticas que interesan al hombre en este fin de milenio.

En el ámbito latinoamericano la rectificación se inició 27 de enero de 1979, con la presencia del Papa Juan Pablo II en la Conferencia Episcopal Latinoamericana celebrada en Puebla, México. En la Basílica de Nuestra Señora de Guadalupe, durante el acto inaugural, dijo a los obispos: "Vosotros sois guías espirituales, no líderes sociales, ni políticos ni funcionarios de un orden secular". Al día siguiente, en el Seminario de Palafox, los exhortó en estos términos: "Debemos mantener la pureza de la doctrina (...) Ellos se esfuerzan por mostrar a un Jesús políticamente comprometido, como alguien que luchaba contra la dominación romana y contra los poderosos, como alguien implicado en la lucha de clases". ¡No! —exclamó el Papa, con autoridad y determinación impresionantes— "esta noción de un Jesús político, revolucionario, el subversivo de Nazareth, no está en armonía con las enseñanzas de la Iglesia".[41] En ese

40 TERESA DONOSO LOERO, op. cit., pp. 8 y 9.

41 Las citas del Papa están tomadas de CARL BERNSTEIN y MARCO POLITI, *Su Santidad. Juan Pablo II y la historia oculta de nuestro tiempo*, Grupo Editorial Norma, Bogotá, 1996, pp. 224, 226 y 227.

preciso instante había concluído una época de lamentables extravíos. La Iglesia latinoamericana no podía seguir siendo comparsa de los falsos ídolos. Para cualquier cristiano de buena fe, en adelante era imposible seguir colaborando siquiera indirectamente con el marxismo; la Teología de la Liberación era anatema. En la Iglesia chilena, que fiel a la consigna "no ser reaccionarios" había llegado al extremo de convertirse en cuna del movimiento Cristianos por el Socialismo, sólo la visita de este Papa, en abril de 1987, saldó definitivamente los equívocos y divisiones que había provocado el autodenominado "progresismo" en el último cuarto de siglo.

En un plano diferente, otro hecho que contribuyó a diluir los consenso básicos de la sociedad chilena y que tiene como punto de partida la elección presidencial de 1964, se encuentra en la forma con que se aplicó la reforma agraria.

La exigencia de llevar a cabo una reforma agraria —junto a una reforma tributaria orientada a forzar la redistribución del ingreso nacional— era una de las condiciones impuestas por la Alianza para el Progreso para acceder a la ayuda norteamericana que administraba la Agency for International Development (AID). Sin duda, para acelerar el proceso tendiente a superar el subdesarrollo era conveniente adoptarar un conjunto de medidas bien coordinadas, y entre ellas, las encaminadas a aumentar la producción del agro. Avanzando en esa dirección, el presidente Jorge Alessandri promulgó la primera ley de reforma agraria que tuvo el país, cuyo acento estaba puesto en la incorporación al flujo económico de los terrenos no cultivados. En otras palabras, el objetivo era aumentar la producción y si para ello hacía falta expropiar, el dueño del predio debía ser indemnizado. El derecho a la propiedad, por tanto, en cualquier caso sería cabalmente respetado. Por cierto, para los que veían en la tenencia de la tierra un factor eminentemente político, donde lo más relevante era el potencial electoral que representaba, las consideraciones económicas debían ser subordinadas a ese objetivo. En consecuencia, de inmediato bautizaron la iniciativa de Alessandri como "reforma de macetero".

El presidente Eduardo Frei, en su primera cuenta sobre el estado de la nación —21 de mayo de 1965— puso la cuestión agraria en el centro de lo que sería su gestión de gobierno: "Es un hecho indiscutible que el problema más importante de nuestro desarrollo económico reside fundamentalmente en el atraso de nuestro sector agrícola", expresó. Ese atraso, de acuerdo la tesis vigente en los años '30 —época en que se modeló lo esencial de la concepción del mundo que tenía Frei— se debía a la concentración de la propiedad del suelo agrícola en pocas manos. En consecuencia, para superar el atraso del sector agrícola, se comprometió a aumentar la producción por medio del estímulo a dicha actividad y a dar tierras a 100.000 campesinos. Como el marco legal heredado de Alessandri le parecía estrecho para lograr un cambio significativo en la tenencia de la tierra, propuso una modificación al derecho de propiedad. Dicha reforma constitucional fue aprobada en 1967 y permitió expropiar grandes áreas del mejor suelo a cambio de un pago prácticamente simbólico. Aún así, y a pesar de haber recibido de los Estados Unidos US.$ 534 millones en apoyo a las reformas estructurales, de los cuales una gran parte consistía en ayuda alimentaria, no pudo cumplir dichas metas. Cuando terminó su período, había 28.700 familias de asentados, sin

título de propiedad, y la agricultura permanecía estancada en torno al 10% del producto nacional.[42]

Independientemente del fracaso económico que significó la reforma agraria, lo que interesa destacar aquí es su incidencia en el progresivo desgarramiento del consenso nacional. Asumiendo que haya sido imprescindible intensificar el proceso de reforma agraria iniciado por Alessandri —un supuesto discutible ya que desde un punto de vista técnico más actual la productividad del agro no está relacionada directamente con el régimen de tenencia de la tierra, al menos cuando ella está en manos privadas— , ¿fue posible haber intentado una reforma agraria más acorde con el interés nacional? Sin duda. La iniciativa, en sí misma, no era necesariamente demagógica. Si respecto a las metas propuestas fue un esfuerzo estéril, ello se explica porque se la materializó con un criterio ideológico.

El encono mostrado por los funcionarios democratacristianos encargados de reformar el campo, ha sido visto como una especie de "rebelión contra el padre", un mecanismo psicológico destinado a compensar el sentido de culpa de los viejos falangistas, complejo cuya raíz estaría en los orígenes conservadores de dicha agrupación política. Sea cierto o no, el hecho es que allí se creó un fermento revolucionario que a la larga sólo podía favorecer a la izquierda marxista.

El nudo de la dimensión política de la reforma agraria, que desplazó por completo a los aspectos técnicos involucrados en ella, tiene por referencia una concepción ideológica de la sociedad futura. En efecto, el comunitarismo, despojado de la dimensión espiritual que le había dado Maritain al forjar el concepto, fue reducido por los democratacristianos chilenos a mera propiedad comunitaria, un aspecto central, aunque etéreo, del proceso revolucionario de transformación de las estructuras que impulsaban. "El comunitarismo —habían escrito Julio Silva Solar y Jacques Chonchol— surge en el pensamiento cristiano avanzado de nuestra época como una réplica al sistema capitalista".[43] Puede parecer superfluo observar que aquello de pensamiento cristiano avanzado de nuestra época no pasa de ser una fórmula que encubre al progresismo modernista, pero como se trata de una pretensión ideológica abusiva, que dista mucho de estar en comunión con la verdadera doctrina de la Iglesia, conviene señalarla. Ahora bien, en el nivel operativo, cuesta imaginar una noción más inadecuada que el comunitarismo para servir de guía a una reforma agraria con saldo positivo, es decir, capaz de cumplir las metas que el presidente Frei había señalado. Sin embargo, fue responsabilidad de su gobierno haber encomendado a Jacques Chonchol la tarea de llevarla a cabo.

Nada podía ser más imprudente que ese nombramiento si lo buscado era incrementar la producción y crear nuevos propietarios. Chonchol, desde hacía mucho tiempo en abierta fuga intelectual hacia las constelaciones marxistas, poco antes de hacerse cargo del proceso chileno había residido dos años en Cuba, asesorando la reforma agraria implantada por Fidel Castro. De más está decir que Chile no era Cuba, pero igual impuso

42 Las cifras en Whelan, op. cit., pp. 157-161. La cita de Eduardo Frei en p. 157. Sobre el proceso de reforma agraria, véase JOSÉ GARRIDO R., *Historia de la Reforma Agraria en Chile*, Editorial Universitaria, Santiago, 1988.

43 JULIO SILVA SOLAR Y JACQUES CHONCHOL, *El desarrollo de la nueva sociedad en América Latina*, op. cit., p. 34.

como criterio rector, anular a la aristocracia terrateniente y, de paso, situar a los campesinos en una posición que les hiciera dependientes del poder político. Según sus convicciones ideológicas, para los fines de la revolución era necesario aplastar a la clase que desde tiempos inmemoriales había sido dueña de la tierra, pero, al mismo tiempo, era inconveniente crear una nueva clase de pequeños propietarios. La experiencia de los *kulaks* en la Unión Soviética había sido aleccionadora: en cuanto el hombre se hace dueño de una parcela de tierra se transforma en un ser libre, es decir, en un contrarevolucionario. De ahí que, en los hechos, la reforma agraria no haya tenido en consideración elevar la producción ni beneficiar a los trabajadores agrícolas, sino acabar con lo que se consideraba era la base del poder comercial y político de la derecha más tradicional, sindicada como culpable de las mayores injusticias que presentaba la estructura social chilena, e instrumentalizar a los campesinos.

Aquel primer objetivo, destruir a la gente de derecha, era el propósito declarado del grupo tercerista de la democracia cristiana —el más afín con el marxismo, en el que militaba Chonchol, y el que llegó a controlar la estructura partidista en los últimos años del gobierno de Frei—. Dicho fin no era ningún secreto. "Señalamos la falta de elaboración de un estatuto de aniquilamiento de los grupos económicos de poder que se basa en la ruptura del diálogo con la Derecha, cuyos miembros sólo han sido tocados como personas a través del impuesto patrimonial, Reforma Agraria y de Propiedad y restricción de los créditos, pero no han sido menguados como fuerza organizada", declaraban en 1966.[44] Pero el tinte político de la reforma agraria, esto es, su utilización con fines partidistas, no era sólo un ideal tercerista; era el enfoque oficial del partido. En ese contexto, "es preciso que se tenga clara conciencia que la tarea de la Reforma Agraria es una tarea eminentemente política. (...) La organización campesina no será ideológicamente neutra. En la coyuntura histórica en que este proceso de organización acelerada se está realizando en Chile, sólo existen dos perspectivas posibles para orientar ideológicamente el movimiento campesino: la marxista o la democratacristiana. Y que el movimiento campesino en su generalidad adopte una u otra de estas ideologías, condicionará de un modo substancial el porvenir del sistema político nacional".[45] Como los remeros de esta nave bogaban hacia el faro marxista, los resultados electorales de 1970 no pueden ser considerados una sorpresa.

El consenso dominante en Chile desde hacía ya un par de generaciones era el de clase media, esto es, una categoría social mayoritariamente urbana y desligada de los problemas del campo, lugar del que sus mayores habían emigrado en busca de mejores horizontes. Este rasgo permite explicar por qué el despojo "legal" del que fue objeto un sector de la comunidad nacional, quizás pequeño en número pero de innegable importancia social, no conmovió a la opinión pública. Con absoluta indiferencia aceptó lo que parecía ser la liquidación del último vestigio del antiguo régimen plutocrático. Ni siquiera los industriales manifestaron mayor interés por lo que estaba ocurriendo en el agro, a pesar de lo peligroso que podía ser para ellos mismos el

44 Declaración de los Terceristas, Ercilla, 30.3.66, p. 9.
45 El Programa de la Revolución en Libertad y su cumplimiento, folleto de difusión publicado por el Partido Demócrata Cristiano en 1966, p. 44.

debilitamiento del derecho de propiedad. Esta actitud, encogerse de hombros mientras la desgracia se abate sobre el vecino, lleva a recordar el argumento de un célebre texto de Bertolt Brecht, Premio Stalin de la Paz 1954: primero fueron a buscar a ese y no me importó, luego a aquél y no me importó, más tarde a otro... ¡ay!, ahora vienen por mí...

En síntesis, la aplicación en clave ideológica de la reforma agraria socavó el derecho de propiedad y acarreó graves tensiones sociales: agitación política entre los campesinos, toma de predios al margen de la ley, afloramiento de odiosidades largamente contenidas e incluso algunos hechos de sangre. Más tarde esas tensiones serían más agudas, pero su inicio está en la política agraria de la democracia cristiana y dicha política también debe ser considerada entre los factores que contribuyeron a dislocar los consensos básicos y, por ende, a debilitar la unidad nacional.

En el análisis de los factores que a partir de la elección presidencial de 1964 fueron dislocando los consensos básicos de la sociedad chilena, no puede ser omitida la crisis de su sector militar. En razón de la naturaleza misma de la función que cumplen, los militares tienen a honor ser depositarios de la tradición y de los vínculos más profundos que mantienen unida a la comunidad nacional a través de su historia. Esos vínculos están situados sobre la contingencia y se conservan al precio del dolor, de la sangre y de la propia vida. Así estimados, resulta fácil comprender por qué una crisis militar es síntoma certero de una situación socio-política que se está erosionando con rapidez y de ordinario constituyen el preludio de hechos cuyas consecuencias suelen ser particularmente graves.

Ahora bien, para interpretar correctamente los hechos que culminaron en el acto de indisciplina materializado en el Regimiento Tacna el 21 de octubre de 1969, encabezado por el general (r) Roberto Viaux Marambio, debe tenerse como telón de fondo el desasosiego de los estamentos llamados por vocación y mandato constitucional a cumplir un rol determinante en la conservación del orden social. Es lamentable, pero quizás lógico, que un gobierno encaminado misionalmente hacia una revolución haya descuidado sus deberes respecto a las más señeras instituciones republicanas. Y, en efecto, tanto la Judicatura como las Fuerzas Armadas fueron postergados por la democracia cristiana en un grado tal, que contrariando su estilo, de ordinario impasible, en el mismo año se vieron forzados a manifestar públicamente su descontento. Los hombres de toga hicieron un paro judicial; los hombres de armas un autoacuartelamiento.[46]

Los síntomas del malestar castrense, cuyo origen radica en la secular incomprensión gubernamental del problema militar de Chile, fueron percibidos por los mandos y transmitidos oportunamente al escalón político, pero no fueron debidamente atendidos.[47]

---

46 Una minuciosa exposición de los hechos que se fueron acumulando y derivaron hacia lo que llama una institución en crisis, en JULIO CANESSA ROBERT, *Quiebre y recuperación del orden institucional en Chile. El factor militar, 1924-1973*, Emérida Ediciones, Santiago, 1995, pp. 123-145.

47 Véase, FREDERICK NUNN, "El profesionalismo militar chileno en el siglo XX: pensamiento y autopercepción de la clase de oficiales hasta 1973", en Cuadernos del Instituto de Ciencia Política nº 3, Instituto de Ciencia Política de la Pontificia Universidad Católica de Chile, Santiago, 1976.

El programa de gobierno de Eduardo Frei Montalva era muy escueto en el tema militar. Se limitaba a decir que a las Fuerzas Armadas "les daremos el trato justo y digno a que son acreedoras por su importancia y hermosa tradición; se cuidará de la organización orgánica y material de las instituciones armadas para que cumplan con sus funciones específicas y resguarden la seguridad interna y externa del país".[48] Sobre el particular, se ha escrito que "el papel de las Fuerzas Armadas en su programa de transformaciones se definía más bien por ausencia, esto es, se le asignaba un rol carente de significación en el conjunto del programa gubernamental y la estrategia de desarrollo general. Las Fuerzas Armadas no fueron para la administración democratacristiana un interlocutor equivalente a los gobiernos anteriores, producto de su relativa irrelevancia para la gestión política gubernamental".[49] De este modo y en el contexto del programa, si bien se reconocía su gravitación en los planos interno y externo de la vida nacional, también quedaba en claro que no había una política definida para ellas. De hecho, fueron abandonadas a su suerte.[50]

Las inquietudes del cuerpo de oficiales giraban en torno a tres problemas críticos. En primer lugar, lo que consideraban una suerte de asedio político, es decir, el afán de abanderizarlas con un sector político determinado —los poderosos, la burguesía, el imperialismo, etc., según la jerga revolucionaria en uso— con lo cual se afectaba el caracter permanente y eminentemente nacional de la función militar. Las Fuerzas Armadas, para satisfacer su razón de ser y cumplir las obligaciones que les son propias, no pueden estar sujetas a los vaivenes de la contingencia partidista. La única forma de asegurar la prescindencia política de los cuerpos armados en un régimen que de hecho es partitocrático, consiste —al igual que respecto a la función judicial y a la función contralora— en reconocerles una posición de autonomía relativa en el Estado, autonomía que las ciñe estrictamente al orden institucional vigente y las sitúa más allá y más arriba de cualquier tienda política.

Al Estado le concierne establecer las condiciones en que las armas serán empeñadas para obtener una decisión trascendente para la vida nacional, pero ello implica que la instancia política, el gobierno, debe ocuparse de mantener intactos el prestigio, la capacidad de combate y el sentido nacional de las fuerzas que dirige, no aceptando por motivo alguno que sean debilitadas ni menos instrumentalizadas. Como dice Jünger, "allí donde las cosas se ponen difíciles, donde crepita el fuego, donde fallan la razón y el derecho, se recurre a ellos como a último tribunal de arbitraje. Aquí está su grandeza y aquí radica su gloria. Al prestar juramento, renuncian a la libertad que adorna al ciudadano privado. Al Estado, en cambio, al poder legal, le compete la obligación de encauzar las cosas de tal modo que el soldado pueda combatir con limpia conciencia. Porque, efectivamente, la supervivencia del Estado consiste en mantener puras las fuerzas en que se apoya".[51]

---

48 EDUARDO FREI MONTALVA, "Discurso programático de gobierno del 18 de junio de 1964", en *Dos discursos*, Editorial del Pacífico, 1964, pp. 65 y 66.

49 AUGUSTO VARAS, "La intervención civil de las Fuerzas Armadas", en HUGO FRUHLING, CARLOS PORTALES y AUGUSTO VARAS, *Estado y Fuerzas Armadas*, FLACSO, Santiago, 1982, p. 73.

50 Véase ANDREA RUIZ-ESQUIDE FIGUEROA, *Las Fuerzas Armadas durante los gobiernos de Eduardo Frei y Salvador Allende*, Centro de Estudios del Desarrollo, Santiago, 1993.

51 ERNST JÜNGER, *Heliópolis. Visión retrospectiva de una ciudad*, Editorial Seix Barral, Barcelona, 1987, pp. 243-244.

Aquel concepto, medular para la supervivencia de la nación, no fue asumido en los hechos por el gobierno democratacristiano. Sin embargo, como se verá más adelante al analizar la evolución de los mensajes presidenciales, hubo conciencia del cambio que se estaba operando en el país y de la creciente importancia que iba adquiriendo el factor militar a medida que la Revolución en Libertad destruía el orden existente sin poder alzar otro en su reemplazo.

En segundo problema que afectaba a las Fuerzas Armadas se debía a la ignorancia del nivel político respecto a los aspectos profesionales que supone tener siempre a punto una organización defensiva —que sólo en parte es militar— capaz de garantizar efectivamente la libertad de acción del país mediante la disuasión o el empleo efectivo de la fuerza, según el caso. Merced a consideraciones ideológicas y a un mal entendido pacifismo, es decir, la paz a cualquier precio, el estrato dirigente había olvidado que no se alejan los horrores de la guerra amparándose en generosas quimeras, sino dotándose de un instrumento que siempre esté en condiciones anímicas y materiales de batir al que amenace la paz. En consecuencia, estaban quedando peligrosamente atrás los días en que las Fuerzas Armadas miraban con optimismo la seguridad de la nación. Sentían que estaban perdiendo las capacidades que hacen posible la victoria. Y esta realidad, cruda y dolorosa, se acrecentaba día a día por la indiferencia de un gobierno cuyas preocupaciones marchaban por otros derroteros.

El tercer problema que no era debidamente atendido por la autoridad era el de la desvalorización social del servicio prestado a la nación desde la carrera militar. Una vez más, tampoco es casual que los jueces protestaran por lo mismo. Uno de los aspectos del asunto eran los bajos sueldos; pero en el fondo se percibía cierto desdén por lo que en el alma de la patria significa el espíritu militar. Como dijo una vez el general Roberto Viaux: Hoy, "ser soldado es ser ciudadano de segunda categoría, de tercera o tal vez de cuarta, estar en los desfiles o presentaciones: puro formalismo".[52]

Las inquietudes que en aquella época tenía el estamento militar, se podrían resumir en que el gobierno democratacristiano no sabía qué hacer con las Fuerzas Armadas en tiempo de paz. Desde los años '40 en adelante, y con mayor énfasis con el advenimiento de la Guerra Fría, en todo el mundo se habían ido ampliando los roles de las Fuerzas Armadas. Sin embargo, en Chile, esas nuevas tareas en el desarrollo y en la seguridad de la nación no se plasmaban de un modo orgánico, sino más bien coyuntural.[53] Es curioso, pero un gobierno que se sentía llamado a estar en la vanguardia de lo que debe ser una sociedad moderna, en este campo no advertía que, como lo señalan Rafael Bañón y José Antonio Olmeda, "el dato fundamental de nuestro tiempo ya ha dejado de ser si un sistema es civil o militar. Se intenta averiguar ahora cuál es la medida de influencia militar en las decisiones estratégicas para la Sociedad".[54] Apar

52 FLORENCIA VARAS, *Conversaciones con Viaux*, Impresiones Eire, Santiago, 1972, p. 75.

53 Sobre el proceso de ampliación de roles a las Fuerzas Armadas en tiempos de paz, incorporándolas progresivamente a las más diversas tareas nacionales, véase GONZALO GARCÍA Y JUAN ESTEBAN MONTES, *Subordinación democrática de los militares. Éxitos y fracasos en Chile*, Pontificia Universidad Católica de Chile, Facultad de Derecho, Santiago, 1991.

54 RAFAEL BAÑÓN y JOSÉ ANTONIO OLMEDA (Comps.), *La institución militar en el Estado contemporáneo*, Alianza Editorial, Madrid, 1985, p. 50.

tándose de esta tendencia mundial, no se estimó del caso considerar a las Fuerzas Armadas cuando en 1966 se creó la Oficina de Planificación Nacional (ODEPLAN). Sobre el particular, el general Carlos Prats dijo que "se omitió enlazar este mecanismo de trabajo con la seguridad nacional, en circunstancias que en el mundo moderno resultan indivisibles para un pueblo en vías de desarrollo los conceptos de desarrollo y seguridad". En ese mismo año, al crearse la Dirección de Fronteras y Límites del Estado (DIFROL) nuevamente se incurrió en el mismo error, pues "se omitió considerar la validez de la opinión y presencia técnica de las Fuerzas Armadas, en materias que comprometían la soberanía".[55] El agravio era innegable; una bofetada a las instituciones castrenses si se recuerda que por esos días los círculos del poder limitaban la función militar a conservar la integridad del territorio nacional.

Estas omisiones en materias vinculadas a la estructura misma del Estado y el hecho que, al mismo tiempo, se les incorporase a las más variopintas tareas —plantar árboles, construir escuelas, caminos y canchas deportivas, formación de bancos de sangre en diversos hospitales, entrenar tractoristas, etc.— "refuerzan la idea de que el gobierno de la Democracia Cristiana no tenía una política definida hacia las FFAA. Cabe buscar las razones de dicha carencia en el tradicional desconocimiento entre civiles y militares. La mayoría de los actores políticos de la época recuerda que había en el partido un absoluto desconocimiento del mundo militar. El desconocimiento se traducía en una total ignorancia de quiénes eran los miembros de las FFAA, cuáles eran sus preocupaciones y cuáles sus posibilidades de aportar a la vida nacional. Era un desconocimiento tan profundo, que hacía que hasta en el nivel del lenguaje se produjesen desencuentros. Un militante recuerda que "...incluso el lenguaje que usan las FFAA al partido le ´chocaba`". Otro agrega "si se desconoce totalmente algo, no puede haber preocupación por eso; el partido no las miró, no las consideró" ".[56]

Una persona por entonces muy cercana al presidente Frei ha declarado que "...teníamos tanto que hacer, teníamos demasiado que hacer. Había que solucionar el problema de la pobreza, había que llevar a cabo la reforma agraria, organizar a las juntas de vecinos, a las mujeres... No estábamos para preocuparnos de los militares". ¡Qué tal! Y, claro, "si consideramos que el gobierno se proponía, con la ´revolución en libertad`, alcanzar metas tan altas como la modernización del aparato del Estado, la promoción popular o la reforma agraria, parece comprensible que el tema de las FFAA haya sido para ellos de importancia secundaria. Un gobierno que persigue la transformación global de la sociedad —´la revolución`— está demasiado ocupado en los cambios, en los mecanismos a utilizar y los equilibrios a mantener —´la libertad`—, como para preocuparse de aquellas instituciones permanentes del Estado que tenían tradicionalmente una dinámica propia de funcionamiento".[57]

Todo lo anterior puede explicar, pero en ningún caso justificar, la ausencia de siquiera un bosquejo de política militar durante esos años cruciales. El resultado fue una

---

55 CARLOS PRATS GONZÁLEZ, *Testimonio de un soldado.* (Memorias), Pehuén Editores, Santiago, 1987, pp. 99 y 100.

56 ANDREA RUIZ-ESQUIDE FIGUEROA, op. cit., p. 3.

57 Idem., ambas citas en p. 3.

sucesión de crisis que dañaron la disciplina y se saldaron por el camino fácil: una rotativa de Comandantes en Jefe y el abandono de las filas por parte de un número desmesuradamente alto de oficiales, desencantados por la situación imperante. Todas las instituciones fueron víctimas de este procedimiento, que se tradujo en la imposibilidad de articular acciones de mediano plazo. Dicha inestabilidad fue particularmente grave en el Ejército. Durante el período del presidente Jorge Alessandri, esa rama de la Defensa Nacional tuvo sólo un mando supremo, el general Oscar Izurieta Molina. Cuando asumió el presidente Eduardo Frei, nombró Comandante en Jefe al general Bernardino Parada Moreno, luego al general Luis Miqueles Caridi, después al general Sergio Castillo Aránguiz, a continuación al general René Schneider Cherau y, finalmente, el general Carlos Prats González. Salvo el primero, todos los demás cambios ocurrieron en circunstancias extraordinarias.

La indolente actitud que frente a uno de los deberes esenciales de la potestad política tuvo el gobierno elegido el 4 de septiembre de 1964, no podía menos que causar un enorme distanciamiento entre el cuerpo de oficiales y el partido gobernante. A partir de ese hecho objetivo se fue generando un estado de ánimo negativo, cierto recelo, que impregnó por años la percepción de los hombres de armas respecto a la capacidad de los democratacristianos para abordar los problemas militares inherentes a la conducción del Estado y en tal sentido culminó el daño que sufría uno de los pilares del consenso nacional: la confianza en que siempre el país cuenta con un instrumento militar eficaz. En suma, como lo consignó el general Prats en esos días: "La Democracia Cristiana comete un grave error histórico, al menospreciar a las Fuerzas Armadas, en las que se venía acumulando durante treinta y cinco años un fermento de frustración profesional cada vez mayor, ante el descuido de su acervo técnico-profesional y la desatención de sus necesidades sociales por los sucesivos gobiernos".[58]

En la misma medida en que las consideraciones ideológicas fueron alejando el despliegue de la Revolución en Libertad de lo que hasta las mismas bases de la democracia cristiana habían supuesto eran su meta y estilo, el desconcierto se fue apoderando del país. Una revolución, cualquiera sea su signo y sus intenciones iniciales, es una especie de sifón que todo lo traga. No puede extrañar, entonces, que el presidente Frei haya advertido cuán velozmente desaparecía el piso que le sostenía. Y no sólo a él, en tanto autoridad suprema del Estado, sino a toda la República. La cuenta anual refleja esta impresión. En 1967 ha cambiado el énfasis; ahora, "la existencia de nuestras Fuerzas Armadas se confunde con el concepto mismo de soberanía de la nación. Constituyen para el Presidente de la República los elementos que la Constitución Política le entrega para que pueda cumplir sus más altos y fundamentales deberes, cuales son preservar la soberanía y mantener el orden interno".[59] La importancia de las Fuerzas Armadas para la integridad de la patria se irá acentuando. Así, en la cuenta del año siguiente, afirmará que "la existencia de nuestras Fuerzas Armadas se confunde con el origen mismo de la nación, y son el elemento esen-

---

58 CARLOS PRATS GONZÁLEZ, op. cit., p. 103.

59 EDUARDO FREI MONTALVA, edición oficial del Mensaje al Congreso Pleno, 21 de mayo de 1967, p. 28.

cial para preservar y defender su soberanía. Como Presidente de la República hoy reitero mi confianza y la del pueblo de Chile en sus Fuerzas Armadas, que han sabido cumplir siempre con honor sus obligaciones, dando al país seguridad externa e interna".[60] La evolución gradual hacia una mayor valorización de su rol en la conservación del orden interno, ya gravemente amenazado por la propia dinámica de la revolución iniciada cinco años antes, adquirirá plena expresión en la última de sus cuentas: "Las Fuerzas Armadas tienen la más alta misión, que es la defensa de la soberanía nacional, de la integridad territorial y el resguardo de la paz social interna. Asimismo, son factores indispensables en la formación de la ciudadanía, en el desarrollo del país y en la estabilidad institucional. (...) Han llegado a ser un factor de equilibrio y de respeto, que sostienen, junto al pueblo, las bases fundamentales de nuestra democracia, ante cualquier amenaza externa o interna, o ante cualquier desborde anárquico que pretenda destruirla". Los sucesos del Tacna fueron "una muy difícil coyuntura", que finalmente "no logró dañar la solidez de nuestras instituciones militares". El presidente Frei terminó afirmando que "siento una gran confianza en el destino de mi país, porque sé qué reservas de patriotismo, de sentido del deber, de disciplina, de eficiencia y de superación profesional hay en ellas".[61]

Documentos oficiales como los recién citados no son mera retórica; se redactan con la vista puesta en la historia. En consecuencia, la evolución de los conceptos vertidos por el presidente Frei es altamente significativa. Para él —las Instituciones Armadas no abrigaban dudas sobre el particular— estaba quedando en claro que en esa hora borrascosa el destino del país pendía crecientemente de sus Fuerzas Armadas. Lo trágico del asunto era que la disciplina, la eficiencia y la superación profesional de sus cuadros habían sido dañados por la actitud ideológica de su propio gobierno. Se venían encima tiempos difíciles. La siembra de vientos que había iniciado la democracia cristiana cosecharía tempestades. El general René Schneider, Comandante en Jefe del Ejército, pagaría con su vida los errores acumulados en los círculos políticos. Es un hecho que el estamento militar jamás olvidará.

El paso final hacia la destrucción de la democracia chilena se dio con la elección de Salvador Allende como Presidente de la República. A partir de ese momento, en procura de una sociedad cualitativamente diferente —cuyo modelo era la Cuba de Fidel Castro— el ímpetu revolucionario marxista-leninista que animaba a la Unidad Popular buscó expresamente la transformación total e irreversible del consenso nacional de clase media todavía vigente, dado que era incompatible con el modelo de sociedad socialista que se pretendía implantar. Buscando ese resultado, el país se vio desafiado por acciones conscientemente dirigidas a la destrucción de sus estructuras económicas e institucionales, acciones que fueron dirigidas desde la misma sede del gobierno. Ese curso de acción política era inédito en la historia del país. Pero, hay que repetirlo una vez más, tal camino no surgió de pronto; fue la continuación de un proceso autodestructivo iniciado hacía exactamente seis años, durante los cuales se fue levantando la pira en que terminó por arder el sistema democrático chileno.

---

60 EDUARDO FREI MONTALVA, edición oficial del Mensaje al Congreso Pleno, 21 de mayo de 1968, p. 13.

61 EDUARDO FREI MONTALVA, edición oficial del Mensaje al Congreso Pleno, 21 de mayo de 1970, p. 15.

La Unidad Popular y la pérdida del consenso.

Para el desarrollo de este ensayo —cuyo argumento central es la disolución de los consensos nacionales básicos durante la década revolucionaria 1964-1973 y su recuperación durante la gestión de gobierno presidida por el general Augusto Pinochet— no tiene demasiado interés abundar en la crónica de la Unidad Popular. A diferencia de lo que ocurre con el período democratacristiano —donde la única obra que sigue día a día los sucesos políticos es la de Arturo Olavarría[62]— la bibliografía existente sobre la cadena de acontecimientos que materializaron la revolución durante la Unidad Popular es frondosa. Se han publicado muchas investigaciones efectuadas por compatriotas y extranjeros que los han precisado minuciosamente. Quizás por su dramatismo, los mil días de Allende han concitado enorme atención, aunque muchas veces apasionada.[63]

Los episodios que configuraron la catástrofe sufrida por el país durante la Unidad Popular son, pues, suficientemente conocidos. Esa información, por cierto, es el sustrato empírico de la tarea de interpretación global que aquí se intenta. Tambien desde esta perspectiva analítica, que busca desentrañar el significado de un complejo proceso, se han escrito obras de importancia. Con todo, el tema no está agotado. Aunque el resultado de la posterior evolución de la situación chilena y mundial han inclinado la balanza del juicio histórico hacia una visión negativa de esa época —y en grado tal que hoy nadie lo reivindica— no existe todavía una visión indiscutible sobre el particular. Es más, llama la atención que los textos disponibles muestren tan dispar hondura y, por lo mismo, tan desigual fecundidad interpretativa.[64]

---

62 ARTURO OLAVARRÍA BRAVO, *Chile bajo la democracia cristiana*, Editorial Nascimento, Santiago, 6 vols. aparecidos entre 1965 y 1970.

63 Cabe destacar: RICARDO BOIZARD, *Proceso a una traición*, Ediciones Encina, Santiago, 1974; MARÍA CORREA MORANDÉ, *La guerra de las mujeres*, Editorial Universidad Técnica del Estado, Santiago, 1974; TERESA DONOSO LOERO, *Breve historia de la Unidad Popular*, Editorial Lord Cochrane, Santiago, 1974, y *La epopeya de las ollas vacías*, Editora Nacional Gabriela Mistral, Santiago, 1974; PATRICIO DOONER, *Periodismo y política. La prensa de derecha e izquierda 1970-1973*, Editorial Andante, Santiago, 1989; *La economía de Chile durante el período de la Unidad Popular: la vía chilena al marxismo*, Escuela de Negocios de Valparaíso, Fundación Adolfo Ibáñez, Valparaíso, 1974; EMILIO FILIPPI y HERNÁN MILLAS, *Anatomía de un proceso. La experiencia socialista chilena*, Editorial Zig-Zag, Santiago, 1973; JOAQUÍN FERMANDOIS, *Chile y el mundo 1970-1973: la política exterior del gobierno de la Unidad Popular y el sistema internacional*, Ediciones Universidad Católica de Chile, Santiago, 1985; ARTURO FONTAINE ALDUNATE y CRISTIÁN ZEGERS ARIZTÍA, ¿Cómo llegaron las Fuerzas Armadas a la acción del 11 de septiembre de 1973?, separata publicada por El Mercurio, Santiago, 11.9.74; DALE L. JOHNSON, *The Chilean Road to Socialism*, Anchor Doubleday, Garden City, New York, 1973; TOMÁS P. MAC HALE, *La libertad de expresión en Chile*, Ediciones Portada, 1973; HERNÁN MILLAS (rec.), *Francotiradores del humor*, Editora Nacional Gabriela Mistral, Santiago, 1974; ORGANIZACIÓN DE LOS ESTADOS AMERICANOS (OEA), Comisión Especial de Consulta sobre Seguridad, *El proceso marxista-Leninista en Chile*, Washington D.C., 1974; SILVIA PINTO, *Los días del arco iris*, Editorial del Pacífico, Santiago, 1972; Quiebra del Estado de Derecho durante el régimen marxista de Salvador Allende y adhesión del Colegio de Abogados al nuevo gobierno de Chile. Antecedentes, folleto publicado por el Colegio de Abogados de Chile, Santiago, octubre de 1973; CARLOS M. RAMA, *Chile. mil días entre la revolución y el fascismo*, Editorial Planeta, Barcelona, 1974; EDUARSO SOTO KLOSS e IVÁN ARÓSTICA MALDONADO, "La destrucción del Estado de Derecho en Chile 1970-1973", en Revista de Derecho Público N°s 53/54, enero-diciembre 1993, Universidad de Chile, Facultad de Derecho; Tres años de destrucción, folleto publicado por la Asociación de Impresores de Chile (ASIMPRES), Santiago, 1974; FLORENCIA VARAS y JOSÉ MANUEL VERGARA, *Operación Chile*, Editorial Pomaire, Santiago, 1973; JAMES R. WHELAN, *Death of a Marxist Dream*, Arlington House, Westport, Connecticut, 1981.

64 Cabe destacar: GENARO ARRIAGADA HERRERA, *De la vía chilena a la vía insurreccional*, Editorial del Pacífico, Santiago, 1974; GONZALO ARROYO, S.J., *Golpe de Estado en Chile*, Ediciones Sígueme, Salamanca, 1979. BERNARDINO BRAVO LIRA, *Régimen de gobierno y partidos políticos en Chile*. 1924-1973, Editorial

Los estudios tenidos a la vista difieren de este ensayo en cuanto elaboran una tesis cuyo acento en cada caso es diferente. En parte por la influencia de las publicaciones citadas —en su mayoría aparecidas muy poco después del Pronunciamiento Militar que puso término al experimento marxista en Chile— pero también por motivos de índole coyuntural, la opinión que ha prevalecido se inclina a atribuir la responsabilidad directa del quiebre de la democracia chilena a Salvador Allende y al círculo inmediato que le rodeaba. Las ideas que sustentaron, los métodos que utilizaron y las personas que las sirvieron, han caído en el mayor descrédito. Estas páginas se hacen cargo de esa realidad inapelable, pero su acento es otro. Aquí se pretende comprender lo ocurrido enfocándolo con un ángulo de visión más amplio, esto es, integrando el período de la Unidad Popular en una época mayor, cuyo significado común es el de un proceso socio-político de carácter revolucionario. En ese contexto, el gobierno marxista-leninista, o castrista-guevarista si se prefiere, constituye la segunda fase de una revolución previamente desatada.

En efecto, al concluir la presidencia de Eduardo Frei Montalva no era cosa sencilla distinguir la línea política que separaba a la democracia cristiana de las fuerzas marxistas. Un ejemplo: Patricio Silva Echeñique, Subsecretario de Relaciones Exteriores, en entrevista concedida al diario Washington Star y publicada el 7 de abril de 1967, afirmaba que "la Democracia Cristiana, que es cristiana y democrática, está más cerca del comunismo en sus fines que cualquier otro partido chileno". Además, estimaba prudente informar a la opinión pública norteamericana que "ser comunista en Chile es algo perfectamente respetable y no equivale automáticamente a subversión o sumisión al Kremlin".[65] Incluso pasando por alto la extrema laxitud con que usó la voz respetable y también el autoengaño que trasluce, porque desde hacía décadas era notoria la sumisión incondicional del comunismo criollo a la Unión Soviética —cuando llueve en Moscú los comunistas en Santiago salen con paraguas, se solía decir— no es posible dejar de llamar la atención sobre lo significativo de sus palabras: una alta autoridad gubernamental, y no marxista sino militante democratacristiano, cuando

---

Jurídica de Chile, Santiago, 1978. (Segunda Parte, De los partidos de cuño parlamentario a los partidos de cuño ideológico); JULIO CANESSA ROBERT, *Quiebre y recuperación del orden institucional en Chile. El factor militar, 1924-1973*, Emérida Ediciones, Santiago, 1995. (En cap. III, Causas globales del agotamiento de la institucionalidad y las Fuerzas Armadas en el período 1932-1973); GUSTAVO CUEVAS FARREN, "El proyecto histórico de la U:P:", en Revista Política N° 15, 1988, Instituto de Ciencia Política de la Universidad de Chile. JOAN E. GARCÉS, *Allende y la experiencia chilena*, Ediciones BAT, Santiago, 1990 (ed. orig. 1976); CRISTIÁN GARAY VERA, "Presencia militar y gestión de gobierno 1970-1973", en Revista de Derecho Público N°s 55/56 enero-diciembre 1994, Universidad de Chile, Facultad de Derecho; MARIO GÓNGORA DEL CAMPO, *Ensayo histórico sobre la noción de Estado en Chile en los siglos XIX y XX*, Editorial Universitaria, Santiago, 1986. (En cap. IV, 1964-1980: La época de las planificaciones globales); CRISTIÁN JARA TAITO, El marxismo y la crisis de la democracia en Chile, Documento de Trabajo N° 32 del Instituto de Ciencia Política de la Universidad de Chile, 1991; SUZANNE LABIN, *Chili, le crime de résister*, Nouvelles Editions Debresse, París, 1980; ROBERT MOSS, *El experimento marxista chileno*, Editora Nacional Gabriela Mistral, Santiago, 1974; PABLO RODRÍGUEZ GREZ, *El mito de la democracia en Chile*. 1833-1973. (En cap. IV, El Gobierno de la Unidad Popular); TIMOTHY R. SCULLY, *Los partidos de centro y la evolución política chilena*, CIEPLAN-Universidad de Notre Dame, Santiago, 1992; JAMES R. WHELAN, *Desde las cenizas. Vida, muerte y transfiguración de la democracia en Chile. 1833-1988*, Editorial Zig-Zag, Santiago, 1993. (Cap. 7, Tiempo de ajustar cuentas).

65 Citado por JAMES R. WHELAN, *Desde las cenizas*, op. cit., p. 196. Patricio Silva Echeñique, a comienzos de la Unidad Popular, participó en la fundación del diario La Prensa, órgano del Partido Demócrata Cristiano. Al término del Gobierno Militar fue una figura importante en el comando de la candidatura presidencial de Patricio Aylwin, quien, una vez elegido, lo nombró embajador de Chile en los Estados Unidos. Su opinión, por tanto, es altamente significativa.

apenas había transcurrido el primer tercio de la presidencia de Eduardo Frei, reconocía la existencia de una comunidad de fines con el comunismo. Hasta cierto punto era una noticia sorprendente. No podía ser una novedad para las personas medianamente informadas, claro está, pero sí lo era para ese extenso sector de la población que se fija mucho en las etiquetas y poco en el contenido real de las cosas. Patricio Silva tenía razón: ambas fuerzas ideológicas estaban unidas en sus fines. El hilo conductor que les llevaba a ese objetivo común era la revolución.

Aquella comunidad de fines no era fruto del azar. Se ha expuesto anteriormente cómo el partido Demócrata cristiano fue objeto de una operación de infiltración ideológica —cuyo principal agente fue Rodrigo Ambrosio— en cuya virtud las categorías centrales de su doctrina socialcristiana fueron reemplazadas por las del marxismo-leninismo, enmascaradas bajo el nombre de vía no capitalista de desarrollo. Por eso en 1970 los programas de gobierno sustentados por Tomic y Allende carecían de diferencias sustanciales.

Este trasbordo ideológico obedeció a la línea política seguida en aquella época por el Partido Comunista de Chile, fiel a los postulados de Moscú. En efecto, como estrategia a seguir durante la segunda fase de la Guerra Fría —iniciada por Khruschov después del bochornoso fracaso de la instalación de una base de misiles en Cuba, en 1962— la Unión Soviética puso el acento en lo que llamó "coexistencia pacífica", cuyo sentido, según afirmaba Pravda el 6 de diciembre de 1963, era el siguiente: "Los marxistas-leninistas no comprenden a la política de coexistencia pacífica como una maniobra para un período limitado, sino como una línea estratégica para el lapso completo de la transición del capitalismo al socialismo en una escala mundial". Su fundamento teórico había sido encontrado diligentemente en una frase de Lenin, cuyas obras siempre demostraron ser un verdadero arsenal para las más diversas actitudes políticas, incluida la más tarde célebre perestroika. Para la coexistencia pacífica, el dogma fue esta sentencia: "Aceptar la batalla cuando es obviamente ventajoso para el enemigo y no para nosotros, es un crimen; y aquellos líderes políticos de la clase revolucionaria que son incapaces de golpear, maniobrar, comprometer, a fin de evitar una batalla obviamente desventajosa, no sirven para nada".[66] Traduciendo esa idea general a la realidad chilena, lo que hicieron los comunistas fue empujar a la democracia cristiana hacia sus propias posiciones, para lo cual les vino de maravillas el temor de los democratacristianos a ser considerados reaccionarios por la izquierda.

Así se entiende que la Unidad Popular no haya tenido que empezar de cero en la transformación de la sociedad chilena. Gracias al silencioso y persistente trabajo ideológico desplegado por los comunistas en los años anteriores, la política del país, en su conjunto, ya marchaba por un plano inclinado hacia la izquierda.

Ahora, ya en el poder, a los comunistas les bastaba cosechar lo sembrado y profundizar los cambios que pretendían imponer. Pero —y esta era la consideración estratégica fundamental— evitando cuidadosamente una batalla que, en atención a la correlación de fuerzas existente, no podían ganar. El período presidencial de Salvador Allende debía ser, en consecuencia, una etapa preparatoria para el asalto final al poder

66 La información de Pravda y la cita de Lenin, en OEA, *El proceso marxista-leninista en Chile*, op. cit., p. 9.

total y el establecimiento de la dictadura del proletariado. Allende "se salió del libreto", por decirlo de alguna manera. Al intentar forzar las cosas mediante la vía insurreccional cuando las condiciones revolucionarias no estaban aun suficientemente maduras, provocó una altiva reacción popular en su contra, reacción que a la postre hizo fracasar el proyecto revolucionario. Por eso es que los estrategas comunistas —pacientes como nadie, porque al amparo de su teoría pretendidamente científica se podían dar el lujo de medir el tiempo en categorías geológicas— no han guardado un buen recuerdo de su gestión, determinada en gran medida por su inmensa vanidad y por la excitación adolescente de sus compañeros socialistas.

Dicho en otras palabras, la revolución marxista-leninista se fue a pique en Chile porque su estrategia no era coherente. De una parte, los comunistas pretendían enmarcar su avance en los términos de la coexistencia pacífica, para lo cual bastaba con aplicar las medidas ya definidas en la "vía no capitalista de desarrollo", ojalá dentro del ordenamiento jurídico o bordeándolo mediante los *resquicios legales*. Este camino, de paso, les aseguraba la simpatía del grupo tercerista del Partido Demócrata Cristiano, que había copado sus cargos directivos. Eventualmente, hasta podían llegar a ser aliados en esta fase de transición y, una vez alcanzado el control total del Estado, se ocuparían de ponerlos en su lugar. De otra parte, simultáneamente, el Partido Socialista y todos los grupos violentistas más o menos autónomos, MIR, VOP, brigadas de choque, etc., instaban por una rápida decisión, a lo Fidel Castro, empresa que sólo podía materializarse mediante un autogolpe que abruptamente les hiciera dueños del Estado. Allende no pudo, o no quiso, resolver esta contradicción.

Salvando la distancia que separa al maestro del discípulo, en este orden de consideraciones Allende tenía el mismo defecto de Lenin: era un estratega mediocre y un pésimo táctico. No constituye ninguna novedad afirmar que Lenin tiene el mérito de haber sido el ideólogo, el animador, el *deux ex machina* de la revolución; pero carecía de talento estratégico. El tema le interesó sobremanera, pues sabía que en última instancia la cuestión del poder es inseparable del tema militar. Sin embargo, las notas escritas de su puño y letra en las márgenes de dos libros que estudió con fruición, De la guerra, de Clausewitz y La guerra civil en Francia, de Marx, prueban fehacientemente sus limitaciones en este campo que combina el saber y el actuar. Por motivos que ahora no vienen al caso, desde Stalin en adelante los comunistas han omitido señalar que el creador de la técnica del golpe de Estado bolchevique fue Trotsky, y que sólo a él se debió el éxito de la revolución en octubre de 1917.

En efecto, la concepción estratégica de Lenin, basada en la insurrección masiva de los proletarios, presuponía la existencia de una situación especial en Rusia, configurada por las famosas cuatro circunstancias específicas que señaló en su libro La enfermedad infantil del comunismo, a saber: la posibilidad de unir la revolución bolchevique a la liquidación de una guerra imperialista; la ocasión de aprovecharse durante algún tiempo de la guerra entre dos grupos de potencias que, sin esa guerra, se hubieran unido para combatirle; la capacidad para sostener una guerra civil relativamente larga en razón de la inmensidad de Rusia y su deficiente sistema de vías de comunicación, y; la existencia de un movimiento revolucionario democrático-burgués en el seno de la masa campesina. En ese contexto, Kerensky constituía uno de los

principales elementos de la situación excepcional de Rusia en 1917: él, no los bolcheviques, había destronado a los Romanov; pero estaba empantanado en su intento de establecer en su reemplazo un sistema parlamentario de carácter social-demócrático. Trotsky, por su parte, no tenía ninguna necesidad de Kerensky. Para él, la estrategia en tanto preparación de las condiciones propicias, tenía una importancia apenas relativa, pues a su juicio esas maniobras solían desgastarse en la preparación de un ataque decisivo, cuyo éxito jamás estaría garantizado, por lo que no hacían más que frenar el ímpetu revolucionario. Lo que en verdad le parecía crucial era la táctica insurreccional, la técnica del golpe de Estado, que siempre es obra de un grupo pequeño, bien entrenado y temerariamente resuelto en la acción. De hecho, en octubre de 1917, mientras Lenin estaba escondido pues no estimaba cumplidas las condiciones que había formulado y advertía que los cosacos del general Korniloff podían aplastar un alzamiento proletario en Petrogrado sin demasiadas dificultades, Trotsky encomendó a Ovsienko la organización de una tropa de asalto no superior a mil hombres, con los cuales dio su famoso golpe y resolvió la situación en pocas horas, entregando de inmediato el poder a un sorprendido Lenin que, todavía incrédulo, llegó disfrazado con una larga peluca al Instituto Smolny, lugar en donde Trotsky y Ovsienko habían establecido su cuartel general.[67] Pues bien, Salvador Allende creía tener las condiciones de un buen capitán, alimentando sus infantiles sueños revolucionarios en la experiencia castro-guevarista, pero en realidad era una nulidad desde el punto de vista táctico, como lo demostró al perder el control de sus huestes en la fase de asalto al poder total y al encerrarse en La Moneda el 11 de septiembre de 1973.

Algunos analistas han sostenido que el asalto al Estado en procura del poder total no era, indefectiblemente, la meta de la Unidad Popular. En otras palabras, todavía se discuten los verdaderos propósitos de esa fuerza política. Por su importancia para la leyenda de la izquierda democrática, es un punto que merece ser analizado.

Los principales voceros de la izquierda renovada han sostenido durante las dos últimas décadas que el objetivo de la Unidad Popular consistía en generar un proceso de cambios en dirección al socialismo, superando así un modelo de desarrollo capitalista definitivamente agotado. Esa transformación de la sociedad, al traducir un anhelo ampliamente compartido por la ciudadanía, se habría llevado a cabo respetando las instituciones democráticas y los derechos individuales consagrados en la Constitución. El golpe militar, inspirado y apoyado por el gobierno norteamericano y por sectores nacionales minoritarios afectados en sus intereses por las transformaciones en curso, interrumpió esa tarea política. Por tanto, tratándose de una revolución incompleta, siempre quedará abierto el juicio sobre sus méritos y posibilidades.

El supuesto básico de tal argumento es que las fuerzas que integraban la Unidad Popular compartían el credo democrático, lo que evidentemente es falso. Ni los comunistas ni los socialistas creían en lo que despectivamente llamaban democracia burguesa. Su ideología, la marxista leninista, en el terreno de los hechos es a la nacionalsocialista lo que en geometría son los ángulos opuestos por el vértice. Se dice en su favor que durante años participaron en el juego democrático, lo cual es verdad, pero no se lleva más allá

67 Véase, CURZIO MALAPARTE, *Técnica del golpe de Estado*, Editorial Americana, Buenos Aires, 1953, pp. 11-39.

esa observación, es decir, se omite preguntar ¿con qué intención? Porque ése es el punto. Sus representantes se instalaban en el Congreso, pero, ¿para conservar las instituciones democráticas o como caballo de Troya? Para ilustrar su posición frente al sistema democrático se les puede hacer extensiva la explicación que daba Goebbels para justificar la actitud de los nazis antes de hacerse con el poder en Alemania, poder que como se recordará alcanzaron utilizando los procedimientos electorales legales y democráticos: "Nosotros ingresamos al Reichstag para abastecernos en el arsenal de la democracia con sus propias armas. Llegamos a ser diputados del Reichstag para paralizar el pensamiento democrático (de la República de Waimar) con su propio apoyo, y la democracia es tan estúpida como para entregarnos pases gratuitos y dietas por este mal servicio que le prestamos. Ese es asunto suyo... Para nosotros, cualquier medio legal es justo para revolucionar la situación actual".[68]

Otros observadores, vinculados al sector de la democracia cristiana más afín con la izquierda renovada, prefieren culpar a los factores estructurales como causantes de la crisis y posterior colapso del sistema democrático. Este diagnóstico cristaliza en la noción de agotamiento del sistema político; la chilena era una democracia cansada. Su viabilidad se hizo imposible por la intransigencia de los ultras de la Unidad Popular, que se negaron a una negociación política encaminada a sortear la crisis mediante un entendimiento con otros sectores de avanzada —léase democracia cristiana— lo que habría permitido ampliar la base política del gobierno.

Si se proyecta el resultado que habría tenido esa negociación crepuscular en caso de prosperar —gestión en la que el cardenal Silva Henríquez sirvió de anfitrión— es razonable estimar que sólo habría logrado dar oxígeno a una revolución que la mayoría de la población repudiaba, con lo cual se habría alargado la agonía del sistema democrático hasta que los comunistas, una vez estabilizada la desastrosa situación, hubieran podido tomar el control y encauzar la revolución de manera más acorde con las reglas científicas, es decir, repitiendo aquí de inmediato lo mismo que habían hecho con los anarquistas durante la guerra civil en España, para seguir luego metódicamente hacia la dictadura del proletariado. ¿O los habrían contenido con otro Estatuto de Garantías?

Hay que tener el coraje de enfrentar alguna vez la verdad y hacerse cargo de las responsabilidades históricas de aquél período. Por higiene cívica es ya indispensable abandonar las justificaciones míticas y aceptar la realidad. Tiene razón Cristián Jara al sostener que, "desgraciadamente, todos estos estudios presentan el mismo elemento común: el interés en absolver las responsabilidades de los actores políticos de entonces, que en definitiva no quisieron o no fueron capaces de dar otro cauce a los acontecimientos. En ello, creemos que no puede ocultarse el fracaso de la clase política chilena. Pero más grave que lo anterior, es el intento de ocultar los alcances del proyecto insurreccional y antidemocrático de, a lo menos, el sector mayoritario de la Unidad Popular, reflejado en un plan político destinado a ponerlo en práctica. Este proyecto insurreccional nace de la doctrina misma de quienes sostuvieron el gobierno

---

68 HILMAR VON CAMPE, *Cobardía y adaptación. La política entre dos luces*, Universitas Verlag, Munich, 1989. La cita en la p. 100 de la edición en español publicada el mismo año por la Editorial Southern Publishing and Investment e impresa en Santiago.

de Salvador Allende. Al respecto, nos parece que cualquier imagen del gobierno de la Unidad Popular como un intento de construir un nuevo socialismo choca inexcusablemente con la realidad".[69] Evidentemente, no se puede hablar de un proyecto democrático, de un "socialismo con rostro humano", cuando quienes lo sostienen son un partido comunista ortodoxo, un partido socialista cuya ideología es el marxismo-leninismo y que en el plano de la acción ha hecho suyos los postulados revolucionarios más extremos y, un partido radical cuyo viejo tronco doctrinario ha sido pulverizado por la izquierda, reemplazándolo por sus propias categorías ideológicas. Complica el cuadro una democracia cristiana que también ha perdido sus esencias y cuyos sectores más radicalizados se pasan no a la cola, sino a la cabeza de la revolución.

Así las cosas, el recurso a la vía insurreccional, cuyo contenido no puede ser otro que la preparación y posterior ejecución de acciones destinadas a la conquista violenta del Estado, para la Unidad Popular era un camino imperativo.

El mayor obstáculo que enfrentaba la vía insurreccional, es decir, lo que se oponía al verdadero proyecto político de la Unidad Popular, lo constituían las Fuerzas Armadas. En último término, son ellas las que defienden y sostienen la integridad del Estado. Era impensable llegar a contar institucionalmente con ellas en el momento decisivo. Tampoco su neutralidad era imaginable. Fue pues indispensable intentar aislarlas del conjunto social, haciendo por medio de la propaganda que su rol profesional pareciera completamente afín a las metas del gobierno y, al mismo tiempo, dividirlas internamente en un sector progresista y otro fascista.

Para esclarecer lealmente este aspecto central de nuestra historia contemporánea, pues lo abordado es ni más ni menos que el sentido del gobierno presidido por Salvador Allende, se debe apelar a la opinión de sus defensores. Joan E. Garcés, el principal asesor político de Allende, ha sostenido que "la vía político-institucional supone aislar a la alta burguesía, dejarla sola, sin el apoyo de otros sectores sociales... la clase media, con su profundo instinto oportunista, podría ser neutralizada... pero, si la pequeña burguesía, en estos momentos del proceso revolucionario es impulsada a una actitud adversa hacia el Gobierno... la vía político-institucional estaría prácticamente asfixiada... el enfrentamiento armado resultaría inevitable". De ahí que la diferencia que separa a la vía político-institucional de la vía insurreccional o la guerra popular sólo sea una dispar apreciación sobre la necesidad de un decisivo choque armado, pues, "mientras estas dos últimas presuponen el enfrentamiento armado, la primera lo contempla como una posibilidad, no como una exigencia absolutamente ineludible".[70]

El punto de vista de Garcés, eminentemente práctico, debe ser ahora confrontado con las fuentes teóricas de su propio bando. Luis Corvalán, en su Informe al Pleno del Comité Central del Partido Comunista de Chile, efectuado entre los días 13 y 16 de abril de 1969, es decir, cuando se articulaban las líneas directrices de lo que sería la estrategia política de la Unidad Popular en caso de triunfar en la elección presidencial del próximo año, estimó oportuno recordar a sus camaradas que la discusión sobre si era

69 CRISTIÁN JARA TAITO, op. cit., pp. 80-81.

70 JOAN E. GARCÉS, *El Estado y los problemas tácticos en el gobierno de Allende*, Siglo XXI Editores, México. 1974, p. 24. Está citado en CRISTIÁN JARA, op. cit., p. 83.

imprescindible llegar a la fase de la dictadura del proletariado era un capítulo finiquitado desde lo que se conoce como la polémica Kaustsky-Lenin, a comienzos del siglo. La correcta doctrina revolucionaria está en Lenin, expuesta entonces del siguiente modo por Corvalán: "Los señores oportunistas, incluyendo a los partidarios de Kaustsky, ´enseñaban` al pueblo a burlarse de la doctrina de Marx al decirle: antes que nada el proletariado debe conquistar la mayoría por medio del sufragio universal para obtener después, sobre la base de una votación de la mayoría, el poder estatal, y pasar, más tarde, sobre la base de la democracia ´consecuente` (que otros llaman democracia ´pura`) a la construcción del socialismo. Nosotros, en cambio, basándonos en la doctrina de Marx y en la experiencia de la revolución rusa, decimos: el proletariado debe derrocar primero a la burguesía y conquistar para sí el poder estatal y después utilizar este poder estatal, o sea, la dictadura del proletariado, como instrumento de su propia clase, con el fin de ganarse la simpatía de la mayoría de los trabajadores".[71]

De otra parte, aclarando intenciones, en febrero de 1973 el MIR le señala al Partido Comunista que "estamos hablando de un poder obrero y popular, que se organiza desde abajo en forma autónoma e independiente, en contradicción y lucha con el Estado burgués y sus instituciones de dominación social y política".[72]

Esto cierra el círculo. Lo señalado es suficiente para concluir que el proyecto político del gobierno de la Unidad Popular nunca perdió de vista la necesidad del asalto armado al poder. Entonces, desde el aparato estatal y de acuerdo a los cánones del marxismo-leninismo, iniciarían la fase de dictadura del proletariado.

Habiéndose esclarecido cual era el real contenido de las fórmulas esgrimidas por la Unidad Popular, para explicar lo que ésta fue en tanto segunda fase de la década revolucionaria y causa inmediata del quiebre del consenso nacional, conviene detenerse en la personalidad de Salvador Allende. Los grandes movimientos sociales y políticos no se vertebran sólo por las ideas abstractas y las condiciones objetivas: el factor humano es determinante. Los comunistas, interpretando las tesis del materialismo histórico de Marx, dicen no creer en esto; lo denominan peyorativamente culto a la personalidad. No obstante, han idolatrado a Lenin, Stalin, Mao, etc.

El Partido Comunista, ya con ocasión del Frente Popular, habían establecido que la persona encargada de materializar sus propósitos no podía provenir de sus propias filas. Un comunista a la cabeza del Estado sería a todas luces inaceptable para la opinión pública y para las Fuerzas Armadas. Convenía, pues, actuar por interpósita persona. En este sentido, son dignas de análisis las características personales de quien fuera durante un cuarto de siglo abanderado de la izquierda marxista en Chile. Además, el modo de ser de Salvador Allende refleja cumplidamente por qué a los comunistas les fue relativamente sencillo avanzar, sin solución de continuidad, de una fase de la revolución todavía pequeño-burguesa a otra más intensa y resuelta. Pero la gran lección que se deduce de la biografía de Allende es que en ella se perciben las contradicciones y corrupciones que, ciertamente amplificadas, precipitaron al desastre la causa que encarnaba.

---

71 LUIS CORVALÁN LEPE, *Camino de Victoria*, Imprenta Horizonte, Santiago, pp. 246 y 247. Está citado en GENARO ARRIAGADA HERRERA, *De la vía chilena a la vía insurreccional*, op. cit., p. 77.

72 Citado por CRISTIÁN JARA, op. cit., p. 84.

Es cosa sabida que la diferencia de calidad entre las personas no la marca la clase social de origen, sino el estilo de vida que se lleva. Salvador Allende nació en el seno de la clase acomodada. Su abuelo paterno, médico como él, había dirigido el servicio de sanidad militar durante la Guerra del Pacífico. Su padre fue notario público, función que representa algo así como la entraña de la sociedad burguesa. Cumplió su servicio militar en los regimientos de caballería Coraceros, de guarnición en Viña del Mar, y Lanceros, por entonces acantonado en Tacna, ciudad a la que se había trasladado su familia. Se le recuerda como un buen jinete y un mal soldado: su Licencia Militar consigna que fue arrestado varias veces por formular reclamos colectivos. Al igual que sus mayores fue masón, iniciándose en Valparaíso. Cuando se trasladó a Santiago para cursar los estudios de medicina, se incorporó a la logia Hiram 65, fundada por Eugenio Matte Hurtado y cuna de la República Socialista de 1932. Siendo todavía joven, desempeñó la cartera de Salud Pública en el gobierno del Frente Popular. Después, durante toda su madurez, fue parlamentario. Fluye de estos antecedentes que en el marco de la sociedad chilena de su época tenía abolengo más que suficiente para aspirar a una vida de tinte distinguido, estilo que, por lo demás, amaba por sobre toda otra consideración. Su afectada elegancia le ganó el apodo de "el pije". Sin embargo, todo lo anterior no obstó a que fuese uno de los fundadores del Partido Socialista de Chile y se considerase a sí mismo un hombre de acción, un revolucionario maxista-leninista, aunque su formación teórica siempre fue notoriamente débil.

Como se ha esbozado, lo contradictorio de la personalidad de Allende no radica en que a pesar de sus ancestros haya elegido el socialismo. En una sociedad liberal siempre será legítimo escoger un camino acorde con las propias convicciones y, por lo demás, en todo el mundo es frecuente que los caudillos populistas tengan sus raíces en la alta burguesía, característica que es todavía más dominante en la extrema izquierda y entre las cúpulas terroristas. De hecho, el arquetipo del revolucionario profesional, Lenin, tampoco fue un proletario de cuna. El problema es otro, vinculado a la inconsecuencia entre lo que predica y lo que se practica.

Al parecer, el primer mentor ideológico de Allende, cuando todavía era un escolar en el muy porteño liceo Eduardo de la Barra, fue un viejo anarquista italiano, un zapatero que vivía en el Cerro Cordillera y que había tenido que abandonar su patria por sus ideas políticas. Siendo ya presidente, Allende confidenció a uno de sus íntimos: "Cuando era muchacho, entre los 14 y 15 años, me acercaba al taller de un zapatero anarquista, llamado Juan Demarchi, para oírle su conversación y cambiar impresiones con él. Eso ocurría en Valparaíso, en el período en que yo era estudiante del liceo. Cuando terminaba mis clases, iba a conversar con ese anarquista que influyó mucho en mi vida de muchacho. El tenía 60 o tal vez 63 años y aceptaba conversar conmigo. Me enseñó a jugar ajedrez, me hablaba de las cosas de la vida, me prestaba libros. De Bakunin, por ejemplo. Y, sobre todo, los comentarios de él eran importantes porque yo no tenía una vocación profunda de lecturas y él me simplificaba los problemas, con esa sencillez y esa claridad que tienen los obreros que han asimilado bien las cosas".[73] No cuesta mucho imaginar hasta qué punto calaron en ese muchacho de temperamen-

73 CARLOS JORQUERA, *El Chicho Allende*, Ediciones BAT, Santiago, 1990, p. 40.

to romántico las lecciones de Demarchi, porque a la universidad, en 1926, llegó convencido de ser un revolucionario y se encumbró de inmediato en el Centro de Alumnos de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile, integrándose en 1930 al grupo Avance, creado por un comunista peruano que más tarde renegó estruendosamente, Marcos Chamudes Reitich. En fin, aquella temprana relación con Demarchi no puede ser considerada mera anécdota; permite comprender la génesis del más llamativo déficit de la personalidad de Allende, la ausencia de unidad entre su forma de vida y los ideales que propugnaba. No había en él coherencia, era la suya una personalidad escindida en facetas inconciliables. De otra parte, sus debilidades humanas —sus vicios, para decirlo sin rodeos— se fueron acentuando con los años y estaban en conocimiento del público. Llegó a ser un tipo vanidoso, frívolo y sibarita. En esta dimensión íntima, su comportamiento constituyó una excepción en la clase dirigente chilena, de ordinario sobria y respetable. Moralmente, una distancia oceánica le separaba, por ejemplo, de los presidente Eduardo Frei y Jorge Alessandri. La inconsistencia moral; he ahí el lastre de la personalidad de Allende, su drama nunca resuelto, su talón de Aquiles. Por culpa de esa fisura anímica, cuando en el ejercicio de las responsabilidades de gobierno se vio sometido a grandes presiones, su espíritu se derrumbó y él se evadió de la realidad entregándose a las más abyectas perversiones.[74]

Los individuos que no son marxistas están disculpados de tomar demasiado en serio su filiación de clase. Si tienen otras habilidades y les son reconocidas en su ambiente natural, incluso pueden permitirse algunas extravagancias... como posar de comunistas, a la manera del poeta Vicente Huidobro, por ejemplo. Con los marxistas auténticos el asunto es diferente. Después de todo, al menos para la gente seria, debe ser desgarrador abandonar las creencias más sagradas. Kazantzakis, en un párrafo especialmente conmovedor de su Carta al Greco, cuenta que al regresar a Creta de uno de sus interminables viajes, su anciano padre le espetó: "¿No te habrás hecho bolchevique tú también? Ni Dios, ni patria, ni honor, y que aprovechen los perros, mientras puedan".[75] Si no se tiene un alma traidora, debe ser muy difícil resignarse a vivir sin Dios, ni patria ni honor. A los conversos sólo puede redimirles una rigurosa coherencia entre sus nuevas creencias, sus palabras y sus acciones. No fue ese áspero camino el elegido por Allende.

De acuerdo a sus dotes personales —inteligencia, cultura, competencia profesional, etc.— si Salvador Allende hubiera permanecido fiel a su condición social, probablemente no habría pasado de ser un aficionado a la política. Teñido de un vago y juvenil izquierdismo, algo ácrata —¿por qué no?, como tantos otros que militan en lo que se conoce como la izquierda exquisita, es decir, la que aprovecha golosamente para sí lo mejor de ambos mundos— podría haber sido, a lo más, un revoltoso más o menos pintoresco. Eligió un papel más ambicioso, personificar la izquierda revolucionaria, y en ese ámbito fue un príncipe. Un príncipe de bisutería, claro está, porque como dice Marta Vergara, "el revolucionario Allende nunca pretendió vivir humilde-

---

74 Véase JAMES R. WHELAN, op. cit., pp. 495-496. Existe Acta Notarial de las especies personales de Salvador Allende encontradas el 11.9.73 en la residencia presidencial de Tomás Moro.

75 NIKOS KAZANTZAKIS, *Carta al Greco*, Ediciones Lohlé-Lumen, Buenos Aires, 1995, p. 367.

mente para nada. Fue en todo caso un revolucionario inconcluso, mal hecho, una pobre imitación".[76]

El propósito central de su vida fue alcanzar el poder y se convirtió en un político profesional. De la manera en que él imaginaba esa carrera, la demagogia constituía una pieza esencial. La siguiente anécdota le retrata de cuerpo entero. En septiembre de 1970 el general Franco encomendó a su ministro de Obras Públicas, Gonzalo Fernández de la Mora, una misión diplomática especial. Con rango de embajador extraordinario, debía presidir la representación de España en la toma de posesión del nuevo Presidente de Chile. Sorprendido por tal encargo, el ministro le hizo ver que Allende era marxista y que él no parecía ser la persona más indicada para felicitarle. El Caudillo desechó la objeción señalándole que esa circunstancia sólo haría resaltar el sentido de la política de Estado que tenía su gobierno, más allá de cualquier coyuntura, acerca de los asuntos internos de las repúblicas hispanoamericanas. Y en realidad, a pesar de la distancia ideológica que les separaba, la España de Franco siempre mantuvo fluidos vínculos con la Cuba castrista. Pues bien, una vez en Santiago fue recibido protocolarmente por Allende, al que describe como "un hombre más bien bajo, de facciones poco agraciadas, discurso superficial y cuidada vestimenta". Con cierta intención, en la oportunidad le regaló un ejemplar de su obra El crepúsculo de las ideologías, obsequio que Allende prometió retribuir con otro libro, añadiendo entre risas, "pero no se asuste, no será mío". A los pocos días, durante una recepción ofrecida a las autoridades que habían participado en la ceremonia de transmisión del mando, Allende se le acercó y le dijo: —Querido embajador. Ayer no le vi en el gran acto de masas del estadio. Creo que le hubiera gustado contemplar el enorme entusiasmo popular. —A mi pesar, me fue imposible asistir; pero luego me alegré al leer su discurso atacando a los conquistadores y colonizadores españoles, le replicó éste. —Pero, ¿cómo le da usted importancia a esas cosas? Yo no las pienso; las digo para los "rotitos". Me pareció una marca olímpica de frivolidad y guardé un silencio que él interrumpió jocosamente. —Ya he elegido el libro que le debo, y le voy a pedir a Neruda que se lo firme. —Gracias, señor presidente; pero lo prefiero sin dedicatoria. Al día siguiente, continúa, me envió por su ayudante dos gruesos volúmenes lujosamente editados, y durante el vuelo de regreso a España descubrí los ditirambos del poeta a Stalin. El país entero —añade Fernández de la Mora con perspicacia— desmoralizado ante la dictadura marxista que se avecinaba, se vendía por cuatro dólares. Aproveché la oportunidad para adquirir la actual residencia de la embajada de España. No hubo tiempo de tramitar el expediente oportuno; pero, para no perder la excepcional ocasión, firmé el compromiso de compra con mi aval personal. Si la Administración no hubiese ratificado mi iniciativa habría realizado la inversión de mi vida".[77]

A la marca de olímpica frivolidad y demogogia que el representante de España palpó, se sumaba en Allende una torcida concepción sobre qué es la verdad. Como es sabido, en su sentido más clásico, verdad es la perfecta correspondencia entre la realidad y los conceptos que la expresan. El marxismo reniega de ese postulado y lo reemplaza por

---

76 MARTA VERGARA, *Memorias de una mujer irreverente*, Editora Nacional Gabriela Mistral, Santiago, 1974, p. 395.

77 GONZALO FERNÁNDEZ DE LA MORA, *Río arriba*, op. cit., pp. 232-234.

una categoría ideológica. De ahí que la mentira sea consustancial al marxismo. Por cierto, la pérdida del auténtico sentido de la verdad no es sólo un problema especulativo, tiene consecuencias prácticas de la mayor gravedad. Así, de Lenin en adelante, se ha sostenido por sus seguidores que es moral todo lo que de algún modo conviene a la revolución.[78] Allende hizo suya esta desdichada falsificación de la realidad concreta y no dudó en estimularla para crear una ética de ocasión a la Unidad Popular. Así, el 8 de abril de 1971, al inaugurar el Primer Congreso Nacional de Periodistas de Izquierda, expresó: "La objetividad no debería existir en el periodismo... el deber supremo del periodista de izquierda no es servir a la verdad, sino a la revolución".[79] Sobra todo comentario.

La mentira está vinculada con otra degradación que Allende también propició: la violencia. Es este uno de los temas más importantes del siglo XX y por eso Solzhenitsyn, la conciencia más lúcida y profética de nuestro tiempo en el ámbito secular, lo abordó en el discurso pronunciado al recibir el Nobel de Literatura. En dicha ocasión dijo: "No olvidemos que la violencia no existe ni puede existir por sí sola: está infaliblemente entrelazada con la mentira. Unen a ambas los lazos más familiares y más profundamente naturales: la violencia no puede encubrirse con nada, salvo con la mentira; y el único sostén de la mentira es la violencia. Todo aquél que una sola vez ha proclamado como método la violencia, inexorablemente deberá elegir como principio la mentira".[80] La violencia revolucionaria se basa, pues, en la mentira. Como se verá de inmediato, no puede ponerse en duda que Salvador Allende aceptó la violencia como método de acción política encaminado a destruir la "democracia burguesa" y reemplazarla por una "democracia popular", eufemismo que encubría la forma política de los países sometidos a la órbita soviética.

Para explicar hasta qué punto estuvo implicado Allende con el fenómeno violentista, se hace necesario retroceder en el tiempo. Como se recordará, en la década de los ´60 la Revolución Cubana tuvo enorme repercusión en América Latina. Fidel Castro no se limitó a traicionar a su propio pueblo al instaurar en la isla una tiranía comunista —el discurso enarbolado durante la campaña que culminó con el derribo de Fulgencio Batista y concitó la adhesión de los cubanos no era en modo alguno marxista[81]— sino que procuró exportarla a nivel continental y más tarde incursionó incluso en África. Sintiéndose agredidos, y con razón, los Estados del hemisferio uniformaron su política exterior y Cuba fue expulsada de la Organización de Estados Americanos (OEA) y sometida a una estricta cuarentena. Pero el impulso subversivo comandado y financiado desde el satélite de la Unión Soviética que le servía de cabeza de playa en América, también condicionó la política interna de las naciones afectadas. Para defenderse de un ataque sistemático, encaminado a trastocar radicalmente su orden de vida por me-

---

78 Sobre el envenenamiento de la opinión pública en las sociedades liberales, a través de la mentira y desde los organismos oficiales, la prensa y la cátedra cuando son instrumento de la izquierda marxista, véase JEAN-FRANÇOIS REVEL, *El conocimiento inútil*, Editorial Planeta, Barcelona, 1989. En la segunda reimpresión de la edición argentina, 1990, Allende está citado en las pp. 116 y 272.

79 SUZANNE LABIN, *Chili, le crime de resistir*, Nouvelles Editions Debresse, Paris, 1980, p. 212. Citado según la versión castellana de Ediciones Semblanza, Santiago, s.f., p. 198.

80 ALEXANDR SOLZHENITSYN, *Alerta a Occidente*, op. cit., p. 26.

81 Véase JACQUES LAGAS, *Memorias de un capitán rebelde*, Editorial del Pacífico, Santiago, 1964. Es el testimonio de un chileno que participó en la Revolución Cubana como piloto de guerra; fue distinguido como Héroe de la Revolución y vio cómo ésta fue traicionada por los comunistas.

dio de la violencia revolucionaria, fueron obligadas a modificar sus costumbres políticas. La virulencia de la acción comunista hizo que la concordia cívica peligrara en ellas al punto de hacer necesaria la apelación a las Fuerzas Armadas para evitar su desintegración. Así, a mediados de la década, gran parte de América Latina estaba regida por gobiernos militares. En ese clima de agudas tensiones, propias de un frente activado en la gran confrontación de la Guerra Fría, en agosto de 1967 se estableció en Cuba un órgano destinado a coordinar la expansión subversiva del régimen cubano: la Organización Latinoamericana de Solidaridad (OLAS).

En la creación de OLAS participaron los partidos Comunista y Socialista de Chile. De la declaración programática de esta internacional subversiva —un documento que nunca fue secreto, aunque pronto se lo ocultó piadosamente— merecen ser recordados sus acápites más significativos. Allí se afirma que "el triunfo de la Revolución Cubana puso de manifiesto que la insurrección armada es el verdadero camino para la toma del poder por el pueblo trabajador, y a la vez, que los ejércitos profesionales pueden ser destruidos, las oligarquías vencidas y el imperialismo yanqui derrotado". En consecuencia, a la luz de ese ejemplo, "nosotros, representantes de nuestra América, proclamamos: Que los principios del marxismo-leninismo orientan el movimiento revolucionario de América Latina; que la lucha armada constituye la línea fundamental de la Revolución en América Latina; que todas las demás formas de lucha deben servir y no retrasar el desarrollo de la línea fundamental, que es la lucha armada; que para la mayoría de los países del Continente, el problema de organizar, iniciar, desarrollar y culminar la lucha armada constituye hoy la tarea inmediata y fundamental del movimiento revolucionario; que aquellos países en que esta tarea no está planteada de modo inmediato, de todas formas han de considerarla como una perspectiva inevitable en el desarrollo de la lucha revolucionaria en su país; que la Revolución Cubana como símbolo del triunfo del movimiento revolucionario armado, constituye la vanguardia del movimiento antimperialista latinoamericano. Los pueblos que desarrollan la lucha armada en la medida en que avanzan por ese camino se sitúan también en la vanguardia".[82]

Pues bien, en la primera fila de aquella vanguardia revolucionaria orientada inequívocamente hacia la lucha armada, presidiendo la OLAS como el mejor exponente de los representantes de América a juicio de La Habana, marchaba el senador chileno Salvador Allende. Baste esta circunstancia para mostrar lo inútil del esfuerzo que tantos han hecho para endosarle más tarde unas credenciales pretendidamente democráticas. Él creyó, como tantos de sus compañeros, que el poder radicaba en los fusiles... y cayó en su ley, suicidándose con la metralleta que le había regalado su amigo y mentor, Fidel Castro.

La vinculación de Salvador Allende con Fidel Castro se hizo más estrecha cuando la Unidad Popular accedió al gobierno. Nadie olvidará jamás los insólitos aspectos que enmarcaron la permanencia de Castro en Chile a fines de 1971. Durante un mes, el dictador cubano impartió lecciones sobre cómo hacer la revolución a sus hipnotizados discípulos. Quizás el único auditorio que logró sorprenderlo fue un grupo de seminaristas, pues resultaron más revolucionarios que él mismo. En reali

82 Citado en CRISTIÁN JARA TAITO, *El marxismo y la crisis de la democracia en Chile*, op. cit., pp. 37-39.

dad, Castro estuvo pendiente de la suerte de Allende y procuró ayudarlo hasta el último día, e incluso más tarde: el discurso que pronunció en La Habana apenas ocurrido el Pronunciamiento Militar, es una joya digna de figurar en cualquier antología sobre las grandes mentiras de este siglo. Pero, en concreto, cuando era evidente que la revolución en Chile se acercaba a su desenlace, escribió a Allende una carta que merece ser recordada. Está fechada en La Habana el 29 de julio de 1973 y en ella le expresa que "con el pretexto de discutir contigo cuestiones referentes a la reunión de países no alineados, Carlos y Piñeiro —se trata de dos altos miembros del servicio secreto cubano, a los cuales de ordinario se reportaba desde Santiago otro jefe del mismo organismo, Luis Fernández Oña, hijo político de Allende— realizan un viaje a ésa. El objetivo real es informarse contigo sobre la situación y ofrecerte como siempre nuestra disposición a cooperar frente a las dificultades y peligros que obstaculizan y amenazan el proceso. (...) Veo que están ahora en la delicada cuestión del diálogo con la D.C. en medio de acontecimientos graves como el brutal asesinato de tu edecán naval y la nueva huelga de los dueños de camiones. Imagino por ello la gran tensión existente y tus deseos de ganar tiempo, mejorar la correlación de fuerzas para el caso de que estalle la lucha y, de ser posible, hallar un cauce que permita seguir adelante el proceso revolucionario sin contienda civil, a la vez que salvar tu responsabilidad histórica por lo que pueda ocurrir". El resto de la carta está destinada a señalar a Allende el valor combativo que pueden llegar a tener fuerzas populares debidamente movilizadas, es decir, lo que éste tradujo en los "cordones industriales" y a reiterarle su colaboración.[83]

También enlaza con la mentira lo que en su día se conoció como la "muñeca" de Allende, cierta habilidad para alcanzar dividendos políticos que en buen romance se llama duplicidad. Los casos en que recurrió a esa artimaña para someter mañosamente la voluntad ajena a sus designios son muchos, pero el que se lleva las palmas está contenido en el nº 126 de la revista Punto Final, publicado el 16 de marzo de 1971, que por su importancia se ha convertido en un objeto de colección. Ríos de tinta revolucionaria han caído en el olvido, pero no ocurre lo mismo en este caso. Es que se trata de una edición especial, consagrada exclusivamente a la extensa entrevista que el presidente Allende otorgó al comunista francés Régis Debray.

Según se consigna en el editorial de aquella edición, esta "tribuna del pensamiento revolucionario", como se autodefine Punto Final, considera que "la divulgación de esta entrevista puede contribuir de manera positiva al conocimiento del proceso chileno. Diversos mecanismos de propaganda internacional del imperialismo norteamericano, comenzando por la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), están empeñados en una campaña malévola contra el gobierno de la Unidad Popular. La entrevista que Debray hizo a Allende y el prólogo en que el intelectual revolucionario analiza la situación chilena, lograrán sin duda que muchos lectores en el mundo comprendan mejor las circunstancias que vive Chile". En el prólogo, Debray advierte que en ese momento y en la prensa seria del país, "se discute principalmente si este proyecto de ley es legal,

83 La carta está reproducida, en facsímil, en el Informe de la Comisión Especial de Consulta sobre Seguridad de la OEA, op. cit., pp. 243-246.

si aquel decreto es parte de las atribuciones del Ejecutivo, o si los trabajadores no hubieran quizás, mal interpretado tal artículo de la Constitución al poner fuera de su fábrica a un patrón en quiebra —en quiebra como consecuencia de la agitación socialista y comunista entre los trabajadores, le faltó decir—. De arriba a abajo de la jerarquía administrativa —continúa Debray— de un extremo a otro del país, una interminable discusión de leguleyos, Códigos en mano, veredictos en primera instancia, apelaciones en base a contra-requisitorias y recursos de casación, ocupa el primer plano del escenario. La palabra clave de todos estos debates, complacientemente inflados por la burguesía y sus medios de comunicación a la altura de un drama nacional, no es Revolución o Justicia, o Liberación o Proletariado, sino Legalidad, palabra tabú, leitmotiv obsesivo, manzana de la discordia visible".[84]

¡Qué hacerle!, monsieur Debray. Tal vez usted lo ignora y de ahí su desconcierto, pero a los chilenos les gusta vivir en un Estado de Derecho. Y precisamente en virtud a lo dispuesto en las normas jurídicas que regulaban el proceso político chileno, Allende había accedido al gobierno apenas tres meses antes de concederle aquella entrevista. Probablemente esos procedimientos repugnan a su conciencia revolucionaria, o los estima aceptables en la civilizada Europa pero inadecuados en estas tierras bárbaras; pero el caso es que la misma permanencia en el poder de su interlocutor, como se encargarían de hacerlo presente más tarde las más relevantes instituciones republicanas, dependía exclusivamente de su capacidad para desarrollar el programa de la Unidad Popular dentro del marco legal. Cuando se salió, se acabó.

Todo el mundo sabe que el derecho no consiste en meras fórmulas externas de compromiso, sino que supone la leal voluntad de cumplir lo pactado. Allende, en este punto esencial de lo que es el régimen democrático en un Estado de Derecho, mostró su duplicidad.

En efecto, en aquella entrevista se pasaba revista detenidamente a la trayectoria de Allende —y éste reconoció que el personaje que más le había impresionado en su vida era Ho Chi Min—. Conversando de la revolución comunista en China, Debray le espetó doctoralmente: "La cuestión principal sobre la cual se opera la discriminación, no es el uso de la violencia física bajo tal o cual forma, la cuestión principal es: ¿cuál es la fuerza social motriz del proceso?, ¿cuál es la clase que asume la dirección del proceso?". Allende le contestó recitando su catecismo: "El proletariado; eso es, la clase obrera". "Si es así y si se sigue así —continuó Debray— y si se consolida así esta situación, luego entonces, garantías hay. Es hablar de las garantías constitucionales". Ante lo cual Allende explicó: "Que tuvimos que dar, nos significaba alcanzar el gobierno sin desmedro de nuestro programa". "¿Era absolutamente necesario? ¿Era imprescindible negociar este Estatuto de garantías democráticas?", preguntó Debray de inmediato. La respuesta de Allende fue concluyente: "Sí, por eso lo hicimos. Sigo convencido que fue correcto producir ese Estatuto de Garantías, pero es conveniente aclarar que no es justo usar la palabra negociación, por cuanto nosotros no cedimos una línea de nuestro programa de gobierno. Ubícate en el período en que se produjo ese Estatuto y lo medirás como una necesidad táctica. Hemos hablado bastante del dramático período comprendido entre el 4 de sep-

84 Punto Final nº 126, 16.3.71, p. 3.

tiembre y el 24 de octubre. Piensa en un Chile castigado por la llamada ´Campaña del Terror`, como se llamó al proceso de amedrentamiento sicológico del pueblo impuesto por sus enemigos. Esa campaña corría a parejas con el asombro del mundo que miraba a este pequeño país para decir: ´Por primera vez un marxista gana el Gobierno en una elección`. Un sector del Partido Demócrata Cristiano, con uno de sus líderes a la cabeza, Radomiro Tomic, llegó a la conclusión que si ese Partido no entregaba los votos de Senadores y Diputados para producir una mayoría que reconociera nuestro triunfo, Chile iría a la guerra civil. Ese sector propuso, entonces, que se reconociera la victoria de la Unidad Popular a cambio de un ´Estatuto de Garantías`. Por un lado dijeron que nosotros, teñidos por la ideología de la clase revolucionaria, provocamos terror, pero al mismo tiempo agregaron que no podían ser responsables de la guerra civil. Así salió el ´Estatuto de Garantías`. Léelo y compáralo con nuestro programa de gobierno para llegar a la conclusión que no cambiamos ni una coma del programa. En ese momento lo importante era tomar el gobierno".[85]

De eso se trataba: una maniobra astuta, en el mejor estilo bolchevique, y una dama aparentemente virtuosa pero que deseaba ser seducida. Pronto había olvidado Allende la solemne declaración que leyó en el Congreso el 22 de octubre de 1970: "Las disposiciones del Estatuto de Garantías que acabo de firmar, las entiendo no solamente como unos principios consagrados en una Carta Fundamental, sino más aún, como la regla moral que dictará mi conducta frente a mi propia conciencia y frente a la historia". Con su conciencia tendrá que arreglárselas ante quien todo lo sabe, pero ante la historia quedará como un mentiroso.

Aunque en un sentido muy diferente al que Punto Final tuvo como intención original, sin duda la divulgación de esta entrevista efectivamente contribuyó a esclarecer lo más recóndito del proceso político chileno. No quedó más remedio que abrir los ojos y constatar la estafa. ¡Ay de los ingenuos! Ese sector de la democracia cristiana señalado por Allende, el grupo filomarxista que controlaba al partido mediante la amenaza de llamar reaccionarios a los que se atrevieran a contradecirles, en 1970 había logrado hacer creer al resto de sus correligionarios que si no se apoyaba al abanderado de la Unidad Popular en el Congreso Pleno habría una guerra civil. Era el más crudo de los chantajes. Como la trayectoria de Allende y los postulados castrista-guevaristas que servía indicaban que desde el gobierno llevaría adelante una revolución a la cubana, les pareció que lo mejor era claudicar. La forma de ceder, cubriendo las apariencias con una cortina legal, consistió en proclamar ante la opinión pública que ellos condicionaban la gestión de la Unidad Popular mediante la firma de un Estatuto de Garantías que le obligaría a respetar el régimen democrático. ¡Qué desconocimiento de la moral leninista! ¿O no era ignorancia sino complicidad?

Allende, frente a Debray, puso las cosas en su lugar definitivo: el Estatuto era una necesidad táctica para acceder al poder. Con la misma lógica revolucionaria después diría que la Unidad Popular tenía el gobierno pero no el poder. Se develó entonces que su verdadero objetivo era el poder total. Para alcanzarlo dio pasos cada vez más audaces, pasos que suponían romper las ataduras que le tenían sujeto al orden político que

85 Idem., pp. 57 y 58.

había hecho posible su acceso al gobierno. Y al fin desembocó en la vía insurreccional, aunque Genaro Arriagada tiene razón al precisar que "la verdad es que la ´vía insurreccional` estuvo siempre presente en la Unidad Popular".[86]

Con todo, su concepción de la moral política no era el único defecto de Salvador Allende. También era corrupto en el sentido más usual del término. Valga un ejemplo poco divulgado. Edward Korry fue embajador de los Estados Unidos en Chile entre 1967 y 1971. En octubre de 1996 visitó el país en que había servido y advirtió que "llegué a un nuevo país, con la misma gente que ahora tiene nuevas ideas". Se le preguntó si era cierto que Allende había recibido sobornos por medio millón de dólares. Su respuesta fue la siguiente: "Más. Hubo otros, pero sólo sé de uno en forma directa. El salitre era propiedad de compañías extranjeras. Un europeo occidental viajó a Chile en representación de accionistas no norteamericanos y pagó más de US.$ 500.000; cerca de US.$ 800.000. Y el salitre recibió 8 millones de dólares de pago para ser nacionalizado por Allende. Yo participé en 40 negociaciones pactadas entre el gobierno de Allende y compañías norteamericanas, para permitirles legalmente y mediante un acuerdo su salida de Chile. Incluso permanecí durante un año del gobierno de Allende, porque tanto el Departamento de Estado como la Casa Blanca consideraban (el término es de ellos) ´un milagro` que yo pudiera hacer estas gestiones. Ya las había hecho con Tito en Yugoeslavia en 1950". El ex embajador también hace referencia a otro soborno, recibido por Allende con motivo de la nacionalización de un yacimiento de cobre, pero no proporciona detalles.[87]

Frente al testimonio de quien fuera embajador de los Estados Unidos se podrá argumentar que las coimas manchan tanto a quien las da como al que las recibe. ¡Triste consuelo! Pero, como se verá de inmediato, si alguien se atrevía a ofrecerlas era porque sabía que el terreno estaba abonado. Ese era el caso. Se suele afirmar que incluso entre los bandidos hay una especie de código de honor: para apoderarse de Clarín, Allende lo violó en perjuicio de su compinche Darío Sainte Marie, más conocido por su seudónimo, Volpone.

Víctor Pey, fallecido no hace mucho en Miami, era un ingeniero civil español que llegó a Chile como refugiado después de la guerra civil. Al igual que otros ex combatientes del bando rojo, en la picaresca política de la izquierda criolla ocupó muy pronto un lugar destacado, pero en las sombras. Su nombre se hizo conocido cuando apareció contactando a Jorge Bellet para sacar a Neruda hacia Argentina en 1948. Durante años fue hombre de confianza de Salvador Allende, quien le encomendó ciertas misiones delicadas. Patricio Aylwin, por ejemplo, a propósito de los últimos diálogos sostenidos con Allende en agosto de 1973, ha relatado que esta misteriosa persona representaría al Jefe de Estado en las negociaciones para evitar la quiebra de la Papelera. Pues bien, a comienzos del año 1971, Sainte Marie, dueño de Clarín, viajó a Cuba, solicitando a su amigo Fidel Castro que ordenara al MIR, que controlaba el sindicato del diario, el respeto de sus derechos. Esa banda terrorista quería apropiárselo, lo que impediría materializar un negocio hasta entonces confidencial que tenía con Allende.

---

86 GENARO ARRIAGADA HERRERA, op. cit., p. 281.

87 La Segunda, 22.10.96, pp. 20 y 21.

Al parecer, obtuvo las garantías del caso. A fines del mismo año, Volpone y Allende designaron a Pey su enlace para el proyecto de ampliación de Clarín, operación financiada con fondos públicos a cambio de la cual el presidente Allende recibiría, a título personal y gratuitamente, la mitad de las acciones del diario. Con motivo de un editorial que le desagradó —se refería negativamente a la nacionalización de la banca y fue escrito por Román Alegría de acuerdo a instrucciones precisas de Volpone— Allende se dejó caer una noche, iracundo, en el domicilio particular de Sainte Marie. Rodeado de su GAP, armado con metralletas, le amenazó: "Yo no voy a tolerar tus jugarretas. Conmigo no vas a hacer lo que has hecho con Ibáñez y Frei. Te hago matar, culpo al imperialismo, te declaro héroe nacional, te rindo honores de general y hablo en tus funerales. Ya lo sabes".[88] Volpone sabía con quien trataba. Considerándose perdido, en marzo de 1972 huyó a España. En septiembre de ese año se reunió en Ginebra con el representante de Allende, Víctor Pey, quien le ofreció un millón y medio de dólares por el diario; de no aceptar, Clarín quedaría en manos del MIR. Sintiéndose extorsionado, hubo de ceder a esa oferta imposible de rechazar. La documentación pertinente se firmó ante el Cónsul de Chile en Zurich, el malogrado diplomático Carlos de Costa Nora Sepúlveda. El dinero tuvo un itinerario misterioso; salió de La Habana para el Banco Estatal de Checoslovaquia y desde Praga se giró una orden de pago contra un banco suizo. Esa operación, evidentemente, no se pudo realizar sin el consentimiento de Fidel Castro. Pero Víctor Pey dejó pendiente un remanente de 30.000 dólares y, para garantizar el pago de la deuda, Sainte Marie retuvo un tercio de las acciones. Esa suma debía cancelarse el 11 de septiembre de 1973... Por razones obvias eso no ocurrió; Pey se asiló en la embajada de Venezuela, del dinero nunca más se supo y el burlado Sainte Marie falleció en Madrid en febrero de 1982.

Ese era el verdadero Salvador Allende, el hombre al que en todo el mundo se le aplaudía porque encarnaba la limpieza de la revolución proletaria y a quien en su patria las tropas rendían honores disciplinadamente porque era el Presidente de Chile. Pero, con el mérito de los antecedentes expuestos, sólo se puede arribar a una conclusión nada grata de emitir: su conducta manchó la limpia tradición de escrupulosa honorabilidad que, antes y después de él, han mantenido los primeros dignatarios en La Moneda.

Siguiendo esta misma línea argumental —que ejemplifica la destrucción de la democracia chilena con las peripecias de Salvador Allende— el periodista británico Robert Moss se ha preguntado: "¿Por qué murió? ¿Acaso, como dicen sus partidarios, tratando de defender la democracia contra una conjura de conspiradores fascistas? ¿Murió (como se imaginan los críticos de la 'Nueva Izquierda') porque le costó mucho darse cuenta de que, al final, era imposible llevar a cabo una revolución socialista por medios pacíficos? ¿O fue la acción de las Fuerzas Armadas el desesperado y último recurso de la mayoría opositora que veía a los marxistas pisotear sus derechos políticos y arrastrar a Chile a la bancarrota? ¿Acaso era posible que el pronunciamiento de septiembre desatara una sangrienta y prolongada guerra civil al destruir las bases para la insurrección de estilo bolchevique que la extrema izquierda estaba planeando?".[89]

---

88 El episodio en ROMÁN ALEGRÍA, Del general de la esperanza a la desesperanza general, op. cit., pp. 143-146. La cita en p. 144.

89 ROBERT MOSS, op. cit., pp. 15 y 16.

La respuesta que cada cual se quiera dar debiera considerar algunos datos incuestionables. Por ejemplo: la evidencia objetiva de que la Unidad Popular llevó a Chile al peor desastre económico de su historia, reflejado en la evaporación de sus reservas en divisas, en el desabastecimiento de los bienes indispensables para asegurar la vida de la población —el 4 de septiembre de 1973, Allende reconocía públicamente que en el país sólo quedaban reservas de trigo para unos pocos días— y en la existencia de un nivel de inflación sólo comparable por entonces al que había sufrido Alemania durante la República de Weimar. Tampoco se debiera omitir que paralelamente al caos social imperante, en el plano institucional Allende transitaba al margen de la Constitución y las leyes, como inequívocamente lo señalaron la Cámara de Diputados, la Corte Suprema y la Contraloría General de la República. No tiene sentido olvidar que el desprecio al derecho de que hizo gala la Unidad Popular, siempre justificada como una necesidad táctica, en realidad anclaba en la más completa falta de escrúpulos, actitud derivada de una falla moral. También hay certeza absoluta respecto a que los partidos marxistas sólo aspiraban a apoderarse del poder total para culminar, a sangre y fuego, su revolución. Régis Debray, que visitara a Allende por última vez en agosto de 1973, lo resumió de la siguiente forma en Le Nouvel Observateur: "Todos sabíamos que era un asunto táctico ganar tiempo, organizar, armar y coordinar las formaciones militares de los partidos que componían la Unidad Popular y su gobierno. Era una carrera contra el tiempo".[90]

Debray tenía razón en cuanto a que el resultado de la fase final de la vía insurreccional dependía de la decisión por medio de las armas. Si pretendían ganar tiempo era para crear las condiciones que permitieran asegurar la victoria de las suyas. Algunos hicieron cuentas alegres jugando con una ilusión: la división del brazo armado de la comunidad nacional. El sacerdote marxista Gonzalo Arroyo ha señalado en este sentido que "la izquierda, antes del golpe militar, confiaba ingenuamente en la división interna de las Fuerzas Armadas, en base a que daba por supuesto que existirían sectores ´constitucionalistas` que podrían oponerse a una acción armada por parte de algunos oficiales. Estimaba que se produciría una división tanto vertical como horizontal en el momento del golpe".[91] Obviando el detalle de que a esa altura del proceso revolucionario la Constitución ya no amparaba al presidente Allende, quien la había burlado reiteradamente, las apreciaciones del padre Arroyo ponen de manifiesto que el grupo político verdaderamente golpista, el que en realidad se encaminaba al violento asalto del Estado, desconocía a su adversario natural.

Si es verdad que, como se voceaba machaconamente durante la Unidad Popular, el deber de todo revolucionario es hacer la revolución, la vida de Allende fue un lastimoso fracaso, un gesto encendido pero retórico, carente de valor. La demagogia, frivolidad, mentira, violencia, duplicidad y corrupción de que hizo gala en lo personal, son las mismas falencias éticas que acabaron por poner al pueblo chileno en contra de la Unidad Popular.

Cuando llegó el momento supremo, el del asalto final para alcanzar de manera irreversible el poder total, el presidente-revolucionario que se ufanaba ante Debray de ser quizás el

---

90 Citado en idem., p. 18.

91 GONZALO ARROYO, S.J., *Golpe de Estado en Chile*, Ediciones Sígueme, Salamanca, 1979, p. 57.

único chileno que había leído entero El Capital de Marx, demostró que no había hecho lo mismo con las obras de Trotsky. Su nulidad en la esfera táctica le impidió culminar el instante con que había soñado durante toda su vida. Ordenó prepararlo. No se refieren a otra materia sus instrucciones emitidas el 22 de agosto de 1973 a las jefaturas de los partidos Socialista, Comunista y MAPU Gazmuri, así como a la CUT, en orden a diseñar lo que él llamó un "plan de defensa cívico militar". El documento elaborado en cumplimiento de sus órdenes, ciertamente todavía esquemático pero clarísimo en su macabra intención, señala como nombre en código "Plan Zeta", está fechado el 25 de agosto y dirigido de P-4 a AGP Santiago, sigla que identificaba al "frente militar" de los socialistas en la capital. Textualmente, el primer párrafo de este legajo —encontrado en la caja fuerte del subsecretario del Interior, Daniel Vergara— es el siguiente: "Z-A: Iniciación de Golpe de Estado para conquistar el PODER TOTAL e imponer la DICTADURA DEL PROLETARIADO contra la acción de una parte o la totalidad de las FF.AA. apoyada por grupos civiles".[92]

Todos estos hechos dan cuenta del fracaso histórico de los proyectos revolucionarios aplicados en Chile a lo largo de una década. Los individuos que durante todos esos años se negaron a considerar la realidad objetiva, cegados como estaban por sus premisas ideológicas, ignoraron hasta la hora postrera los evidentes síntomas de acontecimientos posibles y probables que no podían dejar de afectarles. Ellos son los únicos responsables de su propia ruina. Desgraciadamente, en su loca carrera hacia un quimérico horizonte, terminaron por aniquilar la democracia. De paso, horadaron el delicado tejido de valores, convicciones y tareas comunes que conforman los consensos sobre los que se asienta la convivencia social.

En fin, mirando ahora la década revolucionaria en su conjunto, cada lector podrá dar su propia respuesta a la pregunta quizás más interesante: ¿cómo pudieron aquellos hombres capaces de errores de juicio tan colosales alcanzar una posición que les permitiera perpetrarlos?

Esos hombres extraviados fueron quienes provocaron la división de los chilenos en bandos separados por el odio, proceso que sólo fue posible detener el 11 de septiembre de 1973. Los efectos de la partitocracia, la intolerancia ideológica y la violencia revolucionaria, fueron configurando la crisis política durante un largo período de tiempo. Su eclosión en ondas cada vez más amplias e intensas, llegando a comprometer la viabilidad de la convivencia cívica, ocurrió a lo largo de toda la década anterior a esa fecha histórica. Y a partir de ese momento, desde sus entrañas heridas pero aún palpitantes, la comunidad nacional comenzó a resurgir bajo un signo diferente, avanzando con enérgicas brazadas hacia la unidad, la prosperidad y la grandeza.

---

92 El Plan Zeta está reproducido íntegramente en el informe de la Comisión especial de Consulta sobre seguridad de la OEA, op. cit., pp. 205-241. También en el *Libro Blanco del cambio de gobierno en Chile*, Editorial Lord Cochrane, Santiago, 1973.

II PARTE

LA RESPUESTA

La primera cuestión que aquí se plantea es la siguiente:
¿cuál es la señal de que se ha ganado una guerra?
La respuesta es la siguiente: la victoria se reconoce en que
gracias a ella la patria se hace más grande y poderosa.

ERNST JÜNGER

CAPITULO IV

EL PUNTO DE QUIEBRE

Algún día se me prenderán de los faldones
para salvar a la patria.

CHARLES DE GAULLE

Si respecto a la integridad del consenso nacional la elección presidencial de 1964 constituye su punto de no retorno en la travesía que le condujo al desastre, el Pronunciamiento Militar de 1973 señala el punto de quiebre del proceso de descomposición y el inicio de su recuperación.

Este punto de quiebre en la trayectoria política, social e institucional del país tiene por causa inmediata la aplicación de la fuerza legítima por las Fuerzas Armadas y Carabineros de Chile, como único remedio para sofocar una inminente guerra civil. Pero las causas mediatas del enfrentamiento fraticida que de aquel modo se evitó, tienen su génesis en la ruptura del consenso básico de la comunidad chilena, vínculo que se perdió por el afán de imponer, durante una década y sin concesiones, una visión global del hombre y de la sociedad que era incompatible con la tradición y con el interés nacional.

Salvo quizás para los astrólogos, el dato tienes apenas el mérito de una coincidencia, pero el hecho es que un 11 de septiembre, en 1924, las Fuerzas Armadas depusieron al presidente Arturo Alessandri y abrieron cauce a un orden político que tuvo vigencia hasta otro 11 de septiembre, el de 1973, cuando nuevamente pusieron término a una suerte de empate que agotaba a las instituciones republicanas en una confrontación sin salida y esterilizaba las energías de la nación. Las circunstancias de 1924 y 1973 son, empero, cualitativamente diferentes. En el caso más remoto se trató de la crisis del régimen político impuesto por el bando congresista tras su victoria en la guerra civil de 1891; en el caso más próximo, lo que había que superar era una crisis terminal de la convivencia social, consecuencia del fracaso de dos sucesivos experimentos revolucionarios. La distancia entre ambas situaciones es, pues, significativa: una es instrumental, la otra es sustancial. La distinción se torna evidente al recordar que, como advirtió Montesquieu, "la sociedad no son los hombres, sino la unión de los hombres".[1] Pero en ambas ocasiones, y esto es determinante para comprender el sentido de su intervención, las instituciones armadas, cumpliendo su rol de supremo ga-

1 CHARLES-LOUIS DE SECONDANT, Barón de Montesquieu, *El espíritu de las leyes*, Libro X, 3.

rante y último sostén de la continuidad histórica de la patria, asumieron una función arbitral y, situándose sobre la lucha que desgarraba al tejido social, dieron una solución positiva a la crisis mediante la reunificación de la nación y la modernización del Estado, creando así un clima político y un orden de cosas renovado, plasmado en una nueva institucionalidad.

En cierto modo, las intervenciones militares en Chile han sido un correctivo a un estilo del hacer político que ha paralizado a la sociedad por su acción desenfrenada o por su pasividad culposa, es decir, por su falta de equilibrio. De otra parte, han ocurrido en un contexto, el del siglo XX, en el que la soberanía de las naciones se ha vuelto problemática en muchos lugares. Si alguna lección se puede sacar, consiste en que sólo han logrado prevalecer las agrupaciones humanas capaces de adaptarse al cambio, avanzando hacia formas renovadas pero sin perder sus esencias, es decir, sin dejar de ser lo que genuinamente son. No existe una constante histórica de mayor trascendencia, y a ella se refería Toynbee al formular su famosa *ley del desafío y la respuesta*. Oteando el futuro, Ernst Jünger ha sintetizado admirablemente el próximo paradigna, el rasgo característico de ese tiempo nuevo que, a falta de mejor nombre, es designado provisionalmente como posmodernidad: "No el pueblo, sino el hombre, es el soberano".[2]

Es frecuente escuchar ahora en los círculos académicos que la sociedad del próximo período histórico, iniciado con la desaparición del comunismo, podría caracterizarse como una democracia sin enemigos. Pero ese rótulo —que en contrapunto evoca un célebre libro de Karl R. Popper— tal vez no pase de ser una bienintencionada proyección de los deseos a los hechos. Esta última apreciación no obedece a una actitud pesimista, sino que se fundamenta en una observación que el mismo Popper hizo en la *addenda* a esa obra: "La principal enfermedad filosófica de nuestra época es el relativismo intelectual y moral, el segundo basado, al menos en parte, en el primero. Por relativismo —o, si se prefiere, escepticismo— entiendo aquí, sucintamente, la posición que sostiene que la elección entre teorías en competencia es arbitraria, ya que, por un lado, no existe algo así como la verdad objetiva; por otro, si existiera, no hay nada que sea una teoría verdadera o, en todo caso, más próxima a la verdad que otra; y, finalmente, si hay dos o más teorías, no hay forma ni medios para decidir si una de ellas es mejor que la otra".[3]

Casi es innecesario decir que esta enfermedad capital no ha sanado con el colapso del comunismo soviético y puede condicionar seriamente el futuro de la libertad y la democracia en el porvenir.

Las bases intelectuales y morales de la Guerra Fría todavía están vigentes, pues corresponden a las de un período histórico más amplio, caracterizado universalmente como un cambio de época. De ahí que el relativismo, esa enfermedad del espíritu denunciada por Popper, todavía esté vigente y mueva a engaño al permitir estimar que en la Guerra Fría los dos bandos eran equivalentes intelectual y moralmente. En consecuencia, el analista que procure ser objetivo sólo podría abordar el tema desde una postura neutral. No es necesario coincidir literalmente con el presidente Reagan —que anatemizó a

2 ERNS JÜNGER, *El autor y la escritura*, Editorial Godisa, Barcelona, 1987, p. 173.

3 KARL R. POPPER, *La sociedad abierta y sus enemigos*, Editorial Paidós, Barcelona, 1957. En la 6ª reimpresión, 1994, p. 669.

la Unión Soviética como el imperio del mal— para admitir que un abismo ético separaba a las concepciones en disputa. Por consiguiente, no se trata aquí de sostener una suerte de preeminencia de los vencedores por el sólo hecho de serlo; el resultado de la Guerra Fría pudo ser otro bastante distinto del que hemos conocido. Se trata, más bien, de reconocer que el bando que a fin de cuentas prevaleció, el mundo libre, sustentaba un ideal que en sus dichos y en sus hechos estaba más cerca de la verdad, esto es, que éticamente eran superior.

Ahora, al descender de lo global al caso particular de Chile, también debe admitirse que las posiciones que aquí reflejaban esa contienda planetaria se ubicaban en niveles éticos muy distantes entre sí. Aciertan quienes sostienen que no hay nada más injusto que tratar como igual lo que por naturaleza es diferente. Tanto en el tiempo del quiebre institucional como en el que le sucedió, los constructores de un nuevo Chile, con todas las flaquezas y errores que se les quiera imputar, demostraron poseer una superioridad neta sobre los que en diferentes momentos contribuyeron, por acción u omisión, a su destrucción.

En efecto, la tradición cuatro veces centenaria del estamento militar chileno representa, para la nación, un pozo de valores trascendentes que a lo largo de las generaciones ha nutrido su impulso vital más puro; la izquierda ideológica, en cualquiera de sus vertientes, tanto por su visión intelectual, como por su entidad moral y las manifestaciones históricas a que ha dado lugar, no ocupa el mismo sitial. Es comprensible que los paladines de la revolución hayan aspirado a ser vistos como una posibilidad diferente aunque de similar rango ético, pero fue un vano empeño. El derrumbe del comunismo soviético puso al desnudo la miseria intelectual y moral que ocultaba su propaganda mendaz. Lo mismo ocurre con la democracia cristiana italiana, cuya desintegración reveló la podredumbre que había carcomido sus ideales. Los partidos políticos chilenos que vieron en aquéllos sus modelos, no pueden ahora cerrar los ojos y desentenderse olímpicamente de esas realidades.

Ya ha finalizado, teórica y prácticamente, la polémica sobre el valor relativo de las concepciones que durante medio siglo se enfrentaron a escala planetaria. En todas partes del globo, las sociedades civilizadas se ordenan en torno a la democracia política y a la economía de mercado. Así las cosas, es innegable que el derrumbe del comunismo cierra un ciclo histórico y modifica no sólo la política y la economía, sino algo más profundo: ni más ni menos que la cultura de nuestro tiempo.

Sabido es que cualquier sistema cultural supone una totalidad ordenada y jerarquizada de valores, con lazos sustantivos entre unos y otros, dando forma a un modo coherente de concebir el mundo y la vida. Referida a una comunidad nacional, puede entenderse por cultura "el estilo de vida común que caracteriza a un pueblo y que comprende la totalidad de su vida: el conjunto de valores que lo animan y de los desvalores que lo debilitan, las formas a través de las cuales aquellos valores o desvalores se expresan y configuran, es decir, las costumbres, la lengua, las instituciones y estructuras de convivencia social. En una palabra, la cultura es la vida de un pueblo".[4]

---

4 S.S. JUAN PABLO II, "Discurso al mundo de las artes, las letras y las ciencias", Santiago, 2.4.87.

Muchos pensadores han advertido que ante el eclipse de las ideologías globales resurgen con energía las naciones, lo singular, las identidades que aquéllas pretendían desdibujar diluyéndolas en el molde igualitario, abstracto y universal que propugnaban. Las comunidades nacionales, nuevamente, son hoy las grandes protagonistas de la historia. Es necesario, por tanto, desentrañar y meditar en esa clave las incógnitas que traerá el futuro orden mundial, pero, como indica Sartori, "sigue siendo importante que las nuevas generaciones sepan cuál ha sido el punto de partida y la apuesta por la buena vida y por la mala ciudad, en lo que se refiere a la libertad y la opresión, a lo largo del siglo que ahora concluye".[5]

En la dirección apuntada por Sartori hay que recordar que la Guerra Fría fue un tiempo profundamente ideológico y el marxismo la ideología máxima. A diferencia de sus modestísimos competidores, el marxismo tenía la ambición de ser absoluto y definitivo; explicaba la historia, preveía el futuro y prometía la sociedad perfecta. Su desaparición ha llevado a pensar en el cumplimiento efectivo de la profecía del crepúsculo de las ideologías y su reemplazo por el gobierno de obras, un tópico conocido entre nosotros al menos desde la segunda mitad de los años ´60 gracias a un ensayo de Fernández de la Mora.[6] Sin embargo, es evidente que el término de una de ellas no implica necesariamente el fin de las otras, ni menos de la ideología en sí y por sí misma en tanto categoría intelectual. Prudente es, por consiguiente, limitarse a consignar su momentáneo eclipse. El punto es interesante porque, retomando a Popper, cualquier ideología constituye un engañoso sucedáneo de la verdad. También lo es porque aunque la estrella comunista se haya apagado, tal como ocurre en la astronomía, su luz seguirá avanzando hacia los confines por largo tiempo. Y en este sentido metafórico, Chile está situado en los bordes del sistema planetario, de manera que a nadie debiera sorprender que en ciertos sectores de la sociedad sus efectos se puedan hacer sentir durante algún tiempo, especialmente entre los más atrasados de noticias.

Ahora bien, en el contexto de la Guerra Fría, Chile fue un laboratorio, un campo de experimentación para las grandes potencias. Salvadas las diferencias, que son muchas, su situación admite ser comparada con la española de los años ´30. Allá el experimento se saldó con el Alzamiento del 18 de julio de 1936, que por fallido derivó en guerra civil; acá ese precio terrible se evitó gracias a que el Pronunciamiento del 11 de septiembre de 1973 tuvo éxito. Pero, en ambos casos, el adversario del ser nacional fue el mismo.

Hasta el año 1964 fue indiscutible que Chile formaba parte del campo que, con extrema simplificación y no poco optimismo, se conocía por mundo libre. En la elección presidencial de ese año lo que verdaderamente estuvo en juego fue la posibilidad de su cambio de bando mediante el ejercicio de las propias fórmulas democráticas. La reunión de todas las fuerzas contrarias al marxismo —que para ese solo propósito, con mayor o menor convicción optaron por apoyar la candidatura de Eduardo Frei

---

5 GIOVANNI SARTORI, *La democracia después del comunismo*, Alianza Editorial, Madrid, 1993, p. 12. Para el autor, esta nueva obra es una suerte de apéndice a su *Teoría de la democracia*, publicada por la misma editorial en 1988.

6 GONZALO FERNÁNDEZ DE LA MORA, *El crepúsculo de las ideologías*, Zig Zag, Santiago, 1968.

Montalva— lo impidió. Seis años después, al ir divididas, hicieron posible el advenimiento del primer gobierno marxista instalado en el mundo gracias a la aplicación de los procedimientos democráticos. Por esa especial circunstancia, por la expectación que provocaba la virtualidad de una nueva estrategia comunista, esto es, un ropaje democrático que cubría sus designios de siempre, entre 1964 y 1973 ambos bloques otorgaron significativa importancia a lo que ocurría en este lejano país. Objeto de la presión ideológica más intensa que cabe imaginar, al cabo de una década se había volatilizado aquí el consenso que durante medio siglo había anudado la convivencia de la población y la fisonomía histórica de la nación estaba a punto de desaparecer porque desde el propio gobierno se lo quería mudar en un consenso absolutamente diferente, de carácter marxista y, en concreto, según su versión caribeña. Entonces, y sólo entonces, las Fuerzas Armadas y de Orden —último y definitivo baluarte de la chilenidad— procedieron a su rescate.

En una situación mundial profundamente ideologizada y de precario equilibrio, cualquiera fuera el resultado de la lucha en que Chile se debatía no podía sino generar inquietud en las grandes potencias. Dado que los institutos armados chilenos, por naturaleza e íntima convicción, están situados más allá y más arriba de la contienda ideológica, la acción rectificadora que desplegaron desde el gobierno del Estado no podía sino ser ajena a tales devaneos. Su independencia frente a los grandes bloques lo convirtió en un país paria, recibiendo de uno los embates del despecho y del otro la mayor incomprensión.

Con el objeto de recordar el escenario internacional en que irrumpió el Pronunciamiento Militar, sin perder de vista que la Guerra Fría es la membrana que lo envuelve, puede tener interés mencionar algunos hechos de especial relieve ocurridos durante el año 1973. El 1° de enero de ese año, con el ingreso al Mercado Común de Gran Bretaña, Dinamarca e Irlanda, la Europa de los seis se convirtió en la de los nueve, potenciándose así el sistema económico occidental opuesto al de la órbita comunista en el viejo mundo, el COMECON. En marzo terminó la participación de los Estados Unidos en el conflicto del sudeste asiático, quedando sus aliados de Vietnam del Sur librados a su suerte. Triste destino, en verdad, sellado dos años más tarde en el cautiverio y posterior exterminio; una tragedia envuelta en el más vergonzoso de los silencios. En junio, Washington y Moscú firmaron un acuerdo, comprometiéndose a no recurrir jamás a la guerra nuclear entre ellas, medida que formaba parte de la política de distensión entre las grandes potencias. La crisis del petróleo dejó al descubierto el talón de Aquiles de la sociedad de consumo y las potencias de Europa Occidental y Japón debieron inclinarse ante las exigencias de los árabes. Anwar Sadat, que un año antes había puesto término a la presencia soviética en Egipto, atacó por sorpresa a Israel el 6 de octubre, día del Yom Kippur judío. Watergate convirtió en pocos meses a quien había triunfado por el mayor margen electoral de la historia norteamericana, Richard Nixon, en acosado mandatario, amenazado por una acusación constitucional y eventual destitución. Optó por renunciar. Como poco antes también había renunciado el vicepresidente Spiro Agnew y en su reemplazo, de acuerdo a la Constitución, Nixon había nombrado directamente a Gerald Ford, se dio una paradoja: éste último ocupó la Casa Blanca sin haber sido elegido en votación alguna.

Coetáneamente a los hechos mencionados, el gobierno de la Unidad Popular se hundía en Chile, lastrado por su propia incapacidad, su inmoralidad y su desprecio a la legalidad vigente. Según explica quien probablemente haya sido uno de los más influyentes asesores políticos de Allende, el español Joan E. Garcés, dicho fracaso se debió a su insuficiencia para encarar "algunos de los problemas de cuya solución depende el destino de un proceso de transformación de un sistema capitalista en favor de una alternativa socialista, y en los que la experiencia chilena ha revelado hasta qué punto algunos de los conceptos más generalizados de la teoría de la transición al socialismo pueden ser inadecuadas ante las exigencias cambiantes de la evolución histórica y la especificidad única de cada proceso social (...) El proceso chileno ha puesto en evidencia graves lagunas o errores de la praxis revolucionaria dominante en el movimiento obrero y popular. (...) La ausencia de una concepción teórica y operativa de estas últimas creó un vacío en la estrategia político-militar de la Unidad Popular que redujo progresivamente su capacidad de iniciativa y de defensa".[7]

Joan E. Garcés, un estupendo ejemplo del funcionario internacional comprometido con la revolución comunista, obtuvo de UNESCO el pase en goce de servicio para venir a asesorar a Allende. Por su flagrante intervención en la política chilena, el director del organismo, René Matheu, lo marginó de la institución.[8] Pero, dejando aparte su ventura personal y volviendo al párrafo recién citado, ¿qué quiere decir Garcés en buenas cuentas? De su lectura fluye que el experimento marxista en que él participó desde el puesto de mando sólo podía imponerse por la fuerza de las armas. Lo demás es retórica. La Unidad Popular se preparó para el enfrentamiento que su propia conducta había hecho inevitable; pero en la hora decisiva, cuando era inminente el asalto al poder total, los cordones industriales y las brigadas de choque, aunque contaban con el refuerzo de miles de guerrilleros extranjeros bajo el mando del cubano Patricio de la Guardia Font —Medalla Internacional y luego general en el Ejército de su país— se derritieron.

Las razones esgrimidas por Joan E. Garcés, aunque penetrantes, están lejos de explicar por sí solas el fracaso del experimento marxista en Chile. La Unidad Popular no terminó mal sólo por carecer de un más desarrollado instrumento político-militar. Es efectivo, como se ha señalado en el capítulo anterior, que las insuficiencias estratégicas y tácticas de sus líderes eran indisimulables, pero fue su desastrosa gestión gubernamental lo que convirtió al factor político-militar en lo realmente decisivo. Y haber llevado a la nación a esa encrucijada, entregando a la fuerza de las armas la decisión política en un país que contaba con una larga tradición democrática, no fue una casualidad. Era la consecuencia de la vieja concepción leninista según la cual las tensiones deben estimularse hasta el paroxismo, generando así el caos social, económico y político. Ocurre que los comunistas necesitan ese turbio ambiente para dar el zarpazo que les permite alcanzar el poder total e iniciar la fase de dictadura del proletariado. No hay que engañarse, "el 11 de septiembre de 1973 las Fuerzas Armadas y de Orden rescataron a Chile del comunismo, en los instantes en que éste se aprestaba a cerrar el puño sobre lo que iba quedan

---

7 JOAN E. GARCÉS, *Allende y la experiencia chilena. Las armas de la política*, Ediciones BAT, Santiago, 1991. La edición original es de 1976, revisada y actualizada en 1990. La cita en p. 7.

8 Qué Pasa nº 132, 2.11.73, p. 12.

do de su libertad y democracia, tras mil días de abusos, torpezas y excesos de todo tipo, cometidos o provocados por la Unidad Popular".[9]

Un dilema militar.

A fines de octubre de 1970, el general Augusto Pinochet Ugarte estaba al mando de la VI División de Ejército, con asiento en Iquique. Se encontraba en Santiago, participando en los funerales del general René Schneider Cherau, cuando el presidente electo, Salvador Allende Gossens le ofreció ser Comandante de la Guarnición de Santiago, cargo que aceptó. Más tarde, en los primeros días del año 1972, fue nombrado Jefe del Estado Mayor General del Ejército.

En los Ejércitos contemporáneos, estar a la cabeza de su Estado Mayor es, sin duda, ocupar la función estrictamente profesional más importante. Se trata del órgano de carácter permanente que garantiza su eficiente empleo y la coordinación con las otras ramas de la Defensa Nacional para el cumplimiento de la función militar del Estado, a lo largo del tiempo y sin respecto a persona alguna. Para ello aprecia constantemente la situación, tanto la que prevalece al interior del país como en su entorno. Cuando impera la normalidad su servicio suele ser bastante anónimo. En tiempos de crisis, en cambio, la atención de los oficiales con mando de tropas converge sobre quien tiene por misión proporcionar las directrices que definen cómo se hará lo que el deber señala.

Cuando el general Pinochet asumió esa función, el orden de cosas en el nivel nacional estaba como para alarmar al más sereno. Desde hacía años seguía un curso implacable el proceso revolucionario que había desorganizado todas las actividades. El Ejército también había sufrido sus efectos. Gracias a las medidas adoptadas por la administración anterior, a la Unidad Popular le había bastado un año para descoyuntar la organización del Estado y amagar el desarrollo económico del país. El futuro se presentaba cargado de amenazas para la seguridad nacional. Él mismo ha narrado en *El día decisivo* que "desde el día en que asumí mi nuevo cargo y desde mis primeros contactos con los Jefes de las Direcciones, percibí la inquietud de estos oficiales ante la situación política del país, aunque muchas veces no afloraba por desconfianza en que sus palabras fuesen tergiversadas o se les acusara de intervenciones políticas". Esa percepción reflejaba en el estamento militar lo que todos los chilenos palpaban diariamente. Algunos generales le hicieron ver su preocupación: Chile caminaba al marxismo y ellos no estaban adoptando ninguna medida en su defensa. Se limitó a escuchar. Para él, una intervención militar sólo tendría sentido si la ciudadanía lo exigía como única solución posible frente al caos imperante. "De otra manera —explica de inmediato— seríamos aprovechados posteriormente por los mismos políticos que habían conducido a Chile a este desastre y que tal vez esperaban que las Fuerzas Armadas hicieran una limpieza y un acomodo del país para luego recuperar el poder. (...) Mi idea al respecto era por cierto muy diferente. Si el Ejército y las Fuerzas Armadas intervenían

---

9 RAFAEL VALDIVIESO ARIZTIA, *Crónica de un rescate (Chile: 1973-1988)*, Editorial Andrés Bello, Santiago, 1988, p. 9.

contra el Gobierno marxista, sería para producir cambios trascendentales en los más amplios y variados aspectos de la vida nacional, a fin de corregir las gravísimas deformaciones que la política tradicional había ocasionado con el correr de los años. Por lo tanto, las Fuerzas Armadas tenían que permanecer en el poder por un período indeterminado hasta modernizar la vida chilena, restablecer la convivencia, crear un régimen institucional acorde con los problemas y las amenazas de la época y dejar a la nación en condiciones de defender su nueva democracia. De otra manera era preferible no hacer absolutamente nada, pues si todo fuera a culminar en el retorno de ciertos políticos, volvería el país a corto plazo a una situación aún peor de la que vivíamos".[10]

De haber conocido esas reflexiones, que no trascendían de un círculo íntimo y estrictamente militar, incluso los dirigentes políticos más comprometidos en la oposición a Allende se habrían sorprendido. Lo que estaba germinando en la mente del general Pinochet era un proyecto que rebasaba en mucho los propósitos de quienes sólo deseaban terminar de una buena vez con el experimento marxista-leninista en Chile, para lo cual el concurso de los hombres de armas era imprescindible. Donde otros, quizás por estar sumidos en la contingencia, se limitaban a advertir la urgente necesidad de aplacar los efectos de una política funesta, él visualizaba las causas de un proceso que de continuar en la misma línea culminaría en la completa, absoluta y definitiva descomposición de la democracia chilena. La diferente amplitud y profundidad de estas apreciaciones, explica muchas de las divergencias de opinión que se suscitarían más adelante.

Precisamente en torno a este punto giraba el dilema militar. La respuesta o solución —y muchos Ejércitos han pasado por ese trance— no puede desentenderse de la siguiente constatación: "Un golpe de Estado militar puro y simple no será nunca más que un episodio; dilapida en pura pérdida, en las luchas políticas cotidianas, el potencial precioso que representa el ejército".[11] En consecuencia, si razones extremadamente poderosas hacen necesaria en un momento la intervención militar, tal paso debe tener un contenido político ligado a una exigencia nacional, a la construcción de una obra de esa trascendencia, y no limitarse a desplazar del poder a quien lo ejerce deficientemente.

Las Fuerzas Armadas chilenas siempre han sido reacias a mezclarse en la actividad política. Para ellas la prescindencia respecto a los asuntos partidistas es una condición de su eficiencia profesional. A diferencia de lo que ocurre en otros lugares de Latinoamérica, donde los militares constituyen un grupo con significación política inmediata y constante, en Chile, desde los tiempos de Portales, han asumido un rol potencial, institucionalmente comprometido con el destino de la patria, no con facción alguna. Quizás en ello radica el prestigio que tiene entre la ciudadanía. El problema que enfrentaban durante la Unidad Popular consistía en que el gobierno, legítimo en su origen, derivaba hacia la ilegitimidad de ejercicio en razón de la ideología que animaba y justificaba sus actos. El deber militar señalaba la obligación de sostener al gobierno legítimamente constituido, pero, si Allende insistía en sobrepasar el orden

---

10 AUGUSTO PINOCHET UGARTE, *El día decisivo*, op. cit., Santiago, 1979, pp. 71 y 72.

11 HERMANN RAUSCHING, *La revolución del nihilismo*, Editorial Losada, Buenos Aires, 1940, p. 22.

institucional, poniendo en peligro el destino de la nación, ¿qué actitud habrían de asumir? Un camino era restablecer el orden y volver de inmediato a los cuarteles, como se suele decir. El otro, hacerse cargo de la situación y crear una obra tan renovadora que, habiendo cambiado las mentalidades, hiciera innecesaria otra intervención. Ambas alternativas, sin embargo, presuponían que en algún momento, quizás próximo, sería necesario tomar el control del país.

Mediando el segundo año de la Unidad Popular, la eventualidad de una intervención era ya una posibilidad cierta, sobre la cual el Estado Mayor General debía trabajar en serio, con prisa y prácticamente desde la nada, pues toda la planificación existente estaba orientada a la defensa frente a una agresión extranjera.

Comprendiendo que por la razón indicada el Ejército no estaba preparado para empeñarse en una acción decisiva, orientada ahora a batir un adversario interno, el general Pinochet dispuso el 23 de junio de 1972 la reactualización de algunos conceptos de la Planificación de Seguridad Interior, instrumento que sí tiene carácter ordinario y permanente, de manera que su énfasis pasara de la concepción defensiva que lo caracterizaba —y quizás en este caso sería más exacto decir estática— a una idea general ofensiva, dinámica y flexible. Sin conocer su finalidad, los órganos pertinentes trabajaron esa intención del mando, para lo cual se buscó y procesó un nuevo tipo de información. Así, paulatinamente, los rutinarios "juegos de guerra" fueron ajustando sus premisas y posibilidades a la situación real que vivía el país.

Las cosas siguieron un curso de sobra conocido. Las instituciones armadas participaron lealmente en tareas de gobierno cuando fueron requeridas al efecto, pero allí se convencieron que en realidad Allende no quería o ya no podía rectificar el rumbo de los acontecimientos. La desintegración de las reglas de convivencia social adquirió un ritmo vertiginoso y la necesidad de alzar un dique que evitara una guerra civil se hizo imperiosa. El 27 de agosto de 1973, la Dirección de Operaciones del Ejército formalizó un extenso análisis de la situación nacional. Una de sus conclusiones fue que "la integridad y acción conjunta de las Fuerzas Armadas y Carabineros son determinantes para el futuro de la Nación en este momento de crisis económica, institucional y de cohesión interna del país. Sólo una acción firme, unitaria y coordinada de las tres ramas de las Fuerzas Armadas y de Carabineros puede impedir un enfrentamiento".[12]

Con ese antecedente, la planificación iniciada un año atrás alcanzaba su fase final. Había llegado la hora de la acción, tal como lo exigía la ciudadanía. Sin embargo, a pesar de estar convencidos de lo inevitable que era pasar a la ejecución de lo planificado, para los militares no era fácil cruzar el Rubicón.

En efecto, el Alto Mando de cada una de las instituciones de la Defensa Nacional se encontraba en una situación muy delicada y difícil de resolver. Durante años, fieles a la doctrina que les llevaba a considerarse ajenos a cualquier posición partidista, habían realizado todos los esfuerzos posibles para dar estabilidad a los gobiernos de la época. Sin embargo, el resultado era desalentador. Ni el gobierno de Frei ni el de

12 El informe de la Dirección de Operaciones está citado extensamente en AUGUSTO PINOCHET UGARTE, op. cit., pp. 115 y 116.

Allende habían comprendido cabalmente el rol que a las Fuerzas Armadas compete en el Estado contemporáneo, ni habían llevado a cabo una política coherente con los imperativos de la seguridad nacional. Este comportamiento, sea atribuible a mero desconocimiento o a frío cálculo político, había enajenado toda simpatía del estamento militar hacia los experimentos revolucionarios ideológicos que se intentaba implantar en la sociedad. Así y todo, habían cumplido lealmente con sus obligaciones, incluso asumiendo tareas de suyo políticas, como hacerse cargo de un Ministerio. Respecto a la Unidad Popular, ciertamente estaban muy distantes de sus designios, pero habían sostenido a Allende en La Moneda desde el momento del paro nacional, en octubre de 1972. Al parecer, éste no comprendió que su gobierno concluiría en el momento mismo en que las instituciones armadas lo considerasen definitivamente inviable. La mañosa destitución del Comandante en Jefe de la Fuerza Aérea, general César Ruiz Danyou, les hizo ver que su patriótica actitud era estéril, pues se les estaba usando y comprometiendo en una empresa destinada al fracaso. Cuando se convencieron que Allende no estaba dispuesto a enmendar el rumbo, porque a pesar de las advertencias insistía imprudentemente en conducir a la nación al despeñadero, resolvieron intervenir.

Los mandos superiores sabían que el problema menor era privar a Allende del poder. De hecho, el presidente era ya apenas una sombra de sí mismo y no era él quien mandaba en el país sino los más exaltados cabecillas del socialismo. Lo verdaderamente difícil sería neutralizar de un modo inapelable a los grupos armados, integrados por chilenos y extranjeros, que oponiendo una fuerte resistencia podrían transformar el cambio de gobierno en un baño de sangre. Por tanto, la decisión político-militar debía ser conjunta, ofensiva y audaz, de modo que se lograra alcanzar el objetivo inmediato en el menor tiempo y con las mínimas bajas posibles. La sorpresa debía ser total y la acción aplastante, abortando en germen la reacción del adversario y asegurando en breve el control del país. Naturalmente, lograr con éxito esta operación compleja, pues tenía aspectos políticos, militares y administrativos que considerar, suponía una preparación cuya condición esencial era el secreto. Cualquier infidencia podía transformar lo que debía ser un conjunto de acciones precisas, trabadas entre sí como mecanismos de relojería, en una serie de hechos inconexos, provocando bajas inútiles y quizás hasta el fracaso.

Garantizar el secreto para asegurar la sorpresa era, entonces, el requisito más difícil de cumplir. Lo que estaba en juego era tan grave, que hacía imperativo ocuparse de ese aspecto del problema con el mismo celo que merecían las operaciones. Si se perdía el factor sorpresa, Allende estaría en inmejorables condiciones para reaccionar desarticulando a las Fuerzas Armadas —cuyos mandos superiores habrían sido purgados de inmediato— o utilizándolas en definitiva a su favor, como había ocurrido tras el "tancazo" del 29 de junio. El secreto se logró gracias a que la planificación se abordó como una eventualidad estrictamente profesional en el seno de los Estados Mayores, debidamente compartimentado en cada institución castrense.

De ahí que una característica fundamental del Pronunciamiento Militar de 1973 haya sido la de constituir un movimiento planificado y ejecutado exclusivamente por el brazo armado de la nación, sin participación de elementos políticos, obedeciendo monolíticamente a las órdenes de su jerarquía natural. En otras palabras, fue conduci-

do desde arriba, respetando la cadena de mandos y asignando misiones a los órganos subalternos, que contaron con la necesaria libertad para cumplirlas de acuerdo a una doctrina que es común, esto es, actuando según el principio de centralización en la dirección y de descentralización en la ejecución. Esta última —la ejecución descentralizada— se imponía al considerar la extensión y características del territorio.

Estos aprestos silenciosos, encaminados a definir los pasos concretos de una acción ofensiva y en gran escala, comenzaron en el Ejército como rutinarios "trabajos aplicados" el 20 de marzo de 1973. Se les enmascaró como parte del proceso de preparación que realizan los mandos medios y superiores para enfrentar emergencias, sean naturales o producto de crisis sociales internas o problemas externos, o combinaciones de estos casos. Con ocasión de algunas de las "situaciones" planteadas teóricamente, se ponían en ejecución, parcialmente al menos, los planes de emergencia sobre seguridad interior previamente elaborados, con cuya aplicación el territorio del país queda totalmente cubierto y entregado al control de las instituciones de la Defensa Nacional. Las fuerzas de Carabineros y de Investigaciones quedan entonces subordinadas a las autoridades militares designadas al efecto, así como los servicios públicos. Esta planificación fue siendo aplicada cada vez en forma más frecuente y completa, por orden del propio Allende, quien decretó el estado de emergencia sobre varias provincias al ir deteriorándose la normalidad de la vida nacional. En los trabajos aplicados o juegos de guerra, se plantea una situación, se aplican los planes y se les agregan los antecedentes ficticios que se quieren hacer gravitar en las resoluciones de los diferentes niveles del mando. Forzados por la situación del país, esos ejercicios se fueron intensificando en 1973. Su más decidido impulsor fue el Jefe del Estado Mayor General del Ejército, general Augusto Pinochet Ugarte, quien estuvo a cargo efectivo del Ejército durante ocho meses, en carácter de subrogante, antes de asumir como titular la Comandancia en Jefe el 23 de agosto de 1973. Desde esa posición había llegado a conocer cabalmente los antecedentes de la situación y comprendía que en caso de llegar a ser indispensable una acción militar el Ejército tendría que realizar el esfuerzo decisivo.

En esta preparación, anónima, metódica y paciente, cada rama de la Defensa Nacional trabajaba con absoluta independencia. La necesaria coordinación entre ellas se materializaba rutinariamente a través del Estado Mayor de la Defensa Nacional, cuya jefatura ejercía el vicealmirante Patricio Carvajal. La eventualidad de reemplazar a Allende no se formulaba abiertamente, sino en forma abstracta, porque el gobierno estaba muy alerta, contaba con sus propios órganos de información y debía suponer que en algún momento la paciencia militar se acabaría. Una desafortunada experiencia ocurrida el año 1971, que costó la carrera al prestigioso general Alfredo Canales, pesaba en el ánimo de los mandos, por lo que estos temas raramente se conversaban en el ámbito oficial que relaciona a las ramas de la Defensa. Sin embargo, no existía ambigüedad alguna. Dado que la doctrina de seguridad y defensa nacional es común a las instituciones armadas y sus principios y conceptos son permanentes, los trabajos elaborados al interior de cada una de ellas calzaron después sin mayor dificultad.

Como se acaba de decir, las previsiones encaminadas a enfrentar la fase militar de una crisis cuya resolución parecía inminente, fueron adoptadas por cada institución sin una coordinación expresa previa entre ellas. Pero, dada la gravedad de la situación

nacional, era inevitable que algunos oficiales impacientes intentaran forzar lo que les parecía una pasividad inexplicable de los mandos superiores. Fue necesario extremar la disciplina para prevenir un desborde, un alzamiento de los comandantes con mando de tropas o una acción de la oficialidad más joven, similar a la que había ocurrido en 1924. El episodio protagonizado el 29 de junio de 1973 por el Regimiento Blindado nº 2, el "tancazo", hizo patente lo difícil que se hacía contener a un Ejército ya harto de la caótica situación reinante en el país. Así, el Pronunciamiento Militar, en tanto movimiento estrictamente institucional, no admite ser considerado como un típico cuartelazo: el ascendiente del generalato lo evitó.

Las resoluciones que articularon lo que sería el despliegue y posterior acción de las fuerzas lograron mantenerse en secreto. Como se expondrá más adelante, la situación se había deteriorado en los últimos meses a un grado tal que la población percibía como inminente la ocurrencia de un hecho definitivo, una asonada comunista o una intervención militar. A pesar de la tensión, hasta las últimas 48 horas las inquietudes castrenses sólo se materializaron como aprestos de rutina, a lo que coadyuvó la renovación de los Comandantes en Jefe ocurrida, por diferentes causas, entre el 23 de agosto y el 8 de septiembre de 1973. Tanto los generales Pinochet y Leigh, como el almirante Merino, habían asumido el mando de sus instituciones con la clara convicción de que era preciso poner término de inmediato a una situación ya insoportable. En consecuencia, dada la brevedad de los plazos, no hubo tiempo para conversaciones formales entre las diferentes ramas de la Defensa Nacional. Quizás eso fue una suerte, pues, aunque útiles, difícilmente habrían pasado desapercibidas y habrían aumentado las posibilidades de alguna filtración sobre el contenido de los planes elaborados en cada Estado Mayor. El acuerdo de pasar a la acción el día 11 sólo se formalizó en la tarde del día sábado 7 de septiembre en la residencia oficial del Comandante en Jefe del Ejército, entre el general Pinochet, el general Leigh y el contralmirante Huidobro en representación de la Armada.

En el Ejército, los oficiales generales de la Guarnición de Santiago recién fueron informados de la decisión adoptada en el curso de la mañana del día 10 de septiembre. Después, en forma parcial, se comunicó lo propio a los Directores de Escuelas y Comandantes de Regimientos y otras Unidades Independientes. Parcial, porque lo que en rigor se ordenó fue el acuartelamiento en grado uno a contar de las 23 horas del día 10 y un máximo alistamiento de combate para el amanecer del día siguiente. En las primeras horas del día 11 se enviaron oficiales de enlace para las Unidades Operativas acantonadas en las provincias cercanas a Santiago. No hubo, pues, reuniones de coordinación entre las distintas fuerzas ni tampoco aviso a los dirigentes de los partidos políticos opuestos a la Unidad Popular. Esto no quiere decir que al interior de cada Arma e incluso entre ellas, al menos en las grandes guarniciones, no haya habido antes contactos de orden intelectual, académico y profesional para abordar los problemas sociales, económicos y de orden público que por entonces concitaban la atención de toda la ciudadanía. A través de esos contactos informales sin duda hubo un sincero intercambio de opiniones entre los uniformados, incluyendo a Carabineros, que permitió ratificar la existencia de una visión común y ampliamente extendida frente al momento que se vivía. Pero de esas conversaciones, que culminaban en la convicción

de la necesidad de un cambio radical de la situación nacional, no podía surgir el perfil de lo que sería el futuro gobierno.

Negar ahora que en muchos círculos, especialmente en algunas provincias, los oficiales estaban a un paso corto de la abierta deliberación, sería moverse a engaño. Sin perjuicio de las apreciaciones, planes y órdenes que elaboraban los Estados Mayores, existían preocupaciones que se expresaban al margen de las actividades propias del servicio. La situación ambiental era tan espesa que hasta el recluta más desprevenido tenía que sentir algo así como la tensión de un resorte comprimido al máximo. La desesperanza existente en la población civil no podía menos que obrar entre los soldados, marinos, aviadores y carabineros —que obviamente escuchan a los familiares y amigos de su entorno— como un llamado inequívoco y urgente a asumir una responsabilidad más allá de lo habitual, pero frente a la cual parecían lastimosamente impotentes. El personal de mayor grado sentía que muy pronto el problema reventaría y, de un modo u otro el destino de la comunidad nacional recaería sobre sus instituciones. Además, para colmo, la situación internacional vecinal mostraba rasgos inquietantes.

Por tales motivos, entre el personal uniformado, hubo por entonces muchas consultas espontáneas, efectuadas a los jefes directos en plano de confidencia. Ellos procuraban irradiar confianza a sus subalternos y a la vez transmitían las inquietudes que percibían a sus superiores. No podían hacer más. Negar estos hechos significaría afirmar que los oficiales y el personal del cuadro permanente eran impermeables al rumor de la opinión pública. Por el contrario, estaban muy sensibilizados por ella y cada día aumentaba el sentimiento de frustración e impaciencia, lo que podía llegar a quebrar la disciplina.

En el Ejército hubo un significativo repunte de la moral después del 23 de agosto, día en que asumió su mando el general Augusto Pinochet Ugarte. Conociendo la personalidad del nuevo Comandante en Jefe, el hecho fue interpretado en las filas como un claro refuerzo de la posición estrictamente profesional del órgano militar, alejando la sensación de estar siendo involucrados en los nada cristalinos pasos del gobierno. Un factor tonificante del espíritu militar fue la acción inmediata de contacto directo con las tropas emprendida por el nuevo responsable del Ejército. En cada visita a las Unidades su palabra de soldado, breve, directa y sencilla, contribuyó a cimentar la cohesión institucional, preparando el ánimo para los desafíos que se avecinaban.

En el lento arrastrarse de los días de inquietud y hasta amargura que siguieron a los hechos protagonizados por los blindados el 29 de junio, cuando el hermetismo de las instituciones militares parecía indicar que se desentendían de los apremios que la situación planteaba, ciertos altos oficiales —sin duda inspirados en patrióticas consideraciones— comenzaran a discutir al margen de la cadena oficial de mando. No pasaron más allá sólo porque se produjo la acción institucional y entonces ocuparon sin titubear sus puestos en los marcos normales y reglamentarios. Esas actividades, meramente informativas, tuvieron la virtud de acrecentar los nexos que precisaba la gran tarea que se aproximaba, aunque es lógico pensar que su eventual prolongación habría perjudicado la cohesión general.

Una vez puesto en claro que la planificación militar del Pronunciamiento fue una obra técnica llevada a cabo institucionalmente, cabe preguntarse, ¿hubo alguna plani-

ficación para enfrentar la tarea que vendría a continuación? La verdad es que fuera de algunos contactos informales con sectores del mundo académico y del ámbito empresarial que tuvo principalmente la Armada y que posteriormente fueron de enorme utilidad, no fue posible siquiera esbozarlos. A falta de planes concretos hubo que contentarse con las naturales relaciones sociales existentes, confiando en la preparación de los oficiales de Estado Mayor y Politécnicos para resolver llegado el momento. Difícil hubiera sido entrar en más detalles siquiera unas semanas antes del 11 de septiembre, porque entonces aún no estaba claro quiénes, cuándo y cómo iban a cumplir la primera tarea, esto es, deponer a Salvador Allende y proceder luego a desmontar la máquina totalitaria que bajo su alero se había establecido desde la misma administración del Estado, procurando hacerlo con el mínimo de bajas y daños —que algunos estimaban sería altísimo por la necesidad de someter los "cordones" organizados por el gobierno para hacer efectivo el "poder popular"— y sacar a la ciudadanía de la situación de emergencia apenas fuera posible.

Así, inevitablemente, quienes habían aceptado la responsabilidad de poner término al experimento marxista en Chile, tendrían que improvisar casi todo una vez que se lograra estabilizar la situación militar. Para las mentalidades acostumbradas a resolver los grandes asuntos de acuerdo a planes muy bien trazados, la coyuntura podía parecer desesperada. Pero los hombres de armas saben que en la capacidad de improvisar con eficacia —¡que es crear!— hay incluso mayor mérito que en limitarse a aplicar disposiciones ya previstas. No en vano están templados para enfrentar situaciones de crisis y para desenvolverse en un ambiente adverso. No se amilanaron, pues, ante dificultades que parecían insolubles y confiaron en sus propias capacidades, las mismas, por lo demás, que laten en el corazón de todo buen chileno.

Ambiente, sentido e impacto del Pronunciamiento Militar.

Habiéndose hundido el proyecto totalitario de la Unidad Popular, arrastrando en el remolino al sistema político que la había hecho posible, las Fuerzas Armadas y Carabineros ocuparon el vacío dejado con la misma naturalidad con que el mar vuelve a ocupar el lugar de un naufragio. Esa es la escueta verdad. Pero lo más notable es que de inmediato se pusieron a la tarea de crear otro régimen de convivencia, una nueva democracia, empeño que no podía consistir en reflotar, simplemente, lo que había desaparecido. Ese, y no otro, es el argumento que explica esencialmente la trayectoria del Gobierno Militar.

Ahora, en el plano de los hechos, a las 8.28 horas del día 11 de septiembre de 1973 la ciudadanía se enteró, por un bando militar difundido por cadena radial, que las Fuerzas Armadas y Carabineros, ante la gravísima crisis social y moral por la que atravesaba el país, la incapacidad del gobierno para controlar el caos, y el constante incremento de grupos paramilitares que llevaban al pueblo chileno a una inevitable guerra civil, ordenaban al Presidente de la República que procediera de inmediato a entregar su cargo. Añadían que estaban unidas para iniciar la histórica y responsable misión de luchar por la liberación de la patria, evitar que el país cayese bajo el yugo marxista y buscar la restauración del orden y la institucionalidad del país.

Al anochecer de ese mismo día, reunidos en la Escuela Militar, los Comandantes en Jefe de las tres Instituciones de la Defensa Nacional y el Director General de Carabineros se constituyeron solemnemente en Junta de Gobierno y asumieron formalmente el mando supremo de la nación, "con el patriótico compromiso de restaurar la chilenidad, la justicia y la institucionalidad quebrantadas, conscientes de que ésta es la única forma de ser fieles a las tradiciones nacionales, al legado de los Padres de la Patria y a la Historia de Chile, y de permitir que la evolución y el progreso del país se encaucen vigorosamente por los caminos que la dinámica de los tiempos actuales exigen a Chile en el concierto de la comunidad internacional de que forma parte", como reza el Acta de Constitución de la Junta de Gobierno. En el mismo documento se designó Presidente de la Junta al General de Ejército Augusto Pinochet Ugarte. Además se declaró que la Junta, en el ejercicio de su misión, garantizaría la plena eficacia de las atribuciones del Poder Judicial y el respeto a la Constitución y las leyes, en la medida en que la actual situación del país lo permitiese, para el mejor cumplimiento de sus postulados.[13]

El sentido del Pronunciamiento Militar está admirablemente condensado en unas palabras emitidas por quien era entonces la autoridad eclesiástica de mayor prestigio en el país, el Arzobispo de Valparaíso monseñor Emilio Tagle: "Las Fuerzas Armadas, guardianes de la seguridad y el honor de Chile, como lo atestiguan todas las gestas que han protagonizado en una historia que nos llena de admiración y orgullo, dieron el paso para salvarlo de caer para siempre en el abismo. Asumieron legítimamente el Gobierno, en una acción rápida y eficaz que evitó la catástrofe de la guerra civil. Merecieron por ello el reconocimiento de la Patria, que recogerá la historia."[14]

Mirado el mismo hecho con el prisma comunista, "lo que ocurrió el 11 de septiembre en mi país no fue tan solo un golpe de estado. No solo se derribó al Gobierno más democrático de cuantos hubo en Chile, sino que se llevó a efecto una operación militar a gran escala, propia de una guerra regular, contra un pueblo desarmado. Se trata, por tanto, de un crimen más cobarde que el cometido por las bandas hitlerianas durante la última guerra, que, con todo, enfrentaron la resistencia de ejércitos regulares, y más brutal y sanguinario que la propia guerra sucia con que se intentó aplastar al pueblo vietnamita. Más que un golpe, lo de Chile es, en sentido literal, un genocidio. Los criminales actuaron con pleno conocimiento de la decisión popular de enfrentar a los sediciosos, y esto los llevó a concebir un golpe de estado con características inéditas en América Latina. Se trataba de liquidar en 24 horas cualquier capacidad de resistencia y para lograr este propósito se organizó, bajo la dirección de expertos norteamericanos, un operativo que consistía en poner en tensión prácticamente toda la capacidad de fuego de las tres ramas de las Fuerzas Armadas".[15]

---

13 Decreto Ley nº 1, Acta de Constitución de la Junta de Gobierno, publicado en el Diario Oficial nº 28.653, de 18.9.73.

14 Carta pastoral del Arzobispo de Valparaíso, monseñor EMILIO TAGLE COVARRUBIAS, leída el 19.9.73 en todos los templos de esa diócesis.

15 CARLOS CERDA, *Chile: la traición de los generales*, Ediciones Suramérica, Bogotá, 1973, p. 11. El autor era miembro del Comité Central del Partido Comunista de Chile y ex-jefe de redacción del diario El Siglo. Representaba a su partido en el programa *A esta hora se improvisa*, que la estación de televisión de la Universidad Católica de Chile transmitía con sin par audiencia durante la época de la Unidad Popular.

El término de la Unidad Popular en Chile fue un rudo golpe a la estrategia mundial y continental del comunismo. La llamada "vía pacífica hacia el poder", concebida por el Kremlin como un procedimiento tranquilizador y respetable, encaminado a abrirle las puertas en países tan importantes como Italia y Francia, tuvo aquí un amplio ensayo. Su estrepitoso fracaso, repercutió de inmediato en el mundo entero. François Mitterrand, por ejemplo, que había alabado en Europa la transición hacia el socialismo que había visto con sus propios ojos en Chile, se apresuró a establecer que su desastroso resultado no debía afectar las posibilidades del socialismo en Francia. De pronto había descubierto que ambas naciones no son comparables. En caso de acceder al poder, dijo, "la izquierda francesa no se encontraría ante la situación económica y social que ha debido afrontar la Unidad Popular. Habría entre las dos experiencias la diferencia de naturaleza que hay entre un país subdesarrollado y un país industrial avanzado, entre una economía de penuria y una economía de abundancia, entre una sociedad cercana al estatuto colonial y una sociedad profundamente diversificada en sus componentes, entre una nación condenada al aislamiento desde que intentó escaparse del imperialismo norteamericano y una nación capaz de vivir por sí misma".[16]

Desdibujar la realidad chilena hasta el punto de confundirla con la sencilla imagen de un soñoliento país bananero, fácilmente asimilable por el europeo medio, quizás fuera una buena idea de Mitterrand para explicar a los suyos un fracaso tan rotundo. El único defecto de su visión era que no coincidía con la realidad. Mejor informado, Germán Arciniegas opinaría que "lo de Chile es sumamente complejo. Yo creo que Allende tuvo una culpa muy grande. No concibo un Presidente que tolere la visita de un amigo (Fidel Castro), que durante 26 días trate de sustituirlo en la organización del poder. (...) En Chile, la invasión de guerrilleros extranjeros para dirigir a Chile tenía que producir un choque brutal".[17]

En cuanto a su importancia, tal como lo señaló retrospectivamente El Mercurio, "los acontecimientos políticos de 1973 sobrepasan el movible campo periodístico para situarse en el firmamento de la historia. Más aún, la historia a que nos referimos en este caso es la de nuestro país, pero al mismo tiempo lo ocurrido el 11 de septiembre en Chile adquiere relieve mundial. Ese día marca una derrota soviética más grande que la obtenida por el Presidente Kennedy, cuando obligó a Kruschev a desmantelar de misiles la isla de Cuba. Es una derrota más grande porque es más profunda; porque en Chile la Unión Soviética había conquistado una base de penetración ideológica incomparable en Sudamérica y exibía un triunfo electoral del comunismo, haciendo la farsa de un marxismo-leninismo pluralista, constitucionalista y democrático".[18]

Desde el punto de vista geoestratégico, obviamente relevante, "cuando Allende es derrocado, con esto se termina el sueño soviético de potencia mundial en el Pacífico Sur y, al mismo tiempo, el sueño del socialismo internacional que reacciona con ira impotente".[19]

---

16 Declaración a Le Monde, reproducida por El Mercurio, 13.11.73, p. 3.

17 Entrevista a GERMAN ARCINIEGAS en Cosas nº 111, de 2.1.81.

18 El Mercurio, "El año político, fecha histórica", editorial de 30.12.73.

19 HANS VON HUYN, *Victoria sin guerra*, Editorial Andrés Bello, Santiago, 1987, p. 281.

En América Latina, por de pronto, el término del experimento socialista reforzó la cuarentena impuesta al régimen de Fidel Castro, pues quedó en evidencia su directa intervención en los asuntos internos de Chile, conducta que la opinión pública sumó al severo juicio que le merecían sus anteriores aventuras en otras partes del continente. La democracia cristiana venezolana, por ejemplo, que había anunciado su intención de reanudar relaciones con Cuba, perdió abrumadoramente las elecciones presidenciales ante un adversario tradicionalmente duro frente a Castro. Perú y Panamá dejaron de hablar en favor de Castro. En Uruguay, la incorporación de sus militares al gobierno del presidente Bordaberry significó el inicio de una política anticomunista. Brasil, donde el general Emilio Garrastazu Medici se aprestaba a traspasar el mando al también general Ernesto Geisel, fue el primer país que reconoció al Gobierno Militar chileno. El general Juan Domingo Perón, interrogado por un diario italiano respecto a lo acontecido en el país vecino, derramó algunas lágrimas sobre la difunta Unidad Popular; pero al preguntarle el periodista, concretamente, qué conducta seguiría en cuanto a las peticiones de asilo venidas de Chile, el presidente argentino respondió con franqueza: "A los exiliados chilenos que soliciten asilo se les otorgará, pero en Misiones, en medio de la selva. Soy socialista, pero no alocado".[20]

Al interior del régimen totalitario existente en Cuba, "la lección de lo ocurrido en Chile durante el gobierno de Allende fue muy amarga. Raúl Castro me dijo que el golpe militar había impresionado de tal modo a la cúpula en La Habana que se resolvió reforzar el programa de defensa civil y él y Fidel dejaron de viajar juntos o de aparecer en los mismos actos públicos".[21]

En suma, el 11 de septiembre cayó como una lápida sobre los intentos revolucionarios de la izquierda castrista, cuyo repliegue se reflejó en una disminución de la inquietud social, excepto en Argentina, y en una normalización de las relaciones con Estados Unidos. Una conferencia efectuada en Bogotá delineó las posiciones comunes de América Latina para un diálogo ulterior solicitado por el Secretario de Estado Henry Kissinger.

Pero, si bien es cierto que gracias a su acción rápida y eficaz las Fuerzas Armadas y Carabineros habían evitado que Chile descendiera al abismo totalitario, no lo es menos que para restaurar la patria era menester tener claridad sobre las causas mediatas que la habían llevado a tal grado de postración. Un observador perspicaz, Alvaro Alsogaray, ex Ministro de Economía argentino, advirtió muy pronto que "el drama chileno, por lo menos en esta última etapa, no comienza con Allende sino con Frei". Es de señalar que unos años antes había polemizado con Radomiro Tomic en Washigton, de manera que conocía de primera mano el sentir de un influyente sector de la democracia cristiana chilena. A su juicio, "Chile acaba de vivir la tragedia de una desesperada reacción contra un sistema que, en cualquier país que se aplique y cualesquiera sean las circunstancias, siempre lleva a los hombres que alguna vez han conocido la libertad a preguntarse si, bajo las condiciones de vida que dicho sistema impone, vale la pena vivir". Luego, tras pasar revista a lo que fue la Unidad Popular, advierte: "Todo eso

---

20 Qué Pasa nº 132, 2.11.73, p. 11.

21 MARKUS WOLF, op. cit., p. 350.

y mucho más soportaron los chilenos durante largo tiempo hasta que literalmente estallaron, prefiriendo los peligros de la liberación armada a la esclavitud socialista-comunista. La verdad de esta amarga experiencia, cuyo trágico contenido real pretende ocultar o falsear la propaganda comunista ayudada por los "idiotas útiles" en todo el mundo, no debe ser ignorada en los demás países. A nosotros nos toca muy de cerca". Pero, continúa, todo lo anterior se gestó durante el gobierno demócrata cristiano —y señala los hechos que demuestran lo que él llama *una postura híbrida*— que agregó "a su larga lista de desatinos, el tremendo error político de entregar el gobierno a una minoría marxista, cuando pudieron democrática y constitucionalmente haberlo evitado. Chile pasó así de la experiencia de un colectivismo de "tercera posición" a la de un colectivismo declarado".[22]

Su largo y bien fundado artículo fue contestado de inmediato por Andrés Saldívar Larraín: "Creo que el señor Alsogaray no tiene autoridad para tratar de descalificar uno de los procesos político, económico y social más interesantes y fructíferos de nuestro país", señaló. Y en su calidad de ex Ministro de Hacienda y de Economía del gobierno del ex Presidente Frei procuró rectificarle en dichas materias técnicas. En un sentido más amplio, defendió su gestión en los siguientes términos: "La "revolución en libertad", debe saber señor Alsogaray, no fue un slogan publicitario para vender un producto, sino que tenía un contenido que se tradujo en resultados positivos que hoy la opinión pública de Chile sabe valorar, más que en 1970, ya que puede comparar con otras experiencias de cambio intentadas por otros Gobiernos en Chile".[23]

Desgraciadamente, adquirir la experiencia que a fines de 1973 permitía comparar las dos grandes revoluciones ideológicas de la década anterior, había tenido el costo de arruinar al país. Pero en lo esencial tenía razón Alsogaray; lo recomendable era descartarlas a ambas por funestas. Aquella percepción, compartida por gran parte de la población, también era la del estamento militar de la nación.

La visión imperante entre las personas mejor informadas sobre lo que había ocurrido con la democracia más austral del mundo, independientemente del juicio negativo que inevitablemente recaía sobre algunas personas cuya responsabilidad era evidente, consideraba que los demagógicos excesos del partidismo ideológico habían sido el factor que más había contribuido al paulatino deterioro de su régimen político. No les faltaba razón; un sistema dirigido por partidos incapaces de ser leales con sus compromisos básicos respecto a la patria, durante años había delegado en minorías activas y apenas iluminadas por sus dogmas las cuestiones más importantes para la vida concreta de las personas. Esa concepción de la actividad política, tan del gusto de los cenáculos ideológicos, es simplemente inmoral. Como lo ha señalado el cardenal Lustinger, Obispo de París, "no es moralmente justo proponer a un pueblo una idea que políticamente no es más que una utopía, en detrimento de su identidad y de su vida presente".[24] El resultado de tales prácticas en Chile estaba a la vista. Y también su duro desenlace. Es que cuando los deseos grávidos de ideología distorsionan intolerable-

---

22 ALVARO C. ALSOGARAY, "Chile: Tragedia y enseñanza", en El Mercurio, 30.11.73.

23 ANDRÉS ZALDÍVAR, "Análisis de un extraño al proceso chileno", en El Mercurio, 2.12.73.

24 JEAN-MARIE LUSTINGER, *La elección de Dios*, Planeta, Barcelona, 1989, p. 390.

mente la realidad, haciendo imposible cualquier intento de encontrar soluciones válidas y permanentes para los auténticos problemas de la vida social, el estruendo de una salva de artillería suele restablecer dramáticamente el sentido común.

De las facultades con que se dotó la Junta de Gobierno para abordar su tarea, quizás la más polémica haya sido asumir la función legislativa, en tanto suponía la disolución del Parlamento. No hay que olvidar que se trataba del mismo cuerpo que en su histórico Acuerdo de 23 de agosto de 1973, sobre el grave quebrantamiento del orden constitucional y legal de la República, había señalado a las Fuerzas Armadas y Carabineros cuál era la senda estrecha del deber ante el desbordamiento del sistema democrático por parte del gobierno presidido por Salvador Allende. La medida fue justificada por "la necesidad de contar con la mayor expedición en el cumplimiento de los postulados que la Junta se ha propuesto"[25]. Sobre el particular, el senador Pedro Ibáñez expresó: "A causa de la irreparable decadencia de la cual yo fui testigo, debo admitir honestamente que el sistema parlamentario democrático no puede operar con eficiencia nuevamente, ni en el Chile de hoy ni en el futuro. Digo esto con profunda tristeza e incluso nostalgia. El Congreso de Chile era el tercero más antiguo del mundo".[26]

La clausura del Congreso Nacional, una institución que había funcionado prácticamente sin interrupción por más de 160 años, mereció una declaración conjunta de los presidentes del Senado y de la Cámara de Diputados, Eduardo Frei y Luis Pareto, respectivamente. En ella indicaban que "en el actual Congreso representábamos en el Senado y en la Cámara de Diputados a la mayoría que constituía la Oposición Democrática. Esas mayorías fueron elegidas por el pueblo después de una dura lucha contra el fraude, la violencia y la utilización de todos los recursos del Estado. Los parlamentarios que integraban esas mayorías, al igual que los del Congreso anterior, cumplieron en los últimos tres años con su deber para con Chile, con honor y entereza. Cuando muchos callaban o vacilaban, fueron ellos los que primero levantaron su voz en tan altas tribunas para defender la libertad; denunciaron una política económica que llevaba al país al derrumbe; la corrupción y los abusos en la administración del Estado, y fueron también los primeros en señalar el ingreso de armas y la presencia e intervención extranjeras en nuestra vida interna. No titubearon en acusar a Ministros de Estado y altos funcionarios que atropellaban las leyes, y con fecha 8 de julio de este año, como Presidentes del Senado y de la Cámara de Diputados, señalamos al país los gravísimos errores y daños que acarreaba la acción del Gobierno. Con fecha 22 de agosto recién pasado la Cámara de Diputados aprobó un acuerdo en que se denunciaban al país las repetidas transgresiones que se cometían contra la Constitución y la Ley. Dentro de esa misma línea se dió respaldo a la Corte Suprema en su actitud de defender la plena independencia de los Tribunales de Justicia y a la Contraloría General de la República. (...) Por todo eso se vieron expuestos a la calumnia, a los ataques más viles, a amenazas y aun a atentados contra sus personas. No se podrán olvidar ni borrar sus actos, sin los cuales el país no habría tomado conciencia del desastre que vivía, ni se habrían

---

25 Decreto Ley nº 27.
26 JAMES R. WHELAN, Desde las cenizas, op. cit., p. 525.

detenido proyectos que, convertidos en ley, hubieran cambiado la suerte de la República. (...) El caos a que Chile fue conducido por una gestión insensata llevó inevitablemente al quiebre de sus instituciones. Ninguna palabra ni actitud puede en esta hora cambiar los hechos. Lo único importante es pensar en Chile. Estamos ciertos de que en el futuro volverá la plena normalidad institucional. Así, por lo demás, se ha afirmado por quienes han asumido el Gobierno".[27]

La decisión militar, como se desprende de aquella declaración, dio por tierra con un gobierno cuyo norte era la destrucción de la democracia chilena. Los dirigentes de la oposición al gobierno de la Unidad Popular sabían que no era otro el fondo del problema político chileno. Unos meses antes, en declaración publicada el 11 de abril, el entonces presidente del Partido Demócracia Cristiano, senador Renán Fuentealba, señalaba que las medidas adoptadas por Allende tras desahuciar el gabinete cívico-militar, "significan una verdadera agresión, una guerra entablada por él contra la democracia chilena". Por su parte, el presidente del Partido Nacional, senador Sergio Onofre Jarpa, en declaración publicada el día 14 de ese mismo mes, manifestaba que "la inmoralidad política de la Unidad Popular ha quebrado en Chile el Estado de Derecho", proponiendo que el Congreso analice las consecuencias "de la permanente conducta arbitraria, ilegal y antidemocrática del Gobierno, y declare que éste ha perdido definitivamente su autoridad y la legitimidad de su mandato", cosa que efectivamente hizo la Cámara de Diputados el 22 de agosto, después que la Corte Suprema representó a Allende, "por enésima vez", el incumplimiento de las sentencias judiciales por parte de la autoridad administrativa.[28]

Pero, aunque los órganos civiles del Estado — los órganos independientes del poder ejecutivo, se entiende— hicieran lo posible para ordenar el caos, la solución que las circunstancias requerían no estaba ya en su esfera de acción. Así lo reconoció Eduardo Frei, al conversar en su calidad de presidente del Senado con la directiva de la Sociedad de Fomento Fabril. Para comprender la gravedad del momento por el que atravesaba el país, vale la pena transcribir la minuta de aquella reunión. Dice así: "Hoy viernes 6 de julio de 1973, día frío de invierno, al anochecer, la directiva de la Sociedad de Fomento Fabril, concurrió a entrevistarse con el presidente del Senado, don Eduardo Frei Montalva, quien había accedido a recibirla en las dependencias de la Cámara Alta, a las 18.30 horas. Integraban el grupo Raúl Sahli Watterman, en su calidad de presidente subrogante, ya que el titular, Orlando Sáenz Rojas, se encontraba en el extranjero; Eugenio Ipinza Poblete, segundo vicepresidente; Sergio López Vásquez, tesorero; Fernando Agüero Garcés, gerente general, y Rafael Rivera Sanhueza, asesor jurídico.

Frei se demoró en recibirnos. Hubo que esperarlo en el salón de la presidencia alrededor de 45 minutos. Al ingresar, se excusó, expresando que había sostenido una reunión de emergencia con los senadores de la oposición ante la grave situación que

27 Citado de Ercilla nº 1992, 3.10.73, pp. 9 y 10.

28 El texto de los oficios intercambiados entre la Corte Suprema y el presidente Allende, en Revista de Derecho, Jurisprudencia y Ciencias Sociales, Tomo LXX, N°s 7-8, Septiembre-Octubre 1973, dedicado íntegramente a transcribir los antecedentes histórico-jurídicos del cambio de gobierno en Chile.

aquejaba al país. Los representantes de Fomento Fabril le manifestaron su inquietud por el giro que habían tomado los acontecimientos a raíz del "tanquetazo", que había originado una toma masiva de industrias. Se le dijo a Frei que el país estaba desintegrándose y que si no se adoptaban urgentes medidas rectificatorias fatalmente se caería en una cruenta dictadura marxista, a la cubana.

Frei oyó en silencio, cabizbajo. Se le veía abrumado. Se paró de su sillón, abrió una caja de plata y ofreció cigarros Partagas a los asistentes. Luego se sentó arrellanándose. En forma pausada y solemne dijo que agradecía la visita, pero que estaba convencido de que nada se sacaba con acudir a los parlamentarios y a las directivas políticas contrarias a la Unidad Popular, ya que la situación era tan crítica que los había sobrepasado. Claramente añadió, casi textualmente: "Nada puedo hacer yo, ni el Congreso ni ningún civil. Desgraciadamente, este problema sólo se arregla con fusiles", de manera que en vez de ir al Congreso debíamos ir a los regimientos. "Les aconsejo plantear crudamente sus aprensiones, las que comparto plenamente, a los comandantes en Jefe de las Fuerzas Armadas", ojalá hoy mismo.

Acto seguido contó que un alto oficial de Ejército le había confidenciado que tanto él como su familia corrían serio peligro en el barrio alto, al cual le había respondido que él y su familia eran 12 personas y que en el barrio alto vivían decenas de miles de personas, razón por la cual su situación era en el fondo irrelevante, agregándole que él, como senador, había sido elegido por el pueblo para legislar, deber que estaba cumpliendo. "Ustedes, en cambio, tienen las bayonetas y deberían saber lo que tienen que hacer para salvar al país".

Nos despedimos, sorprendidos por lo que oyéramos de labios de Frei. Nos llamó la atención su claridad y su decisión, ajenas a su natural dubitativo y cauteloso".[29]

Para comprender el clima político del momento en que Frei se reunió con aquellos dirigentes empresariales, baste recordar que cuatro días después, el 10 de julio, el diputado socialista Mario Palestro vociferaba en la Cámara: "Nosotros no tenemos ningún inconveniente en reconocer que el pueblo se está organizando, porque tiene la obligación de organizarse y defenderse ante la ofensiva del fascismo. ¡A nosotros no se nos van a caer los pantalones para enfrentar la provocación y la guerra civil! Vendrá Jakarta en la medida en que nosotros aceptemos que venga Jakarta". Aunque desquiciado, al menos era sincero.

A lo largo de esos días la comunidad nacional experimentó la prepotencia de las fuerzas que apoyaban a Allende, las que apelaban a la violencia para subyugar a sus adversarios, especialmente en el campo, en las industrias y en las universidades. Asimismo, sufrió la creciente escasez de los artículos de consumo más esenciales y la injusticia del mercado negro, una experiencia denigrante cuyas causas radicaban en la incompetencia de los interventores y altos funcionarios del régimen, pero que era aprovechada políticamente mediante las tarjetas de racionamiento administradas por las JAP. Además, vivió la tentativa de imponer la Escuela Nacional Unificada, iniciativa gubernamental encaminada a una rígida y centralizada estructura educacional, apta

29 El Mercurio, 4.6.95, p. D 4.

para la concientización marxista, valientemente resistida por los padres de familia, por la mayoría de los profesores, las organizaciones estudiantiles, la Iglesia Católica y la opinión pública en general, incluyendo el rechazo expreso de las Fuerzas Armadas al ser consultadas por el ministro del ramo. Al mismo tiempo, en cumplimiento de sus planes, la CUT ocupó todas las industrias de alguna importancia y empezó su socialización centralizada bajo la batuta de CORFO, empuñada por Pedro Vuskovic. Esto último no era extraño, pues, completamente desnaturalizada de los fines para los que había sido creada, CORFO había llegado a ser un hogar del activismo político desde hacía ya bastante tiempo. Con ese propósito, entre 1964 y 1970 incrementó su personal en un 78% y al 30 de septiembre de 1970 contaba con 1.781 funcionarios. Tres años más tarde eran 4.385. En 36 meses hubo pues un incremento del 146% y muchos de los nuevos "funcionarios" eran extranjeros cuya especialidad no era precisamente el fomento de la producción.[30]

Simultáneamente, después de una prolongada resistencia del gobierno, las Fuerzas Armadas comenzaron a practicar allanamientos y a descubrir depósitos de armas en manos de grupos partidarios de la Unidad Popular. El 7 de agosto, la Armada informó que había descubierto en la escuadra un movimiento subversivo apoyado por elementos ajenos a la institución. "Estos hechos —decía el comunicado oficial— son consecuencia evidente de la intensa campaña de propaganda perniciosa que han estado desarrollando grupos extremistas mediante continuos llamados a la desobediencia". En el complot aparecían comprometidos un senador socialista, Carlos Altamirano, un diputado mapucista, Oscar Guillermo Garretón y el líder mirista Miguel Enríquez. Esos nombres, por lo demás, representan con certeza a las fuerzas que hicieron de la violencia un instrumento político cotidiano, factor que contribuyó como ningún otro a desintegrar el sistema de convivencia democrático y a forzar, consecuentemente, la intervención militar. Tan grande era la importancia que el comunismo internacional atribuía a Altamirano y sus inmediatos colaboradores que tras el 11 de septiembre, desde el extranjero, se montó una compleja misión de rescate para sacarlos del territorio nacional y llevarlos a su hogar ideológico. De esa tarea se encargó el servicio de inteligencia exterior de Alemania Oriental. Su jefe, el legendario Markus Wolf, reconoce en su autobiografía que "desde la Argentina, improvisamos una notable operación. Los prisioneros fueron retirados del país en coches preparados como los que se utilizaban en la República Democrática Alemana para las fugas a través del Muro de Berlín. Cuando de pronto los controles fueron reforzados y esta técnica pareció demasiado peligrosa, enviamos buques de carga a Valparaíso e introdujimos a bordo a los prisioneros en sacos de arpillera que contenían fruta y pescado envasado. Fueron necesarios casi dos meses para retirar a Altamirano de Chile; pasó a Argentina, después a Cuba y más tarde a Berlín Oriental".[31]

El 28 de agosto se hizo efectiva la huelga general convocada por los gremios y colegios profesionales para solidarizar con los transportistas, en paro desde el 25 de julio, contra los cuales el gobierno había desatado una represión injusta y violenta. El

30 *Qué Pasa* nº 132, 2.11.73, p. 8.

31 MARKUS WOLF, op. cit., p. 350.

9 de septiembre, en el Estadio Chile, el senador Carlos Altamirano arrojó lejos la careta y llamó públicamente a la insurrección que, mediante un autogolpe revolucionario, entregaría a los leninistas el poder total. Su gesto, irremediable y definitivo, fue el detonante que precipitó la acción militar. Así las cosas, el 10 de septiembre el país estaba prácticamente paralizado, aguardando el resultado del desafío que la facción más radicalizada de la izquierda chilena lanzaba al grueso de la comunidad nacional. ¿Podían aceptar las Fuerzas Armadas que el pueblo de cuya seguridad, libertad e independencia son guardianes fuera sojuzgado por los violentistas?

Resumiendo el ambiente político en el que se desencadenó el Pronunciamiento Militar, y apuntando con perspicacia a lo que vendría, El Mercurio afirmó: "Resulta imposible rememorar en breves líneas cuánto sufrimiento, cuánta angustia, cuanto esfuerzo y cuántas víctimas han significado para la democracia chilena su caída en el marxismo. Pero será inolvidable la acción de las mujeres, de los jóvenes, de los gremios, de los parlamentarios, de los jueces, de los periodistas y, sobre todo, de las Fuerzas Armadas y Carabineros, destinada a impedir que Chile se convirtiera en una segunda Cuba. Pero el marxismo no cesará en la guerra que le ha declarado a nuestro país: todavía moviliza efectivos armados; todavía arrecia la campaña publicitaria exterior, y, clandestinamente, interior, y todavía actúan aquellas formas sutiles y pérfidas del marxismo encubierto de humanismos y de seudocristianismos, de falso espíritu de paz, de solidaridad mentirosa, porque encubre la lucha de clases. El año 1973 significa la derrota del comunismo visible en Chile. El año 1974 deberá generar las condiciones para que el comunismo invisible no tome jamás su desquite contra nuestro pueblo".[32]

Lo que el decano de la prensa chilena preveía en aquel artículo era indesmentible desde las filas comunistas. La declaración oficial del Partido Comunista de Chile, fechada en Santiago el 11 de octubre de 1973, sostenía: "Se ha instalado en el país una dictadura fascista con la secuela de crímenes y abusos que caracteriza a estos regímenes. El plan del golpe, su línea de ejecución y sus métodos bestiales son de origen extranjero. Nació en las oficinas de la Agencia Central de Inteligencia, en directa conexión con la International Telegraph and Telefhone y la Kennecott. Para llevar a cabo este plan se constituyó un grupo especial en el Pentágono y la Casa Blanca. La Junta fascista no representa ningún espíritu nacional o patriótico. Su esencia es antipatriótica, atenta contra los intereses de Chile como nación independiente. Trabaja como un apéndice fascista al servicio del imperialismo y de la reacción interna". Debe haber sido una proeza redactar esa diatriba con tantas mentiras en tan pocos renglones.

No contentos con recrear sus esperpentos favoritos, los comunistas, preocupados esta vez de la suerte corrida por el ordenamiento jurídico burgués, señalaban de inmediato que quizás lo más alarmante es que "el golpe militar ha arrasado con la institucionalidad, dejando solo en pie el vetusto y obsecuente Poder Judicial y el monaguillo que oficia de Contralor. Ha terminado con el Estado de derecho. Chile ha entrado a convertirse en un Estado policial, donde no rige la Constitución ni la ley, sino los

32 El Mercurio, "Sin retroceso", editorial de 30.12.73.

bandos militares de tiempos de guerra. Se ha derramado brutalmente la sangre del pueblo; no hay prácticamente una sola familia de él que no esté angustiada por la suerte de uno de los suyos". Tras el diagnóstico, la conclusión fluye con naturalidad: "Después de lo ocurrido, el pueblo —representado por su vanguardia revolucionaria, los propios declarantes, se entiende— tiene derecho a plantearse también como objetivo la creación de fuerzas armadas y policiales de nuevo tipo, o, al menos, eliminar de los institutos militares, carabineros e investigaciones, a los elementos fascistas, a fin de asegurarle a Chile que nunca más se repetirá lo que acaba de ocurrir".

Pero eso no bastaba; hay también una ridícula profecía: "El Partido Comunista es expresión política de la clase obrera. El marxismo es la ideología científica de esta clase. En consecuencia, el Partido Comunista no podrá jamás ser destruido, existirá siempre, mientras exista la lucha de clases en cualquiera de sus formas. Y el marxismo, como ideología científica, como filosofía del conocimiento, como doctrina llamada a interpretar el mundo y a transformarlo incesantemente, subsistirá por los siglos de los siglos".

Por último, luego de abogar por la libertad de Luis Corvalán, "un revolucionario a toda prueba, un patriota combatiente que ha enfrentado muchas veces a lo largo de su vida de luchador, el rigor de la tortura y la represión", ponían el acento en la solidaridad internacional, en el apoyo de todos los demócratas que pudieran sostenerlos, pues de ellos dependía su supervivencia política: "Todos los pueblos del mundo condenan los crímenes del fascismo en Chile. La Humanidad exige que se detenga el baño de sangre y la persecución. Esta inmensa solidaridad mundial, que pocas veces en la historia alcanzó tanta amplitud, nos alienta en el combate, porque sabemos que el pueblo de Chile no está solo".[33]

Del tenor de la declaración de los comunistas chilenos podría desprenderse que el término del experimento marxista en Chile fue algo súbito, una suerte de cataclismo de la naturaleza, pero no hay tal. La caída del gobierno de la Unidad Popular no fue realmente una sorpresa para nadie. Se ignoraba, naturalmente, el día preciso en que ocurriría; pero sin duda era un hecho inminente. Durante muchos años, el fino humor de Lukas sintetizó admirablemente el tema del día en la página editorial de El Mercurio. Su incisivo dibujo era un barómetro de la contingencia nacional. El 10 de septiembre ya no había espacio para risas. Ese día publicó una composición espartana : una mesa y sobre ella cuatro gorras y cuatro espadas.

La operación militar que pondría fin al desorden existente estaba, pues, en el aire. Con temor, inquietud o esperanza, se la presentía. Era evidente que en los últimos meses Allende había perdido el respeto del estamento militar, y cualquiera sabe que no es otro el requisito mínimo para la sobrevivencia de cualquier gobierno: "No hay poder civil sin fuerza que lo sostenga. La supremacía del poder civil es frase vana cuando no se apoya en la fuerza militar".[34] Como lo ha señalado Francisco Javier González en su libro sobre la democracia cristiana, en virtud al decisivo Acuerdo emitido en agosto de 1973 por la Cámara de Diputados, "las Fuerzas Armadas, porque en

33 El texto de la declaración en Carlos Cerda, op. cit., pp. 67-81.

34 ROMANONES, CONDE DE, *Breviario de política experimental*, Espasa-Calpe, Madrid, 1944, p. 68.

definitiva a ellas estaba dirigido, estaban conminadas a poner inmediatamente término al caos que se vivía. Con este respaldo se decidieron a intervenir para derrocar a un gobierno que los propios democratacristianos, o al menos sus diputados, habían declarado inconstitucional. Los mandos militares habían perdido hacía tiempo las esperanzas en la habilidad del gobierno para manejar la paralizante crisis económica y para negociar una solución para las huelgas que habían retenido vitales cargamentos de cobre y levantado el espectro del hambre cuando los abastecimientos de granos quedaban en los muelles. Se habían puesto profundamente desconfiados de los objetivos finales de los marxistas. Lo que es aún más importante: se encontraban bajo una tremenda presión civil para actuar".[35]

Nadie ignoraba, tampoco, que los comunistas y socialistas preparaban febrilmente sus brigadas para el inminente choque. Régis Debray, que visitó a Allende por última vez en agosto de 1973, sintetizó el ambiente para la revista Le Nouvel Observateur en la siguiente forma: "Todos sabíamos que era un asunto táctico ganar tiempo, organizar, armar y coordinar las formaciones militares de los partidos que componían la Unidad Popular y su gobierno. Era una carrera contra el tiempo".[36] Pero la decisión sobre el momento en que se desencadenaría en Chile el giro más trascendente de su historia en este siglo, dependía exclusivamente del alto mando castrense.

Tan evidente era la próxima solución militar de la crisis nacional, que hasta hubo quien tuvo tiempo para escribir un libro premonitorio. En efecto, el primer título publicado después del 11 de septiembre fue Operación Primavera, de Alejandro Magnet, entregado a la imprenta por Editorial del Pacífico el 31 de agosto. Magnet, un hombre culto e intuitivo, cercano a Eduardo Frei desde su juventud y autor de una temprana semblanza del futuro presidente (1951) había sido embajador suyo ante la Organización de Estados Americanos y sería más tarde embajador en Perú, durante el gobierno de Patricio Aylwin. Admirado por la extraordinaria sincronización entre su último libro y los hechos recientes, un periodista le hizo ver que era como para pensar que algo sabía... Magnet rió, contestando de inmediato: "No sabía nada. Por un lado todos estábamos convencidos de que esto no podía durar, pero muy pocos conocían lo que iba realmente a pasar. Escribí Operación Primavera como una especie de transacción entre el ensayo y la novela. Como tantos chilenos, estaba desesperado y furioso con el Gobierno de Allende, y me pareció que una novela podía ser mejor instrumento que un ensayo para que los chilenos tomaran conciencia de lo que era ese Gobierno".[37]

Otro juicio certero sobre lo que verdaderamente había sido ese gobierno fue pronunciado por Antonio Romera, notable caricaturista y crítico de arte. Tiene singular interés porque se trata de un refugiado español avecindado en Chile por décadas, pero tan anti franquista que tras la Guerra Civil juró no volver a pisar su suelo natal mientras el Caudillo estuviera vivo. Y cumplió; a pesar de haber sido invitado oficialmente en varias oportunidades, sólo regresó una vez, por siete horas y sin salir del aeropuerto, para ver a su anciana madre. Habría sido natural, entonces, que tuviera al

35 FRANCISCO JAVIER GONZÁLEZ ERRÁZURIZ, op. cit., p. 217.
36 ROBERT MOSS, op. cit., p. 18.
37 Qué Pasa nº 132, 2.11.73, p. 61.

menos simpatía por Allende y los suyos. Sin embargo, habiéndosele preguntado qué opinión le merecía, como español y republicano, el gobierno de la Unidad Popular, contestó con arresto ibérico: "Eso no era un gobierno, si usted me perdona; era una sarta de ladrones y oportunistas que se aprovecharon del poder".[38]

En la misma ocasión se le pregunto, ¿qué relación ve usted entre la situación de España antes de la guerra y aquella existente en Chile hace algunos meses, cuando había quienes hablaban con naturalidad de un posible enfrentamiento entre chilenos? Respuesta: "Ninguna relación. Piense usted que en España se sublevó el Ejército sólo porque se trataron de hacer algunas reformas que un sector consideraba negativas, El aguante de los chilenos es inimaginable. España se habría levantado hace mucho rato si hubiese pasado lo que se vivió últimamente acá en Chile. Voy más lejos: si en España hubiese estallado la guerra estando el país en condiciones semejantes a las de Chile hace poco, yo lo habría justificado. Ocurre que el pueblo chileno es a mi juicio de los más inteligentes políticamente hablando". Son palabras que no conviene olvidar. El mismo Romera acotó en esa oportunidad que se debe decir la verdad para que lo malo deje de serlo.

Pues bien, a pesar de ser algo inminente, la acción militar no pudo menos que conmover a la ciudadanía. La mayoría de la población la percibió como una liberación; gracias a la eficiente operación militar, unos años de pesadilla quedaban atrás. Como símbolo rotundo y elocuente, al mediar la tarde del 11 de septiembre el país lucía embanderado como en sus días de fiesta y gloria. Sin embargo, ello no fue transmitido así a la opinión pública mundial. Como advierte Whelan, "tal vez la característica más sorprendente de los obituarios sobre la "muerte de la democracia" en Chile fue el hecho de que pocos se molestaron en considerar la forma en que estaban reaccionando los chilenos (los que estaban en Chile). Así, mientras gran parte del resto del mundo se retorcía las manos consternado en los días que siguieron al golpe, el estado de ánimo que predominaba en los chilenos era de júbilo".[39]

Este sería el primer desencuentro, y lamentablemente no el último, entre la realidad de lo que vivía el país y la forma en que era reflejada hacia el exterior. Como señaló tempranamente Arturo Fontaine, en los últimos años habíamos sido uno de los centros de la curiosidad periodística mundial, y por tanto objeto del asedio de los corresponsales extranjeros. Sin embargo, "generalmente esos muchachos en tenida de combate periodístico-deportiva y armados de grabadoras y aparatos fotográficos han pasado por Chile como golondrinas. Vienen al calor del acontecimiento noticioso espectacular y toman luego el primer avión, volviéndose con los mismos prejuicios con que llegaron. Pocos periodistas y escritores han sido fieles al país, es decir, se han preocupado de atender con humanidad a sus inquietudes y ansiedades". Casi todos, añade Fontaine, "se dejaron tentar por la falsa imagen de Allende y su régimen, e inventaron un político democrático reformista y un socialismo democrático en marcha, en vez de comprobar la verdad". Por eso —por prejuicio y por

---

38 Qué Pasa nº 134, 16.11.73, p. 36.
39 JAMES R. WHELAN, op. cit., p. 526.

ignorancia— no comprendieron que "la de Allende fue una etapa final, un tramo límite que una vez recorrido dejó sin secuencia el régimen democrático vigente al ser elegido el propio Allende".[40]

Miradas las cosas con calma y evitando juzgar intenciones, se puede afirmar que la leyenda negra sobre el Pronunciamiento y el Gobierno Militar tuvo por caldo de cultivo el desconocimiento que la opinión pública mundial tenía sobre lo que verdaderamente había ocurrido aquí durante la última década. Salvo quizás por sus periódicas catástrofes naturales, Chile nunca había merecido la atención de la prensa internacional. Pero, en la lógica de la Guerra Fría esa situación cambió dramáticamente cuando en 1964 se hizo patente la posibilidad de su ingreso a la órbita socialista. Y no por la presión del Ejército Rojo, como había sido habitual en otras latitudes, sino, sorprendentemente, por la vía de las urnas electorales. La imagen externa de las dos revoluciones ideológicas que sufrió Chile, la de Frei y la de Allende, que unían su destino a poderosas formaciones políticas internacionales, fue cuidadosamente montada desde el punto de vista publicitario, y ambas concitaron la benevolente simpatía de muchos círculos que, por cierto, no habrían deseado a ningún precio algo similar para sus propias naciones. Refiriéndose a lo ocurrido en este aspecto durante la Unidad Popular, Eduardo Frei tuvo razón al sostener que "la gente no se imagina, en Europa, que este país está destruido. No saben lo que ha pasado. Los medios informativos, o callaron lo que estaba ocurriendo desde 1970, en que Salvador Allende, rompiendo todas sus promesas, y alejándose de la legalidad, inicia una obra de destrucción sistemática de la nación, o dieron noticias falsas al mundo, porque eran, acaso sin saberlo, cómplices de esta enorme falsedad: que se estaba haciendo un raro experimento político, consistente en la implantación del marxismo por métodos legales, constitucionales, civilizados. Y eso no ha sido verdad ni es verdad. Y el mundo entero ha contribuido a la destrucción de este país, que hoy no tiene más salida salvadora que la gobernación de los militares".[41]

Esa era parte de la verdad. Correspondía con exactitud al período de la Unidad Popular, pero omitía lo anterior, el precedente inmediato, la época en que se había instalado el laboratorio e iniciado el experimento revolucionario cuyas consecuencias ahora se lamentaban. La verdad completa era que la opinión pública mundial sencillamente no estaba en condiciones de asimilar la magnitud de la catástrofe que Frei y Allende habían provocado en Chile. Por su propio bien, los observadores extranjeros debían haber estado más atentos. Después de todo, como advertía Moss en 1973, "el proceso por el cual fue demolida la celebrada "mentalidad democrática" de los chilenos contiene sombrías enseñanzas para Europa". A pesar de ello, añadía el editorialista de la revista británica The Economist, "es ocioso esperar cualquier consenso en las enseñanzas que se extrajeron de Chile. Como lo indican las violentas reacciones mundiales ante las noticias de la caída de Allende, el tema se ha convertido en algo tan

---

40 ROBERT MOSS, op. cit., pp. 9, 10 y 11 del prólogo, escrito por Arturo Fontaine Aldunate.

41 Párrafo inicial de la entrevista concedida por Eduardo Frei Montalva al corresponsal del diario español ABC, Luis Calvo, publicada el 10 de octubre de 1973. El texto completo en FRANCISCO JAVIER GONZALEZ ERRAZURIZ, op. cit., pp. 225-232.

emotivo como el debate sobre la Guerra Civil Española, o el caso de Vietnam o la situación del Medio Oriente europeo".[42]

Como es de imaginar, para los vencidos el momento fue dramático. La masa de los partidarios de la Unidad Popular —abandonada por sus dirigentes, hasta ayer tan aguerridos y ahora escondidos bajo pabellón extranjero para eludir sus responsabilidades— se resignó sin más a la derrota. Sin duda la inmensa mayoría de quienes votaban por la Unidad Popular no podrían ser considerados propiamente marxistas. Se trataba, más bien, de una muchedumbre enajenada por el demagógico discurso revolucionario que habían escuchado a lo largo de muchos años. Y también hay que decirlo, de personas que en verdad no tenían nada que perder y, tal vez, mucho que ganar si el socialismo finalmente se imponía. Pero ellos también intuían que la caótica situación que sus dirigentes habían provocado era insostenible por más tiempo. Imaginar lo contrario sería ofender a un pueblo cuyo grado de sensatez es notable. No obstante, parece que Allende supuso que la capacidad de aguante de los chilenos era infinita. Como revolucionario marxista-leninista, y se ufanaba de serlo, debía saber desde el primer día que su gobierno tensaría la vida nacional hasta un grado indescriptible. Sin embargo aceptó el reto, confiando en que lograría imponerse y su mandato, como el de su admirado Fidel, se prolongaría indefinidamente. Su propia viuda confesó que "Salvador estaba optimista al principio. Creyó que no sólo iba a gobernar seis años, a pesar de que en Chile no hay reelección".[43]

La mayoría ciudadana que se había opuesto al designio totalitario de la Unidad Popular volvió a sus labores habituales con místico entusiasmo. ¡Recuperar la normalidad!, parecía ser la tácita consigna. Así, en apenas pocos días, los servicios públicos, las universidades, el campo y las fábricas, el país entero, estuvo nuevamente en movimiento.

El rencor acumulado en tantos años de abuso y prepotencia revolucionaria no se tradujo aquí en venganzas ni saqueos, como había ocurrido al momento de caer Balmaceda en 1891. Un factor que influyó decisivamente en la pacífica integración de la población a la tarea de reconstrucción nacional —y que muchas veces se omite— es que en Chile no hubo depuración, sino más bien una extendida sensación de alivio entre los que no tenían la conciencia muy tranquila. A los que les agrada criticar sin pensar mucho, les vendría bien meditar en el recuerdo que conservó Mitterrand de lo ocurrido en Francia tras la Liberación: "La depuración se parecía a todos los períodos que suceden a una guerra civil. Se la hizo y a menudo se la hizo mal. Hubo fusilamientos que fueron obligatorios, si se puede decir así, y otros que no lo eran; y también otros que deberían haber ocurrido...".[44] La verdad escueta es que aquí no se promulgó una ley de responsabilidades políticas, como en España tras su Guerra Civil; ni existió un proceso similar al de desnazificación que sufrieron los alemanes, purgando así su derrota en la última Guerra Mundial; ni

---

42 ROBERT MOSS, op. cit., p. 19.

43 HORTENSIA BUSSI DE ALLENDE, declaraciones al diario Excelsior de México, apenas llegada allí tras el Pronunciamiento Militar. Ercilla nº 1991, 26.9.73, p.18.

44 FRANCOIS MITTERRAND, *Memorias*, Editorial Andrés Bello, Santiago, 1996, p.132.

ajuste de cuentas como los que han vivido las sociedades que finalmente han caído bajo el dominio comunista. Por sus ideas, e incluso por su pasada militancia política, aquí no se persiguió a nadie. No hubo, pues, una profilaxis social: sólo se actuó sobre los individuos que apelando a la violencia revolucionaria efectivamente persistieron en hacer uso de las armas. Como dicen los militares, en el combate se conoce al soldado y en la victoria al caballero. ¡Qué distinta suerte habrían corrido algunos señores que todavía circulan por ahí si la Junta hubiera consentido en entregar a los civiles funciones punitivas!

Para las Fuerzas Armadas y de Orden, el paso dado les comprometía en la solución de un enorme desafío. Asumían, como última e intacta reserva moral y material de la patria, la conducción de un país conmocionado hasta el extremo, polarizado social y políticamente, con su administración descoyuntada y su economía destrozada hasta un punto que presagiaba una hambruna generalizada. El propio Allende había anunciado a comienzos de septiembre que sólo quedaba harina para tres o cuatro días. A esas condiciones internas, se agregaba la amenaza externa, pues el comunismo internacional no soltaría facilmente la presa que había creído tener ya en su órbita y movilizaría todos los recursos a su alcance, desde la propaganda hasta la subversión armada, para mantener viva su causa en esta parte del mundo.

Para los marxistas criollos, una porción menor dentro del conjunto de ciudadanos que votaban por la Unidad Popular, la intervención militar dio por tierra con sus sueños de transformar a Chile en otro servil satélite de la Unión Soviética —el hermano mayor, como le llamó complacientemente Allende— primer gran paso en el propósito estratégico de su irradiación revolucionaria en América del Sur. Si en batalla, a pesar de sus Aprontes para una guerra civil que consideraban inevitable, no pudieron enfrentar con éxito a las tropas, les quedaba la opción de sumergirse e iniciar una guerra desde la clandestinidad. No en vano se habían capacitado para la lucha irregular a lo largo de una década, primero de manera más o menos encubierta, aprovechando la debilidad moral de la administración demócrata cristiana y después en forma abierta y a fondo durante los últimos tres años. El propio Allende había dado el ejemplo participando sin recato en las actividades de una escuela de guerrilla instalado en su propio refugio de El Cañaveral.

Mientras tanto, haciendo uso de una descomunal maquinaria propagandística, los comunistas y sus asociados se encargarían de difundir al mundo una mentira descarada: la reacción fascista —ese fetiche al que apelaron durante medio siglo para estigmatizar a quienes osaran oponerse a sus propósitos imperialistas y que tan buenos dividendos les dió entre los pusilánimes de todo el orbe— había interrumpido cruelmente un proceso político exitoso. Algunas personas les creyeron; otros estimaron conveniente hacer como que les creían y a lo largo de los años siguientes cultivaron un discurso privado y otro público para referirse al Gobierno Militar chileno. Pero la verdad inconmovible es que las Fuerzas Armadas y Carabineros habían hecho exactamente lo contrario: detener el avance inexorable del país a la dictadura comunista para crear nuevas bases institucionales que hicieran posible renacer aquí la democracia. Para ocultar esa verdad, "Moscú pone en movimiento una campaña de desinformación que abarca a todo el mundo y cuyos costos son calculados por exper-

tos occidentales de informaciones secretas en aproximadamente 200 millones de dólares".[45]

Una opinión que ilustra y pone las cosas en su lugar se debe al ex canciller Conrado Ríos Gallardo, cuyo patriotismo, altura de miras y lejanía de las disputas partidistas de los años '60 y '70 están fuera de duda. Contestando a Robert J. Alexander, reputado investigador de la política latinoamericana, le escribe: "Querido profesor: No se ha quebrado la democracia chilena, ella se ha salvado gracias a sus instituciones armadas, las cuales se han distinguido en el curso de su existencia por ser exclusivamente profesionales y en este sentido ejemplares para sus congéneres americanas. Hemos estado a la puerta de que una minoría —34 por ciento del electorado— minoría audaz, sin escrúpulos, insolente, nos transformara en un estado marxista, sin Dios, ni ley, ni patria y obediente a los dictados de Moscú. No fue posible una solución democrática, porque los comunistas, socialistas y demás partidos rojos empujaban al presidente Allende a la dictadura del proletariado y éste para imponerla formó un poderoso ejército popular paralelo a las fuerzas armadas legales de la nación. Desde principio de año el Primer Mandatario fue sordo a los requerimientos del Poder Legislativo, Judicial y Contraloría General, para que marchara por la senda constitucional y legal. Todo fue inútil y por ello, interpretando a la indiscutible mayoría nacional, actuaron las Fuerzas Armadas, cuya vida inmaculada y profesional era una garantía para la opinión pública y por ello se impusieron sin mayor esfuerzo ni sacrificios. El régimen militar será largo porque no es fácil empresa extirpar el cáncer del marxismo que había penetrado hondo en el seno de nuestra democracia y corrompido la conciencia popular. Las Universidades eran además focos de concientización y el régimen del palo, la bala y la injuria se había impuesto en sitios en que antes habían predominado la cultura y el respeto mutuo. Respondiendo a su última pregunta debo decirle que el país retornará al régimen constitucional cuando haya recuperado sus clásicos moldes de convivencia humana, impuesto la disciplina en las actividades laborales, la honradez en los funcionarios públicos, vitalizado la vida económico financiera, hoy en ruinas a causa de la experiencia marxista de tres años, la cual nos ha dejado más cerca de la muerte que de la vida. Tenga Ud. confianza en Chile, en sus gobernantes y en su pueblo, volveremos a lo que fuimos con el trabajo y el esfuerzo de todos."[46]

Siendo esa la realidad, desde el primer momento quedó en claro que no había sino dos actitudes posibles: contribuir disciplinadamente a la recuperación moral, económica y política de Chile —y así, en ese orden— ; o intentar hacer fracasar al Gobierno Militar para retomar la interrumpida senda revolucionaria.

Cualquier administración castrense tiene sus rigores. Eso está en la naturaleza de las cosas y tenía razón un columnista al señalar que "el país toma el áspero remedio del régimen militar. La mayoría democrática, los estudiantes, los jóvenes, las mujeres, los mineros, los empleados, los campesinos, los trabajadores independientes, los obreros, pidieron en todos los tonos que llegara esa medicina. El país estaba sometido al mando de un grupo de delincuentes y la población había renunciado en la práctica al

45 HANS VON HUYN, op. cit., p. 281.

46 El Mercurio, sección cartas, 13.11.73.

derecho de esperar un futuro mejor. Vino el régimen militar, cuando la República no tenía alternativa y la angustia se apoderaba de todos los rostros. Ciertos extranjeros no entenderán jamás lo que sucedió en Chile."[47] Pero cosa distinta es aceptar como válido el juicio que sobre tales rigores, inevitables en una situación de emergencia nacional, emitía a voz en cuello la propaganda comunista.

Hernán Millas, en un celebrado artículo humorístico, salió al paso de la grotesca paradoja que suponía tener por tribunal a los jerarcas soviéticos. "En el Kremlin se analizaron los efectos restrictivos del Estado de Sitio. Cada uno de los miembros del Politburó fue entregando su opinión. Nicolai Podgorny dio la suya: "El aspecto más grave es que mientras rige el Estado de Sitio quedan suspendidas las garantías más esenciales al individuo, como es la inviolabilidad del hogar y que nadie pueda ser arrestado sin orden de un magistrado competente. Esto es muy grave, porque quién nos asegura que los disidentes puedan ser enviados a clínicas psiquiátricas. Eso último podría afectar a intelectuales y científicos". Leonid Brezhnev entregó su objeción: "Hay otro hecho sumamente serio, camaradas. Tengo aquí el texto del Estado de Sitio y expresa que podrá suspender incluso la libertad de prensa, radio y televisión. Le he pedido al camarada Stanovoi, de Pravda, que nos ilustre al respecto". Stanovoi habló: "Como bien dijese el camarada Brezhnev, los rigores del Estado de Sitio en lo que atañe a la libertad de prensa son tan drásticos que repugnan al pueblo soviético. Con decirles que les queda suspendido a los ciudadanos, mientras se mantiene en vigencia el Estado de Sitio, el precepto constitucional que asegura a todos los habitantes de la República la libertad de emitir, sin censura previa, sus opiniones, de palabra o por escrito, por medio de la prensa o en cualquier otra forma". Las palabras de Stanovoi causaron profundo impacto". Y en ese estilo continúa la reunión, doliéndose de las restricciones que sufren los chilenos personas de sensibilidad tan delicada como el jefe de la KGB y otros. El párrafo final es de antología: "Así se llegó a la conclusión de que la Unión Soviética no podía continuar manteniendo relaciones con un país como Chile, donde, aunque fuese en forma temporal, pudieran conculcarse las garantías más caras al pueblo soviético".[48]

Prácticamente toda la ciudadanía aceptó de buena gana las molestias que les podrían causar las mínimas limitaciones impuestas a la vida diaria, como el toque de queda. Lo mismo se puede afirmar respecto a la suspensión de la actividad político partidista, una restricción por demás inherente a cualquier régimen militar. El país estaba exhausto y necesitaba tiempo para rehacerse y alcanzar la normalidad. Tras la experiencia del caos provocado por la Unidad Popular —y la simplicidad de la frase no representa con suficiente exactitud la complejidad de las cosas— no sería sencillo alcanzar de nuevo la tranquilidad. Pero si se quería retomar la senda del progreso era imperativo hacerlo: ningún campesino siembra su trigo en día de tormenta. Además, era evidente que el torbellino demagógico de la última década había colmado la pa-

---

47 El Mercurio, "Remedio", 10.12.73.

48 HERNÁN MILLAS, "Las razones del Kremlin", publicado en Ercilla nº 1992, 3.10.73, p. 10 y recogido en HERNÁN MILLAS (recopilador), *Francotiradores del humor*, Editorial Gabriela Mistral, Santiago, 1974, p. 216.

ciencia de una población que no tiene entre sus carácterísticas cívicas el talante militante. Al menos aquí, la política de partidos siempre ha sido una ocupación de minúsculas oligarquías, todo lo influyentes que se quiera, pero ínfimas en cuanto al número de sus integrantes. El buen sentido indicaba como indispensable, entonces, que los hechos reemplazaran a la palabrería en la conducción de los asuntos públicos.

Hubo, a pesar de todo, un reducido número de personas que desafió para su capote el receso político, adoptando una especie de doble vida; se desenvolvían normalmente en la superficie, con sus afanes y negocios prosperando al ritmo de la recuperación del país, y a ratos soñaban con el regreso a la actividad partidista. Hay gente que nunca logrará sintonizar con los verdaderos anhelos del hombre corriente. Pero, como no llegaron a tener mayor influencia en el curso de los acontecimientos, sus devaneos fueron estériles. No obstante, al amparo de la tolerancia del régimen militar, se construyeron una aureola de luchadores por la libertad y la democracia que a la larga les sería útil.

Otros individuos, varios miles, muchos de los cuales habían integrado los grupos armados formados con la complicidad del gobierno de Allende al interior de los partidos políticos que le apoyaban, siguiendo así las fraternales recomendaciones de Fidel Castro, vivieron una situación diferente. Ellos no sólo habían creído que las tensiones sociales y políticas provocadas por la Unidad Popular tendrían un desenlace violento —el asalto al poder total, inevitable a la luz de la ideología marxista leninista que les animaba— sino que se habían comprometido intensamente en el camino revolucionario abortado el 11 de septiembre. "La verdad es que la acción de las Fuerzas Armadas y del Cuerpo de Carabineros no vino a ser sino una medida preventiva que se anticipó a un autogolpe de Estado que, con la ayuda de las milicias armadas con enorme poder militar de que disponía el Gobierno y con la colaboración de no menos de 10.000 extranjeros que había en este país, pretendían o habrían consumado una dictadura comunista", como dijo en esos días el ex senador Patricio Aylwin.[49] Por obvios motivos, el Gobierno Militar procedió a desbaratar sus organizaciones, a identificar sus miembros y a detenerlos hasta aclarar el grado de responsabilidad que afectaba a cada cual. Era una labor compleja e ingrata, pero indispensable para garantizar la tranquilidad de la gran masa de la población. Muy pronto estuvo a buen recaudo el grueso de esos grupos activistas, cuyas condiciones de detención fueron supervigiladas por la Cruz Roja Internacional. Sus mandos, mientras tanto, permanecían asilados en diferentes sedes diplomáticas. El problema consistía en resolver qué hacer con todos ellos.

En aras de la unidad nacional —un objetivo que las Fuerzas Armadas y Carabineros nunca perdieron de vista— se les permitió abandonar el país junto a sus familias, acción que se concertó con los Estados dispuestos a acogerlos. Otra alternativa podría haber sido encerrarlos en campos de trabajo, como sus mentores soviéticos acostumbraban hacer en el gulag. O ponerlos frente al paredón, como había hecho Castro en Cuba. Pero esas medidas eran incompatibles con los principios cristianos que inspiraban al nuevo gobierno. No es otro el orígen del exilio, un tema tan mal debatido posteriormente.

---

49 La Prensa, 19.10.73.

En la medida en que la situación nacional se fue normalizando, se estudió caso a caso el comportamiento de los exiliados en el extranjero y su potencial conflictividad. Con esos antecedentes, la autoridad responsable del orden público, el Ministerio del Interior, fue autorizando su regreso a la patria. Así, antes de finalizar el Gobierno Militar, ya ningún chileno estaba obligado a vivir en otro país por razones políticas. Dada la importancia que este personal había tenido para la Unidad Popular, apenas sus herederos volvieron a ocupar cargos gubernamentales se encargaron de facilitar las condiciones materiales del retorno. Con ese propósito, el Banco del Estado de Chile abrió una línea de créditos especiales por 60.500.000 marcos y administró otros 10.000.000 provenientes de un convenio de cooperación suscrito con este fin el 26 de octubre de 1990 entre los gobiernos de Chile y Alemania, a 30 años y con 10 de gracia. Además, el gobierno alemán entregó otros 9.000.000 de marcos, no reembolsables, con el objeto de financiar actividades de apoyo al proceso de reinserción de los exiliados.[50] Las especiales franquicias dispuestas a su favor —que además de créditos blandos para iniciar actividades productivas incluyó una autorización de excepción para importar vehículos y otros bienes—, no fueron hechas extensivas a los miles de chilenos que por diversas otras razones se habían establecido en el extranjero en las dos décadas precedentes, muchos de los cuales habían emigrado por las dificultades y amenazas sufridas durante la Unidad Popular. Haber establecido este doble parámetro fue un acto de pequeñez que se condice con el sectarismo de sus autores.

En cualquier caso, haber garantizado la integridad física de esas personas profundamente equivocadas y luego eximirles de purgar la culpa que les afectaba en el quiebre de la convivencia social, constituyó un acto de suprema magnanimidad. Si bien es difícil esperar que lleguen a reconocer públicamente tal deuda, en privado no pueden sino estar agradecidas de la oportunidad que se les brindó para iniciar una nueva vida. En el exilio, algunos conocieron lo que verdaderamente eran los socialismos reales: un lugar donde no había ciudadanos sino rehenes. La mayoría, con intuición y sentido común, se limitó a conocer lo que verdaderamente eran las sociedades democráticas y capitalistas del mundo occidental: en la hora de la verdad era preferible vivir entre los despreciables burgueses que compartir las penurias de los heroicos proletarios en su paraíso. El choque con ambas experiencias fue el antídoto que diluyó sus antiguas convicciones y les movió a rectificar su actitud política, trocándola en aires de renovación. Es gracioso que los sectores más duros del socialismo entendido en clave marxista leninista y hasta algunos comunistas, a fuerza de mentir tanto para reivindicar la democracia, acabaran por convertirse en demócratas según el uso burgués del término. El tiempo, además, contribuyó a calmar sus ímpetus revolucionarios. Quien se interese en el tema leerá con provecho la novela *Morir en Berlín*, escrita por quien fuera un destacado dirigente comunista, Carlos Cerda, hoy, como muchos otros, renovado y exitosamente instalado en el orden de cosas forjado por los hombres de armas.

---

50 Una cuenta pública del Banco del Estado de Chile sobre el programa de crédito a los retornados, en La Segunda, 10.7.97, p. 17.

Puesto en claro que en las traumáticas circunstancias en que surgió la posibilidad del exilio era una solución generosa, no se puede tampoco ocultar que la reinserción plena de quienes padecieron el desarraigo tendría después ciertas dificultades y consecuencias. Así, por ejemplo, para los que no se adaptaron a su nueva situación y prefirieron enquistar su espíritu en una suerte de burbuja mental, alimentada de consignas que obedecían a una realidad chilena ya largamente superada, al regresar no les ha sido fácil acostumbrarse a vivir en un país muy diferente al soñado por tanto tiempo. De otra parte, al asumir algunos de ellos un papel protagónico en la actividad política, contaminaron el estilo de esa actividad con ciertos hábitos malsanos adquiridos durante el exilio. Con todo, el coqueto desplante con que de vez en cuando exhiben su condición de retornados, muchas veces ofensivo para el resto de la población, poco debiera pesar frente al superior valor que tiene el reencuentro de todos los chilenos en la patria común.

Por último, hubo también un pequeño contingente de fanáticas convicciones que se sumergió y decidió luchar por su revolución con la máxima violencia desde la clandestinidad. Sólo ellos produjeron bajas a las fuerzas de seguridad y sufrieron pérdidas al ser reprimidos. En este grupo, y no en otro, están centrados los problemas de derechos humanos que incansablemente han sido esgrimidos para manchar el éxito de la empresa de bien público llevada adelante por las Fuerzas Armadas y de Orden desde el gobierno de la nación.

Los terroristas, aunque derrotados una y mil veces, no pudieron ser neutralizados de manera completa y definitiva. Sólo los regímenes totalitarios logran extirpar ese mal. Al precio, claro está, de ahogar la libertad de todas las personas. Las naciones democráticas siempre estarán expuestas al brote de grupos extremistas, que surgen al alero de las causas más disímiles. Es cierto que las fuerzas del Estado lograron tenerlas a raya en la justa medida para preservar la normalidad de la vida diaria de la población en su conjunto —un mérito que jamás se les agradecerá suficientemente— pero la acción disolvente de la subversión fue asegurada con el constante flujo de un contingente adiestrado en Cuba y la Europa del Este. Su financiamiento provenía tanto del bloque soviético —recursos que sostenían una millonaria campaña de desinformación, la distribución de armas y equipo de combate en muchos lugares del mundo y la ayuda a miles de refugiados entre los que se reclutaba la carne de cañón, una sangría que contribuyó a acelerar su penosa disolución— como de algunos países occidentales cuyos grupos dirigentes por muchos años se indigestaron con la propaganda marxista y les entregaron, con alguna dosis de ingenuidad, una generosa ayuda. Estas contribuciones fueron canalizada a través de una red de organizaciones de fachada, muchas veces controladas a distancia desde el Kremlin. Una parte de las armas puestas a disposición de los subversivos chilenos provenía del arsenal acumulado durante la Unidad Popular; baste recordar el escandaloso caso de los bultos cubanos, que bajo la cobertura de obras de arte regaladas por Castro a Allende, contenía armamento destinadas a su guardia pretoriana, el GAP. Pero además, aunque parezca increíble, otras les habían sido adquiridas a proveedores en apariencia impecablemente anticomunistas. Como indica von Huyn, "también el gobierno liberal-socialista de Bonn entrega armas al régimen de Allende: por lo menos 5 mil ametralladoras automáticas del tipo HK-33,

calibre 5,65 (NATO), de efecto "tumble", con la correspondiente munición de infantería por millones y grandes cantidades de munición de 20 mm".[51] Se trataba de material de guerra adquirido para la Infantería de Marina, que no ingresó en su totalidad al arsenal de dicho Cuerpo.

Con todo, aquellas contribuciones no lograron sino entorpecer, y algunas veces enlutar, la marcha del Gobierno Militar hacia la restauración de la democracia chilena, esa misma democracia que entre los demagogos profesionales y esos "jóvenes idealistas", como les llamó Allende, habían demolido con tanto entusiasmo. Pero si la hicieron más difícil, no pudieron retrasar su itinerario ni en un día, ni en una hora siquiera, y cada paso se fue cumpliendo tal como se había dispuesto.

La base social del Gobierno Militar, esa mayoría silenciosa que al menos desde el paro nacional de octubre de 1972 había sobrepasado a los partidos políticos y exigido la intervención castrense, es el factor que en última instancia explica el éxito de su gestión de gobierno. Las Fuerzas Armadas y de Orden, en breve plazo, fijaron un *objetivo nacional* y crearon las condiciones necesarias para alcanzarlo. En esa dirección, pensando sólo en los intereses generales y permanentes de la chilenidad, aplicaron su capacidad organizativa, su autoridad moral y la mística en el servicio que las distingue. Bajo su dirección, la comunidad nacional recuperó la confianza en sí misma y, dejando atrás el sectarismo, se volvió a unir durante quince años especialmente fértiles en torno a una empresa colectiva grávida de ideales patrióticos. El país real, apoyado en su propio esfuerzo y alejado de cualquier devaneo partidista, inició así un proceso de recuperación notablemente exitoso.

El reencuentro de todo un pueblo convocado a enfrentar la adversidad, el redescubrimiento de que lo que une es superior a lo que separa, fue el factor determinante para salir adelante. Además de los daños materiales, evidentes por si mismos, las tensiones acumuladas durante la década revolucionaria habían herido el alma de la nación, esto es, el sentido de su unidad de destino más allá de toda discrepancia legítima. Esta era la fisura más grave que había que soldar. La reconciliación, alcanzar la paz de los espíritus, era un desafío imperativo.

Así lo entendió el Gobierno Militar; así lo entendieron también casi todos los partidos y grupos políticos que habiendo combatido a la Unidad Popular depusieron generosamente sus particulares puntos de vista y se sumaron al esfuerzo nacional; así lo entendió también la Iglesia, cuyo episcopado emitió una declaración cuyo título fue, precisamente, la reconciliación de los chilenos, y proclamó a 1974 como Año Santo. En el mismo espíritu, grande y fraterno, el Tedeum celebrado el 18 de septiembre en la Gratitud Nacional, apenas una semana después del Pronunciamiento, contó con la significativa presencia de los ex Presidentes de la República. Rosa Markmann, *doña Mitty*, ha recordado que ese día, "temprano en la mañana, Jorge Alessandri llamó a González Videla y le dijo: "Oiga Gabriel, Eduardo Frei dice que no debemos ir al Te Déum". Gabriel González, abiertamente partidario de la intervención militar, le replicó: "Jorge, nosotros tenemos que defender esto porque qué habría

---

51 HANS VON HUYN, op. cit., p. 280.

sido del país si no hubiera ocurrido". Entonces don Jorge le manifestó: "Eduardo me ha convencido que no debemos ir". Finalmente González Videla los convenció y los tres fueron al Te Déum". [52]

Monseñor Emilio Tagle, Arzobispo de Valparaíso, interpretando los anhelos del pueblo fiel en esa hora difícil, señaló el desafío del momento: "La reconciliación es, para nosotros, una tarea indispensable, pues el marxismo produjo en Chile la quiebra y la división más honda de su historia. Sentó como principio la lucha de clases, sembró el odio y la violencia no sólo a través de implacable adoctrinamiento, armó a unos chilenos para aplastar a otros chilenos. Violados los derechos y el imperio de la ley, el país caminaba a la dominación ideológica y a la dictadura. Contra ello se levantaron las voces de los más altos organismos representativos de la Nación, se levantó el clamor nacional, que se expresó también por medio de María en fervientes plegarias al Señor". Pero, como advierte a continuación, la caída de los responsables de ese crimen de lesa patria "no significó que llegara plenamente la paz: se mantuvieron focos de agresión que configuraban un real peligro para la seguridad nacional con el aporte de la conjura exterior que se desató contra nosotros. El Gobierno debió establecer entonces severas restricciones. Esta actitud de agresión ha constituido el mayor obstáculo para la reconciliación, causa un enorme daño al país y posterga la vuelta a la plena normalidad de la vida nacional."[53]

Por supuesto, no faltó quien creyó ver en la advertencia de peligros para la seguridad nacional una especie de herejía. Sus razones tienen los afectados para rehuir cualquier apelación a la seguridad nacional. Todavía hay personas que ven en ese concepto una invención del Pentágono, surgida durante la Guerra Fría e inoculada a los militares del resto de América para estructurar una doctrina anti comunista. Les sorprenderá saber que la voz *seguridad nacional*, definida y aplicada en su sentido propio, ya aparece en la circular reservada dirigida al Ejército por el general Bartolomé Blanche cuando servía la cartera de Guerra en la primera administración del presidente Carlos Ibáñez.[54]

Además de todas las medidas adoptadas para hacer posible el normal desenvolvimiento de la vida cotidiana de la población, el Gobierno Militar dio el año 1978 un paso de especial trascendencia para hacer realidad sus propósitos de pacificación y reconciliación nacional. Consistió en conceder la amnistía a todos los que de una forma u otra, incluso por hechos de sangre, pudieran tener alguna responsabilidad en los actos que habían dividido a los chilenos hasta ese momento. Fue éste un gesto de singular grandeza, pues otorgó el perdón quien, de hecho y de derecho, estaba en condiciones de exigir reparaciones.

Nunca tuvo mucho realismo esperar que los apóstoles de la violencia, brazo armado del comunismo internacional, creyeran sinceramente en la necesidad de la re-

---

52 MARIA EUGENIA OYARZUN, ARTURO ROMAN Y RAUL ROJAS, *Augusto Pinochet. Una visión del hombre*, Bauhaus Editorial, Santiago, 1995, pp. 29 y 30.

53 Monseñor EMILIO TAGLE COVARRUBIAS, carta pastoral de 19 de septiembre de 1973.

54 La circular del general Blanche está reproducida en RENÉ MONTERO, *La verdad sobre Ibáñez*, Editorial Freeland, Buenos Aires, 1953, pp. 137 y 138.

conciliación. Lo suyo es dividir y destruir, una actitud odiosa que surge desde las profundidades del resentimiento. La única sorpresa estuvo en constatar que, a poco andar, un puñado de dirigentes no marxistas tenía conflictos para conciliar sus propias convicciones con el imperativo de unidad y reconciliación que animaban al grueso de la sociedad.

En efecto, el único partido no marxista que si bien en su día apoyó el Pronunciamiento Militar después eludió en los hechos su disolución fue el Demócrata Cristiano. Sabiendo que el Gobierno Militar, por su propia naturaleza, dejaría el poder en cuanto estuvieran cumplidas las metas que le habían hecho indispensable, jamás abdicó en su pretensión de volver a La Moneda, de donde había salido sin gloria alguna el 4 de noviembre de 1970. Ese y no otro sería su objetivo estratégico en los años siguientes.

Un dilema democristiano.

Triste es decirlo, pero en la cúpula demócrata cristiana muy pronto se olvidaron los días en que el país era una ruina y peligraba la vida, una época en que ellos mismos estaban convencidos de lo ineludible que era la intervención militar. "Frei y yo —recordaría el senador Francisco Bulnes— consideramos el 20 de agosto de 1973, en una larga conversación, que Chile no tenía otra solución que la militar. El análisis que hicimos en esa ocasión nos llevó a la conclusión de que aún en el caso de que Allende renunciara, el substituto no podría gobernar a la nación dado el estado casi caótico imperante".[55]

Después del Pronunciamiento, el 17 de septiembre de 1973, el entonces presidente del Partido Demócrata Cristiano, senador Patricio Aylwin, hablando en nombre del Partido decía: "Los hechos que vive Chile son la consecuencia del desastre económico, el caos institucional, la violencia armada y la crisis moral a que el gobierno depuesto condujo al país y que llevaron al pueblo chileno a la angustia y la desesperación", añadiendo significativamente, "Chile estuvo al borde del "Golpe de Praga", que habría sido tremendamente sangriento, y las Fuerzas Armadas no hicieron sino que adelantarse a ese riesgo inminente".[56]

El mismo personero, hablando el 24 de septiembre de 1973 ante los medios de prensa extranjeros, reiteró sus argumentos en los siguientes términos: "La verdad es que la acción de las Fuerzas Armadas y del Cuerpo de Carabineros no vino a ser sino una medida preventiva que se anticipó a un autogolpe de Estado que, con la ayuda de las milicias armadas con enorme poder militar de que disponía el gobierno y con la colaboración de más de diez mil extranjeros que había en este país, pretendían o habrían consumado una dictadura comunista. Por eso, cuando se produjo el Pronunciamiento Militar y se formó la Junta Militar de Gobierno, nosotros, los demócrata cristianos, habríamos faltado a la verdad y habríamos sido inconsecuentes si no hubiéramos reconocido que la responsabilidad fundamental de lo ocurrido proviene de la acción del gobierno de la Unidad Popular y que las Fuerzas Armadas no buscaron esto,

55 Entrevista de United Press International a Francisco Bulnes, publicada el 17.3.74 y no desmentida por Eduardo Frei. La cita en FRANCISCO JAVIER GONZALEZ ERRAZURIZ, op. cit., p. 216.

56 Citado en idem. , p. 217. También está recogida en El Mercurio, 4.3.86.

sino que actuaron por patriotismo, con un sentido de responsabilidad frente al destino histórico de Chile". Haciéndose cargo de una pregunta sobre los abusos denunciados por algunos medios internacionales, añadió: "Es muy fácil convertirnos en juez de otros que están peleando, mientras uno está sentado en el escritorio. Yo no me siento con autoridad moral para juzgar si han sido excesivos o no, porque lo cierto es que los militares han tenido muchas bajas y han sentido la acción".[57]

La percepción que tenían los dirigentes del sector menos izquierdista de la democracia cristiana sobre el momento por el que atravesaba el país no difería, en lo inmediato al menos, de la apreciación que había movido a los militares a poner término al experimento marxista. En esa línea, las declaraciones que con mayor fidelidad reflejan cómo veían por entonces la situación se deben a su líder indiscutido, Eduardo Frei Montalva. El 10 de octubre de 1973 señalaba al diario español ABC: "Los militares han salvado a Chile y a todos nosotros, cuyas vidas no son ciertamente tan importantes como las de Chile, pero que son vidas humanas, y muchas, y todas amenazadas perentoriamente. Y no puedo decir que estamos aún a salvo, porque —ya lo ve usted día tras día— las Fuerzas Armadas siguen descubriendo reductos y arsenales. La guerra civil estaba perfectamente preparada por los marxistas. Y esto es lo que el mundo desconoce o no quiere conocer (...) El pueblo solicitó su intervención insistente, estruendosa y heroicamente."[58]

Pues bien, una vez que se consideraron a salvo, los democratacristianos creyeron llegada su hora. Concurrieron a saludar y agradecer a los mandos militares porque era el único camino que veían para despejar el obstáculo que se interponía entre la angustiosa situación de 1973 y la democracia, entendida ésta apenas en su sentido más superficial de renovar las autoridades políticas a través del sufragio popular. Al menos así lo sugieren los recados privados que hicieron llegar a la Junta, y las presiones ejercidas para obtener que se llamara en breve a elecciones, ocasión que tal vez les permitiría —por ser entonces la única fuerza política no marxistas debidamente organizada— acceder legalmente al poder.

Sus planteamientos fueron escuchados por la Junta con la seriedad que el caso merecía y no se accedió a sus pretensiones. Las tareas que en lo inmediato era necesario asumir para sacar el país de la triste condición en que, entre otros, los mismos democratacristianos le habían puesto, eran de entidad diferente a los procesos electorales. En consecuencia, en el orden de las lealtades, la situación experimentó un cambio significativo a poco de transcurrir el 11 de septiembre. Así, el partido que había hecho posible la entronización de Allende y que más tarde, como efecto de la "marcha de las cacerolas" efectuada por las mujeres el 1º de diciembre de 1971, se había alineado resueltamente en la oposición, inició otro cambio de rumbo, acercándose progresivamente, una vez más, a su lugar natural: ser la cara amable de la izquierda en Chile. Al cabo del tiempo llegó a ser un conveniente socio de los marxistas —sobre todo cuando éstos se empezaron a "descafeinar"— transformándose en sordo adversario del Gobier

---

57 El texto de esa conferencia de prensa, publicado en la prensa chilena el 18 de octubre de 1973, está recogido con mayor amplitud en AUGUSTO PINOCHET UGARTE, *El día decisivo*, op. cit., pp 34 y 35. La cita en p. 34.

58 De la entrevista concedida por Eduardo Frei al diario ABC, cuyo texto está recogido en FRANCISCO JAVIER GONZÁLEZ, op. cit., pp. 225-232.

no Militar. Con todo, sería un grueso error estimar que su alejamiento fue un producto de las circunstancias. En realidad el problema es otro y está vinculado a la conjunción del rol mesiánico que su cúpula siempre se ha sentido llamada a desempeñar y a la distancia visceral que tienen con el temperamento militar. Late aquí un desencuentro que va más allá de las ideas, pues surge de las profundidades del inconsciente, no de la actividad cerebral. Y por ello los soldados, todo hay que decirlo, también suelen mirarles con cierto desdén.

El mismo 11 de septiembre, el general Pinochet comprendió que los máximos dirigentes de ese partido albergaban pretensiones disparatadas, absolutamente fuera de lugar respecto a las exigencias de la situación reinante. En una entrevista realizada el 12 de julio de 1989, contó lo siguiente: "Estábamos peleando en la mañana y se me acerca un oficial y me dice: "Mi General, aquí está llamando el señor Frei y dice que si usted lo necesita está en el teléfono tal, tal, tal". Una hora más tarde, llama de nuevo. "Habla Frei. Dígale al General Pinochet que me voy a cambiar al teléfono tal, tal, tal. Si me necesita para algo me puede llamar a ese número". Cuando llamó por tercera vez, le dije al oficial: "Dígale al señor Frei que no me interesa. Aquí estamos actuando nosotros solos". Ahí fue cuando me di cuenta de que lo que perseguían los democratacristianos era la lucha del poder para ellos, para la Democracia Cristiana".[59]

Como se ve, el dilema democristiano era el mismo que un año atrás habían tenido que enfrentar los militares. Por caminos muy diversos habían llegado a la misma conclusión: era ineludible poner término a la experiencia marxista y el único modo de hacerlo, una vez desahuciado por Allende el diálogo político, era la fuerza de las armas. Pero la coincidencia de pareceres llegaba exactamente hasta ese punto porque discrepaban sobre lo que había que hacer en adelante: ¿sacudir el polvo y una vez que la casa estuviera limpia volver a más de lo mismo o remover las causas que habían estado a punto de derrumbarla? El general Pinochet, no sin vencer algunas resistencias —esta fue la causa del posterior distanciamiento con el general Leigh— logró imponer su criterio e inclinar la balanza en el sentido fundacional que daría sentido a toda la gestión militar. Los democratacristianos, en cambio, optaron por la otra alternativa y así, desde ese momento, quedó fijada la línea estratégica que seguirían en las siguientes décadas. Su modo de entender la transición, por ejemplo, proviene de aquella temprana hora: hay que volver al régimen institucional existente antes del Gobierno Militar, a 1973, 1925, 1891, 1833, 1810... ¡quién sabe!

Al finalizar el año 1973 ya era evidente el despegue del Partido Demócrata Cristiano, una vez más sometido a los dictados de su ala progresista, por lo que no constituyó sorpresa alguna que su oposición se fuera endureciendo en la misma medida en que iba quedando en claro que el Gobierno Militar no sería un simple intermedio entre dos experiencias igualmente partidistas, sino una etapa fundacional que por horizonte tenía grandes metas y no breves plazos.

Aprovechando la tolerancia de lo que ellos llamaban dictadura —una palabra que les fue soplada en el oído izquierdo y les gustó— y afirmados sin pudor en sus

59 RAQUEL CORREA y ELIZABETH SUBERCASEAUX, *Ego Sum*, Editorial Planeta Chilena, Santiago, 1996, p. 98.

bien provistas relaciones internacionales, pudieron conservar su organización y sus sueños. Así, mientras lo mejor de Chile se arremangaba sin pensar mayormente en el lugar que ocuparía cuando el país, ya a flote, navegara ordenadamente hacia la prosperidad, ellos se concentraron en cómo llegar a detentar el poder. Con óptica doctrinaria y buena voluntad se podría objetar que no es otra la razón de ser de cualquier partido político; pero hay que reconocer que la derecha mostró en esa hora mayor grandeza. Este agudo contraste entre las fuerzas políticas que se habían opuesto a la Unidad Popular, tendría consecuencias. Lo singular del caso es que la bandera esgrimida por la democracia cristiana fue el retorno a la democracia, causa y motivo de la intervención militar de 1973 y uno de los objetivos prioritarios del gobierno que de allí surgió, tal cual quedó establecido en la Constitución de 1980 y como efectivamente ocurrió al aplicar sus disposiciones... lo que otorga un aire de comedia a la movediza actividad de algunos personajes en esos años, autoasignándose falsos prestigios y coloridas medallas de papel.

Con todo, justo es reconocer que en el plano público el ex-presidente Eduardo Frei fue más cauto. Por su experiencia, sabía que era imposible transitar sin más a la democracia. Su posición, del mayor interés porque interpreta la opinión de muchos ciudadanos que sin ser militantes de su partido suelen votar por él, la definió algo más tarde, en 1978: "Todos estos antecedentes explican por qué pensamos que es necesario afrontar seria y decididamente el retorno a la democracia. Nadie piensa que éste puede ser repentino e inmediato, sino que necesariamente debe existir un proceso de transición razonable que aplaque los odios, resentimientos y revanchas o que evite trastornos fatales para el destino del país. Todos comprendemos que en este proceso las Fuerzas Armadas tienen una enorme responsabilidad y todos estamos interesados en que estas instituciones mantengan muy alto su prestigio".[60] ¡Ni el propio general Pinochet podría haber explicado mejor lo que intentaba hacer!

Un cambio inevitable.

A muchas personas, especialmente a los más jóvenes, les ha parecido necesario formularse la siguiente pregunta: la intervención militar del 11 de septiembre de 1973, ¿frustró o interrumpió alguna iniciativa política que pudiese haber introducido cambios fundamentales a la situación del país y que, en consecuencia, hubiese aconsejado al menos postergarlo? Dicho de otro modo: ¿No existía alguna salida política, un diálogo más generoso que hubiese podido reemplazar la acción militar y sus secuelas por un desplazamiento incruento de la Unidad Popular? En definitiva, ¿fue un hecho inevitable?

Es pertinente dar respuesta a estas inquietudes porque no han faltado los que con mala intención han pretendido comparar el régimen militar con una democracia normal, es decir, de acuerdo a sus parámetros occidentales; como si alguien en su sano juicio pudiera concebir lo que en doctrina se llama Estado Militar como opción institucional para Chile.

---

60 EDUARDO FREI MONTALVA, "Retorno a la democracia", en revista Hoy, 12.7.78.

Las Fuerzas Armadas y Carabineros asumieron el gobierno porque carecían de otra alternativa. No haberlo hecho, en conciencia y ante su honor habría significado desatender su deber más elemental frente a la patria. Actuaron para resolver una emergencia de la mayor gravedad, no sólo para el Estado, sino para la supervivencia de la comunidad nacional. Esta grave crisis, seria al punto de anunciar el inminente quiebre de la convivencia social —la concordia se había perdido diez años atrás— no tuvo solución razonable por falta de una adecuada y oportuna reacción cívica, problema cuyas raíces hay que buscarlas en las deficiencias de nuestro sistema político y en la desorganización, falta de cultura general y débil voluntad de los ciudadanos para hacer pesar sus convicciones más allá de las camarillas partidistas. Sólo así se explica que grandes sectores de la población hayan sido manipulados durante tanto tiempo por los demagogos de turno.

La verdad es que en el convulsionado escenario de 1973, para decirlo con palabras de Eduardo Frei, "los militares fueron llamados, y cumplieron una obligación legal, porque el Poder Ejecutivo y el Judicial, el Congreso y la Corte Suprema habían denunciado públicamente que la presidencia y su régimen quebrantaban la Constitución, los acuerdos votados en el Parlamento y las sentencias dictadas por los jueces absolutamente extraños a la política. Allende vino a instaurar el comunismo por medios violentos, no democráticos, y cuando la democracia, engañada, percibió la magnitud de la trampa, ya era tarde. Ya estaban armadas las masas de guerrilleros y bien preparado el exterminio de los jefes del Ejército. Allende era un político hábil y celaba la trampa."[61]

A las Fuerzas Armadas y Carabineros no les cupo responsabilidad alguna en la creación de la emergencia. Si alguna tienen, reside en haber aceptado con infinita paciencia, en aras de una mal entendida prescindencia política — que supuestamente las alejaría del peligroso fantasma de la deliberación— su marginación respecto a las decisiones del Estado ante los principales acontecimientos nacionales, manteniéndose "en sus cuarteles", según la expresión que tanto agrada en los ambientes partidistas. De tarde en tarde se les llamaba para "sofocar incendios", es decir, para reprimir las protestas y desbordes en que incurrían los afectados por problemas no resueltos adecuadamente en el nivel político. Y en premio, tras realizar esa pesada e ingrata labor —que tanto ha disgustado siempre a los militares— eran duramente fustigadas por los mismos que habían alentado la violencia y por los responsables de que la situación se hubiese producido.

Las Fuerzas Armadas no podían permanecer impasibles mientras el país se caía literalmente a pedazos. El régimen de la Unidad Popular había agotado todos los recursos democráticos para sostener su precaria situación, incluso llamando a miembros del alto mando castrense a servir funciones ministeriales. Ese gobierno no advirtió que desaparecía la alfombra de la respetabilidad bajo sus pies, y comenzaba su agonía final, con el paro nacional ocurrido en octubre de 1972. A partir de ese momento vivió en precario, sostenido institucionalmente por las Fuerzas Armadas y de Orden, que al quitarle su apoyo precipitaron su caída. Esto no puede ser olvidado jamás, pues constituye una lección de carácter permanente: las instituciones de la

61 Declaraciones de EDUARDO FREI MONTALVA al diario ABC de Madrid, 1973.

Defensa Nacional permanecieron disciplinadamente fieles al Presidente de la República hasta el momento en que no les cupo duda de las siniestras intenciones que albergaba.

En el campo de la maniobra política, Allende desahució en agosto el diálogo que mantenía con la democracia cristiana, su última tabla de salvación. A partir de ese momento avanzó ciegamente hacia su wagneriano final. Había resuelto dirimir el empate político recurriendo al tan proclamado "poder popular", para alcanzar mediante la cruda violencia una decisión definitiva. Hasta ese momento quizás todavía habría podido apelar, una vez más, al patriótico concurso de las instituciones castrenses, subordinadas al orden institucional en el cumplimiento de sus roles de seguridad nacional externa e interna; pero evidentemente, a cambio, le habrían exigido contar con las atribuciones necesarias para volver al país a la normalidad, lo que ya estaba fuera del ámbito de posibilidades del mandatario, prisionero de la facción más exaltada de sus partidarios que sí estaba dispuesta a correr el riesgo de una guerra civil. Es más, a esas alturas, las Fuerzas Armadas ya eran el único obstáculo que se interponía entre aquéllos y su afiebrado asalto al poder total. Pero si la Unidad Popular era una avalancha que ya no podía detenerse con prótesis democráticas, el órgano militar de la sociedad tampoco podía claudicar de sus tareas reales, efectivas y tutelares. Cuando lo que está en juego es la vida del pueblo de donde proviene y al cual sirve, tiene la obligación de ejercer su prerrogativa, esto es, aplicar la fuerza legítima para volver los hechos a un curso normal, y en tal sentido deben actuar por sobre toda otra consideración.

En un país tan formalmente legalista como es Chile, muchos piensan que lo adjetivo siempre debe prevalecer sobre lo sustantivo. Vana ilusión. La Constitución y las leyes son dignas del mayor respeto, pero cuando han sido sobrepasadas y reducidas a letra muerta por los propios responsables de la conservación del orden jurídico del Estado y de la vitalidad de la nación, la normativa deviene en mero espectro sin contenido real. Entonces calla el foro y habla la espada. Está en la naturaleza misma de las cosas, y la doctrina así lo reconoce, que "el Estado es siempre algo más, por no decir algo distinto, que las declaraciones normativas y conceptuales contenidas en su Constitución. (...) La frontera absoluta del Estado en la sociedad industrial está caracterizada por la situación límite, es decir, por aquella situación en que se debate el ser o no ser del Estado, su supervivencia. La regulación del estado de necesidad en la Ley Fundamental —estados de excepción constitucional— no es, en este sentido, una regulación de la situación límite, sino de alteraciones de la normalidad que se suponen pueden ser dominadas por la vía normativa. Las fronteras del Estado se encuentran abiertamente en la esfera militar".[62]

Las instituciones armadas, en los primeros días de septiembre de 1973, sabían que de permanecer impasibles los marxistas intentarían un desesperado hecho de fuerza —como lo fue el Golpe de Praga efectuado por los comunistas en 1948 y oportunamente recordado por Aylwin—. Las Fiestas Patrias, que para dar una apariencia

62 ERNST FORSTHOFF, *El Estado en la sociedad industrial*, Instituto de Estudios Políticos, Madrid, 1975, p. 100.

de normalidad el gobierno tratarían de celebrar a toda costa —aunque en rigor ya no había independencia nacional que celebrar— creaban la ocasión para un autogolpe artero y definitivo.

El intento de subvertir la disciplina en unidades de la Escuadra surtas en Valparaíso, cuyo objetivo era tomar el control de dos naves y con ellas atacar las instalaciones terrestres, incluyendo poblaciones navales, descubierta oportunamente y motivo de un proceso, colmó la paciencia en la Marina y alertó a las otras fuerzas. Sin duda, el alzamiento abortado en la Armada reflejaba un estado de cosas ya inaguantable para las Fuerzas Armadas.

Coetáneamente, la presión indebida ejercida por Allende sobre el Comandante en Jefe de la Fuerza Aérea, general César Ruíz Danyou, condicionando su permanencia en dicho cargo con la de ministro en su gobierno, le había forzado al retiro. Este incidente —gravísimo, porque merced a un motivo político se ponía en jaque la independencia profesional del mando— dio pie a que se trasluciera hacia la opinión pública lo que pensaba y sentía esa rama del ámbito castrense. Allí la situación se percibía crítica desde hacía ya algún tiempo. Como ha señalado el general Gustavo Leigh, "fíjese que con Allende se llegó a un estado de tensión tal que una vez propuse a mi comandante en jefe que todos los generales de la fuerza aérea fuéramos a hablar con él. El general César Ruiz Danyou nos obtuvo una entrevista el 19 de mayo del 73. Nos reunimos en La Moneda con don Salvador Allende, solos, él y nosotros, conversamos del oro y del moro, a calzón quitado, y él nos dejó hablar a todos, uno por uno. Con uno solo se enojó. Uno que le dijo que él no podía responder de lo que las fuerzas armadas pudieran hacer el día de mañana, y Allende se indignó por eso. Pero siguió oyendo. Y después que terminamos de hablar todos, tomó la palabra y, olvídese, era como si no hubiese oído nada, como si no hubiera captado nada: su gobierno iba rumbo a la gloria, al éxito rotundo. Dijo que nosotros éramos —nos quiso decir, aunque no lo mencionó— unos desinformados, unos ignorantes, que no teníamos idea de nada, que él sí sabía a donde íbamos, y que un día íbamos a llegar donde él quería y que sería una maravilla. Nos fuimos a nuestras casas y ahí pensé que Salvador Allende estaba perdido, que esto se iba a desmoronar en cualquier momento, y entonces nos empezamos a preocupar de ver qué íbamos a hacer. (...) Veía descontento en otros generales, veíamos que no había comunicación entre una institución y otra. Había miedo de hablar, nadie se atrevía a hablar porque podía ser catalogado como opositor. Había una situación muy inconfortable. Pero el día que habló ese señor Altamirano, un domingo, en una radio que transmitió el discurso para todo el país, creo que habló en Valparaíso o en el Estadio Chile, no sé, pero fue un discurso violento e insolente. ¿Se acuerda usted que reconoció que se había entrevistado con los suboficiales de la Armada, y que lo haría tantas veces como fuera necesario, porque los suboficiales eran pueblo, y las fuerzas armadas eran pueblo, y él era el pueblo? Fue la gota que derramó el vaso. Ahí nos dimos cuenta que la cosa era grave, muy grave. Y ahí fui a hablar con Augusto Pinochet y le dije que no se podía seguir así, que había que ir pensando qué se iba a hacer".[63]

---

63 SERGIO MARRAS, *Confesiones*, Ediciones del Ornitorrico, Santiago, 1988, pp. 128-129.

Los antecedentes obtenidos en la investigación de la infiltración marxista en la Armada se condicen con las evidencias descubiertas posteriormente en La Moneda, y hacen posible asegurar, más allá de toda duda, que efectivamente se planeaba descabezar al Ejército asesinando a sus mandos durante el almuerzo que Allende ofrecería en La Moneda con motivo del Día de las Glorias del Ejército. Ese sería el punto de partida de la insurrección armada que, ¡por fin!, consolidaría la empantanada revolución. El día 22 de agosto Allende ordenó la preparación de lo que llamó "plan de defensa cívico militar". El documento elaborado en cumplimiento a la instrucción presidencial, cuyo nombre en clave era Plan Zeta fue encontrado en la caja fuerte del Subsecretario del Interior, el comunista Daniel Vergara, y se le publicó en el Libro Blanco para asegurar la constancia histórica de la mayor felonía urdida por los marxistas-leninistas en Chile: la fría preparación de una guerra civil. Aunque todavía hay suspicaces que a pesar de la evidencia se niegan a creer en la existencia del Plan Zeta, el hecho es que jamás pudo ser desmentido y por siempre estará en la memoria colectiva de la nación chilena, especialmente entre sus hombres de armas.

Después de la derrota, algunos dirigentes de la Unidad Popular afirmaron, desde el exilio, que justamente el día 11 de septiembre Allende anunciaría un plebiscito por el que sometería a la ciudadanía la aprobación de las tres áreas de la economía —social, mixta y privada— que a pesar de los requerimientos del Parlamento y de la Contraloría General de la República se había negado tenazmente a promulgar. Aprovecharía la oportunidad, dicen, para ratificar el apoyo ciudadano en algunos puntos relacionados con el cumplimiento de la parte final de su programa. Si lo perdía, renunciaría a su cargo. Obviando que la posibilidad legal de dicho plebiscito era discutible, la verdad cierta es que nunca se encontró prueba alguna de la seriedad de esa intención, de manera que se trata de un secreto muy bien guardado entre Allende y sus íntimos o, lo que es más probable, de una simple patraña destinada a sembrar dudas sobre la inevitabilidad del Pronunciamiento.

Sea como fuere, a efectos de análisis, se podría dar por cierto aquél propósito. ¿Qué habría ocurrido en ese escenario? Se comprende que de haberlo ganado —lo que no era del todo imposible dada la adulteración de los registros electorales y otros recursos a los que la Unidad Popular podía echar mano, pues había perdido el pudor hacía rato en el manejo de semejantes contingencias— Allende habría tenido el camino expedito para dar los pasos que le faltaban y consumar así su obra revolucionaria. Pero es dudoso en extremo que de ello se pudiera haber obtenido algún resultado positivo desde el punto de vista moral, político, económico o social, que fuera significativo o al menos hubiese contribuido a revertir la situación del país, que era lo que verdaderamente importaba.

En cualquier caso, poco se habría resuelto con una consulta popular de esa especie a esta altura del proceso, cuando el país estaba ya literalmente destruido. Si el resultado hubiese favorecido al Gobierno, habría significado acelerar la revolución socialista con las consecuencias previsibles... hasta que alguien descubriera que no es muy inteligente suicidarse por mayoría de votos. Pero si el veredicto de las urnas hubiese sido contrario a Allende, ¿se habrían conformado las huestes de la Unidad Popular con la derrota? Difícilmente. Lo probable es que Allende habría tratado a toda costa

de comprometer a la fuerza pública, utilizándola a favor suyo en las recriminaciones electorales que inevitablemente habrían surgido. No es mucho aventurar que de allí podría haber surgido el incidente que los violentistas necesitaban para justificar su acción masiva. Tampoco es obligado tener la ingenuidad de olvidar que con las Fuerzas Armadas y Carabineros desplegados en pequeños núcleos para cubrir una elección, los marxistas habrían tenido la condición militar ideal para tomar la iniciativa y hacer actuar con éxito sus brigadas, cordones y grupos de combate. El lumpen, desatado por los subversivos, habría hecho el resto.

En suma, ese virtual plebiscito, del cual todavía se escucha hablar cada cierto tiempo, habría sido un golpe maestro de Allende para imponer sus fines. Políticamente no tenía asidero. Si hubiese sido factible realizarlo, dado que a esas alturas para la ciudadanía lo que estaba en juego no era lo de las tres áreas de la economía —a esa hora ya en bancarrota— sino la permanencia de Allende en La Moneda, probablemente lo habría perdido. Pero su sólo anuncio habría abierto ante la historia una duda sobre el talante democrático de la Unidad Popular, legitimando su posición y creando de paso una ocasión para que sus brigadas armadas extremaran la violencia, forzando a los militares a aceptar las condiciones más desfavorables para enfrentar la forma de guerra interna que al marxismo le convenía.

Como se ve, las condiciones imperantes en septiembre de 1973 no dejaban otra alternativa que forzar un cambio profundo en el rumbo de la República. Podía ser en dirección a la revolución marxista, para consolidarla y establecer sin más en Chile otra Cuba. De ese abismo se estaba a un paso. O se podía confiar en la potencialidad de la única y última reserva intacta con que el Chile de siempre todavía contaba, sus Fuerzas Armadas y Carabineros. En un sentido o en otro, se trataba de un paso inevitable.

Alex Varela, prestigiado editorialista, resumió así lo ocurrido: "Hágase cualquier chileno no cegado por el sectarismo y el odio un exámen introspectivo de conciencia, y tendrá que llegar inevitablemente, a la conclusión de que las Fuerzas Armadas, haciendo honor a sus limpias tradiciones, procedieron correctamente, porque ayudaron determinantemente a salvar a Chile de una desgracia que no habría tenido, quién sabe por cuanto tiempo más, rectificación posible. ¿Qué se han producido pérdidas de vidas y desgracias y hasta crueldades lamentables? Ha sido el duro precio que hubo que pagar frente a esta coyuntura tremenda".[64]

Por un gobierno nacional.

Cuando la Junta llevaba tres meses en funciones, su Presidente concedió una entrevista llamada a tener gran importancia. En ella se abordaron temas de fondo, relacionados con el carácter de la misión que las Fuerzas Armadas y de Orden se proponían acometer. Después de publicada, nadie pudo ignorar cuáles serían los rasgos esenciales de su gestión. Al repasarla un cuarto de siglo más tarde, admira comprobar lo exacto del

64 ALEX VARELA, "Se adelantaron, simplemente", en El Mercurio de Valparaíso, 18.9.73. El artículo está recogido en AUGUSTO PINOCHET UGARTE, *El día decisivo*, op. cit., pp. 277-279. La cita en p. 279.

diagnóstico y la fidelidad con que los hombres de armas mantuvieron los objetivos que de aquella temprana apreciación se derivaban.[65]

En esa oportunidad, tras reiterar que "la decisión de asumir el poder fue un imperativo histórico que nos obligaba a sofocar una guerra civil y el Gobierno actual es una consecuencia de esto, no un propósito nuestro", aclaró que "no hemos pensado jamás perpetuarnos en el poder, pero tampoco nos hemos fijado plazos como pretenden hacerlo ciertos políticos por cuenta nuestra al interpretar nuestras palabras a su antojado gusto. Decimos que para normalizar el país y preparar un plan de gobierno necesitamos seis meses o algo más, pero esto no significa que sea la meta a que aspiramos. Cuando asumimos el poder vimos que se nos ofrecían tres alternativas posibles: ser una transición momentánea entre dos gobiernos políticos; o los iniciadores de un gran movimiento cívico-militar depurador de nuestras costumbres; o, simplemente, convertirnos en un régimen militar absoluto y permanente que mantuviera una buena administración del Estado. Como es lógico, conociendo la tradición de nuestras Fuerzas Armadas, la tercera alternativa tenía que ser descartada de inmediato; y al conocer los efectos de la administración marxista tuvimos que descartar la primera, porque nos encontramos con una corrupción moral y administrativa increible".

Complementando lo anterior, el general Pinochet añadió: "Al elegir esta alternativa debemos extender el juicio crítico no sólo al gobierno marxista destituido sino a todos los anteriores que de una manera u otra fueron generando las condiciones para que ese gobierno pudiera constituirse. Hay en todos ellos parte de responsabilidad en lo ocurrido en estos últimos 3 años anteriores al pronunciamiento de las Fuerzas Armadas; y por lo tanto es preciso revisar todo aquello que pudo generar el mal y llevarlo a los grados que conocimos."

Finalmente, respondiendo a una pregunta sobre qué representa esa alternativa frente a los partidos políticos, precisó: "Este movimiento cívico-militar es profundamente nacionalista y, por lo tanto, ajeno a todo aquello que divide, como es el caso de los partidos políticos. No significa ello que desconozcamos su existencia, pero sí pensamos que existen ideales comunes que están por encima de lo meramente partidista y a los cuales debemos propender. Por esto, muchos militantes de diversos partidos políticos colaboran con nosotros, haciendo abstracción de su partidismo. Más aún, lo exigimos para evitar así el sectarismo que tanto mal hizo a Chile".

De este modo, abordando el problema nacional en su real dimensión, el general Pinochet salió al paso de la oligarquía partidista que, a pesar de haberse opuesto a la Unidad Popular, ahora instaba por un Gobierno Militar breve, el indispensable para ordenar el país, llamando después a elecciones generales. Se entiende que ellos verían lo que habría que hacer de ahí en adelante.

Para esas personas tan apuradas —algunas de las cuales habían combatido a la Unidad Popular desde la primera hora y otras, que se distinguían por exigir con mayor vehemencia la reimplantación inmediata de la liturgia democrática, se les habían sumado algo más tarde— se trataba de un problema mecánico bastante simple. En una

65 El Mercurio, 13.11.73, pp. 1 y 8.

sociedad como la nuestra, parecían decir, a los militares correspondía efectuar el trabajo de sacar a los marxistas del poder, limpiar de extremistas al país, ordenarlo someramente y dejarles libre el camino. Así, superado el desgraciado tropiezo que había significado la gestión marxista-leninista —porque hay que reconocer que esos tipos se habían vuelto incontrolables— pronto la vida de un país tan maduro que hasta se había dado el lujo de soportar que al amparo de los resquicios legales y otras mañas se hubiera provocado tamaño estropicio, volvería a ser normal, esto es, más o menos igual que antes, como debe ser en la democracia hemos dirigido. Después de todo, razonaban, en 1891 los militares se batieron entre ellos en batallas de verdad, con siete mil muertos y, sin embargo, una vez alcanzada la decisión, regresaron de inmediato y sin chistar a sus funciones normales. El almirante Jorge Montt había ocupado La Moneda durante un período presidencial, entonces de cinco años, encabezando un gobierno integrado por representantes de los partidos políticos; después había vuelto tranquilamente a Valparaíso, desempeñando el cargo de Director General de la Armada hasta el año 1912. Y en 1925, el 23 de enero, un grupo de oficiales había derrocado a la Junta Militar establecida el 11 de septiembre del año anterior, llamando de inmediato a Arturo Alessandri, que reasumió su cargo apenas regresó de Europa, a fines de marzo de ese mismo año. Sin embargo, esos espíritus de frágil memoria olvidaban que las causas de aquellas intervenciones eran totalmente diferentes a las que habían impulsado al elemento militar hacia el 11 de septiembre de 1973. La última crisis era más profunda, y por lo mismo el país requería una cirugía mayor y un margen más amplio de tiempo para la imprescindible convalecencia.

Para quienes miraban la situación con una dosis más fuerte de sentido común, les parecía evidente que el proceso de reconstrucción nacional constituía un desafío de largo aliento. Limitarse a adoptar soluciones de parche, quizás populares, equivalía a provocar una recaída en breve plazo. Era necesario capitalizar la intervención militar, es decir, convertir el grave paso que se había dado por imperativo ineludible en una oportunidad para remediar las causas que la habían provocado. Y esa empresa requería tiempo. Los grandes designios no pueden realizarse en un solo día. En rigor, ninguna obra duradera puede ejecutarse sin la ayuda del tiempo, porque el tiempo jamás respeta lo que el hombre se atreve a realizar sin su colaboración. Si los mandos militares hubiesen preferido desembarazarse con rapidez de la enorme responsabilidad que el fracaso de toda una generación política había descargado sobre sus hombros, el Pronunciamiento no habría alcanzado la significación histórica que por siempre tendrá. En vez de marcar el punto de inicio de una nueva etapa en la convivencia de los chilenos, dejando atrás una época de decadencia, habría sido un paréntesis, todo lo importante que se quiera, pero sólo eso, una tregua en una lucha cuyo término no podía ser otro que el desgarramiento definitivo, la guerra civil.

Es también evidente que las Fuerzas Armadas y de Orden carecían de un plan preconcebido para remediar los graves males que afligían a la nación. Contrariamente a lo que creen los simples y los frívolos, no existen recetas mágicas para guiar la voluntad colectiva hacia puertos seguros. Pero es preciso actuar. En política, los intelectuales suelen apasionarse por las intenciones; los militares, por los resultados. Quienes han vivido lúcidamente grandes desafíos históricos han comprendido que éste es

un punto capital para los hombres que no se resignan a sufrir la realidad, sino que la crean y luego la encauzan hacia un fin noble. André Maurois, por ejemplo, comprendió cabalmente que "cuando se trata de reconstruir un país, ningún mapa de la vida social nos permite poner proa de manera cierta a la felicidad y al progreso. Ni más ni menos que el razonamiento puro, el método experimental, aplicado con rigor, no puede guiar a un ministro, a un jefe de empresa o al comandante en jefe de un ejército. Y sin embargo es necesario que actúen, que decidan".[66]

El Gobierno Militar debía, pues, tomar decisiones. Con imaginación y patriotismo, apoyado en la información técnica que aún no tenía, pero que ya se estaba reuniendo por los asesores del mando, se iría diseñando el camino. Lo esencial, como siempre ocurre en los instantes cruciales, era poseer el carácter suficiente para resolver y la voluntad necesaria para perseverar en el empeño. Tales virtudes no faltaban: son consustanciales al hombre de armas.

En otro ámbito de ideas hay una corriente de opinión que critica a los militares por haber gobernado con absoluta prescindencia de los partidos políticos, incluso negándose a formar una coalición con los partidos democráticos que se habían opuesto a la Unidad Popular. Conviene analizar ambos puntos.

En cuanto a lo primero, es decir, porqué no se llamó a elecciones de inmediato, cabe recordar que cuando asumió el Gobierno Militar el país había llegado a una situación límite que fue, precisamente, lo que hizo inevitable la intervención castrense. Sin resolverla, traspasando la solución del problema a quienes sucesivamente habían manejado las cosas sin poder arreglarlas, los militares habrían fallado lamentablemente a la nación en el momento en que su presencia era más necesaria. Habría sido un grave error de juicio estimar que sólo y exclusivamente los partidos ideológicos de izquierda eran culpables del fracaso urdido en la última década. Su culpa es mayor, qué duda cabe, pero la dolorosa verdad es que las formaciones políticas de la época, entre todas, impulsaron al país en una caída acelerada. Esto indica que más allá de los partidos era el sistema mismo lo que funcionaba mal y no era capaz de ofrecer soluciones reales a las exigencias de la sociedad.

Tampoco se podía ignorar que el arco democrático del espectro político distaba mucho de ser homogéneo. En 1964 y durante la Unidad Popular les había unido la amenaza marxista, pero existían enormes diferencias entre el partido Nacional, la Democracia Radical y la Democracia Cristiana. ¿Cuál sería elegido para asumir la función de gobierno? Era difícil que pudieran formar una coalición mínimamente cohesionada y, si no se integraban en un sólido bloque, la gobernabilidad del sistema sería volátil como en el pasado.

Se imponía, entonces, la concepción de un gobierno fuerte y de unidad nacional, capaz de cicatrizar las heridas producidas a lo largo de una década de ácida confrontación política y de levantar nuevamente al país. En otras palabras, la pugna ideológica debía ser suspendida para concentrar las energías de la nación en una meta compartida, vertebrada en un objetivo nacional. Los partidos, con escaso arraigo en la masa

---

66 ANDRÉ MAUROIS, *Un arte de vivir*, Editorial Hachette, Buenos Aires, 1944, pp. 40-41.

ciudadana y fuertemente divididos entre sí, no eran aptos para una tarea de esa naturaleza. Para decirlo de una vez y claramente, el desafío les quedaba grande.

Descendiendo al terreno electoral, era posible estimar que en número de votos habían tercios equivalentes. Si en las eventuales elecciones ganaba la democracia cristiana, la derecha —donde está el empresariado cuyo concurso era vital para reconstruir al país— quedaría entre dos fuegos, con un frente opuesto políticamente al gobierno y con su espalda expuesta a la acción corrosiva de la izquierda marxista. En esas circunstancias, como desde el punto de vista económico el porvenir se preveía duro, las ganancias políticas serían de esta última.

En caso de vencer la derecha, muy pronto y por afinidad natural la democracia cristiana habría llegado a un acuerdo con un sector de la izquierda, de modo que el gobierno se habría enfrentado con una oposición cerrada a todo con tal de capitalizar votos y retornar al poder, y una vez más la gran ganadora habría sido una fuerza disolvente.

Es obvio que si el gobierno hubiera resuelto llamar a elecciones, la ex Unidad Popular, bajo otro nombre pero con los mismos ideales, se habría revitalizado para emprender una nueva fase de la lucha política, sin abandonar sus elementos y medios violentistas. Como la Guerra Fría estaba en plena vigencia, estos equipos habrían recibido abundante ayuda para continuar la lucha, y el gobierno de turno jamás sería suficientemente fuerte como para enfrentar la subversión.

Otro aspecto de importancia en caso de una elección próxima sería definir qué actitud adoptar con respecto a los partidos marxistas de la ex Unidad Popular. ¿Se les autorizaría para que tomaran parte en esa elección? ¿Se les dejaría legalmente al margen en razón de su conducta antidemocrática? En el primer caso, se habrían creado las condiciones para resucitar la situación previa a 1973, con partidos marxistas actuando en parte dentro de la ley y en parte sumergidos, lo que habría imposibilitado el ambiente de tranquilidad necesario para reconstruir el país. Y sin reconstrucción éste caería nuevamente en el círculo vicioso de inestabilidad, mayor pobreza y mayor inestabilidad, alimentado una vez más por la demagogia. En el caso de que se les hubiera proscrito, la nueva etapa democrática habría partido con un serio reparo, fuente segura de posteriores dificultades. Por lo demás, a sus simpatizantes —no a sus militantes, pasibles de ser borrados de los registros electorales, puesto que en cualquier caso éstos debían ser depurados para remediar la manipulación de que habían sido objeto durante la Unidad Popular— les sería fácil burlar las restricciones creando nuevas fachadas, un partido instrumental de apariencia anodina, por ejemplo, o votando simplemente por otro partido ya establecido y sumamente permeable.

Resumiendo, según los resultados de las elecciones, se podrían presentar las siguientes situaciones en orden de probabilidad:

La democracia cristiana en el gobierno, encabezada por su sector más conservador y bajo la conducción de Eduardo Frei, con una oposición política más o menos clásica de la derecha y otra violenta y antisistémica de la izquierda marxista. Luego de un inicial apoyo internacional clamoroso, pero más bien retórico, a poco andar se habría regresado a una situación caótica.

La derecha en el gobierno, con la cerrada oposición política de la democracia cristiana, a la que en tales circunstancias se le habría desgajado algún sector hacia la izquierda, y un rechazo violento y antisistémico por parte de un amplio frente de izquierda prohijado por la Unión Soviética. Siempre existiría la posibilidad de una alianza entre la democracia cristiana y un sector de la ex Unidad Popular que al menos formalmente se comprometiera con las reglas de la nueva democracia, atenuando sus rasgos marxista-leninista, lo que no podría ser sino una operación cosmética, tal como había ocurrido con la aceptación del Estatuto de Garantías en 1970.

La democracia cristiana y la derecha en el Gobierno, con la oposición del nuevo referente de izquierda actuando paralelamente en la superficie y en la clandestinidad. Esta posibilidad era muy poco probable, dado que los temperamentos de ambas formaciones son demasiado diferentes. En realidad, fuera de su común defensa de la democracia en contra de Allende, lo único que les relacionaba era su mutuo desprecio, un rasgo que lamentablemente ha permeado a la clase media del país.

Cualesquiera fuesen las condiciones, un gobierno de partidos habría exigido una dirección enérgica para mantener el orden y no hubiera podido prescindir de una estrecha colaboración con las Fuerzas Armadas y Carabineros. Ese gobierno, aún suponiéndole la mejor voluntad, habría sido ineficaz ante la subversión que hubiese tenido que afrontar: las Fuerzas Armadas y de Orden, entrabadas por las necesidades electorales de los partidos habrían tenido que estar en permanente lucha contra la ultra izquierda en una contienda de desgaste, como sucedió en El Salvador, Guatemala, Nicaragua, Perú y otros países latinoamericanos, con miles y miles de muertos. Mientras tanto, el desarrollo del país se habría paralizado.

Por otra parte, haber llamado a elecciones al poco tiempo de ocurrido el Pronunciamiento Militar, con todas las fuerzas políticas todavía en estado de efervescencia por los tensos años que recién dejaban atrás y compartiendo la sensación de que la última palabra todavía no había sido dicha, habría generado fatalmente un clima incompatible con la regeneración moral, económica y social que la mayoría ciudadana reclamaba con urgencia para mejorar las condiciones de su vida diaria.

Siendo esa la realidad, la posibilidad de llamar a elecciones para elegir Presidente y Parlamento en un plazo cercano al 11 de septiembre, aparte de cándida, no tenía ninguna posibilidad de sustentarse en el tiempo. De haberse concretado habría dejado a los militares fuera de toda crítica, pero habría sido nefasta para el futuro del país. Haberlo entendido cabalmente, y a pesar de todo haber aceptado el enorme sacrificio que suponía, constituye un acierto de la Junta de Gobierno, una muestra del sentido del deber que anima a las instituciones armadas y, muy especialmente, del grado de identificación con su sentir respecto a las convicciones del general Augusto Pinochet.

Ahora se debe dar respuesta al segundo asunto, a saber, porqué el Gobierno Militar no se estructuró con el apoyo orgánico de los partidos políticos no marxistas. Algo se acaba de adelantar, pero la trascendencia de este tópico en la configuración de su régimen de gobierno invita a ahondar en su estudio.

Las decisiones que debía adoptar la Junta de Gobierno tenían que considerar, como antecedente básico, tanto la gravísima situación en que se encontraba el país —

que no podía ser peor— como la necesidad imperiosa y urgente de reconstruirlo y renovarlo para que la unidad nacional, pilar de su existencia histórica, pudiera ser nuevamente un hecho efectivo y dinámico. A juicio del propio Eduardo Frei, "lo cierto es que para que una sociedad democrática pueda subsistir es fundamental un mínimo de consenso entre todos los que la integran, y el reconocimiento, por todos, de ciertos valores que hacen posible el ejercicio de la libertad y la aplicación del derecho. En la realidad, en Chile ese consenso se había roto".[67] Es difícil decirlo mejor. En efecto, no era otro el fondo de la crisis que había hecho inevitable la intervención militar.

Así las cosas, ¿era razonable pretender gobernar con quienes eran parte activa y comprometida en ese proceso de quiebre del consenso? La respuesta no debe atender a la intención de los partidos políticos, sino a la escueta realidad, al fruto de sus actuaciones, a la extrema polarización a que habían arrastrado a la población.

De otra parte, formalizar una combinación política con los partidos no marxistas, dada su muy tenue organización, su falta de arraigo popular y sus intereses inmediatos, hacía emerger una interrogante sobre la eficiencia que tendrían para enfrentar esta enorme crisis nacional. Los cuerpos armados poseen una doctrina y una estructura orientada a la solución de situaciones difíciles, donde lo que prima es el carácter, pues es preciso actuar con rapidez y expedición, obviando muchas discusiones, acuerdos de comité y trámites que son usuales en la administración ordinaria del Estado. Para ello requieren contar con facultades adecuadas a cada nivel jerárquico y efectivamente respaldadas cuando se las utiliza. Un militar dista mucho de ser un bonachón funcionario de uniforme, pero tampoco es un enérgico autómata: fijada la misión, le corresponde emplear sus medios para cumplirla y ejecutar con iniciativa lo que sea menester. Esa era la actitud que las circunstancias exigían. Una vez alcanzada la línea de partida para el funcionamiento regular de la nueva democracia, es decir, una vez alcanzados los objetivos que el Gobierno militar se había impuesto, obviamente el poder político volvería a su instancia soberana y la ciudadanía escogería libremente a las personas llamadas a regir los asuntos públicos que materializan el bien común de la sociedad.

Una cohabitación entre el estamento militar y los partidos políticos no marxistas habría dado la cierta impresión de normalidad a la situación institucional de Chile y seguramente habría aumentado internacionalmente la simpatía hacia el Gobierno Militar. Pasando por alto que granjearse simpatías a cualquier precio no es propiamente un objetivo militar, esa medida habría ignorado la verdadera situación de la comunidad nacional, que estaba muy lejos de ser normal puesto que, como lo señalaba el ex presidente Frei, había perdido sus consensos básicos. Una medida de este tipo habría dado un tremendo gusto a los que argumentaban que el Pronunciamiento Militar era evitable, ya que para ellos la situación del país en septiembre de 1973, si bien difícil, todavía estaba dentro de la normalidad, y por lo tanto se debió haber afrontado con medios también normales. Pero esa era la opinión de una minoría de chilenos que no

67 EDUARDO FREI MONTALVA, prólogo a GENARO ARRIAGADA HERRERA, *De la vía chilena a la vía insurreccional*, Editorial del Pacífico, Santiago, 1974, p. 23.

se había distinguido por su perspicacia para descubrir hacia donde caminaba el país, esto es, hacia una guerra civil.

Tal medida, por tanto, más que ayudar, desdibujaría la acción del Gobierno Militar, aumentando las posibilidades de su fracaso. Y ello, de ocurrir, sería funesto para todo el país, pues ya no contaría en ese caso con otra reserva intacta a la que recurrir, como lo fueron las instituciones armadas en septiembre de 1973.

En efecto, dar vida a un gobierno de coalición con los partidos políticos, con cualquiera de ellos, habría significado para los mandos militares la obligación de entrar en componendas incompatibles con su pertenencia a toda la nación, no a alguna de sus partes. Además, al llamar a cualquiera de los partidos, se habrían activado con cierta razón las demás organizaciones políticas, lo que habría generado un cuadro que en ningún caso habría permitido una acción tan coherente, amplia y trascendente como la que había que realizar urgentemente.

Consecuencia de la gravedad de las circunstancias —que por cierto los militares no había creado— es que tuvieron que situarse por sobre los partidos políticos, y desde esa posición de preeminencia desplegar su acción revificadora sobre los intereses generales y permanentes de la nación. Si hubiesen permitido una temprana apertura política, en lugar de avanzar hacia la unidad, el cuerpo social se habría fragmentado todavía más y, lo que es extremadamente grave, las Fuerzas Armadas y Carabineros habrían pasado a ser una facción más en su seno, se habrían "argentinizado".

Naturalmente, actuar sin las organizaciones políticas quiere decir exactamente eso. Cosa distinta fue la colaboración patriótica de miles de personas que, a título individual y desde el primer día, ocuparon puestos de la mayor importancia en la tarea de reconstruir su país. Porque de eso se trataba: había que levantar un país al que una década revolucionaria había tumbado. El aporte técnico de los mejores profesionales fue indispensable y a ellos se debe parte esencial del éxito del Gobierno Militar. A ninguno se le preguntó su anterior filiación política; bastaba que conocieran la materia que se les encomendaba y que tuvieran la grandeza requerida para servir con abnegación una causa noble como ninguna: engrandecer la patria. No es otra la piedra sillar de un auténtico gobierno nacional.

En otro orden de ideas, la incorporación de los partidos no marxistas a tareas de gobierno tropezaba con la dificultad de conciliar dos tendencias que en las décadas anteriores habían sustentado convicciones muy diferentes sobre lo que desde el Estado había que hacer en la nación, que es el radical punto de partida de toda gran política. Para iniciar la reconstrucción del país era indispensable contar con una idea clara sobre el particular, no bastaba la actitud anti-marxista ni el negativo juicio sobre la Unidad Popular. En lugar de avanzar guiados por un pensamiento rector, el Partido Nacional y la Democracia Radical, de una parte, y la Democracia Cristiana, de otra, habrían discrepado de inmediato en ese punto medular. Además, actuar con ellos, significaba dejar fuera a la masa de independientes que, lejos de sentirse interpretados por los partidos políticos existentes, habían combatido a la Unidad Popular desde las organizaciones gremiales y vecinales.

No era ajena a esta última observación el hecho de considerar que, en los hechos, los partidos políticos habían sido sobrepasados desde el *paro nacional* de octubre de 1972, de manera que no se les podía estimar como únicos y exclusivos representantes del sentir de la ciudadanía.

Refuerza lo anterior el que muy pronto uno de los partidos más importantes, la Democracia Cristiana, encaminara sus pasos hacia el fortalecimiento de su opción a constituirse en alternativa de gobierno, haciendo primar, una vez más, su interés particular por sobre el interés general. Esta actitud, hasta cierto punto, es inevitable en una colectividad ideológica y en tal sentido no admite un juicio de reproche. Se trata, simplemente, de una constatación imposible de soslayar.

En consecuencia, de haberles incorporado a su gestión, más temprano que tarde el Gobierno Militar habría tenido que optar por una de las corrientes anti-marxistas, convirtiendo a la otra, automáticamente, en oposición legítima. Ese mecanismo de exclusión, normal en una democracia ya consolidada, resultaba incompatible con las exigencias del momento, pues entonces era indispensable la unión de todos tras un propósito común. En otras palabras, si lo que se quería hacer era volver a crear las condiciones morales, sociales, políticas y económicas que hacen posible la existencia de una democracia, no se podía actuar como si ellas ya existiesen.

Desde otro punto de vista, iniciar el proceso de reconstrucción nacional con el apoyo oficial de algunos partidos políticos, implicaba abrir la puerta a la influencia de sectores que habían militado en la Unidad Popular. Habría sido muy ingenuo desdeñar que a título individual, aunque concertado, no intentarían actuar a través de los partidos reconocidos legalmente. Esto es obvio en el aspecto electoral, pues al carecer de un partido propio habían votado por la Democracia Cristiana, que les es más afín. Pero hay otro aspecto, con mayor fondo, en esta cuestión. Entre los partidarios de la Unidad Popular siempre hubo una minoría violenta, dogmática y antisistémica que arrastró al conjunto hacia el despeñadero; pero también hubo personas que dudaron de la factibilidad de una lucha abierta y revolucionaria y actuaron según las premisas gramscianas, es decir, apoderarse del sentimiento y las ideas en el plano social, modelándolas según las categorías del ideario marxista no leninista, para conquistar más tarde, incruentamente, el plano político. A ellos no les habría sido dificil intentar "blanquearse". De hecho, muchos lo hicieron, renovándose con la velocidad de un *travesti*, lo que no dejaba de ser sospechoso. Otros, es verdad, lo hicieron con sinceridad y aceptaron los cambios efectuados por el Gobierno Militar como algo inevitable. Los gramscianos, sin duda alguna, se habrían enquistado en las organizaciones sociales y culturales, para llevar a cabo desde allí su labor de zapa.

Junto a lo anterior, el grupo más combativo de la Unidad Popular, el integrado por elementos francamente castristas, se habría dedicado de lleno a la violencia subversiva subterránea —como de hecho ocurrió—, pero con el apoyo moral, intelectual y material de algún partido reconocido legalmente. El receso político les privó de esta cobertura. Si alguna facción política les prestó ayuda, dentro y fuera del país, no fue de manera orgánica, sino más bien esporádica, por miedo, cálculo ante una coyuntura o simple lástima por el compañero caído en desgracia. El discurso oficial de los partidos en receso fue, pues, claramente anti-subversivo, y ello contribuyó a crear el clima que

hizo posible la reconstrucción moral y material del país, que en su vertiente institucional se plasmó en un sistema democrático profundamente renovado, donde las actitudes disolventes y revolucionarias carecen de espacio natural.

Vistas las cosas con perspectiva, es posible asegurar que la mayor motivación que habrían tenido las fuerzas agrupadas en la Unidad Popular para hacer una formidable oposición, habría sido el hecho de excluir su participación y aceptar la de otras fuerzas partidistas. La pacificación de los espíritus y el olvido de lo que significó su adhesión al gobierno de Allende, fue un bien para el país. Aunque hay nostálgicos que se quedaron anclados en esa época, no gravitaron en las decisiones de carácter nacional. Esto es tan cierto que ningún grupo responsable desea hoy la reedición de una experiencia similar.

En suma, si el Gobierno Militar hubiese invitado a las fuerzas no marxistas a colaborar en su gestión, no habría podido actuar libremente para llevar a cabo la tarea fundacional y de restauración nacional que llevó a cabo, ni habría concitado la unidad que cimentó el nuevo orden institucional. Permitir un prematuro proceso de competencia política partidista, lejos de ayudar a la recuperación de un país agotado y dividido, habría llevado a una pronta entrega del poder y seguramente a un·caos y a una anarquía para cuya solución ya no estarían, como antes, intactas y en reserva las Fuerzas Armadas y de Orden. Gracias al receso político ellas pudieron cumplir su patriótico cometido y retirarse después incólumes y prestigiadas ante la ciudadanía.

Un mérito innegable del general Pinochet fue haber visualizado todo esto con claridad, y mereció el apoyo de todos los chilenos de buena voluntad que, muchas veces dejando de lado legítimas aspiraciones personales, se incorporaron sin dobleces a la tarea nacional que encabezaban los mandos militares. Esos compatriotas, honorables y capacitados como el que más, comprendieron que en esa hora era absolutamente inconveniente compartir el poder con los partidos políticos, a los que se les fijó más tarde un marco institucional para su actividad futura. Al decidir esta materia, sin duda pesó en el ánimo del Jefe Supremo de la Nación el recuerdo de lo acaecido en el período 1924-1932, cuando los militares fueron envueltos por los partidos políticos y a pesar de su patriótica labor de regeneración nacional, que no pudieron culminar, tuvieron que absorber muchos costos y culpas que en rigor eran atribuibles a las veleidades de un juego político partidista sumido en los malos hábitos de la época precedente.

Consideraciones de esta índole fueron configurando el carácter eminentemente nacional del Gobierno Militar, inspirado en la concepción portaliana. El espíritu portaliano es pragmático por excelencia, es decir, no toma en serio las quimeras. Y los hombres de armas, también hay que decirlo, no desconfían de las teorías políticas por principio, sino por memoria histórica.

Así, al conmemorarse el primer aniversario del Pronunciamiento, el general Augusto Pinochet pudo afirmar: "Por primera vez en este siglo, Chile tiene un gobierno auténticamente nacional. Un gobierno nacional es el contrapunto al gobierno de partidos o de clases, tales como los que han dominado en nuestro país prácticamente desde 1891. Para tales gobiernos, los objetivos nacionales no existen, lo que da lugar a confusos "Programas de Gobierno", generalmente de logros mezquinos y cargados de

dogmas ideológicos foráneos, si es que no pretenden hablar por un sector de la ciudadanía dispuesto contra el resto de los chilenos. (...) Chile fue una gran nación en el pasado, precisamente cuando consolidó su independencia política y, bajo el sello inspirador de la República portaliana, tuvo gobiernos con sentido y objetivos verdaderamente nacionales, dirigidos por hombres con un profundo espíritu de servicio público. Y su decadencia coincidió con el advenimiento de gobiernos partidistas o demagógicos, de modo que el país fue criminalmente dividido en la lucha estéril y mezquina por las ventajas privadas".

Consecuencia de este diagnóstico —cuya médula radica en la innegable relación que muestra la trayectoria política del país entre períodos de grandeza, que se han dado sólo cuando la gestión de gobierno fue ejercida con voluntad y criterio nacional, y períodos de decadencia, ocurridos cuando ella fue mediatizada por los intereses partidistas— aplicado al momento de restauración nacional que se vivía, es que el general Pinochet anunció lo siguiente: "El receso político y de los partidos tendrá que ser prolongado, entonces, por muchos años más, y sólo podría ser responsablemente levantado cuando una nueva generación de chilenos, formado con saludables hábitos cívicos y patrióticos e inspirados en un auténtico sentido nacional, sean capaces de asumir la dirección de la vida pública. Aquellos que traten de romper este receso en alguna forma, se estrellarán con nuestra implacable decisión de no permitirlo".[68]

Los soldados, en todo tiempo y lugar, siempre están al servicio de algo mayor que ellos mismos. En este caso, su ideario se traducía en restablecer a Chile, sacándolo de una larga etapa de decadencia para proyectarlo hacia el sitial que había ocupado en sus mejores días. ¡Misión hermosa y exigente como ninguna!

68 "Palabras del Jefe Supremo de la Nación, Augusto Pinochet Ugarte, al Conmemorarse el Primer Aniversario de Gobierno", Oficina de Prensa de la Presidencia, 11.9.74, pp. 5, 6 y 8.

CAPITULO V

LA RECONSTRUCCION NACIONAL (1973-1981)

Legitimar el sacrificio quizá sea
lo más grande que puede hacer un hombre.

ANDRÉ MALRAUX

El Gobierno Militar se extiende entre el 11 de septiembre de 1973 y el 11 de marzo de 1990. Como es natural, tratándose de un período singularmente extenso en la trayectoria del país, se pueden utilizar diversos criterios para determinar sus fases. Todas ellas dan cuenta de una experiencia política dinámica, que va modificándose a medida que se cumplen ciertos objetivos previamente establecidos y que responden a unos principios básicos, a una concepción de lo que debe ser Chile, conjugando su tradición con el destino que está llamado a cumplir para ser fiel a su vocación particular en el concierto de las naciones. Así, por ejemplo, se pueden establecer las etapas de su evolución según los grados de ordenamiento, normalización y modernización alcanzados en la administración del Estado; del avance en la reestructuración y desarrollo de la economía; de la creciente participación ciudadana, etc.

Tiene especial importancia, porque explica cómo fue cristalizando el núcleo de propósitos fundacionales que dan coherencia a la acción de gobierno desplegada durante tres lustros, el criterio que atiende al progresivo avance de la nueva institucionalidad. Bajo la conducción del general Pinochet, el país fue pasando de una situación en que estaba regido por un gobierno estrictamente militar —instalado en medio de una gravísima emergencia nacional y aplicando medidas que en los primeros días eran las propias de un caso de guerra interna— hacia formas sin duda autoritarias pero cada vez más próximas a las de un gobierno democrático, proceso que culmina el 11 de marzo de 1990 con el cumplimiento íntegro del itinerario institucional previsto en la Carta Fundamental de 1980. Ese día las Fuerzas Armadas y Carabineros traspasaron el poder a las autoridades ejecutivas y legislativas elegidas en aplicación de las disposiciones constitucionales y a partir de entonces rigen un sistema plenamente democrático, sostenido legítimamente por un consenso nacional ampliamente compartido por la ciudadanía. Ese momento señala el fin de la transición y el inicio de una democracia renovada que, por sus propios méritos, no requiere ya la tuición militar.

En la dirección apuntada, al cumplirse el primer aniversario del Pronunciamiento Militar, la Junta de Gobierno resolvió poner término al "estado de guerra interior" que por necesidades de seguridad nacional le había sido indispensable implantar al

asumir sus funciones. En realidad, gracias a la labor de pacificación llevada a cabo, la sociedad estaba ya en calma y sus actividades se desenvolvían con normalidad. En las sombras, sin afectar la vida cotidiana de la población, persistía la actividad subversiva impulsada desde el exterior y no eran raros los enfrentamientos armados con las fuerzas de seguridad; pero ya nadie podía afirmar, como varios días después del Pronunciamiento lo había hecho en la televisión argentina el ex vicepresidente de CODELCO Jorge Arrate, que la Junta sólo controlaba el centro de Santiago, en un radio de 20 por 20 cuadras, y que el resto del país obedecía a la Unidad Popular.[1] El orden público, un bien que había llegado a ser tan escaso en los últimos años, era una realidad. Pero la tranquilidad se conservaba gracias a que el gobierno estaba alerta y sostenía sin desmayo las operaciones propias de una lucha destinada a reprimir las conductas que tipifican las acciones de guerrilla urbana o rural, terrorismo y sabotaje. Gracias a las enérgicas medidas adoptadas, la paz social hizo posible desarrollar la economía sobre nuevas bases, atrayendo inversionistas extranjeros, a la par que abriéndose a los mercados mundiales.

El país fue avanzando en todos los campos a pesar de los esfuerzos denodados, alimentados desde el exterior, para destruir la obra en construcción e impedir el despegue del país. En esa actitud negativa estuvieron implicadas las mismos fuerzas políticas que habían llevado a hacer necesario el 11 de septiembre, pero la gran mayoría de la población colaboró activamente al éxito del Gobierno Militar, haciendo suyas las metas de reconstrucción y el anhelo de un nuevo Chile. Si así no hubiera ocurrido, jamás habría sido posible realizar la obra fundacional de éste, cuyo fruto y legado fue un régimen político notablemente estable.

En este aspecto cabe destacar la claridad de los objetivos que se planteó y fue desarrollando paulatinamente el líder indiscutido del proceso de regeneración chileno, el general Augusto Pinochet. Contando con la colaboración irrestricta de las instituciones de la Defensa Nacional y de Carabineros, como asimismo de una legión de ciudadanos que aportaron su experiencia administrativa y capacidad profesional y, en suma, con el apoyo entusiasta de al menos dos tercios de la población, fue configurando una nueva realidad. Su serenidad, perseverancia, claridad de visión y capacidad para concitar fervorosas adhesiones, constituyen los atributos de todo verdadero estadista. Así, una vez resuelto lo que en el capítulo anterior se ha llamado el dilema militar, a lo largo de los años siguientes, cruciales para el destino patrio, "cada etapa o período representa el fundamento del siguiente, y miradas las cosas en perspectiva, es notable observar cómo su obra alcanza la cima en la medida en que el propio gobierno da cumplimiento a las metas fijadas. El país nunca conoció antes una gestión gubernamental de mayor coherencia".[2]

Desde el punto de vista del avance del Gobierno Militar hacia una renovada y sólida institucionalidad, es posible distinguir tres períodos. Una fase de emergencia, que cubre el primer año que sigue al Pronunciamiento. Se inicia luego una fase arqui-

---

1 Qué Pasa nº 132, 2.11.73, p. 11.

2 JULIO CANESSA ROBERT, op. cit., p. 200.

tectónica, en la que se diseñan las políticas sectoriales que dan vida a los principios de gobierno enunciados el 11 de marzo de 1974, enmarcadas en un gran objetivo nacional, y que culmina el 11 de marzo de 1981 con la puesta en vigencia de la Constitución ratificada por la ciudadanía seis meses antes. Por último, entre aquella fecha y el 11 de marzo de 1990, transcurre la fase de transición, una etapa que tiene por objeto consolidar el nuevo rumbo del país, preparándolo para una democracia plena en su contenido y estable en el tiempo.

Por convenir a una ordenada exposición de las materias propias de la evolución institucional del país en esos años, este capítulo se ocupa principalmente de la segunda fase de la evolución del Gobierno Militar. En el siguiente, que es el último, se abordarán las materias propias de la tercera fase, es decir, del período constitucional del presidente Augusto Pinochet y la transición a la plena democracia.

En el primer período la Junta de Gobierno concentró en sí las funciones constitucionales, ejecutivas y legislativas del Estado. Al Poder Judicial, cuyo atropello por parte del presidente Allende había sido uno de los motivos que llevaron a la intervención militar, le fueron restituidas sus atribuciones y potestades, a fin que pudiera ejercer sus delicadas funciones con la debida independencia. Lo mismo se hizo respecto a la Contraloría General de la República.

Las tareas prioritarias de este primer período fueron la pacificación del país, convulsionado hasta el extremo tras diez años de aventurerismo revolucionario. Entre otras cosas, en lo inmediato hubo que desarmar a las brigadas para-militares existentes y limpiar los focos desde donde estos grupos irregulares podían seguir actuando, neutralizando las bases en las cuales se apoyaban. Asimismo, fue necesario organizar fuerzas y medios para enfrentar los futuros desafíos, pues muy pronto se hizo evidente que haber vencido al proyecto totalitario que pretendió sojuzgar a los chilenos, era para el comunismo internacional un hecho imperdonable. Moscú, a través de múltiples y formidables centros desde los cuales pudo desencadenar nuevas amenazas contra el país, tanto psicológicas como, económicas y militares, no se resignó a la derrota. Pero tampoco los gobiernos del mundo libre mostraron simpatía alguna por esta nación lejana y pequeña. Su ejemplo era inquietante; alteraba el tenso orden de "convivencia pacífica" que las grandes potencias mantenían durante la Guerra Fría y podía despertar la agresividad de los soviéticos en otras zonas del planeta. No es casualidad que Brezniev haya invocado posteriormente el caso chileno para justificar la invasión a Afganistán.

Por lo anterior, ante los grandes desafíos que se venían encima, debía fortalecerse la capacidad vital de la nación. Esto exigía que cuanto antes se normalizara la vida del país y así permitir que la gran masa ciudadana pudiera trabajar tranquila, haciendo efectiva la reconstrucción moral y material del cuerpo social. En esto se actuó con gran eficacia y racionalidad. En fecha tan temprana como noviembre de 1973, se dictaron las normas que harían posible la libre competencia en el terreno económico, con lo cual los agentes productivos, tras décadas de estar constreñidas por un grado de intervención estatal que llegó a ser ridículo —pues sólo reflejaba una absurda desconfianza hacia la libertad concreta de las personas— pudieron comenzar a desplegar su

potencialidad. En la misma dirección, al mes siguiente se oficializaba la creación de un organismo cuyo propósito era reorganizar a fondo la administración pública y establecer las bases de su descentralización administrativa y territorial. Así, el 11 de julio de 1974, el general Pinochet pudo proclamar un histórico Manifiesto de la Regionalización Administrativa de Chile. Estas medidas manifestaban un vuelco profundo. Aunque ahora les desagrade reconocerlo, las agrupaciones que habían impulsado la revolución en Chile compartían de hecho dos ideas características del absolutismo político del siglo XX: "Todo en el Estado, nada fuera del Estado, nada contra el Estado", como proclamaba Mussolini, y, "allí donde hay libertad, no hay Estado", como afirmaba Lenin.[3]

También fueron significativos los estudios emprendidos para ir configurando lo que andando el tiempo sería la nueva institucionalidad. Como se acaba de señalar, el 11 de marzo de 1974 fueron dados a conocer los Principios del Gobierno de Chile, que contenían los grandes lineamientos filosóficos y doctrinarios que sostendrían su labor. Pero antes, el 24 de septiembre de 1973, la Junta había dispuesto formar una Comisión integrada por profesores universitarios expertos en materias constitucionales para que iniciaran los estudios encaminados a redactar una Carta Fundamental que reemplazara la del año 1925, sobrepasada por los hechos ocurridos durante la década revolucionaria y absolutamente inadecuada para regular el orden de vida de un Estado a fines del milenio.

Todas estas iniciativas traslucían un propósito definido: más allá de superar una emergencia, había que restablecer cuanto antes la vigencia del derecho y dar preeminencia a la libertad en la vida cotidiana de la población, fortaleciendo al mismo tiempo la unidad nacional y el culto a los valores que colocan al hombre por sobre el Estado, pues en sana doctrina éste debe estar al servicio de aquél y justificarse exclusivamente en lo indispensable para el bien común. Revalorizar estos rasgos de la convivencia social era sumamente necesario, pues habían sido desdibujados y casi olvidados durante los años precedentes.

Simultáneamente, como ente práctico y realizador, el Gobierno Militar se hizo cargo desde el primer momento de la angustiante situación de una parte de la población, empobrecida y desesperanzada por una política económica populista, cuya supervivencia material estaba en peligro. Años de politiquería y demagogia habían arrastrado a un cuarto de la población a una situación de miseria. Las "poblaciones callampas" que rodeaban a todas las ciudades eran el más gráfico testimonio del fracaso de una actividad política limitada a lo electoral. Era imperativa la reestructuración del sistema económico, paralizado por los mismos que habían propiciado la revolución, pero cuyos defectos venían de más atrás, al menos desde que los sectores democráticos del estamento dirigente había aceptado lo que se conocía como el "modelo cepaliano" de desarrollo. Los enormes recursos económicos inactivos en manos del Estado, o ineficientemente administrados por él, esperaban una acción inmediata encaminada a cautelar lo que existía, ponerlo en acción y, además, co-

3 Citadas en CURZIO MALAPARTE, *Técnica del golpe de Estado*, op. cit., p. 8.

menzar el delicado y complejo proceso de devolverlo a sus legítimos dueños, o eventualmente traspasarlos a quienes tuvieran la experiencia, capitales y deseos de hacerlos funcionar nuevamente. Siempre es fácil destruir. ¡Cualquiera puede hacerlo! Pero reconstruir y hacer andar una economía dislocada constituye un desafío de titanes.

El sólo hecho de haber asumido las Fuerzas Armadas y de Orden la dirección suprema de la nación, dado el natural respeto que inspiran, hizo renacer la fe y la esperanza en la ciudadanía. Como tocado por una vara mágica, el país se puso enérgicamente de pie y comenzó su reconstrucción. La patria, aunque gravemente herida, todavía conservaba en potencia el carácter recio de sus mejores tiempos. El carisma de su líder y la calidad de las personas de que se hizo acompañar, hicieron el resto.

Como nada es fácil en esta vida, a poco andar, el 6 de octubre de 1973, comenzó en el Medio Oriente la Guerra del Yom Kippur, una de cuyas secuelas fue la resolución adoptada en Teheran el 22 de diciembre de ese año por la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP), alzando drásticamente el precio del combustible. El funcionamiento de las economías más industrializadas del mundo se apoyaba demasiado en la energía derivada del petroleo, un elemento hasta entonces barato, de manera que el súbito cambio de precios puso en jaque el modo de vida de esas sociedades. Consecuencialmente se produjo una aguda recesión mundial que afectó a las grandes potencias y, por cierto, a los países más pequeños. Para el Gobierno de Chile, que hacía titánicos esfuerzos por sacar adelante al país, éste fue un factor que agravó la situación nacional. Sin embargo, lo encaró con decisión y lo superó. No es muy difícil imaginar lo que habría sucedido en esa grave coyuntura si aquí hubiese habido un gobierno partidista. Probablemente se habría derrumbado ante tan severa crisis.

Como si lo anterior fuera poco, a los esfuerzos que demandaba el combate contra el extremismo marxista-leninista todavía latente, se sumó una tensión vecinal en la frontera norte del país. Esta situación no obedecía a ningún incidente específico, ni siquiera a un problema concreto de límites. El asunto es más profundo y radica en el sentimiento irredentista de los estratos más nacionalistas de la sociedad peruana, desde el cual periódicamente se derrama sobre sus capas más populares y las inflama. Era un secreto a voces, confirmado por informaciones comprobadas, el alistamiento ofensivo del Perú. Gobernado por sus militares en una dirección izquierdista y populista, su impulso político se había hecho esclavo del material de guerra recientemente adquirido a la Unión Soviética. El traspaso de crecientes cantidades de moderno equipo bélico de aire, mar y tierra a sus Fuerzas Armadas, reforzada con el envío de oficiales peruanos a la Unión Soviética y con la presencia de asesores militares rusos en el Perú, le significó a ese país un poder formidable en el ámbito latinoamericano. Un medio, el material de guerra, se transformó entonces en un fin: había que usarlo y pronto, antes de que los que ellos suponen son sus adversarios históricos pudieran recuperarse de la desmedrada situación en que le habían dejado las últimas administraciones.

Desgraciadamente, esta vez no se trataba de otra "guerra de don Ladislao", como pintorescamente llamó nuestro pueblo a la movilización del año 1920. Años más tarde el general norteamericano Vernon Walters, ex subdirector de la CIA, dialogando con los periodistas Oscar Raúl Cardoso y Ricardo Kirschibaum, de Clarín de Buenos Aires, reconocería que "no dijimos nada cuando compró 200 tanques rusos; nosotros no le prestamos un dolar a Pinochet y sí al Perú de Velasco". Y añadió; "de vez en cuando hacíamos pasar un satélite sobre Perú, para ver dónde estaban. Una vez no los vimos más, y yo dije: Estoy seguro de que están en la frontera con Chile. ¿Han mirado la frontera de Chile? Me dijeron: No podemos, por la trayectoria del satélite. Fue uno de los momentos en mi vida en que sentí poder: Desplacen los satélites. Y allá estaban los tanques no más".[4] Si todavía hoy los ingenuos y escépticos de siempre tuvieran alguna duda al respecto, podrían considerar, con provecho, las declaraciones que hizo en 1995 el presidente Alberto Fujimori, quien se refirió con absoluta franqueza al apresto militar de su país para atacar Chile a mediados de los años ´70.

El peligro evidente de una probable agresión creó grandes problemas a Chile, obligado a enfrentar simultáneamente muchos apremios. Su gobierno enfrentó el desafío con absoluta seriedad, sin perder la calma ni caer en una descontrolada desviación de recursos hacia el frente bélico. De haberlo hecho, se habrían puesto en peligro las otras metas sociales, económicas, políticas e incluso militares, derivadas de las exigencias de la guerra irregular interna que se libraba contra la subversión marxista. Con absoluta serenidad y discreción inició un plan de potenciamiento y refuerzo del Teatro de Operaciones Norte y poco a poco la posición estratégica del país en ese extremo de su territorio se consolidó.

Para el Perú, desde el punto de vista psicológico, su mejor momento para el ataque habría sido el centenario de la Guerra del Pacífico; pero de acuerdo a la descarnada lógica militar su mejor opción la tuvo en 1973 y años inmediatos, cuando fue preciso debilitar aún más esa área trasladando efectivos a la zona central para enfrentar la situación interna. Pero la actitud disuasiva de Chile tuvo éxito y desalentó los planes bélicos de su vecino, alejando así la posibilidad de un conflicto que rápidamente se habría extendido hacia los otros países limítrofes, con consecuencias desastrosas para todos.

Sólo cabe expresar gratitud a quienes en esa hora difícil supieron hacer frente a tantos problemas simultáneamente, sin perder el sentido de las prioridades y la visión de conjunto para salvaguardar el interés nacional. Y a quienes tanto les gusta criticar con liviandad —por oficio, se podría decir— llamando la atención sobre tantas otras cosas que se podrían haber hecho, les vendría bien meditar en las circunstancias de esa época y comparar lo efectivamente realizado con la injustificable inoperancia de otros gobiernos que sí han gozado de días más tranquilos y holgados, pero cuyos frutos dejan mucho que desear. Tenazmente hundidos en esquemas ya superados, siempre les parecerá insufrible una consideración objetiva del mérito que tuvo la gestión militar.

---

4 El Mercurio, 19.5.96, p. D17.

La Declaración de Principios del Gobierno Militar.

Como se ha visto en el capítulo anterior, el dilema militar en 1973 no consistía en poner término o no al gobierno de la Unidad Popular. La intervención era cosa resuelta por imperativo patriótico: se trataba de garantizar la sobrevivencia de la nación, su continuidad histórica. La disyuntiva radicaba en si era necesario remediar las causas de los males que la hacían ineludible o, simplemente, limitarse a paliar sus efectos negativos más evidentes. El general Pinochet resolvió el dilema en el primer sentido, dando curso a un proceso fundacional. Una empresa de esa magnitud, por la trascendencia de los cambios que implicaba, esto es, porque significaba inaugurar un nuevo rumbo para el destino nacional, debía ser acometida desde sólidas bases filosóficas y doctrinales. Esta es la razón por la que estimó indispensable dar a conocer a la ciudadanía el marco conceptual que ceñiría su acción de gobierno.

Para aquilatar la importancia de la Declaración de Principios del Gobierno de Chile se debe considerar, ante todo, que los males que afligían a la patria desde hacía mucho tiempo reflejaban un severo problema moral. Los procesos revolucionarios que sufrió no habrían encontrado el terreno abonado si la sociedad hubiera sido consciente de esta realidad y la hubiera abordado a tiempo desde los sabios principios cristianos que por siglos modelaron su fisonomía histórica; no desde la demagogia, la partitocracia, las ideologías y la violencia, como de hecho ocurrió en los años que precedieron la intervención militar. Ya en 1932 los Obispos habían hecho ver que "la sociedad está enferma porque los principios que deben regular y encaminarla a su verdadero fin yacen relegados en el olvido; y en vez de ellos rigen otros que elevan a la sociedad no a su perfección sino a su ruina. Hay pues que restaurarla". Y después de señalar el comportamiento ético que debía orientar a las personas y luego, como consecuencia, iluminar la restauración de la sociedad, añadían: "Sin esta reforma interior de los ánimos los errores y las pasiones seguirán dominando y mientras éstas dominen no habrá paz ni armonía entre las clases sociales".[5]

También se debe tener en cuenta que todo gran proyecto político, en cuanto expresa un ideal social, o sea, un tipo de relaciones de convivencia que se estima deseable porque es bueno y útil tanto para las personas como para la comunidad, tiene por fundamento una antropología concreta, una específica concepción del hombre y de la sociedad. El marxismo, ateo y materialista por definición, tiene la suya; hace caso omiso de la naturaleza humana y no es casual, entonces, que los pueblos sometidos a su dominio hayan sido degradados hasta un punto intolerable. Para el mundo occidental, para esa cultura que durante dos milenios ha reconocido en tres colinas sagradas sus raíces —la Acrópolis, fuente del pensamiento especulativo; el Capitolio, asiento del derecho como fundamento del orden político, y; el Calvario, misterioso núcleo de la trascendencia redimida del ser humano— su antropología natural es la cristiana.

Consecuente con el verdadero ser de Chile, tal como ha sido sostenido a lo largo de las generaciones por la inmensa mayoría de su pueblo, el Gobierno Militar procla-

5 *La verdadera y única solución de la cuestión social. Carta Pastoral colectiva que el Episcopado chileno dirige a los sacerdotes y fieles de la nación*, Imprenta Chile, Santiago, 1932. Las citas en pp. 14 y 56.

mó su adhesión irrestricta a la concepción cristiana del hombre y de la sociedad, rechazando explícitamente la solución marxista por su carácter totalitario y anulador de la tradición cristiana e hispánica en que se forjó la patria. El hecho de haber pasado por dos revoluciones sucesivas —que, como se expuso en la primera parte de este libro partieron de supuestos muy distintos pero llegaron a confundirse en una matriz ideológica común— hacía indispensable precisar la incompatibilidad que existe entre el marxismo y el cristianismo. El Magisterio de la Iglesia, mediante sucesivos documentos pontificios, lo había reiterado una y otra vez, pero sus exhortaciones habían sido ignoradas incluso por un influyente sector de la fuerza política que se amparaba en su prestigio y utilizaba equívocamente su nombre. Ya León XIII lo había advertido: "Hablamos de aquella secta de hombres que bajo diversos y casi bárbaros nombres de socialistas, comunistas o nihilistas, esparcidos por todo el orbe, y estrechamente coligados entre sí por inicua federación, ya no buscan sus defensas en las tinieblas de sus ocultas reuniones, sino que saliendo a pública luz, confiados y a cara descubierta, se empeñan en llevar a cabo el plan, que ya ha tiempo concibieron, de trastornar los fundamentos de toda sociedad civil".[6] También Pío XI, en su encíclica Divini Redemptoris, de 19 de marzo de 1937, había sido muy explícito en su condena al comunismo: "Este peligro tan amenazador, ya lo habeis comprendido Venerables hermanos, es el comunismo bolchevique y ateo que tiende a derrumbar el orden social y a socavar los fundamentos mismos de la civilización cristiana. (...) El comunismo es intrínsicamente perverso, y no se puede admitir que colaboren con él, en ningún terreno, los que quieren salvar la civilización cristiana".[7] Poco más tarde, durante el pontificado de Pío XII, la Sagrada Congregación del Santo Oficio, a instancias suyas, el 1° de julio de 1949 volvió a condenar al comunismo y prohibió a los católicos "inscribirse en partidos comunistas o prestarles apoyo".[8] A su vez Juan XXIII, en la encíclica Mater et Magistra, de 15 de mayo de 1961, expresó lo siguiente: "El Sumo Pontífice manifiesta además que la oposición entre el comunismo y el cristianismo es radical y añade que los católicos no pueden aprobar en modo alguno la doctrina del socialismo moderado".[9] Y Paulo VI, durante cuyo pontificado ocurrió el Pronunciamiento Militar, había escrito en 1971: "El Cristiano que quiere vivir su fe en una acción política concebida como servicio, tampoco puede adherirse sin contradicción a sistemas ideológicos que se oponen radicalmente o en sus puntos sustanciales a su fe y a su concepción del hombre: ni a la ideología marxista, a su materialismo ateo, a su dialéctica de la violencia y a la manera como ella entiende la libertad individual dentro de la colectividad negando al mismo tiempo toda trascendencia al hombre y a su historia personal y colectiva; ni a la ideología liberal que cree exaltar la libertad individual sustrayéndola a toda limitación, estimulándola con la búsqueda exclusiva del interés y del poder y considerando las solidaridades sociales como consecuencias más o menos automáticas

6 LEÓN XIII, Ad apostolici muneris, 2.

7 PÍO IX, Divini Redemptoris, 3 y 65.

8 El documento respectivo en Colección de Encíclicas y Documentos Pontificios, Acción Católica Española, Madrid, 1955, pp.806 y 807.

9 JUAN XXIII, Mater et Magistra, 19.

de iniciativas individuales y no ya como un fin y un criterio más elevado del valer de la organización social".[10]

De los textos citados fluye inequívocamente que el planteamiento cristiano es incompatible con el marxismo y también con el socialismo moderado hoy tan en boga. Dado que el Gobierno Militar identificó sus principios rectores con los de la concepción cristiana, su posición adversa al comunismo no obedeció a una actitud cerril, ni siquiera meramente política, sino a una consecuencia lógica de la elección de mayor entidad que en este siglo muchas personas y pueblos han debido realizar.

Sin embargo, y también acorde con la doctrina pontificia, no por ser contraria al marxismo la Declaración de Principios dejó de advertir que en muchas sociedades occidentales era perceptible la decadencia de los valores espirituales en beneficio de una suerte de idolatría hacia el éxito material. El hedonismo, el exceso de bienestar y cierto grado de cobardía cívica, muchas veces han ahogado las virtudes heroicas y la solidaridad, por lo que tampoco ellas pueden ser consideradas un modelo digno de imitar.

Ratificando lo anterior, el 11 de septiembre de 1975 el general Pinochet expresó lo siguiente: "La experiencia de muchos países contemporáneos indica que el desarrollo económico suele adquirir un dinamismo propio tan potente, que termina condicionando en forma terminante la escala de valores y la forma de vida de los pueblos: el progreso material deja entonces de ser un medio y pasa a convertirse en un fin, incluso se escapa de las manos del hombre. Aparecen las llamadas "sociedades de consumo", y el materialismo práctico invade las mentes y el cuerpo social entero. El vacío espiritual y el debilitamiento moral que esta realidad ha dejado en el mundo desarrollado nos obligan también a redefinir y encauzar el concepto de bienestar, a la luz de un humanismo nacionalista y cristiano. Son los valores que éste encierra los que han dado forma a una convivencia nacional que durante muchos años mostró a los chilenos un camino de felicidad más claro que el que pueden alcanzar los habitantes de las grandes urbes desarrolladas, cuyo crecimiento económico ha impuesto a sus vidas un ritmo infernal. Chile se encuentra en un instante apropiado para orientar su futuro desarrollo económico hacia estas finalidades superiores, en lugar de permitir que una economía omnipotente y avasalladora termine siendo la que le diga qué debe pensar o querer como aspiración de vida".[11]

Atreverse a alzar los pendones de un ideal exigente, como son los del cristianismo, era ciertamente una postura audaz, incluso provocativa. Después de todo, al menos en apariencia, los signos de los tiempos indicaban que la humanidad se encaminaba hacia una época cuyo rasgo distintivo sería el materialismo, tanto en su versión marxista como en la capitalista. Sin embargo, al concluir el siglo, tanto por el hundimiento del comunismo como por la revitalización que la Iglesia ha tenido durante el pontificado de Juan Pablo II, pareciera que a fin de cuentas se cumplirá la profecía de Malraux: el próximo siglo será espiritual o no será. Si ello en definitiva resulta así, el

10 PAULO VI, *Igualdad y participación*, Ediciones Paulinas, Santiago, 1971,26.

11 AUGUSTO PINOCHET UGARTE, "Chile enciende la llama de la libertad". Discurso pronunciado con ocasión del segundo aniversario de la Liberación Nacional.

Gobierno Militar habrá sido también precursor en este aspecto central de la evolución de Occidente.

De la concepción cristiana de la dignidad de la persona humana fluyen armoniosamente enlazados ciertos enunciados de filosofía social que tienen indudables consecuencias de orden práctico. La Declaración de Principios los recogió en un orden preciso: el hombre tiene derechos naturales anteriores y superiores al Estado; el Estado debe estar al servicio de la persona y no al revés; el fin del Estado es el bien común general; el bien común exige respetar el principio de subsidiariedad; el respeto al principio de subsidiariedad supone la aceptación del derecho de propiedad individual y de la libre iniciativa en el campo económico. Estos enunciados, limpios y claros, muestran la nervadura de una coherente concepción social, novedosa de puro vieja, que fijó el rumbo a la autoridad para sacar a Chile de una postración endémica y levantarlo hacia un mejor destino.

Complementando esos preceptos básicos, se definió en el mismo documento el estilo que distinguiría en adelante a la acción de gobierno, a saber, el que responde a una inspiración nacionalista y pragmática, donde la función de gobierno se ejerce de manera autoritaria, impersonal y justa, como lo había hecho Diego Portales al organizar la República: "La república es el sistema que hay que adoptar; pero, ¿sabe cómo yo la entiendo para estos países? Un gobierno fuerte, centralizador, cuyos hombres sean verdaderos modelos de virtud y patriotismo, y así enderezar a los ciudadanos por el camino del orden y de las virtudes. Cuando se hayan moralizado, venga el Gobierno completamente liberal, libre y lleno de ideales, donde tengan parte todos los ciudadanos. Esto es lo que yo pienso y todo hombre de mediano criterio pensará igual".[12] Como se ve, también en este plano fue evidente la intención del nuevo gobierno en orden a entroncar su gestión con los días más fecundos de la historia patria.

Apoyadas este entramado conceptual se abordaron las grandes tareas nacionales proclamadas en la Declaración de Principios: rescatar los valores nacionales; sostener un orden jurídico respetuoso de los derechos humanos; dotar al Estado de una moderna institucionalidad; crear las condiciones para un desarrollo económico acelerado, un efectivo progreso social y una escala de valores morales que las jerarquice respecto del hombre.

La divisa que resumió tan altos propósitos fue "hacer de Chile una gran nación". Es posible que su reiterado uso la haya convertido en tópico. Cabe, pues, preguntarse, ¿cuál será el significado de aquella expresión? Resulta claro que ser una gran nación no consiste en detentar un enorme poder económico y vivir nadando en la abundancia. Tampoco lo es contar con una desmesurada fuerza militar. En un planeta crecientemente relacionado no tiene mucho realismo pretender una soberanía política absoluta. La idea implícita en una gran nación apunta más bien a una fidelidad esencial, a la autenticidad y a la capacidad de asegurar el cumplimiento del propio destino, de la vocación que cada pueblo digno de ese nombre tiene como impronta. Y la base de esa invitación a constituirse en dignos herederos, continuadores y renovadores de una tradición se-

---

12 DIEGO PORTALES, carta a J.M. Cea enviada desde Lima en marzo de 1822. La cita en *El pensamiento de Portales*, Editora Nacional Gabriela Mistral, Santiago, 1974, pp. 15 y 16.

ñera, no puede ser otra que la unidad en la diversidad, el respeto a cada manifestación individual en tanto de algún modo participa de un modo de entender la vida que es común porque se asienta en un consenso básico legítimo e indiscutible. No es otro el fundamento de la paz, supremo bien político, tanto al interior de la propia nación como en sus relaciones con las otras, porque "ninguna nación tiene derecho a oprimir injustamente a otras o a interponerse de forma indebida en sus asuntos.[13]

El nacionalismo chileno, huelga decirlo, no pretende superioridad alguna sobre otros pueblos ni interferir indebidamente en sus asuntos. Sería ésa una presunción ridícula. Su espíritu va en otra dirección. Como ha dicho Enrique Campos, "es una actitud vital, en la que en armónica convivencia se aúnan y dinamizan ideas, sentimientos y conductas. Es voluntad, paso y camino; es enlazar el pasado y el porvenir por el quehacer del presente. (...) Es la encarnación de sangre y medio. Cuando el hombre nuestro tomó conciencia de la vida que le precedió y del mundo que le rodeaba y los consideró como una real prolongación de su alma, un sentimiento nuevo le reanimó la entraña y dejó fértil su corazón y abierta su mente para concebir y proyectar la doctrina y la conducta que daba a su existencia un sentido misional y trascendente".[14]

Ahora bien, como en su día advirtió Juan Vásquez de Mella —y el padre Lira se ha encargado de recordárnoslo [15]— "la nación no constituye un todo simultáneo, sino un todo sucesivo", sometido esencialmente al discurrir temporal. En consecuencia, la definición en clave nacionalista de las aspiraciones programáticas del gobierno de las Fuerzas Armadas y Carabineros hacía evidente que sus metas, lejos de abordar sólo la superación de una emergencia, abarcaban el reordenamiento de la sociedad en su conjunto. De otra parte, también ponían de manifiesto que su empeño era una empresa de largo aliento puesto que, justamente, la preeminencia de la idea nacional era lo que las últimas generaciones de chilenos habían extraviado. En consecuencia, una vez publicada la Declaración de Principios, nadie pudo ya dudar que las Fuerzas Armadas y de Orden no se habían hecho cargo del gobierno para dominar las instituciones, ni para ser un simple paréntesis en su evolución política, sino para transformar y renovar las mentalidades, dando así paso a un nuevo Chile.

La Honorable Junta de Gobierno.

El hecho que desde la primera hora, el mismo 11 de septiembre, las Fuerzas Armadas y Carabineros establecieran como órgano de suprema dirección política del país a una Junta de Gobierno y no a una Junta Militar, indicaba que esta vez los institutos armados habían tomado una resolución que iba mucho más allá de limitarse a reemplazar las autoridades de un Estado moribundo para superar la emergencia. Muy por el contrario, la intención del alto mando era asumir la responsabilidad de establecer un gobierno en forma —por el tiempo que fuere menester— a fin de cumplir un conjunto de metas cuyo resultado sería modificar el curso de la

13 JUAN XXIII, Pacem in terris, 120.

14 ENRIQUE CAMPOS MENÉNDEZ, "Las perspectivas del nacionalismo", en CAMPOS et.al., *Pensamiento nacionalista*, Editora Nacional Gabriela Mistral, Santiago, 1974, pp. 8 y 9.

15 OSVALDO LIRA PÉREZ, SS.CC,"Nación y nacionalismo", en idem., pp. 20-64. La cita en p. 25.

vida nacional, creando al efecto un nuevo orden de convivencia, un orden que para perdurar en el tiempo debía dar cuenta de la efectiva vigencia de un también renovado consenso nacional. Así, desde el amanecer de aquél día, las tres ramas de la Defensa Nacional y Carabineros quedaron indisolublemente ligadas entre sí y respecto al destino político de la nación, pasando a asumir —además de su tarea de brazo armado— la responsabilidad de su dirección suprema hasta que la misión estuviera cabalmente cumplida.

El compromiso era de tal magnitud y trascendencia que no dejaba espacio para ocuparse de asuntos secundarios ni menos para atender ambiciones personales. Desde el primer momento los cuatro miembros de la Junta comprendieron que sería fatal la menor trizadura entre ellos, pues todo lo que en adelante les dividiera se traduciría en un conflicto de insondables proporciones para el país. Las instituciones que representaban tenían el mismo grado de responsabilidad y por ello las resoluciones que adoptaran debían serlo por unanimidad, buscando la integración de las fuerzas a su mando y la colaboración de todas las personas que compartieran los ideales manifestados en la Declaración de Principios. Con el objeto de hacer más eficiente su trabajo optaron por dividir las materias de gobierno según un criterio sectorial, en concordancia con los cuatro campos de acción nacional, reintegrándolas luego en su nivel para adoptar una decisión de conjunto. El estilo y señorío de su comportamiento marca una senda única en la historia de Chile y debiera ser ejemplo y estímulo para las generaciones futuras. Hasta los problemas más graves e incómodos —inevitables, dada nuestra condición humana— fueron superados sin perder de vista el superior interés nacional.

La unidad de mando es un principio fundamental en la actividad castrense, por lo que también el primer día los Comandantes en Jefe de las instituciones de la Defensa Nacional y el Director General de Carabineros decidieron nombrar un presidente de la Junta de Gobierno, que funcionalmente sería Jefe del Estado. Al efecto, conservaron con toda naturalidad el orden de precedencia protocolar de las armas, a saber, Ejército, Armada, Fuerza Aérea y Carabineros. En el hecho, fue el almirante José Toribio Merino Castro quien señaló claramente que el mando supremo no era cuestión de personas sino de instituciones, por lo que en este caso correspondía al Ejército. La solución adoptada demostró ser sabia, pues coincidía con la realidad de las cosas. El Ejército es la institución más numerosa y la única que tiene un dominio estratégico y táctico sobre todo el territorio nacional. Por cierto, esta observación en ningún caso desmerece el rol de las otras fuerzas, pues todas son complementarias y siempre deben actuar coordinadamente.

La voluntad cohesionadora de los mandos superiores se transmitió con entusiasmo a todos los niveles del estamento militar y a pesar de las vicisitudes se conservó inalterable hasta el último día del Gobierno Militar. En esta actitud radica una de las causas principales del éxito de su gestión; y el recuerdo de haber compartido esa responsabilidad constituirá una prenda de fraternal unión ante cualquier prueba que el futuro les depare.

Una crisis interna: el retiro del general Leigh.

Mientras el país bregaba denodadamente por levantarse del estado de postración en que lo había dejado la década de las revoluciones ideológicas, los grupos desplazados no descansaban en su afán de conservar cuotas de poder e influencia. A pesar del receso político, hubo dirigentes de la izquierda demócrata cristiana y de la marxista leninista que sin desmayar apuntaron sus esfuerzos a descalificar y desestabilizar al nuevo gobierno. Aunque era innegable el ordenamiento alcanzado en todas las actividades nacionales y el progreso que es su consecuencia, pretendían que a la mayor brevedad se pasara a una fase política que incluyera su diligente participación. Pero ese era un sueño imposible. Cerrar los ojos y hacer la alegre cuenta de "aquí no ha pasado nada", reiniciando sin más la lucha partidista, habría significado entregar el futuro de la nación a la demagogia más desenfrenada.

Dada la naturaleza del Gobierno Militar, cualquier intento de alterar su misión fundacional suponía, como cuestión previa, abrir una grieta en su seno y, explotándola, provocar su división. Mientras las Fuerzas Armadas y Carabineros se mantuvieran unidos tras un propósito común, serían imbatibles. Pero, de otra parte es también cierto que ningún gobierno puede sostenerse en el tiempo si su poder no es socialmente reconocido. Esa es la fuente de toda legitimidad política. En razón del propio oficio, los militares conocen la aguda respuesta dada por Talleyrand a Napoleón a propósito del fracaso en España: "Sire, las bayonetas sirven para todo, menos para sentarse en ellas".

En ese contexto tuvo sentido la audaz decisión del general Pinochet en orden a realizar una consulta popular para tener una información cierta de cuál era el respaldo ciudadano que tenía el gobierno. Esta decisión fue precipitada por una condena de la Asamblea General de las N.U., la cuarta que ritualmente hacía a Chile, por supuestas violaciones de los derechos humanos de personas vinculadas a la subversión. Esa actitud internacional provocó aquí una generalizada reacción de indignación, porque además de injusta e hipócrita, constituía una indebida intromisión en los asuntos internos del país. Sin embargo, incluso en esferas gubernamentales, hubo personas que estimaron demasiado riesgoso efectuar una consulta abierta sobre el particular ya que el adversario podría reaccionar con rapidez y convertir ese hecho político en la oportunidad que buscaba para crear un frente opositor con respaldo ciudadano.

A pesar de la opinión de los timoratos, el 21 de diciembre de 1977 la Junta convocó a una Consulta para el 4 de enero siguiente. La pregunta que se hizo a los ciudadanos fue si en el secreto de su conciencia apoyaba al Presidente en su defensa de la dignidad de Chile y reafirmaba la legitimidad del Gobierno de la República o, por el contrario, apoyaba la resolución de las Naciones Unidas y su pretensión de imponernos nuestro futuro desde el exterior. Como es tradicional entre nosotros, el pueblo concurrió a las urnas en forma masiva y con absoluta calma. Ese día 5.566.348 personas, el 75,04% de los ciudadanos, se inclinó por la primera opción. Este hecho fortaleció más allá de toda duda la legitimidad de la Junta de Gobierno y robusteció la posición del general Pinochet. Sin embargo, de inmediato se precipitó un conflicto larvado desde mucho antes.

En efecto, el Comandante en Jefe de la Fuerza Aérea, general Gustavo Leigh Guzmán, que en agosto de 1977 se había indignado por el doble criterio que Estados Unidos aplicaba para analizar el tema de los derechos humanos con respecto a Cuba y a Chile —llegando a calificar de hipócrita al Presidente Jimmy Carter— a fines de año había manifestado su desacuerdo a la Consulta planteada por el general Pinochet. Este miembro de la Junta, que a juicio de un buen conocedor del período y además extranjero, James R. Whelan, "desde el comienzo mismo, en la víspera de la revolución, cuando desafió el derecho mismo de Pinochet a gobernar, este hombre temperamental y de fuerte carácter había sido como una piedra en el zapato de ese duro arremetedor que era Augusto Pinochet", estaba preocupado por el tenor de la consulta y por lo que él percibía como el creciente autoritarismo del Presidente. En unión con otros oficiales generales abogó para que se la suspendiera, pero él fue el único que hizo pública dicha intención.

Otro hecho que también alteró al general Leigh fue la información de la eventual participación de la DINA —a través de un norteamericano presumiblemente vinculado a la CIA, Michael Vernon Townley, y algunos cubanos opositores a Castro— en el asesinato del último ministro de Defensa de Allende, Orlando Letelier, acaecido en Washington el 21 de septiembre de 1976. Este hecho abortó las conversaciones que con el propósito de sentar las bases de una cooperación orientada a la recuperación económica de Chile iniciaban ese mismo día en aquella ciudad el ministro de Hacienda, Jorge Cauas, y el Secretario del Tesoro, William Simon. Independientemente de que Orlando Letelier haya sido un agente soviético que operaba bajo la dirección de la Dirección Nacional de Inteligencia cubana, siendo controlado directamente por Julián Torres Rizo, que por entonces era el más alto agente de la inteligencia cubana en los Estados Unidos según lo afirmó el FBI en su informe preliminar, este crimen tensionó irremediablemente las relaciones con Estados Unidos. Si favorecía a alguien, no era precisamente al gobierno chileno.[16] Ahora bien, en una entrevista concedida al diario milanés Corriere della Sera se le preguntó al general Leigh qué haría si llegase a saber que el gobierno de Chile tenía algo que ver en ese crimen, a lo que respondió que entonces "tendría que reconsiderar su posición en la Junta, porque tal acontecimiento deshonraría a las Fuerzas Armadas".[17]

Esta actitud colocó a la Junta en la dolorosa situación de solicitarle su renuncia. Como se negó, no quedó otro camino que la destitución, arrostrando las dificultades que la medida provocaría en la Fuerza Aérea. Como una forma de expresar su solidaridad con quien hasta ese momento había sido su Comandante en Jefe, prácticamente todo el Alto Mando de la Aviación renunció en el acto. Dieciocho generales pasaron a retiro y el general Fernando Matthei Aubel, que se desempeñaba como ministro de Salud, fue nombrado Comandante en Jefe. Sobre él recayó la delicada responsabilidad de restituir la confianza de sus subordinados, conformar nuevos mandos y asegurar la operatividad del arma aérea, una tarea de la mayor importancia si se recuerda que en

---

16 Sobre el historial de Orlando Letelier como agente soviético y las circunstancias de su asesinato, véase James R. Whelan, op. cit., pp.691-697 y la "Lettre d'Information Pierre de Villemarest" publicada en El Mercurio, 23.7.95, p. D26.

17 JAMES R. WHELAN, op. cit., pp. 587, 736 y 737.

esa época las relaciones con Argentina estaban deteriorándose con motivo del problema de límites en la zona austral. Haciendo primar los intereses superiores del país y apelando al sentido profesional de sus miembros, muy pronto se superó lo que pudo ser una grave crisis militar.

En el fondo, y esto es lo que definitivamente cuenta —pues entre hombres de honor y de patriotismo sin mácula, como sin duda son los todos los generales de la República, lo demás es anécdota— el general Leigh tenía una concepción diferente de la imperante en la Junta acerca de la misión y consiguiente permanencia del Gobierno Militar, es decir, no compartía la solución adoptada respecto al dilema militar de 1973. Como dijera él a Whelan, "desde el principio, en 1973, yo pensaba que no deberíamos gobernar más de tres a cinco años, que eso sería tiempo suficiente para limpiar las cosas, para desinfectar el país. Todos los organismos se desgastan, y los gobiernos no son la excepción. Crean su propio capital de resentimientos, de incomprensiones, de rivales. Mi idea era que debíamos dejarle el paso a alguien, como un militar retirado, durante un período de transición para volver a un gobierno civil pleno". [18]

Como se ha dicho anteriormente, sobre la tarea más urgente que debían realizar las Fuerzas Armadas y de Orden, el parecer era unánime. Ya en la ceremonia de instalación de la Junta, el Comandante el Jefe de la Fuerza Aérea había dejado la impresión de ser particularmente duro y franco. Se recordará que en la ocasión expresó con rotundidad que el cáncer marxista sería extirpado. Y después no titubeó en realizar los juicios de guerra pertinentes. Todo lo anterior refleja que no tenía dudas respecto a quienes eran los responsables inmediatos de la catástrofe que el país había sufrido y lo que había que hacer con ellos. La particularidad de su apreciación radicaba tan sólo en la percepción del tiempo durante el que sería necesario actuar para subsanar las causas que habían llevado al establecimiento de un Gobierno Militar. Pero, a fin de cuentas, quedó demostrado que era el general Pinochet quien tenía razón. Si el Gobierno Militar se hubiera concentrado exclusivamente en desinfectar a fondo el país, como quería el general Leigh, seguramente hoy no circularían por ahí algunos personajes incombustibles, pero el régimen militar se habría condenado a ser un paréntesis entre dos gobiernos igualmente partidistas y no el inicio de una nueva etapa republicana, como lo es, postergando de paso la solución de los problemas de fondo que aquejaban al Estado y a la sociedad. Una vez más su visión de largo alcance y el carácter para sostener las resoluciones derivadas de la misma —atributos del estadista— permitieron superar esta crisis y mantener el rumbo hacia el cumplimiento de la trascendente misión que las Fuerzas Armadas y de Orden habían asumido.

Desde su retiro, el general Leigh mantuvo un digno silencio. Para él, sin duda alguna, la patria está por sobre toda consideración personal. Sin embargo, pese a su absoluta prescindencia en los asuntos públicos, los subversivos ni le perdonaron ni le olvidaron. En 1990, apenas iniciado el período de gobierno del presidente Aylwin, un comando terrorista atentó contra la vida. Estos hechos retratan fielmente dos tipos humanos opuestos; el soldado, grande en todo momento, y el pequeño, cobarde y despreciable subversivo.

18 Idem., p. 587

La función asesora.

Apenas comenzó a funcionar la Junta, cada uno de los miembros inició la organización de la asesoría indispensable para acometer el estudio de las materias de gobierno, tarea que debían enfrentar sin perjuicio de las inherentes a su función de mando en las respectivas instituciones.En este ámbito, como es obvio, todo estaba por hacerse. Para las actividades castrenses contaban con los respectivos Estados Mayores. El problema estaba en la asesoría del escalón supremo, es decir, respecto a la dirección política, utilizando ésta palabra en su mejor sentido. Al comienzo cada miembro de la Junta tuvo que apoyarse exclusivamente en el consejo de los oficiales superiores de su respectiva institución, pero muy pronto se integraron a esa función algunos profesionales, profesores universitarios y funcionarios del Estado cuya experiencia y conocimientos especializados se estimaron valiosos para ir aclarando el confuso panorama dejado por la Unidad Popular.

El general Pinochet muy pronto advirtió que carecía de un grupo de personas de plena confianza y capaz, en breve plazo, de tomar contacto con los problemas nacionales y prestarle asesoría para resolverlos. La politiquería de la década revolucionaria, entre otros rasgos lamentables, había desmantelado la organización estatal y el trabajo de volver a hacerle funcionar se visualizaba como abrumador. Al limpiarse los ministerios y oficinas gubernamentales de agitadores marxistas, quedaron literalmente desguarnecidos y los nuevos responsables, designados al efecto por la Junta, tuvieron que llegar a organizar todo desde cero. La verdad es que se encontraron con un panorama desolador. La situación se hacía aún más difícil de manejar porque miles de ciudadanos de buena voluntad ofrecían sus servicios y hacían proposiciones de todo orden, casi todas muy poco aprovechables, que de todos modos había que escuchar y atender. La percepción del desastre que tenía la ciudadanía era tan profunda que tal vez convendría recordarla de tanto en tanto para refrescar la memoria de aquéllos que se permiten criticar —utilizando los parámetros de hoy, naturalmente— el mérito de las resoluciones adoptadas por el Gobierno Militar en la caótica situación existente en 1973.

Esta realidad fue la que movió al general Pinochet, en los últimos días de septiembre de 1973, a dar el paso de organizar un equipo de apoyo que se llamaría posteriormente Comité Asesor de la Junta (COAJ). Para evitar demoras, lo integró fundamentalmente con personal del Ejército. Así, mientras se discutían los aspectos orgánicos del nuevo ente él quería ganar tiempo y avanzar provisionalmente, ya que de todos modos existía la intención de dar este paso que representaría una solución realmente innovadora en Chile.

En nuestro país, hasta ese momento, los Jefes de Estado no habían dispuesto de un organismo semejante. Se suponía que la Secretaría General de Gobierno debía cumplir esta tarea, pero en realidad sus labores principales eran la difusión de informaciones y cierto grado de coordinación de las actividades de gobierno. De esa forma, muchas veces el Primer Mandatario se abocaba preferentemente al conocimiento de las materias que su intuición y capacidad personal le indicaba eran importantes, pero, en general, se limitaba a ejecutar, modificar o rechazar lo que cada ministro le propo-

nía, lo que hacía imposible una visión de conjunto sobre los efectos que las decisiones sectoriales tenían sobre la actividad nacional. Estos últimos, temporalmente a la cabeza de enormes organismos nacionales, burocráticos y rígidos, mal podían acometer una política con carácter nacional. En realidad, era muy difícil que pudieran extender su acción de mando y control mucho más allá de la capital y sus alrededores. Una centralización mal entendida, que hacía gobernar desde y para Santiago, era quizás el mayor obstáculo para llegar a tener un gobierno eficiente y propiamente nacional.

Una de las principales resistencias que hubo que vencer fue justamente la de los ministros, que por una suerte de inercia histórica se consideraban a sí mismos los únicos asesores directos del Presidente de la República. Por cierto, cada uno de los ministros es un colaborador de la mayor confianza y se le supone entendido en el área a su cargo —salvo cuando su nombramiento obedece al cuoteo político— pero en cualquier caso sólo suele ser competente en las materias propias de su cartera. Rara vez miran el ámbito general de la administración del país, que es sumamente compleja y representa algo más que la suma de los sectores. Hay que considerar en un plano de conjunto las reacciones de un sector sobre los otros y numerosos aspectos y variables que no se encasillan en las mencionadas carteras. De ahí que la creación de ese primer organismo asesor de la Junta, que posteriormente se perfeccionó y todavía existe, haya sido considerada una iniciativa que contribuyó poderosamente a fortalecer la labor del Jefe del Estado.

El Comité Asesor nació del siguiente modo: una tarde, a fines de septiembre de 1973, el general Pinochet llamó a su oficina al entonces coronel Julio Canessa Robert y en su característico estilo militar le dio sin más la siguiente orientación: "Crear un organismo de trabajo, al más alto nivel de gobierno, que asesore a aquél en todas sus funciones fundamentales." En la mañana de ese día el coronel Canessa había sido citado a la Dirección del Personal del Ejército, donde se había seleccionado a diez oficiales de los grados de coronel y teniente coronel, que debían caracterizarse por poseer óptimas calificaciones como Oficiales de Estado Mayor o Ingenieros Militares Politécnicos, y que tuvieran la capacidad y el entusiasmo adecuados para interiorizarse en el más breve plazo de las más complejas materias que debía abordar el nuevo gobierno. Por cierto, eran tareas bastante diferentes a las que habían tenido que manejar hasta ese día. Se les ordenó presentarse en Santiago de inmediato.

Una vez delineados sus objetivos, áreas de acción y tareas específicas, y aceptadas éstas por el general Pinochet, se hizo una exposición a los Miembros de la Junta, los cuales las hicieron suyas, procediendo a entregar personal propio para completar su dotación, de modo que a fines de octubre el organismo ya estaba en plenas funciones.

El organismo asesor se estructuró de acuerdo a los campos de acción nacional, con Departamentos de Política Interna, Externa, Social, Económica y Defensa Nacional. Su primera y más ardua labor fue orientarse en la situación de las áreas específicas de cada Departamento, para comenzar la elaboración y entrega de apreciaciones y estudios que muy pronto debían ser elevados o expuestos a los Miembros de la Junta.

Uno de sus primeros informes se refería a la caótica situación de la Administración Pública, estudio que permitió dimensionar el irracional tamaño que había alcan-

zado en relación a sus fines, crecimiento además incoherente porque era consecuencia de haber sido considerada por años como "hijuela" pagadora de favores electorales. La ineficiencia que le caracterizaba se aumentaba por su concepción centralista, que llevaba a hacer sinónimos Santiago con Chile. Este diagnóstico —compartido desde hacía años por todos los gobiernos pero nunca solucionado— se tradujo en la decisión de ir a la reforma administrativa integral y a la regionalización del país. Para materializarla se creó en diciembre de 1973 la Comisión Nacional de la Reforma Administrativa (CONARA), con rango de Ministerio, cuya amplia y fructífera labor constituye un legado permanente cuyo valor ha sido reconocido por todos los sectores de la actividad nacional.

Numerosas fueron las iniciativas que se originaron o recibieron impulso en este organismo asesor. Entre las primeras destaca la creación de PROCHILE, destinada a estimular las exportaciones no tradicionales, novedoso enfoque que abrió un nuevo horizonte a la actividad productiva y demostró ser decisivo para en el desarrollo del país. Entre las segundas está el fomento a la forestación, que permitió vitalizar áreas casi abandonadas del territorio y proporcionó las bases para una riqueza llamada a gravitar en el futuro, dando un nuevo espacio al sector exportador.

Además de iniciativas específicas como las mencionadas y muchas otras de carácter indicativo general —como lo fue formalizar por vez primera en nuestra historia el Objetivo Nacional— el Comité Asesor significó un serio aporte a la asesoría integral de la Junta, especialmente de su Presidente, el general Augusto Pinochet, que fue sin duda quien más la utilizó. Pero no debe olvidarse el mérito que tuvo haber desplegado una enorme actividad como órgano encargado de cautelar la unidad de propósitos y acción subsiguiente del Gobierno Militar; de permanente contacto entre civiles y militares y de leal apoyo de la más pura doctrina nacional, siempre amenazada por los intentos de desviarlo hacia la satisfacción de intereses de grupos de presión o de corrientes partidistas.

A medida que su experiencia fue creciendo, la importancia de su labor se fue afianzando y su orgánica evolucionó, como es natural. Llamado posteriormente Estado Mayor Presidencial, al aplicarse la Constitución de 1980 devino finalmente en la Secretaría de la Presidencia. Hoy día existe como Ministerio Secretaría General de la Presidencia y es clave para articular las tareas de gobierno.

Mirando atrás, quizás haya que lamentar cierto grado de innecesaria burocracia y no haber utilizado plenamente algunas ideas modernas, como las que proponía el profesor israelita Yetzekel Dror, que CONARA trajo al país y que también asesoró al Ministerio de Relaciones Exteriores.

Conviene decir aquí dos palabras sobre el desarrollo de la función legislativa en el Gobierno Militar. De su asesoría inicial, constituida por los integrantes de los Servicios de Justicia Militar de las instituciones castrenses y algunos abogados externos que generosamente les auxiliaron, instalada provisoriamente en la Subsecretaría de Marina, se pasó a un grupo legislativo más amplio y numeroso, radicado en el 9° piso del Edificio Diego Portales, y durante un tiempo trabajó a través del Comité Asesor de la Junta. A mediados del año 1974 se organizó la Comisión Legislativa que asesoró direc-

tamente a la Junta, la que funcionó como tal hasta el 11 de marzo de 1981, fecha en que se inició la aplicación de la Constitución de 1980.

Desde ese momento, de acuerdo a sus normas, se inició el período de transición a la plena democracia que culminó el 11 de marzo de 1990. Pues bien, una de las características del período de transición fue la separación de las funciones ejecutivas y legislativas. Este paso, relevante en el proceso de institucionalización del Estado, se materializó al dejar de integrar la H. Junta de Gobierno el general Augusto Pinochet, quien, en su carácter de Presidente de la República, se instaló en La Moneda. El poder Legislativo permaneció en el edificio Diego Portales y en su seno el Ejército fue representado por el general César Raúl Benavides.

El Poder Legislativo, integrado por los Comandantes en Jefe de la Armada, de la Fuerza Aérea, el Director General de Carabineros y el representante del Ejército, fue asesorado por cuatro Comisiones, de aproximadamente 25 personas cada una, todos especialistas del mejor nivel, que dependían de cada uno de los mandos recién indicados. El sistema funcionó en excelente forma, como lo prueba la calidad y cantidad de la legislación aprobada en esa época.

También en el ámbito de la función asesora, durante la segunda parte de la década del setenta, ante la conveniencia de contar en el estudio de materias singularmente delicadas con la opinión de personas ricas en experiencia adquirida durante una vida dedicada al servicio público, o representativas de un segmento típico de la población, como los trabajadores, los empresarios o la juventud, se estableció el Consejo de Estado, órgano consultivo que había tenido gran prestigio durante la vigencia de la Constitución de 1833 pero que la Carta Fundamental de 1925 suprimió, pasando casi todas sus funciones al Senado. El nuevo Consejo de Estado, establecido en la primera Acta Constitucional, estaba integrado por 17 personalidades y entró en funciones el 15 de julio de 1976. Lo presidía un hombre señero, Jorge Alessandri Rodríguez. Este órgano consultivo prestó un invaluable servicio a la nación en esta fase arquitectónica de su futuro orden institucional, emitiendo su serena opinión en la etapa de estudio y discusión de lo que sería la Constitución de 1980 que, como se verá oportunamente, es fruto del trabajo más acucioso que se haya emprendido sobre esta materia en la historia del país.

Fueron invitados a integrar este alto cuerpo consultivo todos los ex Presidentes de la República, y generosa y patrióticamente prestaron allí un último servicio a Chile Gabriel González Videla y Jorge Alessandri Rodríguez. Eduardo Frei Montalva, por las razones expuestas al hablar en este ensayo del dilema democristiano, prefirió no colaborar en el renacimiento de la vida cívica chilena y conservarse para después, cuando otros hubieran pagado los costos políticos de la reconstrucción nacional, el control del extremismo violentista y el reordenamiento del Estado.

También integraron el Consejo de Estado antiguos Comandantes en Jefe de las Fuerzas Armadas. En esa experiencia está el germen de los Senadores Institucionales previstos en la Constitución de 1980, uno de los avances más significativos para temperar los excesos de la partitocracia y, por ello, visceralmente resistidos por sus oligarquías rectoras.

A lo largo del tiempo y en forma anónima, como debe ser la función de Estado Mayor, el Comité Asesor continuó desempeñando sus tareas, dando curso a los más variados requerimientos de los miembros de la Junta. Al lado de los trabajos específicos que se le encomendaban realizaba periódicamente Apreciaciones de la Situación Nacional, ejercicios en los cuales vaciaba la segura y larga experiencia que se tenía de esta metodología en el plano militar, para analizar e integrar los antecedentes relevantes de los campos de acción en el ámbito superior del Estado, de modo de evaluar y concluir cómo se estaban cumpliendo las metas planteadas por el mando y sugerir las medidas que la situación del país aconsejaba adoptar.

Más adelante se creó el cargo de Jefe del Estado Mayor Presidencial, dependiendo directamente del general Pinochet, cuyo primer Jefe fue el general Sergio Covarrubias. A través suyo se ordenó en adelante la tarea del Comité Asesor, al cual instruía sobre las grandes tareas relacionadas con la conducción del Estado. La coordinación de la parte ejecutiva del gobierno, se afianzó posteriormente con la brillante colaboración del Secretario General del Ejército, coronel René Escauriaza Alvarado, quien se integró posteriormente al Estado Mayor Presidencial. Su prematura muerte privó al país de un notable servidor.

En otro plano asesor, la despolitización y profesionalización de la Oficina de Planificación Nacional (ODEPLAN), frente a la cual se puso al capitán de navío (R) Roberto Kelly, contribuyó poderosamente a facilitar la exitosa labor del Gobierno Militar. A él se debe el mérito de haber hecho posible una planificación indicativa concreta y adecuada de la actividad económico-social que correspondía a la nueva concepción del rol del Estado según el principio de subsidiariedad. El éxito de las políticas orientadas a superar la extrema pobreza, es decir, la focalización del gasto social según una idea general coherente y sostenida en el tiempo, se debe a ODEPLAN. Además, especialmente gracias al apostolado cívico desplegado por Miguel Kast, ese organismo se convirtió en un semillero de entusiastas servidores públicos, dotados de una mística y nivel profesional hasta entonces desconocido.

La Reforma Administrativa y la Regionalización.

La Junta de Gobierno también prestó su apoyo a otra iniciativa del general Pinochet destinada a tener fecundas consecuencias: la Reforma Administrativa y la Regionalización. Era un hecho innegable que de nada servirían las mejores concepciones gubernamentales si no se contaba con una Administración Pública capaz de materializarlas y llevarlas adelante con eficiencia. Con el propósito de subsanar las deficiencias de manera orgánica, ya a fines de 1973 entró en funciones la Comisión Nacional de la Reforma Administrativa (CONARA), emprendiendo la tarea de dimensionar estructural, funcional y geográficamente la Administración Pública a las verdaderas necesidades del país. El diagnóstico llevado a cabo por CONARA demostraba la existencia de una administración pública hipertrofiada, inorgánica, ineficiente y con tal grado de centralización, que su acción no podía hacerse sentir a lo largo de un territorio tan variado y complejo como es el de Chile.

La orientación básica impartida por el general Pinochet fue proponer una administración que de acuerdo a los Principios del Gobierno de Chile debía servir a un Estado subsidiario, es decir, limitado conscientemente a realizar aquellas tareas de bien general que el sector privado no debe, no puede o no se interesa en acometer. De allí resultaba una estructura que debía ser la más pequeña que pudiese cumplir esta tarea, descentralizada funcional y geográficamente. Por lo tanto, era preciso revertir una tendencia que tenía varias décadas en su haber. La enorme tarea que esto suponía debía comprender lo estructural —cambio radical en las estructuras orgánicas— , lo funcional —adecuación de las políticas de manejo de los recursos humanos, materiales y financieros— , y, en lo geográfico —que consistiría en el proceso de adecuación de una administración pública asfixiantemente centralizada, en otra que reflejara la múltiple realidad geográfica del país—.

Los resultados del trabajo llevado a cabo por CONARA comenzaron a verse muy pronto. Con la proclamación del Manifiesto de la Regionalización, el 11 de julio de 1974, se inició la reestructuración de los Ministerios, Servicios y Empresas Públicas y el proceso de reordenamiento del territorio nacional en regiones definidas con criterio orgánico Se procedió con cautela, partiendo con cinco Regiones Piloto —I, II, III, XI y XII— para abordar luego la división en Provincias o micro-regionalización y finalmente la determinación de las Comunas. La reformulación del nivel comunal fue especialmente arduo, pues es allí donde late la vida real de la población y, por ende, constituye el ámbito natural de la participación ciudadana. Tras analizar varias posibilidades se fijó en poco más de 300 el número de las Comunas. Un supuesto básico de la nueva concepción del municipio era su despolitización, pero en 1990, apenas la partitocracia volvió por sus fueros, lo primero que hizo fue desnaturalizar dicho concepto y una vez más le consideró el último escalón de la política partidista. Un poco antes, la reforma constitucional de 1989 ya había torpedeado la lógica de la regionalización al modificar su igual representación en el Senado —dos senadores por cada región, sin importar el número de sus habitantes— creando dos agrupaciones senatoriales en algunas regiones. Quizás sin pretenderlo, esa medida tornó difusa la diferente integración de la Cámara de Diputados y el Senado, que al menos para efectos electorales es hoy bastante similar.

El proceso de descentralización y desconcentración funcional y territorial permitió sacar al Estado del encuadramiento rígido y centralizado en que se encontraba, lo que unido a la disminución del tamaño de su estructura permitió acortar la línea del proceso de toma de decisiones y mejorar su eficiencia, creando el ambiente propicio para un desarrollo equilibrado de todas las zonas del país al volcar más recursos en apoyo a las iniciativas de bien público que puede acometer el sector privado y estimulando una acción más fecunda de las organizaciones intermedias en cada una de las regiones, provincias y comunas de Chile.

Como es obvio, al disminuir el tamaño y el poder del Estado, el sector más dinámico de la sociedad, su empresariado, tuvo el espacio necesario para competir, aplicando su iniciativa al logro de negocios que crearon empleos productivos y legítimas utilidades. La libertad económica, en no demasiado tiempo, cambiaría la atmósfera pesimista en que por muchos años se había desenvuelto la vida ordinaria de los chile-

nos, surgiendo en su reemplazo una actitud positiva que vió en el mundo su mercado natural, dilatando así, en medida jamás soñada, las fronteras económicas de Chile.

De otra parte, la regionalización tiene también un significado político que no se debe ignorar: es la mejor fórmula para contrarrestar los perniciosos efectos de la partitocracia, el ideologismo y la violencia, fenómenos persistentes a los que cabe una enorme cuota de responsabilidad en el fracaso del régimen democrático que rigió hasta el 11 de septiembre de 1973. Así, en la medida en que el proceso de regionalización se debilite o desnaturalice, mayores serán las posibilidades del retorno de esos viejos pero tenaces problemas.

El desafío de la paz interna.

La paz interna de una nación, huelga decirlo, es la condición básica para su progreso. Sólo cuando hay paz se puede hablar de normalidad, y la normalidad, a su vez, es el requisito necesario para la aplicación del derecho. Cuando la paz es alterada, para volver a ella muchas veces es preciso aplicar medidas de excepción apoyadas por la fuerza legítima. El objeto de las medidas de excepción, de cara al bien común, no puede ser otro que volver a alcanzar la paz. En ese marco conceptual se enmarca la lucha del Gobierno Militar por vencer la subversión.

Con un prisma diferente, algunas personas han sostenido que el movimiento subversivo en Chile era legítimo porque pretendía poner término a una dictadura. No es este el momento de discutir si toda forma de lucha es válida para deponer a un tirano, pero sí se debe afirmar, aún dando respuesta positiva a esa compleja cuestión, que sin duda tal procedimiento carecía de fundamento aquí porque el Gobierno Militar no fue una dictadura ni menos un régimen totalitario.

Para fundar tal aserto, viene al caso citar el testimonio de un noble adversario, Claudio Orrego Vicuña. Entrevistado por un vespertino, el periodista introdujo el tema de la siguiente manera: "Usted ha dicho cosas duras. Sin embargo, sabe que se las publicaremos. ¿Cree que eso ocurriría en una dictadura total como la que parece describir?". La respuesta fue: "No. Yo no he señalado eso. Mientras el país no pueda elegir a sus gobernantes, estaremos en una dictadura. Pero nosotros nunca hemos caracterizado a este gobierno por lo que no es. Nunca hemos dicho que es fascista o totalitario. Hemos hecho la distinción entre totalitarismo y autoritarismo". "¿Este es un régimen autoritario, entonces?", le preguntó el entrevistador. Orrego contestó: "Es un régimen autoritario. Hay espacios de libertad que saludamos como positivos. Y si la gente fuera objetiva, vería que nunca hemos sido instrumentalizados por el Partido Comunista. A la izquierda le hemos afirmado que éste es un régimen autoritario más libre que el de Praga, Camboya o Moscú. Lo hemos dicho por escrito. Los comunistas nunca nos han podido instrumentalizar para su campaña de "derechos humanos". Nosotros estamos en lucha por la democracia representativa, sin odios, sin rencores, sin venganzas. Buscamos la paz y la reconciliación". [19]

---

19 La Segunda, 20.6.78.

De los dichos de Claudio Orrego se desprende que al menos un sector de la democracia cristiana comprendía que el verdadero adversario de Chile estaba en otro lado, en el comunismo internacional, que trataba de envolver a las otras fuerzas políticas en "su" guerra, y que la campaña de derechos humanos, tal como se llevaba en la práctica, era uno de los instrumentos utilizados por los comunistas para alcanzar sus designios.

Pero al margen de las escaramuzas políticas, que la población conocía por la prensa, se desarrollaba otro conflicto que contrastaba agudamente con la determinación de la casi absoluta mayoría ciudadana por sacar el país adelante.

En efecto, ante el panorama de dinámico esfuerzo y creciente progreso que cualquiera podía percibir, se alzaba el sombrío accionar del enemigo interno, el subversivo armado por potencias extranjeras que no descansó en su afán por enturbiar y enlutar la convivencia nacional.

En los días que siguieron al Pronunciamiento, el instrumento militar de la Unidad Popular fue derrotado en lucha abierta por las Fuerzas Armadas y Carabineros. No obstante, algunos grupos continuaron su lucha contra la comunidad nacional desde la clandestinidad. En su esfuerzo, buscaron organizar núcleos de guerrilla urbana y rural, pero fracasaron porque no pudieron suscitar la adhesión de grupos significativos de la sociedad. Para mantenerse, cualquier grupo irregular necesita la colaboración de amplios sectores, o al menos su complaciente pasividad, pues de otro modo no le es posible sobrevivir al interior de un Estado medianamente organizado. Esa comunión moral y material entre el pueblo y la guerrilla, nunca se dio en Chile. En consecuencia, las células violentistas se enquistaron en sí mismas y actuaron al margen del sentir y del querer de prácticamente toda la población.

De haber conseguido sus propósitos, los grupos subversivos habrían generado un clima de inestabilidad y quizás hasta un baño de sangre en la sociedad. Muy por el contrario, durante el Gobierno Militar ésta se desenvolvió casi en completa normalidad y rara vez sufrió los efectos de una lucha que se libraba en la oscuridad.

El primer deber de cualquier gobierno consiste en garantizar el orden público y la seguridad de los ciudadanos, para que ellos puedan realizar sus vidas en paz. Por tanto, el Gobierno Militar tenía que enfrentar la subversión. Al efecto creó los órganos destinados a materializar la defensa de la comunidad y les dotó de los medios indispensables para realizar las acciones que requería la guerra irregular que el adversario le obligaba a combatir. Se trató, pues, de una reacción del Estado en defensa del cuerpo social. Obviamente, si primero no hubiese existido la subversión armada, no habría sido necesaria su represión. Es este un dato elemental, pero demasiadas veces se lo olvida.

En este tipo de guerra, que cuando no se le controla a tiempo acaba por afectar indiscriminadamente a la población civil, hay que enfrentar y vencer a un enemigo que no trepida en utilizar los medios más viles. El factor sorpresa está de su parte; elige cuándo y dónde herir, y procede cobardemente. Por eso es menester adecuar los procedimientos gubernamentales a esas circunstancias. Si no se le neutraliza enérgicamente, el antisocial termina imponiendo su ley, aterrorizando a una población civil

que ve cruelmente afectada la normalidad de su vida cotidiana y pierde la confianza en el Estado, por definición, llamado a protegerle.

El general Pinochet comprendió desde el primer momento que sería un grave error emplear tropas regulares para ese fin. Las Fuerzas Armadas y Carabineros no tenían el entrenamiento ni la organización requerida para acometer este tipo de tareas. Además, por las delicadas circunstancias externas, convenía centrar su capacidad operativa en la defensa del territorio patrio. Así las cosas, a fines de 1973 se inició la organización de una Dirección que se haría cargo de la función de inteligencia y contra inteligencia en el nivel nacional, y de manera específica respecto a la insurgencia, labor distinta a la que en rigor compete a los órganos de información de cada institución de la Defensa Nacional. Esa fue la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA), cuyo mando fue asignado a un oficial especialmente calificado en el área de inteligencia, el entonces coronel Manuel Contreras. El mencionado organismo se constituyó con oficiales y suboficiales de las cuatro instituciones armadas, pero pronto incluyó cierta cantidad de civiles que preparó para estos fines. Ellos enfrentaron a un enemigo adiestrado en Cuba y Nicaragua, en ciertos países del Cercano Oriente y en algunos satélites de la URSS, especialmente en la República Democrática Alemana.

Es posible que en esta lucha, oscura y espesa como ninguna otra, pueda haberse incurrido en errores y excesos. Son los costos inevitables de la guerra irregular. Probablemente sea muy tentador descalificar desde una posición de principios absolutos las formas que encierra el combate encubierto, pero esa tesitura conduce a graves errores de juicio porque omite la realidad concreta. El amongelatina dista mucho de ser un argumento retórico. En lo que aquí y entonces ocurrió, atendida la magnitud del problema que se enfrentaba, deben considerarse mínimos tales errores y excesos si se ponderan las bajas que se evitaron y los logros que se alcanzaron.

Parece innecesario decirlo, pero ciertas opiniones que todavía circulan entre personas de ordinario equilibradas, exigen hacerlo: para el Gobierno Militar nunca estuvo en duda que cada vida humana es preciosa. Para los cristianos —y como se ha recordado a propósito de su Declaración de Principios esa concepción del hombre y de la sociedad fue el núcleo fundamental al que respondió su acción— es artículo de fe que N. S. Jesucristo redimió a cada uno de los hombres y al precio de su pasión y muerte en la cruz. No hay mayor amor. Pero el marxismo leninismo, que era la ideología que sustentaban los subversivos, se mofa de todo ello y lo considera una fantasía acaso provocada por una dosis demasiado fuerte del opio de los pueblos, la religión. Es esa una diferencia moral insalvable entre los bandos que se enfrentaron en Chile y no conviene olvidarla.

En el plano moral los contendientes en esta lucha subterránea no pueden ser considerados equivalentes; salvo, claro está, que se considere en un mismo nivel ético a la patria y a la anti-patria, lo que evidentemente constituye un absurdo. Este es el punto central de la cuestión. La comunidad nacional tiene derecho a defenderse de la agresión interna con la misma fuerza con que lo haría de una invasión extranjera. Es una falacia estimar que son lo mismo el subversivo que el soldado. Hacerlo, es simplemente tomar partido por el primero, pero escudándose en aquella pretendida igualdad para soslayar la responsabilidad que ello implica.

En otro plano, para emitir un juicio sereno sobre lo que fue e hizo la DINA también es necesario meditar en la experiencia de otros países de nuestro propio entorno que atravesaron por circunstancias parecidas. Lo ocurrido en Nicaragua, Guatemala, El Salvador, Argentina y Perú, con cientos de miles de víctimas y daños que atrasaron en años su progreso, debiera hacernos muy cautos a la hora de criticar. Sin embargo, ¡cuán pocos chilenos tienen plena conciencia de lo que le deben a esos hombres y mujeres que arriesgaron su vida en esta lucha, y a veces la entregaron con abnegación ejemplar! No sólo son héroes anónimos, sino también olvidados.

Como es obvio, al comienzo el personal de la DINA carecía de toda experiencia práctica en el tipo de guerra que debía enfrentar en defensa de la sociedad. Su enemigo, por el contrario, era experto en la lucha subversiva que había provocado. Desde mediados de los años ´60 el MIR había actuado impunemente, aprovechando al máximo la pasividad del gobierno de la época. Este, a pesar de contar con los instrumentos jurídicos y materiales que le habrían permitido ahogar en ciernes esa amenaza a la convivencia nacional, se vio paralizado por "el hechizo de la izquierda", y quizás sin desearlo contribuyó como nadie a la consolidación del extremismo. Tampoco se puede olvidar que desde su Congreso de Chillán, en 1967, el partido socialista había adoptado públicamente la insurrección armada como curso de su acción política. Y el partido comunista, desde los propios fundamentos de su concepción de la política, mucho antes había proclamado que apelar a la vía armada o a la pacífica era una decisión táctica, no de principios, dando así patente de legitimidad a ambas. Es más, para Luis Corvalán, "la vía pacífica no es simplemente ni obligadamente un camino electoral. Ante todo es el camino de la lucha de las masas que pueden, incluso, en cierto momento, abrirse paso hacia el poder sin elecciones, utilizando otros canales, otras formas de acción, otras coyunturas".[20]

Para ser serios, entonces, no basta con proclamar que se está en contra de la violencia venga de donde venga, como muchas veces se dice con cierta complacencia. Hay que estar en contra de la violencia venga de donde realmente viene. Pero para eso se requiere poseer la virtud de la fortaleza en un grado que suele ser escaso entre quienes creen que el consenso, sobre todo y a cualquier precio, es la condición suprema de la actividad política.

Como fruto de su ya larga experiencia en Chile, el movimiento subversivo sabía que su actividad jamás suscitaría la adhesión de la masa ciudadana. Buscó entonces el eco que necesitaba para alcanzar sus fines en algunos sectores políticos alejados del régimen militar pero no comprometidos con la Unidad Popular. Hábilmente manipulados, ellos le proporcionarían una imagen de inocencia que les permitiría descargar la culpa de las consecuencias de la lucha clandestina sobre las fuerzas que los combatían. Para ese objeto se prestaban admirablemente algunos de los grupos políticos que aspiraban a una fugaz permanencia de los militares en el gobierno, como también algunos sectores eclesiásticos. Años más tarde, con todos los antecedentes a la vista, el cardenal Joseph Ratzinger acusaría al Consejo Ecuménico de Iglesias —que desde su

20 LUIS CORVALAN, "La vía pacífica y la alternativa de la vía violenta", artículo escrito en 1961 y publicado en *Nuestra vía revolucionaria*, Santiago, 1964, p.34.

sede en Ginebra, Suiza, coordina 332 iglesias nacionales cristianas, especialmente protestantes y ortodoxas, que reúnen unos 300 millones de fieles— de haber prestado apoyo incluso financiero a movimientos subversivos latinoamericanos, fenómeno que también comprometió a sectores de la Iglesia Católica. Esta denuncia ocurrió con ocasión de la presentación del libro *El quinto sello*, del sacerdote Nicola Bux, donde se explica cómo dicho Consejo ayudó a la revolución en latinoamérica, omitiendo al mismo tiempo sostener a los cristianos de la "iglesia del silencio" en Europa Oriental. Sobre el particular, señaló El Mercurio: "Como la situación chilena ha sido mencionada en la controversia, es del caso recordar que el Comité Pro Paz, apoyado por el Consejo Ecuménico de Iglesias y con participación de la Iglesia Católica, debió ser disuelto por el cardenal Silva Henríquez, a requerimiento del gobierno militar en 1975. De la entidad había sido copresidente el obispo luterano Helmut Frenz, quien no pudo reingresar al país. Dicho comité respaldó a numerosos extremistas durante su funcionamiento, siendo antecesor de la hoy disuelta Vicaría de la Solidaridad del Arzobispado de Santiago".[21]

Parece también innegable que hubo un punto de convergencia entre el extremismo y ciertas figuras públicas, nacionales y extranjeras, mentores intelectuales de la lucha subversiva. Especialmente corrosiva, pues comprometería moralmente su futura actividad, resultó ser la permeabilidad de una parte de la dirigencia política partidista a los afanes subversivos. Merced a sus contactos en el exterior, contribuyeron solapadamente a establecer una red de protección, no necesariamente marxista, que haría posible su acción hasta el término del Gobierno Militar e incluso más allá del mismo. Singularmente doloroso es el caso del sector del clero que con su ejemplo arrastró a muchos católicos hacia posiciones adversas a un Gobierno Militar que los había salvado de tener que vivir en un sistema no sólo ateo, sino en donde la Iglesia ha sido cruelmente perseguida.

Descendiendo ahora del plano de la inspiración y cobijo al de la cruda acción violentista, se encuentran los diferentes comandos extremistas. Su formación ideológica y métodos de lucha eran claramente marxista-leninistas. No es posible cuantificar su número, pero a modo ilustrativo es útil citar la siguiente observación de von Huyn: "Después del derrocamiento de Allende, desde 1979 vuelve a intensificarse la intromisión cubana en Chile. Más de cien terroristas del MIR formados en Cuba llegan clandestinamente a Chile en 1980 y son responsables de asaltos a bancos y atentados con bombas. En 1980, el presidente del partido comunista de Chile, Luis Corvalán, se encuentra con Fidel Castro en Cuba para planear los próximos pasos revolucionarios, de acuerdo con los terroristas del MIR que operan desde Cuba y Panamá bajo la conducción de Pascal Allende".[22]

Estos contingentes no fueron muy numerosos, es verdad, pero el impacto de la actividad terrorista no depende exclusivamente de la cantidad de personas implicadas en ella. Neutralizarlos, como efectivamente se hizo, obligó a distraer importantes medios humanos, materiales y financieros, recursos que de no existir la agresión habrían tenido un fin social más positivo.

---

21 La Segunda, 9.6.97 y El Mercurio, 15.6.97, p. A2.

22 CONDE HANS VON HUYN, *Victoria sin guerra*, op. cit., p. 281.

Haber logrado controlar la situación —pues de otro modo la población habría sido afectada significativamente por el terror, cosa que evidentemente no ocurrió— no es lo mismo que haber logrado terminar definitivamente con esta amenaza. La supervivencia de la actividad subversiva se explica por al menos dos razones: la primera, de orden psicológico, estriba en que como consecuencia de la campaña propagandística de alcance mundial dirigida desde Moscú, los organismos de derechos humanos, algunos sectores eclesiásticos y una parte de la cúpula democratacristiana, lograron blanquear la imagen de estos "jóvenes idealistas", como les llamara alguna vez Allende, transformándolos en luchadores por la libertad y la democracia. Así, de responsables en alto grado del quiebre de la convivencia cívica que culminó en 1973, pasaron a la condición de víctimas de quienes justamente querían reparar el daño que habían causado. Esta inversión de la realidad permitió el reclutamiento de individuos encandilados con la aventura revolucionaria, jóvenes que sirvieron de "carne de cañón" y pagaron las consecuencias, mientras sus instructores permanecían en la sombra y los mentores intelectuales mantenían una cómoda posición en el exilio o al interior del país, aprovechando verdaderos "santuarios" que a las fuerzas del Estado, aunque conociendo sus pasos, les estaba vedado tocar. En esta maniobra indirecta, los marxistas y sus no tan ingenuos seguidores democráticos resultaron ser verdaderos maestros.

El otro motivo de su notable capacidad de resistencia fue el permanente flujo de hombres entrenados para la lucha clandestina, materiales bélicos y dinero que les proporcionaron los centros de la subversión mundial, especialmente Cuba. Así, derrotados una y otra vez, volvían a resurgir. Pero jamás lograron la decisión estratégica que buscaban. Estrellándose siempre con un proyecto político encaminado hacia la creación de una auténtica democracia —que pese a todo el Gobierno Militar mantenía imperturbable— llegaron a intentar asesinar a quien personificaba ese camino, el general Pinochet, tras descubrirse en Carrizal Bajo una internación de armas destinada a la sublevación masiva que nunca pudieron materializar.

Dos corolarios surgen de este trágico capítulo de nuestra historia reciente. El primero es que como consecuencia inevitable del tipo de lucha que los subversivos provocaron, ambos bandos sufrieron bajas; pero el formidable dispositivo de desinformación montado por la Unión Soviética transformó los hechos, ante la opinión pública, en un sistemático abuso del Gobierno Militar sobre desarmados e inocentes ciudadanos chilenos y turistas extranjeros. No es otro el fondo de la campaña por los derechos humanos —derechos sólo reconocidos a los agresores, nunca a los agredidos— que a fin de cuentas enlodó el esfuerzo desplegado por la autoridad para garantizar la normalidad de vida de toda la población. Por cálculo maquiavélico o simple debilidad moral, algunos hombres influyentes creyeron más conveniente a sus propósitos hostilizar a los bomberos y disculpar a los incendiarios. En esta circunstancia está el germen de algún susto que más de alguien padecería en el futuro.

La segunda conclusión representa un pequeño consuelo. Los cuantiosos recursos gastados por la Unión Soviética en su persistente agresión a Chile y su apelación constante a la defensa de los derechos humanos de sus agentes locales, no tardaron mucho en volverse como un boomerang en su contra. Contestar a ¿cómo andamos por casa?, se convirtió en un asunto embarazoso pues no tenía respuesta satisfactoria en

el propio sistema comunista. El criterio de doble medida aplicado a nuestra realidad y a otras similares hizo tomar conciencia a muchos de la farsa brutal montada por el comunismo para encubrir su naturaleza y fines, contribuyendo a precipitar su caída.

El desafío de la paz externa.

La característica principal del ambiente internacional en que se desenvolvió Chile desde el mismo 11 de septiembre de 1973 fue de creciente animadversión. Haber puesto término al experimento marxista, le acarreó las iras de la Unión Soviética y de todos los círculos en que ésta ejercía influencia. Pero es indudable que entre las otras grandes potencias no se comprendió la naturaleza y magnitud de la tarea asumida por el Gobierno Militar. Esto se debió, más que a los errores en que éste pudo haber incurrido, a la hipocresía de muchos gobiernos que en el plano internacional tienen un discurso público y otro privado. Estábamos orgullosos de haber vencido al comunismo en nuestra patria y nos creíamos por ello merecedores del respeto y la ayuda del mundo libre. No pocos soñaron con un Plan Marshall, desconociendo que Estados Unidos ha sido muy generoso con sus enemigos pero no tanto con sus aliados. ¡Qué pronto llegó el desengaño! Hubo, es verdad, cierta ingenuidad para explicar afuera lo que aquí había sucedido. Pero esta franqueza era producto de la limpieza de alma, traducido en un comportamiento que huye de la ambiguedad. Es lo propio del *ethos* militar. Pero la diplomacia tiene su propia lógica y para cautelar el interés de Chile fue necesario aprender a moverse en ese complejo sistema de espejos distorsionadores de la realidad.

Con todo, no es posible minimizar el daño causado a la imagen del Gobierno Militar por la monumental campaña de propaganda y desinformación emprendida por los soviéticos. Lo acontecido en Chile fue una derrota que en el marco de la Guerra Fría resultaba insoportable para el comunismo internacional. Le era necesario ocultar la verdad. Un retroceso de esa magnitud y el ejemplo de una nación que se rehacía a sí alejándose de su órbita imperial era inaceptable. Sus designios, especialmente en el Tercer Mundo, donde su actividad era particularmente intensa en esos años, se verían amenazados si la experiencia chilena era divulgada. Había quedado demostrado que la vía pacífica de los comunistas era una patraña y, lo que es aún más grave, que el dominio comunista no era irreversible.

Así, apenas conocido el Pronunciamiento Militar, Chile se convirtió en anatema para Moscú. Sus cadenas de transmisión, esparcidas por todo el orbe, se encargarían de proclamarlo sin descanso durante años. Fuimos víctimas de lo que el presidente Reagan llamaría más tarde el imperio de la mentira. La cobardía moral de las potencias democráticas, denunciada el mismo año 1973 por Solzhenitsyn en la estremecedora conferencia que pronunció en la Universidad de Harvard, hizo el resto. Valga un ejemplo para mostrar el grado de estupidez que alcanzó la animadversión al régimen chileno: Jorge Luis Borges, cima de las letras castellanas en este siglo, no recibió el Premio Nobel por el sólo hecho de haber sido recibido en audiencia por el general Augusto Pinochet el año 1976. Lo afirmó en Buenos Aires el ex senador comunista Volodia Teitelboim al presentar su libro *Los dos Borges*, obra que incluye el testimonio de

Arthur Lundkvist, uno de los 18 miembros de la Academia Sueca, quien se declaró un tenaz opositor a la concesión del Nobel de Literatura al escritor argentino "por su apoyo a la dictadura de Pinochet, que ha sido usado para intentar una operación cosmética". Por su parte, la viuda de Borges, María Kodama, ha revelado que su marido recibió una llamada telefónica desde Suecia para persuadirle del viaje que emprendería a Chile, pues "si lo hacía, perdería la posibilidad de recibir el Nobel".[23]

Según muchos observadores, cuando se produjo el Pronunciamiento Militar la relación de poder mundial era favorable al bloque soviético. Estados Unidos, interna y externamente, pasaba por el peor momento que ha vivido en este siglo. La imagen que proyectaba en el mundo, así como las políticas que sustentaba, se había debilitado paulatinamente debido al escándalo de Watergate y la renuncia de Nixon. La política exterior americana se vio todavía más enmarañada por la desastrosa retirada desde Vietnam. Dejó de ser un aliado confiable para las naciones pequeñas que en muchos lugares se veían amenazadas por el comunismo. La elección de Carter, en 1976, significó el fin de la doctrina del realismo político, sustentada desde el término de la Segunda Guerra Mundial, y puso el énfasis en la vigencia de los derechos humanos del adversario —tal vez como reflejo de una conciencia intranquila por el comportamiento de algunos militares en Viet Nam— con lo cual, de hecho, puso a su país más o menos en la misma posición que el bloque soviético respecto a los ataques al gobierno chileno en todos las organizaciones internacionales. Así quedó configurada una monstruosa confabulación contra nuestro país.

En ese escenario, mientras la pugna bipolar continuaba, el Gobierno de Chile —quizás el más definido anti-marxista y el pionero en muchas ideas que recién se consolidarían en el mundo al aproximarse el fin del siglo— quedó sitiado y fue tratado como un paria al cual muy pocos estaban dispuestos a ayudar, al menos oficialmente, incluso en sus más urgentes necesidades de defensa. La firme presión de la Unión Soviética, la antipatía de los Estados Unidos —cuyo Departamento de Estado era un reducto liberal, en el sentido que ellos dan al término— y los problemas de política interna de las naciones europeas, arrastraron a muchos otros Estados a cerrar filas en contra de Chile. Esta actitud, como se ha dicho, fue singularmente perceptible en Naciones Unidas y otros organismos internacionales, donde las responsabilidades individuales tienden a disolverse en complejas transacciones. Para comprender este fenómeno, no conviene olvidar que la enfermedad del izquierdismo ganó muchos adeptos en círculos pseudo intelectuales y diplomáticos, de modo que pasó a ser una suerte de moda, algo así como lo "políticamente correcto" en el manejo de las relaciones internacionales.

En ese ambiente hostil, muy pocos funcionarios internacionales quisieron abrir sus conciencias a la realidad de Chile, y tener el valor moral de apoyarlo en público. ¡Ah, la carrera! Otra cosa eran sus opiniones en privado.

Pero, mientras los gobiernos marcaban cuidadosamente las distancias con este nuevo paria de la comunidad internacional, temerosos de las represalias de ambas superpotencias o inhibidos por problemas de política doméstica, muchos bancos y

---

23 La Segunda, 16.9.96, p. 5.

amplios sectores del ámbito privado comenzaron a percibir que aquí estaban dadas las condiciones para hacer negocios de largo plazo. La desconfianza de los inversionistas, provocada por las desatinadas medidas de la década revolucionaria, comenzaba a ser superada por los datos que reflejaban la realidad. En Chile había un gobierno serio, claro y respetable, sostenido por la opinión pública y con un ideario que se encaminaba a la recuperación de la democracia y al establecimiento de un sistema económico de mercado, respetuoso de la propiedad y de la palabra empeñada. Después de pagar las deudas que habían dejado las anteriores administraciones, creaba las bases para la apertura hacia los mercados mundiales y para el ingreso del capital extranjero. El reconocimiento del sector empresarial, mucho más libre de anteojeras ideológicas que los entes gubernamentales, contribuyó decisivamente a dar a conocer en el mundo el verdadero rostro de Chile.

Naciones Unidas jugó un papel importante en la delicada situación internacional que en esa época atravesó Chile. No era de extrañar que entre los cinco miembros permanentes del Consejo de Seguridad —órgano en donde radica el poder efectivo de la organización— la posición de la Unión Soviética le fuera adversa: su mal contenida ira resultaba explicable. Que a ella se sumaran los Estados Unidos fue algo más difícil de asimilar.

En efecto, el Pronunciamiento Militar no sólo había salvado a Chile de caer en la órbita soviética, sino que había sido un factor decisivo para evitar que lo hiciera el Cono Sur. En tal sentido contribuyó poderosamente a la recuperación de la democracia en Latinoamérica, con lo cual evitó muchos problemas que de haber seguido su curso natural hasta podrían haber terminado por inducir a una intervención militar de Estados Unidos. En ese caso, la historia del Continente habría sido muy diferente a la que felizmente conocemos. Paradójicamente, el comportamiento del gobierno norteamericano respecto a Chile fue diferente al de su archienemigo sólo en matices, aunque significativos. Así, mientras los soviéticos eran agresivos y casi beligerantes, los norteamericanos mostraban una actitud estólida. Curiosa situación la de nuestro país: durante la Unidad Popular vivió días de tirantes relaciones y mutuo recelo con las potencias del llamado mundo libre, pero nunca obtuvo un apoyo concreto de su hermanito mayor. Tras caer el gobierno de Allende, aunque regularizó y se hizo cargo de los compromisos económicos pendientes con todo el mundo y en lo político retornó al bloque de naciones occidentales, apenas logró una leve mejoría en el nivel diplomático con las potencias que se suponía encarnaban el ideal democrático en la Guerra Fría. Mas de una lección se debiera sacar de este episodio. Allí quedó de manifiesto cuánto hay de realidad y cuánto de mero juego de apariencias en Naciones Unidas.

La actitud de ambas superpotencias influyó sobre los gobiernos de muchos otros Estados, generando una condición de aislamiento que fue amortiguándose cuando, por sobre la mendaz propaganda, se fue imponiendo la inocultable realidad del positivo ordenamiento del país, la recuperación de su economía y lo conveniente que resultaba para el interés de las diferentes naciones mantener lazos más sólidos con nosotros.

Fue notable, y jamás se olvidará, que en tan adversas circunstancias la República Popular China haya mantenido una prudente independencia de juicio. En razón de su

sistema político, sí que podría haber tenido razones ideológicas para plegarse a esa injusta confabulación contra Chile. Sin embargo, mantuvo inalterables sus lazos diplomáticos con Santiago y en más de una ocasión su voto le favoreció en el Consejo de Seguridad. He ahí una muestra de lo que debe ser la diplomacia, esto es, un instrumento para facilitar una relación civilizada entre Estados que, soberanamente, mantienen un diferente orden de vida.

Volviendo a Naciones Unidas, cabe señalar que en cierto modo se nos acostumbró a ser discriminados. Cada año, en el mes de septiembre, la Asamblea General ventilaba acusaciones por supuestas violaciones a los derechos humanos. Los hechos objeto de tal reproche derivaban de la reacción defensiva del Estado contra los intentos permanentes de subversión que el bloque soviético mantenía latente en Chile, inyectándole una corriente permanente de terroristas que él mismo adiestraba, junto a medios financieros y armamento. A lo anterior se sumaron los atentados cometidos en el extranjero que costaron la vida a Orlando Letelier y su secretaria, al general Carlos Prats y su cónyuge, y que hirieron a Bernardo Leighton y su cónyuge. Estos hechos no tienen justificación alguna. Sólo quienes quisieran causar un gravísimo perjuicio a la causa de Chile podrían haberlos concebido. Nuestra nación jamás ha sido un centro del terrorismo internacional. Tampoco está en el estilo de las fuerzas de seguridad chilenas el frío asesinato, ni dentro ni fuera de nuestras fronteras. No pueden decir lo mismo nuestros acusadores...

Consecuencia de lo anterior es que Chile apareciera, por primera vez, en la deshonrosa nómina de los Estados que conculcan los derechos humanos. Y ello sin que la atención se centrara en los países de la órbita soviética —donde se han cometido las mayores atrocidades, y lo que es peor, de un modo sistemático, como nunca conoció la humanidad— ni tampoco en aquellos desde los cuales se fraguaban los intentos subversivos destinados a desestabilizar nuestro país. Esta visión tuerta y torpe hizo posible una de las más indignantes infamias a que se ha prestado Naciones Unidas. Entre sus mentores está, más allá de toda duda, la Unión Soviética. Sus órganos de desinformación han hecho escuela en esta sórdida materia y a medida que gracias al nuevo orden de cosas imperante en el mundo los archivos del KGB van siendo estudiados, la opinión pública va conociendo hasta qué punto fue manipulada. Pero también se prestaron a esa triste operación algunos compatriotas. Si alguien se interesa en saber quienes fueron, leerá con provecho las memorias de Orlando Millas.

Como es sabido, la Guerra Fría dividió al orbe en dos bandos casi absolutamente separados. Y en este contexto el "casi" fue significativamente relevante. Ocurría que, de hecho, las cosas no eran tan simples ni transparentes. Por el contrario, eran complejas y opacas. Al menos en el mundo occidental, donde el grado de libertad existente permitía que bajo una superficial objetividad se difundieran las consignas comunistas, muchas veces apenas disfrazadas de apresurado democratismo. En la otra mitad del mundo, atrás de la Cortina de Hierro, ¿cómo saberlo? En cualquier caso, a raíz del Pronunciamiento Militar fue posible descubrir cuántos amigos tenían los marxistas chilenos a este lado del muro de Berlín.

Para muestra un botón. Hortensia Bussi —cónyuge de Salvador Allende, aunque en los últimos años sólo vagamente unidos— fue recibida con los brazos abiertos por ese país maravilloso que es México. Después de un breve pero merecido descanso en esa posta, siguió viaje a Moscú. Allí, en el Congreso Mundial de las Fuerzas de Paz, "fue festejada como la última de una larga lista de heroínas revolucionarias", lo que para los chilenos no pudo menos que ser jocoso. En contacto con varios comunistas norteamericanos allí presentes, fue persuadida para emprender una gira de conferencias en Estados Unidos. Para ellos la invitación era una provocación, una apuesta a favor de la candidez e ignorancia de sus compatriotas, seguramente encaminada a forzar un incidente que les diera publicidad. La metamorfosis de que fue objeto Hortencia Bussi sólo se explica en términos de propaganda. Después de todo sus opiniones, al menos mientras Allende estuvo en este mundo, carecían de interés. Sin embargo, "fue transformada de una mujer desdeñada, en la valiente viuda", como observa Whelan.

Antes de ir a norteamérica pasó por Roma. Allí, en entrevista concedida a Il Messaggero que fue publicada el 30 de octubre de 1973, se permitió afirmar que el partido Demócrata Cristiano tuvo "la mayor responsabilidad" en el pronunciamiento militar, pues, "no hay dudas de que los democratacristianos fueron un instrumento de las grandes empresas norteamericanas tales como la International Telephone and Telegraph (ITT) en Chile", añadiendo que "el plan para derrocar a mi marido se originó en Washington". Al parecer, su marido no la tenía muy al tanto de los acontecimientos que se fraguaban bajo sus mismas narices. Pero quizás la cereza de esa torta de boberías sea haber sostenido que "Eduardo Frei —una herramienta del imperialismo norteamericano— es considerado por los chilenos libres como el hombre responsable por el golpe".[24]

Es curioso que a pesar del tenor de sus opiniones y al hecho de ser ostensiblemente monitoreada desde Moscú, ella y su comitiva no tuvieran ninguna dificultad para conseguir visa y lucirse en norteamérica durante un ciclo de charlas que duró doce días, en diciembre de 1973. Whelan cita a Víctor Lasky —anti-marxista conocido y autor de un folleto cuyo sugerente título es "Turning Defeat into Victory" (Transformando la derrota en victoria)— quien la siguió en su gira. Éste relata que una integrante del séquito, secretaria e intérprete, la comunista chilena Fernanda Navarro, habló en nombre de la viuda de Allende en una reunión convocada para protestar, literalmente, por el "golpe fascista en Chile, respaldado por los Estados Unidos", en el Ayuntamiento de Nueva York. Ese fue su debut en Estados Unidos, después emprendería giras similares en febrero de 1974 y abril de 1975.

El tenor de su discurso fue solicitar que el gobierno americano abandonara "su política financiera en apoyo de la Junta", pidiendo para "los chilenos oprimidos y su valerosa lucha la misma ayuda —¡nótese!— que el pueblo norteamericano había organizado en favor del pueblo vietnamita", como dijo textualmente en Los Angeles el 7 de diciembre de 1973. No dejó de constituir un síntoma inquietante la nula reacción que provocaron sus palabras en la sociedad norteamericana, cuando todavía estaba

---

24 El Mercurio, 1.11.73.

tibia la sangre de 50.000 soldados caídos en Vietnam. Tiene también algún interés dejar constancia de los patrocinadores de la gira, un grupo llamado Católicos, Luteranos, Episcopalianos y Metodistas para la Acción Social (CLEM). Su anfitrión fue el reverendo George Herbeck, a quien ella había conocido en Moscú.[25]

Hasta cierto punto se puede entender que la viuda de Allende fuera utilizada en esa campaña de difamación y que ella no se resistiera mayormente a tan duro oficio. Durante años recorrería el mundo como emblema transhumante de la desaparecida Unidad Popular. Sus opiniones, puntualmente recogidas por las agencias internacionales, eran reproducidas en la prensa chilena. Para que los lectores no se desorientaran con tanto desplazamiento —que le llevó a lugares tan lejanos como la India y Japón— alguna vez se publicó un mapa consignando las últimas etapas de su agotador periplo.[26] Pero su base de operaciones fue la ciudad de México. Allí, en el exclusivo barrio El Pedregal del Ángel, compró en octubre de 1973 una mansión por la que pagó 240.000 dólares. El Kremlin, reconociendo sus valiosos servicios, el 30 de septiembre de 1977 le otorgó el Premio Lenin.

Menos comprensible, al menos en la lógica de la Guerra Fría, es que Gladys Marín, la sempiterna dirigente de la juventud comunista, haya sido recibida a fines de 1973 por algunos representantes demócratas en el Capitolio y encontrado una calurosa acogida. Así se dio el gusto de lanzar, en pleno corazón del mayor adversario de la Unión Soviética, la típica diatriba comunista en contra de la CIA, responsabilizándola de la caída de la Unidad Popular; y por cierto aprovechó su maravillado público para abogar por el aislamiento del Gobierno Militar. "Así, —dirá Whelan— la revolución estaba aún en pañales cuando poderosas fuerzas de los Estados Unidos dictaron sentencia contra ella y empezaron a movilizarse para aplastarla. Esos esfuerzos no terminarían nunca".

Pero si bien Estados Unidos era el terreno privilegiado por los agitadores de izquierda en contra de la Junta, no era su único teatro de operaciones. El Congreso Mundial de las Fuerzas de Paz, organismo de fachada soviético con base en Praga, reunió a 3200 delegados de 144 países. Según Pravda, esos delegados representaban a 1100 partidos políticos y movimientos nacionales, y a 120 organizaciones internacionales. En la ocasión, Leonid Brezniev prometió "la completa solidaridad de la Unión Soviética con los demócratas y patriotas de Chile", declarando además, con absoluta seriedad, su "firme creencia de que la causa justa por la que ellos lucharon y están luchando ahora, en condiciones tan difíciles, la causa de la independencia, de la democracia y del progreso social, no puede ser derrotada, no puede ser exterminada, y la defensa de estos excelsos valores, su traslado a la vida, la lucha contra los que los amenazan y buscan destruirlos, está inquebrantablemente ligada a la lucha para asegurar la paz duradera sobra la tierra". Hablaba sobre Chile, naturalmente, no sobre su propio feudo. Si no fuera trágico —pues las mismas razones que esgrimía eran el filo de la espada que pendía sobre el sistema comunista— su discurso sería risible.

25 JAMES R. WHELAN, op. cit., pp. 626, 627 y 628.
26 La Segunda, 11.6.87.

Lo que cuenta es que la cadena de transmisión estaba en marcha y el doble cerco, desde la Unión Soviética y los Estados Unidos, sería desde entonces una estruendosa realidad.

En ese escenario, teñido de ideología y pasión hasta el punto de desfigurar por completo la realidad, los enemigos de la causa chilena estaban en su ambiente. No podían soñar con mejores condiciones para actuar impunemente. A modo de ejemplo, recuérdese que Romesh Chandra, secretario general del Consejo Mundial por la Paz, de clara orientación marxista, en julio de 1974, dirigió una delegación a México, Venezuela, Colombia, Ecuador y Argentina, para estimular el sentimiento contra la Junta. Muy satisfecho de sus logros, en diciembre de 1974 pudo afirmar que el gobierno chileno encaraba una "oposición creciente en casa y aislamiento total en el exterior". Ese mismo año se constituyó la Comisión Internacional para investigar los crímenes de la Junta chilena, que de inmediato llevó a cabo reuniones en las capitales de Finlandia y Dinamarca. Más tarde, en febrero de 1975, se reunió en ciudad de México, logrando activar una campaña de propaganda que hasta incluyó un largo artículo en The New York Times, sin ninguna mención del origen comunista de la comisión. Esta última alcanzó gran resonancia por la presencia en ella de Carlos Altamirano, que viajó desde La Habana, Orlando Letelier, Pedro Vuscovic y Hortencia Bussi de Allende.[27]

Con todo, aunque la presión de las grandes potencias gravitaba negativamente, hubo Estados que sin necesitar mayormente la colaboración de Chile prefirieron hacer caso omiso de la cortina propagandística. Brasil, Uruguay, Corea del Sur, Sud-Africa e Israel, que habían sufrido en carne propia el embate de una opinión pública movilizada en su contra, no se dejaron arrastrar por esta confabulación. Es más, su comportamiento fue cordial hasta un grado que superó las exigencias diplomáticas. Resulta grato dejar constancia de este hecho y merece ser conocido por las generaciones jóvenes de nuestra patria.

En las naciones que nos acusaban, junto al mar de ignorancia, hubo también opiniones de personalidades que conocían bien nuestro país y que conviene rescatar del olvido. Así, por ejemplo, en 1974 viajó a Chile Ralph Dungan, embajador en Santiago durante el mandato de John F. Kennedy, quien no se preocupaba de ocultar sus simpatías hacia la democracia cristiana chilena. Habiendo gozado de absoluta libertad para desarrollar su misión investigadora en un país que parecía estar caminando normalmente, de lo que dejó expresa constancia, su conclusión fue que "en gran medida, uno debe reconocer que allí la vida está tomando forma según lo que la gente —no toda, pero la mayoría de la gente— quiere que sea, y eso es bueno".[28] Desgraciadamente, testimonios como el citado, y fueron muchos, no bastaron para enderezar la torcida imagen atribuida a Chile. Ellos tenían razón... pero sólo la razón; y en un mundo escindido ideológicamente eso no bastaba.

Para tener una idea de la deformación de la verdad que esta campaña internacional producía, baste decir que mientras la Cruz Roja, con conocimiento directo de

---

27 Las citas en JAMES R. WHELAN, op. cit., p. 629.

28 "Informe de Dungan", en El Mercurio, 5.5.74.

la situación, estimaba en mayo de 1975 que existían en Chile unas 3.100 personas privadas de libertad mientras se investigaba su responsabilidad penal por diferentes delitos —lo que a pesar de ser abultado se aproximaba a la verdad— informes divulgados al exterior daban cifras del orden de 90.000 detenidos. Esto era tan exagerado que para cualquier habitante del país resultaba simplemente increíble. Pero ese era el tipo de "noticias" que transmitía Radio Moscú en su programa Escucha Chile, emitido en onda corta, cada día, durante treinta minutos. Por su intermedio el poder soviético hizo explícito su propósito de "aislar, sofocar y, en último término destruir a la Junta". Los locutores eran comunistas chilenos instalados en su patria política. Sin embargo, a pesar de estar viviendo en el paraíso de los trabajadores, escaparon de allí para volver al infierno de la dictadura chilena tan pronto ésta se los permitió.

El cinismo de aquéllos contrasta con el testimonio de la persona que, quizás con mayor lucidez y viril dolor, expresó el sentido de la lucha de los chilenos contra el bloque soviético. Se trata del teniente coronel Patrick J. Ryan, de la Infantería de Marina de los Estados Unidos. Este oficial había formado parte de la Misión Naval de su país en Chile desde diciembre de 1972 hasta abril de 1976, de manera que conocía perfectamente los antecedentes reales de la situación cuando en ese último año escribió: "Durante 10 años, Estados Unidos luchó contra el comunismo en Vietnam, país localizado a unas 7 mil millas de California y con una trágica pérdida de 55.000 vidas norteamericanas, más seis veces esa la cantidad en heridos, sin tomar en cuenta el tremendo costo de 150 billones de dólares. La debacle de Vietnam, creada y orquestada durante una década por los políticos en Washington al burlesco grito de batalla "respuesta calculada", lesionó nuestra unidad nacional como ningún otro evento en nuestra historia, desde la Guerra Civil. ¿Qué alcanzamos con este horroroso precio? ¡Perdimos la Guerra! Por otro lado, la República de Chile, situada en nuestro hemisferio, luchó contra el comunismo en el patio de los Estados Unidos, sin la ayuda de los B-52, de la Séptima Flota y sin la visita de Bob Hope. Ningún dedo norteamericano apretó los gatillos de los M-16, ningún embarque horroroso de ataúdes envueltos en la bandera norteamericana fue enviado vía aérea diariamente desde Santiago de Chile para ser sepultado en los Estados Unidos de Norteamérica. Lo que es más aún, sin nuestra ayuda y sin sentirnos abrumados con nuestra táctica de "respuesta calculada", los chilenos derrotaron al comunismo. (...) El Gobierno de los Estados Unidos no ha aplaudido la brillante derrota del comunismo pero, en forma increíble, nuestro Senado y el Congreso por medio de la Enmienda Kennedy al Acta de Ayuda del Extranjero, han terminado toda la ayuda militar al nuevo gobierno anti-comunista de Chile. ¿Por qué?" . [29]

La dolorosa pregunta del comandante Ryan no tiene una respuesta lógica. Los militares chilenos, al vencer al comunismo en su patria, habían creado una situación objetivamente acorde con el interés nacional de Estados Unidos. A éste, empeñado en una contienda mundial contra el bolchevismo, dicha victoria no le había costado un proyectil, una gota de sangre, ni siquiera un dólar. Nada justificaba, por

29 PATRICK J. RYAN, El Chile de Allende y los mil días perdidos, folleto, 1976, p. 2.

tanto, buscar su aislamiento. La única explicación del comportamiento de Washington es que las mismas fuerzas de opinión interna que habían provocado su derrota en Viet Nam —no precisamente sus Fuerzas Armadas— todavía conservaban una influencia determinante en los círculos del poder político.

La situación vecinal.

En las complejas relaciones de Chile con los países limítrofes han pesado, durante este siglo, dos tipos de hechos que las condicionan. Algunos que obedecen a realidades muy concretas, son condiciones vecinales permanentes; los otros responden más bien a motivos ideológicos. Los primeros son el resultado de factores históricos, geopolíticos y estratégicos que arrancan desde el nacimiento mismo de los nuevos Estados a la vida independiente y que han sido sustentados y alentados a través de los años. A pesar del cambio de las circunstancias, manifiestan una tendencia cíclica a la repetición. Los segundos, fueron presentándose en forma creciente desde la década de los ´60 —incluso se escuchó hablar de fronteras ideológicas— disminuyendo últimamente su vigor.

En el Cono Sur, los factores vecinales ideológicos adquirieron importancia con motivo de la Guerra Fría. En otras palabras, se trata de elementos de discordia que vienen impuestos desde otras latitudes, pero que surten sus efectos en la política del área, superponiéndose a veces a los de índole vecinal permanente, pero sin que estos últimos desaparezcan. Así, el general Juan Carlos Onganía, mientras ejercía la presidencia de Argentina, acuñó el concepto de fronteras ideológicas para significar que el comunismo era un entrometido que debía ser excluido de las Américas. En La Moneda, evidentemente no se pensaba así en aquella época: apenas asumió, Eduardo Frei se precipitó a restablecer las relaciones diplomáticas con el bloque soviético. Una década más tarde los vientos habían cambiado y en 1974, durante la X Conferencia de Comandantes en Jefe de Ejércitos Americanos, el entonces Jefe del Ejército Argentino, general Jorge Raúl Carcagno, rechazó ese concepto, siendo apoyado de inmediato por su colega del Ejército Peruano, general Juan Velasco Alvarado, de abiertas simpatías con la URSS. Y Chile, en ese momento, se debatía en una oposición frontal al comunismo. De esta suerte, aunque Argentina, Bolivia, Perú y Chile fuesen gobernados por mandatarios de formación militar —como lo eran Perón, Banzer, Velasco y Pinochet— no había entre ellos mayor afinidad ni propósitos comunes. Los clásicos factores históricos y geopolíticos volvían a imponerse. Es que ya rondaba en el ambiente el próximo centenario de la Guerra del Pacífico.

Para comprender la situación vecinal de Chile, la de entonces, la presente y casi con certeza la que regirá en el porvenir, no hay que perder de vista la vigencia de los factores vecinales permanentes. Sobre ellos, con variable intensidad, operan las consideraciones ideológicas derivadas del orden mundial, pero son aquéllos los que terminan por prevalecer. Bajo esa luz se pasará revista, de inmediato, a la situación de Chile en esa época respecto a sus tres vecinos.

Bolivia

El asunto de la mediterraneidad de la nación andina es sin duda el principal escollo en el camino de las buenas relaciones entre Chile y Bolivia. No es otro el tema central que les distancia, tanto en la mente de cada ciudadano boliviano como en el sentir colectivo de esa nación. A lo largo del último siglo es la idea-fuerza que no sólo mantiene cohesionada a la comunidad altiplánica, sino que constituye la única que eventualmente podría impulsarla a acometer una empresa común de magnitud en el campo internacional. Por eso, su estrato dirigente ha procurado interpretar ese sentimiento y cada vez con mayor insistencia plantea el tema ante los organismos y los foros internacionales. No le queda otro camino —salvo, naturalmente, el del entendimiento directo con Chile, pero, ¿cuenta con alguna fuerza política capaz de intentarlo y sobrevivir?— puesto que carece del poderío militar y del temperamento necesario para forzar una decisión.

Aunque el poder nacional boliviano va evolucionado positivamente, difícilmente puede ser estimado una seria amenaza. Con todo, siempre pesará sobre Chile. En cualquier hipótesis vecinal juega un rol complementario. Y no se puede dar el lujo de estar nuevamente en el bando derrotado, por lo que su intervención, al menos en cuanto a la oportunidad, siempre estará supeditada a lo que ocurra en un contexto más amplio. En consecuencia, para cautelar nuestros intereses, debemos mantener en prevención fuerzas importantes, capaces de neutralizar enérgicamente cualquier sorpresa que pueda amagar las líneas de comunicaciones y los flancos y espaldas del teatro principal de operaciones en el norte.

Esta preocupación, permanente entre los militares chilenos, hizo que el general Pinochet buscara el contacto con el general Hugo Banzer. El mutuo interés los llevó en Brasilia —donde en marzo de 1974 concurrieron a la ceremonia de transmisión del mando— a explorar la posibilidad de un encuentro que fuera altamente significativo. Tras intensos preparativos, se reunieron el 8 de febrero de 1975 en lo que se llamó el "Abrazo de Charaña". En ese punto limítrofe, junto con acordar la reanudación de relaciones diplomáticas, iniciaron un proceso encaminado a dar solución al enclaustramiento boliviano.[30]

La proposición chilena era simple de explicar en teoría, pero compleja en la ejecución: intercambiar con Bolivia 2.000 kms. cuadrados. Chile cedería una faja desde la frontera andina hasta un sector costero al norte de Arica y Bolivia haría lo propio en un lugar a determinar, contiguo a la frontera común. La idea reflejaba la buena voluntad de Chile, pues atendía un problema boliviano sin perjuicio de que la materia estaba ya resuelta hacía mucho por un tratado internacional vigente, cuyas cláusulas son extremadamente generosas si se las compara con las que se han impuesto a los pueblos vencidos en las guerras libradas durante este siglo en la muy culta Europa, por ejemplo, o en el pasado siglo entre Estados Unidos y México.

---

30 En 1962 Bolivia había roto las relaciones diplomáticas con Chile en protesta por la desviación de las aguas del río Lauca, destinadas a alimentar la central Chapiquiña y así proveer de energía a Arica. Dicho rio nace en Chile y desemboca en territorio boliviano, sin que jamás haya sido utilizado por ese país.

Este intento —idealista en grado tal que sólo podía sostenerlo un gobierno realmente seguro de sí, como era el chileno de esa época— fracasó muy rápidamente. Ante todo por la inmediata oposición del Perú, que hizo presente el poder de veto consagrado en su favor en el tratado de límites suscrito con Chile en 1929. En otras palabras, sobre cualquier devaneo sentimental respecto a su antiguo aliado, primaba el frío realismo. Bonita lección nos dio la diplomacia del Rímac. Como parecía impresentable negar sin más esa posibilidad de acceder al mar a Bolivia, a modo de contraposición, Perú invitó a internacionalizar Arica, haciéndose parte de un beneficio en su favor que desdibujaba por completo la intención que había tenido Chile al proponer abrir un corredor a la nación altiplánica. Para complicar todavía más la ya torpedeada gestión, esta última desechó la base misma de la solución propuesta, esto es, el principio de compensación territorial.

De este modo se frustró una iniciativo propiciada por el general Pinochet que mostraba claramente su audacia y rectitud de intención frente al problema que, a lo largo de un siglo, había ensombrecido las relaciones entre Bolivia y Chile. Pudo ser el inicio de una época de cooperación fructífera, dejando definitivamente atrás las secuelas de una guerra que Chile no buscó y en la que venció. A pesar de todo, su gesto le hermana con otro gran militar y estadista, el general Carlos Ibáñez, que en su día puso término a medio siglo de inestabilidad en la frontera con Perú.

Los presidentes de Chile, Perú y Bolivia tuvieron ocasión de reunirse en marzo de 1977, en Washington D.C., con motivo de la firma del Tratado del Canal de Panamá. De las conversaciones sostenidas Bolivia extrajo sus propias conclusiones y el 17 de marzo de 1978, tras acusar a Chile de falta de sinceridad, una vez más rompió las relaciones diplomáticas. Vino un período de tensión, porque desde ese país se inició una poderosa ofensiva diplomática, buscando en todo el mundo apoyo para su causa. La médula de su estrategia consistía en transformar su problema en un asunto multilateral, en la que obtuvo cierto éxito al lograr que la OEA —en una votación de 25 contra 1— declarara de "interés permanente para el hemisferio que Bolivia tenga una salida soberana y útil al Océano Pacífico". El presidente de los Estados Unidos, Jimmy Carter, atizó el fuego manifestando que el asunto boliviano era "una causa de conflicto en el Continente". Un triunfo semejante obtuvo Bolivia en 1983 en Nueva Delhi, en la conferencia de las Naciones No Alineadas.

Armándose de paciencia y haciendo valer los títulos jurídicos de Chile, la Cancillería logró que paulatinamente fuera bajando el perfil de tan enojoso asunto, el que con el tiempo volvió a su cauce estrictamente bilateral. En esto fue muy importante la constatación de Naciones Unidas en orden a que entre los países mediterráneos existentes en el mundo, nuestro vecino es uno de los que goza de más facilidades de tránsito para acceder al mar. La verdad es que la ausencia de litoral propio no es la causa del atraso relativo de Bolivia, y en tanto siga considerándolo en el nivel de consigna demagógica está condenándose a la frustración. Es posible que esa actitud sirva a sus grupos dirigentes, pero ciertamente perjudica a su pueblo.

En síntesis, el Gobierno Militar fue autor del más concreto y audaz intento de mejorar las relaciones con Bolivia, pero lamentablemente esa gestión fracasó y ese país continúa representando —en caso de una eventual crisis vecinal— una amenaza potencial imposible de ignorar.

Perú

Tras el derrocamiento del presidente Fernando Belaúnde Terry en 1968 —educado en Santiago y unido por múltiples lazos con su sociedad— el general Juan Velasco Alvarado, que lo reemplazó, inició una gestión populista de clara tendencia izquierdista. El llamado Plan Inca hizo explícitas las metas socialistas de su gobierno, que incluía la estatización de diarios, líneas aéreas, bancos, compañías de seguro y transportes. También abarcaba la nacionalización de la minería y el petróleo, con lo que afectó intereses de empresas extranjeras, principalmente americanas. Curiosamente, la incautación de esas inversiones no provocó mayor reacción en Washington. Si bien se dejó notar cierta preocupación por la emergencia de un régimen que tenía el odio a lo norteamericano por bandera, no hubo represalias políticas. Al parecer, según se deduce de esa experiencia si se la compara con la sufrida por Chile, tales medida se reservan para los enemigos de sus enemigos.

Paralelamente a este avance metódico hacia el socialismo, comenzó a observarse en el Perú una abierta preparación para la guerra. Junto a una masiva adquisición de armas ofensivas —especialmente blindados y artillería de asalto en la Unión Soviética, pero también aviones de combate en Francia y naves de guerra en Italia y Alemania, compras que en parte fueron financiadas con préstamos norteamericanos— la prensa controlada por el gobierno daba a entender que el objetivo era reconquistar el territorio perdido en la Guerra del Pacífico. El momento psicológico más adecuado era el centenario de aquel conflicto. Esa intención no constituía un secreto. Así lo decía, por ejemplo, un amplio reportaje publicado en el diario Washington Star News el 4 de agosto de 1974, escrito por el periodista Jeremiah O'Leary, cuya opinión era respetada por sus excelentes contactos en círculos de defensa e inteligencia americanos y que había presenciado el desfile de parte de ese moderno material de guerra en Lima, durante la parada conmemorativa del día de la independencia.

El experto en asuntos latinoamericanos y diplomático James D. Theberge —más tarde serviría con singular brillo la Embajada de Estados Unidos en Chile— escribió en 1975: "El derrocamiento del gobierno de Allende, en septiembre de 1973, enfocó la atención de Moscú sobre Perú, por considerarlo como el miembro más promisorio del frente "anticapitalista" y "antiimperialista" en Sudamérica (...) Moscú y Lima habían estado discutiendo el tema casi dos años. Pero, según se informa, fue sólo después de la caída de Allende que la Unión Soviética acordó proporcionar aproximadamente 200 tanques medianos T-55, artillería pesada y otros equipos al Ejército peruano, en términos de una concesión extremadamente generosa".[31]

Lo cierto es que Perú no sólo recibió material soviético, sino que le unió el que ya tenía de factura norteamericana, 60 tanques medianos Sherman, y a otros carros blindados de procedencia francesa, 100 tanques AMX-13. La posición peruana se fortaleció todavía más cuando Kissinger, obviando las expropiaciones de bienes americanos, hizo un apasionado alegato ante el Congreso en favor de la venta de armas al régimen de Lima y su llamado tuvo eco, traduciéndose en nuevo material

---

31 JAMES D. THEBERGE, *The Soviet Presense in Latin America*, Russak, New York, 1975, p. 87.

bélico entregado de inmediato a ese país. De ese modo Perú rompió el equilibrio existente en la zona. Ahora podía emprender una aventura bélica con posibilidades de éxito. Su ariete acorazado en tierra, sus nuevos submarinos y fragatas misileras en el mar, y sus modernísimos caza-bombarderos y bombarderos en el aire conformaban una potente fuerza de ataque. Como suele ocurrir en estos casos de rearme súbito, el factor más inquietante era el tiempo. Aunque el material soviético le había sido cedido a bajísimo costo, el gasto en armamento entre 1968 y 1973 superaba los mil millones de dólares; para mantener el ritmo, su debilitada economía debería hacer aún mayores sacrificios en los próximos años. Por tanto, su gobierno debía tomar una decisión político-estratégica a la brevedad, so pena de comprometer irremediablemente el nivel de vida de la población y, eventualmente, llegar a sufrir el costo de un desgaste político ciertamente peligroso para el régimen de Velasco Alvarado. En buen romance, había caído en la trampa —como también les ocurrió luego a los soviéticos— del sobredimensionamiento estratégico: estaban bien pero iban muy mal.

El tema estaba en la mira de los militares chilenos desde hacía tiempo. El conocimiento que se tenía del refuerzo del despliegue estratégico hacia el sur de su territorio, donde concentraron dos tercios de sus fuerzas, confirmaba que más temprano que tarde se vendría encima un conflicto que, como había ocurrido cien años atrás, tendría a la pampa nortina como primer escenario.

¿Cuál era la situación chilena frente a esta amenaza? En la primera mitad de la década de los ´60, enmarcado en los términos del Pacto de Ayuda Mutua, se había iniciado la renovación del material ligero. Ese instrumento de colaboración militar, creado por Estados Unidos en el contexto de la Guerra Fría, permitía el acceso a equipo norteamericano, nunca de última generación. ni propiamente ofensivo. Luego, durante la administración Frei se dio inicio a un programa que redistribuiría territorialmente las Unidades con un criterio más estratégico e impulsaría la modernización del Ejército para hacerlo operativo, según el criterio de "menos grasa y más dientes"; pero la iniciativa quedó en el limbo porque la seguidilla interminable de Comandantes en Jefe hizo imposible seguir una política estable y consistente. El grado de frustración de los oficiales por el lamentable estado de la fuerza se tradujo en sucesivas crisis; los alumnos de las Academias de Guerra y Militar Politécnica llegaron a solicitar su baja de las filas y un par de años más tarde, el 21 de octubre de 1969, se produjo el "Tacnazo". Durante ese período la disciplina sufrió un daño tal que se hizo frecuente oír hablar de un Ejército en trance de disolución. El que sólo en la segunda mitad de la década haya sido posible reemplazar al legendario fusil Mauser lo dice todo. La Armada estaba en mejor pié operativo; aunque la Escuadra era un conjunto bastante heterogéneo de buques americanos construidos durante la II Guerra Mundial, se les había dotado de modernos sistemas de armas y en la segunda mitad de esa década se habían incorporado dos submarinos y dos fragatas construidas para ella en Inglaterra. Por último, la base de la Fuerza Aérea eran los Hawker Hunter, también británicos, pero de segunda mano y diseñados en la primera mitad de los años ´50. Durante la Unidad Popular se habló, sobre todo en 1972, de la compra de equipo de campaña en la Unión Soviética. Pero eso no pasó de simples especulaciones y estudios preliminares, dado el escepticismo de los or-

ganismos técnicos de las Fuerzas Armadas. Después del 11 de septiembre de 1973, la posibilidad de adquisiciones regulares en el extranjero se cerró del todo.

La capacidad del país para producir su propio material de guerra era casi nominal. Lo que se necesitaba, incluso los repuestos para el material existente, debía ser adquirido en el extranjero y no había divisas ni condiciones políticas para asegurar el suministro. Descartado el poderoso bloque soviético, los mercados occidentales estaban controlados de alguna forma por Estados Unidos y la propaganda comunista comenzaba a hacerse sentir con rapidez y fuerza sobre ellos. Era imposible, se decía, colaborar con una Junta fascista que había cometido el error imperdonable de derrocar un gobierno popular y democrático como el marxista leninista de Allende. Pululaban, es cierto, mercaderes internacionales que hacían múltiples ofertas, pero sólo se les podría escuchar en un caso desesperado. Son los llamados "rifleros", que tienen buen olfato para predecir dónde hay tensión, pero carecen de confiabilidad. Ante la emergencia, el general Pinochet ordenó intensificar las medidas de alistamiento, utilizando los recursos disponibles y, sobre todo, desarrollando la inventiva.

Para cualquier persona con algún conocimiento de la realidad estratégica de Chile, era evidente que ese país necesitaba con urgencia dotarse con medios modernos para defenderse en la difícil encrucijada internacional que atravesaba. Las autoridades del Pentágono presionaban en vano para que se diera ayuda al régimen anticomunista de Santiago, que corría serio peligro. No sólo allí se comprendía el rol que las Fuerzas Armadas chilenas tienen en la custodia del paso austral entre los dos grandes océanos, un aspecto vital para asegurar las comunicaciones del mundo libre dada la vulnerabilidad del Canal de Panamá. Así lo reconocía en su edición de enero de 1975 la publicación Defense and Foreing Affairs: "Un Chile amistoso permitiría el paso de sus aliados a través del Estrecho, mientras que sus enemigos tendrían que tomar la ruta del mar de Drake, no tan peligrosa ahora como en los tiempos de los veleros, pero no puede descartarse tan fácilmente la ausencia de costas amigas en los alrededores ni la amenaza de un ataque aéreo desde el Continente Sudamericano". Ciertamente, a Richard Nixon no se le escapaba la gravedad de la situación que se estaba fraguando... pero su opinión carecía ya de toda importancia. De hecho, renunció cinco días después de la publicación del antes mencionado artículo de O´Leary.

No fue todo. En un testimonio ante el Congreso, el estudioso Ernest W. Lefever, explicó en qué forma se había incrementado el poderío peruano con el apoyo soviético y en qué condición desventajosa quedaba Chile para defenderse, concluyendo que era muy probable que aquéllos se sintieran tentados de reivindicar las pérdidas de la Guerra del Pacífico, para lo cual posiblemente contarían con el estímulo de Moscú.

¿Cómo se explica, entonces, la actitud de las autoridades de Washington que sabiendo el perjuicio que hacían a la propia causa que sustentaban en el hemisferio aprobaron la prohibición de venta de armas a Chile? No podían ignorar que los efectos de esa medida se extenderían en la práctica a todo el mundo no marxista. Catorce senadores se unieron a sus colegas Strom Thurmond y Jesse Helms en una carta al Secretario de Estado, Henry Kissinger, donde entre otras cosas decían: "El término abrupto de la ayuda militar a Chile ha producido un desequilibrio muy serio entre las fuerzas de Chile, anti-comunistas y las del Perú, pertrechado por los soviéticos, lo que

puede llevar a una guerra abierta". Y el congresista Larry P. Mc Donald, después de un viaje a Chile, publicó el siguiente llamado: "Ayudemos a nuestros amigos, no a nuestros enemigos". Pero, como quedó demostrado, bien poco podían hacer esas personalidades por cimentar una actitud razonable en un gobierno tan desorganizado y débil como el de Gerald Ford, que sucedió a Nixon. Mucho más poderosa era la coalición liberal que en esos días controlaba el Congreso.

Frente a esta difícil situación —cuya verdadera magnitud se fue evidenciando en 1974, cuando a medida que se estabilizaba el desastre dejado por la Unidad Popular era ya posible levantar la vista para mirar hacia el exterior— la Junta de Gobierno, lejos de amilanarse, se dispuso a enfrentar el problema con seriedad, patriotismo y mística profesional. Lo primordial era definir la solución estratégica e iniciar el alistamiento que condujese a ella. Al efecto debía buscarse el aprovechamiento óptimo de las capacidades, medios y materiales que se disponía, sin perjuicio de intentar romper el cerco que imponían los Estados Unidos y la Unión Soviética, lo que se logró acercándose discretamente a las naciones que por su condición político-estratégica disponían de cierta libertad de acción. Y esto a pesar de las limitaciones financieras que tenía el país.

En esa coyuntura el Gobierno Militar no perdió de vista que sus prioridades estaban en activar la economía, evitando mayores sacrificios a la población, y echar las bases de su desarrollo futuro. Para ello había que regularizar la situación con los acreedores reunidos en el Club de París, incluso pagar los saldos todavía pendientes de la chilenización del cobre por Frei y de su posterior nacionalización por Allende. De ese modo el mundo comprendería que Chile había vuelto a ser un Estado en forma, digno de confianza. No habría un Plan Marshall para nosotros, pero la tan necesaria inversión extranjera llegaría, atraída por ventajas objetivas. La posibilidad de una guerra con Perú no debía hipotecar el futuro de la nación. En una frase: quizá esta vez no llegaríamos a ocupar Lima, pero nos aseguraríamos que ellos ni siquiera ocuparan Arica.

La necesidad crea al órgano. Ante la imperiosa necesidad de contar con repuestos para las armas en servicio, algunas empresas civiles comenzaron a fabricar en Chile partes y piezas que rápidamente fueron aumentando la eficiencia, calidad, variedad y cantidad de estos productos. La demanda de minas y artificios explosivos desarrolló industrias para satisfacerlas, a las cuales se agregó la fabricación de granadas de mano y hasta de bombas de aviación. En el ámbito castrense, FAMAE, ENAER y ASMAR aumentaron su capacidad de producción y diseñaron una planificación orgánica que se tradujo en un proceso progresivo y continuo de desarrollo, con lo que por primera vez el país contó con una verdadera industria militar. ¡Esta fue, sin duda, la más positiva de las consecuencias a largo plazo de la enmienda Kennedy!

Pues bien, ante la inminencia de una agresión en el norte, las instituciones armadas emprendieron febriles preparativos para enfrentarla, sin dejar de considerar que de acuerdo a las constantes históricas no se debía olvidar que el conflicto podía propagarse hacia las fronteras de los otros países limítrofes. Esa posibilidad se convirtió en realidad pocos años más tarde.

El dispositivo defensivo del Ejército, que debía tomar las medidas destinadas a contener una invasión cuya cabeza se presentaría en cualquier punto de la línea que corre desde el litoral, apenas unos kilómetros al norte de Arica, hasta la zona de Charaña en la frontera con Bolivia, se encontraba en una posición inadecuada. Sus unidades en la zona eran las mismas de 1930 y estaban concentradas en Arica. Frente a ella se encontraba una División Mecanizada en Tacna, con importantes medios adelantados hacia el sur poniente, y una División de Montaña en Arequipa, que le daba profundidad a su despliegue. A ellas se agregaba el refuerzo de la reserva estratégica peruana ubicada en la zona de Lima, que podía concurrir hacia el teatro de operaciones sin mayor dificultad.

En Chile, en cambio, por razones de orden económico, el despliegue estratégico del Ejército obedecía al criterio de guarniciones ubicadas en los centros de mayor población, es decir, en la zona central y central sur. De esta suerte, ambos extremos del territorio —que es justamente donde están los presuntos objetivos políticos y estratégicos de nuestros eventuales adversarios— eran relativamente débiles. Analizado, discutido y comprobado el tema en innumerables juegos de guerra, sin duda era esa mala distribución de las fuerzas lo primero que había que remediar. Con los medios disponibles, no quedaba otra solución que completar y reforzar de inmediato los teatros de operaciones extremos, debilitando el centro, de modo que se pudieran aplicar los planes de defensa elaborados para enfrentar la contingencia.

El diagnóstico no era nuevo en absoluto. Pero siempre, cuando se había hecho presente en las instancias pertinentes, la respuesta se había centrado en la falta de recursos económicos. Invertir en la infraestructura necesaria para hacer posible la modernización del dispositivo estratégico nacional nunca había gozado de prioridad entre las tareas del Estado. Sencillamente no se habían construido a lo largo del tiempo los cuarteles, depósitos, campos de ejercicios, viviendas para el personal, vías de enlace y puntos fortificados encaminados a que los núcleos de completación y refuerzo fueran mínimos. Ahora, dadas las circunstancias, se presentaba como un desafío impostergable hacer al menos lo indispensable para subsanar las deficiencias más urgentes. Así, lo que no hicieron los gobiernos políticos en largos años de paz —precisamente porque no creían en una agresión de países hermanos— tuvo que emprenderlo el Gobierno Militar. ¡Y en un momento complicado por el desastroso legado de la Unidad Popular y por la imprevisión de los gobiernos anteriores!

Pese a las dificultados, la tarea se emprendió con entusiasmo. Se actualizaron los planes de defensa; se llamó a filas y entrenó a miles de reservistas y se alistaron los núcleos de completación y refuerzo; se preparó el transporte y se comenzó en el norte la febril actividad de construcción de cuarteles, refugios, fortificaciones de campaña, refuerzo de caminos, etc. Al mismo tiempo se pusieron en funcionamiento pleno las Escuelas Matrices de Oficiales y Clases, como asimismo las Escuelas de Armas y Especialidades, iniciándose una masiva formación del personal necesario para dotar a las Unidades que se iban a movilizar. Paralelamente, el país continuaba su actividad para normalizar la sociedad, recuperar la economía, adecuar la administración y asegurar la unidad de la nación. Como si lo anterior fuera poco, continuaba batiéndose al enemigos interno que, apoyado desde fuera, buscaba desestabilizar al gobierno.

Gracias a la energía desplegada, la relación costo/beneficio de una aventura bélica pasó a ser negativa para el Perú. Los acontecimientos de su política interna, por otra parte, también incidieron en que el ataque fuera postergado. Chile, apelando sólo a sus propias fuerzas, había restablecido el equilibrio militar en la zona norte.

Argentina

Sin lugar a dudas, el conflicto con Argentina fue el mayor desafío que tuvo que enfrentar el Gobierno Militar. Si no se hubiese resuelto como efectivamente ocurrió, toda su obra se hubiese visto comprometida y la población habría tenido que padecer durante generaciones las trágicas consecuencias de una guerra inútil.

En esa época, como pocas veces antes, se hicieron sentir en forma clara y en rápida sucesión los dos factores fundamentales que condicionan las relaciones entre Chile y sus vecinos. Al sumarse el efecto de las cuestiones ideológicas con las que derivan de las realidades geopolíticas, históricas y estratégicas, se llegó a un efectivo peligro de guerra con Argentina, lo que podría haber desencadenado un conflicto generalizado en el Cono Sur.

Para comprender la escalada de esta crisis internacional, conviene recordar que como no deseada consecuencia de la apertura política conducida por el general Lanusse, el peronismo llegó nuevamente al poder en Argentina en marzo de 1973. Cámpora, hombre de paja del verdadero líder, fue sustituido por el propio general Juan Domingo Perón en mayo del mismo año. Este caracterizó su gestión por cierta paternal tolerancia hacia los elementos mas extremistas de su movimiento, de hecho, una facción de extrema izquierda. Esa actitud fue coherente con un excelente nivel de relaciones con la Unión Soviética, pero la verdad es que ésa había sido una línea permanente de la diplomacia transandina, tanto por motivos económicos como por manifestar algún grado de independencia ante Estados Unidos. Así las cosas, el Gobierno Militar chileno se encontró con un vecino al cual no podía serle grato su resuelta posición anti-marxista. ¡Qué manera de cambiar la situación! Dos años atrás era exactamente inversa. Entonces era Chile quien tenía un gobierno marxista y Argentina la que manifestaba su preocupación por lo que aquello significaba para su propia seguridad. Eso demuestra la fluctuante influencia del factor ideológico.

Merced a una peculiar constante del justicialismo, a la cónyuge de Juan Domingo Perón, María Estela Martínez, llamada Isabelita, se le otorgó un papel político. Ungida Vice Presidente de la República, asumió la primera magistratura el 1° de julio de 1974, al fallecer el general Perón. Como carecía de preparación y experiencia en el arte de gobernar, el verdadero poder se ejerció desde fuentes oscuras e irresponsables, una de cuyas figuras principales fue el esotérico ministro José López Rega. La tolerancia existente respecto al activismo izquierdista, tanto en el campo sindical como en el estudiantil, coadyuvó a que su sector más extremista lograra imponer a la sociedad la lógica de la violencia. Así, el terrorismo de inspiración marxista fue contestado con el mismo lenguaje desde la derecha. El Estado parecía impotente para controlar la situación y el grupo Montoneros y otras fuerzas irregulares fueron ganado terreno, llegando a provocar una dislocación social insoportable para el grueso de la población.

Inevitablemente, la ruptura del orden de convivencia interna en Argentina pospuso la consideración de los problemas limítrofes pendientes con Chile y, en el mediano plazo, hizo imposible que pudiera abordarlos con serenidad.

Desde el punto de vista chileno, la relación con Argentina difería de la existente con los otros países vecinos porque en este caso sí había algunos problemas de límites no resueltos. Además, mientras en Perú y Bolivia la animosidad latente ha obedecido a aspiraciones reivindicacionistas históricas muy populares, alimentadas sólo en parte por la reflexión geopolítica de una élite, en Argentina ocurre al revés. Allí siempre ha habido fuertes e influyentes núcleos que consideran un imperativo nacional, para asegurar su destino hegemónico en el Cono Sur, romper el statu quo limítrofe; pero no ha existido un sentimiento generalizado de la población en tal sentido. Esto rara vez lo entienden los que imaginan que una vez resueltos jurídicamente los problemas de límites se acaban los motivos de conflictos entre las naciones.

Víctima de sus errores —pues la gestión de gobierno que al menos nominalmente encabezó fue un desastre— María Estela Perón fue derrocada en marzo de 1976 por una Junta Militar integrada por los Comandantes en Jefe de las Fuerzas Armadas. La presidía el teniente general Jorge Rafael Videla. El nuevo gobierno tenía por delante el enorme desafío de pacificar la nación y reorganizar el Estado, amenazados como estaban por la más descarada subversión. Esa tarea, primerísima obligación de cualquier gobierno, se cumplió. El costo fue muy alto por falta de liderazgo, estabilidad y cohesión en el seno de la Junta Militar. Andando el tiempo desvió el rumbo hacia aventuras irracionales en el campo internacional, precipitando su caída.

Al asumir el gobierno los militares argentinos, se produjo un acercamiento con Chile. De acuerdo en lo ideológico y estando sólidamente encauzados por la vía del derecho los asuntos limítrofes pendientes, no había problemas capaces de alterar la buena vecindad, por lo que fue natural el inicio de una etapa de colaboración entre ambos países. Esta fase duró hasta el 18 de abril de 1977, fecha en que S.M. la Reina de Inglaterra comunicó el fallo recaído en el arbitraje que Chile y Argentina, años antes, le habían encomendado sobre la zona del Beagle. En esta delicada función, con acuerdo de las partes, había actuado una Corte Arbitral formado por un juez británico y cuatro miembros elegidos entre los jueces de la Corte Internacional de La Haya.

La decisión del litigio fue favorable a Chile, lo que provocó una airada reacción de los círculos ultranacionalistas argentinos —particularmente influyentes en el ámbito naval— presión que movió a su gobierno a no acatar de inmediato el Laudo Arbitral. Como era de prever, se inició un período de gran preocupación en ambas cancillerías, que desembocó en una crisis que se fue agravando hasta alcanzar el punto de inminente inicio de las hostilidades en los últimos días de 1978. Nuevamente se imponían los factores de índole permanente en nuestras relaciones vecinales.

Durante el breve interludio de óptimas relaciones el general Videla había sido huésped del general Pinochet —noviembre de 1976— ocasión en que recibió las mayores muestras de respeto y simpatía. En diversos planos se comprometieron a estrechar los lazos bilaterales. En lo comercial, Argentina ofreció incluso exportar a nuestro país medio millón de toneladas de trigo al año a contar de 1977 y hasta 1979.

Tras el fallo arbitral, quizás en recuerdo de tan gratos momentos, el general Videla pidió a su colega chileno reunirse para buscar una salida pacífica al asunto limítrofe. El problema parecía no tener salida porque la decisión arbitral era inapelable y en su cumplimiento estaba comprometido el honor de ambas naciones. Iniciar nuevas conversaciones y negociaciones directas, como se propiciaba, era hacer caso omiso del Laudo y comenzar todo de nuevo. Más allá de las formas, lo que ese país pretendía era presionar con la amenaza del uso de la fuerza. A pesar de la solidez jurídica de la posición chilena, atendiendo sus más altos intereses y conociendo como nadie las consecuencias que tendría una guerra en ese momento, sin renunciar a nada, el general Pinochet decidió acceder al diálogo.

Mientras las cancillerías estudiaban el espinudo asunto, los Presidentes se reunieron en dos oportunidades, el 18 de enero de 1978 en la base aérea de Plumerillo, en Mendoza, y el 20 de febrero del mismo año en la base aérea de Tepual, en Puerto Montt.

Entre ambas reuniones ocurrió lo inverosímil: 20 días antes del vencimiento del plazo de nueve meses fijado en el Laudo para su cumplimiento o, en su caso, para pedir su revisión, el gobierno argentino comunicó al chileno, por Nota, que había "decidido declarar insanablemente nula la decisión del árbitro". Es ocioso discutir el mérito jurídico de aquella decisión. Como lo ha señalado el ex embajador Gutierrez Olivos, bastará remitirse a la opinión que ese documento mereció a una de las mayores eminencias del Derecho Internacional contemporáneo, el profesor Charles Rousseau, de la Universidad de Paría, quien escribió: "La Declaración de Nulidad de fecha 25 de enero de 1978 es un documento de diez páginas dactilografiadas que prueba hasta la evidencia que ciertos almirantes sudamericanos tendrían gran necesidad de seguir cursos nocturnos de Derecho Internacional".[32] La actitud argentina, claro está, era una descalificación sin asidero alguno en el ámbito del derecho y significaba, en buenas cuentas, desconocer unilateralmente una decisión jurídica válida y de singular trascendencia, abriendo el camino al uso de la fuerza para resolver el litigio. El honor de las naciones había dejado de ser la suprema garantía para el cumplimiento de los tratados en el mundo civilizado.

Y, en efecto, para los argentinos, su decisión de desconocer el Laudo implicaba que el conflicto abandonaba su cauce jurídico e ingresaba en la esfera geopolítica. En ese terreno poseían una doctrina asentada en el tiempo. Ya en 1948 el almirante Gastón A. Clement, Jefe del Estado Mayor de la Flota de Mar, en una conferencia dictada en la Base Naval de Bahía Blanca, la había resumido del siguiente modo: "Argentina, desde el punto de vista geopolítico, es dueña de todo el Estrecho de Magallanes, de sus canales derivados y de todo el Beagle. Los tratados internacionales de 1881 y los protocolos posteriores con Chile no tienen mayor alcance, porque se trata de necesidades de la Nación Argentina, impuesta a ella por su propia naturaleza geográfica y por la configuración del extremo austral del Continente. El cono sur de América es argentino por obra de la naturaleza y las discusiones en que se

32 SERGIO GUTIERREZ OLIVOS, "Comentario sobre el Tratado de Paz y Amistad con Argentina", en Instituto de Chile, Academia de Ciencias Sociales, Políticas y Morales, Editorial Universitaria, Santiago, 1986, p. 14.

entretienen algunos internacionalistas y juristas, tanto de Chile como de Argentina, no pueden destruir los hechos, más poderosos que todas las argumentaciones. El dominio austral de América lo ha entregado la configuración geográfica del continente a la Nación Argentina, y resulta pueril que la Marina de Guerra argentina pueda aceptar otra posición que no sea la del imperio irrestricto y absoluto de la soberanía en el extremo austral de nuestro Continente".[33]

A su debido tiempo, la Corte Arbitral, en decisión también ratificada por S.M. Isabel II, dictaminó que las declaraciones argentinas tendientes a rechazar y anular el Laudo, debían tenerse por nulas y desprovistas de toda fuerza o efectos jurídicos.

Mientras tanto, la situación de hecho que había provocado Argentina debía ser asumida. Por eso, contra toda esperanza, igual se llevó a cabo la cita en Puerto Montt que había sido previamente acordada. Como estaban las cosas, una solución inmediata era imposible, por lo que se acordó abrir un espacio de conversaciones de 180 días. Trascurrido el plazo sin que Argentina hiciera nada por reconducir el problema hacia una solución compatible con el derecho, el 2 de noviembre de 1978 el gobierno chileno dio por agotadas las negociaciones. Salvo un milagro, la guerra sería inevitable.

Las instrucciones del general Pinochet al canciller Hernán Cubillos, enviado a Buenos Aires para estabilizar la situación, eran hasta cierto punto contradictorias: no ceder ni perder la cabeza, pero evitando la guerra. En esa línea se pensó recurrir a la Corte Internacional de La Haya o solicitar al Vaticano que mediara, dado que su parecer sería difícil de desconocer por naciones tradicionalmente católicas.

Mientras se mantenía el diálogo en busca de una solución razonable, Chile, cautelando sus superiores intereses, se preparaba diligentemente para lo peor. A lo largo de su historia, Chile no ha buscado nunca la guerra; pero tampoco la ha eludido cuando no le queda otro camino. La opinión pública sabía esto y tenía fe en que el gobierno que regía su destino sabría conducir adecuadamente la crisis. Con admirable tranquilidad, todos los sectores de la población cumplieron las instrucciones que se emitieron para organizar la defensa. Lo esencial era proceder con eficacia en la puesta a punto del instrumento militar y al mismo tiempo evitar cualquier hecho que pudiera ser interpretado como una provocación. Un rol principal le cupo a la prensa, que sin dejar de informar, colocó el interés de la patria por sobre toda otra consideración. Es muy significativo que en tan delicada coyuntura no haya sido necesario disponer un régimen de censura ni cualquier otra limitación a los medios de comunicación social.

En tan difícil circunstancia, el patriotismo de los chilenos afloró como en sus mejores días. "Más que en ningún otro momento desde que asumió la presidencia —señala Whelan— Pinochet se encontró con un país unido detrás de él. El ex Presidente Frei dijo que él y el Partido Demócrata Cristiano ofrecían su apoyo "irrestricto"; aun el partido socialista —a través de Clodomiro Almeyda, de extrema izquierda, y de Carlos Altamirano, más izquierdista aun (y fugitivo oficial)— declararon su apo-

33 *Idem.*, p. 15.

yo a la posición chilena y pidieron a las Naciones Unidas su intervención urgente para evitar la guerra".[34]

De otra parte, el general Pinochet ejerció firmemente su autoridad para contener todo movimiento agresivo en la frontera. No fuera a ocurrir que por aprovechar alguna posibilidad favorable dieran motivo a los argentinos para escalar la situación y llegar al choque. Era obvio que, entre otras cosas, se buscaba hacer que Chile perdiera la calma y así acusarlo de agresor. Qué más hubieran querido: ¡la Junta de Gobierno chilena rompía ahora la paz del hemisferio!

Mientras los últimos días de 1978 se desgranaban tensamente, los ingenuos de este país —y vaya si los hay— vieron con sorpresa que en la adversidad los amigos extranjeros escaseaban. Incluso se entorpecían en los puertos los embarques de material bélico. No se debería olvidar nunca, por ejemplo, que cuando el ataque a Chile era inminente, el Sindicato Internacional de Trabajadores Portuarios y Estibadores del puerto de San Francisco se negó a cargar once toneladas con partes de bombas, adquiridas en 1974, para protestar por la situación de los trabajadores en ese país. Simultáneamente, el presidente Carter envió un mensaje al general Pinochet ofreciendo su ayuda para desarrollar una pronta mediación por alguna otra parte a fin de evitar el conflicto, dejando en claro que Estados Unidos no deseaba inmiscuirse en la esencia de esta complicada materia. También hacía constar que si el conflicto desembocaba en guerra, ellos se manifestarían enérgicamente en contra. En otras palabras, no había en él la menor voluntad de jugarse por hacer respetar el derecho, esto es, por ayudar al cumplimiento de las decisiones contenidas en el Laudo Arbitral. Su actitud de neutralidad y buena voluntad —sinceras, es de suponer— equivalían a dar la espalda a la justicia internacional. Más tarde, en los primeros días de 1981, cuando la situación todavía era tensa, Willy Brandt suspendería la entrega de dos submarinos que Alemania Federal estaba construyendo para nuestra Armada.

Chile pidió con urgencia una reunión de consulta de la Organización de Estados Americanos (OEA), invocando el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca. En la ocasión se aprobó un voto afirmando la necesidad de explorar posibles medios de consulta. A su vez, la Comunidad Europea instó a ambos países a buscar una solución pacífica. Los organismos internacionales no podían hacer más. Esa es la realidad en la hora de la verdad.

Así las cosas, a fines de 1978 todo estaba entregado a la resolución de los argentinos. De ello dependía si había o no guerra. Sus preparativos ofensivos eran ostensibles. La movilización de sus tropas hacia el sur y los ejercicios de oscurecimiento en sus principales ciudades se hacían en tono de fanfarria. Sin embargo, al parecer, su población no estaba resignada a aceptar la pérdida de vidas que costaría la aventura.

En atención a la natural reserva que recae sobre tan delicada materia, la entraña histórica de este conflicto esta aún por escribirse. Cuando, pasado el tiempo, se haga público el archivo secretos de ambas cancillerías nacionales y el del Vaticano, podrá

---

34 JAMES R. WHELAN, op. cit., p. 642.

medirse en toda su magnitud el valor silencioso de los que, sin perder la cabeza, lograron conservar la paz sin ceder un ápice del interés nacional.

Con todo, algo se sabe. Así, según el analista argentino Carlos M. Túrolo, "en el transcurso de 1978 se agudizó el problema con Chile por los islotes del canal de Beagle. Cerca de Navidad casi llegó a explotar. Pocos argentinos saben cuán cerca estuvimos en realidad de la guerra y qué inusitada violencia e intensidad habría llegado a tener esa contienda, según los planes argentinos de invasión. Planes que estuvieron a un tris de dejar de serlo y transformarse en una cruenta realidad, puesto que cuando se ordenó dar marcha atrás, patrullas de infantería del Ejército ya pisaban suelo chileno. Lo que sigue es la historia de esa casi guerra que los argentinos vivimos con tanta inconsciencia futbolera como la otra que, cuatro años más tarde, tendría un desenlace diferente".

Tras esa introducción, pasa revista a los hitos más importantes de la controversia, hasta llegar al momento en que, transcurrido sin ningún fruto el plazo de 180 días acordado en la reunión presidencial de Tepual, "se tomó, por tanto, la decisión de emprender la invasión a Chile y se puso en marcha el reloj de la cuenta regresiva. (...) Cuando las tropas argentinas se aproximaban ya a la frontera y el ejército chileno esperaba tenso, ambas cancillerías recibieron el pedido de no innovar en la situación existente y esperar la llegada de un enviado (no un mediador) del Papa. La comunicación, que provenía del Sumo Pontífice, llegó en momentos en que la junta militar y el Presidente analizaban la marcha de las operaciones. Se hizo necesario tomar una decisión inmediata. Por cierto una decisión muy difícil —continúa Túrolo—. La guerra estaba ya lanzada y faltaban sólo unas horas para que se produjesen los primeros choques armados. La discusión duró casi una hora. El comandante en jefe del Ejército, Roberto Viola; el de la Armada, Armando Lambruschini, y el de la Fuerza Aérea, Orlando Agosti, sostenían que ya no se podía volver atrás, en tanto que Videla abogaba para que se detuvieran las operaciones. La situación de los comandantes era más difícil que la de Videla: habían sido ellos, y no el Presidente, quienes habían dado la orden de atacar, y desde mucho antes habían exacerbado los ánimos de sus subordinados —desde generales, almirantes y brigadieres hasta simples cabos— con el fin de incrementar su agresividad con miras a lo que se preparaba. Durante la discusión, en las palabras y la actitud de Videla quedó implícito que renunciaría a la presidencia si se seguía adelante con las operaciones. No restaba mucho tiempo: las primeras patrullas de infantería del Ejército pisaban el suelo chileno. Finalmente se aceptó detener la cuenta regresiva, dar marcha atrás y esperar la llegada del enviado papal, que resultó ser el cardenal Antonio Samoré. El primero en cambiar de actitud había sido Viola; lo siguió Agosti; Lambruschini fue el que mantuvo una posición más dura."[35]

Sin duda fue providencial que el 22 de diciembre de 1978 el Santo Padre enviara al cardenal Antonio Samoré en una misión de buena voluntad, con la misión de encontrar puntos de acuerdo en las posiciones de ambos países que sirvieran de línea de

---

35 CARLOS M. TÚROLO, *De Isabel a Videla, los pliegues del poder*, Editorial Sudamericana, Buenos Aires, 1996. Del extracto publicado en La Segunda, 13.1.97.

partida para llegar a un entendimiento que salvara la paz. Después de agotadoras negociaciones desarrolladas durante las fiestas navideñas, el cardenal —haciendo gala de dulzura en las formas y extrema crudeza en sus planteamientos— logró convencer a las partes para que concurrieran el 8 de enero de 1979 a una reunión resolutiva en Montevideo. En el Acta de Montevideo se acordó la retirada de las fuerzas militares a sus condiciones y lugares de paz y se formalizó la solicitud de una mediación papal. La amenaza de guerra inminente había sido conjurada.

Esta parte del proceso concluyó el 12 de diciembre de 1980, cuando el Vaticano entregó a los litigantes un proyecto de acuerdo para su estudio y eventual aceptación. Aunque no satisfacía todas sus aspiraciones, el Gobierno de Chile lo aceptó con prontitud. Argentina, en cambio, dilató su decisión pidiendo una serie de aclaraciones.

Pese a la mediación en curso, la situación vecinal se mantuvo tensa y cada cierto tiempo parecía extremarse. Quien con gran prepotencia creaba momentos difíciles era Argentina. El fantasma de la guerra siempre anduvo rondando. Por eso, la gratitud de ambos pueblos hacia el Papa Juan Pablo II y el Cardenal Samoré debiera ser inmensa. Haber logrado un entendimiento entre dos posiciones tan fuertemente opuestas fue una proeza diplomática y una muestra extrema de filial cariño para con ambas naciones.

Chile había procedido correctamente. Elevar el diferendo austral a la Corona Británica fue idea suya, a la cual adhirió después libremente Argentina. Desconocer el Laudo Arbitral en la forma en que lo hizo, porque le era adverso, fue una demostración de desprecio al derecho y a la propia palabra empeñada. Esa actitud marcó la tónica de sus actuaciones, entorpeciendo mañosamente el camino de los acuerdos y poniendo en peligro la paz. Como muestra un botón. En el curso de las conversaciones, cuando Argentina propuso al Papa Juan Pablo II como mediador, Chile lo aceptó inmediatamente. En verdad, no quería otra cosa. Apenas resuelto lo anterior, el Comité Militar Argentino —integrado por los miembros de la Junta y los jefes militares más antiguos— puso una condición increíble: los dos países debían acordar primero la cuestión de límites. Como comentó un observador, se trataba de ganar el pleito antes de iniciarlo.

Argentina había gastado y seguiría gastando enormes sumas de dinero en armas que contribuirían a arruinar su economía. Chile, en cambio, potenció los teatros de operaciones austral y norte, donde había otros dos seguros adversarios, sin comprometer su desarrollo ni detener la marcha de su itinerario institucional.

La confianza que la Junta Militar argentina tenía en el potente arsenal que había acumulado le llevó, en abril de 1982, a intentar recuperar por la fuerza las islas Malvinas. Nunca imaginó que el viejo león británico reaccionaría enérgicamente. Pagó su irreflexiva audacia con una humillación como no había conocido en su historia. Ese episodio mantuvo en suspenso el litigio con Chile, país que declinó aprovechar el momento para poner fin a la cuestión que les distanciaba apelando a la espada.

Por fin, una vez derrumbado el Gobierno Militar argentino como consecuencia de la derrota de sus fuerzas en el Atlántico Sur, renació la esperanza de finiquitar en breve el problema limítrofe. Tomó tiempo, pero el 4 de octubre de 1984 el Vaticano pudo anunciar que se había alcanzado un acuerdo definitivo. Fue firmado en Roma el 29 de noviembre de ese año. En lo esencial, los derechos de Chile habían sido reconocidos.

Haber logrado la paz sin ceder en la defensa del sagrado interés nacional es uno de los mayores méritos que la historia reconocerá al general Pinochet. Los espíritus más nobles ya lo han hecho. El ya citado ex embajador Gutierrez Olivos, por ejemplo, en su discurso de incorporación al Instituto de Chile: "Un deber de conciencia me mueve a expresar aquí la conclusión a que me han conducido las no escasas investigaciones en que fundo este trabajo. En la situación prevaleciente a vísperas de la Navidad de 1978, sólo la serenidad, el buen juicio y la férrea prudencia con que el Presidente de la República supo manejar una situación en extremo difícil, lograron evitar que, ante provocaciones que se tornaban cada vez más agresivas, Chile las respondiera en especie".[36]

Y el propio general Pinochet, mirando hacia atrás, diría: "Es notable —¿no es verdad?— cuán poco se supo realmente en el exterior sobre esta crisis y sobre el hecho notabilísimo de que un supuesto gobierno militar belicista no hiciera demostraciones de machismo, sino de serenidad y control frente a la hostilidad e incomprensión internacionales y a la belicosidad en nuestras fronteras".[37]

Hacia una nueva institucionalidad.

Dado que el 11 de septiembre de 1973 las Fuerzas Armadas y Carabineros habían asumido la dirección suprema del país para dar solución a la más grave crisis existencial sufrida por la nación chilena, para la Junta de Gobierno constituía una obligación imperativa crear las bases morales, sociales y económicas sobre las cuales alzar un régimen institucional que reemplazara al que en esa fecha había colapsado. Obrar en otro sentido habría significado que el empleo de la fuerza legítima carecía de proyección política, lo que ciertamente resultaba inadmisible. Dejar las cosas como estaban posibilitaría la repetición de problemas similares a los que habían forzado su intervención.

Parecía también evidente que este pensamiento era compartido por la gran masa de los chilenos, incluidos los grupos políticos que se oponían al Gobierno Militar. Nadie podía desear un futuro inestable, donde una actividad política sin cauces sólidos podía desbordarse otra vez. Sin embargo, tan sabios propósitos no coincidían exactamente con la realidad. La mayoría ciudadana así lo quería, pero muchos dirigentes de la democracia cristiana y de lo que había sido la Unidad Popular seguían clavados en el pasado, por lo que no les hacía ninguna gracia que una nueva Constitución renovara el espacio en que antaño sus revoluciones se había desplegado con tan buenos resultados, al menos en términos de poder para ellos. Era probable, también, que algunos pensaran que al impedir una nueva Carta Fundamental dejarían al Gobierno Militar en una situación de ilegitimidad, dado que la situación de emergencia que había hecho necesaria la intervención militar estaba superada, hecho que la oposición se encargaría de hacer ostensible, favoreciendo así su desgaste en un país de mentalidad y tradición legalista. Por último, tampoco les entusiasmaba la idea de que fueran justamente los militares quienes dejaran una obra tan trascendente como es una Constitución. Seguramente ignoraban cuál había sido la génesis de la Constitución de 1925, objeto de su nostalgia.

---

36 SERGIO GUTIERREZ OLIVOS, op. cit., p. 20.

37 CARLOS M.TÚROLO, op. cit, p. 644.

Por las mismas razones que mostraban la inconveniencia de restituir apresuradamente el poder político a las cúpulas partidistas, no era razonable convocar sin más a una heterogénea comisión constituyente para encargarle la redacción de un nuevo texto constitucional. Existía la experiencia de lo inoperante que había resultado la amplia comisión formada al efecto en 1925, de la cual hubo que extraer un núcleo más reducido que procedió a redactarla. Y bien, supuesta la intención de crear una comisión del tamaño adecuado para actuar eficientemente y teniendo en claro que la responsabilidad final del trabajo correspondía a los militares que la convocaban, ¿sería posible en realidad que sus miembros fueran los representantes de todo el espectro político? ¿Era imaginable que comunistas, socialistas, mapucistas y democratacristianos participaran en su elaboración junto a nacionales y radicales? Esa Torre de Babel habría sido digna de verse. De otra parte, y es ésta una cuestión de fondo, ¿por qué suponer que el poder constituyente reside en las formaciones partidistas?

Como es sabido, todas las constituciones dan cuenta de un ideario que las anima y de la estructura en que reside el poder político efectivo, es decir, quienes mandan y son obedecidos. Esto es lo esencial. Lo demás —orgánica y procedimientos— le está subordinado. En ese orden de certezas, ¿alguien creía en serio que la doctrina nacional del Gobierno Militar, plasmado en su Declaración de Principios de 1974, era compatible con la borra ideológica de los distintos bloques partidistas? ¿Acaso no era evidente que una miraba al futuro y la otra al pasado?

No valía la pena llamarse a engaño. Al menos para los militares, la búsqueda del aplauso del adversario nunca ha sido una buena política. Como se acaba de señalar, el ideario libertario y fundacional del Gobierno Militar era nítido. Lo que se requería era el auxilio conceptual de la mejor técnica jurídica, pero en apoyo a ese ideario, no de cualquier otro. Y era preciso cristalizar la tarea iniciada en tal sentido ya a fines del año 1973, pues, entre otras razones, no era prudente seguir garantizando el desarrollo social y material del país sin contar con una estructura institucional sólida, realista y legítima, es decir, que reflejara el consenso básico de la sociedad.

Por eso —y es un mentís a los que todavía hablan de dictadura militar— reemplazar la Constitución que casi todos consideraban sobrepasada por los hechos fue uno de los temas más recurrentes desde los primeros días del Gobierno Militar. El espíritu legalista de los chilenos, que también se manifiesta con fuerza en sus hombres de armas, siempre aspiró a un marco constitucional que recondujera el orden de vida de la comunidad nacional reforzando el Estado de Derecho, tan desdibujado por los embates de las revoluciones ideológicas entre 1964 y 1973.

Una Constitución bien meditada.

Como se recordará, la Junta se preocupó de regular la situación existente a través del Decreto Ley 128, del 16 de noviembre de 1973, en el cual se estableció que mientras no se contara con una nueva Carta Fundamental el país se regiría por la existente, salvo aquellas materias propias del Ejecutivo que habían sido modificadas por los bandos emitidos y lo referente al Legislativo, ya que el disuelto Parlamento era reemplazado por la Junta de Gobierno. A partir de allí fue posible ir elaborando disposiciones transitorias que serían la base para una nueva Constitución.

Tan temprano como en septiembre de 1973 se dispuso la creación de una comisión presidida por Enrique Ortúzar, conocido jurista y ministro de Justicia durante el gobierno de Jorge Alessandri Rodríguez, iniciándose así el camino hacia una nueva Carta Fundamental. Para orientar su tarea recibió instrucciones de la Junta de Gobierno y muy especialmente del general Augusto Pinochet. Este ponía énfasis en que la nueva Constitución debía evidenciar condiciones tales que permitieran un activo equilibrio entre la libertad de los ciudadanos y la capacidad del cuerpo social para resistir los embates de las ideologías totalitarias. Con ello se pretendía evitar las crisis que antaño habían sacudido la vida nacional, perjudicando la estabilidad que es indispensable para el adecuado desarrollo del país. A esta hermosa tarea se integró, entre otros, el brillante abogado Jaime Guzmán Errázuriz, asesinado por extremistas de izquierda mientras servía a la República como senador, ya en plena democracia.

Llamada inicialmente Comisión Constituyente, pasó a designarse Comisión para el Estudio de una Nueva Constitución en 1976, ampliando su composición de 8 a 11 personas. Su esfuerzo abarcó el análisis de cada aspecto que debía contemplar una constitución moderna y la redacción de las disposiciones respectivas, para que fueran armónicas entre sí. Asimismo, se abocó al estudio y proposición de las Actas Constitucionales, que a modo de adelanto fueron prefigurando importantes materias de índole constitucional. La Comisión, conviene recordarlo porque refleja la profundidad de su trabajo, desarrolló sin pausa su cometido entre el 24 de septiembre de 1973 y el 5 de octubre de 1978. En su momento, también al Consejo de Estado, cuerpo consultivo del más alto nivel, le correspondió emitir opinión sobre el proyecto de nueva Constitución elaborado por la Comisión Ortuzar. Las actas de ambos órganos son un testimonio concluyente de la tarea que desplegaron.

Se inscribe en los pasos del Gobierno Militar encaminados a forjar una nueva institucionalidad el discurso pronunciado por el general Pinochet en Chacarillas el 9 de Julio de 1977, aniversario del Combate de La Concepción y Día de la Juventud. Allí el Jefe del Estado esbozó por vez primera las grandes líneas que seguiría el proceso institucional hacia una democracia profundamente renovada. Entonces señaló que el período de recuperación —en el que se estaba— concluiría el 31 de diciembre de 1980. Durante el mismo, todavía dirigido principalmente por los militares, se incluía la redacción, revisión y aprobación mediante plebiscito de la nueva Constitución. La segunda etapa sería de transición y duraría hasta 1985. En ella se ampliaría la participación de los civiles en el gobierno, el poder de la Junta se transferiría al Consejo de Estado y se crearía un cuerpo legislativo no elegido. La tercera etapa empezaría con el establecimiento de un régimen de gobierno normado por la nueva Constitución, incluyendo elección presidencial. Desde ese momento, las Fuerzas Armadas limitarían su participación política al rol de garantes del ordenamiento institucional de la República.

Continuando con su afán de convertir en objetivos concretos los grandes desafíos que el país todavía tenía que abordar, el 11 de septiembre de 1979 el general Pinochet enunció las siete modernizaciones cuya profundización estaba pendiente: laboral, previsión social, agrícola, salud, educación, judicial y administración del Estado. Modernizar estos aspectos básicos de la vida nacional cambiaría sustancialmente la vida cotidiana de los chilenos, aumentando su capacidad de decisión individual.

No todas estas metas alcanzaron a ser cumplidas íntegramente. La calidad de la educación media, por ejemplo, todavía deja mucho que desear. Asimismo, los defectos del sistema judicial, sobre todo en cuanto a la solvencia del procedimiento penal, están lejos de haberse superado. Con todo, el avance en todas aquéllas areas fue significativo y, lo que es más importante, se logró convencer a todos los grupos dirigentes que las medidas que se adoptaran en el futuro para consolidar lo ya logrado y continuar en una línea de progresivo avance, debían obedecer a una política de Estado, no a urgencias de coyuntura ni a presiones sectoriales.

Como se habrá advertido, la intención del Jefe del Estado y de la Junta era que la futura Constitución fuera estudiada exhaustivamente, pero respetando ciertos plazos. Al efecto se concibió un trabajo con dos etapas previas, antes de ser analizada en última instancia por la propia Junta de Gobierno. Como se ha dicho, el 5 de octubre de 1978 terminó su tarea la Comisión Ortúzar, entregando su proyecto al gobierno. En el intertanto, el 16 de agosto de ese mismo año, el general Pinochet había entregado al Consejo de Estado un conjunto de recomendaciones conceptuales de la Comisión de Estudio. Luego, el 31 de octubre, le remitió el texto elaborado por dicha Comisión. La idea era que el Consejo de Estado, además de su propia reflexión, pudiera integrar las opiniones e ideas de muchas organizaciones y personas, enriqueciendo al máximo la experiencia y conocimientos que merecieran ser tenidos en cuenta. Es de hacer notar que la Comisión Ortúzar ya había recabado la opinión de numerosos expertos, en un trabajo que por entonces se mantuvo bajo reserva pero que ahora se puede consultar en sus actas.

El Consejo de Estado, dando cumplimiento a lo anterior, hizo un llamado público para que las organizaciones y personas que lo desearan hicieran sus recomendaciones, fijando como fecha tope el 15 de diciembre de 1978. Se presentaron más de 150 indicaciones, entre las cuales había proposiciones de la Asociación Nacional de la Prensa, Colegio de Periodistas, Colegio de Arquitectos y otras organizaciones gremiales. Con todos los antecedentes reunidos y debidamente procesados, el Consejo de Estado efectuó numerosas sesiones de comité y plenarias con expertos externos, abarcando los principales temas que contenía la Constitución. Esta actividad de análisis continuó hasta junio de 1980. De esta manera, todos los que quisieron hacer valer sus aportes fueron escuchados. El 8 de Julio de ese año, casi dos años después de haber recibido el encargo, el Presidente del Consejo de Estado, Jorge Alessandri Rodríguez, en una audiencia especial, entregó al general Pinochet el proyecto de Constitución elaborado, que además contenía una moción de minoría. Se iniciaba así la etapa final, es decir, su revisión y aprobación por la Junta de Gobierno.

La Junta de Gobierno introdujo algunas modificaciones significativas al texto del Consejo de Estado, en particular respecto a las Fuerzas Armadas y de Orden, hecho que posteriormente se prestó a malignas especulaciones por quienes pretendieron crear problemas separando dialécticamente al Gobierno de la Comisión Ortúzar y del Consejo de Estado. Desde luego, no se trataba de descalificar el excelente trabajo desarrollado por ambos organismos. Sin duda, hay que decirlo, todos sus integrantes y colaboradores merecen el respeto y la gratitud de los chilenos. Pero la Junta de Gobierno y el Presidente de la República, sobre cuyos hombros recaía la responsabilidad

de proponer lo adecuado ante el supremo soberano que es el pueblo, tenían también el incuestionable derecho a rectificar lo que estimaran conveniente, apelando a la experiencia directa que tenían sobre la conducción del país y sobre los fenómenos que lo habían sacudido no hacía mucho. Sobre todo en el orden de los principios que convenía prevalecieran si se deseaba evitar la repetición de los problemas que habían hecho inevitable la intervención militar en 1973.

El Consejo de Estado actuó con gran independencia de juicio e introdujo 27 modificaciones importantes al proyecto de la Comisión de Estudio. Merced a ellas, lo que llegó a conocerse como Constitución Alessandri revivía la Carta de 1925, pero incorporándole las medidas tendientes a hacer del Congreso un órgano responsable, tal como él mismo lo había deseado al finalizar su mandato presidencial. Respecto al papel de las Fuerzas Armadas en el proceso político nacional, retrocedía a las fórmulas de la Constitución de 1833. Incluso el preámbulo fue eliminado, por demasiado doctrinario.

Puede ser útil recordar otros aspectos en que el criterio del Consejo de Estado fue diferente al de la Junta de Gobierno. El período de transición propuesto era de cinco años. El período presidencial sería de seis años. La Junta de Gobierno permanecería en funciones durante la transición, pero con atribuciones muy limitadas, concentrando su virtualidad política en la designación del reemplazante de su Presidente en caso de muerte o incapacidad del titular. Sin embargo, una vez terminada la transición, sus miembros integrarían la Cámara Alta como senadores vitalicios. El Congreso sería bicameral, con una Cámara de Diputados de 120 miembros, nombrados por la Junta para el período de transición, y un Senado integrado por los ex-Presidentes de la República, 20 senadores escogidos por el Jefe del Estado de una lista de mérito preestablecida y 21 senadores que él podría nombrar libremente. La primera elección regular de Presidente de la República y diputados se realizaría noventa días antes de la finalización del período de transición. La primera elección de Senadores, cuatro años más tarde.

Pese a estas diferencias, había acuerdo en los aspectos propiamente orgánicos del ordenamiento del Estado, es decir, en lo que se puede estimar la parte más clásica de cualquier constitución. Además, el Consejo de Estado no tenía ninguna duda sobre la conveniencia de que fuese el general Augusto Pinochet la persona que continuaría a la cabeza del Estado durante el período de transición. En este sentido, para Jorge Alessandri, "la permanencia de Pinochet en el cargo era garantía de orden y tranquilidad", convicción de la que quiso dejar testimonio en una carta dirigida a Sergio Carrasco el 21 de julio de 1980, quien preparaba una obra sobre su vida pública.[38]

La actividad desplegada por Jorge Alessandri en el Consejo de Estado fue el último servicio que prestó a la patria. Tal como lo había anunciado, renunció a su presidencia el 12 de septiembre, esto es, al día siguiente de ser ratificada la nueva Constitución por la ciudadanía, recluyéndose desde ese momento en la intimidad que tan celosamente gustaba de guardar. Digno remate a una vida ejemplar.

---

38 SERGIO CARRASCO DELGADO, *Alessandri: Su pensamiento constitucional.Reseña de su vida pública*, Editorial Andrés Bello, Santiago, 1987, p.126.

Aprobación y ratificación de la nueva Constitución.

Contrariando lo que pudiera haber vaticinado cualquier persona medianamente sensata, bastó el anuncio de la fecha en que la ciudadanía se pronunciaría sobre el texto constitucional aprobado por la Junta de Gobierno —con el objeto de ratificarlo o rechazarlo— para que se desatara una tormenta. Sin atender mayormente al contenido de sus conceptos ni a la forma en que se expresaban, y entre los entendidos hay acuerdo en que desde el punto de vista de la técnica legislativa es muy superior a lo que existía antes, las críticas objetaban la potestad del gobierno para proceder como lo había hecho. La oposición, que en realidad no discutía la necesidad de dotar al Estado de una nueva Carta Fundamental, habría preferido que el nuevo texto fuera obra de una asamblea constituyente elegida en la forma y con los plazos que a ella convenían. En otros términos, a los dirigentes opositores les parecía inaceptable que se procediera sin su ilustrado concurso. Esa crítica omitía considerar que en su día se habían fijado las instancias pertinentes para recibir colaboraciones, las que se habían ponderado con un grado de seriedad y profundidad del que había carecido la preparación de las constituciones anteriores.

En la controversia acerca de quién debía proponer a la ciudadanía la nueva Carta Fundamental, la oposición al Gobierno Militar actuaba fuera de la realidad. Había que ser muy utópico, o algo peor, para imaginar que la misión de restaurar el orden institucional democrático correspondía a los que lo habían demolido en la década que precedió al 11 de septiembre de 1973. Seamos francos: la intención de aquéllos náufragos del antiguo régimen, velada apenas con palabras altisonantes y gestos desmelenados, era impedir a toda costa la consolidación de la meta fundacional del Gobierno Militar.

Curiosamente, los mismos que durante tanto tiempo habían echado en falta los rituales democráticos, perdían ahora la compostura. Sencillamente no soportaban que sin su valiosa intermediación se pudiera consultar directamente al pueblo. Son decidores los epítetos que el llamado a plebiscito hizo aflorar entre las principales figuras de la autodenominada oposición democrática. El ex presidente Eduardo Frei, que en ese momento se encontraba en Brasil, participando en una reunión de la Comisión Brandt, comenzó sus ataques desde allí mismo. En una entrevista concedida a la revista Veja acusó al general Pinochet de mantenerse en el poder "por la fuerza de las armas y con el apoyo de la Derecha", agregando, "yo no reconozco la validez del nuevo plebiscito". En la misma ocasión tuvo palabras de elogio para el partido Comunista: "está trabajando bien en Chile", dijo. En otra, en Sao Paulo, afirmó que el plebiscito "no es una fórmula para la transición a la democracia, sino una prolongación del régimen", añadiendo que si los militares insistían en permanecer en el poder se produciría una radicalización del país. También desde Sao Paulo, afirmó que cualquiera fuera el resultado del plebiscito, "el régimen militar no podrá arreglárselas para permanecer en el poder por ocho años más".[39] Renán Fuentealba, desde Caracas, lo sindicó de "farsa" e "ilegítimo", pues "la dictadura va a ganar por las buenas o por las malas". Radomiro

---

39 Reproducidas en La Tercera, 18.8.80; Las Ultimas Noticias, 14.8.80, y; El Mercurio, 13.8.80, respectivamente.

Tomic, el abanderado de la derrota democratacristiana en 1970, calegrafió a Eduardo Frei desde Ginebra para expresarle un apoyo total "en su repudio de la farsa de un plebiscito".[40]

Más allá de las descalificaciones frenéticas, el argumento de los recién citados y de los que compartan su posición estriba en que una dictadura nunca pierde elecciones. Lo malo del argumento es que en la práctica una dictadura nunca llama a elecciones. De hecho: ¿cuándo se ha visto a un dictador de verdad atacado por la prensa de su país? ¿Se ha visto acaso una dictadura rivalizando con sus opositores a través de una consulta a los ciudadanos?

Con mayor serenidad, antes de formalizarse el llamado a plebiscito, Andrés Zaldívar, presidente en ejercicio del Partido Demócrata Cristiano, se había hecho cargo del desafío que representaba el fondo de la cuestión en debate. "El Consejo de Estado ha tardado casi dos años en generar un proyecto. (...) Creemos que es nuestra obligación analizar estas proposiciones con el mayor cuidado para evitar un juicio apresurado que haría más difícil el debate sobre un tema de tanta importancia para el futuro de Chile".[41]

La Conferencia Episcopal, por su parte, el 23 de agosto entregó una declaración en la que ni apoyaba ni se oponía al plebiscito ni a la Constitución propuesta. "Tanto el plebiscito como las normas jurídicas que puedan emanar de él —decían los obispos— tendrán autoridad moral y gozarán del respeto de la ciudadanía en la medida en que ellos sean expresión auténtica del sentimiento nacional". Tenían razón y fue lo que efectivamente ocurrió.

Para muchas personas vinculadas al orden de cosas que había resultado aventado por el Pronunciamiento, el punto verdaderamente irritante no estaba en la Constitución, sino en que su aprobación fortalecería la posición del general Pinochet, quien gobernaría dotado de un título de legitimidad incontestable al menos hasta 1990, y en ese tiempo dejaría sólidamente asentada la obra fundacional que encabezaba. Mas, para la mayoría de la población, eran precisamente esas razones las que le movían a apoyarla.

La oposición estaba incómoda. Había sido entrampada: al participar en el plebiscito votando negativamente, legitimaba su resultado. Podía abstenerse, y fue la idea reactiva que en un primer momento tuvieron desde comunistas a democratacristianos, pero recapacitaron casi de inmediato. Si se abstenían y la ciudadanía se volcaba a las urnas, quedaría en evidencia lo menguado de su representatividad. El dilema que se les planteaba no dejaba de ser patético; durante años habían pretendido hablar en nombre del pueblo, y ahora surgía el peligro de que si efectivamente hablaba ese pueblo, tan arrogante pretensión podía desvanecerse. Más que mal, ya en 1975 el propio Eduardo Frei había reconocido que los militares podían tener entre el público en general un apoyo bastante más amplio del que los políticos podrían querer reconocer.

Una vez resignados a correr el riesgo de someterse al veredicto popular, se pusieron en campaña para convencer al electorado de las bondades de votar por el No. Los

---

40 El Mercurio, 13.8.80 y La Tercera, 29.8.80.

41 El Mercurio, 12.7.80.

observadores imparciales han reconocido que pudieron difundir sus ideas y consignas con entera libertad en la prensa escrita y a través de las radios, que por entonces —y quizás todavía hoy— es el medio de mayor influencia en la masa popular. Para probarlo, La Segunda publicó el 8 de septiembre una página completa de extractos de programas de radio que había seguido durante los 15 días anteriores al plebiscito. La verdad, como apunta Whelan, es que "sea lo que fuere que pueda decirse de la Constitución de 1980, no se puede decir que haya sido aprobada en las sombras. Desde el momento en que el proyecto presentado por el Consejo de Estado fue dado a la publicidad, en julio, Chile fue sepultado bajo una avalancha de declaraciones, entrevistas, artículos, análisis, propaganda, avisos pagados, hojas clandestinas, panfletos y periódicos, titulares resonantes y apasionados, peticiones y contrapeticiones".[42]

Repasar la prensa de la época, que recogió puntualmente las declaraciones de todo aquél que estimó tenía algo que decir al respecto, es el mejor desmentido a la leyenda de la oprobiosa dictadura que imperaba en Chile. Leyenda inventada ¡oh caraduras! precisamente por los que admiraban rendidamente unas dictaduras auténticas, pero generalmente evitando vivir en ellas.

La campaña opositora, como es de rigor, culminó con una concentración en el Caupolicán, coliseo que tiene una capacidad de 7.000 personas. Considerando a la gente que no pudo ingresar y que se agolpó en las calles adyacentes, se calcula en unas 15.000 personas la asistencia al acto. El orador principal fue el ex presidente Eduardo Frei, quien, en lugar de centrar su discurso en los aspectos de la Constitución que le parecieran objetables, propuso un itinerario de transición diferente. Al parecer, juzgando por las consignas que se corearon, la mayor parte de los presentes eran militantes de los partidos que habían integrado la Unidad Popular. ¿Porqué hablaba Frei, entonces? La respuesta la dio Hortensia Bussi de Allende en México. La oposición al plebiscito, dijo, había logrado poner en una misma línea a los democratacristianos y a la izquierda marxista, y aunque ella nunca olvidaría lo que denominó una complicidad silenciosa del ex mandatario con el golpe fascista, "Frei puede y debe ser usado".[43] A confesión de parte, relevo de pruebas.

El gobierno no prestó mayor atención a las observaciones de Eduardo Frei. Más bien llamó la atención sobre la mancomunión de fuerzas a que se referiría la viuda de Allende. En ese sentido, durante su alocución para solicitar el apoyo ciudadano ante el ya inminente plebiscito, el general Pinochet afirmó que en el Caupolicán la oposición se había "sacado la máscara". Los que se decían defensores de la libertad se estaban uniendo con los totalitarios. Y a los que decían que el plebiscito era falso, les retrucó: "Yo respondo: ningún plebiscito en el cual el pueblo toma parte, donde ellos siguen sus conciencias, puede ser llamado falso. Falsas eran esas asambleas clandestinas, donde preparaban y seleccionaban candidatos y adoptaban sus resoluciones a espaldas del pueblo". Y efectivamente, esa había sido una de las características de la política chilena prácticamente hasta el año 1973.

---

42 JAMES R, WHELAN, op. cit., p. 755.

43 Declaración en una entrevista otorgada en México el 11.9.80 y reproducida por La Segunda, 18.9.80.

A medida que se acercaba el día del plebiscito, los ánimos se enardecían y juicios cada vez más duros brotaban por todos lados. Así, por ejemplo, Pablo Rodríguez Grez, nacionalista, comentando la concentración del Caupolicán, decía: "La historia se repite. Hoy los comunistas los ayudan y mañana ellos pavimentarán el camino para los comunistas. Sucedió ayer y sucederá en el futuro". El líder del gremialismo y activo participante en la redacción de la Carta Fundamental, Jaime Guzmán Errázuriz, advertía: "Aquél que ayer se presentaba como una alternativa al comunismo, hoy se presenta como una alternativa con el comunismo". Por el otro bando, Patricio Aylwin, presidente del Partido Demócrata Cristiano en 1973, hablando en la Universidad de Chile, afirmaba que "a la luz de las condiciones imperantes en el país, el gobierno militar fue necesario, pero el período de transición no debería prolongarse por más de tres años. Después de decir eso dijo también que si el gobierno ganaba el plebiscito, el PDC no reconocería el resultado, pero que si perdía, debía abandonar el poder de inmediato".[44] ¡Eso sí es *fair play* democrático!

En vista que su solicitud de suspender el plebiscito era ignorada y el gobierno seguía adelante imperturbablemente, Eduardo Frei anunció que se dirigiría al país por medio de una cadena nacional de radiodifusoras. En inserciones pagadas en los periódicos se llamaba "a los chilenos libres" —una apelación con resonancias gaullistas— a congregarse y escucharlo con sus familias y amigos. Pudo, pues, insistir en sus planteamientos el 9 de septiembre. Fue el canto del cisne. Nunca más tendría la ocasión de dirigirse a un amplio auditorio. Y en el recuerdo de muchos, su larga trayectoria política quedaría unida a esa postrera alianza con la izquierda marxista.

La petición de Eduardo Frei —acorde con lo formulado por el llamado Grupo de los 24, que solicitaba una postergación de entre 60 y 90 días para que la ciudadanía pudiera escoger entre el proyecto constitucional del gobierno y el que ellos elaborarían— era imposible de atender. De hacerlo, cualquier otro grupo de indefinible representatividad habría tenido derecho a presentar también su proyectito. Ceder a los dramáticos llamados de última hora y postergar las graves resoluciones que la política impone a veces, puede ser natural en un gobierno indeciso, carente de objetivos precisos. O la actitud de políticos que en verdad no son tales porque no tienen una idea clara de lo que debe hacerse desde el Estado en beneficio de la nación, como lo exigía José Ortega y Gasset. Pero ese no era el caso del Gobierno Militar, que avanzaba en procura de unas metas nítidamente prefiguradas y continuaría en esa misma dirección sin titubear. Lo que estaba en juego, entregado a la decisión de la voluntad popular, era su proyecto institucional, largamente meditado, no cualquier otro, fruto de la improvisación.

Tal como estaba anunciado, el plebiscito se realizó el 11 de septiembre de 1980. Fue una jornada cívica absolutamente normal. Nada turbó el libre acceso de los ciudadanos a las mesas receptoras de sufragios. Según antecedentes del Instituto Nacional de Estadísticas, 6.753.656 personas podían votar; lo hicieron 6.271.368. Dicho de otra manera, fue la mayor cantidad de voluntades expresadas hasta entonces en la historia política del país. En favor del nuevo texto constitucional se pronunció el 65,71% de la ciudadanía. Por su rechazo lo hizo el 30,19%.

---

44 JAMES R. WHELAN, op. cit., p. 761.

Como es natural, para la mayoría de la población el resultado del plebiscito afianzó la sensación de tranquilidad frente al futuro. El itinerario hacia la plena democracia dejaba de ser una aspiración gubernamental para convertirse en un camino aceptado explícitamente por el cuerpo social, y a éste se ceñiría estrictamente el Gobierno Militar hasta el último minuto de su mandato.

A modo de contrapunto, para significar el impacto de este desenlace, se puede señalar que al día siguiente el mercado bursátil de Santiago se disparó hacia arriba agudamente. Y desde Moscú, Luis Corvalán proclamó que los resultados reafirmaban la necesidad de violencia aguda.

Las reacciones internacionales no se hicieron esperar. Desde el mismo día del Pronunciamiento, todo el mundo se sentía llamado a opinar sobre la realidad chilena; lo cual no es malo, siempre y cuando se haga en serio, esto es, evitando caer en la tentación del criterio de indignación selectiva, criticando a los débiles, pero cuidándose mucho de decir algo desagradable a los militarmente poderosos... En Washington, el Departamento de Estado criticó el plebiscito haciendo presente que no sólo se había intimidado a la oposición, sino que se le había impedido expresar adecuadamente sus opiniones. En Bonn, el gobierno socialdemócrata de Helmut Schmidt dijo que aún no existían las condiciones para reconocer la validez de las elecciones en Chile. El Consejo de Europa, compuesto de 21 naciones, votó condenar el plebiscito en una de sus sesiones plenarias. Frente a estos comentarios, surge una pregunta obvia, ¿y si hubiese ganado la oposición, habrían dicho lo mismo?

Así, los grandes de este mundo, que una y otra vez habían cerrando porfiadamente los ojos ante el mérito del esfuerzo que realizaba este lejano país para resurgir y progresar, condenaban ahora que se hubiera dotado soberanamente del instrumento institucional necesario para sostener ese empeño en el tiempo.

Al día siguiente del plebiscito, en un encuentro con corresponsales extranjeros, el general Pinochet se hizo cargo de las críticas, pidiendo que dejaran trabajar tranquilos a los chilenos, y añadió: "A los Estados Unidos no les costó ni un dólar, ni una bala, ni una vida, sacar a los comunistas de Chile. Y cuando hemos necesitado algo, en vez de ayudarnos nos han golpeado". ¡Sí que lo habían hecho, abierta y encubiertamente! Años más tarde, entrevistado por dos periodistas argentinos, un militar norteamericano que sabe mucho de operaciones secretas, reconocería que "nosotros hicimos una cantidad de cosas contra Pinochet". Se trata del general Vernon Walters, reconocido maestro en el campo de la inteligencia y ex subdirector de la CIA.[45]

Para algunas personas acostumbradas a creer que profetizan en nombre del pueblo, la derrota sufrida en las urnas les llevó a perder los estribos. En una entrevista concedida poco antes del plebiscito a la revista Visión, Andrés Zaldívar había advertido que sin una apertura pacífica a la democracia, Chile "será arrastrado a buscar la violencia y la fuerza como medios de derrocar a un régimen que trata de mantenerse contra la voluntad mayoritaria de los chilenos". Cualquier persona de buena fe podía

45 El Mercurio, 19.5.96, p. D17.

advertir que el camino trazado por la Constitución era, precisamente, una apertura pacífica a la democracia, con plazos y metas concretas; y tras el plebiscito, ninguna duda podía haber sobre lo que realmente pensaba la mayoría de los chilenos sobre su régimen político. Impermeable a esos datos objetivos, a mediados de octubre Zaldívar cometió la imprudencia de afirmar en otro medio mexicano, Uno Más Uno, que "cualquier cosa puede suceder en el futuro, incluso una guerra civil". Aunque tuvo el cuidado de añadir que su partido era contrario al uso de la violencia, invitó a todos —incluídos comunistas y excluídos los comprometidos a ultranza con la Junta, por cierto— a formar un gobierno cívico militar de transición, encabezado por soldados "no fascistas rescatables". ¡Eso sí es sentarse en la voluntad popular y, de paso, llamar a la sedición! Haberse dado el gusto de invitar a quebrar la unidad de las Fuerzas Armadas le significó una temporada en Europa.[46]

Los comentarios malévolos sobre la limpieza del plebiscito fueron cayendo por su propio peso. Muy pronto se impuso la realidad evidente de la adhesión que suscitaba el proyecto político de la Junta Militar. Contra ese camino institucional —manifestación de la voluntad nacional y personificado en el general Augusto Pinochet— acabaron por estrellarse todas las acciones de la violencia subversiva y las maquinaciones de salón urdidas en su contra. En esta maniobra de tenazas, cuyo objetivo era desestabilizar al gobierno, la presencia del dinero extranjero fue perceptible, lo que por siempre manchará el honor de quienes se prestaron a ese juego.

El sentido de la Constitución de 1980.

Nunca se debiera perder de vista que la razón de ser del Pronunciamiento Militar de 1973 fue restituir la libertad efectiva de los chilenos, cuyo contenido había sido vaciado durante la década revolucionaria en beneficio del Estado mediante el abuso de la partitocracia, las recetas ideológicas y la violencia política. Ese principio rector, la libertad, fue institucionalizado en la Carta Fundamental de 1980 y a modo de nudo argumental da unidad a todas sus disposiciones.

En efecto, la libertad, entendida como valor social y virtud personal, constituye la espina dorsal de la nueva democracia, gradualmente instaurada en Chile por el Gobierno Militar. Naturalmente, el ejercicio de la libertad supone responsabilidad; por eso conjuga armoniosamente derechos y deberes. De otro modo, la convivencia en el seno de la comunidad no podría encaminarse al bien común.

Frente a esta realidad, cada día resultará menos comprensible el ataque de que fue objeto durante tanto tiempo. Al menos respecto a quienes siempre han proclamado su vocación democrática. La razón de los otros es demasiado evidente. En expresión del conde Hans von Huyn, suele haber caballos de Troya y asnos de Troya; ninguno de los dos es saludable para la democracia. Y linda francamente en lo absurdo señalar al Gobierno Militar como una dictadura; sobre todo cuando el afán peyorativo viene de

---

46 *La entrevista a Visión está citada en Ercilla nº 2356, 24.9.80. La entrevista a Uno Más Uno, en La Nación, 17.10.80.*

quienes son culpables de haber permitido la entronización en el poder de la Unidad Popular, cuyo designio era totalitario.

Las lecciones extraídas de una meditación serena sobre lo que había sido la historia institucional de Chile y la atenta consideración de lo que ocurría en otras naciones más o menos afines, pesaron en la conciencia de quienes tenían la enorme responsabilidad de dar forma y vida a una nueva Carta Fundamental. Esos antecedentes fácticos debían ser puestos en relación con la concepción del hombre y la sociedad reflejada en la Declaración de Principios emitida el año 1974. De ahí que el capítulo primero de la Constitución —esencial, porque contiene el dogma nacional— establezca antes de nada y como base inamovible del orden político que el Estado está al servicio de la persona humana y en esa dirección reconoce y ampara a los grupos intermedios, a través de los cuales se organiza y estructura la sociedad, garantizándoles la adecuada autonomía para cumplir sus propios fines específicos. Este es el meollo del asunto: la relación entre la persona, la sociedad y el Estado. Todo lo demás le está supeditado. Si esta justa proporción se cumple, la libertad está resguardada porque todos los totalitarismos, cualquiera sea su signo ideológico, lo que han hecho es disminuir la importancia de la persona a favor de lo colectivo, del Estado.

Por cierto, lo que en doctrina se conoce como Estado mínimo no significa que sea reducido a la impotencia. La idea apunta a que se concentre y sea eficaz en las funciones que le compete realizar, a saber, resguardar la seguridad nacional; dar protección a la población y a la familia; propender al fortalecimiento de ésta; promover la integración armónica de todos los sectores de la comunidad, y; asegurar el derecho de las personas a participar con igualdad de oportunidades en la vida nacional. En otras palabras, la justificación de la unidad política soberana es el servicio al bien común, entendido como el conjunto de condiciones que hacen posible el despliegue de las capacidades de las personas, tanto en el plano espiritual como en el material.

La experiencia del pasado reciente enseñaba, además, que la defensa de la libertad hacía necesario crear los mecanismos institucionales, de índole jurídico-político, encaminados a proporcionar estabilidad al nuevo orden estatal. Las fórmulas que contenía la Constitución de 1925 habían demostrado ser impotentes para evitar el cercenamiento de la libertad de las personas por el poder político. Era, pues, imprescindible, innovar sin desnaturalizar la doctrina democrática, pues sin duda en torno a la democracia se articula el consenso básico de la nación chilena.

El factor que a lo largo del tiempo había amagado la estabilidad del régimen político se podía resumir en una palabra: politiquería. Entre los años 1946 y 1970, el resultado de cada elección presidencial significó un rechazo a la gestión que concluía y una esperanza ciudadana hacia algo cualitativamente diferente pero luego nuevamente frustrada. No podía ser más evidente el descontento popular hacia un sistema caracterizado por la satisfacción de intereses pequeños, absolutamente al margen de las grandes tareas nacionales. Así no es posible progresar. La solución a ese grave problema consiste, como siempre, en respetar la realidad. En concreto, respecto al orden político, en reconocer y dar forma institucional a la participación de los poderes neutros, es decir, a los que no dependen y son independientes de la actividad político-partidista. No es otro el sentido de la creación del Consejo de Seguridad Nacional, del

Tribunal Constitucional, de los senadores institucionales, de la inamovilidad relativa de los Comandantes en Jefe de las instituciones de la Defensa Nacional y del Director General de Carabineros de Chile y de la autonomía del Banco Central.

Las objeciones que ha merecido la Constitución de 1980 se han centrado en estas innovaciones que, como se acaba de decir, tienen por objeto garantizar la estabilidad del régimen político. ¿Por qué se intenta volver atrás? El tema está tratado con suficiente amplitud en las consideraciones finales de este libro. Por ahora baste señalar que la razón que mueve a criticarlas es, justamente, la pretensión de los partidos en orden a monopolizar la vida política de la colectividad. De instrumento necesario para el funcionamiento de la democracia —pero instrumento, a fin de cuentas— aspiran a convertirse en un fin, confundiendo el contenido profundo de la democracia con la satisfacción de sus propios intereses e ideales. Esa pretensión es inaceptable. Y no por vano capricho, sino porque ya está demostrado que el monopolio del poder por parte de las cúpulas partidistas deviene, fatalmente, en la negación misma de las verdaderas aspiraciones de la población. Cuando ellos se imponen, el país real termina por marchar en una dirección y los políticos por otra, lo que no es útil para el desarrollo ni sano para la concordia nacional.

También en cuanto a la estabilidad, no se debe perder de vista que toda Constitución Política aspira a permanecer en el tiempo. Con mayor razón cuando sus disposiciones han demostrado ser útiles y convenientes para regular la vida política del cuerpo social sin mengua alguna del interés nacional. Como toda obra humana, es perfectible. Pero no hay obra fecunda, en ningún campo, cuando las reglas pertinentes están sujetas a modificaciones arbitrarias. La vida es movimiento y las normas siempre debieran estar al servicio de la evolución, proporcionando seguridad y tranquilidad a los cambios, es decir, evitando los saltos al vacío, generalmente impulsados por la pasión irreflexiva y apoyada en mayorías electorales circunstanciales. Este es el motivo por el cual el ejercicio de la soberanía está limitado por ciertas barreras de contención, que en materia constitucional se traducen en la existencia de un quorum calificado para reformar el texto vigente. Las eventuales enmiendas son un hecho normal incluso en las democracias más antiguas y estables del mundo. Carecen de sentido, por ende, las posiciones que pudieran querer petrificar un texto constitucional. Lo que resulta inaceptable es pretender su modificación para satisfacer principios ideológicos o aspiraciones partidistas de corto alcance. En suma, lo que se desee modificar deberá ser justificado cabalmente, no apelando a razones que no son tales sino meras consignas populistas.

En el mismo orden de consideraciones, esto es, en torno a la estabilidad del orden político, pero ahora con la finalidad específica de temperar la lucha por el poder y hacer prevalecer los intereses nacionales por sobre los meramente partidistas, la composición mixta del Senado está llamada a tener gran importancia. Y esto, a pesar de que las modificaciones introducidas en 1989 rompieron el principio de dos senadores por cada región y crearon nuevas circunscripciones en las regiones más pobladas, con lo cual se alteró la proporción originalmente prevista entre senadores elegidos de entre los candidatos propuestos por o con los partidos políticos y senadores designados en razón de su experiencia en el servicio al Estado en sus instituciones fundamentales.

El análisis de este tema es interesante porque permite iluminar la totalidad del debate sobre la conveniencia de reformar la Constitución de 1980. El primer punto digno de notarse radica en que no es posible comparar lo existente con una proposición concreta de futuro, porque jamás se han dado a conocer las normas que se dictarían en su reemplazo. ¿Se volvería tal vez a la Constitución de 1925? ¿O acaso se implantaría el proyecto constitucional de Jorge Alessandri? ¿ Hay por ventura alguna fórmula novedosa en ciernes, quizás destinada a abrir otra época revolucionaria? Lo único que puede afirmarse por el momento es que cada una de las reformas que se han propuesto ha tenido por norte el fortalecimiento de los partidos, en desmedro de la unidad nacional.

En cuanto a una eventual reforma del Congreso, el asunto presenta aristas complejas y muy de fondo para el sentido total de la institucionalidad. Cualquiera sabe que el sistema bicameral tiene sentido cuando ambas corporaciones cumplen actividades diferentes y complementarias, pero en ningún caso en competencia o en rivalidad. Según el profesor Arturo Fernandois, el bicameralismo se justifica por alguna de las siguientes cuatro aspiraciones, que pueden combinarse en un mismo ordenamiento institucional: en los Estados Federales, para satisfacer la necesidad de representación de los Estados que lo integran; en los Estados Unitarios, que es el caso de Chile, para favorecer las necesidades de descentralización y desconcentración administrativa; en general, para representar intereses diferentes a los meramente políticos, y; también en general, para mejorar la calidad de la legislación mediante la participación de una cámara revisora o de función conservadora, de reflexión y acuerdos que miran a lo global y no a lo particular de cada fracción del cuerpo político.[47] En este sentido, es comúnmente aceptado que la Cámara de Diputados sea una instancia netamente política, fiscalizadora del Poder Ejecutivo, mientras que el Senado cumple otras funciones exclusivas, además de revisar los proyectos de ley ya estudiados y aprobados en la Cámara Baja. Si sus respectivas competencias no están bien delimitadas, el Senado funciona como otra cámara política, y en ese caso no se ve razón para que no tenga una integración similar a la de Diputados; quizás la mayor edad de sus miembros acabaría por ser la única diferencia.

La más tradicional justificación del Senado atiende a su calidad de segunda cámara, que revisa y perfecciona lo ya hecho por la Cámara de Diputados, pero como apunta Fernandois, dicha tarea, en sí misma, no basta para acreditar su existencia porque si no se tiene confianza en el trabajo de cada organismo y nivel, habría que contar también con otro que supervigilara el trabajo de la Cámara Alta y así se precisaría de terceras y cuartas cámaras revisoras. Por eso, agrega, es más lógico configurar un Senado cuyas funciones, y por ende su composición, se orienten a la reflexión técnica y morigeradora en la revisión legislativa, cumpliendo funciones constitucionales en que se le distinga de la naturaleza eminentemente política de la Cámara de Diputados.

El punto es, pues, determinar esas funciones propias del Senado, pero no engañarse creyendo ver en su integración por personas no elegidas directamente por votación popular un origen no democrático y por tanto cuestionable. De hecho, en demo-

47 ARTURO FERNANDOIS V., El Mercurio, 20.4.96, p. 2.

cracias como la británica y la alemana, la Cámara Alta no es elegida en comicios electorales.

El senador institucional William Thayer Arteaga se ha preocupado de estudiar este tema, citando al profesor español Miguel Herrero y Rodríguez de Miñón —autor de una investigación titulada "La reforma del Senado, una propuesta"— donde expresa que "en el moderno derecho Constitucional el Senado responde siempre a la necesidad de representar para integrar mejor a los segmentos diversos de una sociedad plural. Por eso, cuando la democratización de la sociedad y del derecho constitucional producen una homogeneización del cuerpo político y afirman como legitimidad exclusiva y excluyente de la voluntad popular, una e indivisible, el bicameralismo entra en crisis y la segunda cámara (El Senado) pierde poderes e incluso tiende a desaparecer".[48]

Agrega el senador Thayer que el Senado de la transición española —establecido después de la muerte del general Francisco Franco y de enorme influencia en el éxito de dicho proceso— tenía una composición mixta. En efecto, entre sus integrantes había 207 miembros elegidos por sufragio universal y 41 personas designados por el Rey. Sin embargo, en su afán de homogeneizarlo todo de acuerdo al sufragio universal, en la Constitución de 1978 fueron eliminados los Senadores designados, cuya ausencia se ha hecho notar. Los españoles vienen de vuelta y ahora procuran reparar esa innecesaria pérdida, como lo ha hecho ver, entre otros, el propio presidente del Senado, Juan José Laborda. Dado el interés con que los círculos políticos han seguido aquí las peripecias de la transición española, no estaría de sobra prestar atención a aquel dato.

Ahora bien, según Herrero, el bicameralismo obedece, en sus orígenes, a una de estas dos causas: "un factor de integración funcional para representar la pluralidad social o bien es una técnica de distribución de funciones". Tras pasar revista a lo que ocurre en las Cámaras Altas de Gran Bretaña, Estados Unidos de Norteamérica, Francia, Alemania, Bélgica y otros países, concluye que la homogeneización que puede lograr la democratización política lleva fatalmente a la decadencia primero y a la desaparición después, de las segundas cámaras. "Allí donde se ha afirmado la radical unidad de una nación de ciudadanos iguales, el Senado no ha encontrado lugar", afirma. Obviamente, la igualdad de los ciudadanos no se refiere a su ser esencial, ni a sus deberes y derechos, que nadie discute, sino a una supuesta uniformidad, sin las diferencias naturales que nacen de sus actividades, preparación y cultura. Lo primero es justo, lo segundo es irreal. De ahí que "en tal caso la primacía, o aún, la exclusividad del sufragio universal directo como fuente (única) de legitimación política, allí donde se han mantenido las segundas cámaras, las ha marginado del proceso del poder o convertido en redundantes con la Cámara Baja; al ser elegidos sus integrantes por los mismos electores en uno y otro caso las segundas cámaras son secundarias". Y agrega: "La división de poderes que Montesquieu concibió como un equilibrio de fuerzas sociales se sitúa en el sufragio de un único cuerpo electoral. Este pluralismo es sólo de partidos políticos y la división de poderes lo es entre mayorías y minorías, gobierno y

48 WILLIAM THAYER ARTEAGA, "La experiencia española", en El Mercurio, 5.12.96, p. 2.

oposición, o, en el Estado de Partidos (partitocracia) entre diferentes partidos políticos, sus fracciones parlamentarias y cuotas institucionales. Si las cámaras son meros foros de debate o acuerdo interpartidario, con una basta y posiblemente sobra...".

El análisis de Herrero remata señalando que el "máximo problema de nuestro tiempo es el desequilibrio entre su gravedad (de los problemas) y la creciente escasez de capacidad, serenidad, experiencia e imaginación para abordarlos. La dureza de la contienda política retrae muy valiosos elementos hacia la sociedad civil y, en España, un sistema de partidos especialmente rígido, los mantiene aislados de la cosa pública. Y por otro lado expulsa antes de tiempo a quienes podrían aportar mucho y bueno". Y concluye citando a Stuart Mill: "Los defectos de una asamblea democrática que representa al público en general son los defectos del público mismo: la falta de educación especial y de saber". De donde fluye que lo que se necesita para poner remedio a esto es asociarle un cuerpo cuyos rasgos característicos sean, precisamente, la educación especial, la experiencia y la sabiduría que dan una vida consagrada al servicio de la nación desde sus instituciones fundamentales.

Si las cosas son así —y lo son— constituye un despropósito pretender remediar las debilidades o defectos que pueda presentar el Senado aplicando más de lo mismo, es decir, suprimir los senadores institucionales para reemplazarlos por hombres de partido.

Como se insinuó más arriba, el tema de los senadores designados o institucionales —según algunos comentaristas, en rigor hay en nuestro ordenamiento siete institucionales y dos designados, reservando el último término a los de libre nombramiento por parte del Presidente de la República, puesto que los demás son escogidos por diversas instituciones— tiene a objeto de análisis un valor ejemplar. Ilustra sobre el mar de fondo en que ha desenvuelto la discusión de las modificaciones a la Constitución vigente, pues su común denominador es una pretendida "democratización", que en el fondo no pasa de ser el intento de los partidos por acceder al control total y exclusivo del Estado. Esta realidad podría incluso complementarse señalando que los más significativos acuerdos políticos de los últimos años se han tomado directamente entre las cúpulas partidistas, o entre ellas y el Presidente de la República, sin tomarse la molestia de ventilarlos en el Congreso, que demasiadas veces se ha limitado a ratificar unas decisiones previamente convenidas, con evidente daño a su prestigio.

Con todo, lo que verdaderamente interesa es dejar en claro que el ordenamiento constitucional de cada Estado obedece, soberanamente, a sus propias necesidades y exigencias. No tiene mayor importancia el argumento —que en realidad no es tal— según el cual en otras latitudes las cosas se hacen de determinada manera y por tanto hay que imitarlos. Los chilenos tenemos una larga tradición institucional, una historia, unas experiencias y unos desafíos que son propios. No somos colonia mental de nadie. El ordenamiento constitucional vigente, por tanto, será digno de ser defendido por todos los medios legítimos que hoy garantizan su integridad en la misma medida en que muestre ser útil para asegurar la libertad de la población y para sostener su progreso y tranquila evolución.

A modo de conclusión vale la pena indicar que una obra institucional cuyo propósito es cerrar una época —en este caso, el de las revoluciones colectivistas de signo

izquierdista que pretendieron modelar la sociedad según sus premisas ideológicas— y en su reemplazo abrir otra, centrada en la libertad de los ciudadanos y confiando el destino de sus propias vidas y el de la sociedad a su personal responsabilidad, acorde en sus principios con los de la antropología cristiana, fértil matriz de la que se nutre la auténtica tradición del pueblo chileno, merece tener la oportunidad de ser aplicada de buena fe. Es comprensible que a los individuos que alcanzaron su imagen del mundo y en consecuencia formaron sus convicciones en los parámetros del antiguo régimen les resulten incomprensibles algunos de sus principios y de sus manifestaciones prácticas, como la presencia de los órganos de poder neutro, por ejemplo. Su actitud regresiva, no hay que olvidarlo para entenderlos, también es parte de la realidad política, porque ésta siempre se manifiesta como una dinámica simbiosis de pasado vigente y futuro emergente. Pero, con el paso de los años y en la medida en que la nueva institucionalidad cumpla satisfactoriamente su razón de ser, a las generaciones venideras les parecerá algo natural: lo que les parecerá ajeno serán, precisamente los arrestos cargados de un estilo ya añejo. A poco andar, esto es algo que ya se está vislumbrando.

En síntesis, intentar modificaciones que puedan llevar a desvirtuar la institucionalidad vigente sólo por un muy discutible democratismo, puede acarrear funestas consecuencias. Se ha de evitar, en consecuencia, la repetición en nosotros del caso del niño que después de sembrar algunas semillas en un rincón del jardín se impacienta porque tardan en brotar, y creyendo facilitarles el desarrollo escarbando la tierra con sus deditos, no advierte que les quita la vida cuando apenas han germinado.

CAPITULO VI

LA TRANSICION A LA DEMOCRACIA (1981 - 1990)

Y marché por entre mi pueblo
soñando en el cambio que no es posible
cuando nada de lo estable permanece
a través de las generaciones, y en el tiempo
que entonces corre perdura inútil
como un reloj de arena.
Y meditaba:
esta morada no es aún
suficientemente duradera.

ANTOINE DE SAINT-EXUPÉRY

Con la ratificación ciudadana del texto constitucional propuesto por la H. Junta de Gobierno mediante el plebiscito realizado el día 11 de septiembre de 1980, culminó la fase arquitectónica del orden político surgido el 11 de septiembre de 1973 y se inició la transición hacia su fase agonal, esto es, aquella en la que de acuerdo a las normas en vigor resulta legítima la competencia por el poder político.

Dicho acto cívico tiene especial trascendencia porque zanjó tres temas capitales, enlazados entre sí con relación de causa a efecto. El primero de ellos es que en adelante la República contó con una institucionalidad llamada a encauzar su desarrollo de manera absolutamente regular y estable. Dicho estatuto nacional no era simplemente un fruto de la voluntad militar, sino que reflejaba el nuevo consenso social imperante; un acuerdo tácito y fuerte alzado con tenaz esperanza desde la ruina moral y material en que la década revolucionaria había sumido al país. En otras palabras, se hacía carne el ideal fundacional que soldaba la fisura abierta en la convivencia de los chilenos durante aquella época funesta. En segundo lugar, como consecuencia del orden de cosas alcanzado, el itinerario hacia la plenitud democrática, esbozado por primera vez en Chacarillas, tenía ahora un marco preciso y definitivo, de un valor jurídico indiscutible y cuyo estricto cumplimiento comprometía el honor de las Fuerzas Armadas y Carabineros. Por el imperio de sus normas, el poder ejercido por las instituciones castrenses quedaba limitado, y por los plazos que estipulaba, ya nadie podía dudar que en 1989 o 1990, según lo decidiera la mayoría ciudadana, entrarían en funcionamiento todos los órganos republicanos que para su integración requieren

una elección popular. Por último, en virtud al mandato recibido en aquella ocasión, desde el momento en que la Carta Fundamental entrara en vigor, esto es, el 11 de marzo de 1981, el general Augusto Pinochet Ugarte iniciaría el primer período presidencial regido por la nueva Constitución, abriendo así una nueva etapa en la evolución política del país.

Saliendo de inmediato al paso de una discusión que aún no se agota, resulta pertinente recordar que el sentido natural de la voz *transición* es la acción y efecto de pasar de un modo de ser o estar a otro distinto. Cualquier transición, como lo expresa Jünger con finura, es "una época en la que la aurora y el crepúsculo se confunden".[1] No es raro, entonces, que en esta metamorfosis parezcan difusos los contornos de la materia sometida al cambio. Sin embargo, toda transición tiene nítidamente señalados un punto de salida y otro de llegada; no es concebible que consista en una transformación infinita, que no acaba jamás... o que se resuelva volviendo al punto de partida. O más atrás todavía, pues en tal caso se le estaría confundiendo con la regresión, que es un fenómeno distinto.

Aclarado el concepto, es posible afirmar con certeza que la transición del orden político chileno desde un régimen autoritario, de facto si se prefiere, a otro democrático, apoyado en normas de rango constitucional, se inició el 11 de marzo de 1981 y concluyó el 11 de marzo de 1990. Basta comparar la realidad institucional que había en el punto de inicio con la existente en el punto de término para advertir el cambio. ¿Cómo se puede sostener, entonces, que la transición no ha concluido o que se cerró en una fecha distinta a la indicada? Quizás la única explicación lógica sea que quienes sostienen esto último se refieren en verdad a otra transición, a una mutación política cuyo punto de despegue es el Gobierno Militar y el de arribo está por verse, escondido en algún lugar remoto de ciertas concepciones que por algún motivo no han estimado del caso precisar.

En apariencia el asunto carece de importancia, pero no es así. Esta disparidad de opiniones dista mucho de ser una cuestión académica: lo que potencialmente está en juego es la estabilidad del régimen político de la nación chilena.

En efecto, si bajo pretexto sigue aumentando la presión que empuja hacia la involución de las reglas constitucionales —sobre todo si esa tendencia, ajena al interés nacional, responde exclusivamente a consideraciones de índole partidista— llegará un momento en el que se habrá retrocedido hasta el día que sirve de pórtico al Chile actual. Si ello llegara a ocurrir, se haría necesario dirimir, una vez más, lo que a tantos parecía definitivamente resuelto.

De otra parte, los entusiastas de la vuelta atrás no parecen haber meditado una pizca en que si el delicado tejido institucional se desfigura por exceso de remiendos, vaciando de paso la esencia de su contenido original, no faltará el militar avisado que se preguntará: ¿qué garantizamos nosotros, la cáscara o la almendra? No es aventurar demasiado si se afirma que su respuesta no dejará indiferente a nadie.

---

1 ERNS JÜNGER, Discurso en Bilbao. Está recogido en *Simposio homenaje a Erns Jünger*, Editado por el Ayuntamiento de Bilbao, Bilbao, 1990.

Sentido y alcance de la transición política.

Desde el punto de vista político, el significado del primer período presidencial regulado por las disposiciones de la Constitución de 1980 fue servir de transición desde un gobierno autoritario a otro plenamente democrático, para lo cual la propia Carta Fundamental preveía los eventos posibles y sus plazos respectivos, contemplando asimismo las normas transitorias en que se apoyaría la materialización de dicho objetivo. El sentido de este mecanismo de transición era evitar que la gestión de gobierno iniciada el 11 de septiembre de 1973 desembocara abruptamente en lo que podía ser un peligroso vacío de poder si los principios que la animaban no estaban aun suficientemente afianzados entre los grupos dirigentes. Era, pues, una medida dictada por la prudencia. Gracias al plazo que las Fuerzas Armadas y de Orden autoimponían a su obra restauradora del consenso nacional, el próximo período presidencial, que se desenvolvería en condiciones diferentes, enlazaría con lo ya avanzado de manera completamente natural.

En ese contexto y tal cual ocurrieron las cosas, como se ha afirmado más arriba, el período de transición se inició el 11 de marzo de 1981 y terminó el 11 de marzo de 1990. En esta fecha, respecto a la función legislativa, se disolvió la Junta de Gobierno y entró en funciones el Congreso Nacional, y en cuanto a la función ejecutiva, el presidente Augusto Pinochet Ugarte traspasó el mando a Patricio Aylwin Azócar, que de este modo se convirtió en el segundo mandatario cuya legitimidad y normas reguladoras de su gestión radican en la Constitución de 1980.

Para los sectores políticos derrotados en el plebiscito mediante el cual el grueso de la ciudadanía había ratificado la nueva Constitución, la aplicación de la nueva agenda política se iniciaba "en un clima de ofensiva del gobierno, de pleno apogeo de un proceso de transformaciones institucionales enmarcadas en lo que se ha llamado las "modernizaciones", cuyas expresiones más recientes eran el nuevo sistema de previsión y la legislación que organizaba a las universidades chilenas. El intento fundacional del régimen y su proceso de institucionalización parecían alcanzar pleno auge, pese a todas las oposiciones, y apoyado en un publicitado éxito económico de los últimos años". Pero, más allá de las apariencias y por la propia naturaleza del modelo político vigente y de su proceso de institucionalización, "nos encontramos ante la institucionalización problemática y contradictoria de un régimen *militar* que busca sentar las bases de un régimen futuro de tipo *autoritario* con mecanismos de exclusión y de participación restringida. El paso de la institucionalización del régimen militar a la creación de un nuevo orden político autoritario constituye, a mi juicio, el problema y desafío fundamental encarado por los núcleos hegemónicos del bloque dominante. Es a partir de ello que tanto los procesos de transformación social que el régimen militar ha denominado "modernizaciones" como las disputas internas entre sus sectores de apoyo, se pueden analizar como algunos de los más importantes problemas planteados a la oposición".[2]

---

2 MANUEL ANTONIO GARRETÓN M., "Modelo y proyecto político del régimen militar chileno", en MANUEL ANTONIO GARRETÓN et. al., *Chile 1973-198?*, Revista Mexicana de Sociología/Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO), Santiago, 1983, pp. 7-24. Las citas en pp.7 y 8-9.

En una línea crítica, pero mucho menos lúcida que la recién indicada, se pronunció el Grupo de los 24. Su actitud no sorprendió a nadie porque, como se ha narrado anteriormente, pretendió en la hora undécima, cuando el plebiscito ya había sido convocado, que la ciudadanía se pronunciara entre el texto propuesto por la Junta de Gobierno y el suyo.[3]

Tampoco algún sacerdote podía dejar de reaccionar destempladamente, provocando un pintoresco incidente. Como se recordará, la Conferencia Episcopal de Chile dio a conocer su punto de vista sobre el plebiscito en un documento que fue difundido por los medios de comunicación al finalizar el mes de agosto de 1980. Aunque al menos en lo formal el mensaje de la Jerarquía era mesurado al punto de suscitar algunas protestas del sector eclesial más comprometido con la izquierda, dos connotados fieles, Carlos A. Vial Espantoso y Jaime Guzmán Errázuriz, en forma pública pero respetuosa hicieron ver sus opiniones divergentes sobre alguno de los puntos allí abordados. Pues bien, Ramón Angel Cifuentes Grez, S.J., Promotor de la Justicia del Tribunal Eclesiástico Regional de Concepción, declaró, en carta remitida a la revista Hoy, que ambos habían cometido un delito penado por la ley canónica con excomunión *latae sententiae*, esto es, inmediata, aunque imponerla está reservado a la Sede Apostólica. Carlos Vial respondió que jamás había desconocido la autoridad de los Obispos, y añadió: "Lo que yo siempre he dicho es que existen malos sacerdotes que utilizan el púlpito para llamar al odio". Jaime Guzmán se limitó a manifestar: "No pierdo el tiempo ocupándome de afirmaciones grotescas". El asunto dejó de ser una querella de sacristía cuando el Pro Rector de la Pontificia Universidad Católica de Chile, monseñor Jorge Medina Estévez y el también sacerdote y profesor de la Facultad de Teología de la misma, Julio Jiménez Berguecio, manifestaron que en este caso no procedía la pena de excomunión y que las opiniones del padre Cifuentes no constituían un acto de autoridad, sino un simple parecer suyo. Tal dictámen enardeció más a este último, que les replicó airado. Unos días más tarde, la Sagrada Congregación para la Educación Católica calificó la opinión de monseñor Medina de "suficiente y oportuna". El episodio dejó como lección, una vez más, el riesgo que suponían las frecuentes incursiones clericales en materias contingentes y opinables.[4]

No fue aquella la única reacción eclesiástica que desentonó con el llamado a la unidad nacional formulado por el general Pinochet apenas conocido el resultado del plebiscito. El sector de la Iglesia que Rafael Valdivieso llama "la disidencia clerical", reaccionó con virulencia. El sacerdote Juan de Castro, cabeza de la Vicaría de la Solidaridad, expresó en el editorial del boletín que publicaba esa Vicaría que el acto plebiscitario "no nos parece un hito de reconciliación y pacificación". El Obispo de Punta Arenas, monseñor Tomás González, lo calificó de "violencia a la conciencia moral de los ciudadanos". Los Obispos Jorge Hourton y Manuel Camilo Vial, ambos auxiliares de Santiago, señalaron respectivamente que no era honesto "que una persona o un grupo de personas pretendan imponer al país una Constitución" y, "la forma más apropiada para enfrentar una materia es promover la participación de personas de

---

3 "Las críticas del Grupo de los 24", Revista APSI, dossier, 10 al 23 de marzo de 1981.

4 La Segunda, 24.9.80, El Mercurio y La Segunda, 26.9.80, El Mercurio, 2.11.80.

todas las tendencias —se entiende especialistas— en la elaboración de un texto constitucional". Y el cardenal Raúl Silva Henríquez —autor de la en otro tiempo inspirada consigna *no hay que ser reaccionario*— entrevistado por Ricardo Benozzo, enviado especial de la agencia italiana ANSA, cuando ya había transcurrido un mes desde el plebiscito, definía en los siguientes términos su posición frente a los gobiernos autoritarios que se distinguían por defender valores accidentales y cristianos: "Ningún totalitarismo puede ser modelo de vida cristiano. Dicen que son cristianos, pero no creemos que lo sean".[5]

Por cierto, esos juicios destemplados no eran representativos del sentir de la Jerarquía católica ni menos del pueblo fiel. Con cierto grado de humor doloroso alguien apuntó en esos días que a pesar de todo lo probable era que, en el fondo, ellos prefiriesen vivir en una sociedad conducida bajo los principios cristianos. Se trataba, simplemente de la tenaz resistencia de personeros comprometidos y tributarios de una corriente que durante un par de décadas había hecho furor, pero que el nuevo pontífice, Juan Pablo II, estaba comenzando a corregir. Si se les cita aquí es con el único propósito de hacer constar una interferencia que no es posible ignorar si se desea tener un panorama completo del ambiente en que se inició la transición. Además, porque la amplísima consolidación en la sociedad chilena de los credos evangélicos, que ha pasado a constituir uno de sus rasgos sociológicos más llamativos, no es un fenómeno ajeno, en sentido reactivo, a los desplantes del sector "progresista" de la Iglesia.

A manera de contrapunto, es justo dejar testimonio de lo que había afirmado monseñor Emilio Tagle Covarrubias, Arzobispo-Obispo de Valparaíso y persona cuyas opiniones eran respetadas por la paciente mayoría de los católicos: " La realidad es ésta, cuya significación no puede olvidarse: el 11 de septiembre es una fecha cumbre en nuestra historia. Chile caminaba sin remedio al abismo, de donde fue providencialmente por nuestros institutos armados. (...) Ante el descalabro sufrido en Chile, el marxismo montó una agresión en la que, mientras persista, no habrá paz. Está al acecho, usando las tácticas más hábiles y explotando los más nobles sentimientos para llegar donde quiere".[6] Para no faltar a la caridad, hay que convenir en que sin duda fue la malévola manipulación de los más nobles sentimientos cristianos por el marxismo lo que causó tantas opiniones extraviadas en el seno de la Iglesia.

Más allá de las escaramuzas, lo que sí parecía evidente para todos era que el contenido neto del período constitucional del presidente Augusto Pinochet lo representaba su interés en asentar un orden de cosas destinado a remediar las causas de los problemas que en su día habían hecho posible el surgimiento de la década revolucionaria y, como consecuencia, de la intervención militar. Si tanto la acción de gobierno como los afanes de la sociedad se encaminaban con rumbo confluente hacia el cumplimiento del Objetivo Nacional y ello ocurría en un clima de paz social, aunque fuera perturbado por la acción terrorista, el país llegaría a ser muy pronto tan diferente que los postulados sostenidos por todas las fuerzas políticas hasta 1973 quedarian sin sentido.

---

5 RAFAEL VALDIVIESO ARIZTÍA, *Crónica de un rescate*, op. cit., p. 230.

6 El documento de monseñor Tagle está reproducido íntegramente en Qué Pasa nº 399, 7.12.78.

El cumplimiento de ese ambicioso programa tenía por camino y meta afianzar la unidad de la nación, afectada por las profundas heridas abiertas durante los conflictos a que dio lugar la *cuestión social* a comienzos de siglo, heridas cuya cicatrización hizo imposible una movilización política centrada en la lucha de clases y el odio que ésta engendró. Es casi innecesario decir que la unidad es un inmenso bien, entre otras razones por aquello de "todo reino dividido contra sí mismo será desolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no subsistirá".[7] Pero unidad, hay que decirlo, no significa unanimidad ni menos regimentación de la sociedad civil. Como enseña Santo Tomás de Aquino, "lo uno no se opone a lo múltiple, sino a la división, y la multitud tampoco excluye la unidad; lo que excluye es la división de cada cosa en sus componentes".[8] En concreto, para garantizar el porvenir de Chile era imprescindible forjar la unidad en torno a una empresa común y trascendente, una tarea colectiva capaz de ilusionar el afán de cada día de los ciudadanos y de marcar un rumbo a la patria. Era indispensable dejar atrás el tiempo de las decisiones heroicas y abrir una época propicia para cultivar, pacificar y pulir.

Para lograr la tranquilidad en el orden —pues en ello consiste la paz— era imperativo abordar con eficiencia el tema de la justicia social. No había sido otro el germen de la discordia que había dividido a la nación durante al menos tres generaciones. Pero hacer efectiva la justicia social no es algo meramente sentimental ni tampoco depende exclusivamente de la voluntad: la solución del problema está ligada al desarrollo integral del país, única manera de crear los recursos necesarios para materializarla. Sin embargo, para hacer obra fecunda, no basta dominar los aspectos técnicos. La técnica aliena al hombre si no es puesta al servicio de un afán cuyo sentido profundo es indudablemente moral. Como escribió Saint-Exupéry, "en el curso de mis largos paseos he comprendido claramente que la calidad de las civilizaciones de mi propio imperio no se asienta sobre la calidad de los alimentos, sino en la de las exigencias y en el fervor del trabajo".[9] No era suficiente, entonces, mejorar las relaciones laborales mediante una legislación orientada a ese propósito ni engañarse al creer que el progreso económico es un bien en sí mismo: lo importante tenía que ser otorgar al trabajo la máxima dignidad, esto es, poner en sintonía el esfuerzo que demanda y los frutos que produce con la libertad efectiva de las personas.

Si antaño el trabajo había aherrojado la libertad porque el gran empleador era el Estado o porque el movimiento sindical había traicionado a los trabajadores al someterse a los dictados de la política partidista, en adelante había que garantizar su liberalización.

Descendiendo al plano de los medios, por supuesto que había que bregar para crear las bases materiales que hacen posible la justicia social. El sistema económico ya había terminado su ciclo de reconstrucción. Tras haber sido virtualmente destruido durante el gobierno de Salvador Allende, se le había reformulado desde una nueva

---

7 Nuevo Testamento, Mateo 12, 25. En sus *Homilías sobre San Mateo*, 48, San Juan Crisóstomo (s. IV D.C.) hace el siguiente comentario: "La casa y la ciudad, una vez divididas, se destruyen prontamente; y lo mismo un reino, que es lo más fuerte que existe, siendo la unión de los súbditos la que afirma los reinos y las casas".

8 Santo TOMÁS DE AQUINO, *Suma Teológica*, 1, q. 30, a. 3.

9 ANTOINE DE SAINT-EXUPERY, *Ciudadela*, Editorial Goncourt, Buenos Aires, 1966, p. 44.

perspectiva teórica, moral y técnica, y ahora funcionaba a plena capacidad y abría esperanzas quizás exageradas entre la población. Como todos los ejemplos de gobiernos socialistas hasta entonces conocidos, también la Unidad Popular se había caracterizado por su demagogia política e infantilismo económico. Si se quería alcanzar la justicia social, al menos en el grado en que esa aspiración puede ser satisfecha, carecía de sentido mirar atrás con nostalgia. Las decisiones fundamentales para su despegue habían sido adoptadas hacía ya varios años y lo más doloroso del precio de su ajuste a la realidad ya había sido pagado. [10]

La estrategia concebida para alcanzar el desarrollo integral del país se articulaba en las siete modernizaciones. El 9 de julio de 1979 el general Pinochet se había dirigido al país desde el cerro Chacarillas, enunciando un concepto que más tarde ratificaría y ampliaría. Al referirse a la nueva institucionalidad, la proyectó más allá de los aspectos constitucionales próximos a resolverse por la ciudadanía, anunciando que las reformas encaminadas a modernizar al país abarcarían los principales ámbitos de su actividad, dentro "de una perfecta coherencia y armonía conceptual". Poco después, el 11 de septiembre, recalcó en su mensaje anual "la íntima vinculación que existe entre la institucionalidad política, económica y social que estamos construyendo", cuyo sustento inspirador estaba contenido en la Declaración de Principios del año 1974. En esa oportunidad manifestó que el gobierno se había propuesto siete metas o tareas fundamentales, las que popularmente fueron conocidas en adelante como las siete modernizaciones.

La primera meta era el Plan Laboral, cuyo estatuto jurídico había sido dictado en la semana anterior al discurso de Chacarillas recién mencionado. Sus ejes consistían en situar las organizaciones laborales y empresariales en un mismo plano, consagrando un sindicalismo verdaderamente libre y garantizando una negociación colectiva justa, responsable y tecnificada.

La segunda meta era la Reforma Previsional, una innovación cuya necesidad había sido evidente para las administraciones anteriores pero que, por su complejidad y porque hería muchos intereses creados, nadie había podido acometer. El diagnóstico más acabado sobre el escándalo que representaba el sistema previsional chileno, donde los beneficios eran directamente proporcionales a la capacidad de presión de los diferentes grupos de interés, se debía a Jorge Prat Echaurren, quien había estudiado el problema por encargo del presidente Jorge Alessandri.

La tercera tarea se refería a la educación. Nadie dudaba que era imprescindible mejorar su calidad para preparar a la juventud frente a los desafíos de un tiempo nuevo. Para ello había que hacer de inmediato tres cosas: descentralizar la educación pública, para lo cual fue municipalizada; ampliar las posibilidades que ofrecía, en especial hacia la educación técnica, y; estimular la participación del sector privado en la labor educativa. De esta reforma nacieron la educación particular subvencionada, las universidades privadas y el sistema de crédito universitario para financiar los estudios superiores en universidades tradicionales. Por el momento era imposible ir más

---

10 Al documento que sirvió de base a la restructuración económica se le conoce como *El ladrillo*. Fue publicado por el Centro de Estudios Públicos en 1992.

lejos. En esta materia el Gobierno Militar hacía tres consideraciones básicas: la libertad efectiva de los hombres está en directa relación con sus conocimientos. Quien lo ignora todo no es libre en absoluto. Ahora, desde el punto de vista de la seguridad nacional, el poder nacional depende decisivamente de la calidad de los ciudadanos y en ese contexto el nivel educacional de la población es un dato muy significativo. De otra parte, el desarrollo económico del país tendrá su "cuello de botella" precisamente en la dificultad de expandirlo una vez que se haga escasa la mano de obra calificada disponible y falten los profesionales universitarios de cuyo concurso dependen la innovación creadora y la capacidad de administración.

La cuarta meta abordaba el área de la salud, con la triple intención de racionalizar su estructura y operación, concentrar la atención estatal en los más pobres y brindar a la población la posibilidad de elegir entre los diversos sistemas puestos a su disposición. La atención en salud no tiene techo, siempre será insuficiente, por lo que es preciso resolverla con criterios de extrema racionalidad. Contrariamente a lo que suele creerse, la solución no consiste en inyectar más dinero al sistema; hay un umbral —diferente en cada sociedad— traspasado el cual el problema se resuelve por la calidad con que se administran los recursos. Siendo estos un bien escaso, el Estado debe ayudar a los que no pueden valerse por sí mismos, creando las condiciones para que los que tienen mayores recursos puedan recibir atención en el sistema privado.

La quinta meta se refería al sector justicia, cuya modernización debía estar encaminada a dos objetivos, a saber, garantizar el efectivo y expedito acceso de todos a ella y mejorar sus arcaicos procedimientos. Es consustancial al funcionamiento de una democracia moderna la existencia de tribunales imparciales, probos y capacitados para dilucidar y resolver en un plazo prudencial asuntos de creciente complejidad. También lo es respecto al desarrollo económico del país porque muchas decisiones de envergadura son adoptadas por los agentes económicos a la luz de unos parámetros que sólo pueden ser establecidos si de la judicatura mana una doctrina estable y coherente sobre la solución de los litigios.

La sexta tarea se encaminaba a fortalecer una agricultura basada en la propiedad privada, como parte integrante de una economía abierta y competitiva. Era inadmisible que un aspecto tan vital para la subsistencia de la población volviera a ser encarado con criterio ideológico. Si antes este sector había llegado a ser un lastre porque era incapaz de satisfacer la demanda interna y debían importarse muchos alimentos para subsanar ese problema, en adelante se debía convertir en uno de los elementos más dinámicos de la economía, asegurando el sustento de la población —con lo cual, de paso, se acrecentaba la libertad de acción del Estado— e incluso debía generar excedentes que pudiesen ser exportados porque, según los estudios tenidos a la vista, potencialmente era posible sostener una población tres veces mayor que la existente.

La séptima y última meta era la Reforma Administrativa, para avanzar más de lo que ya se había caminado en el proceso de regionalización del país y para desburocratizar al máximo la administración pública. Esta tarea respondía a la concepción de Estado subsidiario contenida en la Declaración de Principios y tenía por

meta hacer efectiva la libertad de los ciudadanos, disminuyendo la tuición estatal en beneficio de la iniciativa privada y poniendo al aparato gubernamental a su servicio.

Este proceso modernizador constituía una magna tarea, dada la magnitud de las actividades que implicaba y porque incidía en el cambio de mentalidad que las Fuerzas Armadas y de Orden se habían comprometido a impulsar en la Declaración de Principios tantas veces aludida. Es evidente que no podían llevarse a cabo íntegramente en un solo período presidencial, pero marcaban el rumbo a los futuros gobiernos. El presidente Pinochet volvió a ocuparse en incontables oportunidades de estas siete tareas fundamentales e hizo de ellas la columna vertebral de su período constitucional.

El tema de fondo en todas ellas, como puede percibirse sin mayor dificultad, es el de la libertad de las personas. Para afianzarla es que se hacía necesario redefinir claramente los lazos entre el Estado y la sociedad, ampliando esta última en la medida en que disminuía el poder político.

En otro nivel de inquietudes, mediante las siete modernizaciones se buscaba crear las condiciones para hacer efectivo un mayor grado de soberanía nacional. Para ser independientes no basta una bandera y un color particular en el mapamundi: hay que tener la voluntad y la capacidad de sostenerse por sí mismo sobre el planeta. No es ésta una actitud parroquial ni se trata de vivir de espaldas al mundo. Por el contrario, hay que participar activamente en su flujo de intercambios, pero para hacerlo con provecho hay que tener algo que decir y algo que ofrecer a los demás.

Dado que la mayoría de las naciones había dado crédito a los antecedentes negativos divulgados por la propaganda y desinformación del marxismo internacional, no fue posible alcanzar un nivel de relaciones intergubernamentales como habría sido de desear, a pesar de lo cual la integridad de la posición de Chile en el mundo no sufrió menoscabo alguno. Quizás no se nos quería demasiado, pero se nos respetaba. Lo cual, ciertamente, es preferible a estar en la relación inversa. Sin embargo, por razones de mutua conveniencia, los contactos financieros y empresariales con corporaciones extranjeras llegaron a tener un desarrollo como nunca antes se habría imaginado el más optimista de nuestros compatriotas. De hecho, la incorporación a lo que ahora se denomina globalización ocurrió en aquella época.

Lo anterior se dio la mano con el proceso de privatizaciones desarrollado por el Estado de Chile, con el adecuado tratamiento de apertura y garantías a las inversiones extranjeras y con el fomento a las exportaciones no tradicionales, todo lo cual estaba dando sus primeros frutos al iniciarse la transición. De esta suerte, la apertura que partió primero en los planos económicos y financieros permitiría su progresiva ampliación a los planos sociales, culturales, políticos y militares.

En la dimensión internacional de Chile, naturalmente lo más importante era conservar la paz con los Estados limítrofes. La verdad es que una guerra externa parecía ser entonces la única eventualidad que podía entorpecer seriamente el acelerado desarrollo del país y comprometer las decisiones adoptadas para su modernización. Durante la transición el esfuerzo se centró en lograr un Tratado de Paz y Amistad con Argentina, objetivo que se cumplió en 1984. A ese resultado contribuyó el desenlace de la campaña del Atlántico Sur, sostenida entre la nación vecina y Gran Bretaña. Si el

resultado hubiese sido otro, probablemente Chile se abría visto envuelto en un conflicto cuyas consecuencias son de imaginar. Respeto a Perú y Bolivia, se procuró distender las tensiones sin descuidar la vigilancia.

Lo anterior no debe llevar a pensar que estabilizar la situación vecinal era la única dificultad que Chile tendría que enfrentar en los años siguientes, pues dos nubarrones bastante densos se hicieron presentes a poco andar la transición: una recesión económica de carácter mundial, cuyas consecuencias se harían sentir aquí con enorme rigor y la intensificación de la agresión soviética, empeñándose directamente o por medio de su satélite cubano en una escalada terrorista que culminaría con el intento de asesinato del cual sería víctima el propio Jefe del Estado.

Para hacer comprensible el sentido de la embestida del comunismo internacional sobre Chile en esta época, se hace aconsejable dar un pequeño rodeo. En 1977 el conde Hans von Huyn publicó en Alemania un libro cuyo expresivo título era *Victoria sin guerra*. Su autor sabía de lo que hablaba: diplomático de carrera, se dedicó luego a la política y por diez años, desde 1976, fue miembro del Comité de Relaciones exteriores del Bundestag. En su opinión, "vivimos una paz que no es tal. En realidad la tercera guerra mundial ha comenzado ya. No se trata de la gran guerra que todos los seres humanos temen, con ataques nucleares alternados entre el Este y el Oeste. No es la guerra en que los soldados marchan con sus toscas botas, sino más bien una lucha que se libra con las manos enguantadas. Es el avance por medio de la subversión y la infiltración, el espionaje y la desinformación. Es la guerra por sustitutos y terroristas. Es una guerra civil universal. En el lenguaje partidista marxista, esto se denomina "lucha de clases a nivel internacional". Es el avance de Moscú hacia el dominio del mundo. Esta guerra no se libra a pesar de la "política de distensión", sino que, de acuerdo a la doctrina marxista-leninista, constituye parte integrante de la política de "coexistencia pacífica"".[11]

Pues bien, aunque la agresión soviética en contra de Chile persistía de manera implacable en el terreno de las diatribas y en su negativa influencia sobre los gobiernos que le temían, en cierto modo se tornó más peligrosa cuando murió Leonid Brezniev y las circunstancias descritas por von Huyn principiaron a tomar otro cariz.

En efecto, la esclerosis de esos años fue haciendo evidente que el comunismo soviético tenía el sol a sus espaldas En los últimos años la Unión Soviética había mostrado una faz arrogante y satisfecha de sus logros, pero su población no podía compartir tales sentimientos: estaba literalmente en la miseria. Durante el mandato de Brezniev el potencial militar de la Unión Soviética se había intensificado más allá de lo que podía sostener su economía, lo que acarreó desequilibrios que se tradujeron en la virtual parálisis de la vida cotidiana en el país y en una crisis del régimen. Coetáneamente, la actitud estratégica de Occidente se modificó sustancialmente desde el momento en que Ronald Reagan ocupó la presidencia de Estados Unidos. Como no creía que el avance del comunismo ruso sobre el mundo fuera algo indefectible, se dispuso no sólo a contenerlo, sino a destruirlo. Para él carecía de sentido tener por objetivo de la políti

11 HANS VON HUYN, op. cit., p. 1.

ca exterior americana la coexistencia pacífica con lo que llamó "el Imperio del mal". En el Papa Juan Pablo II encontró a un aliado que, desde una perspectiva moral, pensaba lo mismo.[12] Víctima de sus propios errores y presionada desde el exterior en un grado al que no estaba acostumbrada, la Unión Soviética inició el veloz declive que le llevaría a su disolución. Por la rigidez de sus propias premisas ideológicas —además ostensiblemente erróneas— el sistema era irreformable. Por eso se hundió con todo el equipo puesto. Pero eso no quiere decir que los comunistas estuvieran dispuestos a resignarse sin más a ocupar un oscuro rincón en la historia. A muchos de sus dirigentes debía parecerles inconcebible lo que estaba ocurriendo subterráneamente. Porque en la superficie todo siguió más o menos igual durante un tiempo. Ocupaban aun media Europa, pero no ocupaban una cuota similar en el corazón de su propio pueblo. Incluso Gorvachov, que conocía bastante bien la realidad, asumió proclamando su fidelidad a los dogmas y consignas leninistas. No; sin duda intentarían resistir; estaba en juego su propia sobrevivencia.

Chile era apenas un campo de batalla secundario en esa tremenda conflagración, silenciosa pero igualmente mortal para alguno de los bandos que hacía medio siglo se enfrentaban. Sin embargo, los coletazos del monstruo en agonía podían hacerle un considerable daño. De hecho, era un blanco tentador para demostrar que todavía conservaba la energía y el poder necesarios para imponerse. Le habíamos desafiado al sacudirnos sin ayuda de nadie su tuición de hermano mayor y el valor ejemplar de nuestra recuperación era una herida en su lomo, quizás pequeña, pero infamante. El inicio de la transición, esto es, lo que parecía ser el comienzo de la serena consolidación de un orden político en el que los comunistas no tendrían importancia alguna, no podía menos que irritar esa vieja llaga. Y, en efecto, la postura del Partido Comunista local cambió súbitamente. Si hasta entonces la violencia subversiva había sido encomendada al MIR y otras formaciones menores, ahora intentarían el control de la oposición para imponerle su política militar.

Para comprender las razones de este viraje era imprescindible dar una mirada al panorama internacional. Corresponde ahora dar las razones de la oposición en el país y ello debe hacerse desde sus propias fuentes.

La oposición comprendía cabalmente el significado de la nueva institucionalidad. El éxito de su progresivo despliegue hacía añicos sus sueños de volver a detentar el poder. Según uno de sus más competentes analistas, el punto al que deseaba llegar el gobierno presidido por el general Pinochet, un "Estado reducido, es, en esta concepción, un Estado más fuerte no sólo por ser más manejable burocráticamente sino, porque evitará la proliferación de actores políticos presionando para influir en decisiones que ya no pertenecerán a su ámbito. Es decir, lo que se reduce es la esfera de la política". Pero el éxito final del nuevo orden de cosas dista mucho de estar asegurado porque "la viabilidad de este proyecto depende del cumplimiento de varias condiciones además de la estabilidad y larga vigencia del régimen militar. Señalemos al menos tres que parecen especialmente importantes. La primera y esencial es la transforma-

12 La discreta pero intensa relación mantenida entre Ronald Reagan y Juan Pablo II está extensamente tratada en CARL BERNSTEIN y MARCO POLITI, *Su Santidad*, Editorial Norma, Bogotá, 1996.

ción real de la sociedad en todas sus esferas en términos de los principios de competencia mercantil, reducción del ámbito estatal y atomización de la demanda. Ello no implica sólo la institucionalización de estos principios en cada esfera sino su plena maduración en un nuevo tipo de relaciones sociales, es decir, éxito en la dimensión reorganizadora. Las otras dos se vinculan a aspectos propiamente políticos y se refieren a la creación de una nueva clase dirigente sucesora del régimen militar y con expresión política autónoma y a la cooptación si no del centro político o parte de él, al menos de núcleos importantes de su base social: los sectores medios". De ahí que, en un sentido muy diferente a lo que por años se había especulado en los círculos académicos norteamericanos sobre el nuevo autoritarismo latinoamericano o neopretorianismo, lo que efectivamente surgía en Chile no se encaminaba a un régimen militar, aunque lo necesitaba como fase intermedia. Ello porque el modelo en vías de proyección ha "plasmado y armonizado las concepciones neoliberales de la sociedad como mercado, las críticas en boga a la "ingobernabilidad de la democracia" y los elementos claves de la ideología de "seguridad nacional". Su diferencia radical respecto del Estado de compromiso y del régimen imperante en Chile hasta 1973, estriba en que ya no intenta basar su estabilidad en el consenso a través del sistema político partidario, sino en una adecuación entre una sociedad civil transformada y un sistema institucional "connatural" a esa transformación y resguardo por el poder militar. Pero se trata de una apuesta a largo plazo y donde los obstáculos son enormes. (...) Por un lado, la extrema vulnerabilidad de la base material o económica y sus limitaciones tanto en su capacidad de crecimiento como en su dinámica redistributiva. (...) Por otro lado, las transformaciones estructurales e institucionales pueden imponerse, pero no garantizan directamente un cambio en los sistemas valorativos y en las adhesiones. El tiempo de maduración debería alcanzar para ello a una generación completa y aun así no estaría asegurada la adhesión a los valores de un nuevo orden aunque se participara en él".[13]

Una vez despojado del debido tributo a las formas ideológicas, el estado de situación descrito por Garretón resulta ser bastante exacto. La historia se estaba escribiendo sin que se tomara en cuenta a los revolucionarios de ayer. Salvo para recordar, de cuando en cuando, por qué había sido necesaria la intervención militar. Entonces, ¿qué podía hacer una oposición que no se resignaba a carecer de futuro?

Para diseñar desde la izquierda una estrategia destinada a frenar el proyecto institucional en curso había que considerar algunas cuestiones previas. Por ejemplo, que antaño "el conjunto de sujetos y actores sociales se constituyó a través del sistema político, con una debilidad relativa y escasa autonomía de las organizaciones de la sociedad civil y con el privilegio consiguiente de una clase política amplia, expresada en un espectro político partidario diversificado, que hacía de nexo entre las organizaciones sociales y la organización política, ligando estrechamente ambas, y cuyo referente de acción era el Estado". Como los militares aventaron ese sistema, "se hace necesario enfrentar un nuevo modo de constituir sujetos sociales, es decir, de hacer política". En segundo lugar hay que tener en cuenta que "la oposición política se ex-

13 MANUEL ANTONIO GARRETÓN, op. cit., pp. 20 y 21.

presa en un espectro partidario que ha sido heredado del régimen democrático previo al régimen militar, y no de un sistema de organizaciones políticas nacidas durante el régimen militar. Ello implica que las dinámicas de adaptación, las evoluciones estratégicas, las reformulaciones teóricas, la recomposición de las formas organizacionales, deben hacerse desde estructuras y aparatos que fueron creados en otro contexto económico, político y social, que correspondían a una determinada estructura de clases y estratificación que ahora ha cambiado, que tienen una inercia y dinámica de reproducción relativamente autónomas de los cambios en la sociedad. (...) Los dos rasgos indicados, junto a los elementos de reorganización social por parte del régimen militar permiten entender el fenómeno de disociación de los ejes de acción de la oposición política", con lo cual alude a dos características centrales de la oposición al régimen militar, a saber, el reemplazo del debate estratégico por lo que denomina el mito de la caída inevitable de la dictadura y, la identificación de la recomposición organizacional de la sociedad civil con la reconstrucción del aparato partidario. En consecuencia, "todo ello privilegió el tema de los frentes y alianzas entre actores políticos ya constituidos y, a la vez, la subordinación de la izquierda a la evolución del centro político, la democracia cristiana".[14]

Según explica Garretón, la institucionalización parcial del régimen después del plebiscito canceló una etapa de la oposición caracterizada por los rasgos recién apuntados. En la que a partir de allí se abre, los temas serán "la violencia y la insurrección de masas, puesta en el tapete por el partido comunista", y el cuestionamiento de "la existencia ya asegurada, más allá del descontento generalizado, de verdaderos sujetos sociales de oposición sin los cuales cualquier debate estratégico o cualquier alternativa posautoritaria no pasaría de ser una fórmula limitada a las cúpulas organizacionales". De ahí que "tanto el problema estratégico como el de la reconstitución de sujetos y actores sociales tienden a transformarse en los ejes predominantes de la oposición en el periodo posterior al plebiscito de septiembre de 1980".[15]

Con todo, hasta el momento en que Garretón escribe (1982), no es posible hablar de una oposición homogénea. Ello porque como se verá los problemas señalados ocurren de distinta manera en la democracia cristiana y en la izquierda marxista.

En el caso de la democracia cristiana —continúa Garretón— "las profundas transformaciones de los sectores sociales que normalmente representó, la heterogeneidad de éstos, la naturaleza de su clase política y de su organización, preparadas para actuar y reproducirse en un régimen político abierto de tipo electoral y con acceso al aparato del Estado, plantean un interrogante profundo sobre su capacidad de representación más allá de la natural capitalización que pueda hacer de la Iglesia católica en este período. Todo ello unido a su tradicional mesianismo de centro que la impulsa al aislamiento político y a rechazar los entendimientos estables con la izquierda, lo que permitiría entender su urgencia en la búsqueda de espacio político mínimo, sin el cual ve amenazada su viabilidad organizacional. A su vez este imperativo choca con los requerimientos de la unidad partidaria. La problemática de la izquierda puede

14 *Idem.*, pp. 22 y 23.
15 *Idem.*, pp. 23 y 24.

ser formulada de manera distinta, como la combinación, a partir de un espectro partidario altamente fragmentado aunque con tendencia a cierta recomposición, de su modelo clásico de acción política (partido leninista que representa unívocamente una clase económicamente definida cuya acción se orienta tanto a la reivindicación frente al Estado como a la preparación para su conquista y con una teoría que fija leyes universales a la política) con una matriz emergente de acción que busca recoger las transformaciones ocurridas en el período y donde el énfasis se da en la constitución de un sujeto popular no limitado a una clase particular, con formas de organización política que desbordan el partido de cuadros y con un referente ideológico que combina muy diversas vertientes de pensamiento. (...) A ello debe agregarse que el debate estratégico sorprende a la izquierda y al conjunto de sus organizaciones en este momento de recomposición, también en el momento en que los descontentos sociales con el régimen militar se multiplican pero sin hallar aún la propuesta alternativa coherente que los encauce".[16]

Con lo dicho queda expuesto el sentido y alcance que el gobierno y la oposición atribuían al período de transición. Uno quería terminar la obra fundacional emprendida desde el mismo 11 de septiembre de 1973; la otra, impedirlo a toda costa, para lo cual debía modificar su actitud en varios aspectos. Como se expondrá de inmediato, los efectos de la recesión económica mundial, combinados con las exigencias de la estrategia militar comunista, crearán la coyuntura en que se producirá el choque entre los esfuerzos gubernamentales y la resistencia a los cambios por parte de la oposición. Esos esfuerzos divergentes constituirán la dinámica de esos años de transición.

El impacto político de la recesión económica.

Como consecuencia de una errónea apreciación política, tal vez adoptada en el nivel que coordinaba a las internacionales democristiana, socialista y comunista, los dignatarios de la oposición en Chile se ilusionaron creyendo que la gran recesión mundial, cuyos primeros signos advirtió el público chileno a mediados de 1981, podría ser aprovechada políticamente. Los efectos de la crisis fueron especialmente severos durante los dos años posteriores pero la situación fue estabilizada y al finalizar 1985 estaba prácticamente superada. A partir de ese momento y hasta el término del período constitucional del presidente Pinochet, la economía del país creció a un ritmo que jamás había conocido, recuperando el terreno perdido durante la recesión y avanzando establemente mucho más allá. Lo notable es que no se trataba únicamente del crecimiento de una economía en términos macroeconómicos, sino que ese resultado estaba ligado a mayores espacios de libertad para el ciudadano porque, en el fondo, lo fortalecido era la sociedad civil.[17]

Hecho el balance respectivo, se suele aceptar sin mayor discusión que para Latinoamérica los años '80 fueron desde el punto de vista económico una década perdida. La excepción fue Chile. No porque haya sido ajeno a la severa crisis, sino porque la resolvió con un conjunto de medidas inteligentes, bien concebidas, sin comprome-

---

16 Idem., p. 24.

17 Véase JOAQUÍN LAVÍN y LUIS LARRAÍN, *Chile. Sociedad emergente*, Editorial Zig Zag, Santiago, 1989.

ter la vigencia del modelo económico liberal con las estrictas medidas que en algún punto fue necesario adoptar para superar la emergencia. Así, una vez que lo peor de la tormenta pasó, la nave siguió el curso de navegación adoptado mucho antes, al salir de su puerto. Los otros países, en cambio, por razones que admiten ser calificadas de políticas si se usa esta voz en su sentido peyorativo, prefirieron sacrificar el bienestar a largo plazo de la población a cambio de no perjudicar demasiado la popularidad inmediata de sus gobernantes. No lograron el resultado esperado: los contemporizadores fueros barridos por grupos generalmente más demagógicos que agravaron la situación y la miseria de su población más desvalida se tornó crónica. Con años de retraso y diversa intensidad fueron adoptando las medidas correctas... las que en su día había tomado el general Pinochet, con lo cual Chile pasó a ser considerado *el modelo.* [18]

La impotencia de los sectores políticos que inútilmente se habían opuesto a la ratificación popular y subsiguiente puesta en marcha de la Constitución de 1980, vieron en la recesión económica su oportunidad. Después de todo, medio siglo atrás, el general Carlos Ibáñez del Campo había optado por dejar la presidencia ante los disturbios provocados por los efectos de la anterior crisis mundial, la de 1929.

A la oposición más radical, todavía anclada en las concepciones ideológicas que lucía en 1973, le era forzoso evitar que el Gobierno Militar pudiese materializar los anunciados proyectos de modernización sectorial, que como se ha dicho iban de la mano con su decidida voluntad de avanzar hacia una realidad nacional más próspera y también más libre por la gradual puesta en marcha de la democracia. Ese imperativo ideológico se tradujo en un conjunto de acciones tendientes a desestabilizar al país. Había llegado la hora de derribar a un gobierno que les estaba arrebatando sus tradicionales banderas de lucha y que contaba tras de sí con la abrumadora mayoría de la población, como lo había demostrado el reciente plebiscito. Si su proyecto institucional se afianzaba ocurriría una catástrofe: las fuerzas políticas que habían protagonizado la década revolucionaria no tendrían ya muchas posibilidades de ser alternativa de poder en el futuro. De ahí la decisión de emprender una ofensiva que no cejaría para desacreditar, entorpecer y finalmente deshacer al gobierno que legítima y legalmente estaba en funciones. Aplicando una táctica que pertenece al patrimonio del marxismo-leninismo, el comunismo decidió impulsar sus propios objetivos agudizando las dificultades provocadas por la crisis económica y alineando al efecto a las fuerzas opositoras que tenían mejor carta de presentación ante la opinión pública nacional e internacional.

Nadie medianamente informado podía ignorar que la idea-fuerza esgrimida por la oposición, esto es, el retorno a la democracia representativa, coincidía con los propósitos del gobierno y así estaba establecido en la propia Constitución. De esta suerte, lo que había que hacer era tomar las medidas técnicas conducentes a superar la recesión y, mientras ellas rendían fruto, ayudar a los más pobres a paliar sus devastadores efectos. En esas circunstancias la cesantía es lo peor, tanto por razones psicológicas como morales, de manera que se inició un gigantesco plan de empleo, administrado

---

18 Sobre el determinante rol cumplido por el general Pinochet en la superación de la crisis, véase ARTURO FONTAINE ALDUNATE, *Los economistas y el presidente Pinochet*, Editorial Zig Zag, Santiago, 1988.

por los municipios, que aseguró a todos un ingreso mínimo e indispensable para capear el temporal. Puede objetarse que el auxilio a los más débiles fue insuficiente, pero es un dato de la realidad que en tales circunstancias todo lo que se haga parecerá poco al que sufre y será tenido en nada por los que están bien pero ven las cosas con anteojeras ideológicas. Eso está en la naturaleza inconmovible de las cosas y de los hombres. Para comprender el valor de lo hecho por el gobierno encabezado por el general Pinochet para enfrentar esa adversidad, puede ser útil citar una reciente opinión de César Barros, presidente del First Investment Trust. Interrogado sobre qué medidas podrían ayudar a Argentina para salir de su actual recesión, respondió: "Lamentablemente no hay medidas de corto plazo que en forma mágica saquen al país del desempleo. Sí las hay en el largo plazo, como son la flexibilización laboral, la reducción del costo de la mano de obra y la privatización del sistema de salud, entre otras. Cabe recordar que en Chile, en 1983, la oposición de la época proyectaba que el desempleo se reduciría en no menos de 20 años. La verdad es que con un manejo de políticas laborales inteligentes se recuperó en menos de tres años". [19]

Por cierto, ese modo de razonar era anatema para el infantilismo económico de la izquierda más vociferante. ¿Qué habrían hecho ellos si en esos momentos hubiesen tenido responsabilidades de gobierno? Las fuerzas políticas que un día se sintieron llamadas a iniciar aquí un gran proceso de cambios estructurales, carrera que por la propia dinámica que le impusieron sus conductores devino en revolución marxista, habían recibido un país sano en sus aspectos financieros y productivos; cuando acabaron su tarea el país estaba en ruinas. Ese era, objetivamente, su pedigree. ¿Podía tener sentido hacerles caso respecto a cómo enfrentar una terrible crisis económica?

La herramienta a que podrían echar mano para capitalizar en su favor el descontento popular que la magnitud de la crisis no podía menos que suscitar, era intensificar sus acciones encaminadas a desprestigiar al gobierno. No les había ido mal a los comunistas en su campaña de propaganda fundada en la presunta violación de los derechos humanos de los combatientes que ellos monitoreaban con absoluta frialdad. Para lograr sus propósitos necesitaban dar forma a una ofensiva total, una de cuyas tenazas se materializaría con la acción propagandística nacional y externa y la otra mediante el incremento de la violencia física ejercida por sus grupos subterráneos y los de los numerosos ingenuos e inconformistas a los que moverían como carne de cañón en protestas masivas convocadas al efecto. Las fuerzas encargadas de resguardar el orden y la seguridad pública, en el fragor de las escaramuzas, podrían producir víctimas... los mártires que necesitaban para exhibir ante el mundo la represión de la dictadura. ¡Esa fue el curso de acción inmoral y maquiavélico concebido por los comunistas! Para no ser menos revolucionarios, luego fueron secundados por los izquierdistas de todos los tonos del color rojo; incluso, de hecho, por la Democracia Cristiana, pues, aunque en tanto partido siempre se cuidó de afirmar su disgusto por la violencia, les siguió la corriente en una escalada donde apenas era velada la corrosiva presencia del marxismo.

---

19 Qué Pasa n° 1328, 21.9.96, p. 65.

Los líderes de la oposición sacaron cuentas alegres. Pensaron que gracias a la difícil situación planteada por la recesión económica el gobierno perdería su popularidad y, si se le empujaba, caería. Había llegado el momento de convocar a un paro nacional para que el desplome se produjera. Fue anunciado para el 11 de mayo de 1983. En cuanto detención generalizada de actividades, fracasó; pero, como advirtió Hermógenes Pérez de Arce, "hubo un ambiente de protesta, cuya magnitud, sin ser extraordinaria ni alarmante, parece dar a entender una expresión de descontento de sectores importantes de la opinión pública".[20] El presidente Pinochet se dirigió al país el 19 del mismo mes, para fijar la posición del gobierno ante las manifestaciones que estaba creando la delicada situación económica: "Hay otros señores —dijo al concluir su alocución, centrada en las medidas que se estaban tomando para superar la recesión— que tienen ideas alocadas, que desean apresurar el proceso que lleva el Gobierno, a ellos les digo ¡No! La Constitución se cumplirá tal como se señala, tanto en sus períodos como en su senda, el país va a marchar hacia delante, señores, cumpliendo las metas que se fijara el 11 de septiembre y que posteriormente se ratificaran con el Plebiscito Nacional al aprobarse la Constitución Política del Estado. Este avance tiene que ser gradual pero sostenido. No habrá precipitaciones, no se acelerará en forma indebida. Y este avance lo garantizan las Fuerzas Armadas".[21]

Y como no cayó a la primera, creyeron atinado repetir el empujón con fuerzas renovadas. Así, con periodicidad mensual —cada 11, siempre que fuera día hábil, en caso contrario se trasladaba para el lunes siguiente— se fueron dando las protestas. Dado que la espontánea solidaridad exterior se intensificó, contaron con el armamento y los recursos monetarios suficientes para seguir atacando mediante las jornadas de protestas pacíficas, como las bautizaron con sin par hipocresía. Era la resistencia, como se autodenominó para cobijarse en una palabra con resonancias heroicas. Y en esa actitud cerril se mantuvieron hasta el año 1986 —que los comunistas habían proclamado como el año decisivo— sin que pudieran lograr sus propósitos. El gobierno controló los trastornos y siguió administrando al país de manera eficiente, el programa institucionalizador siguió avanzando imperturbablemente hacia su culminación y el general Pinochet permaneció en su puesto. No se movió ni al casillero vecino porque, como entonces dijo alguien con humor, la política y la estrategia se parecen al ajedrez: el rey es la pieza que menos se mueve de su lugar.

Los que no la vivieron y, por el contrario, han tenido la suerte de crecer en un país que ha gozado por primera vez en su historia de tres lustros de ininterrumpido progreso material, tal vez no pueden hacerse una idea exacta del rigor que tuvo en Chile la recesión mundial ocurrida en la primera mitad de los años ´80. Para hacer consistente el propósito de crear las condiciones que permitieran a los chilenos acceder a un alto grado de libertad efectiva, pues la habían perdido durante la década revolucionaria, el Gobierno Militar había liberalizado la economía, reemplazando el añejo sistema dirigido desde el Estado por la iniciativa personal en el marco de una economía de mercado, acogiendo los planteamientos de su equipo asesor en este campo de acción, inspi-

20 La Segunda, 12.5.83.

21 El Mercurio, 25.5.83.

rado en las ideas de la Escuela de Chicago cuyo principal exponente era Milton Friedman, Premio Nobel de Economía. En consecuencia, se había abierto la economía del país y habían afluido grandes capitales, impulsando el nacimiento y desarrollo de muchas nuevas actividades y empresas. El crédito era barato, por primera vez en años había reservas en el erario nacional y la autoridad económica había fijado una paridad cambiaria de $36 pesos por dólar, medida que el propio presidente Pinochet había asegurado se mantendría en el tiempo. Con esos antecedentes a la vista muchos empresarios y ciudadanos corrientes contrajeron grandes deudas en dólares, lo que en cierto modo era inevitable dado el grado de descapitalización en que había quedado el país como consecuencia de los experimentos democratacristianos y marxistas. Este fenómeno de endeudamiento colectivo no parecía preocupar demasiado al equipo económico: en proporción significativa, tanto los deudores como los acreedores eran privados y nadie ha demostrado ser más eficiente que la banca privada para asegurarse las debidas garantías. Además, como repetían con insistencia, la inversión extranjera era el factor que había hecho posible el resurgir de las naciones devastadas por la guerra. Claro es que tampoco faltaban los que se endeudaban para tener el gusto de comprar bienes suntuarios, darse una vueltecita por el mundo o simplemente cambiar de casa, todo lo cual es gasto pero no inversión. ¿Por qué criticarlos? Grandes y pequeños empresarios, los agricultores cualquiera fuera el tamaño de su predio, los profesionales y los comerciantes habían atravesado unos años muy duros y ahora había optimismo. Firmemente conducido hacia unas metas claras y cuerdas, ¡el destino de los chilenos parecía tan venturoso!

Al producirse la contracción de la economía, primero en los Estados Unidos y de inmediato en las grandes potencias europeas, cayeron los precios internacionales y bajó la demanda de materias primas, con lo cual subieron los intereses y se encareció el capital. El flujo de dólares hacia el país bajó notoriamente y por tanto su valor subió. Por respeto a la realidad —una consideración que las mentalidades ideologizadas jamás comprenderán— el gobierno, a pesar de las consecuencias que su medida tendría, se vio obligado a desvalorizar la moneda. En cuestión de meses era imposible servir las deudas porque a medida que la crisis internacional se intensificaba el dólar subía más y más. En rápida secuencia la producción se detuvo, vino una ola de quiebras y la cesantía consiguiente. A la angustia de muchos se sumó la cólera de otros que culpaban al equipo económico de sus dificultades y hasta al Jefe del Estado por haber afirmado que el precio del dólar se mantendría estable. Es verdad que las crisis económicas son cíclicas en las economías capitalistas —y permanentes en las socialistas— pero ese es un muy débil consuelo cuando se está en el ojo del huracán.

La quiebra de la tradicional Compañía de Refinería de Azúcar de Viña del Mar, en mayo de 1981, fue el anticipo de lo que luego ocurriría con otras empresas que hasta el día anterior parecían ser solventes, comprometiendo a los bancos que habían financiado sus operaciones. Lo más dramático fue que el desempleo creció agudamente de un 8% a un 24% entre mediados de 1981 y fines de 1982. Esa durísima realidad cogió de sorpresa a todos. Era demasiado fuerte y repentino el contraste con un desempeño económico que entre 1976 y 1981 había tenido escasos paralelos en el mundo en desarrollo: un crecimiento de 7% anual promedio en términos reales. Por eso el desengaño fue mayúsculo.

Se produjo, pues, una situación con graves consecuencias políticas para el gobierno. Whelan la caracteriza diciendo que como consecuencia del severo golpe sufrido por la economía, hasta entonces su triunfal caballo de batalla, el gobierno estaba "caído, pero no vencido". En efecto, señala, "con el derrumbe económico, los partidos de oposición, fragmentados y cercanos a la desesperación, incluso los demócrata cristianos, ganaron una nueva e inesperada expectativa de vida. Recobraron su confianza gravemente quebrantada y empezaron a consultar y coordinarse unos con otros. Aunque persistían las divisiones, se hacía visible una nueva apertura por parte de prácticamente todos los grupos. Mapucistas, los de la Izquierda Cristiana, socialistas de varias orientaciones, aun los comunistas, descubrieron nuevos méritos en la política democrática y empezaron a hablar de los demócrata cristianos y otras fuerzas burguesas en términos positivos. Los demócrata cristianos, a su vez, saludaron a las nuevas tendencias democráticas de la izquierda, y algunos suscribieron las opiniones de Tomic de una década antes, es decir, que el partido no podía ni debía gobernar sino aliado con las fuerzas populares (léase "de la izquierda")".[22]

Y agrega: "Valdés, cuyas simpatías por la izquierda eran evidentes aun como ministro de Relaciones Exteriores de Frei, rápidamente condujo al partido por una doble pista: la confrontación retórica y después activa con el régimen y el arreglo con las fuerzas a la izquierda del Partido Demócrata Cristiano". Consecuente con su idea de jugar a dos bandas, "Valdés incluso encontró palabras cálidas para Allende. Mientas insistía en que el partido no entraría en ninguna alianza formal ni con los comunistas ni con los elementos que alientan la violencia, como el MIR, Valdés llamó públicamente a la legalización del Partido Comunista, la primera vez que alguien de importancia lo había hecho desde la revolución de Septiembre. Él también patrocinó la creación de un Comité Político Privado (CPP) para que sirviera como un enlace semi clandestino con la proscrita coalición marxista-leninista conocida como Movimiento Democrático Popular (MDP)"[23] ¡Aquí se pudo ver claramente a un sistema de fuerzas operando! Un sistema que combinaba a la oposición retórica con la oposición violenta, coordinadas bajo una misma mano; y no era difícil intuir, bajo la apariencia, de cuál mano se trataba. Esa combinación era la que permitía una eficaz concatenación de impulsos espontáneos.

La verdad es que el problema de qué papel jugar para no desaparecer de la arena política, dado que cientos de miles de personas que alguna vez habían votado por la democracia cristiana se habían plegado al general Pinochet —tanto porque él encarnaba una alternativa clara frente al comunismo, como porque el tipo de sociedad que estaba surgiendo de la gestión militar era la materialización de lo que ellos habían creído ver un día en dicho partido— se fue resolviendo por circunstancias más bien fortuitas. Así, "con Frei desaparecido, Zaldívar en el exilio, y más tarde aún, con la muerte del dirigente moderado Claudio Orrego, no había, de hecho, ninguna barrera importante que impidiera que el Partido Demócrata Cristiano siguiera la estrella que había hipnotizado siempre al grupo más selecto del partido. Después de la expulsión

---

22 JAMES R. WHELAN, op. cit. p. 775.

23 Idem, pp. 776 y 837.

de Zaldívar, su rival, Tomás Reyes —que había luchado por una alianza con las fuerzas ilegales de la Unidad Popular— tomó el control y, por unos pocos meses, radicalizó aún más al partido. En el léxico del partido, la lucha por el poder entre chascones y guatones se resolvió a través del consenso. En realidad, la elección de Gabriel Valdés, en abril de 1982, representaba no tanto el consenso como el triunfo de la principal corriente de izquierda sobre los ultraizquierdistas de Reyes, mientras los moderados del partido estaban demasiado desorganizados y desorientados como para desafiar seriamente a cualquiera de ellos".[24]

Para completar este cuadro, a medida que se profundizaba la crisis económica y cuando la cesantía alcanzaba un nivel que no se había visto aquí desde la primera parte de los años ´30, aparecieron las primeras grietas en la fachada de unidad que rodeaba al presidente Pinochet. El Partido Nacional —con mayor exactitud, un sector muy determinado y ciertamente conspicuo de sus antiguos simpatizantes— comenzó a alejarse y formó más tarde el pequeño Partido Republicano, que de inmediato pasó a engrosar la oposición. Whelan afirma que el Partido Nacional como conjunto comenzó a distanciarse del Presidente, pero esa aseveración debe ser matizada. Efectivamente algunos militantes que se habían distinguido en la lucha contra la Unidad Popular, alguno de los cuales había trabajado directamente a las órdenes del general Pinochet después del 11 de septiembre, se fueron distanciando. Años más tarde, pero todavía en el período de transición, surgió una agria disputa entre quienes se sentían herederos del espíritu y el nombre de la que había sido una formación política respetable. La facción que a fin de cuentas se hizo con "el timbre", sólo fue capaz de conducirlo a su disolución porque los viejos dirigentes que lo acaudillaban demostraron estar completamente al margen de la realidad, que el Gobierno Militar había transformado en el intertanto. El punto no tiene demasiada importancia y se trata de una historia más bien patética, pero interesa en cuanto pone de manifiesto que analistas bien informados, como es el caso de Whelan, no podían distinguir cuánto de realidad y cuánto de fantasía se encubría bajo el nombre de las antiguas formaciones partidistas en esa época.

La verdad es que el gran apoyo al gobierno del presidente Pinochet estaba entre la masa ciudadana, generalmente independiente y totalmente desvinculada del mundillo político. En ello radicaba su fuerza, pues interpretaba a gente de toda condición social, pero cuyas aspiraciones y forma de ver el mundo se corresponden con lo que conoce como consenso de clase media. Pero era también su debilidad, porque esa masa carecía de un instrumento partidista que le permitiera competir en el plano político con la oposición, y el Gobierno militar, por su condición de tal, no lo iba a crear.

Los elementos civiles que ocuparon cargos de responsabilidad durante el Gobierno Militar lo hicieron expresamente a título personal. Ninguno de ellos se podía arrogar la representación de algún partido político. Este fue un rasgo consustancial al régimen. La responsabilidad del nombramiento y del cese —en el nivel político, se entiende — correspondía exclusivamente a las Fuerzas Armadas y Carabineros.

Con todo, es bastante obvio que, con motivo de las medidas que fue necesario adoptar para contener la recesión económica, muchas personas iniciaron un discreto

---

24 Ibidem, p. 775.

giro en sus opiniones. Algunos, porque perdieron la fe en que el gobierno pudiera sobrevivir a los efectos sociales de la crisis económica. Tenían derecho a pensar en su futuro. Otros porque pensaban que los problemas derivados de la crisis podían tener una solución política y por tanto les parecía un error el afán de concentrarse en los aspectos técnicos que se empleaban para abordarla. No faltaban tampoco los que, al desconocer el verdadero origen de las manifestaciones, desórdenes y desmanes a la propiedad privada y pública en que terminaban las protestas pacíficas, generalmente con un trágico saldo de heridos y muertes que lamentar, se sentían aturdidos por las medidas que adoptaba la autoridad para contener los excesos. Los más, porque efectivamente lo estaban pasando muy mal y el discurso gubernamental sólo ofrecía llamados a la austeridad y al sacrificio, mientras la oposición entonaba cantos de sirena... bastaría reimplantar de golpe la democracia para que las apreturas económicas se disolvieran.

Pero la mayoría silenciosa —como se suele llamar a la gente normal y corriente que no atiende a los problemas políticos sino cuando es indispensable— no sólo estuvo lejos de plegarse a la resistencia, sino que permaneció completamente al margen de la pugna por el poder que se desarrollaba entre bambalinas. Era natural que así ocurriese, pero desde el punto de vista gubernamental quizás habría sido conveniente movilizarlas en su apoyo, dándoles a conocer lo que estaba en juego y desenmascarando sin más a los que movían los hilos de los hechos que cada día copaban los noticiarios. Él régimen, en otras palabras, quizás demasiado consciente de tener la razón y de la fuerza moral, legal y material que encarnaba, se vio innecesariamente pasivo y distante de la masa ciudadana.

Contrariando lo que intencionadamente se comenzó a especular, las Fuerzas Armadas y Carabineros se mantuvieron sólidamente cohesionadas, cumpliendo en todo momento sus labores profesionales con abnegación y disciplina. Confundiendo los deseos con la realidad, algunos opositores llegaron a hablar de un inminente quiebre entre los miembros de la Junta, pero jamás hubo tal: la lealtad hacia el general Pinochet —hacia su persona y hacia lo que simbolizaba en el Estado— se mantuvo inalterable. Tampoco prosperó un sibilino intento efectuado para introducir la duda y la desconfianza en las filas, al que se prestó un puñado de oficiales en retiro. En suma, de nada sirvieron los planes de acción psicológica disociadores, elaborados por brillantes expertos y que habían tenido éxito en otras latitudes. Los dirigentes opositores no habían aprendido nada sobre el modo de ser militar, seguían ignorando —como habían ignorado antes de 1973— las complejidades del mundo castrense. Lo que ocurre es que eso no se puede aprender en cursillos; la vida militar, para conocerla, hay que vivirla y sentirla en sus diferentes niveles y realidades.

A modo de síntesis, cabe afirmar que la recesión económica mundial, cuyos efectos sufrió Chile con singular rigor entre 1982 y 1984, creó la coyuntura que hizo posible a la izquierda marxista y a la democracia cristiana adoptar una actitud común frente al gobierno presidido por el general Pinochet. En un momento en que la unidad nacional era sumamente necesaria, resurgió con fuerza el partidismo. De cara a lo que vendría después, los compromisos entonces adoptados entre sus cúpulas alcanzaron enorme importancia. Los dilemas que les planteaba la transición, tanto de orden políti-

co como estratégico, habían sido resueltos: no había que resignarse a un nuevo Chile, era posible insistir en conservar el viejo. Era su única manera de prevalecer. Mientras tanto, a pesar de la adversidad, el gobierno siguió inmutable en su tarea de ir avanzando en cada una de las tareas o modernizaciones que constituían lo medular de la transición. Pero a cambio de llevar adelante esa labor trascendente, el sólido bloque de apoyo popular que había recibido desde el mismo 11 de septiembre comenzó a desgastarse.

La lucha por la democracia.

La batalla de la nación chilena por mantener su soberanía, evitar la disolución en una guerra civil que habría sido atroz y ganarse el derecho a proyectar un mejor destino para las próximas generaciones, comenzó el 11 de septiembre de 1973. Ese día "las Fuerzas Armadas y de Orden rescataron a Chile del comunismo, en los instantes en que éste se aprestaba a cerrar el puño sobre lo que iba quedando de libertad y democracia, tras mil días de abusos, torpezas y excesos de todo tipo, cometidos o provocados por la Unidad Popular".[25] Conducidos por una Junta de Gobierno encabezada por el Comandante en Jefe del Ejército, general Augusto Pinochet Ugarte, asumieron ese mismo día el mando supremo de la nación, recogiendo así el clamor ciudadano que exigía su intervención y el espíritu de las declaraciones de la Corte Suprema de Justicia, la Cámara de Diputados y la Contraloría General de la República, órganos de Estado que de manera inequívoca les habían hecho ver que el caos imperante no podía continuar por más tiempo

Consecuentes con la inspiración esencial de estar prestando un servicio de capital importancia al país —uno más, porque no han hecho otra cosa a lo largo de su bizarra historia— tan pronto como la angustiosa situación internacional, económica, social y militar del país permitió visualizar una salida a la crisis, los mandos de las Fuerzas Armadas y Carabineros se abocaron a la imperiosa necesidad de regular su futura actuación y los pasos que habrían de seguir para dotar a la nación de una normativa constitucional que señalara a la comunidad nacional las reglas según las cuales se refundaría el sistema político democrático. Tanto el camino como la meta quedaron plasmados en la Constitución Política ratificada por la ciudadanía el 11 de septiembre de 1980 y puesta en vigor el 11 de marzo de 1981.

El Gobierno Militar pensó, con lógica, que este proceso sería apoyado prácticamente por la unanimidad de la población y que de haber alguna oposición orgánica ella vendría de grupos pequeños, situados en una clara actitud antisistémica. Jamás se imaginó que gran parte de la gente de izquierda y un significativo porcentaje de la democracia cristiana, que en total sumaban aproximadamente un tercio de la ciudadanía, pudiera ser inducida a oponerse activamente a este paso que representaba, a todas luces, un camino que superaba un pasado del que no podían sentirse orgullosos y conducía directamente a terminar la situación de emergencia institucional que vivía el país, desembocando, tras el cumplimiento de unas metas de innegable bien público y cuyos plazos estaban definidos con precisión, en una moderna democracia.

---

25 RAFAEL VALDIVIESO ARIZTÍA, op. cit., p. 9.

Puesta la situación nacional en esa perspectiva, a contar del 11 de marzo de 1981 cualquier oposición al proceso institucionalizador de la nueva democracia merecía ser interpretada como un gesto antidemocrático y contraria al interés nacional. Más que mal, el camino institucional emprendido era indiscutiblemente legítimo y legal; el presidente Pinochet contaba con un respaldo ciudadano que duplicaba al de la generalidad de los líderes occidentales que le criticaban y nadie en el país, nadie, se le acercaba siquiera en grado de prestigio, respeto y popularidad.

Sin embargo, el presidente Pinochet fue objeto de una enconada campaña montada en su contra —y hay que decirlo así porque durante años los dardos envenenados se han dirigido a él, no a los miembros de la Junta ni a las instituciones castrenses— cuya intención se concretó en una serie de acciones que incluyeron la más variada gama de actividades, desde la simple retórica al artero ataque criminal, pasando por los más sofisticados programas de acción psicológica y de propaganda nacional e internacional.

La dirección de estos esfuerzos, cuyo objetivo final era desconocer la voluntad popular expresada irrevocablemente el 11 de septiembre de 1980, tenía por mentores a varios políticos e intelectuales cuya estrella se había opacado con la intervención militar. En apretado racimo se contaban viejas glorias de la política nacional, antiguos funcionarios del régimen fenecido e incluso algunos eclesiásticos. Todos tenían en común un alto grado de compromiso con lo ocurrido durante la década revolucionaria. Sería ofenderlos pensar que ellos no tenían claro el objetivo perseguido por el gobierno, esto es, restablecer de manera ordenada una democracia política renovada, moderna en su concepción y estable en el tiempo.

Era comprensible que quienes habían capitaneado el desastre que concluyó el 11 de Septiembre de 1973, no se hubiesen convencido aún de lo negativo y anacrónico de sus ideas. Quizás era inevitable su nostalgia. El Gobierno Militar se había adelantando en quince años a la caída del Muro de Berlín, momento a partir del cual no les quedó más remedio que asumir la futilidad de sus ensueños ideológicos. Algunos, muy pocos, conservaron una patética fidelidad a sus banderas revolucionarias hasta el instante mismo en que cayeron al basurero de la historia.

Más difícil de entender fue la actitud de la democracia cristiana chilena, que a cada momento parecía tener mayores diferencias con sus congéneres europeos. Allá, apenas tres décadas atrás, los hombres cuya concepción del hombre y la sociedad se inspiraba en el cristianismo habían hecho suyo el camino en que les habían puesto fuerzas militares de ocupación, vale decir, extranjeras. Aquí no querían saber nada con las fuerzas militares de su propia patria. Y en ambos casos el propósito de los hombres de armas era el mismo: tras una catástrofe, volver a levantar un orden de convivencia democrático. En días ya olvidados, el Partido Demócrata Cristiano había asumido la responsabilidad de constituirse en alternativa al marxismo y más tarde, a pesar de sus desgarros internos, había intentado contener lo que sabía inevitable, es decir, que la Unidad Popular trataría de burlar la democracia representativa para establecer aquí un socialismo real, una democracia popular como la que existía en los satélites soviéticos. De otro modo no se explica su interés en hacer firmar a Allende un Estatuto de Garantías. Cuando Allende dejó en claro que no les había tomado en serio, se plegaron

a la oposición. Más tarde, en 1973, habían comprendido, compartido y apoyado los motivos que habían hecho necesaria la intervención militar. Más allá de toda duda aspiraban a la reimplantación de la democracia. ¿Qué les separaba, entonces, del programa institucionalizador propuesto por el Gobierno Militar y ratificado por la ciudadanía? Sólo el interés partidista. Una vez más su pecado capital, la soberbia, les inclinaba hacia el camino equivocado.

Frente al gobierno presidido por el general Pinochet la oposición tenía que optar por una de estas alternativas: aceptar lealmente la nueva institucionalidad, colaborar en las tareas de modernización y disponerse a competir por el poder una vez que la transición estuviera completa; o rechazarla de plano y resistirla violentamente hasta lograr que las cosas volvieran al estado en que estaban en 1973; o aceptarla formalmente —como una necesidad táctica, para decirlo en palabras de Allende— y tratar de modificarla cuando fuese posible.

No era una fantasía la primera actitud. Como buenos chilenos —y no los hay de otra laya hasta que se demuestre que alguien es traidor— ellos pudieron haber asumido un rol protagónico, trabajando codo a codo con aquel puñado de compatriotas que, sin vacilar, se habían responsabilizado de todo, lanzándose a la reconquista de la libertad y a la reconstrucción del país que a todos favorecía. Situados en ese pie no habría habido inconveniente para aceptar sus observaciones y corregir los defectos que pudiera presentar el sistema porque habrían sido parte del mismo. En el fondo, habría sido reconocer la gravedad objetiva de la situación por la que atravesaba el país en 1973 y la necesidad de superarla ocupándose de las causas que la habían provocado. Desgraciadamente, el dogmatismo ideológico y el egoísmo frustraron esa posibilidad. Las cúpulas de los partidos que un día habían sido revolucionarios no tenían interés alguno en ser parte del sistema porque ello los habría colocado en una relación de subordinación momentánea a los militares, situación que por principio les parecía inaceptable, aunque de hecho y derecho efectivamente así ocurría.

La segunda opción, el rechazo de plano y violento al nuevo ordenamiento institucional, les habría significado colocarse abiertamente fuera de la ley, en una actitud de rebeldía o desafío que si bien podría haber calzado con la parte todavía fiel a la ortodoxia marxista de la izquierda, era incompatible con el interés del sector renovado del socialismo y por completo ajena al temperamento de la democracia cristiana. Un rechazo ciego a la realidad de las cosas les habría significado negarse a sí mismos todas las ventajas que comenzaban a vislumbrarse como consecuencia de la paulatina incorporación al mundo de un país que renacía a la democracia y a la prosperidad gracias al Gobierno Militar.

La tercera vía era la más apropiada para los que querían gozar de todas las ventajas de la democracia, pero no compartir ni enfrentar ninguno de los escollos y responsabilidades que tuvieron que afrontar —y siguen soportando— los soldados, marinos, aviadores y carabineros.

Mirando a su propio porvenir, muchas personas que se sentían llamadas a un gran destino preferían criticar desde sus confortables escritorios la obra que levantaban los que asumieron la tarea de restaurar el daño que otros habían ocasionado a la

nación. Dicho en otras palabras, lo prudente era discutir sin arriesgar el pellejo, aunque de hecho significaba acatar momentáneamente el ordenamiento institucional y al mismo tiempo capitalizar, con doblez, el desasosiego que provocaba la crisis económica y la sensación de inestabilidad que pudieran generar las acciones subrepticias de las formaciones subversivas, empeñadas en derrocar al Gobierno Militar. Era la senda del evitar los inevitables costos... ¡desgastan tanto!. Y fue la alternativa que escogió la oposición.

En el panorama general de la situación de Chile y también en su plano político, lo más importante para el Gobierno Militar era restaurar la patria y asegurar su porvenir. Para los opositores, en cambio, lo prioritario era restablecer sin tardanza los ritos electorales, objetivo que obviamente se encontraba incluido en la meta que se había impuesto el gobierno que presidía el general Pinochet. Cuando los militares asumieron el mando del país en 1973, sólo pensaron en sanar una nación enferma, la suya, cuya supervivencia estaba amenazada, por lo que les habría parecido una insensatez dejarla entregada sin más a la lucha política cuando la única fuerza organizada que subsistía, además de la representada por las instituciones armadas, era la marxista. Luego, uno de los objetivos más importantes del Gobierno Militar fue restablecer la democracia chilena bajo una forma moderna, genuina y eficiente. Pero los políticos de cuño ideológico, en especial los marxistas, han sido maestros en el penoso arte de tergiversar las cosas. Y no trepidaron en presentarlas de una manera tal que los militares aparecían ante la opinión pública como si hubiesen sido ellos los que habían descoyuntado a la democracia chilena.

Tampoco es razonable pretender que los partidos políticos, cualquiera sea su orientación y propósito, tengan el monopolio de democracia. La democracia no es el privilegio de unos pocos ciudadanos que han hecho de la política la razón de ser de su vida y, a veces, su medio de subsistencia. Por supuesto que gritar ¡democracia ahora! puede traer dividendos electorales interesantes; pero si no existen las condiciones morales, sociales y económicas en las que se asienta la democracia política, tales demandas constituyen una grave irresponsabilidad. Algunos dicen que los problemas de la democracia se subsanan con más democracia. Bonita frase, pero no pasa de ser un sofisma.

El problema central de esta tercera vía, como se ve, era de índole moral. El Gobierno Militar trabajaba por hacer posible un régimen plenamente democrático. Para eso era la transición. La oposición democrática podía discutir los plazos o las modalidades del sistema que se estaba institucionalizando, pero no tenía derecho a decir que ellos y sólo ellos eran la democracia. En la medida en que de forma bastante hipócrita afirmaban que se oponían a una dictadura, que es la negación de la democracia, incurrían en una falsedad, en una inmoralidad. Quienes han leído superficialmente a Maquiavelo creen que la moral constituye una esfera absolutamente independiente de la política y actúan en consecuencia. Pero no es así. Hasta Gorvachov lo percibió, aunque posiblemente algo tarde. En la audiencia que le concedió Juan Pablo II el 1° de diciembre de 1989, dijo a ese Papa que traspasa a los comunistas con su mirada porque los conoce como nadie: "En la URSS queremos llevar a la práctica nuestros planes a través de medios democráticos. Pero mi experiencia en cuanto a los sucesos de los

últimos años sugiere que la democracia en sí no basta. También se requiere un código moral. La democracia no sólo puede traer el bien, sino también el mal".[26]

¿Quiénes eran y qué papel jugaba el sector público u oficial del conjunto de fuerzas que integraba la oposición?

Las fuerzas que intentaban la rendición del Gobierno Militar, la claudicación del contenido de la nueva institucionalidad, se estructuraron en un amplio frente que no valía tanto por la cantidad de sus integrantes como por las diferencias cualitativas de los dos elementos que la componían. Había una oposición integrada por los mismos conglomerados que habían protagonizado una acción dinámica durante la década revolucionaria. Se presentaba a la luz pública como razonable, dialogante, pacífica y poseedora en exclusiva de los ideales democráticos. La única formación de los viejos tiempos que no estaba allí y que tenía importancia era el Partido Comunista. Este último, más todas las bandas terroristas, constituían un adversario de diferente entidad, ultraviolenta y carente de toda posibilidad de asumir alguna tarea de responsabilidad en el futuro, es decir, luego de concluida la transición.

Pues bien, ambas agrupaciones, la pacífica y la violenta —para caracterizarlas según sus propios postulados y no según los hechos— actuaban sincronizadamente, como un sistema de fuerzas.

El sistema de fuerzas actuaba, pues, en un doble plano. Pero lo hacía simultáneamente. Presentaba pliegos cívicos arrogándose la representación de toda la ciudadanía, en nombre de Chile, del pueblo, de los sectores democráticos del país, etc., olvidando cuidadosamente el resultado del plebiscito de 1980 y, al mismo tiempo, llamaba a un paro nacional. Decía inspirarse en el método que había desplegado Mahatma Gandhi para liberar a la India del dominio inglés, denominado *satyagraha* o resistencia pacífica, pero simultáneamente desprestigiaba al general Pinochet en el exterior, mostrándolo como incapaz de asegurar la tranquilidad ciudadana, mientras sin el menor remordimiento incentivaba la efervescencia universitaria, volaba torres de alta tensión para oscurecer las ciudades y así creaba las condiciones propicias para todo tipo de desmanes que, por supuesto, creaban una sensación de inseguridad en la población. Para acentuar los efectos de esas acciones, los terroristas llegaron a aliarse con el lumpen: ellos se encargarían de demostrar a los atemorizados ciudadanos quien mandaba realmente en ciertos barrios de Santiago. Porque toda esta actividad se desplegaba en la capital; la normalidad nunca pudo ser significativamente alterada en el resto del país. La idea era aprovechar los medios de comunicación masiva —en rigor, utilizar en su provecho el concepto que predomina en Occidente sobre qué es noticia— para mostrar un país sumido en una crisis de gobernabilidad... que ellos mismos se encargaban de crear. Así, cuántas veces un piquete quemó neumáticos e interrumpió momentáneamente el tránsito, pero ante unos corresponsales extranjeros previamente citados al efecto. Al momento la noticia daba la vuelta al mundo: Santiago ardía por los cuatro costados porque el pueblo ya no aceptaba la dictadura de Pinochet. ¡Y suma y sigue, durante cuatro años!

26 CARL BERNSTEIN y MARCO POLITI. op. cit., p. 511.

Los objetivos de esta operación de acoso no constituían misterio alguno para el gobierno.

Se buscaba, en primer lugar, provocar o exacerbar problemas que ojalá hicieran inevitable la represión policial. De este modo, en cualquier incidente y sin que en absoluto fuera la intención de Carabineros, la población civil podría sufrir bajas, especialmente entre los elementos utilizados como carne de cañón, desgracias que servirían para dramatizar la situación y crear reacciones negativas contra el gobierno, como por ejemplo, acusarlo de violar los derechos humanos. A falta de víctimas de la reacción policial, porque en algunas temporadas escaseaban, los terroristas se encargaron de no permitir decaer la moral de rebeldía mediante la cobarde agresión, incluso con ácido, a pacíficos transeuntes.

Dentro de esta tónica estaba producir crisis que afectaran los servicios de utilidad pública, tales como los sistemas eléctricos, de locomoción colectiva, etc., cuya paralización tuviera efectos multiplicadores en la sociedad. La experiencia nacional indica que cualquier acción sobre ellos genera serios problemas de orden interior, frecuentemente con trágicas consecuencias.

Paralelamente, se alentaba la acción subterránea, destinada a mantener inquietud o incertidumbre en la población, con el propósito de demostrar que a pesar de su gobierno fuerte, el general Pinochet no lograba mantener el orden público, incentivando con esto los aportes de dinero externo para financiar la resistencia en Chile. Sí, les era necesario atraer la atención internacional para facilitar la obtención de recursos no sólo provenientes del bloque soviético, sino de la mayoría de las grandes naciones del mundo democrático.

Para contrarrestar la acción disolvente —y en esto tenían razón los opositores— al gobierno no le sería posible dejar de distraer recursos hacia fines secundarios, ajenos a los esfuerzos esenciales que definían su esfuerzo fundacional e histórico, prioritariamente encaminado a la superación de la extrema pobreza en que décadas de prédica demagógica habían sumido a un quinto de la población.

En la misma línea iba una presión tenaz para someter a la Fuerza Pública a un desgaste físico, intelectual y material que produjera su desmoralización y creara las condiciones para su derrota. ¡Cuántos carabineros de punto fijo fueron asesinados de la forma más cobarde!

Todo lo anterior, para desgastar, frenar y paralizar el esfuerzo de restauración y reconstrucción nacional en que se encontraba empeñado el Gobierno Militar a fin de entregar en el momento previsto por la Constitución un país sólido y estable, capaz de vivir en democracia. Quisieron hacer fracasar al Gobierno Militar mediante un clima confrontacional que creara las condiciones anímicas y materiales para forzar la caída del general Pinochet, es de suponer que mediante la remoción de que habría sido objeto por parte de la Junta en caso de no lograr controlar a las fuerzas desestabilizadoras. ¿De qué otra forma, salvo asesinándolo, habrían podido despojarlo del cargo que constitucionalmente ocupaba?

Cada medida opositora, considerada en sí misma, era bastante inocua en relación a la inmensidad del fin perseguido: derrotar a las Fuerzas Armadas. El sistema de

fuerzas era, pues, lo que provocaba el impacto político de la "desobediencia civil", como llamaban sesudamente a sus bochinches unos niños —y también unos viejos— que ignoraban quién había sido Thoreau. Fue la época de oro del *sitting*... y del *washing*, porque los carabineros no podían menos que disolverlos con sus "huanacos". El asunto podría ser estimado pintoresco y hasta divertido. Cómo olvidar, por ejemplo, lo aburrida que estaba Oriana Fallaci mirando el cambio de guardia de La Moneda desde el Carrera: una de las mayores estrellas del periodismo mundial había venido apresuradamente a Santiago de Chile porque una persona muy conocida la había llamado para decirle que la caída de Pinochet era inminente. Y no fue la única persona que alguna vez viajó de balde. Pero había también un aspecto muy siniestro en las protestas pacíficas: las víctimas inocentes. 142 personas perdieron la vida en las movilizaciones efectuadas entre mayo de 1983 y julio de 1986. Adelantar unas elecciones cuya fecha estaba determinada con precisión y avalada por el honor militar, ¿podían justificar tanto dolor? ¿Valió la pena hacerse un nombre a ese precio? Hay reputaciones políticas que están construidos sobre una base muy triste.

El gobierno, a pesar de la incomprensión y de la mala fe con que fue juzgado por sus opositores durante la transición, resistió todas las maquinaciones y no perdió de vista el objetivo nacional, logrando así afianzar la nueva institucionalidad y dar cumplimiento al itinerario constitucional, paso a paso, tal cual había sido previsto por la Constitución.

A medida que los efectos más agudos de la recesión económica fueron quedando atrás, la fuerza de la realidad se fue imponiendo entre los dirigentes de la oposición convencional, sobre todo en un aspecto central: no era posible doblegar al presidente Pinochet ni menos aún a las Fuerzas Armadas. Era preciso, en consecuencia, poner término al esquema confrontacional y abrir vías de negociación. No les gustaba un régimen militar como solución definitiva a la crisis de convivencia superada paulatinamente a partir del 11 de septiembre de 1973; a los militares tampoco. Desde el primer día habían dejado en claro que el sentido de su intervención era crear las condiciones que permitieran volver a un régimen democrático. Miradas con serenidad, ambas posiciones coincidían en la meta a alcanzar. La diferencia estriba en que se podía correr hacia ella con precipitación, arriesgando el progreso cuyos primeros frutos estaban ya a la vista, o se la podía alcanzar caminando con seguridad, siguiendo una ruta cuidadosamente trazada de antemano.

No es posible fijar con certeza el instante en que la oposición se convenció del agotamiento de la fase confrontacional, aspecto de su comportamiento que como se deduce de la apreciación de situación debida a Garretón y latamente citada más arriba, había tenido por origen el conjunto de problemas internos que la transición planteaba a los grupos políticos desplazados en 1973. Rafael Otano, un meticuloso cronista de esa época, sitúa aquel momento inicial en un seminario organizado por el Instituto Chileno de Estudios Humanísticos —entidad dirigida por Francisco Cumplido que cobijaba a un grupo de políticos e intelectuales democratacristianos, cuyo coordinador académico era Gutenberg Martínez— para debatir, como decía su convocatoria, "Un sistema jurídico-político constitucional para Chile". El seminario, que contó con la participación de personalidades afectas al régimen y de opositores al mismo, se realizó

el 27 y 28 de julio de 1984 en el hotel Tupahue de Santiago y sus ponencias y discusiones fueron recogidas y ampliamente comentadas por la prensa. Como todo acontecimiento escogido para significar el punto inicial de un proceso éste tiene algo de arbitrario, mas no por ello carece de validez emblemática.

En efecto, expusieron sus puntos de vista sobre el tema Alejandro Silva Bascuñán, Carlos Briones, Pedro Correa, Manuel Sanhueza, Francisco Bulnes, Enrique Silva Cimma, Sergio Díez y Patricio Aylwin. Los comentaron José Piñera, Edgardo Boeninger, Jorge Precht, Ignacio Balboltín y Hernán Vodanovic, entre otros. Como se ve, las tendencias representadas eran muchas. Las ponencias discurrían sin demasiada originalidad hasta que el ex Contralor Silva Cimma abrió un frente inédito cuando culpó de la división que existía sobre la salida del régimen al "rigorismo formalista" de los chilenos, "una concepción demasiado principista que hace prevalecer los principios a ultranza, por sobre lo que en un momento dado en la vida colectiva y en la vida política de este país pudiese significar la necesidad de encontrar puntos de encuentro fundamentales para volver a la democracia". En su opinión, concluía, "la salida no puede ser otra que la búsqueda incesante, si se quiere negociada, de un acuerdo político de todos aquellos que se interesan realmente por el pronto retorno de la democracia".

La exposición final estaba a cargo de Patricio Aylwin, quien ocupaba la vicepresidencia de su partido como representante de la tendencia de los "guatones", en una mesa presidida por Gabriel Valdés, líder del ala más rebelde, la de los "chascones". Como recuerda Otano, "ni sus ideas ni su persona tenían en aquel momento mucha audiencia en el partido. Cumplido y Martínez organizaron este seminario, entre otras cosas, para darle una plataforma en que expresar sus ideas respecto a la transición. En la tarde del día 28, Aylwin interpeló dramáticamente a los dirigentes de un país "con el alma trizada". "Vamos camino —decía —de convertirnos en una Torre de Babel, en la que cada cual habla su lenguaje, sin importarle ni entender lo que otros dicen". En esas circunstancias, sólo había dos salidas, según el ex senador decé: o la guerra civil o la solución pacífica, por la vía jurídico política. "Salida jurídico-política será en esta situación —afirmaba don Patricio—, la que logre superar las divisiones sobre la base de descubrir y reforzar lo que nos une y de sacrificar lo que nos separa. Se trata de ser capaces, con realismo, audacia, imaginación y coraje, mediante entendimientos políticos y fórmulas jurídicas, de provocar lo que Ortega y Gasset llama "la unidad de los contrarios"". A esa altura de su exposición, Aylwin introducía su idea más polémica. Explicaba: "Puestos a la tarea de buscar una solución, lo primero es dejar de lado la famosa disputa sobre la legitimidad del régimen y su Constitución. Personalmente —decía — yo soy de los que consideran ilegítima la Constitución de 1980. Pero así como exijo que se respete mi opinión, respeto a los que opinan de otro modo. Ni yo puedo pretender que el general Pinochet reconozca que su Constitución es ilegítima, ni él puede exigirme que yo la reconozca como legítima. La única ventaja que él tiene sobre mí a este respecto, es que esa Constitución —me guste o no —está rigiendo. Este es un hecho que forma parte de la realidad y que yo acato. ¿Cómo superar este impasse sin que nadie sufra humillación? Sólo hay una manera: el eludir deliberadamente el tema de la legitimidad". El silencio compacto de la asamblea se podía cortar con un cuchillo. No era para menos. La tesis propuesta aquel día por Patricio Aylwin introdu-

cía un quiebre conceptual que modificaba toda la perspectiva y el modus operandi de la transición chilena. La redefinía. Pretendía el cambio de régimen, pero aceptando una cierta continuidad de la realidad política oficial".[27]

Al mes siguiente Aylwin participó en otro seminario, esta vez organizado por el Centro de Estudios del Desarrollo, fundado por Gabriel Valdés en 1981 y en este momento a cargo de Edgardo Boeninger. El tema fue "El futuro democrático de Chile". Participaron en éste Ángel Flisfisch, Germán Riesco, Gutenberg Martínez, Eugenio Ortega y Ricardo Lagos, cuyas ponencias fueron comentadas por Tomás Moulián, Genaro Arriagada, Ricardo Núñez, Cristián Zegers, Gonzalo Vial y el mismo Patricio Aylwin. Invocando su participación recién referida, Aylwin apeló nuevamente a un acuerdo civil, de cara a un pacto constitucional, haciendo patente "la necesidad del consenso de todos los sectores que anhelan la democracia". Su conclusión, centrada en una cuestión medular de la institucionalidad, era que "si la salida es negociada y pacífica, la democracia que nazca de ese acuerdo tiene muchas más posibilidades de estabilidad que la democracia que surja, si es que surge democracia, de una confrontación en que haya vencedores y vencidos, lo que probablemente llevaría la polarización a extremos incompatibles con la democracia".[28]

Evidentemente, como apunta Otano, "la línea de Aylwin no representaba el estado de ánimo de la mayoría opositora. Existía un fervor épico en las calles. Este había contagiado al creciente movimiento antidictatorial que rechazaba el esquema aylwinista de un tortuoso camino hacia una democracia incierta. Se trataba, según sus críticos, de una fórmula deshuesada de heroísmo, prescindente de la carga moral que se había ido acumulando, sobre todo entre la juventud, durante aquellos años de rebeldía. Incluso algunos decé pidieron a Gabriel Valdés que desautorizase la propuesta de Aylwin. Valdés prefirió dejar esa puerta abierta. A la larga, las ideas del seminario del ICHEH el CED y otros posteriores pavimentaron el lento camino hacia una propuesta consensual para encarrilar definitivamente la transición. Esa propuesta quedó recogida en el Acuerdo Nacional para la Transición a la Democracia".[29]

Del modo en que se ha expuesto, el realismo se introdujo entre las cúpulas opositoras. Este dato tiene enorme importancia porque, cualquiera lo sabe, en ninguna coyuntura existe acción política verdaderamente actuante al margen de la realidad. Empero, varios de los supuestos en que se basaba ese aterrizaje merecen al menos un comentario. El primer aspecto sobre el cual se debe llamar la atención es que tal reencuentro con la realidad sólo fue posible gracias a la inconmovible voluntad del presidente Pinochet en orden a hacer prevalecer el proyecto institucional y el itinerario de la transición de acuerdo a lo ratificado por la ciudadanía en el plebiscito de 1980. La movilización de los sectores opositores, sus presiones y las muertes que provocaron las protestas pacíficas no hicieron mella en su ánimo. Su posición era sólida: tenía una misión que cumplir y contaba con un inobjetable mandato constitucional para llevarla a cabo. Y no estaba solo en su empeño fundacional; además de la irrestricta

---

27 RAFAEL OTANO, *Crónica de la transición*, Editorial Planeta Chilena, Santiago, 1995, pp., 18-20.

28 Ibem., p. 22.

29 Ibidem.

lealtad de las Fuerzas Armadas y de Carabineros —esenciales para cualquier gobierno— contaba con el respaldo de la mayoría silenciosa del país real, por lo general muy distante de las discusiones que dan vida a lo que se suele llamar clase política. En cambio, el supuesto de la oposición era el desconocimiento de la voluntad popular soberanamente expresada el 11 de septiembre de 1980. Muchos observadores se han preguntado por qué los socialistas y democratacristianos insisten siempre en afirmar que el acto cívico realizado ese día fue espureo a pesar de la evidencia disponible al efecto y de su concluyente resultado. En otras palabras, ¿cuál puede ser el sentido de una actitud tan reñida con la democracia como el olímpico desconocimiento de la voluntad popular cuando es adversa? No basta con dudar de la sinceridad de sus convicciones democráticas, el asunto es de otra índole y tiene que ver con el oportunismo en relación al poder. Para alcanzar el poder la oposición de la época necesitaba diseñar una estrategia cuya condición indispensable era restar importancia a lo que el pueblo efectivamente piensa, dice o quiere. Es, pues, un resabio de la partitocracia. Ellos, los dirigentes, la oligarquía política, son los únicos que saben, los únicos que tienen derecho a interpretar el interés nacional, que así acaba por confundirse con el de los partidos.

Vinculado a lo anterior surge el tema de la renovación de la capa dirigente en una sociedad cuya transformación era evidente. Garretón ha indicado con claridad en su análisis las razones por las cuales la oposición al Gobierno Militar sólo podía ser articulada por el estrato dirigente que existía en 1973 y, en otro plano, por la materialización de la política militar del Partido Comunista y la actividad de los grupos terroristas puestos en línea a ese efecto. Ahora, con la aceptación de un camino no rupturista —se había intentado la lucha frontal y había fracasado— cuya fórmula consistía en lograr algún tipo de acuerdo jurídico-político con el gobierno, los viejos círculos dirigentes, los responsables de una época ya fenecida, se convirtieron en interlocutores válidos de aquél y de ese modo aseguraron su sobrevivencia. Esto permite explicar porqué un régimen político nuevo llegó a ser administrado por las mismas figuras del que le había antecedido. La fuerza de las cosas, esto es, la intensidad de la transformación de las mentalidades ocurrida durante el Gobierno Militar, hizo que muchos de sus conceptos se renovaran, pero el personal siguió siendo el mismo. Las paradojas de la transición chilena, en más de un sentido, son tributarias de lo que se podría llamar "lógica de los conversos", que aplican con entusiasmo o resignación, lo mismo da, principios que en realidad fueron introducidos por sus adversarios.

Un último supuesto que merece ser debatido, porque evitarlo equivaldría a compartir una impresión manifiestamente falsa, es el que fundamenta la conveniencia de llevar adelante una reforma del sistema político mediante una negociación jurídico-política porque esa era la única manera de superar el drama de un país con el "alma trizada", como dijo Aylwin. En aquella apreciación se identifica la parte con el todo, un error muy frecuente al ponderar la realidad social de cualquier pueblo. Para quien debe adoptar decisiones nunca resulta fácil establecer en qué medida los medios de comunicación reflejan la realidad. La estructura misma de la noticia da relevancia a lo que rompe la normalidad, al hecho excepcional. La vida de un pueblo transcurre, afortunadamente, en un nivel bastante más estable, rutinario si se quiere, de las dra-

máticas circunstancias que contiene la prensa. El público se entera por ella de unos hechos ajenos, muchas veces distantes de su experiencia cotidiana, y al contrastarlos con sus propias vivencias se forma una imagen de lo que ocurre en su entorno. Pues bien, lo del alma trizada puede haber tenido algún asidero al interior de los círculos políticos opositores que percibían como un hecho cierto que el tren los estaba dejando en el andén; pero hacerlo extensivo al país era manifiestamente abusivo. Puede haber contribuido a esa falsa impresión el encierro de esos grupos en sí mismos, cuyas inquietudes se retroalimentaban con sus propias actividades, magnificadas en importancia por su prensa, porque, también hay que decirlo, durante la transición existía un margen de libertad que les permitía ventilar sus asuntos sin mayor dificultad. En otras palabras, al margen de la tragedia particular de los cenáculos partidistas, la sensación imperante en el país era muy diferente, mucho más cercano al de un estado de normalidad a veces afectado en Santiago por las expresiones destempladas de algunos actores políticos. Ya existía un consenso nacional que había dejado atrás la época de las divisiones ocasionadas por las revoluciones democristianas y marxistas. Si así no hubiese sido, la posibilidad de un diálogo jurídico-político habría flotado en el vacío y, por tanto, no habría tenido la virtualidad que como se verá efectivamente tuvo. Así, para comprender la dinámica de la transición, el supuesto del alma trizada debe ser reemplazado por el de la existencia de un consenso básico ya sólido, que servía de soporte a cualquier negociación capaz de concretarse en alguna modificación de orden constitucional. El único sector que permaneció irreductible al consenso fue el terrorista, y así se mantuvo hasta ser definitivamente desarticulado, resultado que se alcanzó, justamente, porque su aislamiento moral, social y político llegó a ser absoluto.

De esta suerte, a partir del despertar a la realidad que Aylwin se encargó de formular entre sus pares, se fue afianzando en la oposición el acatamiento de la nueva institucionalidad, una aceptación razonablemente sincera aunque muchas veces matizada por coquetos gestos de rebeldía al interior del sistema. Si hubiese permanecido en su amarga tesitura, la oposición de la época se habría condenado a la impotencia. Fue el oportuno reconocimiento de un límite: no era posible llevar adelante la acción política dando la espalda a un país real que funcionaba a plena marcha y cuyo Estado avanzaba en el sentido que le indicaban las modernizaciones. Se acercaba inexorablemente la hora de las decisiones cívicas que configurarían el futuro inmediato y la oposición había resuelto participar en su construcción.

La inminencia de un tiempo nuevo se palpaba con creciente intensidad a medida que las leyes destinadas a regular la competencia política avanzaban en su estudio y luego eran puestas en ejecución, tal cual lo preveía la agenda del gobierno en cumplimiento a lo ordenado por la Constitución. Habiéndose logrado algo tan significativo como el reconocimiento de la institucionalidad aunque sólo fuera como un hecho de la causa, el paso siguiente era encontrar una instancia que permitiera al estrato dirigente hablar en pie de igualdad con el Gobierno Militar.

Una de las características de la modernidad en Occidente es la secularización, entendiendo por tal la autonomía del ámbito civil respecto al espiritual. En las naciones de Europa que como consecuencia del cisma ocurrido en el siglo XVI se desarrollaron de acuerdo a los postulados de la reforma protestante, esta división muchas

veces fue conflictiva pero sus límites estuvieron marcados con suficiente nitidez. No ocurrió lo mismo donde prevaleció Roma y la Iglesia conservó su antigua posición, especialmente en España, donde se entendió que una de las funciones de la Corona consistía justamente en defenderla y sostenerla. Los Estados sucesores del Imperio en el Nuevo Mundo heredaron esa concepción y por ende la separación entre la esfera civil y espiritual se dio allí tardíamente. A pesar de las fórmulas institucionales, la línea divisoria sigue siendo tenue y a nadie extraña demasiado que los Obispos, por ejemplo, opinen frecuentemente sobre temas con relevancia política. Es verdad que procuran hacerlo desde un punto de vista propio, expresando las enseñanzas que portan el Evangelio y la doctrina elaborada a través del Magisterio, llamadas a iluminar la contingencia de una sociedad cuyos patrones culturales son de raigambre católica. Fue natural, entonces, que como moderador entre la oposición y el gobierno la Iglesia cumpliera un rol importante.

En efecto, la proposición de un Acuerdo Nacional para la Transición a la Democracia nació de una iniciativa del Arzobispo de Santiago, monseñor Francisco Fresno, recién nombrado cardenal. Su talante difería ostensiblemente del de su predecesor, monseñor Silva Henríquez. La época del encandilamiento eclesiástico con el marxismo estaba quedando atrás y procuró rodearse de personas moderadas. Sus operadores en esta gestión, eminentemente patriótica, fueron José Zabala, Sergio Molina y Fernando Léniz. Como dice Otano, "la historia del AN consistió en la voluntad de construir un sujeto coherente y activo entre muchos elementos fragmentados adversarios al régimen o disidentes de él. Se hizo para tener una propuesta colectiva sobre la que negociar con el gobierno de Pinochet una salida pactada. Suponía, en algún modo, asumir las ideas del espectro templado de la oposición, donde se situaban con distintos matices, por ejemplo, Silva Cimma y Cumplido, pero también Núñez y Lagos. Lograba también atraer al sector más dialogante del régimen: Bulnes, Allamand... Pero era el invisible Edgardo Boeninger el cerebro gris. Durante mucho tiempo, desde su centro de operaciones del CED, él llevaba dando vueltas a la idea de concertación política y social y de consenso. Hablaba de "pacto civil", "consensos mínimos", "construcción de una democracia estable", "gobernabilidad", conceptos que se habían socializado en actos académicos, políticos y en numerosas conversaciones privadas. Desde esos supuestos implícitos, se realizó la convocatoria de monseñor Fresno a dirigentes opositores, hecha en la más estricta confidencialidad. La respuesta a ella fue extremadamente positiva y, en medio del pesimismo general de los políticos profesionales, esperanzadora. (...) Sólo habían quedado afuera los comunistas y la UDI. Los primeros, porque se suponía que se habían autoexcluido de este tipo de acuerdos, y los de la UDI, porque no se confiaba en su discreción ante Palacio, Después de muchas vicisitudes, el documento fue suscrito solemnemente en el Círculo Español, el 25 de agosto de 1985. Al día siguiente fue publicado en La Segunda, produciendo gran conmoción. Un acuerdo que abarcaba un espectro tan amplio, creaba un nuevo momento político".[30] A condición, habría que añadir, que el gobierno lo estimase así, cosa que no ocurrió.

30 *Idem.*, pp. 22 y 23.

El 23 de diciembre de ese año el cardenal Fresno concurrió a La Moneda para saludar al Jefe del Estado con motivo de la Navidad. Entonces le solicitó que abriera un diálogo teniendo por base el texto del Acuerdo Nacional. El general Pinochet se limitó a decirle "demos vuelta la página".

Vino luego el año decisivo, como bautizaron los comunistas a 1986. Pero no sólo los comunistas, como asegura la versión escolar que hoy circula sobre lo que fueron esos años: la revista Hoy, de tendencia democratacristiana, aseguraba que si 1985 había sido el año de las conversaciones de paz, 1986 sería "el año del rifle". Toda posibilidad de una negociación entre gobierno y oposición estaba congelada. Jugándose a fondo, intentarían forzar por la fuerza de las armas el término de la empresa de restauración nacional iniciada el 11 de septiembre de 1973. En el parágrafo siguiente se expondrá el sentido de la actividad terrorista. Por ahora baste apuntar que también la apelación a la violencia más extrema se estrelló contra el proyecto institucionalizador conducido por el general Pinochet. Otano lo sintetiza adecuadamente: "Carrizal sepultó la pretensión de un derrocamiento forzoso de Pinochet y mucho más la quimera de implantar el socialismo por la vía rápida. Aunque costase reconocerlo, ésos ya no eran objetivos acordes con el mapa político mundial emergente. Gorvachov, con su perestroika, ya llevaba un año ensayando sus primeros acercamientos a las democracias occidentales y eso trastocaba las viejas estrategias de los bloques". Pocos días más tarde, el 7 de septiembre, al fallar en su intento de asesinar al Jefe de Estado, "las estrategias largamente maceradas por la oposición y sus numerosos expertos en ciencia política se fueron repentinamente a pique. Tres años de depresión económica y de ablandamiento del régimen por medio de la movilización social, anunciaban un último empujón para remover al "obstáculo" a punto ya de caer. La batalla de El Mirador volvió el sueño colectivo a fojas cero. El gobierno se reafirmaba en el itinerario constitucional y enviaba las leyes de partidos políticos y otras. Pinochet salía consolidado y, en apariencia, irresistible. La Junta perdía capacidad de contrapeso. Por primera vez desde la crisis del 81 los distintos indicadores señalaban buena salud de la economía. Los siguientes meses fueron para un restablecido oficialismo un paseo casi triunfal".[31]

El 25 de febrero de 1987 se abrieron los registros electorales y el presidente Pinochet dio el ejemplo inscribiéndose primero que nadie. La carrera hacia el plebiscito que debía realizarse el 5 de octubre del año siguiente estaba abierta. El 10 de junio, la Conferencia Episcopal instó a la población para que se inscribiera en los registros. El 5 de febrero, las fuerzas políticas afines al gobierno, esto es, la UDI de Jaime Guzmán, el Frente Nacional del Trabajo de Sergio Onofre Jarpa y el Movimiento de Unión Nacional de Andrés Allamand, habían acordado fusionarse en torno a cuatro puntos básicos: defensa de la democracia republicana; apoyo a la economía social de mercado; afirmación de una sociedad libre; valorización del 11 de septiembre y de la legitimidad de la Constitución. Estando de acuerdo en los principios, las diferencias personales impidieron que esa combinación política conservara su unidad por mucho tiempo y con ello se privó a sí misma de administrar el régimen político que tanto había contribuido a forjar.

31 Idem., p. 31 y 36.

Las figuras más representativas de la oposición, en cambio, aunque separadas por serias querellas doctrinarias, a pesar que nunca habían confiado por completo en que el cronograma previsto en la Constitución se cumpliría rigurosamente, se unieron al verse enfrentadas nuevamente a una grave decisión. Ya no se trataba de una discusión académica acerca del acatamiento de la institucionalidad simplemente como un hecho de la realidad; forzados por esa misma realidad ahora estaban conminados a participar activamente en el próximo plebiscito y proyectar una plataforma capaz de futuro o quedar definitivamente en el andén. Entre abrirse a la posibilidad de formar parte de la evolución del país o permanecer como abanderados de una postura testimonial que la propia dinámica política se encargaría de sepultar en el olvido, prevaleció el sentido común. Ricardo Lagos se lanzó febrilmente a organizar un partido instrumental, que se plasmó en el Partido por la Democracia. Patricio Aylwin pasó a ocupar por séptima vez la presidencia del Partido Demócrata Cristiano, en una mesa consensuada, asegurando a sus eventuales competidores, Gabriel Valdés y Andrés Saldívar, que no tenía ambiciones mayores; sería su último servicio antes de jubilarse, pues se reconocía parte de una generación fracasada. Le creyeron.

Así, de cara a un plebiscito ya inminente, el 2 de febrero de 1988 se constituyó formalmente la Concertación de Partidos por el No. De este modo, tras un recorrido azaroso, finalmente todo el espectro opositor, desde la Unión Liberal Republicana hasta el Partido Socialista de Almeyda, ingresaba a la lógica de la transición acatando las normas constitucionales en vigor. Su participación en el plebiscito —y con mayor razón su triunfo— acabaron por consolidar el orden político que la ciudadanía había escogido en 1980. La democracia chilena, a partir de entonces, fue una realidad compartida por toda la población, cerrando el círculo del nuevo consenso nacional. En adelante, las nostalgias de la década revolucionaria ya no serían reinvindicadas por nadie.

O por casi nadie, habría que precisar, porque tal como resultaron las cosas sólo quedaron fuera del arco político legítimo los violentistas, es decir, el Partido Comunista y las bandas terroristas.

El terrorismo y la transición.

En nuestro tiempo, el más salvaje embate que ha sufrido la convivencia nacional ha sido el terrorismo. La dominación por el terror, pues en eso consiste, fue una pretensión totalmente ajena al estilo de hacer política en Chile hasta el inicio de la década revolucionaria, de la que debe ser considerada uno de sus elementos configurantes. Pero en relación a este ensayo, que tiene por argumento central la pérdida del consenso nacional en esa época y su posterior recuperación, el terrorismo sólo tiene un interés marginal porque su accionar no está dirigido a dislocar el consenso, ni siquiera a derribar un gobierno determinado: el objeto de su ataque es el Estado.

En tanto medio de acción política, fue inoculado en Chile como instrumento de la acción exterior de la Unión Soviética. Como se ha explicado anteriormente, el equilibrio atómico llevó la lucha a los bordes más lejanos de las zonas de influencia de las

grandes potencias durante la Guerra Fría e hizo surgir este tipo de métodos, que no comprometían directamente a sus mandantes ni eran capaces de generar una escalada que pudiera desestabilizar un área o interés vital. Por eso el terrorismo se expresó con singular fuerza en África y América Latina, y sólo ocasionalmente en Europa. Pero la raíz del fenómeno terrorista no está situado propiamente en la esfera política de los individuos, sino en una zona más oscura y profunda. Tiene que ver con el nihilismo, una actitud vital que niega radicalmente toda creencia religiosa y la validez de los principios políticos y sociales que ordenan la convivencia civilizada. Hay también rasgos psicológicos que considerar. Por ejemplo, analizados los antecedentes de unos 400 terroristas chilenos, se descubrió que ninguno provenía de una familia bien constituida y, quizás por ello, presentaban severos problemas de adaptación y un agudo resentimiento hacia todo y hacia todos. El servicio a una causa, cualquiera sea, que parece acogerlos y estimarlos como seres importantes, les proporciona una razón para vivir. Los rusos, como es sabido, tienen una tradición nihilista que se expresó mediante actos de terror ya durante la época de los zares. Los bolcheviques encauzaron esa energía negativa y la pusieron en línea con los objetivos de la revolución. Así, un Directorio Principal del KGB se encargó de la formulación científica del tema y coordinó sus actividades en todo el mundo. No es de extrañar, en consecuencia, que cuando Chile se convirtió en una ficha importante para la Unión Soviética, en un campo de experimentación para una nueva estrategia destinada a expandir su poderío, el terrorismo de inspiración marxista-leninista se haya hecho presente, instalándose por tres décadas como un factor político imposible de ser ignorado.

Antes de 1965, no se conoció en Chile el terrorismo como medio de acción política. Ese año, en Concepción, nació el Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR). Su estreno, el primer caso de violación de los derechos humanos, afectó a un periodista de esa ciudad, Hernán Osses, quien había comentado, fuerte y claro, la potencial peligrosidad de esa nueva expresión política. Fue secuestrado por miembros de aquella organización y retenido por unas horas. Se le vejó y más tarde fue arrojado, desnudo y rapado, en medio de una asamblea de estudiantes de izquierda. Con posterioridad y hasta 1970, los grupos operativos del MIR se especializaron en el asalto a bancos y robos a mano armada, materializando lo que ellos llamaban expropiaciones. Nada nuevo hay bajo el sol; como se ha dicho en la primera parte de este libro, el método fue inventado por las células bolcheviques a comienzos del siglo y justamente en esa actividad se dio a conocer un joven taciturno, ex seminarista, llamado a hacer carrera: Stalin. Confiados en la impotencia del gobierno democratacristiano, que por sus problemas internos no estaba en condiciones de reprimirlos con energía, pudieron prosperar y fortalecerse a pesar de constituir una amenaza para la sociedad y para el régimen democrático.

Salvador Allende fue más lejos. Él estaba comprometido hasta el cuello con el movimiento terrorista que la Unión Soviética impulsaba en Latinoamérica a través de Cuba, Nada más lógico, entonces, que la decisión que tomó apenas llegó a La Moneda: los indultó. Durante la Unidad Popular, el terrorismo fue ejercido por el MIR y otros grupos surgidos al alero del Partido Socialista, los que complementaron la acción gubernamental encaminada a alcanzar el poder total. Lo malo para Allende fue que se

entusiasmaron demasiado con su papel y acabaron por salirse del libreto, convirtiéndose en los causantes inmediatos de su caída. Para quien haya preferido olvidar esa época e imaginar que el problema de los derechos humanos tiene data más reciente —como lo hizo el Informe Rettig— van de inmediato cuatro nombres de víctimas emblemáticas: el ex Vicepresidente de la República Edmundo Pérez Zújovic; el capitán de fragata Arturo Araya Peters; el cabo de Carabineros Exequiel Aroca Cuevas; el subteniente de Ejército Héctor Lacrampette Calderón.

Ocurrido el Pronunciamiento Militar y vencida la resistencia que opusieron los grupos violentistas más recalcitrantes, los elementos que no se asilaron se sumergieron en la clandestinidad. En 1978 el MIR volvió masivamente a la carga, iniciando lo que llamó "resistencia ofensiva", contando con la colaboración entusiasta del Partido Comunista y base en Cuba. También participó en algunos hechos protagonizados por ETA en España a comienzo de los ´80. Estaba, sin duda, bien integrada a la internacional terrorista. Pero tuvo que poner fin a sus actividades en 1983, al ser infiltrado y desarticulado por la Central Nacional de Informaciones (CNI). Ocupó su lugar el brazo armado del Partido Comunista, esto es, el Frente Patriótico Manuel Rodríguez (FPMR), lo que no impidió que posteriormente, aunque en menor escala, todavía mostrara alguna actividad.

Algunos bien pensantes han dudado que el Partido Comunista de Chile haya estado comprometido en cuanto tal con el terrorismo durante la transición y no se cansan de abogar para hacerle un espacio en el espectro político representativo. Hay malas noticias para ellos. El pleno del Partido Comunista efectuado en enero de 1985 impartió las siguientes instrucciones: "Las células del partido deben impulsar el crecimiento de las milicias rodiguistas, invitando a aquellos luchadores independientes, sobre todo a los jóvenes, en poblaciones, universidades e industrias, a incorporarse a las milicias. (...) Se trata de llegar a un estado de rebelión generalizada, que logre la paralización del país. (...) Hay que acelerar el desmoronamiento político-moral de las fuerzas represivas. La culminación de este proceso debería ser el copamiento por las masas de los principales centros políticos del país". [32] No puede haber expresión más clara de la idea que Lenin tuvo sobre cómo se hace una revolución. Ni tampoco mejor muestra del desconocimiento de la técnica del golpe de Estado enseñada por Trotsky.

Los campamentos de instrucción de la internacional terrorista siempre estuvieron abiertos a los bravos chilenos. De singular importancia fue el de Naumburgo, sobre el río Saale, cerca de Leipzig, en la Alemania del Este. Un antiguo instructor, el capitán Dieter Zirkel, ha recordado que varios grupos de 20 chilenos fueron enviados al curso regular, de un año de duración, especializándose en sabotaje, manejo de armas, métodos de infiltración, guerra política, etc. También en Nicaragua se detectó su presencia. [33]

El punto más alto del terrorismo en Chile se produjo el 7 de septiembre de 1986, cuando un comando adiestrado al efecto intentó asesinar al Jefe del Estado, general Augusto Pinochet Ugarte. Esa acción criminal debía detonar la fase final del proyecto

---

32 *Qué Pasa* n° 762, 14. 11. 85.

33 *Véase* JAMES R. WHELAN, op. cit., p. 781, 839 y 840.

comunista para hacerse con el poder. El armamento con que contaban había sido transportado en una vasta maniobra logística desde Vietnam, vía Cuba, y escondido en excavaciones mineras abandonadas en las cercanías de Vallenar e Illapel. Era suficiente para sostener una contienda civil en gran escala, y en parte alcanzó a ser distribuido en la zona central del país. Entre el 6 de agosto y el 11 de septiembre de 1986 la CNI encontró unas 50 toneladas de armamento, de factura soviética y norteamericana. El gobierno chileno solicitó a las autoridades de Estados Unidos que expertos designados por ellas estudiaran la procedencia y características del armamento encontrado, gestión que culminó en una declaración de Bruce Ammerman, vocero del Departamento de Estado, según el cual "las armas de fabricación norteamericana corresponden a aquellas abandonadas en Vietnam y posteriormente incautadas por las autoridades vietnamitas prosoviéticas".[34] La investigación judicial dejó suficientemente en claro la amplitud de la conjura y debiera servir de lección para comprender la intensidad de la agresión soviética que Chile sufrió en tiempos no lejanos. Tras ese fracaso, la actividad terrorista declinó ostensiblemente. Sus responsables, mediatos e inmediatos, circulan en libertad gracias al cumplimiento de unos compromisos que algún día se harán públicos.

Las consideraciones precedentes permiten comprender por qué durante el período de transición hacia la plena democracia los grupos terroristas libraron una especie de guerra franca, es decir, su propia guerra, traslapada y coincidente hasta cierto punto con los embates político-sociales en contra del presidente Pinochet que caracterizaron a la transición, pero de acuerdo a una lógica que según sus propósitos no conducía a la democracia representativa ni mucho menos. Por lo anterior es necesario distinguir claramente la oposición democrática de la actividad terrorista. Los distintos referentes que aglutinaron a esa oposición apoyaron e instigaron acciones de violencia ilegítima, combinando como se ha dicho la oposición retórica con las protestas pacíficas, que indefectiblemente terminaban con muertos y heridos; pero el fenómeno terrorista es de una entidad diferente.

En efecto, como se ha dicho antes, el propósito del terrorismo no es derribar a un gobierno determinado, sino demoler al Estado.

También se ha de considerar que el adoctrinamiento, instrucción y armamento que hacían posible su acción en Chile fueron proporcionados por los países de la órbita soviética y el cumplimiento de sus órdenes siempre dependió de su apoyo. Una vez que como consecuencia de la disolución de la Unión Soviética el satélite caribeño quedó entregado a sus propias capacidades, la magnitud de las empresas que Fidel Castro pudo encarar ya no consistieron en cómo poner en pie de guerra a un ejército en Angola o en cómo transportar armas a Chile, sino más bien en cómo poder entregar un pan de jabón al año a cada una de las familias cubanas, y lo logra con mucha dificultad.

La introducción del terrorismo en Chile tuvo secuelas sociales importantes. Si por convicción o conveniencia se le aceptó como arma de la política, después, cuando ya no era necesario, se transformó en un incómodo convidado de piedra. No es cosa

34 RAFAEL VALDIVIESO ARIZTÍA, op. cit., p. 288.

de ordenar ¡alto!, para que la violencia cese automáticamente. Era demasiado fuerte la inercia que habían creado al fomentar la violencia subversiva durante al menos 15 años como para imaginar que los cientos de ejecutantes hasta ayer considerados combatientes heroicos y patrióticos se iban a desmovilizar para cantar loas a la paz después de 1990. Peligrosa ingenuidad. Los hábitos mentales del terrorista y las conductas subsiguientes tienden a difundirse entre los elementos más desadaptados de la población, que siempre será su base de reclutamiento, y crea un caldo de cultivo para los comportamientos antisociales que, a la larga, se vuelve contra los que la han generado o permitido. Hay un viejo dicho: cría cuervos y te sacarán los ojos.

Al asumir el segundo gobierno del régimen establecido en la Constitución de 1980, procedió a desmantelar el sistema de inteligencia nacional y esa medida facilitó el rebrote de la violencia ilegítima, que en 1990-1992 tuvo en jaque a la seguridad ciudadana. La población, inerme, pagó el precio de un diagnóstico no sólo equivocado, según el cual el terrorismo carecía de razón de ser en democracia, sino que hacía patente un injustificable grado de ignorancia respecto a la naturaleza del fenómeno terrorista. Así durante la gestión del presidente Aylwin, entre otras víctimas, fue alevosamente asesinado el senador Jaime Guzmán Errázuriz.

La visita de S.S. Juan Pablo II a Chile.

Entre los días 1º y 7 de abril de 1987 se realizó la muy anhelada visita del Papa Juan Pablo II a Chile. Durante una semana el Sumo Pontífice de la Iglesia Católica se unió generosamente con la nación chilena y fue correspondido con extraordinarias muestras de cariño. Ha transcurrido ya una década y aquella experiencia todavía permanece inalterable en la memoria de todos los que la compartieron. Su mensaje también está vigente.[35]

En efecto, la población, dejando de lado sus preocupaciones ordinarias, levantó la mirada y sin importar mayormente las creencias religiosas de cada cual se dejó inundar por la carismática personalidad del Papa, por sus gestos y palabras. Fueron días íntimos, recogidos, de una intensa y lúcida densidad espiritual. Al mismo tiempo, en lo exterior, el pueblo se volcó en las calles con entusiasmo para recibirlo y en cada una de los actos públicas que presidió le acompañó una inmensa multitud. Los que no tuvieron la suerte de verle físicamente, siguieron atentamente cada uno de sus pasos a través de la radio y la televisión. Nadie, en la historia del país, ha movilizado a tanta gente. Hacía mucho tiempo que la nación no se sentía tan fraternalmente unida, tan gozosa de compartir un bien. No obstante, en doloroso contrapunto, también el mal se hizo presente: durante la solemne beatificación de sor Teresa de Los Andes en el Parque O'Higgins, punto culminante de la visita papal, los terroristas mostraron una vez más su rostro crispado por el odio.

Para el Gobierno, lo medular de su obligación consistía en asegurar las condiciones necesarias para que el Papa pudiera realizar en plenitud y con absoluta normali-

---

35 Sobre el mensaje de Juan Pablo II en Chile, véase FERNANDO MORENO VALENCIA, *Iglesia, política y sociedad*, Ediciones Universidad Católica de Chile, Santiago, 1988, cap. I.

dad su cometido, esto es, que tuviera un contacto efectivo con quien quisiera. De hecho, junto con proporcionar una decisiva colaboración en aspectos propiamente organizacionales de la gira, se abstuvo de interferir o condicionar su desarrollo. En realidad, con suma delicadeza, limitó su protagonismo a cumplir las obligaciones que el protocolo señala, dándole la bienvenida al momento de su arribo, con el cariño y honores que merece, recibiéndole luego con la H. Junta de Gobierno en La Moneda —ocasión en que la conversación privada entre Su Santidad y el Presidente de la República se extendió a más del doble de lo exigido por la rígida etiqueta— y despidiéndole finalmente, con emoción y nuevos honores de reglamento en Antofagasta, cuando la gira concluyó. El grueso de la visita, por ende, tuvo un carácter eminentemente pastoral.

Sin perjuicio de la calidad de Vicario de Cristo que detenta —con la autoridad espiritual y moral que ello implica— no se puede soslayar el peso político de sus opiniones. Es natural, por tanto, que hubiera enorme curiosidad ante el juicio que pudiera emitir sobre el proceso político chileno. Hasta poco antes de concretarse el viaje habían surgido opiniones contrarias a su realización y no se habían disimulado las sospechas sobre una eventual manipulación de la gira ni la preocupación por la interesada interpretación de que podían ser objeto sus palabras. La intención eminentemente política que los medios de prensa extranjeros atribuían erradamente a esta visita pastoral queda de manifiesto si se recuerda que de los 500 periodistas que se acreditaron en Chile para cubrirla, sólo una cuarta parte siguió a Argentina, la siguiente etapa del periplo.

La verdad es que nunca tuvo la menor intención de darles en el gusto. Así, por ejemplo, con absoluta naturalidad dialogó con los periodistas en el avión que le traía a Chile, dejándoles en claro su posición de Pastor de la Iglesia universal: "Yo no soy evangelizador de la democracia, sino el mensajero del Evangelio", les precisó. Y preguntado acerca de si el régimen de Chile y el de Polonia eran similares, dijo que esa era "una comparación injusta. En Chile hay un régimen que por definición es transitorio. En Polonia, en cambio, no se puede decir la misma cosa". Un corresponsal italiano le preguntó si tenía contemplado decir una oración por Salvador Allende: "No —respondió— . No sé qué han programado los Obispos chilenos. Todo está programado". Acto seguido el Papa le retrucó al periodista: "¿Pero acaso es el único fallecido? Se reza por todos". El periodista le insistió si rezaría por las víctimas, y él le señaló: "Esto no solamente en Chile. Se reza todos los días". Finalmente, al ser requerido sobre si era posible que la Iglesia chilena actuara como en Filipinas para defender la libertad y los derechos del hombre, Juan Pablo II, siempre hablando de la misión de la Iglesia universal, indicó: "No sólo es posible, sino necesario, porque eso pertenece a la misión pastoral de la Iglesia. Los derechos humanos y la justicia pertenecen al contenido de nuestra misión. Algunos quisieran separarnos de esta misión. Hay no pocos, y no hay que buscarlos en Chile o en América latina, sino en otras partes del mundo, que quisieran que la Iglesia se quedara en la sacristía. Esto no es política. Sería la muerte de la Iglesia. La Iglesia no puede dejarse morir porque tiene una misión mesiánica".[36]

36 El Mercurio, 1.4.87., pp. 1 y 8.

Estas opiniones fueron dejando en claro que, a pesar de lo que intencionadamente algunos querían hacer creer a la opinión pública, el sentido del viaje de la primera autoridad espiritual del mundo a Chile no podía admitir dudas. En palabras suyas, "la finalidad de este viaje es la de dar gracias a la Divina Providencia por haberse podido detener la guerra entre Chile y Argentina a finales de 1978, y conseguir la paz con una mediación de la Santa Sede".[37] Con mayor amplitud, ya en el mensaje de saludo enviado desde el Vaticano en vísperas de su partida a Uruguay, Chile y Argentina, difundido aquí por cadena nacional de televisión el 29 de marzo, señalaba: "He aceptado con alegría y gratitud la invitación que en su oportunidad me hicieran la Conferencia Episcopal de Chile y el Gobierno de la Nación". (...) "Desde lo más profundo de mi corazón, doy gracias a la Divina Providencia porque me ofrece esta oportunidad de ir a vuestro país como Peregrino de Evangelización". (...) "Ya desde ahora deseo manifestar mi reconocimiento a las autoridades eclesiásticas, civiles y militares, y a todos los queridos fieles por la generosa colaboración que están prestando para que las jornadas que, Dios mediante, viviré entre vosotros, refuercen los lazos de fraternidad y la voluntad de convivencia pacífica de todos los chilenos desde la perspectiva de la fe y en camino hacia la vida eterna". (...) "Con la gracia de Dios espero llegar a vuestro querido país el primero de abril, como mensajero de la vida, del amor, de la reconciliación y de la paz que nacen de Cristo Redentor. Esta es la tarea pastoral que deseo desarrollar entre vosotros cumpliendo así el mandato que Jesús confió a Pedro y a sus sucesores: Confirma a tus hermanos en la fe".[38]

Durante su recorrido a través del país y en todos los encuentros que sostuvo con distintos actores del acontecer nacional, el Santo Padre no se apartó un ápice de sus propósitos iniciales, lo que debe haber desilusionado a más de alguien.

Para los católicos —que viven hoy en medio de un mundo caracterizado por la indiferencia religiosa y cuyas "estrellas" suelen hacer gala de una moral neopagana— el fruto más importante de esa visita fue sin duda la revitalización de su fe. Esa fe implantada en el alma de la patria, como les recordó el Papa en aquél mensaje de saludo, "desde los albores del descubrimiento, en el lejano noviembre de 1520, (cuando) el Señor quiso hacer su entrada en esa tierra privilegiada por la majestuosa e imponente puerta del Estrecho de Magallanes. Allí, no lejos del extremo austral, según la tradición, se celebró por primera vez la Santa Misa en Chile. Allí, pues, Cristo, abriendo un nuevo y fecundo capítulo en la historia de la salvación, entregó esas tierras a Dios Padre y desde entonces, en tan hermoso escenario de campos y montañas, de bahías y de mares, de desiertos y canales, el mismo Dios puso su morada y vive para siempre en el corazón de los chilenos, formando con todos ellos una sola familia de hermanos en torno a la cruz del Redentor, enarbolada por los primeros misioneros".[39]

Traer a la memoria que desde su nacimiento Chile había sido modelado en la fe católica era muy pertinente. Uno de los consensos básicos de su sociedad, el más

---

37 El Mercurio, 30.3.87.

38 *El Papa Juan Pablo II, Recado a Chile*, Editado por Fundación de Beneficencia Hogar de Cristo, Santiago, 1987, pp. 14 y 15.

39 Idem., p. 14.

antiguo y profundo, fue precisamente la adhesión al dogma católico y a la moral que de sus principios se desprende. Sin embargo, desde mediados del siglo XIX, este fundamento de la convivencia nacional fue perdiendo vigor; primero en algunos círculos ilustrados, agnósticos y positivistas, muchas veces masónicos, que alcanzaron enorme influencia en la dirección de los asuntos públicos; luego, entre los sectores medios y la clase obrera. Como es sabido, las llamadas cuestiones doctrinarias desgarraron la unidad de la élite dirigente durante el último tercio del siglo, dando origen a los primeros partidos políticos —Conservador, Liberal y Radical— cuyo elemento de distinción no era la procedencia social de sus organizadores, todos de clase alta, sino su postura frente al tema religioso. Esta pugna se resolvió, en lo esencial, con la obligatoriedad del matrimonio civil para su reconocimiento legal y con la implantación de un sistema de educación fiscal laico, medidas que a la postre distanciaron de la práctica de la enseñanzas de la Iglesia a un importante sector de la clase media. Más tarde, por la forma enconada con que se planteó la cuestión social, también una parte del estrato popular se alejó de la fe tradicional, espacio que fue ocupado progresivamente por diversos movimientos evangélicos y en los últimos años también por los mormones y otras sectas. Otra parte del pueblo simplemente abandonó la fe de sus mayores, adhiriendo a una ideología expresamente atea como es el marxismo. Este fenómeno culminó institucionalmente en 1925 con la separación de la Iglesia y el Estado. Apenas una generación más tarde, en la década de los '40, frente a lo que con franqueza diagnosticó como el recrudecimiento de la moral pagana y la apostasía de las masas, el padre Alberto Hurtado se preguntaba: ¿Es Chile un país católico?[40]

Tenía mucha razón el padre Hurtado al indicar en ese libro estremecedor que "una de las causas más profundas del recrudecimiento de la moral pagana es la pérdida de la fe en las masas. El gran escándalo del siglo XX es que la Iglesia haya perdido la clase obrera, decía con profundo dolor S.S. Pío XI al fundador de la J.O.C., canónico Cardyn". Y respecto a su propia patria —que le dolía porque la amaba entrañablemente— sintió la obligación de denunciar: "El gran enemigo de Cristo en Chile es la apatía, la indolencia, la superficialidad con que se miran todos los problemas. Un espíritu materialista nos ha invadido. Todos se lanzan ávidos a la conquista del placer. ¿Reaccionarán los católicos de Chile? ¿Qué actitud tomarán los jóvenes ante la horrible tragedia espiritual de su patria? Este es el secreto de Dios". A fin de cuentas, señalaba, "una Iglesia será lo que sean sus sacerdotes. No hay mejor índice para juzgar la vitalidad del catolicismo en una nación que el número y fervor de su clero regular y secular. <Dejad veinte años sin cura a un pueblo y volverá a su estado salvaje>, decía el santo Cura de Ars. Y se comprende: una generación sin instrucción religiosa, sin predicación, sin sacramentos, sin Dios, ¡qué campo tan fértil para los propagandistas de todos los errores y para el desenfreno de todos los vicios!"[41]

---

40 ALBERTO HURTADO CRUCHAGA, S.J., *¿Es Chile un país católico?*, Editorial Los Andes, Santiago, 1992. Edición actualizada por el padre Renato Poblete, S.J.

41 Idem., pp. 15, 145 y 117.

Tres datos pueden ayudar a dimensionar nuestra realidad en este campo. De acuerdo a un estudio del Centro de Estudios de la Realidad Contemporánea efectuado en diciembre de 1989, que compara las cifras de una encuesta reciente con las proporcionadas por el Censo de 1970, el descenso de la población que se declara católica va del 80,9% al 74,4% entre esos años; según la Oficina de Sociología Religiosa de la Conferencia Episcopal, la asistencia a la misa dominical en todo el país era de 15% en 1960 y de 11% en 1990, lo que equivale a una asistencia promedio de 972.000 fieles y a una ausencia de 7.128.000 de personas que se declaran católicos; en 1992, para atender una población de 13.321.000 almas, había en el país 1370 sacerdotes chilenos y 680 extranjeros. Esas cifras permiten entender muchas cosas.[42]

En una sociedad de masas que ha dejado de lado lo religioso y ha llenado ese vacío con un materialismo práctico, no puede extrañar que también en los ambientes eclesiásticos sea perceptible una actitud que posterga lo trascendente en beneficio de la acción social y, a veces, confunde las virtudes teologales con lo que es mera ideología. No es casual, entonces, que justamente en el encuentro del Santo Padre con el mundo de los pobres en la zona sur de Santiago, haya estimado indispensable puntualizar: "A vosotros, sacerdotes, religiosos, religiosas, diáconos, catequistas, laicos comprometidos, quiero dirigir mi palabra de aliento para que continueis ilusionados en vuestras tareas de construir el Reino de Dios, mediante la Palabra anunciada en su integridad, mediante los Sacramentos celebrados en la fe, con el testimonio de vuestras propias vidas, tomando como modelo a Cristo, pobre y humilde de corazón, ´el cual siendo rico, por vosotros se hizo pobre a fin de que os enriquecierais con su pobreza`. En perfecta sintonía con el Magisterio auténtico de la Iglesia y en íntima comunión con los pastores, sed fieles a vuestra vocación y a la misión que habéis recibido y no permitáis que intereses de índole ideológica o política, extraños al Evangelio, enturbien la pureza de vuestra labor de asistencia y santificación".[43]

A esas alturas era por completo innecesario recordar que desde hacía ya bastante tiempo la conducta política de muchos clérigos era causa de escándalo y contrastaba visiblemente con la de Juan Pablo II: mientras éste ocupaba un lugar de vanguardia en la lucha espiritual contra el totalitarismo comunista, aquéllos se contaban entre los últimos reclutas de la causa marxista.

En efecto, a nadie escapa que desde mediados de los años ´60, coincidiendo con el inicio de la década revolucionaria, "el material humano de la Iglesia Católica chilena" —como lo llama Teresa Donoso— "pagó su tributo a los errores de la época", como lo había hecho en el último tercio del siglo anterior frente al auge del liberalismo.[44] Aquí y en otros lugares de Hispanoamérica, tras el Concilio Vaticano

42 Datos extraídos de notas complementarias a Alberto Hurtado, op. cit., pp. 79 y 122.

43 Discurso pronunciado por Juan Pablo II en el Parque La Bandera el 2.4.87. *En Recado a Chile*, op. cit., pp. 34 y 35.

44 TERESA DONOSO LOERO, *Historia de los cristianos por el socialismo en Chile*, Editorial Vaitea, Santiago, 1975, p. 3.

II, una parte ciertamente menor de sus miembros, pero gravitante y vocinglera, dio la espalda a lo que entendía era la Iglesia tradicional y se confundió con las categorías mentales y estilo de acción propios de la ideología marxista —llegando a darse el caso de curas guerrilleros— provocando enorme confusión entre los fieles y grave daño al prestigio secular de la Iglesia. El desorden, hasta cierto punto inevitable en un proceso de renovación tan profundo como el suscitado por dicho Concilio, fue usado políticamente por aquella facción de la izquierda groseramente materialista, la que no ve ni verá jamás en la Iglesia una instancia espiritual, aunque ciertamente encarnada en el mundo; pero también hicieron lo propio algunos creyentes comprometidos con la izquierda. Ante el terreno abonado desde el interior —en una oportunidad el Papa Paulo VI advirtió, horrorizado, que el demonio había penetrado en la Iglesia— no desaprovechó la ocasión para romper su unidad e instrumentalizarla desvergonzadamente, dividiéndola según sus categorías sociológicas en tres corrientes: "una que llamaremos restauradora, otra que denominaremos conciliar y una tercera que se reconoce a sí misma como ´popular` o ´liberadora`".[45] Remontando esa división, la visita de Juan Pablo II constituyó un severo llamado a la unidad; comunión que por respeto la Verdad sólo es posible en torno al trono de Pedro.

En su vuelo alicorto, tuvieron cierto éxito los elementos marxistoides empeñados en crear fricciones entre el Gobierno Militar y la jerarquía eclesiástica. Sin duda sería injusto decir que los creyentes o el clero, en cuanto tales, se dejaron seducir por la izquierda agnóstica, cuando no francamente atea, pero hubo innecesarias tensiones que son de su responsabilidad, aunque jamás hayan respondido por ellas. No deja de ser paradójico que el gobierno más católico que ha tenido Chile en este siglo, aquél cuyos miembros no disimularon jamás sus creencias religiosas y que plasmó su concepción cristiana sobre el hombre y la sociedad en la Declaración de Principios y luego en la Constitución Política de la República, actuando en consecuencia a lo largo de su gestión, haya tenido algunos roces con la jerarquía eclesiástica. En cierto modo, desde el primer día al general Pinochet le ocurrió algo parecido a lo que le pasó al general Franco en su vejez. Para el Papa Juan Pablo II la subyugación de la Iglesia cuando los comunistas se imponen es un dato histórico muy concreto. Por su experiencia, es dable suponer que también podía prever lo que habría ocurrido si la Unidad Popular, con sus mentores cubanos a la cabeza, hubieran logrado imponer en 1973 la dictadura que deseaba para Chile. No se necesita más para comprender por qué, a pesar del ambiente internacional y de la opinión de alguna gente de Iglesia, muy pronto tuvo una certera idea de lo que pasaba aquí con los suyos y con los otros.[46]

---

45 ENRIQUE CORREA y JOSÉ ANTONIO VIERA-GALLO, *Iglesia y dictadura*, Centro de Estudios (CESOC), Santiago, 1984, p. 220. En similar sentido, JOSEPH COMBLIN, *La Iglesia Católica y sus tres tipos religiosos*, Fundación Manuel Larraín, Santiago, 1974, que distingue un catolicismo popular, un catolicismo burgués en vías de secularización y un catolicismo social o revolucionario. GONZALO ARROYO S.J., *Golpe de Estado en Chile*, Salamanca, 1974, p. 74, también señala la existencia de tres grupos de católicos: los conservadores, los terceristas y los revolucionarios.

46 Sobre las dificultades que hubo entre la Iglesia y el Gobierno Militar, véase RAFAEL VALDIVIESO ARIZTÍA, *Crónica de un rescate*, op. cit., cap. XVII, Iglesia, Clero y Gobierno.

En bien de tantas almas muchas veces desgarradas entre la fidelidad a la patria y la obediencia a los pastores, ¿habría sido conveniente que Juan Pablo II hubiera podido venir antes? Sin duda. Su propia vida es un testimonio de la perfecta compatibilidad que existe entre el más ardiente amor a la patria y la más confiada comunión en el seno de la fe católica, universal por definición. Si su visita hubiera ocurrido con anterioridad, seguramente nos habríamos ahorrado muchos desencuentros, entre otros motivos, porque para todos habría sido más nítida la línea divisoria que separa la caridad para con los marxistas de la complicidad con y para los marxistas. Lo más probable es que esta visita no se hizo efectiva antes sólo porque todavía estaba pendiente la solución del conflicto limítrofe con Argentina, en el que Su Santidad actuaba como mediador. Existen opiniones que añaden a esa circunstancia la imagen que en el extranjero se tenía del Gobierno Militar —imagen difundida machaconamente desde Moscú, pero alimentada por muchos chilenos— que incluso habría permeado la opinión de círculos del Vaticano normalmente objetivos y bien informados. Pero esa suposición no es razonable: si alguien conoce bien la mentalidad comunista, su consustancial mentira y la frialdad de sus tácticas, es precisamente Juan Pablo II. Es de suponer que la información que sobre la realidad chilena se le hacía llegar era contradictoria, dependiendo de las fuentes, pero la comprobación *in situ* acerca de la verdad no puede haber sido ajena a su posterior decisión de nombrar secretario del Consejo para Asuntos Públicos y luego Secretario de Estado del Vaticano a monseñor Angelo Sodano, Nuncio Apostólico en Santiago durante diez años. Además, el exacto conocimiento que éste tenía de la verdadera causa de los problemas existentes entre el Gobierno y la Iglesia local se manifiesta en el nombramiento de Obispos, ninguno de los cuales ha recaído en sacerdotes inclinados a la comprensión al revés del Concilio Vaticano II. El reciente nombramiento en la Curia con el que ha sido distinguido monseñor Jorge Medina Estévez —y la frialdad nada contrita con el que ha sido recibido por el gobierno chileno y por ciertos círculos eclesiales— habla por sí mismo.

De cara al futuro de la nación chilena, el Santo Padre alertó sobre los peligros que la acechan al reiterar aquí las advertencias contenidas en su homilía de Santo Domingo, del 12 de octubre de 1984, con la que dio inicio al novenario de preparación del Quinto Centenario de la Evangelización en América. Conviene retenerlas: "Oh, Chile, consciente cada vez más de las exigencias de tu fidelidad a Cristo, no dudes un momento en resistir: a la tentación de quienes quieren olvidar tu innegable vocación cristiana y los valores que la plasman, para buscar modelos sociales que prescinden de ella o la contradicen; a la tentación de lo que puede debilitar la comunión en la Iglesia como sacramento de unidad y salvación, sea de quienes ideologizan la fe o pretenden construir una 'iglesia popular' que no es la de Cristo, sea de quienes promueven la difusión de sectas religiosas que poco tienen que ver con los verdaderos contenidos de la fe; a la tentación anticristiana de los violentos que desesperan del diálogo y de la reconciliación, y que sustituyen las soluciones políticas por el poder de las armas, o de la opresión ideológica; a la seducción de las ideologías que pretenden sustituir la visión cristiana con los ídolos del poder y la violencia, de la riqueza y del placer; a la corrupción de la vida pública o de los

mercantes de droga y de pornografía, que van carcomiendo la fibra moral, la resistencia y esperanza de los pueblos; a la acción de los agentes del neomaltusianismo que quieren imponer un nuevo colonialismo a los pueblos latinoamericanos, ahogando su potencia de vida con las prácticas contraceptivas, la esterilización, la liberalización del aborto, y disgregando la unidad, estabilidad y fecundidad de la familia; al egoísmo de los ´satisfechos` que se aferran a un presente privilegiado de minorías opulentas, mientras vastos sectores populares soportan difíciles y hasta dramáticas condiciones de vida, en situaciones de miseria, de marginación, de opresión; a las interferencias de potencias extranjeras, que siguen sus propios intereses económicos, de bloque o ideológicos, y reducen los pueblos a campos de maniobras al servicio de sus propias estrategias".[47]

¿Cómo no reconocer en esas amenazas algunos de los peligros que el Gobierno Militar sorteó con éxito? ¿Serán capaces de hacerlo sus sucesores? En ello está en juego el destino de la patria.

Como se ha dicho, el clima de armonía que había concitado la presencia del Papa fue roto por la extrema izquierda. Durante la misa en la que se beatificó a sor Teresa de Los Andes, en el Parque O´Higgins, generó un incidente propagandístico de singular cobardía al agredir, sin mediar provocación alguna, a una muchedumbre pacífica, causando 260 heridos. Consultado acerca de los hechos de violencia que opacaron tan magna ocasión, el Secretario Ejecutivo del Comité Pro Visita del Papa, monseñor Francisco José Cox, manifestó que sus autores eran grupos absolutamente organizados y que dichos sucesos habían revelado algo extraordinariamente importante, "porque si nuestro destino va a estar en manos de personas como éstas, tenemos un tristísimo destino".[48] Por su parte, Juan Carlos Latorre, jefe de los voluntarios de la Guardia Papal, señaló que los autores de los desórdenes eran "los mismos que piden a la Iglesia que los acoja, que los cuide y colabore con ellos, cuando se sienten o se dicen perseguidos".[49]

El resultado de la visita de Juan Pablo II, centrada en la necesidad de la reconciliación, Whelan la sintetiza diciendo que a su regreso, "como premio a su esfuerzo, el Papa encontró las murallas de Roma cubiertas de carteles que atacaban su actuación en Chile". Al parecer, los incidentes provocados por extremistas de izquierda en su afán por desbaratar la ceremonia de canonización de sor Teresa de Los Andes, motivaron la severa declaración del Papa, formulada apenas volvió al Vaticano, en orden a que "la Iglesia Católica no puede permanecer indiferente a los aspectos antirreligiosos de la ideología marxista". Este mensaje fue reforzado por monseñor Angelo Sodano, quien señaló: "Los cristianos en todas partes deberían meditar en lo que el Papa dijo acerca de que la Iglesia en Latinoamérica no debe ignorar los ataques marxistas hacia ella. La crítica marxista de la religión —y no la crítica, sino la condena de la religión— es otro tema ante el cual no podemos permanecer indiferentes". La evaluación final que hace el mencionado autor destaca

---

47 Discurso de Juan Pablo II leído en Puerto Montt el 4.4.87. *En Recado a Chile*, op. cit., p. 116.

48 El Mercurio, 4.4.87.

49 El Mercurio, 5.4.87.

que, "en todo caso, el mensaje papal produjo el deshielo casi inmediato en las relaciones entre el Estado y la Iglesia. El cardenal Fresno no sólo fue a La Moneda a aceptar una medalla que le otorgó el presidente Pinochet en presencia del nuncio, sino que también se embarcó en una gira por bases militares, incluida la base de la Fuerza Aérea en la Antártica, que visitó en compañía de los miembros de la Junta, generales Matthei y Gordon", lo que hubiera sido imposible si el Santo Padre se hubiera llevado una impresión negativa del Gobierno de Chile.[50]

Con todo, y es otro amargo ejemplo del ataque que debió soportar el Gobierno Militar —y que en este caso tampoco hace justicia a los elevados propósitos de Juan Pablo II— periodistas de reconocido prestigio internacional como Carl Bernstein y Marco Politi, encuadraron su viaje a Chile en una perspectiva errónea y significativa a la vez. Según ellos, la gira formaba "parte de su estrategia de apoyo a los países latinoamericanos en su transición pacífica a la democracia. El Papa quería asegurar, en donde fuera posible, la hegemonía política de los partidos demócrata cristianos o de un bloque de fuerzas de centro derecha que, coincidencialmente o no, se ajustara pulcramente a la visión de la Casa Blanca de Reagan". Podría tratarse, simplemente, de un punto de vista inadecuado; pero la intención de estos "expertos" queda al desnudo cuando, de inmediato, añaden: "En Chile, se estaban realizando contactos entre el general Augusto Pinochet, los partidos políticos nacionales de carácter civil, la Iglesia y Washington para negociar un acuerdo según el cual Pinochet convocaría unas elecciones presidenciales o un referendo. Parte de ese eventual trato (acordado en 1989) (sic) estipulaba que a Pinochet, quien en 1973 dirigió el golpe de Estado que aplastó al gobierno elegido de Salvador Allende y que presidió la brutal represión subsiguiente, le sería concedida inmunidad por los crímenes de su régimen, y que se le permitiría conservar su cargo como comandante de las fuerzas armadas".[51] ¿Despiste, maldad o estupidez? ¡Qué útil les hubiera sido leer la Constitución y hojear algún texto de historia de Chile antes de emitir tan torpe opinión! Así habrían tenido unas pistas seguras para entender el itinerario hacia la plena democracia en que estaba empeñado el gobierno presidido por el general Pinochet. Por prejuiciosos se perdieron una exclusiva mundial: pudieron haber predicho que el plebiscito de 5 de octubre de 1988, establecido en 1980, se llevaría a efecto, que el resultado del mismo sería respetado escrupulosamente y que, según su resultado, tal o cual sería el lugar, día y hora en que terminaba la transición.

La culminación del camino institucional.

La aspiración que desde el primer día tuvo el Gobierno Militar en orden a construir una nueva y sólida institucionalidad democrática, para ser realista y legítima, debía llevarse a cabo progresivamente y en estrecha relación con el pueblo chileno. El daño que había sufrido el tejido social a lo largo de una década revolucionaria era demasiado severo para curarlo con alguna pomadita. Se precisaba

50 Las citas en JAMES R. WHELAN, op. cit., p. 789.
51 CARL BERNSTEIN y MARCO POLITI, op. cit., p. 494.

cirugía mayor para extirpar las causas que habían precipitado a la ciudadanía en brazos de los demagogos profesionales y rehacer los lazos de convivencia que la partitocracia, los ideologismos y la violencia política habían hecho trizas. Era necesario, en suma, restaurar el consenso nacional. Como lo dijera un hombre lúcido y patriota —ya citado en esta obra— "el país retornará al régimen constitucional cuando haya recuperado sus clásicos moldes de convivencia humana, impuesto la disciplina en los centros laborales, la honradez en los empleados públicos, vitalizado la vida económico financiera, hoy en ruenas a causa de la experiencia marxista de tres años, la cual nos ha dejado más cerca de la muerte que de la vida".[52]

La actitud básica del Gobierno Militar, fundacional, se sintetizaba en su intención de construir un nuevo orden de convivencia que refleje y exprese de manera institucional el consenso nacional, evitando así que en adelante, si algún gobernante pretendiera desconocerlo, carezca la comunidad nacional, como ayer, de instrumentos jurídicos debidamente respaldados por la fuerza de las armas de la República para retrotraer las cosas a su cauce natural de manera impersonal y expedita. Para unas Fuerzas Armadas y de Orden que desde el momento de la Emancipación sólo han concebido a la democracia como régimen político para Chile, era impensable acometer dicha empresa sin consultar en cada paso a la voluntad popular y, lo que es más importante, sin someterse a sus decisiones. Las cúpulas partidistas jamás compartirán esa posición. De hecho, construyeron su oposición al Gobierno Militar con absoluta prescindencia de los deseos de la ciudadanía y ese defecto cívico, todavía hoy, no tiene visos de ser remediado. Ellos, sus intereses, vanidades y afanes, van por una pista distinta a la del pueblo y sus tropas.

Tras ese objetivo, nada se improvisó ni quedó entregado a la conveniencia del momento. La fase arquitectónica del nuevo orden de convivencia se plasmó en la serie de pasos, debidamente articulados, que con ese propósito se fueron dando. Así, como se recordará, en septiembre de 1973 se dieron las instrucciones tendientes a iniciar por expertos en derecho constitucional los estudios pertinentes para sentar las bases de una Carta Fundamental destinada a regir largamente. Luego, en Chacarillas, el Jefe del Estado delineó el cronograma institucional y en su momento, tras ser analizado por diversas instancias consultivas, el texto de la nueva Constitución aprobado por la Junta de Gobierno fue sometido a ratificación popular en un plebiscito. A partir de ese momento, septiembre de 1980, las etapas que culminarían en la plena democracia tuvieron un contenido concreto y unos plazos con validez jurídica. Pese a que las circunstancias cambiaron en más de un sentido —nadie podía adivinar que surgiría una recesión económica mundial, por ejemplo— el itinerario se mantuvo inalterable porque en su fiel cumplimiento estaba empeñada la palabra de los hombres de armas y, tal como estaba dispuesto en las alternativas que la Carta Fundamental contemplaba, el 11 de marzo de 1990 concluyó la transición y se entregó el Gobierno a las autoridades elegidas de acuerdo a esas mismas disposiciones.

---

52 Conrado Ríos Gallardo, El Mercurio, sección cartas, 13.11.73.

Como se ha visto al inicio de este capítulo, desde el punto de vista del despliegue de la nueva institucionalidad, el período constitucional del presidente Augusto Pinochet Ugarte (1981-1990) tuvo por contenido específico servir de fase de transición hacia un orden democrático maduro, afianzando las condiciones sociales y económicas que lo hacen posible. Este mecanismo, la gradual implantación de la democracia, permitió asegurar a sus sucesores en La Moneda la normalidad más absoluta y el ejercicio irrestricto de sus atribuciones, que de otro modo les habrian sido discutidas permanentemente. Aunque pocos lo advierten porque es difícil imaginar que las cosas pudieron resultar de otra manera, si se hubiese procedido con menos prudencia, ellos habrían debido sufrir una etapa de apasionada discusión sobre los fundamentos de su mandato y las reglas del juego a aplicar, controversia a la que posiblemente no habría sido ajena alguna parte del estamento militar, con las consecuencias de inestabilidad que cualquiera puede imaginar.

La etapa final del régimen militar, por tanto, se ajustó por completo a las normas de derecho previstas con ocho años de anticipación. Esta es una de las características más relevantes del proceso político chileno. A diferencia de lo que ha ocurrido en tantos otros lugares del mundo, aquí el término de la intervención militar se hizo en completa paz, de manera ordenada y respetando escrupulosamente el derecho vigente y la voluntad popular. ¡Sólo unas fuerzas invictas son capaces de tal proeza![53]

En efecto, de acuerdo a lo establecido en la disposición vigesimaséptima transitoria de la Constitución, noventa días antes de concluir el período presidencial en curso debían reunirse los tres Comandantes en Jefe de las Fuerzas Armadas y el Director General de Carabineros con el objeto de proponer al país, por la unanimidad de ellos, sujeto a la ratificación de la ciudadanía, la persona que desempeñaría el cargo de Presidente de la República en el siguiente período. El nombre propuesto, según esta misma norma, debía ser aprobado o rechazado por la ciudadanía en un plebiscito convocado al efecto no antes de 30 ni después de 60 días de anunciada esa proposición. Dicha reunión se llevó a cabo a mediodía del 30 de agosto de 1988, escogiéndose al general Augusto Pinochet Ugarte. Ahora bien, si la ciudadanía a través del plebiscito manifestaba su voluntad de aprobar esa designación, se procedería según el tenor de la disposición vigesimaoctava —por lo que a los nueve meses se convocaría a elecciones generales de senadores y diputados— y en caso contrario, según la vigesimanovena.

El plebiscito fue convocado para el 5 de octubre. El significado del mismo fue analizado y discutido con la mayor amplitud en los medios de prensa, incluso en televisión.[54] La alternativa SI, esto es, un nuevo período presidencial para el gene-

---

53 Caso único en el mundo, la transición culminó en un ambiente de paz turbada apenas por bandas terroristas sin mayor arraigo social y en condiciones de prosperidad no sólo respecto a las finanzas nacionales, sino con bases sólidas para el futuro desenvolvimiento del país. ¡Hasta se publicó una Memoria de Gobierno 1973-1990 y se levantó un Acta de Entrega dando cuenta a las nuevas autoridades del grado de avance y planes de cada sector de la actividad nacional! Es inevitable contrastar ese orden con el caos imperante al momento de asumir sus funciones el Gobierno Militar.

54 Véase HERMÓGENES PÉREZ DE ARCE, *Sí o No*, Editorial Zig Zag, Santiago, 1988.

ral Pinochet, recibió 3.119.110 sufragios y la alternativa NO 3.967.579. En consecuencia, tal como lo estipulaba la disposición vigesimanovena transitoria, los mandatos del Presidente de la República en ejercicio y de la Junta de Gobierno quedaron prorrogados automáticamente en un año, debiéndose llamar a elecciones de Presidente de la República y Parlamento, simultáneamente, 90 días antes de finalizar este período.

El torno al plebiscito de 1988 —decisivo entre otras razones porque al menos durante la siguiente década su resultado se proyectó en la configuración de las dos grandes alianzas políticas del sistema, la Concertación de Partidos por la Democracia y la Unión por Chile— conviene aclarar algunas impresiones que han enturbiado su significado. Huelga decir que estaba contemplada en las normas constitucionales en vigor desde el 11 de marzo de 1981 y, por tanto, desde entonces era un acto político en conocimiento de toda la ciudadanía. Es natural que su eventual resultado, a medida que se acercaba su realización, fuera condicionando la acción de aquellos sectores con mayor influencia en la opinión pública por el rol social que cumplen, como por ejemplo, los académicos, la jerarquía eclesiástica y los empresarios. En el ámbito político, no podía dejar de ser percibido como el momento en que se decidiría la sucesión del Gobierno Militar. Lamentablemente, resultó imposible hacer comprender a los que se niegan a escuchar que, para traspasar el umbral hacia la plena democracia, era inconveniente continuar la campaña ideológica montada desde el extranjero para boicotear el itinerario institucional. La sinceridad con que el general Pinochet iba cumpliendo cada uno de los pasos encaminados a la restauración de la democracia era desconocida por quienes, a pesar de la evidencia objetiva, insistían en proclamar que jamás una dictadura entregaba el poder por la mera decisión de las urnas. Apelaron, en consecuencia, a la presión diplomática y a la violencia terrorista para anticipar el término del Gobierno Militar o, en su defecto, forzar un hecho ya previsto y que inexorablemente tenía que ocurrir. Pero el restablecimiento de la plenitud democrática no estaba en las manos de los violentistas ni de los opositores más obsecados, sino en las del general Pinochet, en las Fuerzas Armadas y Carabineros y, en definitiva, en la decisión libremente expresada por la ciudadanía.

En el fondo, a los dirigentes de la oposición al Gobierno Militar no podía agradarle que éste avanzara inperturbable hacia las metas institucionalizadoras decididas por la mayoría ciudadana. Después de todo, pese a haber destruido la democracia chilena unos años antes, algunos todavía se consideraban a sí mismos como los únicos demócratas genuinos. Buscaron, pues, desprestigiar el plebiscito sindicándole como un procedimiento no democrático que debía ser reemplazado por elecciones abiertas, es decir, con varios candidatos. Desde algunos sectores de derecha también se escucharon voces en ese sentido, porque en una concepción táctica del proceso electoral les parecía demasiado arriesgado aunar todas las voluntades que tuvieran algún agravio o, simplemente, el deseo de cambios tras un largo período, en contra de la persona que propusiera la Junta. Aunque tal vez ello era cierto, en el Gobierno primó el criterio de ejecutar cada paso tal cual estaba dispuesto, sin conceder espacio al oportunismo. Quizás lo que entonces no se comprendió cabalmente es que, desde el punto de vista del Gobierno Militar, más allá del resultado que arrojara el plebiscito, lo que verdaderamente importaba era lograr la concurrencia de todos los sectores, partidarios y opo-

sitores, pues era la mejor forma de legitimizar definitivamente la institucionalidad en su conjunto. La participación de la oposición consagró la aceptación de un solo camino hacia la democracia, reconociendo la validez de cuanto se había hecho por el Gobierno Militar en esa dirección.

Así, en definitiva, el 5 de octubre de 1988 quedó demostrado ante el mundo y la historia cuán absurdo había sido caricaturizar al Gobierno Militar encabezado por el general Pinochet como una dictadura. Se trataba, más bien, de un gobierno fuerte, autoritario si se quiere, pero que en plena posesión de su poder se limitaba mediante el respeto al derecho vigente y aceptaba la decisión del pueblo soberano aunque le fuese adversa. Incluso más: el general Pinochet no quiso identificar su destino político con las tareas ordinarias de administración del país. Algunos de sus partidarios le han criticado por no haber destinado fondos a objetivos de mayor rentabilidad electoral, pero sin duda esa actitud de seriedad en el manejo del erario nacional le enaltece. Habría sido contrario al espíritu que animó su gestión gubernamental descender a tomar medidas populistas o francamente demagógicas. De otra parte, aquellos que todavía hoy creen haber sobrevivido a una experiencia dictatorial, podrán decir si también imaginan que en Corea del Norte o en Cuba, sus últimos reductos ideológicos, es concebible una conducta similar.

El resultado del plebiscito abrió una nueva etapa de definiciones políticas. Se hacía inminente el traspaso del poder a alguna de las formaciones partidistas, dado que las instituciones militares no tendrían ya injerencia alguna en su sucesión, salvo obviamente garantizar la corrección del acto eleccionario y sostener lealmente a quien resultara vencedor. En ese contexto se hicieron patentes algunos vacíos constitucionales que podían dar origen a problemas futuros, abriendo un debate que vulneraría la solidez del edificio institucional levantado para dar resguardo a la estabilidad de Chile. Por ello, el Gobierno estimó conveniente interesar a todos los sectores políticos democráticos del país en la corrección de tales vacíos constitucionales y de esta manera descargar a su sucesor de la discusión ciudadana sobre temas relativos a la Carta Fundamental. En otras palabras, era sano que en las elecciones de diciembre de 1989 se escogieran las nuevas autoridades no en función de la aprobación o rechazo al orden político vigente, sino más bien en función de proyectos políticos claros y de largo plazo. El perfeccionamiento de esas normas, además, reafirmaría una vez más la legitimidad del conjunto de la institucionalidad. El contenido de las reformas, acordadas entre el Gobierno Militar y las directivas de los partidos políticos, se sometió a plebiscito el 30 de julio de 1989; 6.056.440 personas las aprobaron y 580.212 las rechazaron.

Desgraciadamente, el gesto de flexibilidad que movió al general Pinochet a impulsar estas modificaciones no fue bien comprendido por sus adversarios, que al parecer lo interpretaron como un signo de debilidad. Si el propósito de esta reforma fue otorgar certeza y estabilidad a las normas constitucionales en el largo plazo, ese objetivo no se cumplió: después de 1990, varias veces la concertación de partidos de izquierda en el gobierno ha intentado cambiar algunos aspectos a todas luces muy importantes para garantizar la tranquila marcha del país y el desenvolvimiento ajeno a la lucha partidista de algunas instituciones esenciales del Estado. No ha tenido éxito, pero la presión continúa.

En el proceso electoral destinado a elegir Presidente de la República y Parlamento, el gobierno en funciones mantuvo una prescindencia absoluta. Ahora concernía exclusivamente a los partidos políticos y sectores independientes competir por el apoyo ciudadano.[55] Los comicios generales se efectuaron el 14 de diciembre de 1989, resultando elegido Patricio Aylwin Azócar. Él fue, por tanto, el segundo de los presidentes cuya legitimidad de origen proviene de la aplicación de la Constitución de 1980. Después, el 11 de marzo de 1990, día en que terminaba su período constitucional, el general Augusto Pinochet, en una ceremonia del mayor significado cívico, ante el Congreso Pleno y las más altas autoridades del país, le entregó las insignias del mando supremo de la nación. La transición había concluido.

El traspaso del gobierno, el 11 de marzo de 1990, marca un hito trascendente en el avance institucional de Chile hacia la plenitud democrática, pero también es cierto que sólo representa una parte del proceso general que durante 16 años condujo a la nación, paulatinamente, hacia una sociedad crecientemente libre, justa y próspera. En ese período el país enfrentó dos grandes crisis económicas mundiales, serios conflictos con los Estados vecinos y la recurrente agresión del marxismo internacional. Todos los obstáculos, desafíos y amenazas fueron superados, y en esa lucha titánica los chilenos se reencontraron con sus consensos básicos. Así, más allá de divisiones accidentales en torno a personas o programas políticos, su unidad esencial volvió a ser una magnífica realidad. Esta unidad granítica, sagrada e inconmovible, es el capital que legó a la patria el general Pinochet.

Por último, el valor cívico del planteamiento, desarrollo y acatamiento de los resultados del plebiscito y de sus consecuencias, es decir, la manera transparente e impecable en que culminó la transición, mueve a extraer algunas conclusiones que pueden contribuir a iluminar el derrotero de las generaciones más jóvenes.

La primera de ellas es el contraste entre la conducta de la generalidad de la población, esa "mayoría silenciosa" que trabaja tranquila y libremente en pos de un mejor porvenir personal, familiar y nacional, y la de reducidos núcleos ideologizados cuyo principal anhelo era acentuar las dificultades del momento para fabricarse una plataforma que les permitiera acceder lo más pronto posible al poder. En realidad, al margen del resultado político del plebiscito y con independencia del mismo —lo que indica el grado de madurez institucional alcanzado durante el período de intervención castrense— se vislumbraban los primeros frutos de un Chile profundamente renovado, cuyo progreso material y tranquilidad en la vida cotidiana nada debía a los que habían provocado la ruina de la nación durante la década anterior al 11 de septiembre de 1973. Así, para cualquier observador atento, era evidente que cualquiera fuera el tinte político de los próximos gobernantes, su tarea esencial consistiría en continuar desarrollando las grandes tareas modernizadoras iniciadas por el Gobierno Militar. En la práctica, así ocurrió.

---

55 Véase PATRICIO TUPPER (Ed.), *89/90. Opciones políticas en Chile*, Ediciones Colchagua, Santiago, 1987.

La segunda se refiere a la esterilidad de la prédica del odio y de la práctica de la violencia insurreccional que es su fatal consecuencia. A pesar de su ataque permanente a la convivencia pacífica de los ciudadanos, los insurgentes no lograron modificar en nada ni adelantar en un minuto el cumplimiento del itinerario constitucional hacia la plena democracia. En el plano moral de la contienda política, el Gobierno Militar siempre fue superior a ellos.

La tercera conclusión se refiere a lo podría llamarse la lucha por el sentido de las palabras. En el plano de la propaganda, la oposición al Gobierno Militar alteró el sentido natural de algunos conceptos muy caros a la tradición política chilena, como por ejemplo "democracia". Para legitimar su posición fue audaz en este frente y se arrogó —con absoluto desprecio de la realidad concreta— el monopolio valórico de tan prestigiosa palabra; con ello pretendió situar a su adversario en una posición menguada y recibir la adhesión de aquellos ciudadanos que de manera acrítica y por principio son, ante todo, democráticos. Huelga decir que la inmensa mayoría de la población se percibe a sí misma como demócrata, pero, si en algún sector hubo efectivamente ideas y actitudes incompatibles con ese modo de vida fue, justamente, entre los más ardientes detractores de la intervención castrense. Miradas las cosas con calma, ¿no es un tanto ridículo el empeño de los comunistas y violentistas por cobijarse bajo el paraguas democrático? Si se les toma en serio, el ambiente político deviene en una suerte de comedia de equivocaciones, jocosa a pesar del engaño colectivo que implica.

El servicio a la verdad exige poner las cosas en su sitio. Hay que recordar a los de memoria frágil que el eje de la acción política desplegada por el general Pinochet desde el gobierno de la nación fue el retorno a la democracia. Respecto a este propósito fundamental sus jueces no pueden ser los que por acción u omisión contribuyeron en su día a demolerla. Se pueden discutir con buena fe los plazos establecidos al efecto, es materia opinable, pero no la meta ni la seriedad con que se avanzó en aquella dirección. No obstante, en vez de reconocer sus responsabilidades históricas, muchos actores políticos se presentaron como heroica pléyade que merecía el galardón de haber contribuido a devolver la democracia al país, esto es, su dignidad cívica. En torno a ellos se constituyó un arco iris que hermanaba a los hombres de cálculo frío con los ingenuos, los guerrilleros de salón y los combatientes reales de una causa equivocada por inútil y estéril. En suma, lejos de haber ayudado a reconstruir la democracia, entorpecieron el esfuerzo que el Gobierno Militar hacía en tal sentido; pero su actitud demagógica les rindió un fruto al parecer inapreciable.

En cuarto lugar es preciso reconocer, de cara a la historia, que el hecho de haber realizado un plebiscito impecablemente limpio desde su génesis hasta la aceptación de su adverso resultado, constituye un motivo de honor para las Fuerzas Armadas y Carabineros. De manera singular, destacan la entereza personal y la grandeza política del general Pinochet: como patriota y ciudadano ejemplar venció, porque en un momento difícil se venció a sí mismo. Entonces, por sobre cualquier otra consideración, primó el soldado. La dignidad de su comportamiento jamás será olvidada por sus camaradas de armas y en el futuro será patrimonio de lo mejor de la chilenidad.

Tampoco hay que perder de vista que las instituciones armadas, en el seno del Estado, tienen carácter permanente y son decisivas para garantizar la normalidad del proceso vital de la nación. De ahí de que el respeto a la palabra empeñada y la disciplina para cumplirla sean elementos de la mayor importancia para cumplir la función que desarrollan cotidianamente. Sin duda, su tradicional prestigio se vió reforzado al proceder como lo hicieron. Al mismo tiempo, con el peso moral de un hecho que habla por sí solo, desmintieron para siempre a los que por ignorancia inexcusable o simple maldad habían catalogado peyorativamente al Gobierno Militar como dictadura.

En efecto, hoy parece indiscutible la coherencia de propósitos que animó al Gobierno Militar a lo largo de toda su gestión de servicio a Chile. Renuentes por doctrina y convicción profesional a incursionar en política, las Fuerzas Armadas y Carabineros sólo intervinieron cuando las circunstancias que otros habían creado hacían indispensable afrontar una tarea que nadie más que ellas estaba en condiciones de cumplir: salvar a la nación que se disolvía en una lucha fraticida. Si no hubieran actuado, el más siniestro de los destinos, la esclavitud en manos de una facción internacional delirante que abomina de la idea misma de patria, de los valores cristianos y de la libertad de las personas —nervio y alma del consenso nacional— se habría impuesto irreversiblemente. Luego, en comunión estrecha con el pueblo que lo aprobó, desarrollaron un camino institucional hacia la plena democracia que culminó también de cara al pueblo soberano. De esta suerte, los órganos militares de la nación chilena —reducto infranqueable de su voluntad de ser, no hay que olvidarlo— garantizaron en todo momento su auténtico sentir, haciendo posible que volviera a ocupar el lugar que merece en el concierto de las naciones civilizadas. Sólo entonces pudieron exclamar ¡misión cumplida!

El juicio histórico.

La pregunta que entre líneas recorre todo este libro se refiere al lugar que ocupará el general Augusto Pinochet Ugarte en la historia de Chile. Al concluirlo, después de haber expuesto las circunstancias en que hubo de desplegar su acción, es menester responderla de manera explícita.

Al llegar la hora de juzgar, se debe tener en cuenta que los hombres llamados por el destino a dejar huella en la historia hablan a través de sus obras. No existe regla más justa para medirlos.

Paul Johnson es autor de una conocida y magistral síntesis de nuestra época. Tanto por la convincente ilación de los acontecimientos que recrea, como por la brillantez de su estilo, su ensayo *Tiempos Modernos* ha influido poderosamente en la imagen que hoy se tiene de nuestra época.[56] Según él, uno de los hechos más decisivos en la configuración del mundo en este fin del milenio consiste en que gracias a la aplicación de la economía de mercado, los países ribereños del océano Pacífico se han convertido en la principal área de desarrollo comercial del planeta. Este fenómeno no podía menos que traer consecuencias sociales más allá de lo estrictamente económi-

56 PAUL JOHNSON, *Tiempos Modernos*, Vergara Editor, Buenos Aires, 1988. Las citas, en pp. 726-729.

co, dado que, "por definición, las economías de mercado implicaban que el Estado se retiraba de una enorme área de decisión, que quedaba a cargo del individuo. La libertad económica y política estaban enlazadas de manera inseparable. La libertad del mercado llevaba, inevitablemente, al debilitamiento de las restricciones políticas; ésa era la lección de Tailandia, Taiwán y Corea del Sur". De esta suerte, desbordando su esfera propia, técnica, situada en el campo de los medios, los efectos de la aplicación de esta concepción de la economía se vuelcan inexorablemente sobre el campo de los fines, por ejemplo, el de la libertad humana. Es ésta una vieja verdad —no es otro el fundamento de la economía clásica— aunque muchas veces fue oscurecida por la visión ideológica.

Pues bien, en ese contexto de renacimiento del espíritu del mercado libre, señala que "el caso más interesante fue Chile". Para fundamentar su opinión, Johnson pasa somera revista a la experiencia demócrata cristiana en la década de los ´60, "a los ojos de Estados Unidos la esperanza más promisoria, junto a la Venezuela de Rómulo Betancourt, y en relación a la Alianza para el Progreso", que no cumplió sus propósitos y fue seguida por la desastrosa gestión de la Unidad Popular. Como él en principio escribe de cara al público anglosajón, muy ajeno a la contingencia latinoamericana, para hacer comprensible su análisis estima necesario informar a sus lectores que "Salvador Allende ganó la presidencia en su cuarto intento, gracias a una división del voto antisocialista, que de todos modos obtuvo el 62 por ciento de los votos combinados contra el 36,2 por ciento de Allende. El nuevo presidente no tenía el más mínimo mandato, y de acuerdo con el principio de Thomas Jefferson, las grandes innovaciones no deberían basarse en reducidas mayorías, y Allende hubiera tenido que concentrarse en mantener ordenada la casa. Pero Allende era un hombre débil, apoyado por una masa dividida y en parte revolucionaria, que muy pronto escapó a su control. (...) La estrategia era leninista —´la tarea del momento`, dijo el Partido Socialista, ´es destruir al parlamento`— pero la verdadera analogía era la que podía trazarse con la España de 1936, donde las divisiones de la izquierda y la orientación hacia la violencia provocaron la Guerra Civil. Allende se encontró atrapado entre los dos brazos de una pinza, uno de ellos sus propios revolucionarios, y el otro una clase media cada vez más agraviada; y el ejército, que al principio se mostró renuente a intervenir, se politizaba gradualmente a causa del derrumbe del orden". Tras describir el caos provocado por la Unidad Popular, acota que el Pronunciamiento Militar ocurrió en un país que "había tenido un historial excepcionalmente bueno, juzgado según las normas latinoamericanas por su respeto al constitucionalismo y a la estabilidad", acción que no fue incruenta pues además de la muerte del propio Allende "el recuento oficial de cadáveres llevados a la morgue alcanzó la cifra de 2.796. La parte principal de la resistencia provino de los refugiados políticos que no eran chilenos, de los cuales había 13.000 en Santiago cuando comenzó la asonada. El fracaso de los obreros que se dedicaron a ocupar las fábricas, o de los campesinos en los fundos confiscados, o incluso de las ´bandas revolucionarias` armadas —ninguno de estos sectores luchó seriamente— sugiere que la extrema izquierda despertaba escaso entusiasmo. La oposición a Pinochet, aunque ruidosa, provino principalmente del exterior. Fue hábilmente orquestada por Moscú, aunque en realidad Rusia se

había negado en redondo a sacar del aprieto a Allende mediante créditos; les servía más muerto que vivo".

La crítica extranjera concentró la atención en el aspecto represivo del régimen que había impedido una dictadura comunista en el Cono Sur, evitando así las consecuencias políticas y estratégicas que tal situación habría creado en el escenario global de la Guerra Fría, pero, continúa diciendo Johnson, "había sido notable el hecho de que prácticamente todos los estados de libre empresa del Pacífico fueran acusados de representar regímenes represivos. Tailandia, Corea del Sur y Taiwán habían pasado todos por una fase prolongada de dominio militar". A pesar de todo, es decir, a pesar de estar batiéndose con un enemigo poderoso y totalitario, por convicción propia esos gobiernos liberalizaron el sistema económico y el sistema social, transformando a sus ciudadanos en hombres más libres. En el caso chileno, acota, "el desastre de 1973 provocó la quiebra política y económica total. La reconstrucción de la economía tuvo que comenzar sobre el transfondo de la crisis mundial. El mérito del régimen consistió en que pudo invertir el curso de la inflación originada en el gobierno que había persistido durante muchas décadas, y que se había convertido en parte de la estructura de la economía chilena. Fue un proceso doloroso e impopular, y determinó inicialmente caídas del PBN y elevado nivel de desocupación. Pero permitió reflotar la economía sobre la base del mercado con la ayuda de préstamos del Fondo Monetario Internacional. Hacia fines de los años 70, cuando al fin pudo controlarse la inflación, se reanudó el crecimiento, y a comienzos de 1980, el Banco Mundial estuvo en condiciones de informar: ´En condiciones extraordinariamente desfavorables, las autoridades chilenas han promovido un giro económico sin precedentes en la historia de Chile`".

La fortaleza del estadista se prueba en la adversidad. Haber creado las condiciones que hicieron posible ese giro económico sin precedentes en la historia de Chile, aunque notable, no fue el mayor mérito del general Pinochet. Su figura adquirió una dimensión definitiva cuando la recesión mundial ocurrida en los primeros años de la década de los ´80 se abatió sobre un sistema que apenas recorría su etapa germinal. Hubo penalidades, desconcierto y dudas sobre su viabilidad; pero él, desde el timón, dispuso flexibilizar las medidas de carácter económico-social para paliar los efectos de la crisis sin por ello dejar de conservar un rumbo inalterable. Por eso, por no haber perdido jamás de vista el objetivo final, alcanzó el éxito y consolidó aquí la economía de mercado.[57]

Por cierto, el general Pinochet no fue el único estadista que tuvo que bregar con aquellas dificultades y muy pocos las vencieron. Una de estas notables excepciones, Margaret Thatcher, recordó en Chile que "uno puede elaborar y comenzar a aplicar las políticas correctas, pero si no se persevera hasta que sus beneficios se hagan sentir, todo será inútil. Ted Heath cedió ante los sindicatos. Obviamente, es mejor hacerlo en etapas. El año 1982 fue muy duro para mí, el peor, pues se hacían patentes los efectos económicos más adversos y no se percibía todavía ningún bene-

57 Sobre el rol cumplido por el presidente Pinochet en la situación de crisis económica, véase ARTURO FONTAINE ALDUNATE, *Los economistas y el presidente Pinochet*, Zig Zag, Santiago, 1988.

ficio. A fines de ese año, los beneficios económicos comenzaron a manifestarse. Pero la presión a la que estaba sometida para que retrocediera era colosal. Por eso fue que dije en alguna conferencia: "Esta dama no volverá atrás". Y seguimos adelante y salimos adelante. Pero sólo con absoluta perseverancia, y la convicción intelectual de que era lo correcto y que habríamos de tener éxito". [58]

Por la fecha en que Paul Johnson escribió su obra —la edición inglesa es de 1983— no estuvo en condiciones de señalar otra de las obras con significación histórica del gobierno que presidió el general Pinochet: la restauración de la democracia chilena. Un buen conocedor de la actualidad en esta parte del mundo, el argentino Juan Carlos Casas, ha llamado la atención sobre un hecho relevante: "Durante la mal llamada década perdida muchos y principales países de América latina recuperaron la democracia tras largos años de dictaduras militares. Sucesivamente Perú, Bolivia, Argentina, Uruguay y Brasil volvieron a ser gobernados por civiles elegidos democráticamente. Más tarde, el vitalicio general Stroessner era expulsado y otro militar, Augusto Pinochet, cedía la presidencia al electo Patricio Aylwin conforme al cronograma por él mismo establecido. En el centro del continente la dictadura sandinista perdía las elecciones. Y más al norte, en México, debilitado por largos años de crisis y la secesión de un grupo reformista, el PRI debía acudir al fraude para asegurar el continuismo. Era la señal de que el sistema debía evolucionar hacia la democracia. Pero si bien se había producido una impresionante revolución política, la década se cerraba sin que los nuevos gobiernos democráticos fueran capaces de salir del marasmo económico, salvo Bolivia y, por diferentes razones, Chile". [59]

En su interesante ensayo, Juan Carlos Casas analiza la realidad pendular que, como reacción a la influencia de la revolución cubana, trajo gobiernos militares a casi toda Latinoamérica desde mediados de los años ´60, ciclo que terminó en 1990. A su juicio, "la sorpresa mayúscula tuvo lugar en Chile. Ninguno de los tres candidatos presidenciales había obtenido la mitad más uno de los votos en las elecciones de 1970. Por atenerse a una antigua tradición o porque, partidarios de una vía no capitalista del desarrollo, se sintieran más próximos al candidato marxista Salvador Allende, que había obtenido pocos votos más que el conservador liberal Jorge Alessandri, los democristianos votaron por aquél en el Congreso, dándole así el triunfo. Ello permitió que por primera y única vez en el mundo, el marxismo-comunismo conquistara un gobierno por la vía democrática. El caos al que llevó a Chile decidió a las fuerzas armadas chilenas a desplazarlo violentamente en 1973. Su jefe, mezcla curiosa de autoritarismo y liberalismo, permanecería 17 años en el cargo y sería desplazado conforme a las reglas por él dictadas y aprobadas popularmente en un ple-

---

58 MARGARET THATCHER, "Margaret Thatcher en el Centro de Estudios Públicos", Estudios Públicos nº 55 (1994), pp. 65-80. La cita en p. 72.

59 JUAN CARLOS CASAS, *Nuevos políticos y nuevas políticas en América Latina*, Editorial Atlántida, Buenos Aires, 1991, p. 1. Vale la pena señalar que en el Prólogo indica lo siguiente: "Chile no debía incluirse en este libro. Por estar reservado a las democracias que, contrariando la ´conventional wisdom` de que sólo los gobiernos dictatoriales pueden encarar reformas estructurales, las están acometiendo. Pese a ser el país líder en lo último, le faltaba el pasaporte de entrada. Este lo ganó en las elecciones ganadas por Patricio Aylwin. En el tramo final fue derrotado

biscito. Y, caso aún más notable, sigue siendo el jefe del ejército. Me refiero, obviamente, a Augusto Pinochet Ugarte".[60]

Pues bien, según este autor, "el gobierno del general Pinochet se diferencia notablemente de los de todos sus colegas militares del continente salvo, hasta cierto punto, los brasileños. (...) He calificado a Pinochet como un presidente constitucional y dictador a la vez pues creo que por los extensos poderes que ejerció con poco o nulo control le cabe el calificativo de dictador. Paradójicamente éste no le correspondería conforme a la definición de dictador que hace su acendrado enemigo Gabriel Valdés, ex jefe de la democracia cristiana. Para Valdés ´dictador es aquel que se pone por encima de la ley`. Si bien Pinochet se colocó por encima de la ley al voltear a Allende, él creó una nueva legalidad, la constitución de 1980, a la que se sometió. (...) ´Pinochet modernizó a Chile, lo abrió al mundo, redujo funciones productivas del Estado innecesarias y costosas, modificó la cultura empresaria acostumbrada a vivir bajo la protección y las prebendas del Estado`. Quien me dijo esto no es un panegirista del ex dictador, hoy comandante en jefe del Ejército, sino el ya mencionado ministro Enrique Correa, ex dirigente máximo de los democristianos de extrema izquierda que se escindieron para formar el MAPU y que integraron la Unidad Popular, la coalición de partidos de izquierda que llegó al gobierno con el presidente Salvador Allende. Pero ´la derrota del 73 nos moderó y el exilio nos puso en contacto con otras realidades —me dijo Correa en la entrevista—. La evidencia de que no queríamos construir en Chile sociedades como las que tuve oportunidad de conocer a fondo en el este europeo, por su falta de libertad y el predominio burocrático, nos hizo preferir el socialismo a la española y francesa`— agregó Correa, quien es hoy miembro del Partido Socialista Unificado (PSU), segundo partido de la Concertación que gobierna a Chile. Pinochet tuvo un innato gusto por el liberalismo económico. Esta preferencia la demostró a lo largo de su gobierno, salvo un período breve durante la grave crisis de los años 1982 a 1984, pero, apenas sorteados los momentos más difíciles de la misma, retomó las políticas de los ´Chicago boys`, aunque esta vez aplicadas por alguien no perteneciente a esa cofradía: Hernán Büchi. De más está decir que en este crucial aspecto se diferenció nítidamente de sus colegas dictadores contemporáneos de América latina pues naturalmente se inclinaron por extender las funciones del Estado. (...) En el fondo, lo que importa en política son los resultados (´por sus obras los conocereis`) y los del gobierno de Pinochet confirman su preferencia por la libertad económica y por el Estado limitado en esta materia, pues ha dejado un país con un grado de libertad económica sin parangón en el mundo.[61]

---

en los comicios. Pero no sólo eso: el grande y sorprendente mérito de Aylwin y sus ministros Foxley y Ominami es no haber innovado en las políticas que llevaron a Chile al éxito económico y no haber oído los cantos de sirena de distribuir populísticamente las ganancias acumuladas. Lejos de ello, el nuevo gobierno tomó la casi insólita decisión de enfriar la sobrecalentada economía de 1989. La madurez que esto implica, la innovación que representa frente a las típicas políticas de los tiempos que hoy debemos calificar de antiguos y, además, el gran interés de las reformas llevadas a cabo durante el régimen pinochetista, me decidieron a examinar el caso chileno".

60 Idem., pp. 17-18.

61 Idem., p. 338-340.

Como se ve, en la difícil tarea de conciliar en Latinoamérica el establecimiento de un régimen democrático con el desarrollo económico y de este modo afianzar la libertad de las personas, el gobierno que presidió el general Pinochet fue una excepción. Tuvo éxito gracias a la profundidad y solidez de la obra realizada, pero tampoco se puede ignorar que en ese empeño se adelantó y ocupó un lugar de vanguardia, señalando a otros la dirección correcta de un proceso que hoy presenta un carácter general. Margaret Thatcher, entre otros estadistas de talla mundial, lo ha reconocido al afirmar que "a partir de mediados de los setenta, Chile no sólo aseguró las libertades económicas que el comunismo y la hiperhinflación habían amenazado: procedió a ampliar tales libertades. Y lo hizo en clara y abierta contradicción con lo que los expertos de la época sostenían en forma categórica. (...) Y lo más importante de todo, la libertad económica de Chile y de otros países se ha convertido en el fundamento más sólido posible de la democracia".[62]

No fue pues el suyo un gobierno simplemente restaurador de los equilibrios sociales, políticos y económicos quebrantados por la acción de las ideologías dominantes en la década precedente, sino más bien un movimiento encaminado hacia la construcción del futuro. Con él se inicia en nuestro país una dinámica que Toynbee, con la perspectiva de la historia universal, observó en algunos pueblos y en determinados períodos, al que llamó "la aceleración de la historia". Ese fenómeno se caracteriza por el veloz cambio que a veces ocurre en el estilo de vida de un pueblo, que de un salto penetra con notable optimismo en una nueva etapa de su evolución.

El mérito que al respecto cabe atribuir al general Pinochet es innegable; simplemente no se puede comprender el cambio de dirección y ritmo que ha tenido Chile sin apelar a su figura. Sin embargo, al parecer, los autores citados y muchos otros de su talla sólo han visto el beneficioso efecto logrado por las medidas aplicadas durante su gestión de gobierno, sin atender las causas profundas que hicieron posible el surgimiento de una nueva realidad para la nación. No basta con decir, aunque sea exacto, que en la vida social la propagación de la anarquía llama a su contrario, es decir, la tendencia al orden; y que éste se impondrá porque el orden es una cualidad en tanto la anarquía es un grave defecto, cosa que cualquier Ejército tiene en claro. Hay otros elementos, más profundos, que ayudan a comprender el rol histórico cumplido por el general Pinochet. Tres son, al menos, los factores sobre los que en definitiva se alza el magnífico resultado que hoy es ampliamente reconocido en todo el mundo.

En primer lugar, el general Pinochet puso a la nación en el centro de todos sus afanes y en esa dirección concitó el apoyo de sus compatriotas. La idea nacional, desvanecida en amplios sectores por la influencia de las ideologías globales, adquirió nuevo esplendor y volvió a ser el núcleo en torno al cual gira la convivencia de todos los chilenos. Esta es hoy la noción sustantiva, indiscutida por trascendente, que nos une por sobre cualquier diferencia natural. En adelante, nadie podrá volver

---

62 *MARGARET THATCHER*, "Los retos del siblo XXI", en Estudios Públicos n° 55 (1994), pp. 315-328. *Las citas en pp.* 317 y 319.

a herir el tronco que nos es común sin ser rechazado desde el momento en que lo intente y, lo que es realmente decisivo, sin que sea necesario recurrir a la fuerza legítima para impedirlo, porque ahora es convicción común que lo que conviene a Chile nos compromete a todos.

En segundo término, este espíritu nacional renovado y potenciado, sanamente orgulloso de sus logros, para enfrentar y vencer los futuros desafíos no pende ya de la suerte de hombre alguno: sus parámetros están institucionalizados. Por cierto, jamás se ha podido clavar la rueda del destino, pero sin duda alguna un sistema institucional moderno y vigoroso, como el legado por el Gobierno Militar, formaliza un cauce que permite encaminar los pasos hacia el porvenir con tranquilidad.

El tercer aspecto es el más importante y sirve de base a los anteriores. Las transformaciones emprendidas bajo la superior dirección del general Pinochet se hicieron conjugando lo nuevo con el más sólido de los cimientos: el consenso básico de la sociedad chilena. Se despejaron las amenazas que durante una década hicieron imposible la convivencia, se anudaron los vínculos de carácter permanente que la sustentan y se creó un nuevo orden de cosas que, lejos de inspirarse en una concepción artificiosa de los ideológos —cualquiera sea su signo y mérito— responde estrictamente a lo que los chilenos somos. De ahí, por cierto, sus posibilidades y limitaciones. Con un sentido muy claro de la realidad, él interpretó los principales anhelos de las capas medias de la población y forjó las condiciones que hacen posible su satisfacción. Mucho se ha avanzado en la consolidación de una sólida estructura social, pero queda todavía un largo camino por recorrer. Es indispensable seguir incorporando a la marcha de la nación los sectores marginales que aún perviven. Lo crucial es que se fijó el rumbo. En tanto se conserve, por la propia fuerza de las cosas el país en su conjunto será más estable, más próspero y más justo.

A la potente complementariedad de estos tres elementos se debe el mayor logro del presidente Pinochet, a saber, haber soldado el pasado de la patria con su presente, abriendo así la ancha puerta hacia su venturoso porvenir. A fin de cuentas, desde el 11 de septiembre de 1973 en adelante, los chilenos "han sabido elegir su senda con sabiduría. Espero se ciñan a ella, pues hacia donde ustedes marchen otros ciertamente les habrán de seguir". [63]

A medida que el tiempo vaya haciendo su trabajo y los viejos rencores se olviden, lo que quedará en pie será una obra nacional maciza, con vuelo propio, orlada por la fama y la gloria de su artífice, el general Augusto Pinochet Ugarte.

63 MARGARET THATCHER, "Los retos del siglo XXI", op. cit., p. 328.

REFLEXIONES FINALES

El afán de las últimas líneas de este ensayo es volver sobre algunos temas esenciales para la estabilidad democrática y otear el futuro; pero no constituyen un ejercicio académico de prospectiva ni una apuesta más o menos profética sobre eventuales acontecimientos. Con mayor modestia, se limitan a ofrecer un puñado de reflexiones personales, inspiradas en la observación de cómo se están desenvolviendo algunos temas importantes en nuestra sociedad.

Como es obvio, el porvenir constituye una incógnita. Sin embargo, contrariamente a lo que se suele creer, dista mucho de ser una hoja en blanco: el acervo del ayer lo prefigura. El pasado no determina el mañana pero lo condiciona, y a veces poderosamente. "El pasado es prólogo", escribió Shakespeare en *La Tempestad*.

La historia, humanamente hablando, no ocurre, sino que se hace. La construyen los hombres, todos ellos, con sus ideas, pasiones y decisiones cotidianas. Ese impulso va creando un tejido de relaciones e impulsos que se manifiestan al observador como una poderosa corriente que muestra los signos característicos de cada época y lugar. La historia no es, pues, un proceso mecánico. Pero tampoco es un proceso anónimo; el destino concede a algunos el privilegio de acuñar un contenido preciso y una dirección a la sociedad. En estos casos, su biografía se confunde con la historia de su pueblo. Para los chilenos, el general Augusto Pinochet Ugarte ocupa ese lugar protagónico durante el último tercio del siglo XX.

Estamos atravesando unos días confusos. Cierto malestar colectivo se palpa en el ambiente. Hemos perdido el optimismo que hace apenas unos pocos años nos llevó a superar las mayores dificultades. En gran medida ese efecto tiene su causa en que amplios sectores de la población, por no haber asimilado con grandeza la historia reciente, sufren una engañosa percepción de la realidad. La interesada manipulación de los hechos les ha envenenado el espíritu. Por eso, a manera de antídoto, la transmisión franca y leal del legado del Gobierno Militar, orientador y palpitante de actualidad, es en esta hora el mejor servicio que se puede prestar a las nuevas generaciones.

Pensando en ese servicio y de cara a la verdad histórica, surge de inmediato la primera reflexión.

1. El sentido del Gobierno Militar.

Para asegurar un porvenir limpio, sin medias verdades ni resentimientos ocultos que lo enturbien, la primera circunstancia sobre la que debe existir completa nitidez se refiere a la génesis, objetivo y resultado del Gobierno Militar.

Su génesis es tributaria de la década que lo precedió. Durante ella, el país fue sacudido hasta sus cimientos por dos revoluciones ideológicas superpuestas, la revolución de la tercera vía de desarrollo propugnada por el Partido Demócrata Cristiano y la revolución marxista leninista intentada por la Unidad Popular. Fracasaron ambas. Como resultado de sus empeños, dogmáticos y sectarios por definición, en 1973 la comunidad nacional yacía exhausta en medio del mayor desorden. Su aparato productivo había sido

arruinado y la población tenía que recurrir al mercado negro para asegurar su subsistencia. Las instituciones del Estado estaban paralizadas, desbordadas por un gobierno que situándose al margen de las normas constitucionales y legales preparaba activamente el asalto al poder total. El cuerpo social estaba desgarrado a un punto tal, que parecía inminente una guerra civil. Cuando el caos llegó a ese punto, las Fuerzas Armadas y Carabineros, última reserva moral de la nación, intervinieron decisivamente.

Su objetivo, en una frase, fue restaurar la patria. Poniendo término a un proceso de disolución que parecía irreversible, los hombres de armas se propusieron crear una situación de normalidad y establecer, institucionalmente, los fundamentos de un nuevo orden de convivencia nacional. Esto, como es natural, requería establecer unos principios básicos y luego desarrollarlos hasta el momento en que suficientemente afianzados no necesitaran la tutela militar para ser obedecidos.

Su resultado está sintetizado en la divisa ¡misión cumplida! Venciendo muchas dificultades, la patria fue restaurada. A las personas, encadenadas por estrechas concepciones ideológicas, les fue devuelta su libertad. La comunidad nacional fue reunida nuevamente en torno al respeto a sus tradiciones de antigua solera y apuntada, con una mentalidad nueva, hacia los desafíos del próximo siglo. Las bases económicas fueron reorientadas, privilegiando el valor de la iniciativa personal y ciñendo al ámbito estatal en un rol subsidiario, con lo que se alcanzó el progreso material sobre el que se asienta el desarrollo social. Por último, se dotó al Estado de un orden institucional eficiente y democrático.

Luego, en una acción ejemplar, dieron exacto cumpliento al itinerario constitucional aprobado diez años atrás y, sellando la transición, al mediodía del 11 de marzo de 1990 entregaron un país muy distinto del que habían tenido que hacerse cargo al amanecer del 11 de septiembre de 1973. Por todo ello, el sentido del Gobierno Militar es fundacional.

Con todo, no hay que perder de vista que siempre es necesario dejar que las instituciones reposen y den su fruto. En su día, tampoco fue automática la consolidación de las normas establecidas en las constituciones de 1833 y 1925. Conviene repetir una sensata observación de Alberto Edwards, "los regímenes políticos en forma no se decretan: su posibilidad depende de la existencia de elementos orgánicos vivos, y por tanto, anteriores y superiores a las constituciones escritas". [1] La sociedad ya cambió; resta esperar que su esfera política preste mayor atención a las señales que le envía y se adapte al cambio.

2. El general Pinochet fue un gran estadista.

La historia y la inteligencia político-estratégica son dos dimensiones que resultan esenciales para construir desde el presente el porvenir de la nación. Los que ignoran estas coordenadas está condenado a vagar, perdidos en el escenario de los acontecimientos locales y mundiales; otros le dirán lo que hay que hacer. Con razón se afirma que para la nave que no sabe de dónde viene y a dónde se dirige le resulta indiferente la dirección del viento.

---

1 ALBERTO EDWARDS VIVES, *La fronda aristocrática*, op. cit., p. 252.

Para quien tiene la grave obligación de orientar el futuro de su nación, para el estadista, la comprensión de estas cosas aparentemente sencillas resulta crucial. Un estadista no es una veleta, sino más bien, simultáneamente, un buen vigía y un buen timonel. Es lo suyo interpretar el instante concreto apoyado en las herramientas intelectuales recién indicadas e imprimir su poderosa voluntad al curso de los acontecimientos. La prudencia es su virtud; y prudencia no es pusilanimidad, sino saber en cada momento lo que se debe hacer.

En un una amplia mirada de conjunto, resulta evidente que sus condiciones de estadista fueron la base del éxito que para su patria alcanzó el general Augusto Pinochet desde el gobierno del Estado. Profundo conocedor de la historia y de la geografía del país, como asimismo de la mentalidad de su gente, le abrió un cauce de libertad y prosperidad desde un seguro fundamento geopolítico. El sello de sus mayores decisiones trasunta ese afán de futuro, de lo que la nación puede y merece llegar a ser, pero asentado en la realidad de lo que efectivamente ha sido y es.

De otra parte, también es propio del estadista velar por el bien común, permaneciendo ajeno a los intereses de capilla y a las luchas intestinas. La formación militar es una escuela de esa actitud de abnegado servicio a la patria. Como escribió un gran soldado y estadista, el general De Gaulle, "el orden, la costumbre de no asombrarse, incluso esa especie de soledad que, a fuerza de una larga habituación, llega a ser como una segunda naturaleza de las tropas escogidas: he ahí los antídotos a nuestras ponzoñas internas".[2]

Distingue al estadista una visión totalizadora de los acontecimientos. Por eso las soluciones que propone no atienden a los detalles, no se acomodan a las urgencias de lo inmediato, sino que abarcan cualquier situación en su conjunto. Con sólo poner término a la Unidad Popular, el general Pinochet se habría ganado un sitial en la historia. No le bastó. Quiso resolver la coyuntura que impedía el acceso al porvenir que, acorde a su gloriosa tradición, Chile merecía. De ahí su empeño en renovar la energía moral de las esencias de la nación, fruto de lo cual es la sociedad actual y la institucionalidad que la rige.

Por último, es también propio del estadista una buena dosis de seguridad en sí mismo, alimentada en la certeza de estar representando a los elementos más sanos del cuerpo social. Esta condición, que no es soberbia sino más bien humilde sentido de la grandeza de la causa que se sirve, constituye la raíz del liderazgo. Pues bien, el general Pinochet tiene la peculiaridad de no querer parecerse a nadie. En su estilo, de cuño militar, siempre será él mismo. Ciertamente hay, en el honor militar, algo que no cede a los extravíos de la opinión. En un país cuyos núcleos dirigentes muchas veces fueron meros divulgadores de recetas foráneas, atentos a lo que se piensa y dice de ellos en otras latitudes, el general Pinochet impuso su estilo, traducido luego en una concepción y un itinerario político que obedecían exclusivamente a las necesidades de Chile. Y a fin de cuentas la nación le siguió... aunque a tres pasos de distancia.

---

2 CHARLES DE GAULLE, *El Ejército del porvenir*, Editorial Sur, Buenos Aires, 1940, p. 30.

3. El drama de negar lo objetivo y volver al pasado.

A pesar de las advertencias de la razón y de los buenos propósitos, no es cosa sencilla desprenderse del peso de los acontecimientos del día. La urgencia de lo inmediato tiende a inmovilizarnos en el presente y no pocas veces a volvernos al pasado, ahogando de paso todo impulso creativo de cara al porvenir.

Es innegable que todavía pesan en nuestra comunidad algunos factores que la empujan, de manera ciega y torpe, hacia posiciones que ya había superado. Esta actitud regresiva se hace patente, entre otras manifestaciones, en la actitud que mueve a concebir una falsa historia de las últimas tres décadas, presentando los hechos en forma incompleta y sesgada, con el evidente propósito de hacer renacer en la conciencia colectiva la llama de las utopías que una vez nos condujeron al desastre.

En su lucha por sacar adelante a Chile, el Gobierno Militar debió enfrentar la oposición del comunismo internacional, en esa época un poder formidable en el mundo. Pero esta situación se modificó bruscamente por el derrumbe del bloque soviético. No sólo desapareció el poderoso motor de la fuerza que nos agredía impulsando una revolución violenta, sino que los postulados leninistas cayeron en el descrédito más absoluto. No hay nostálgicos de la tiranía roja en las sociedades que la sufrieron y se evaporó la prestigiosa aureola que adornó a tantos intelectuales que, por supuesto, vivían cómodamente en naciones libres. Pero una cosa muy diferente es que también haya desaparecido el afán mesiánico, la ilusión de una redención aquí en la tierra que un día encarnó esa ideología. No se debe ignorar el desafío intelectual que representa la vigencia del pensamiento gramsciano, una estrategia de dominación a largo plazo que ha encontrado cálida acogida en muchos sectores influyentes de la sociedad contemporánea. Si no se le opone una respuesta de carácter ético, clara y franca, llegará el día en que habrá que lamentar la desintegración subrepticia de los valores morales que han constituido la base de nuestra civilización.

No queda, entonces, más remedio que enfrentar esas ideas disolventes. A pesar de todas las comprobaciones históricas sobre su cruel ineficacia, ellas no han muerto. Están latentes y buscan las condiciones que les permitan perpetuarse, aprovechando al efecto los disímiles niveles económicos y culturales que existen en cualquier sociedad. La gente que profesó durante tantos años en la izquierda —y a veces con marcado fanatismo— no puede cambiar facilmente sus categorías mentales. Algunos persisten en el error, otros se metamorfosean, incluso los hay que pasan al bando contrario con el ardor del converso; ninguno recupera así su libertad de conciencia. Pero es preciso convivir con todos ellos y apostar a que por la fuerza de las cosas algún día madurarán. Con todo, indudablemente hay personas que se han renovado con sinceridad, reconociendo que su anterior postura en nada contribuyó al bien de la nación y están dispuestos a aceptar, más allá de las simples fórmulas retóricas, el contenido de la democracia como forma de convivencia política.

A una gestión de gobierno cumplida por las Fuerzas Armadas y Carabineros en cuanto tales, es decir, institucionalmente, le está vedado tener descendencia propia en el sistema pluralista que ellos mismos instauraron. Por su propia naturaleza representan a la nación en su integridad, en su voluntad de ser, tanto en la conserva-

ción de la tradición patria como respecto a garantizar el porvenir del pueblo chileno en su conjunto; los partidos, como lo indica el término, son por definición apenas una parte del cuerpo político. Conviene, pues, al bien común que el estamento militar, una vez cumplida su misión, deje el campo a las organizaciones que en circunstancias normales compiten por el poder. Sin embargo, hay una cierta ironía en que habiendo alcanzado pleno éxito en la tarea que se propusieron, hayan entregado finalmente el poder prácticamente a los mismos que, en razón de su incompetencia y tétricos designios, habían sido desplazados tres lustros atrás. Es verdad que entretanto la realidad del país y del mundo se modificó y por tanto son muy distintas sus posibilidades. Pero también lo es que el conglomerado de izquierda en el gobierno, sólo a contrapelo administra un orden de cosas renovado en un sentido contrario a sus más íntimas convicciones. Pareciera que de tanto invocar el retorno a la democracia —la misma que destruyeron y que los militares volvieron a levantar bajo el liderazgo del general Pinochet— acabaron por convencerse de sus bondades. Bueno es que así sea. A condición, claro está, que tengan la honestidad de aceptar su responsabilidad en el quiebre de la convivencia nacional y de reconocer el valor de la tarea llevada a cabo por las instituciones castrenses. Si eso no ocurre, si no hay una limpia y objetiva conciencia histórica de nuestra experiencia reciente en los círculos dirigentes, viviremos alimentados por falsas consignas y lamentablemente volveremos poco a poco al pasado, a sus tensiones y a sus desgracias.

4. ¿Por qué desmantelar la institucionalidad vigente?

El paralelo puede parecer extraño a primera vista, pero es notable que desde 1990 en adelante la vida institucional de Chile se esté pareciendo mucho a la peripecia de la IV República en Francia. Los escándalos se suceden, el pulso vital languidece, la mediocridad va penetrando en los más diferentes ámbitos de la actividad pública y el horizonte colectivo se achata. Entre los jóvenes la apatía es tan grande que ni siquiera se inscriben en los registros electorales. Los partidos políticos, mientras tanto, se agitan en una pecera, ajenos a las inquietudes reales de la población. El estamento militar, preocupado, toma nota. Efectivamente, para iluminar algunos de los enigmas de nuestro actual orden de cosas, conviene leer la obra que Frossard dedicó a la IV República.[3]

Quizás el más llamativo síntoma de esta desconcertante situación estriba en que la coalición de gobierno, actuando por completo al margen de lo que verdaderamente interesa a la ciudadanía, insiste una y otra vez en desnaturalizar o suprimir los poderes neutros, esto es, no partidistas, del ordenamiento constitucional. La consagración de un régimen partitocrático es ya una realidad entre nosotros. Sólo persisten algunos espacios que escapan a la tiranía de la razón partidista. El punto es relevante, entre otras razones, porque el establecimiento de poderes neutros es uno de los rasgos principales que diferencian la actual Carta Fundamental de la de 1925, garantizando un equilibrio que fortalece y proporciona estabilidad al orden

---

3 ANDRÉ FROSSARD, *Histoire paradoxale de la IV République*, Grasset, París, 1954.

político. Se trata, pues, de volver atrás. Hasta hoy la Concertación no ha tenido éxito en su empeño, pero como dispone del poder y con él hace presión sobre la oposición, el clima político se ha enrarecido y la estabilidad del país en el largo plazo se vuelve cada vez más incierta.

Bajo el lema "democratizar la institucionalidad" —un propósito por demás discutible— lo que la Concertación ha tratado de hacer es destruir las barreras protectoras del orden político y la tranquilidad social, las mismas que han hecho posible el progreso del país hasta situarlo al borde mismo del desarrollo. Ya es un tópico afirmar que vivimos una oportunidad histórica para consolidar lo avanzado y proyectarnos hacia un futuro venturoso. ¿Por qué, entonces, ese afán suicida que nos arrastra al punto de partida?

El argumento de las fuerzas de izquierda consiste en que es necesario recuperar el carácter democrático que tenían las instituciones chilenas antes del 11 de septiembre de 1973. Evitando cuidadosamente, por justificable pudor, calificar cuánto de democrático restaba a las instituciones durante la época de las revoluciones ideológicas, se busca ahora la supresión de aquellos organismos y procedimientos que la Constitución contempla para evitar que pueda volver a ocurrir una situación tan crítica y peligrosa para el futuro de la comunidad nacional como la resuelta aquél día. A las instancias que cautelan el legítimo espíritu de la Constitución las llaman despectivamente "enclaves autoritarios", denominación que refleja la contrariedad de los que ven en ellas el obstáculo que les impide hacer tabla rasa con facilidad —puesto que nada se prohibe arbitrariamente al poder político, sólo se le imponen ciertos prudentes requisitos a su acción— de los equilibrios y frenos que sustentan la democracia y evitan que sea pasto de la demagogia. La perseverancia desplegada en este intento es inexplicable, salvo que obedezca a motivos subalternos, meramente electorales, o que sirva para mantener unida a la Concertación.

Para crear el ambiente propicio a sus designios, han procedido a una manipulación nada ética de la realidad, falseando la verdad histórica hasta el punto de hacerla irreconocible para los más jóvenes. Un capítulo entero, lo vivido por una generación desde mediados de los años ´60, se ha tornado incomprensible incluso para sus protagonistas. Pocos en el gobierno parecen reparar en que su propia legitimidad descansa en la Constitución que desean modificar. La confusión es tan grande que ahora, frente a una realidad de relativa holgura económica, no faltan los que aseguran que ella es fruto del retorno a la democracia, lo que equivale a poner la carreta delante del caballo. Hay un pecado original en este intento de blanquear la historia reciente y soslayar de ese modo unas responsabilidades vergonzosas: para dar cuenta de nuestra actual condición jamás se alude a lo ocurrido aquí durante la Unidad Popular ni se recuerda en qué circunstancias llegó al poder. No se trata, por cierto, de vivir hurgando una fea herida; pero hay que reconocer que los efectos se explican por sus causas. Y en razón de las causas que llevaron al quiebre institucional es que conviene que sus mecanismos de resguardo se conserven intactos.

Así las cosas —pasando por alto cualquier motivo coyuntural, dado que el tema es serio— cabe preguntarse, ¿por qué en sectores donde se supone predominan las

personas inteligentes ocurre el contrasentido de preferir la añoranza de un pasado de fracasos en lugar de optar por la consolidación de lo que ha demostrado ser exitoso? Cualquier respuesta debe considerar al menos tres factores: la persistencia de una mentalidad socializante, el resurgimiento de la partitocracia y el resentimiento frente a la obra del Gobierno Militar.

Sin duda alguna, la prédica de las ideas socialistas caló hondo en el mundo. No es preciso ser profeta para adivinar que el siglo XX será caracterizado como un tiempo en el que la humanidad cayó en el socialismo y a duras penas se lo sacudió. Comunistas, socialistas marxistas, social demócratas, nacional socialistas, social cristianos y otros actores de la escena política en este siglo comparten, con diferente intensidad, ese rasgo común. En Chile el socialismo modeló la mentalidad de amplias capas de la población y por ello los principios de iniciativa individual, Estado subsidiario y economía de mercado son todavía muy superficiales. Se entiende, entonces, que para muchos la obra del Gobierno Militar y la figura del general Pinochet simbolicen el fin de una ilusión largamente acariciada. Bajo su firme conducción y sin mayores contemplaciones para los intereses de grupos, velando sólo por el desarrollo y la seguridad de la nación, ésta fue compelida a modernizarse. A no pocos de los que hoy detentan responsabilidades políticas hubo que arrastrarlos hacia el umbral de un tiempo nuevo, en el que no hay espacio para sus añejas quimeras. Debe resultarles ingrato reconocerlo; pero no parece lógico su empeño en recorrer de nuevo el mismo camino.

El segundo factor que influye en la determinación de un sector de la clase política para modificar sustancialmente el orden constitucional, dice relación con la partitocracia. Sobrepasando el espíritu de las fórmulas institucionales, es innegable que desde 1990 asistimos a un recrudecimiento de esta antigua enfermedad nuestra. No es casualidad que el primer acto significativo de la etapa entonces inaugurada haya sido poner término a la participación apolítica de los órganos locales en la esfera comunal. Implacablemente, cada espacio de relevancia pública tiende a ser controlado por los partidos. Frente a esta realidad, sólo hasta cierto punto inevitable, los "enclaves autoritarios" son una valla incómoda para los cenáculos partidistas, pues, lejos de su influencia, éstos garantizan la independencia de unas instituciones que resultan esenciales para el buen orden social y político.

Finalmente, aunque no lo digan de frente, hay individuos y grupos que participan en esta empresa de demolición porque, simplemente, les resulta inaceptable que las Fuerzas Armadas y de Orden hayan sido las que crearon la institucionalidad vigente. Aquí se suman la vanidad, el resentimiento y la impotencia. Malos consejeros para una política de Estado, qué duda cabe.

Todo lo anterior explica, pero no justifica, el tiempo y energía que se desperdicia en el intento de desnaturalizar la institucionalidad vigente. Todavía no hemos llegado a un punto de crisis, pero si queremos evitarlo no hay que seguir bogando hacia la playa, ¡hay que ir mar adentro!

5. Lo que se arriesga al volver al pasado.

El progreso experimentado en los diferentes los campos de la actividad nacional durante la última década se basa en las decisiones estructurales tomadas durante la presidencia del general Augusto Pinochet. Esto es reconocido por infinidad de personas que miran las cosas en forma objetiva, tanto dentro del país como más allá de sus fronteras. En alguna medida, Chile es un modelo. Ya nadie duda que la creación de un sistema de mercado empuja al establecimiento de un sistema democrático. Incluso la gran potencia imperialista que durante largos años fuera nuestro mortal enemigo, también incursiona ahora en el ámbito de la libertad. Empero, no ha habido una cabal comprensión de esta realidad por parte de los sectores que fueron los más tenaces adversarios del Gobierno Militar. Paciencia; la realidad terminará por imponerse. Quiéranlo o no, el mayor mérito de las administraciones posteriores ha sido matener incólume lo esencial del modelo de desarrollo instaurado durante el régimen militar. Lo inquietante es que, por no ir muy convencidos, los gobiernos civiles han carecido de la energía que se requiere para profundizarlo y hacerlo rendir en plenitud.

Si bien es cierto que el país continúa avanzando, todavía es mucho lo que hay que hacer para asegurar el desarrollo. En esa dirección, hay que advertir que el sistema no puede vivir eternamente sólo gracias al impulso recibido hace ya bastante tiempo. Es necesario que los principios y políticas que han tenido éxito sean proyectados con mayor énfasis. En otras palabras, el sector público —porque allí está la rémora, el sector privado, auténtico motor del sistema, hace lo suyo razonablemente bien— debe intensificar su acción en las materias que, al menos retóricamente, indica cada cierto tiempo como prioritarias. Para decirlo en una frase: el gobierno debe superar los complejos que entorpecen su cometido y hacer sin más lo que sabe debe hacer ya, y no aceptar interferencias que le llevan a entretenerse en un inútil intento de volver atrás.

El efecto benéfico de tres lustros de crecimiento sostenido comienza a ser percibido como algo natural por la ciudadanía. Afortunadamente no hemos debido enfrentar mayores contratiempos y por eso hemos olvidado lo terrible que es vivir en medio de una crisis. Ya casi nadie recuerda que no hace tanto tiempo estábamos en bancarrota y el presidente de la época reconocía que sólo quedaba harina para tres o cuatro días. Costó mucho salir del hoyo al que nos empujaron quienes enarbolaban unas recetas de economía ideologizada y sería estúpido recaer mañana por falta de voluntad creadora de quienes hoy detentan las mayores responsabilidades públicas. No hay que consentir en la vuelta atrás, en el retorno de la mediocridad. Aunque al parecer la mediocridad es algo sublime para los mediocres.

El bienestar de todos los chilenos es hoy una meta posible de alcanzar. Pero el logro de esa meta inclaudicable —y lo es, ante todo, por un imperativo moral— exige conservar las condiciones de paz social y estabilidad política que Chile ha ido alcanzando, paulatinamente y con enorme esfuerzo y sacrificio desde el 11 de septiembre de 1973 en adelante. La génesis del ambiente de normalidad en que hoy vivimos es indisociable de la experiencia sufrida por la nación, cuando, gravemente enferma, fue

rescatada por los militares desde el caos de los estertores finales, al punto mismo de su disolución en una guerra civil. Nunca debiéramos olvidar que el camino que condujo al éxito se recorrió a pesar de haber sufrido los efectos de dos severas crisis económicas mundiales, a pesar de una aplastante campaña de desinformación montada en el exterior y a pesar de la acción desquiciadora de la violencia terrorista. El orden institucional que hizo posible mantener el rumbo a pesar de la adversidad representa la mayor herencia con que el gobierno presidido por el general Pinochet dotó a la democracia y al desarrollo que él mismo concibió y plasmó.[4]

El bienestar y la paz han sido las aspiraciones permanentes de la generalidad de los chilenos, y con su esfuerzo mancomunado, entusiasta y perseverante, será posible satisfacerlas. Para ello, hay que repetirlo, conviene fortalecer la institucionalidad en vez de diluirla en vagos propósitos reformistas, actuando con un criterio que supere a las estrechas banderías políticas, de manera que nadie se sienta excluído. Las divisiones del pasado, ya en gran parte superadas, no deben ser reavivadas artificialmente. En esta gran empresa colectiva el revanchismo está fuera de lugar, y dañan la causa de la patria aquellos que lo estimulan. El triste "ni perdón ni olvido", debe ser desterrado de los corazones y de las mentes.

Pocas veces en la historia de Chile se han dado mejores condiciones para el desarrollo que las existentes al concluir el Gobierno Militar. Si se capitaliza lo alcanzado hasta ese momento, añadiendo por supuesto lo que a partir de ahí se ha hecho, y la nación no se desvía de la senda del crecimiento económico y la integración social, en adelante las diferencias ideológicas que nos dividieron en el pasado y nos llevaron a la ruina sólo tendrán un sentido pedagógico: serán una dramática enseñanza de lo que no hay que hacer.

El mundo atraviesa una etapa marcada por un frenético dinamismo. El tiempo vital se ha acelerado en todas partes. Este rasgo se refleja también en la economía. Para América Latina, salvo Chile, los años ´80 fueron una década perdida. Todos quieren recuperarse y algunos lo están logrando. Mientras tanto, balbuceantes, estamos cediendo la ventaja inicial. Recientemente se han escuchado opiniones de expertos que no pueden dejarnos indiferentes. Así, por ejemplo, Arturo Porzecanski, economista jefe para las Américas de ING Baring, en un seminario organizado en Santiago por El Mercurio y el Council of the Americas, afirmó que "en otras palabras, Chile ha dejado de ser el modelo de la región para la nueva ola de reformas, y mientras los demás avanzan, Chile vive de las cosechas de lo que ha plantado antes y la brecha competitiva se va cerrando".[5] Ese juicio causó molestia en ciertos círculos del poder, pero no movió a mayor reflexión. No nos engañemos: si nos dejamos influir por los que pretenden conducir el futuro mirando fijamente atrás, junto a ellos nos convertiremos en estatuas de sal. Ese es el riesgo que hay que evitar para no perder esta oportunidad única de saltar al desarrollo.

---

4 Según el informe preparado en 1991 por Naciones Unidas, evaluando la calidad de vida en 160 países, Japón ocupaba el primer lugar y Sierra Leona el último. Chile figuraba en el lugar 38. En América Latina sólo le superaba Uruguay. Utilizando los mismos parámetros, ¿dónde estábamos en 1973? ¿Y hoy?

5 El Mercurio, 25.6.97, pp. A1 y 11.

Tampoco se puede perder de vista que esta oportunidad histórica no es un don gratuito, sino el resultado de un esfuerzo tenaz de todos los chilenos. La pérdida de lo ya alcanzado no afectaría sólo a algún sector de la ciudadanía sino a toda la nación. Desacelarar el ritmo del progreso como consecuencia de la pérdida de confianza de los agentes económicos, por el deterioro de la disciplina laboral, por el aflojamiento de los vínculos que nos hermanan en un destino común o por el desprestigio de las instituciones fundamentales, constituiría una invitación a reeditar una época desoladora, para salir de la cual no pocos ofrendaron sus vidas. Tampoco a ellos se les debe olvidar en esta hora.

6. El espíritu y la letra.

En estricto rigor, el orden institucional del Estado tiene carácter instrumental. Con esto se quiere significar que no es un fin en sí mismo, sino un medio que está al servicio del cumplimiento de los fines de la nación y de sus ciudadanos. No es otro su propósito en orden al bien común. En este sentido, llegada que sea la hora de juzgarlo, sólo se ha de atender a si sirve o no a ese propósito.

Ahora bien, el que está vigente en Chile no surgió de una especulación teórica ni del acuerdo convencional de una de sus generaciones. Aunque es cierto que sus disposiciones reflejan sabiduría política y jurídica, y también lo es que su documento capital fue aprobado por la mayoría de los ciudadanos, en último término su legitimidad se debe a que resulta consistente con la el consenso básico de los chilenos y recoge sus experiencias del pasado inmediato, habiendo demostrado hasta ahora su utilidad para encauzar el proceso de vida de la nación. Pero, de cara al futuro, para que siga siendo útil, es necesario prevenir las fisuras que puedan aparecer entre su letra y su espíritu.

Por el propio peso de la evolución de las sociedades, es natural que a lo largo del tiempo se produzca cierta distancia entre el espíritu y la letra de su orden institucional. Una vez olvidados los momentos de peligro, se suele tener una imagen más o menos idílica de cómo es la realidad de la vida y de las cosas. Por inadvertencia, cuando menos se piensa, ocurren las recaídas. Además, ninguna estructura institucional es perfecta, como tampoco lo son los hombres que la interpretan y aplican. Por eso, en definitiva, la calidad de cualquier régimen político —sea éste monárquico o republicano en su forma y democrático o autocrático en su temperamento— depende de las virtudes cívicas del pueblo, y en un grado especial, de su arraigo entre las élites rectoras. Toda virtud es un hábito, hay que recordarlo, un comportamiento habitual que tiende al bien, y en este caso, al bien común.

Cabe entonces preguntar: el proceso de restauración nacional que culminó el 11 de marzo de 1990, ¿es sentido sólo como un positivo cambio de las estructuras estatales o también se han renovado los hábitos políticos de los ciudadanos y de sus dirigentes?

El tiempo transcurrido desde que el Gobierno Militar entregó el poder tras cumplir la misión que justificaba su presencia, aunque todavía escaso, ya hace temer que al nuevo orden institucional le falte un alma también nueva. Diversos síntomas manifiestan la tenaz persistencia de algunos de los malsanos hábitos del pasado. Hasta cierto

punto el fenómeno es justificable porque muchos protagonistas de la vieja política —cupular, sectaria y miope— todavía están activos. Es posible que, al cabo, la renovación de los grupos dirigentes afiance sin mayor trauma lo que tanto costó edificar. Lo importante es avanzar con decisión hacia esa meta y que en el intertanto se evite su prematuro desmantelamiento.

Sería muy triste que por falta de renovación en los hábitos el espíritu y la letra de las instituciones pudieran llegar a ser contradictorios. Si así llega a ocurrir, más temprano que tarde surgirá irremediablemente otra grave crisis. Y ante ella, las fuerzas encargadas constitucionalmente de garantizar el orden institucional de la República no podrán permanecer indiferentes.

7. La estabilidad y el general Pinochet.

Teniendo a la vista las consideraciones precedentes, queda de manifiesto la importancia que tuvo la permanencia del general Augusto Pinochet en el mando de la principal fuerza militar del país: su mera presencia contribuyó a mantener el orden institucional. La historia muestra que el tránsito desde un gobierno autoritario a otro plenamente democrático siempre es difícil. Aunque aquél haya tenido éxito —lo cual ciertamente constituye una excepción— los deseos insatisfechos pueden convertirse en un alud que arrasa sus frutos, trastornando el orden de vida de la comunidad nacional. Ya lo vivimos cuando el 26 de julio de 1931 el general Carlos Ibáñez resignó el poder. En esa oportunidad, tras un año caótico, nuevamente tuvo que intervenir el Ejército para volver las cosas a la normalidad. El prestigio del general Pinochet, puesto al servicio de la obra fundacional que el mismo encabezó, ha sido la silenciosa y eficaz garantía de la conservación de los pilares de la pacífica convivencia entre los chilenos. Su recia personalidad fue un factor disuasivo de los revanchismos y afanes de cambio más o menos anárquicos que han pugnado por surgir. Mientras tanto, a su sombra, esa institucionalidad y la mentalidad que le da vida, se van asentando.

Los años que el general Pinochet ha dedicado al cumplimiento de dos altísimas funciones públicas después de dejar la Jefatura del Estado, en el Ejército y en el Senado, constituyen un último servicio a la patria. La dignidad de su comportamiento y la colaboración leal que desde allí ha prestado a las autoridades, enaltecen la noble tradición militar y sin duda servirán de ejemplo a los soldados del futuro.

8. El Gobierno Militar, ¿fue un paréntesis en la historia?

Con inexcusable liviandad, a veces se dice que el Gobierno Militar, en tanto régimen de excepción, no pasa de ser un paréntesis en la historia política chilena. Hay sobradas razones para afirmar que ello constituye un error de perspectiva, y por su significación, un error que se debe rebatir.

En efecto, según el Diccionario de la Real Academia, se entiende por paréntesis una oración o frase incidental sin enlace necesario con los demás miembros del período, cuyo sentido interrumpe y no altera. Cuando se aplica antojadizamente este

término en nuestro ambiente político, se subentiende que la situación existente al 11 de septiembre de 1973 podría haber continuado en sus líneas arquitectónicas y luego entroncado, con naturalidad, en la realidad posterior al 11 de marzo de 1990. En otras palabras, se omite el conjunto de acciones que enlazan el proceso de vida de una nación desde que estuvo sumida en la crisis más honda que sea posible imaginar, en 1973, hasta el momento en que pudo desenvolverse con naturalidad, en 1990. Se dice, pues, que el espacio intermedio entre ambas cotas carece de relación causal con el antecedente y con su consecuencia. El Gobierno Militar, entonces, habría surgido por simple arbitrariedad y no habría incidido en modo alguno en el desarrollo evolutivo de la convivencia nacional. El cambio evidente del desorden social, la ruina económica y el desplome de las instituciones, trocadas en armonía social, progreso económico e instituciones respetadas y eficientes, habría ocurrido por arte de magia, al mero conjuro de la palabra democracia.

Pensar de ese modo es negarse a ver lo que aquí ocurrió. La evidencia histórica, huelga decirlo, apunta en otra dirección.

Con todo, más allá de una disputa académica —y por cierto más arriba de la pasión política del momento— el tema es interesante porque si se considera al Gobierno Militar como un simple paréntesis, por ejemplo, como un interludio de preeminencia del interés nacional entre dos fases igualmente partidistas, se corre el riesgo de borrar de la mente colectiva la experiencia acumulada. No es otro el primer paso para reincidir en los errores y en los horrores que hicieron inevitable la intervención militar. Y es de suponer que nadie en su sano juicio desea volver a caminar en esa dirección.

9. La violencia contra Chile.

Resulta innegable que la violencia ilegítima es el factor que más contribuye a destruir el consenso básico de un pueblo. Otro tipo de dificultades pueden erosionarlo, incluso gravemente; pero la violencia torna imposible la convivencia. La paz social, el desarrollo y la integración nacional pierden todo sentido cuando los violentistas logran imponer su voluntad al resto de la población. De ahí que la primera obligación del Estado sea evitar que ello pueda ocurrir.

Los soldados profesionales, en cuanto tales, no tienen enemigos personales. No estamos en la Edad Media, cuando los conflictos señoriales eran resueltos por guerras privadas. El Estado-Nación, surgido en Europa durante el siglo XVI, se caracteriza, precisamente, por reclamar para sí, y en exclusiva, el uso de la fuerza de las armas. En consecuencia, la emplea legítimamente y en forma institucional para defender su integridad —la del Estado-Nación, se entiende— ante la agresión bélica del enemigo externo o del subversivo interno.

Ahora bien, para dar solución a la crisis moral, política, económica y social que sacudía a Chile bajo la Unidad Popular, era preciso, ante todo, asumir el control militar del país. Ese objetivo constituía un imperativo porque el gobierno de la época, de acuerdo a sus postulados marxista-leninistas, en su empeño por conquistar el poder total, había impuesto al país el uso de la violencia como herramienta política, creando al efecto diversos grupos armados con sus partidarios y enmascarando con

burdos pretextos la internación de material de guerra y la llegada de personal extranjero adiestrado en la subversión. Las brigadas de choque de los partidos de izquierda, el caso de los bultos cubanos y la presencia de asesores extranjeros desplegados en las empresas estatales, son un ejemplo de lo que se afirma. Ante esta situación, a las instituciones armadas no les quedaba otra opción que derrotarlos o someterse. Los batieron en lucha abierta, pero no pudieron impedir que una parte de sus efectivos se sumergiera e iniciara, desde las sombras, una guerra irregular.

De este modo se produjo aquí la expresión más terrible del conflicto armado, la que coloca a las tropas regulares frente a las más duras exigencias, puesto que, por lo general, sólo están preparadas para enfrentar fuerzas semejantes, combatiendo de acuerdo a las normas que regulan la guerra clásica.

El problema que representa el terrorismo subversivo es nuevo, pero no tanto como se suele imaginar. El comunismo lo incluyó entre sus posibilidades de acción y elaboró sus presupuestos doctrinarios con un refinamiento imposible de igualar. La Unión Soviética, apenas establecida, creó los órganos operativos destinados a su aplicación dentro y fuera de sus fronteras. Desde el punto de vista del Derecho Político, Carl Schmitt, en su obra El Partisano, advirtió los insolubles dilemas que plantearía al Estado el surgimiento de esta amenaza letal a la pacífica convivencia de sus ciudadanos. La realidad chilena, por la dependencia extranjera de los subversivos, fue todavía más compleja.

Para tener éxito en el control de la actividad violentista, y de este modo proteger el normal desenvolvimiento de la vida de la población, se organizó aquí una fuerza integrada por miembros de las Fuerzas Armadas y Carabineros, que pronto contó con el concurso de civiles. Ese es el orígen de la Dirección de Inteligencia Nacional, que como órgano superior de inteligencia cumplía en su esfera de competencia, además, otras funciones.

Durante todo el tiempo en que el Gobierno Militar estuvo en funciones, se logró mantener a raya la subversión, aunque, claro está, esto no significa haber anulado por completo las acciones terroristas. A pesar de la magnitud alcanzada por esta guerra subterránea, la nación normalizó su proceso de vida, profundamente desquiciado durante los mil días de Allende. Bajo el amparo de aquella fuerza de seguridad, la población llevó adelante la reconstrucción del país, luego emprendió el franco desarrollo y por último ejecutó una admirable transición a la democracia que culminó el 11 de marzo de 1990.

Hay quienes justifican la violencia subversiva en tanto ella se opone a un gobierno autoritario, sin importar las razones ni circunstancias en que éste haya debido asumir el mando supremo del Estado ni el hecho de que cuente con la adhesión de la masa ciudadana, o si se prefiere, sin importar que prácticamente toda la población rechace los métodos terroristas. La mayor debilidad de esa argumentación reside en su inmoralidad, pero tampoco se condice con la evidencia empírica. En efecto, también algunas sociedades de impecable factura democrática y alto grado de desarrollo son víctimas de esta clase de violencia. Cómo se podría olvidar lo ocurrido en Alemania Federal, Italia, el Ulster británico y Espa-

ña, por ejemplo, durante la década de los ´70. ¡Y qué decir de lo que pasó en Chile después de 1990!

Otros, más sutiles, han hecho una distinción bizantina: subversivos y rebeldes. Con cierta pena hay que decir a estos últimos que en realidad fueron usados por los primeros. Ellos, invocando los más elevados principios de la dignidad humana —que por cierto los subversivos no sólo no comparten sino que les parecen dignos de mofa— les proporcionaron el aura moral y la defensa jurídica que necesitaban con desesperación para cumplir sus oscuros designios. No es suficiente disculparse ahora diciendo que los hermanaba su oposición a lo que consideraban una dictadura. Se prestaron a un juego que les puso en contradicción con el supremo interés de la patria y ese baldón les acompañará siempre.

Los que de manera interesada o simplemente irreflexiva acusan al Gobierno Militar de autoritario, olvidan que las restricciones a la actividad política partidista que impuso transitoriamente, eran inevitables para librar al país de un sistema opresivo de carácter permanente, que ha materializado el peor sistema de esclavitud aplicado desde el Estado en los tiempos modernos. Si alguien lo duda, haría bien en escuchar lo que los propios rusos dicen que fue la Unión Soviética y podría mirar lo que todavía hoy es Cuba.

Con todo, lo que en definitiva importa es que la sociedad chilena, gracias a sus soldados, no pudo ser sometida a la tiranía de los apóstoles de la violencia. Es este un mérito que algún día habrá que reconocer a los batallones olvidados.

10. Los derechos humanos.

La consecuencia más dolorosa de la violencia importada e implantada por las fuerzas de izquierda en el país —un aspecto de nuestra historia reciente en el que la influencia cubana es determinante— fue la repercusión negativa que tuvo en el respeto a los derechos humanos. La existencia del terrorismo es, en sí, una violación a los derechos humanos de toda la comunidad nacional. La primera y la más grave. En efecto, la acción subversiva constituye un atropello al derecho que cada uno de los miembros de la comunidad tiene a vivir en un ambiente de tranquilidad. Al mismo tiempo, por las características de este tipo de agresión, es prácticamente imposible evitar algún grado de abusos y excesos por parte de quienes la combaten desde el Estado.

Una connotación especial de este tipo de guerra, que por razones de imagen los grupos subversivos y sus más o menos inconscientes aliados se esfuerzan en desconocer, radica en que los responsables del surgimiento de la violencia, por medio de la propaganda más hipócrita, siempre tratarán de cargar con la culpa a su adversario. En esto hay que ser claros: no se trata del acertijo de si es primero el huevo o la gallina, se trata de establecer quién rompió, efectivamente, la situación de no violencia existente en una sociedad y en una época determinada.

En Chile, los partidos que integraron la Unidad Popular, con el respaldo de quienes movían sus hilos desde el exterior, se encargaron de presentar al Gobierno Militar, ante el mundo, como único culpable de los efectos negativos de la guerra

irregular. Así, a una parte de la opinión pública le llegó a parecer natural que sólo los extremistas tuvieran derechos. Puede sonar ridículo, pero todavía hay personas que imaginan a los terroristas como jóvenes idealistas, ciudadanos valientes pero equivocados o tranquilos turistas envueltos en la fatalidad de un conflicto. A ese error se agregan, sin mayor espíritu crítico, los inevitables efectos que la represión de los subversivos puede causar a personas inocentes. A fin de cuentas, en una impresión global, todo es cargado a los órganos de seguridad del Estado. No fue otro el resultado intoxicador que logró la poderosa máquina propagandística montada en Moscú, cuyas consignas fueron coreadas durante años por casi todos los medios de comunicación en Occidente, algunos a cambio de un pago, otros secretamente infiltrados al efecto y los más simplemente obsecuentes ante el extendido prejuicio que hacía bien visto ser rojillo. El punto se ha frivolizado a tal grado, que hoy circula una literatura que exalta románticamente a Ernesto Guevara y vende su imagen como prenda de consumo masivo entre los jóvenes. ¡Pobre Che!

Negándose a intentar un juicio sereno de la realidad de las cosas, más bien eludiéndolo cuidadosamente, muchas personas de ordinario ecuánimes se dejaron influir por las consignas de los violentistas. La machacona acción de propaganda y las técnicas de desinformación —un arte en el que los leninistas llegaron a ser maestros— afectaron el prestigio del Gobierno Militar en influyentes sectores de las sociedades democráticas.

El Estado, forzado a enfrentar una agresión permanente de esta índole, siempre está a la defensiva. Por la fuerza de las cosas, la sorpresa es una ventaja del terrorista. Es necesario, entonces, descender y actuar en el ambiente sórdido en que ellos se mueven, contrarrestándolos en su propio terreno. Quizás sea cierto que, externamente, a los soldados ese tipo de lucha no les reporta mayor gloria; pero si no se le acomete, la comunidad nacional queda a merced de la violencia más cobarde y despiadada. Si alguien lo duda, piense en lo que ha ocurrido a tantos pueblos de nuestros hemisferio.

Antes de juzgar, hay que entender la dramática situación a que se ve abocada la autoridad cuando debe enfrentar a grupos subversivos que, con una fuerte capacidad de acción militar y apoyados desde el exterior, procuran dislocar el orden de vida de la comunidad nacional. El problema más agudo reside en que éstos, al margen de los convencionalismos y leyes de la guerra, operan en la clandestinidad, sumidos en medio de la población, lo que inhibe a sus oponentes por el temor a afectar personas inocentes. Por esta razón, este tipo de lucha es sumamente desagradable para quienes deben hacerla en cumplimiento del deber. Pero quien por razón de su cargo tiene la obligación de velar por la vida, bienes y progreso de sus compatriotas, debe escoger entre asumir varonilmente esta ingrata tarea o dejarle el campo libre a los violentistas. Si se comprende el problema en toda su complejidad, no puede uno menos que estar agradecido de los que han arriesgado sus vidas para hacer posible que los demás puedan llevar una existencia normal.

Para hacerse una idea de la tenaz persistencia de la actividad subversiva en Chile, es útil recordar que trece años después del Pronunciamiento Militar, en 1986, año bautizado por los comunistas como "decisivo", desde el exterior se depositó en

Carrizal Bajo un sofisticado material de guerra —en parte proveniente del abandonado por los norteamericanos en Vietnam— suficiente para equipar una brigada de 6.000 hombres. ¿Se ha meditado en lo que habría ocurrido si ese arsenal no hubiese sido descubierto por los servicios de seguridad? ¿Se puede dudar que estaba destinado a equipar una fuerza que habría destruido la convivencia y paralizado el progreso de la nación? No se puede pensar que una operación de esa magnitud y complejidad, pues supone el transporte de armamento por medio mundo, pudiera llevarse a cabo sin estar en conocimiento de algunas grandes potencias y de importantes personajes... todavía hay complicidades que ocultan la verdad de este episodio, pero algún día los hechos se conocerán íntegramente. De lo que ya no hay duda es que esa operación estaba encadenada con el largamente planificado atentado a la vida del general Pinochet.

De lo anterior se desprende, con certeza absoluta, que hace tan sólo una década, dentro y fuera del país, había enemigos de nuestra patria que consideraban posible crear aquí las condiciones para impulsar una guerra civil. Y, de hecho, lo intentaron. ¿Es posible concebir mayor violación a los derechos humanos de todos los chilenos?

11. La reconciliación y una verdad para todos.

Desde el primer momento de su gestión, el Gobierno Militar postuló que el requisito básico para asegurar el porvenir de la nación era superar las diferencias que por tanto tiempo habían dividido a la sociedad chilena. En otras palabras, era necesario alcanzar una auténtica reconciliación. La Iglesia y las instituciones más relevantes de la sociedad adhirieron sin vacilar a dicho propósito y al poco tiempo parecía una meta alcanzada. La única excepción la constituían un minúsculo pero activo grupo que se negó a deponer las armas.

En efecto, contrariando el sentir general de la población, las cúpulas desplazadas del poder el 11 de septiembre de 1973 y su instrumento violentista no cejaron en su empeño y así abortar la reconciliación. Para ellos, la reconciliación significaba tener que abandonar el intento de doblegar la voluntad de los chilenos que no deseaban para sí el paraíso comunista. El 11 de septiembre era una derrota, sin duda, pero la lucha tenía que continuar. Aprovechando la debilidad de algunos personeros que no son marxistas, lograron resucitar viejos desencuentros y mantener abiertas las heridas que ellos mismos habían provocado.

A pesar del tiempo transcurrido y que en el intertanto la convivencia nacional ha evolucionado positivamente, aun no se logra una completa cicatrización del tejido social. Para cerrar definitivamente una discusión que daña al cuerpo social y a nada bueno conduce, se hace entonces necesario exigir que tanto las personas como las organizaciones públicas tengan ahora el coraje cívico y el valor moral de afrontar la verdad. Toda la verdad.

No se deben ocultar las causas ni los agentes de la pérdida de los consensos básicos que llevaron al quiebre de la convivencia en nuestro pueblo. Tampoco se puede ignorar el mérito de los que restauraron el honor y la credibilidad de nuestro

Estado ante el mundo. Finalmente, no se puede olvidar que las bases de la democracia, del progreso y de la armonía social que hoy disfrutamos, fueron creadas institucionalmente por el Gobierno Militar.

En vez de aquello, como sucedáneo de la verdad, se ha procurado convencer a la ciudadanía, especialmente a los jóvenes que no vivieron las revoluciones ideológicas ni los duros años de recuperación desde las profundidades en que nos hundieron, que la realidad actual surgió de la nada en 1990.

Con dudosa sinceridad, en varias ocasiones se ha solicitado a las Fuerzas Armadas y Carabineros que pidan perdón por las violaciones a los derechos humanos ocurridas en Chile entre el 11 de septiembre de 1973 y el 11 de marzo de 1990. Al parecer, no habrían existido antes ni después de esas fechas. Tampoco otras instituciones habrían tenido responsabilidad en tan desgraciados sucesos. Peor aún; el supuesto básico de tal solicitud es que los hombres de armas fueron los que provocaron la situación en que los derechos esenciales de todos los chilenos quedaron expuestos.

Si se observa quiénes son los que reclaman esta actitud a los uniformados, la escena se torna surrealista: los vencedores debieran inclinarse, contritos, ante los vencidos. En un sentido más amplio, con un mínimo sentido de la realidad, hay que convenir en que sería inconcebible que los que en un momento crítico de nuestra historia cumplieron cabalmente su misión, derrotando una asonada totalitaria, y luego reconstruyeron y modernizaron al país restituyéndole su libertad, tuvieran que pedir perdón a los que no sólo fueron incompetentes como gobernantes, sino que permitieron que la violencia se introdujera como instrumento político en nuestra sociedad. Concederles la razón implicaría afirmar que cuando el Gobierno Militar se abocó a la reconstrucción del país, a su saneamiento moral y al propósito de dotarla de una nueva institucionalidad —que desde 1980 fijó plazos definidos para concretar tan laudable meta— debía permanecer indiferente ante las agresiones que buscaban interrumpir su tarea mediante el terrorismo. En otras palabras, los que salvaron a Chile de la vorágine revolucionaria debieran ahora pedir perdón a los que hicieron apología de la violencia, a los que la ejercieron como imperativo de su ideología, a los que cuando había autoridades políticas libremente elegidas se referían a los procedimientos democráticos como "cretinismo electoral", a los profetas de la lucha de clases y a los ingenuos que les acompañaron sectariamente; en una frase, a los que pretendieron sojuzgar por la violencia a nuestro pueblo y en el camino tropezaron con los órganos que, constitucionalmente, tienen el deber de garantizar su defensa.

Lo que hay que hacer para afianzar una reconciliación lograda hace ya bastante tiempo —en concreto, desde el momento mismo en que los sectores más sanos de la sociedad perdonaron a sus agresores y olvidaron la afrenta— es mover hacia la verdad a los que se niegan a aceptar su responsabilidad, a los que no quieren saber cómo y por qué, a mediados de los años ´60, la violencia política surgió en Chile y llegó al clímax con la Unidad Popular, a los que desconocen que en ese proceso el estamento militar sólo tiene una culpa: no haber expresado previamente, con mayor firmeza, su inquietud al poder político, porque sabían que el país marchaba al abismo.

En esa loca carrera por reescribir la historia reciente y liberar de toda culpa a quienes quisieron ser los verdugos de la nación chilena, hay un hito. En 1990 el gobierno dispuso la elaboración de un documento oficial, materializado en el Informe Rettig, que cometió una enorme injusticia al presentar el tema de la violación de los derechos humanos en Chile desde el punto de vista de sólo uno de los bandos, precisamente el que creó el problema. Allí se estudian los casos ocurridos en un período arbitrariamente elegido, desde un ángulo mezquino y sin analizar las causas que provocaron el fenómeno. Con torpeza injustificable —porque un puñado de votos no bastan para justificar esta verdad a medias— se postergó indefinidamente una reconciliación completa, es decir, se creó un efecto contrario al pretendidamente buscado.

De paso, se ofendió gratuitamente a un estamento que rinde culto al honor. Nadie debe ignorar que las circunstancias y el estilo que llevaron a redactar ese documento, lograron que entre los militares se perdiera el respeto por quien lo ordenó. Resta, pues, encuadrar con justicia la época que abarca y escribir la otra mitad, para que así el Informe Rettig quede completo y tenga algún sentido.

12. La unidad nacional.

Sabido es que un reino dividido contra sí no prevalecerá. Es esta una sentencia que da cuenta de una constante en la historia universal. Cuando por diversos motivos —atavismo étnico, intolerancia religiosa, fanatismo ideológico o injustas desigualdades económicas— la estructura vital de un pueblo se rompe, de inmediato aparecen los problemas que paralizan su evolución y comprometen su futuro. Si las tensiones son demasiado graves y se resuelven en una guerra civil, lo amenazado es su propia supervivencia. En Chile, en 1973, las manifestaciones de la división interna eran tan agudas que desencadenaron el Pronunciamiento Militar como única forma de evitar un inminente enfrentamiento fraticida.

Por esta razón, una de las preocupaciones centrales del Gobierno Militar fue superar, en todos los campos, las profundas diferencias que separaban a los chilenos. El predominio de concepciones ideológicas absolutas y excluyentes, sumado a una prédica incesante de la lucha de clases que encontraba asidero en la mediocridad de un sistema económico socializante, habían crearon aquí un clima de resentimientos y frustraciones en el que no había espacio para la solidaridad ni posibilidad de un destino común. Con infinita paciencia, como el cirujano que recompone un delicado tejido, el Gobierno Militar fue logrando la unidad nacional. Unidad, claro está, que en ningún modo implica unanimidad de pareceres, sino más bien un sentido de pertenencia y la convicción de que la patria está primero y que por tanto sus sagrados intereses sobrepasan cualquier bandería legítima.

Para recrear la unidad nacional, el gobierno presidido por el general Pinochet no se limitó a proclamarla como un ideal retórico, sino que procuró superar sus causas con medidas muy concretas, por ejemplo:

Revitalizó el conocimiento de la historia de Chile y el culto a sus héroes y próceres, entendiendo que este es un elemento fundamental no tanto para la instrucción que

reciben los jóvenes, sino una fértil escuela de su formación ética. En una época cuyo rasgo determinante es la globalización, conservar vivas las esencias de la patria, el ser propio, tiene la mayor importancia. Hoy, y con mayor razón mañana, el requisito que debe cumplir una nación para incorporarse creativamente al gran cauce del mundo sin convertirse en una suerte de colonia mental, consiste en estar muy seguro de lo que se es. En otras palabras, de lo que se ha sido y de lo que quiere llegar a ser.

Vinculado a lo anterior —pues un pueblo nada saca con haber heredado un magnífico espacio en el planeta si su corazón es apátrida— incentivó el estudio y conocimiento del territorio nacional desde un punto de vista geopolítico. La nueva concepción de nuestra realidad geográfica, tricontinental, se tradujo en un proceso de descentralización administrativa, incluyendo el concepto de regionalización, que apunta al desarrollo armonioso de todo el ámbito nacional. De esta manera se extendió el desarrollo social y económico a todas las áreas y comarcas del país, por aisladas que estuviesen. En esta misma dirección, la de hacernos dueños de nuestro ámbito geográfico, se despertó la conciencia sobre la existencia de bolsones de pobreza y de fronteras interiores que era necesario incorporar al progreso general. Bajo estas premisas se dió inicio real a una aspiración largamente sentida por los chilenos más visionarios y que con carácter programático ya estaba contemplada en la Constitución de 1925.

Fortaleció la presencia de las organizaciones intermedias de la sociedad, integrándolas solidariamente en pos del bien común. Con ello se crearon las condiciones destinadas a garantizar el logro en plenitud de las potenciales capacidades de las personas y de sus instituciones. Esta concepción social integradora dejó sin sentido a la lucha de clases, uno de los elementos que en el pasado más habían influido en la división de la nación.

Formuló un ordenamiento institucional republicano, legítimo porque es coherente con la constitución histórica de los chilenos, llamado a asegurar en libertad y democracia la adecuada participación de todos los elementos de la sociedad en los asuntos públicos, sin por ello perder de vista los grandes temas del interés nacional. El consenso en torno al conjunto de reglas y principios que lo constituyen ha resultado clave para la estabilidad y legitimidad de los gobiernos posteriores. Así, lo que en su día se conoció como nueva institucionalidad está ya firmemente asentado. Se podrán discutir algunos detalles —toda obra humana es perfectible— pero no su espíritu ni lo medular de su estructura. Las Fuerzas Armadas y Carabineros, por mandato constitucional, garantizan su integridad.

Definió el rol del Estado, asignándole un papel subsidiario, con lo que liberó las energías latentes en el cuerpo social. Éste, desplegando su iniciativa, ha podido materializar en poco tiempo un grado de prosperidad como no se había conocido antes. Los resultados alcanzados, ampliamente reconocidos como positivos, han dejado fuera de lugar cualquier intento por regresar al socialismo.

Fijó un Objetivo Nacional. Esta meta, que enlaza la trayectoria histórica de nuestra comunidad nacional con el logro de sus legítimas aspiraciones, por su propia naturaleza tiene carácter trascendente, es decir, no se agota en un determinado gobier-

no. Al formular con claridad lo que se ha de hacer desde el Estado en bien de la nación —y la gran política no consiste en otra cosa— señaló un rumbo. Seguirlo ha sido prenda de continuidad en lo esencial de la marcha de la República, normalidad que se ha traducido en progreso constante y estabilidad creciente porque los esfuerzos de cada administración, en vez de anularse como ocurría en el pasado, ahora se añaden y potencian. En definitiva, "hacer de Chile una gran nación", es una máxima que sintetiza la tarea de los gobernantes y hermana a toda la población, uniendo a las generaciones en una gran tarea común.

En suma, a pesar de los elementos disolventes que nunca faltarán en cualquier proceso social dinámico, la unidad nacional es hoy una realidad y a su logro contribuyó decisivamente el Gobierno Militar. Éste, interpretando el sentir ciudadano, actuó en un sentido que llevó a recuperar los consensos básicos perdidos durante la década de las revoluciones ideológicas. En todo caso, la unidad nacional, como gran meta, requiere de constante profundización y fortalecimiento, especialmente respecto a las nuevas generaciones. Ellas no debieran heredar el rencor que todavía pueda existir entre sus mayores. Tampoco es bueno que ignoren la amenaza que representa aceptar, sin más, algunos conceptos hoy imperantes, como la globalización, por ejemplo, cuya realidad debe ser digerida con sensatez, sin claudicar en el modo de ser nacional ni en la defensa de los intereses patrios. No se debe perder de vista, en suma, que como resultado del reencuentro de todos los chilenos, hemos podido avanzar pacíficamente en el cumplimiento de nuestro propio destino, realizando una transición ejemplar y ocupando una vez más el lugar a que tenemos derecho en el concierto de las naciones.

13. El rol de las Fuerzas Armadas.

Las Fuerzas Armadas no son solamente el brazo armado del Estado, sino también la columna vertebral de la nación. Y esto, ¿qué significa aquí y ahora?

Ante todo, que existen para garantizar, con el eventual empleo de sus medios, la continuidad histórica de la nación. Son, pues, el último reducto de su soberanía.

Para explicar el alcance de aquella afirmación, conviene tener presente que la pervivencia de una comunidad nacional no es un resultado espontáneo ni tampoco una situación capaz de mantenerse en el tiempo por simple inercia. Aunque basta dar una mirada a cualquier libro de historia universal para advertir que sus protagonistas —los pueblos y sus culturas— aparecen y se desvanecen con melancólica regularidad, la mayoría de los individuos no llegan a ser conscientes de los problemas que implica su conservación. Ello se debe a que, normalmente, cada persona experimenta la inestabilidad de la vida nada más que en su propia experiencia, y la de las naciones es muchísimo más amplia en tiempo y espacio, lo que lleva facilmente a imaginarlas como algo inmutable. Pero esa es una ilusión. La verdad es que la vitalidad de las naciones obedece a un mecanismo que Toynbee llamó *ley del desafío y respuesta*: en cada momento de su aventura histórica la nación debe enfrentar tensiones y crisis que provienen tanto de su propio seno como del exterior. Si no es capaz de superarlas, perece.

Las Fuerzas Armadas existen para sostener a la comunidad nacional en su trayectoria histórica, para garantizar su permanencia en el tiempo, para cautelar su orden de vida y empeñarse decisivamente en los momentos más difíciles, esto es, cuando en la paz o en la guerra la balanza oscila entre el ser o no ser del pueblo al que sirven. Por su altísima misión —son la salvaguarda de lo permanente, no los encargados de gestionar lo accidental— las Fuerzas Armadas no pueden identificarse con facción alguna de la sociedad. Por la misma razón, les está vedado inmiscuirse en la contingencia política partidista. En el Estado poseen cierto grado de autonomía —el necesario para cumplir sus funciones, pues no son un instrumento ciego— pero están subordinadas al ordenamiento institucional.

¿Por qué, entonces, algunas veces intervienen y se hacen cargo del Estado? Porque representan la gran reserva de la nación, aquella que es llamada como último tribunal de arbitraje cuando el bien común peligra porque fallan la razón y el derecho. Hay momentos de tribulación en los cuales el desafío que una nación debe enfrentar consiste en superar el quiebre de su orden de convivencia, que se ha hecho imposible por la pérdida de los consensos básicos en que se apoyaba. Si esa nación todavía no se resigna a la desaparición, responderá al desafío apelando a sus hombres de armas. Entonces, y sólo entonces, les es legítimo intervenir y proceder a recrear un orden de convivencia mediante una reforma moral capaz de restablecer un sistema de valores y normas que alcance una aceptación generalizada. Si lo logran, habrán prestado el más noble de los servicios a la patria: asegurar su continuidad histórica.

BIBLIOGRAFIA

- ARNELLO ROMO, MARIO, *Proceso a una democracia. El pensamiento político de Jorge Prat*, s.p.i., Santiago, 1964.
- ARRIAGADA HERRERA, GENARO, *De la "vía chilena" a la "vía insurreccional"*, Editorial del Pacífico, Santiago, 1974.
- BERNSTEIN, CARL y POLITI, MARCO, *Su Santidad. Juan Pablo II y la historia oculta de nuestro tiempo*, Grupo Editorial Norma, Bogotá, 1996.
- BESANÇON, ALAIN, *Breve tratado de sovietología*, Rialp, Madrid, 1977.
- BLANCO, GUILLERMO, *Eduardo Frei, El hombre de la Patria Joven*, Editorial Aconcagua, Santiago, 1984.
- BRAVO LIRA, BERNARDINO, *Historia de las instituciones políticas de Chile e Hispanoamérica*, Editorial Andrés Bello, Santiago, 1986.
- BRAVO LIRA, BERNARDINO, *Régimen de gobierno y partidos políticos en Chile. 1924-1973*, Editorial Jurídica de Chile, Santiago, 1978.
- CANESSA ROBERT, JULIO, *Quiebre y recuperación del orden institucional en Chile. El factor militar, 1924-1973*, Emérida Ediciones, Santiago, 1995.
- CARRASCO DELGADO, SERGIO, *Alessandri: Su pensamiento constitucional. Reseña de su vida pública*, Editorial Andrés Bello, Santiago, 1987.
- CASAS, JUAN CARLOS, *Nuevos políticos y nuevas políticas en América Latina*, Editorial Atlántida, Buenos Aires, 1991.
- CASTILLO INFANTE, FERNANDO, *La flecha roja*, Editorial Francisco de Aguirre, Santiago, 1997.
- CASTILLO VELASCO, JAIME, *Teoría y Práctica de la Democracia Cristiana Chilena*, Editorial del Pacífico, Santiago, 1973.
- CERDA, CARLOS, *Chile: la traición de los generales*, Ediciones Suramérica, Bogotá, 1973.
- CHONCHOL, JACQUES y SILVA SOLAR, JULIO, *Hacia un mundo comunitario. Condiciones de una política social cristiana*, Editorial del Pacífico, Santiago, 1951.
- COLLIER, SIMON, *Ideas y política en la independencia chilena (1810-1833)*, Editorial Andrés Bello, Santiago, 1977.
- CORREA, RAQUEL y SUBERCASEAUX, ELIZABETH, *Ego Sum*, Editorial Planeta Chilena, Santiago, 1996.
- CORVALÁN LEPE, LUIS, *Camino de victoria*, Imprenta Horizonte, Santiago, 1971.
- CORVALÁN LEPE, LUIS, *Nuestra vía revolucionaria*, s.p.i., Santiago, 1964.
- COVARRUBIAS, MARIA TERESA, *Políticos y militares. Antecedentes históricos del quiebre entre los sectores civil y militar en la sociedad chilena 1924-1932*, Centro de Estudios del Desarrollo y Editorial Atena, Santiago, 1991.
- DOMIC, JURAJ, *La Vía No Capitalista de Desarrollo*, Editorial Vaitea, Santiago, s.f.

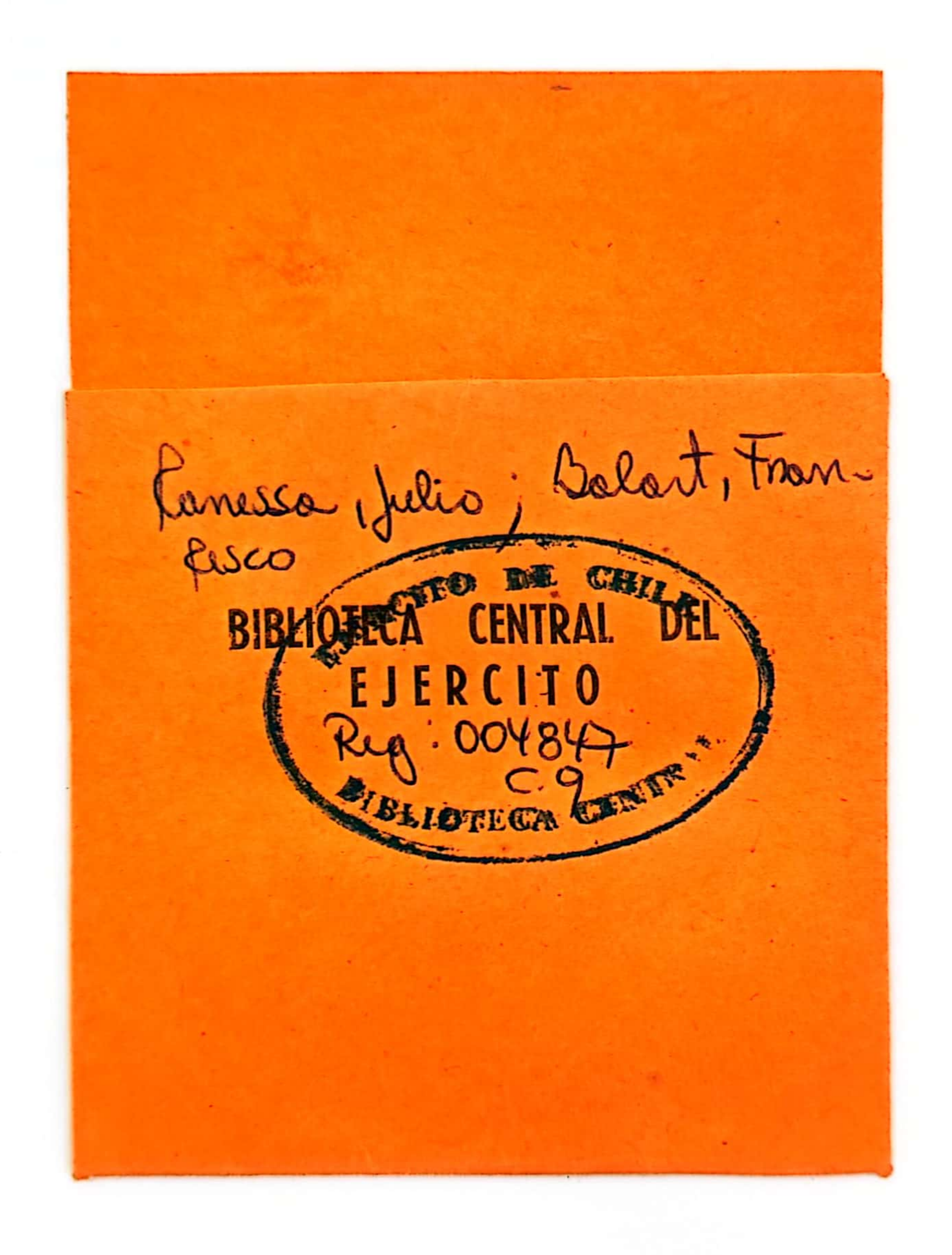
- DOMIC, JURAJ, *Política Militar del Partido Comunista de Chile,* Talleres Gráficos del Instituto Geográfico Militar, Santiago, 1988.
- DONOSO LOERO, TERESA, *Historia de los cristianos por el socialismo en Chile*, Editorial Vaitea, Santiago, 1975.
- DOONER, PATRICIO, *Periodismo y política. La prensa de derecha e izquierda 1970-1973*, Editorial Andante, Santiago, 1989.
- EDWARDS VIVES, ALBERTO, *La fronda aristocrática*, Editorial del Pacífico, Santiago, 1972.
- EYZAGUIRRE, JAIME, *Fisonomía histórica de Chile*, Editorial Universitaria, Santiago, 1978.
- FERMANDOIS, JOAQUÍN, *Chile y el mundo 1970-1973: la política exterior del gobierno de la Unidad Popular y el sistema internacional*, Ediciones Universidad Católica de Chile, Santiago, 1985.
- FERNÁNDEZ DE LA MORA, GONZALO, *El crepúsculo de las ideologías*, Editorial Zig Zag, Santiago, 1968.
- FERNÁNDEZ DE LA MORA, GONZALO, *Río arriba* (Memorias), Editorial Planeta, Madrid, 1995.
- FILIPPI, EMILIO y MILLAS, HERNÁN, *Anatomía de un proceso. La experiencia socialista chilena*, Editorial Zig-Zag, Santiago, 1973.
- FONTAINE ALDUNATE, ARTURO, *Los economistas y el presidente Pinochet*, Editorial Zig Zag, Santiago, 1988.
- FREI MONTALVA, EDUARDO, *Chile desconocido*, Editorial Ercilla, Santiago, 1937.
- FREI MONTALVA, EDUARDO, *La verdad tiene su hora*, Editorial del Pacífico, Santiago, 1958.
- FREI MONTALVA, EDUARDO, *Sentido y forma de una política*, Editorial del Pacífico, Santiago, 1951.
- FRUHLING, HUGO, PORTALES, CARLOS y VARAS, AUGUSTO, *Estado y Fuerzas Armadas*, FLACSO, Santiago, 1982.
- FUENTES W., MANUEL, *El PDC en Chile*, Ediciones ECOS, Santiago, 1985.
- GALDAMES, LUIS, *Historia de Chile: Prehistoria a 1970*, Productos Raval, Santiago, 1974.
- GARCÉS, JOAN E., *Allende y la experiencia chilena. Las armas de la política*, Ediciones BAT, Santiago, 1991.
- GARRETÓN, MANUEL ANTONIO, et. al., *Chile 1973-198?*, Revista Mexicana de Sociología/FLACSO Chile, Santiago, 1983.
- GARRIDO R., JOSÉ, *Historia de la Reforma Agraria en Chile*, Editorial Universitaria, Santiago, 1988.
- GAZMURI, CRISTIÁN, ARANCIBIA, PATRICIA y GÓNGORA, ÁLVARO, *Eduardo Frei*, Fundación Eduardo Frei Montalva, Santiago, 1996.
- GODOY URZUA, HERNÁN, *Estructura Social de Chile*, Editorial Universitaria, Santiago, 1971.

- GODOY URZÚA, HERNÁN, *Apuntes sobre la cultura de Chile*, Ediciones Universitarias de Valparaíso, Valparaíso, 1982.
- GÓNGORA DEL CAMPO, MARIO, *Civilización de masas y otros ensayos*, Editorial Vivaria, Santiago, 1987.
- GÓNGORA DEL CAMPO, MARIO, *Ensayo histórico sobre la noción de Estado en Chile en los siglos XIX y XX,* Editorial Universitaria, Santiago, 1986.
- GONZÁLEZ ERRÁZURIZ, FRANCISCO JAVIER, *Partido Demócrata Cristiano. La lucha por definirse*, Ediciones Universitarias de Valparaíso, Valparaíso, 1989.
- GRAYSON, GEORGE, *El Partido Demócrata Cristiano Chileno*, Editorial Francisco de Aguirre, Buenos Aires, 1968.
- GURIAN, WALDEMAR, *Bolchevismo. Introducción al comunismo soviético*, Ediciones Rialp, Madrid, 1956.
- HEISE GONZÁLEZ, JULIO, *Años de formación y aprendizaje políticos. 1810-1833*, Editorial Universitaria, Santiago, 1978.
- HEISE GONZÁLEZ, JULIO, *El caciquismo político en el período parlamentario (1891-1925)*, Editorial Andrés Bello, Santiago, 1973.
- HUNNEUS GANA, ANTONIO, *La Constitución de 1833*, Editorial Splendid, Santiago, 1933.
- HUYN, HANS VON, *Victoria sin guerra*, Editorial Andrés Bello, Santiago, 1987.
- IBAÑEZ LANGLOIS, JOSE MIGUEL, *El marxismo: visión crítica*, Ediciones Universidad Católica de Chile, Santiago, 1973.
- JOBET, JULIO CÉSAR, *El Partido Socialista de Chile*, Prensa Latina, Santiago, 1971.
- JOHNSON, PAUL, *Tiempos Modernos*, Javier Vergara Editor, Buenos Aires, 1988.
- JORQUERA, CARLOS, *El Chicho Allende*, Ediciones BAT, Santiago, 1990.
- KREBS, RICARDO, "Orígenes de la conciencia nacional chilena", en BUISSON, INGE (ed.), *Problemas de la formación del Estado y de la nación en Hispanoamérica*, Böhlan Verlag, Colonia, 1984.
- LABARCA GODDARD, EDUARDO, *Chile al rojo*, Ediciones de la Universidad Técnica del Estado, Santiago, 1971.
- LABIN, SUZANNE, *Chile: el crimen de resistir*, Ediciones Semblanza, Santiago, s/f.
- LARSON, OSCAR, *La ANEC y la Democracia Cristiana*, Ediciones Ráfaga, Santiago, 1967.
- LAVÍN, CARLOS, *Chile visto por los extranjeros*, Editorial Zig-Zag, Santiago, 1949.
- LAVÍN, JOAQUÍN y LARRAÍN, LUIS, *Chile. Sociedad emergente*, Editorial Zig Zag, Santiago, 1989.
- LETELIER, VALENTÍN, *Génesis del Estado y de sus instituciones fundamentales*, Cabant y Cía., Buenos Aires, 1917.
- MALAPARTE, CURZIO, *Técnica del golpe de Estado*, Editorial Americana, Buenos Aires, 1953.
- MANNHEIM, KARL, *Ideología y utopía*, Fondo de Cultura Económica, México, 1941.

- MARITAIN, JACQUES y LACROIX, JEAN, *El hombre cristiano y el hombre marxista*, Editorial del Pacífico, Santiago, 1950.
- MARITAIN, JACQUES, *El campesino de Garona*, Editorial Desclée de Brouwer, Bilbao, 1967.
- MARITAIN, JACQUES, *Humanismo integral*, Editorial Carlos Lohlé, Buenos Aires, 1966.
- MARITAIN, JACQUES, *Principios de una política humanista*, Editorial Excelsa, Buenos Aires, 1946.
- MARRAS, SERGIO, *Confesiones*, Ediciones del Ornitorrico, Santiago, 1988.
- MELLO, GERARDO, *Frei y la revolución en América Latina*, Editorial del Pacífico, Santiago, 1966.
- MILLAR CARVACHO, RENÉ, *La elección presidencial de 1920*, Editorial Universitaria, Santiago, 1982.
- MONTERO, RENE, *La verdad sobre Ibáñez*, Editorial Freeland, Buenos Aires, 1953.
- MORENO VALENCIA, FERNANDO, *Actualidad de Jacques Maritain*, Editorial Marracci, Santiago, 1987.
- MORENO VALENCIA, FERNANDO, *Iglesia, política y sociedad*, Ediciones Universidad Católica de Chile, Santiago, 1988.
- MOSS, ROBERT, *El experimento marxista chileno*, Editora Nacional Gabriela Mistral, Santiago, 1974.
- NOLTE, ERNST, *Después del comunismo*, Espasa-Calpe Argentina/Ariel, Buenos Aires, 1996.
- NOLTE, ERNST, *La guerra civil europea, 1917-1945. Nacionalsocialismo y bolchevismo*, Fondo de Cultura Económica, México, 1994.
- OLAVARRÍA BRAVO, ARTURO, *Chile bajo la democracia cristiana*, Editorial Nascimento, Santiago, 1965-1970.
- OPASO, CRISTIÁN, *Frei, Allende y la mano de la CIA*, Ediciones del Ornitorrinco, Santiago, s.f.
- Organización de los Estados Americanos (OEA), Comisión especial de consulta sobre seguridad contra la acción subversiva del comunismo internacional, *El proceso marxista-leninista en Chile*, Washington D.C., 1974
- OTANO, RAFAEL, *Crónica de la transición*, Editorial Planeta Chilena, Santiago, 1995.
- OYARZUN, MARIA EUGENIA, ROMAN, ARTURO Y ROJAS, RAUL, *Augusto Pinochet. Una visión del hombre*, Bauhaus Editorial, Santiago, 1995.
- O´KINGHTTONS OCAMPO, EDMUNDO, *Milicianos, la historia olvidada*, s.p.i., Santiago, 1997.
- PACHECO PASTENE, LUIS, *El pensamiento sociopolítico de los obispos chilenos, 1962-1973*, Editorial Salesiana, Santiago, 1985.
- PÉREZ DE ARCE, HERMÓGENES, *SÍ o No*, Editorial Zig Zag, Santiago, 1988.
- PINOCHET DE LA BARRA, OSCAR, *El pensamiento de Eduardo Frei*, Editorial Aconcagua, Santiago, 1983.

- PINOCHET UGARTE, AUGUSTO, *Camino recorrido. Memorias de un soldado*, Talleres Gráficos del Instituto Geográfico Militar, Santiago, 1990.
- PINOCHET UGARTE, AUGUSTO, *El día decisivo, 11 de septiembre de 1973*, Editorial Andrés Bello, Santiago, 1979.
- PINTO LAGARRIGUE, FERNANDO, *Crónica política del siglo XX. Desde Errázuriz Echaurren hasta Alessandri Palma*, Editorial Orbe, Santiago, 1972.
- PONCE MOLINA, HOMERO, *Historia del movimiento asociativo chileno*, Editorial Alba, Santiago, 1986
- PRATS GONZÁLEZ, CARLOS, *Testimonio de un soldado*. (Memorias), Pehuén Editores, Santiago, 1987.
- RAVINES, EUDOCIO, *El rescate de Chile*, Empresa Editora e Impresora Edimpres Ltda., Santiago, 1974.
- RAVINES, EUDOCIO, *La gran estafa*, Editorial del Pacífico, Santiago, 1954.
- REVEL, JEAN-FRANÇOIS, *Cómo terminan las democracias*, Editorial Planeta, Barcelona, 1983.
- REVEL, JEAN-FRANÇOIS, *El conocimiento inútil*, Editorial Planeta, Barcelona, 1989.
- RODRÍGUEZ GREZ, PABLO, *El mito de la democracia en Chile*, Ediciones EVES, Santiago, 1985.
- RODRÍGUEZ MENDOZA, MILIO, *Cómo si fuera ayer...*, Casa Editorial Minerva, Santiago, 1922.
- RUIZ-ESQUIDE FIGUEROA, ANDREA, *Las Fuerzas Armadas durante los gobiernos de Eduardo Frei y Salvador Allende*, Centro de Estudios del Desarrollo, Santiago, 1993.
- SAEZ MORALES, CARLOS, *Recuerdos de un soldado*, Editorial Ercilla, Santiago, 1933.
- SÁEZ MORALES, CARLOS, *Y así vamos...*, Editorial Ercilla, Santiago, 1938.
- SARTORI, GIOVANNI, *La democracia después del comunismo*, Alianza Editorial, Madrid, 1993.
- SCHELER, MAX, *Sociología del saber*, Editorial Cultura, Buenos Aires, 1936.
- SILVA BASCUÑÁN, ALEJANDRO, *Una experiencia socialcristiana*, Editorial del Pacífico, Santiago, 1949.
- SILVA SOLAR, JULIO y CHONCHOL, JACQUES, *El desarrollo de la nueva sociedad en América Latina (Hacia un mundo comunitario)*, Editorial Universitaria, Santiago, 1965.
- SILVA SOLAR, JULIO, *A través del marxismo*, Editorial del Pacífico, Santiago, 1951.
- SILVEIRA, FABIO VIDIGAL XAVIER DA, *Frei, el Kerensky chileno*, Editorial Cruzada, Buenos Aires, 1967.
- SOLZHENITSYN, ALEXANDR, *Alerta a Occidente*, Ediciones Acervo, Barcelona, 1978.
- TUPPER, PATRICIO, (Ed.), *89/90. Opciones políticas en Chile*, Ediciones Colchagua, Santiago, 1987.

- VALDIVIA ORTIZ DE ZÁRATE, VERÓNICA, *La Milicia Republicana. Los civiles en armas 1932-1936*, Dirección de Bibliotecas, Archivos y Museos, Santiago, 1992.
- VALDIVIESO ARIZTIA, RAFAEL, *Crónica de un rescate (Chile: 1973-1988)*, Editorial Andrés Bello, Santiago, 1988.
- VARAS, FLORENCIA, *Conversaciones con Viaux*, Impresiones Eire, Santiago, 1972.
- VARGAS LONFAT, PEDRO, *Chile: objetivo del terrorismo*, Talleres Gráficos del Instituto Geográfico Militar, Santiago, 1988.
- VIAL CORREA, GONZALO, *Historia de Chile (1891-1973)*, Santillana, Santiago, 1981.
- VILLALOBOS, SILVA, SILVA y ESTELLÉ, *Historia de Chile*, Editorial Universitaria, Santiago, 1974.
- WHELAN, JAMES R., *Desde las cenizas. Vida, muerte y transfiguración de la democracia en Chile. 1833-1988*, Editorial Zig-Zag, Santiago, 1993.
- WOLF, MARKUS, *El hombre sin rostro* (Autobiografía), Javier Vergara Editor, Buenos Aires, 1997.
- WURTH ROJAS, ERNESTO, *Ibáñez, caudillo enigmático*, Editorial del Pacífico, Santiago, 1958.


Ramessa, Julio; Balart, Francisco
EJERCITO DE CHILE
BIBLIOTECA CENTRAL DEL
EJERCITO
Reg: 004847
C.9
BIBLIOTECA CENTR.




Scanned with
CamScanner